

TESIS DOCTORAL

“Evolución de la delincuencia en España”

**“ESTRUCTURA Y CAMBIO EN LAS SOCIEDADES DEL
CONOCIMIENTO”
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA**

**Autora: Mary Brigid O'Reilly
Directora: Esther Casares García**

Pamplona, 2015

Quiero agradecer a mis hijos Eduardo, María y Miguel por el tiempo que me han dispensado para poder dedicarlo a la tesis doctoral. A mi marido Teodoro por las aportaciones a las numerosas revisiones de los bocetos preliminares. A Esther Casares, directora de la tesis, por su paciencia. Al profesor Stephen Menell por sus orientaciones y acogida en el Trinity College de Dublin. A la Universidad Pública de Navarra por los medios puestos a mi alcance para consultar libros, revistas e informes. A la Fiscalía General del Estado por enviarme sus “Memorias” en formato CD-ROM. Al Ministerio del Interior (MIR) por facilitarme documentos internos no publicados.

Esta tesis viene precedida por el interés que despertó en mí este tema cuando me licencié en el University College de Dublin. Mantenido en el tiempo por las charlas con la profesora Catherine Gill sobre el asunto, al dedicarse a la gestión de la delincuencia en Irlanda. Y prosiguió con mi licenciatura en la Universidad Pública de Navarra, cursos de doctorado, suficiencia investigadora, y diferentes controles de la tesis. Para la realización de esta compleja obra he necesitado ocho años, en los cuales es de resaltar algunos capítulos de libros que he publicado como las contribuciones sobre las teorías de la delincuencia en el libro “Aportaciones Teórico-Prácticas para el Conocimiento de Actitudes Violentas en el Ámbito Escolar” editado por el Gobierno de Navarra. Así como el artículo “La Emancipación de los Jóvenes en Navarra” publicado también por el Gobierno de Navarra en colaboración con la editorial Sahats, en la obra titulada “Sociología y Sociedad en Navarra. Una visión de Cambio”. Además en estos momentos está en prensa la publicación conjunta de un libro de la editorial Tirant Lo Blanch sobre la delincuencia. Empecé escribiendo la tesis en inglés, pero después cambié de orientación y lo hice en español al observar la dificultad de traducir algunos términos legales. Dado que mi nivel de escritura no es el mismo en un idioma que en otro, espero que el cambio no haya repercutido en la tesis.

De cualquier manera, la responsabilidad de la tesis, como se dice en estos casos, siempre será mía.

INDICE

	Página
Relación de cuadros y gráficos	8
PARTE I	13
CAPITULO 1. PROPEDEUTICA DE LA TESIS DOCTORAL	14
1.1. Introducción	14
1.2. Justificación	16
1.3. Planteamiento del problema	20
1.4. Objeto de estudio	22
1.5. Hipótesis de investigación	24
1.6. Fundamentación teórica	25
1.7. Metodología	26
1.8. Presentación y discusión de resultados	28
PARTE II	38
CAPITULO 2. TEORIAS Y METODOS DE LA DELICUENCIA	39
2.1. Estudio teórico de la delincuencia	39
2.1.1. Teoría frenológica	42
2.1.2. Teoría fisiológica	46
2.1.3. Teorías psicológica y psiquiátricas	51
2.1.4. Teoría jurídica	54
2.1.5. Teoría sociológica	55
2.2. Indicadores de la delincuencia	62
2.2.1. Antecedentes del estudio empírico de la delincuencia	62
2.2.2. La delincuencia en base a estadísticas	64
2.2.2.1. Estadísticas judiciales	69

2.2.2.2. Estadística fiscales	81
2.2.2.3. Estadísticas policiales	86
2.2.2.4. Encuestas de victimización	91
2.2.2.4.1. La Encuesta Internacional de Victimización Criminal	95
2.2.2.4.2. La British Crime Survey	98
2.2.3. Los auto informes	101
2.2.4. La inseguridad ciudadana	104
2.2.5. Los efectos del cambio de leyes	105
PARTE III	112
CAPÍTULO 3. LA DELINCUENCIA A NIVEL INTERNACIONAL	113
3.1. La delincuencia registrada en Naciones Unidas	115
3.2. La delincuencia registrada en la Unión Europea	118
3.3. La delincuencia registrada en el Consejo de Europa.	123
PARTE IV	129
CAPÍTULO 4. LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA	130
4.1. Las estadísticas policiales en España	131
4.2. La recogida de datos: los impresos normalizados	134
4.3. El grupo técnico del sistema estadístico de criminalidad	141
4.4. El registro de los datos	144
4.5. La clasificación de los delitos	146
4.6. Las estadísticas policiales en Cataluña	154
4.7. Las estadísticas policiales en el País Vasco	157
4.8. Las estadísticas policiales en Navarra	159
4.9. Series temporales de delitos hasta 2006	163
4.10. Series temporales de faltas hasta 2006	169
4.11. Series temporales de delitos a partir de 2007	172

4.12. Series temporales de faltas a partir de 2007	173
CAPÍTULO 5. DELINCUENCIA CONTRA LAS PERSONAS	176
5.1. Homicidio doloso y asesinato	178
5.2. Lesiones y malos tratos ámbito familiar	182
5.3. Violencia de género	185
CAPITULO 6. DELINCUENCIA CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO	193
6.1. Hurtos	196
6.2. Robos con fuerza en inmuebles	200
6.3. Robos con violencia o intimidación	204
6.4. Sustracción en vehículos	209
6.5. Robos con fuerza en las cosas en vehículos	213
6.6. Delitos económicos y fraude empresarial	216
CAPITULO 7. DELINCUENCIA CONTRA LA LIBERTAD. LBERTAD SEXUAL Y RELACIONES FAMILIARES	220
7.1. Delitos contra la sexualidad	222
7.2. La homosexualidad	223
7.3. La violación en las relaciones de pareja	224
7.4. La prostitución	225
7.5. Delitos sexuales contra menores	230
7.6. Las relaciones familiares	238
CAPITULO 8. DELINCUENCIA CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA	243
8.1. Los incendios forestales	245
8.2. La seguridad vial	248
8.3. La salud pública	257
8.4. El tráfico de drogas	259
CAPITULO 9. DELINCUENCIA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y OTROS	266

9.1. Medio ambiente	266
9.2. La delincuencia internacional	273
9.3. El ciberdelito	277
CAPITULO 10. DELINCUENCIA DE FALSEDADES, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ORDEN PÚBLICO.	282
10.1. Falsedades	282
10.2. Administración pública	286
10.3. Administración de Justicia	293
10.4. Orden público	296
10.4.1. El terrorismo	298
10.5. Legislación especial y otros delitos	304
CAPITULO 11. FALTAS.	306
11.1. Contra las personas	307
11.2. Contra el patrimonio	309
11.3. Contra el orden público	310
11.4. Contra los intereses generales	311
PARTE V	314
CAPITULO 12. La delincuencia por características sociodemográficas.	315
12.1. Delitos por género	315
12.1.1. Teorías del estatus	316
12.1.2. Teorías del rol	318
12.2. Delitos por edad	324
12.3. Delitos por raza, etnia, extranjería e inmigración.	336
12.3.1. Los gitanos	338
12.3.2. La inmigración/extranjería	341
12.4. Delitos por desempleo	354
12.4.1. El enfoque de la motivación	354

12.4.2. El enfoque de la oportunidad	355
12.5. Estudio de casos delitos desempleo:	360
12.5.1. El estudio de Cohen, Nelson, Felson y Land	360
12.5.2. El estudio de Cantor y Land	362
12.5.3. El estudio de Chiricos	363
12.5.4. El estudio de Chester	366
12.5.5. El estudio de Kapuscinski, Braithwaite y Chapman	368
12.5.6. El estudio de Field	371
12.5.7. El estudio de Hale	375
12.5.8. El estudio de Witt, Clarke y Fielding	377
12.5.9. El estudio de Chamlin y Cochran	380
12.5.10. El estudio de Greenberg	382
12.5.11. El estudio de Arvanities y Defina	387
12.6. La relación entre desempleo y delincuencia en España	389
CONCLUSIONES	398
BIBLIOGRAFIA	406
APENDICE	412

RELACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS

CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Evolución de población en España.	30
Cuadro 2. Evolución de delincuencia (delitos + faltas) absolutos.	31
Cuadro 3. Evolución de tasas de delincuencia por 100.000 habitantes.	33
Cuadro 4. Número de condenados judicialmente	34
Cuadro 5. Cuentas generales de la Justicia criminal en Francia.	63
Cuadro 6. Procesados en 1913 por las causas que se expresan	73
Cuadro 7. Principales delitos condenados por las audiencias provinciales y juzgados de lo penal	79
Cuadro 8. Condenados según número de delitos	81
Cuadro 9. Países europeos con encuestas de victimización	95
Cuadro 10. Agentes de policía en la Unión Europea, 1999-2010	114
Cuadro 11. Países con mayor número de homicidios por 100.000 habitantes en África.	118
Cuadro 12. Evolución número total de delitos en algunos países de la UE	123
Cuadro 13. Evolución de la delincuencia en Cataluña	156
Cuadro 14. Evolución de la delincuencia en Cataluña. Total de policías	157
Cuadro 15. Delincuencia en el País Vasco según territorio. Año 2001.	158
Cuadro 16. Evolución delincuencia en el País Vasco.	159
Cuadro 17. Delincuencia en Navarra por tipo de actuación.	162
Cuadro 18. Evolución delincuencia en Navarra.	163
Cuadro 19. Evolución de delitos desde 1972-2006.	168
Cuadro 20. Evolución de faltas entre 1980-2006.	171
Cuadro 21. Evolución de delitos y faltas a partir de 2007.	173
Cuadro 22. Evolución de faltas a partir de 2007	174
Cuadro 23. Evolución delitos contra personas.	177
Cuadro 24. Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra personas	177
Cuadro 25. Categorías de delitos desglosadas. Año 2006	178
Cuadro 26. Homicidios dolosos y asesinatos	182
Cuadro 27. Homicidios conocidos, esclarecidos y su diferencia.	182
Cuadro 28. Delitos contra las relaciones familiares en 1997	184
Cuadro 29. Evolución delitos lesiones y malos tratos.	185
Cuadro 30. Evolución delitos contra el patrimonio.	194
Cuadro 31. Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra personas.	196
Cuadro 32. Categorías desglosadas de delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico 2005.	200
Cuadro 33. Evolución delitos de hurtos.	200
Cuadro 34. Evolución delitos de robos con fuerza en las cosas.	203
Cuadro 35. Evolución delitos de robos con violencia o intimidación.	208
Cuadro 36. Evolución delitos de robos con violencia o intimidación 2005-2006.	208
Cuadro 37. Evolución delitos de sustracción de vehículos.	213
Cuadro 38. Evolución delitos de robos con fuerza en las cosas en vehículos.	215
Cuadro 39. Evolución de delitos contra menores.	237
Cuadro 40. Delitos contra menores por edades.	237

Cuadro 41.	Evolución delitos contra la libertad e indemnidad sexual.	240
Cuadro 42.	Evolución delitos conocidos contra la libertad, libertad sexual y relaciones familiares	240
Cuadro 43.	Delitos contra la libertad e indemnidad sexual	241
Cuadro 44.	Evolución delitos contra la seguridad colectiva.	244
Cuadro 45.	Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra la seguridad colectiva.	245
Cuadro 46.	Delitos conocidos y detenciones contra la seguridad colectiva.	247
Cuadro 47.	Evolución delitos contra la seguridad del tráfico.	257
Cuadro 48.	Evolución delitos de tráfico de drogas.	265
Cuadro 49.	Evolución de denuncias cursadas por la Guardia Civil en materia de Medio Ambiente	272
Cuadro 50.	Evolución delitos de falsedades.	285
Cuadro 51.	Delitos conocidos y detenciones de falsedades.	285
Cuadro 52.	Evolución delitos contra la administración pública.	291
Cuadro 53.	Delitos conocidos y detenciones contra la administración pública.	291
Cuadro 54.	Evolución delitos contra la administración de justicia.	296
Cuadro 55.	Delitos conocidos y detenciones contra la administración pública.	296
Cuadro 56.	Evolución delitos contra el orden público.	298
Cuadro 57.	Delitos conocidos y detenciones contra el orden público.	298
Cuadro 58.	Evolución delitos conocidos y detenciones contra la legislación especial.	304
Cuadro 59.	Evolución delitos conocidos y esclarecidos de legislación especial y otros delitos 2007-2012.	305
Cuadro 60.	Evolución delitos conocidos y esclarecidos de legislación especial y otros delitos.	305
Cuadro 61.	Evolución de faltas cometidas y esclarecidas contra las personas.	309
Cuadro 62.	Evolución de faltas cometidas y esclarecidas contra la libertad.	310
Cuadro 63.	Evolución de faltas cometidas y esclarecidas contra el orden público.	311
Cuadro 64.	Evolución faltas cometidas y esclarecidas contra los intereses generales.	313
Cuadro 65.	Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra las personas. Año 2013.	321
Cuadro 66.	Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra la libertad. Año 2013.	321
Cuadro 67.	Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra el patrimonio. Año 2013.	322
Cuadro 68.	Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva. Año 2013.	323
Cuadro 69.	Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra falsedades y las administraciones públicas. Año 2013.	324
Cuadro 70.	Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra las personas. Año 2013.	334
Cuadro 71.	Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra la libertad. Año 2013	335
Cuadro 72.	Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra el patrimonio. Año 2013.	335
Cuadro 73.	Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva y administraciones. Año 2013	336
Cuadro 74.	Evolución de extranjeros en España	345
Cuadro 75.	Evolución detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra las personas.	346
Cuadro 76.	Detenciones e imputaciones a extranjeros por causa de infracción penal contra las personas por género. Año 2012-2013	346
Cuadro 77.	Evolución detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra la	346

	libertad.	
Cuadro 78.	Detenciones e imputaciones a extranjeros por causa de infracción penal contra la libertad por género. Años 2012-2013	347
Cuadro 79.	Evolución detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra el patrimonio.	348
Cuadro 80.	Detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra el patrimonio por género. Años 2012-2013	349
Cuadro 81.	Evolución detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva.	349
Cuadro 82.	Detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva por género. Años 2012-2013	350
Cuadro 83.	Evolución detenciones e imputaciones de extranjeros por causa de infracción penal contra falsedades, orden público y las administraciones.	350
Cuadro 84.	Detenciones e imputaciones de extranjeros por causa de infracción penal contra falsedades, orden público y las administraciones por género. Años 2012-2013	351
Cuadro 85	Evolución detenciones e imputaciones de extranjeros por causa de infracción penal	351

GRÁFICOS

Gráfico 1.	Evolución de población en España.	30
Gráfico 2.	Evolución de delitos absolutos.	31
Gráfico 3.	Evolución tasa de delitos por 1000.000 habitantes	33
Gráfico 4.	Número de condenados judicialmente	34
Gráfico 5.	Evolución de delitos desde 1972 hasta 1996.	168
Gráfico 6.	Evolución de faltas 1980-2006	171
Gráfico 7.	Evolución de delitos a partir de 2007.	173
Gráfico 8.	Evolución de faltas a partir del año 2007.	174
Gráfico 9.	Evolución delitos contra personas.	177
Gráfico 10.	Evolución homicidios y asesinatos.	182
Gráfico 11.	Evolución lesiones y malos tratos.	185
Gráfico 12.	Evolución delitos contra el patrimonio.	193
Gráfico 13.	Evolución delitos de hurtos.	200
Gráfico 14.	Evolución de robos con fuerzas en las cosas.	204
Gráfico 15.	Evolución delitos de robos con violencia o intimidación.	208
Gráfico 16.	Evolución delitos sustracción de vehículos.	213
Gráfico 17.	Evolución delitos de robos con fuerza en vehículos.	215
Gráfico 18	Evolución delitos contra la libertad e indemnidad sexual.	240
Gráfico 19.	Evolución delitos contra la seguridad colectiva.	244
Gráfico 20.	Evolución delitos contra la seguridad del tráfico.	257
Gráfico 21.	Hachís decomisado en kilogramos	260
Gráfico 22.	Extásis decomisados en unidades	260
Gráfico 23.	Heroína decomisado en unidades	261
Gráfico 24.	Sulfato de anfetamina decomisada en kilogramos	261
Gráfico 25.	LSD decomisado en unidades	262
Gráfico 26.	Evolución delitos de tráfico de drogas.	265
Gráfico 27.	Principales flujos de crimen organizado.	277
Gráfico 28.	Evolución delitos de falsedades.	285
Gráfico 29.	Evolución de delitos contra la administración pública.	291

Gráfico 30.	Evolución de delitos contra la administración de justicia.	296
Gráfico 31.	Evolución de delitos contra el orden público.	298
Gráfico 32.	Delitos contra la legislación especial	304
Gráfico 33.	Evolución de faltas generales.	307
Gráfico 34.	Evolución de faltas contra las personas.	308
Gráfico 35.	Evolución de faltas contra el patrimonio.	310
Gráfico 36.	Evolución de faltas contra el orden público	311
Gráfico 37.	Evolución de faltas contra los intereses generales	312
Gráfico 38.	Evolución de la delincuencia y el desempleo.	393
Gráfico 39.	Relación logarítmica entre delincuencia contra las personas y desempleo.	396
Gráfico 40	Relación logarítmica entre delincuencia económica y desempleo.	397

*Si el hombre fracasa en conciliar la justicia
Y la libertad, fracasa en todo.*

Albert Camus

PARTE I

Capítulo 1. Propedeutica de la tesis doctoral

1.1. Introducción

La delincuencia es una parte integrante del riesgo al que hacemos frente todos los días. Es quizás uno de los mejores indicadores de cómo funciona una sociedad porque da cuenta del proceso de desviación de las normas que se producen en su interior y de la cohesión social. Uno de los padres fundadores de la sociología, E. Durkheim, sostenía que de alguna manera la desviación de las normas constituía una rebelión, un elemento transgresor que posibilitaba el cambio en las sociedades porque suponía un choque contra lo establecido y contra quienes sustentan el poder. Desde el estructural- funcionalismo, Parsons, apuntaba que la desviación y su consiguiente corrección era algo consustancial a las normas y valores de una estructura social que funcionaban de una manera homeostática para proporcionar estabilidad a una sociedad. Por otra parte, la represión o el ajuste de la delincuencia es uno de los elementos fundamentales de la igualdad o desigualdad ante la justicia y la ley, siendo uno de los aspectos que quedan por resolver de manera legítima, como sostenía Habermas, en las sociedades occidentales de principio de siglo y que probablemente concitará más atención en los procesos de equidad futuros. Aunque, no existe una única definición social de la delincuencia, se admite como la más consensuada la que sostiene que simplemente es una transgresión de la ley prohibida por el código penal. Esta formulación de la ley en cuanto norma conduce hacia la dependencia que el delito tiene de las condiciones culturales de un país hasta el punto de que lo que se considera como tal en una sociedad no lo es en otra. Además la delincuencia como concepto es muy amplio y heterogéneo porque incluye categorías tan dispares como el crimen y el hurto, siendo por otra parte reales solamente cuando han sido juzgados y condenados.

El estudio de la delincuencia no es un ejercicio nuevo ya que hunde sus raíces en las primeras manifestaciones de la cultura, con un punto álgido en el siglo XIX cuando filósofos y estadistas se volcaron en sus efectos. Pero si la delincuencia es consustancial al tiempo y a la cultura existente, ello exige que los análisis haya que renovarlos en los contextos nuevos en los que se reproducen. Es por ello que se hace necesario volver a pensar las causas, la estructura, las normas, los valores, los ratios, las frecuencias y las tendencias de este fenómeno desde la perspectiva de la sociología actual. Más cuando desde ciertos ámbitos de poder se ha empezado a utilizarla como un instrumento de coacción para cuestionar que en los países occidentales, ha seguido una ruta creciente en las últimas décadas, o en todo caso no ha descendido tal como se podría esperar después de la expansión de la protección social (pensiones, salario social, desempleo, enfermedad, vivienda, etc.), del incremento de los ratios de educación (en la mayoría de los países se ha vuelto obligatoria hasta los 16 años), y de las mejoras en la seguridad ciudadana (aumento de las dotaciones policiales y del sistema judicial). Variables que se suponía altamente correlacionadas con la disminución de los porcentajes de delincuencia porque cimentaban a la sociedad a través de la equidad en cuanto a

justicia. Ello ha dado pie para que se la relacione inversamente con los efectos del estado de bienestar, una circunstancia que de ser cierta pondría en tela de juicio gran parte de las teorías sociológicas criminológicas sustentadas en la etiología de las clases sociales, en el estatus socioeconómico, en las condiciones de pobreza, en el desempleo continuado y en definitiva en la desigualdad acentuada. Además, íntimamente asociado a la apreciación anterior se ha iniciado otro debate de calado procedente desde círculos políticos conservadores señalando cómo ante la mejora de las condiciones de vida y la erradicación de la pobreza, propiciadas por el estado de bienestar, pierde importancia la responsabilidad de la sociedad ante el delincuente, es decir, el hecho delictivo dejaría de ser una necesidad imperiosa de absoluta necesidad para sobrevivir, producto de la marginación social tal como se había sustentado en las doctrinas redentoras criminológicas imperantes en Occidente, para convertirse en un hecho individual de la persona, en muchas ocasiones de manera caprichosa –delincuencia ociosa e innecesaria-, que se aísla voluntaria e innecesariamente de la Ley y que no requiere resarcimiento alguno desde la sociedad.

La tesis en cuanto que trabajo de investigación está estructurada en diversos apartados: la organización global (completa) del proceso, las bases del tema de investigación estudiado, el marco teórico de referencia, la descripción detallada de la metodología aplicada, una síntesis de los principales hallazgos empíricos y su interpretación a la luz del marco teórico y, finalmente, el razonamiento del investigador reflejado en las conclusiones y prospectiva a seguir en procesos de investigación similares o en aplicaciones concretas del conocimiento producido. Otra cuestión fundamental que se ha intentado adoptar es la elaboración en un cuidado lenguaje, centrado directamente en las cuestiones clave (concreto y preciso), demostrando la sistematicidad y rigurosidad propios de todo proceso de investigación científica. Igualmente se han tenido en cuenta los criterios de redacción (formato) estandarizados internacionalmente para que el documento tenga valor y reconocimiento en la comunidad científica y, por tanto, en la academia universitaria.

De acuerdo a Fortin¹, la tesis en cuanto que investigación científica, es un procedimiento que permite resolver problemas ligados al conocimiento de los fenómenos del mundo real en el que vivimos. Se trata de un método particular de adquisición de conocimientos, una manera ordenada y sistemática de encontrar respuesta a las cuestiones que necesitan ser investigadas. Por sus funciones, la investigación permite describir, explicar y predecir tanto los hechos como los acontecimientos o los fenómenos. La investigación está estrechamente ligada a la teoría ya que contribuye a su desarrollo, bien para crearla, bien para verificarla. A su vez, la teoría incrementa la comprensión de los fenómenos estudiados por la investigación de tal forma que esta nueva comprensión conduce al análisis de otros problemas. Concebir un proceso de investigación supone también tener en

¹ Fortin M. (1999). El proceso de investigación: de la concepción a la realización. Madrid. McGraw-Hill Interamericana

cuenta el significado que se atribuye a éste y a sus consecuencias. Por ello, antes de elaborar un proyecto de investigación, se debe estar previamente convencido de su importancia, no sólo para el desarrollo de los conocimientos en la disciplina a que se refiere, sino también por las consecuencias que estos nuevos conocimientos puedan aportar a esa disciplina.

Además, la tesis doctoral en tanto que investigación científica es un proceso sistemático que permite examinar los fenómenos con el propósito de obtener respuestas a preguntas precisas que requieren una investigación. Este proceso comporta ciertas características innegables: entre otras que es sistemático y riguroso y lleva a la adquisición de nuevos conocimientos. Además es un método controlado, empírico y crítico que sirve para verificar hipótesis sobre presuntas relaciones entre fenómenos naturales. Esta definición supone el control de las variables en la situación de investigación e implica la verificación de hipótesis. Así, el esfuerzo de formular hipótesis más que el de comprobarlas no se considera como perteneciente a la investigación. Esta definición supone una cierta dificultad de cara a los trabajos de investigación para las disciplinas que tienen un alcance social. Otras definiciones se concilian mejor con la diversidad de enfoques de investigación. También se puede definir como un proceso sistemático de recogida de datos observables y verificables, a partir del mundo empírico (el que conocemos a través de nuestros sentidos) con intención de describir, explicar, predecir o controlar determinados fenómenos.

Según Blaxter, Hughes y Tight², así como hay una gran variedad de opiniones sobre qué es la investigación y diferencias notables en las prácticas concretas respecto de qué investiga la gente y cómo lo hace, también hay puntos de vista diferentes sobre el modo de llevar adelante el proceso de investigación. Se suele presentar la investigación como una serie de etapas fijas y lineales, con un principio y un fin netos. La investigación real es, inevitablemente, un proceso bastante más intrincado.

1.2. Justificación

La delincuencia tiene un coste económico elevado porque influye en la previsión de las leyes, en la corrección de los servicios penales, así como en la economía tanto de los hogares como del Estado como consecuencia de la implementación de medidas preventivas. Las estadísticas por sí solas son un soporte en tanto que unidades para revelar una 'verdad' que no se puede negar. Por medio de estas estadísticas, que se pueden comprobar, pero no discutir en sí mismas, podemos desenterrar una verdad que es incuestionable. Con su

²Blaxter L., Hughes Ch., and Tight M. (2010). How to research. McGraw Hill Education. Bershire.

recopilación y presentación podemos determinar si cumplen las expectativas y, si no, que es lo que está ocurriendo. En la exploración de esta área inevitablemente veremos cambios en las expectativas con el transcurrir del tiempo. La principal razón para la recolección de estadísticas es para evaluar el nivel de la delincuencia. Sin embargo, el trasfondo es mucho más amplio porque sirven: para evaluar las tendencias en los tipos de delitos cometidos; para evaluar las tendencias de comportamiento delictivo; como un 'barómetro moral' de la salud de nuestra sociedad; para evaluar el éxito o fracaso de la policía en la prevención de ambos, para detectar y resolver delitos; para entender las tendencias de las sentencias. Durante mucho tiempo la principal razón para su uso fue una mera recopilación, pero con el paso del tiempo se han convertido en una evaluación del uso de los recursos de control del delito.

Humberto Eco en su célebre manual sobre cómo orientar una tesis doctoral formula una serie de preguntas que son pertinentes y que se podrían aplicar a esta tesis: ¿Está justificado dedicar nueve o diez años de una vida investigadora para estudiar la delincuencia en España?, ¿Está justificado convertirse en una experta en este tema?, ¿Merece la pena dedicar recursos para esta tarea? ¿Se puede hacer una aportación que merezca la pena y que sea reconocida? Son algunas de las preguntas que se pueden formular cuándo se aborda un trabajo de esta magnitud. Siguiendo al autor, la contestación debe formularse en base a cómo se encuentra el “estado del conocimiento o del saber” en los ambientes científicos e intelectuales. En España los estudios sobre delincuencia han sido prolíficos en los últimos años, pero siempre desde un punto de vista más orientado a la criminología legal. La ausencia de estudios sociológicos sobre la delincuencia en España es preocupante. No existen apenas publicaciones en forma de libros, capítulos o artículos sobre este problema. En los últimos años solamente dos o tres tesis doctorales, una de ellas leída en la Universidad Pública de Navarra con *cum laude*, por cierto, han tratado este tema, pero orientadas hacia el gran problema de la victimización, ninguna hacia la delincuencia en España de una manera global. La mayor parte de los estudios, análisis y publicaciones que se llevan a cabo proceden del derecho y de la criminología –ciencia incipiente que agrupa a varias disciplinas-. Ante esta ausencia se justifica la presente tesis doctoral, consciente de que es tremendamente complicado compaginar la teoría sociológica, los datos estadísticos procedentes de varios ámbitos y el estudio de las leyes pertinentes. Es por ello una tesis multidisciplinar que engloba al menos tres ámbitos académicos diferentes.

La delincuencia es importante y justificada en el estudio de la sociedad en su conjunto porque refleja aspectos esenciales y claves tanto desde el punto de vista teórico marxista como desde el estructural funcionalismo. La delincuencia es tan antigua como la propia humanidad y existe datos constatables sobre ello desde el primer momento en que Eva comió de la

manzana prohibida o desde que Caín mató a Abel y fue castigado por ello. Pero adquirió carta de naturaleza propia cuándo con la llegada de la industrialización se produjeron los flujos masivos de habitantes del campo a la ciudad porque en ese momento, según autores como Tönnies o Durkheim se transitó de una sociedad basada en la solidaridad anómica a otra fundamentada en la solidaridad orgánica. La acumulación de personas en espacios reducidos hizo que aumentaran las conductas desviadas que no eran funcionales para la marcha de la sociedad. Obviamente estos problemas existían antes, pero en ese momento se multiplicaron. Es por ello que justamente en esta época es cuándo se confeccionan los códigos penales y cuándo tenemos noticias de las primeras estadísticas y la irrupción de las primeras policías independientes tanto del ejército como de la judicatura. Estudiar la delincuencia, es pues, estudiar la estructura de la sociedad, sus mecanismos para asegurar la estabilidad y el buen funcionamiento, sus roles, sus instituciones, sus normas y sus valores. El hurto o el robo por ejemplo, no es un hecho disfuncional en la naturaleza porque gran parte de la supervivencia de algunos animales se fundamenta en él; y en las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio ha sido reprimido de diversas maneras, sin embargo, para la sociedad humana es fundamental buscar la armonía para evitar conflictos que puedan ser contraproducentes en el acontecer de su vida cotidiana.

Es imperioso y justificado responder a la confusión que reina en la sociedad española en torno al delito publicitado en los medios de comunicación. No hay día que no se dé cuenta de un delito desde la prensa escrita y audiovisual. En España esta confusión es mayor porque los tres ámbitos implicados en la delincuencia: policía, fiscales y jueces publican sus resultados sin mayor explicación por lo que acaban resultando tal como son presentados por los medios de comunicación inconexos y contradictorios. Además, como no cabe duda de que el estado de bienestar se ha consolidado y expandido en los principales países occidentales y de manera particular en España, en donde desde 1985 ha crecido de manera intensa con leyes como la de pensiones no contributivas de 1990, se hace necesario analizar la evolución de la delincuencia para establecer paralelismos y poder así refutar o reforzar las tesis que vinculan al estado de bienestar con la delincuencia. En principio, las pautas de evolución de la delincuencia desde una perspectiva temporal, muestran en su totalidad (delitos + faltas) un aumento largo y sostenido en los últimos años que suele ser publicitado sin mayor explicación por los medios de comunicación en base a las cifras del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, y del Poder Judicial. Sin embargo, un análisis completo exige el escrutinio de los datos estadísticos desde el punto de vista del papel que juega la delincuencia dentro de las relaciones sociales, que autores como E.

Lamo³ han caracterizado como el ejercicio del poder de unos grupos sobre otros, tanto en el ejercicio de la definición como en su ejecución.

El objetivo de la tesis es analizar la delincuencia en España de una manera global de forma que se puedan entender las causas, las motivaciones, la magnitud y las tendencias. Para esta tarea se ha recurrido a los principales manuales de sociología publicados recientemente como el de Haralambos y Holborn de 2012, que tratan en sus monumentales obras la delincuencia en uno de sus capítulos estructurándolo primero con sus teorías, luego con los delitos y finalmente con los grupos sociales implicados. Todo ello alumbrado desde las posiciones teóricas existentes en la sociología de la delincuencia. Lo cual resulta complicado porque a pesar de que ésta tiene un capítulo en todos los manuales de sociología general, sin embargo, no existen asignaturas que reflejen esta realidad social en los planes de estudio de la mayor parte de las licenciaturas españolas, ni existen tampoco una gran cantidad de artículos sobre el tema en las revistas especializadas. Esto ha provocado un vacío que ha sido utilizado por otras materias como el derecho penal para apropiarse de las teorías sociológicas de la desviación. Mi interés en esta tesis ha sido recoger este corpus teórico disperso y actualizarlo con las aportaciones de una materia que ha dado en llamarse recientemente “criminología”.

Mención aparte requiere análisis empírico que se hace de la delincuencia en España, en el cual todos los años los medios de comunicación como televisión, radio, prensa, recogen las noticias del Ministerio del Interior, del Ministerio Fiscal y de Ministerio Judicial, procedente de las respectivas memoria de policías, jueces y fiscales de la incremento de la delincuencia en España, sin especificar un dato básico como es el de la diferencia entre delincuencia relativa y absoluta, es decir, el ratio de delito medido por la población correspondiente, que queda reflejado en esta investigación. Tampoco se aclara si la delincuencia a la que se refieren los dos últimos poderes es la reflejada por el conjunto de faltas y delitos o solo delito, lo cual hace variar, cuando no confundir, la percepción del fenómeno. Y mención aparte es la diferencia entre las tres estadísticas que en muchas ocasiones varían significativamente no sólo en la apreciación de la cifra final del delito, sino en su tendencia. Es necesario, pues, especificar todos estos elementos, analizarlos e incorporarlos a una visión global que supere y clarifique todas estas aparentes contradicciones. La tesis doctoral clarifica todas estas cuestiones.

Otra deficiencia importante para poder hablar con rigor sobre la delincuencia en España, es la ausencia de datos de la policía municipal. Existen tantas policías de este tipo como ayuntamientos, y a pesar de que su campo de actuación es la vigilancia del tráfico y el cumplimiento de ordenanzas municipales; sin embargo, en varias ciudades también recibe e

³ Lamo E. (1989). *Delitos sin víctima*. Alianza. Madrid.

investiga denuncias sobre faltas y delitos. No existe ninguna coordinación en su forma de contabilizar estos sucesos. Sin embargo, las cifras procedente de este Cuerpo, se incluyen en la estadística del Ministerio del Interior en aquellos lugares donde las denuncias se remiten a la Policía Nacional o la Guardia Civil para su investigación, pero todavía quedan en sus registros muchos datos sobre pequeños hurtos o robos que no son recopilados en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, ni publicados en registro alguno.

Por otra parte, España gasta el 0,63 por ciento de su PIB en dotaciones económicas para los Cuerpos y Servicios de la Seguridad del Estado, es decir 6.663,100 millones del año 2010, siendo una cantidad muy importante para las arcas del Estado. La evolución de este gasto ha sido más o menos constante desde 1996, aunque con una ligera recta de bajada desde 1996 hasta 2004 y una ligera recta de subida desde entonces, que ha provocado que el porcentaje de gasto del año 2010 sea el mismo que el que se gastó en 1996. Solamente entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil contaban con 148.850 agentes en el año 2009, que se repartían principalmente entre “fronteras e inmigración”, “policía judicial”, “crimen organizado”, “terrorismo” y especialistas en “violencia de género”

1.3. Planteamiento del Problema

Si cualquier estadística social es difícil y controvertida: paro, consumo, electoral, precios, usos del tiempo libre, intención de voto, etc.; la de la delincuencia no lo es menos, incluso se podría decir que es una de las más complicadas o la más complicada. Ello es así por la naturaleza del delito y por los impedimentos que surgen al contabilizarlos. Dado que junto a los crímenes y asesinatos, cuya detección y resolución está próxima al cien por cien por contar con los medios modernos de análisis de huellas, cabellos, y ADN, se encuentran diversos delitos e infracciones cuanto menos discutibles o dudosas como los hurtos, los robos, el tráfico de drogas, los diversos fraudes, el honor, etc. que muchas veces son muy difíciles de catalogar y de cuantificar. Existe por otra parte, junto a la delincuencia oficial, una delincuencia oculta que nunca se llega a conocer porque no llega a oídos de la policía o de la justicia. Pero además la delincuencia oficial presenta un problema casi irresoluble porque por el sistema penal occidental no se puede hablar de delitos, sensu stricto orden, hasta que no han sido juzgados y condenados. Ello supone que la delincuencia policial no coincide con la fiscal ni con la judicial, ni tampoco con las encuestas de diverso tipo. Es más, las cuatro instancias pueden entrar en contradicción por el procedimiento que siguen y porque la definición de un caso concreto puede ser computado de diversas maneras. Así pues, la delincuencia tiene diversos prismas, pero abordarlos todos ellos desde fuentes múltiples es a la vez una necesidad teórica y práctica.

La delincuencia se puede y debe estudiar utilizando diferentes indicadores, por ejemplo a través de datos policiales, datos fiscales, datos judiciales, encuestas de victimización, de autoinculpación y de inseguridad ciudadana. Es muy importante conocer los sesgos y errores de cada una de estas fuentes de información, y utilizar la más apropiada para cada tipo de análisis. El problema de que los datos sean incompletos y, a veces, sesgados, no es un asunto exclusivo de nuestro objeto de estudio, sino que toda la investigación social y económica se enfrenta a problemas metodológicos similares. Las encuestas de auto denuncia o autoinculpación tienen su utilidad más destacada en evaluar tendencias en la delincuencia juvenil. Las encuestas de victimación incluyen información sobre los delitos que no han sido denunciados, y son más apropiadas para evaluar la delincuencia común contra la propiedad. Sin embargo, no contienen información sobre los delitos económicos, el tráfico de drogas o delitos contra el medio ambiente, tampoco son indicadores fiables de los delitos graves contra la persona o contra la libertad sexual. La estadística policial es detallada, y ofrece una información precisa sobre todos los delitos denunciados, según tipo de delito, lugar y circunstancia de los hechos. La estadística judicial es muy incompleta desde un punto de vista socio analítico porque un mismo hecho es objeto de diversos expedientes y las sentencias se recurren en espacios temporales que pueden distorsionar el número de delitos, carecen de validez para estudiar la evolución de la delincuencia, aunque ofrece información sobre sentencias penales según tipo de delito, e información sobre las personas condenadas. La estadística de la fiscalía adolece de los mismos problemas que la estadística judicial.

Pero, analizar la delincuencia, su evolución y sus consecuencias, plantea un problema casi irresoluble en estos momentos, porque es casi imposible establecer una medida real de la tendencia de la delincuencia en España ya que a pesar de que las cifras oficiales vienen mejoradas cada año, falta el registro de lo que se denomina como delincuencia negra u oculta, que no es otra cosa que la delincuencia real o delincuencia que se produce en la sociedad aparte de la que queda reflejada en la actuación policial. Son los pequeños hurtos y robos que no se declaran, los malos tratos que se callan por miedo a represalias o la delincuencia financiera que es tan difícil de detectar. Sin las encuestas de victimización y de auto inculpaación, que existen en casi todos los países occidentales y en algunas comunidades autónomas como Cataluña, es materialmente imposible avanzar en este capítulo. Se estima que computando este tipo de delito aumentaría en un 20 por ciento el registro total.

Por todo ello, la tesis tiene ensamblar varias partes, de manera holística para que se puedan complementar armónicamente entre sí. Una primera parte, de teorías y de indicadores, en donde se analizan tanto las aportaciones sociológicas relevantes de los últimos años, como los métodos para recogerlas de acuerdo a las referencias de búsqueda bibliográfica

procedentes de libros, artículos de libros y artículos de revistas, existentes en el servicio de préstamo y “on line” de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. Una segunda parte en la que se trae a colación la situación internacional de países como Estados Unidos de América, Inglaterra y País de Gales, Francia y Alemania. Una tercera parte relativa a la delincuencia en España a nivel global, así como a nivel de **apartados** delictivos referenciados principalmente en el código penal que contiene todos los datos recogidos con mayor o menor continuidad en los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior a los que he accedido por medio de Internet y que han sido complementados con las cifras existentes en otras instituciones, así como en la Fiscalía General del Estado en sus informes también anuales. Una cuarta parte procedente de los datos de desempleo obtenidos a través de la página web de Instituto Nacional de Estadística que han sido complementados con artículos procedentes en su mayor parte de la revista *Criminology*, conseguidos por medio del préstamo inter bibliotecario de la Universidad Pública de Navarra. En este último apartado se han utilizado series temporales procedentes de varias fuentes. La muestra utilizada es la que establece el Ministerio del Interior, es decir, población española mayores de dieciocho años y la que utiliza el Ministerio de trabajo en la Encuesta de Población Activa (EPA), o sea, en ambos casos mayores de 18 años.

Los temas relacionados con la delincuencia figuran entre los tres problemas principales que existen actualmente en España. Según las encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 2013, la inmigración (2,9), la corrupción/fraude (37,6), y el terrorismo (0,5) se encuentran entre ellos. Además cuando desde el eurobarómetro se pregunta sobre: ¿Cuáles piensa que son los dos problemas más importantes en este momento (en nuestro país)? La respuesta de inseguridad/delincuencia es del 6,0 por ciento frente a países como Dinamarca que es del 19 por ciento, Bélgica del 17 por ciento o Francia del 16 por ciento. España ocupa el tercer lugar por la cola.

1.4. Objeto de estudio

En la presente tesis se analiza la delincuencia definida desde la RAE como “cualidad del delincuente, acción de delinquir, conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos, colectividad de delincuentes”. Mientras que delito es la “culpa, quebrantamiento de la ley, acción o cosa reprobable, acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley”. Pero, la delincuencia se estudia desde el punto de vista social, entendiendo ésta como un producto cultural de la sociedad y no como un producto de características fisiológicas o de agentes individualizados como se contempla desde otras materias, estableciendo unos antecedentes nítidos y claros en G. Tarde y sus leyes de

imitación o en Le Play con sus estudio sistemático de las estadísticas del delito. En este sentido existen tres servidumbres que es necesario atender y que se complementan entre sí. En primer lugar, está el marco de referencia constituido por las leyes cristalizadas en el código penal que establece lo que es delito y cómo es su gravedad por medio de la condena correspondiente. En tercer lugar se encuentra el análisis de la evolución de la delincuencia desde el ángulo de la desviación con la constatación de que la mayor parte de la delincuencia en España está concentrada en unos pocos capítulos como son el robo y el hurto; y finalmente en cuarto lugar se encuentra la causación de la delincuencia que nos lleva directamente a estudiar los grupos sociales adscriptivos implicados como son el sexo o género, la edad, la raza o etnia y el desempleo o estatus socioeconómico como principales variables explicativas.

El conocimiento de las causas de la delincuencia son importantes para informar a la población sobre la adopción y toma de decisiones que se cristalizan en leyes; para facilitar la rendición de cuentas de manera democrática; y permitir al público evaluar el riesgo de la delincuencia en sus barrios y el nivel de eficacia de los poderes públicos. Estas estadísticas, que al final no son más que un conjunto de números, para que sean plenamente comprensibles deben ser complementadas con datos de la judicatura y de la fiscalía y con una información adicional procedente de las ruedas de prensa del Ministerio del interior, de los boletines de las diferentes policías y de las noticias de los medios de comunicación que juntos deben suponer comprensión sociológica de los datos.

La lucha contra la delincuencia ha adquirido una gran importancia en las últimas décadas. La seguridad ciudadana, el miedo al delito, es un renovado centro de atención, tanto de la gente de la calle como de los medios de comunicación. Es un tema donde la credibilidad de una información parcial o incompleta es particularmente importante. El interés del público aquí es generalmente acusado debido a los casos individuales espectaculares difundidos con gran detalle y a las cifras generales que de vez en cuando se publican. Con el fin de hacer posible una evaluación apropiada del riesgo de la delincuencia en la vida cotidiana, así como de la sensación de seguridad, que es en un grado muy importante subjetiva, es necesario adoptar un enfoque todo lo más amplio posible que sitúe a la delincuencia en sus justos términos. Utilizando todos los medios estadísticos disponibles y teniendo en cuenta los hallazgos científicos al alcance que posibiliten que tanto la calidad como la cantidad de delitos puedan ser comprobadas, clasificadas y evaluadas. Esto implica poder llevar a cabo un análisis del desarrollo de la delincuencia transversal y longitudinalmente en el tiempo y una comparación con otros países. Sólo de esta forma pueden los ciudadanos de un país evaluar la situación de seguridad apropiadamente; y sólo así puede el Estado reaccionar correctamente a los requisitos de la política criminal,

que le permitan actuar correctamente a través de las medidas políticas que se adopten.

La delincuencia como objeto de estudio ha requerido la adopción de acciones concretas que se han llevado a cabo para responder a las cuestiones teóricas que se concentran en la gestación de un marco general teórico que responde a una cierta coincidencia en una serie de autores que son significativos sobre el número y contenido de teorías. Ello conduce a establecer una panorámica general de cómo se explica el delito desde diversos ángulos teóricos, todos ellos contenidos en la sociología, a partir de una cuidadosa revisión bibliográfica principalmente en inglés, aunque también en francés y alemán, sobre las escuelas o paradigmas sociológicos de la delincuencia, entendiendo ésta en tanto que conducta desviada. Para responder a las cuestiones que se plantean en la parte aplicada en el estudio de la realidad de la delincuencia se han utilizado de manera minuciosa diferentes cuadros procedentes de las series estadísticas de los Anuarios del Ministerio de Interior que se han reconvertido en temporales, complementándolas con los datos procedentes de la delincuencia en diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra y País de Gales, además de los informes internacionales procedentes de la ONU, de Eurostat, y del Consejo de Europa, así como los datos procedentes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, para dar la correspondiente explicación de determinadas fluctuaciones en la marcha de algunos delitos y faltas se han utilizado las Memorias de la Fiscalía General del Estado, material cualitativo de extrema importancia para entender las frías estadísticas. Finalmente las notas de prensa de diferentes años han servido para ilustrar casos concretos.

Cabe señalar que las estadísticas oficiales del delito y de la justicia penal dependen fundamentalmente de tres conjuntos de circunstancias: (a) factores sustantivos como la propensión de los individuos a cometer delitos, la estructura de la oportunidad, el riesgo de detección, la disposición del público a informar sobre los delitos padecidos, la eficiencia de las autoridades de justicia penal; (b) factores legales tales como el diseño del Código Penal, el código de procedimiento penal y otras leyes pertinentes; la organización formal de los órganos de justicia penal y la aplicación oficiosa de la ley en la vida cotidiana; y (c) factores estadísticos como las reglas de recolección y procesamiento de datos formales y su aplicación práctica⁴

1.5. Hipótesis de investigación

Las principales preguntas de investigación a las que se enfrenta la tesis doctoral y sirven de base para la formulación de los objetivos de

⁴ Aebi M. et alt. (2014). European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014. Helsinki. European Institute for Crime Prevention and Control.

investigación se podrían resumir en varios puntos sujetos al espacio temporal de los últimos treinta y cinco años. Estas hipótesis que son necesario contrastar se encuentran principalmente en la parte empírica en la que se hace un acopio de series temporales en base a datos dispersos procedentes principalmente de la policía. Aunque cuando existen otros medios de conocimiento se han utilizado.

Las hipótesis nulas (H_0) construidas para anular o refutar las preguntas de investigación establecidas son las siguientes.

1. La delincuencia a nivel internacional ha aumentado. (H_0).
2. La delincuencia relativa en España ha aumentado. (H_0).
3. La delincuencia absoluta en España ha aumentado. (H_0).
4. Los delitos han aumentado. (H_0).
5. Las faltas han aumentado. (H_0).
6. Las leyes y las reformas penales están asociadas con la delincuencia. (H_0).
7. Los delitos contra las personas han aumentado. (H_0).
8. Los delitos contra el orden socioeconómico han aumentado. (H_0).
9. Los delitos contra la libertad y relaciones familiares han aumentado. (H_0).
10. Los delitos contra la seguridad colectiva han aumentado. (H_0).
11. Los delitos contra el medio ambiente han aumentado. (H_0).
12. Los delitos de falsedades y contra las administraciones han aumentado. (H_0).
13. Los delitos contra la seguridad colectiva han aumentado. (H_0).
14. Los delitos contra el medio ambiente han aumentado. (H_0).
15. Los delitos contra la administración pública han aumentado. (H_0).
16. El género está asociado con la delincuencia. (H_0).
17. La edad está asociada con la delincuencia. (H_0).
18. La etnia o raza está asociada con la delincuencia. (H_0).
19. El desempleo está correlacionado con la delincuencia. (H_0).

1.6. Fundamentación teórica

Las diferentes teorías sociológicas de la delincuencia están enfocadas para escrutarla desde diferentes puntos de vista, así se han investigado diferentes tipos de delincuencia y diferentes target poblacionales. Aunque es frecuente no especificar, en la mayor parte de las veces, qué tipo de delincuencia se trata, es decir, irían enfocadas más bien para analizar en términos generales la desviación social o el incumplimiento de las normas. A pesar de que existen discrepancias entre los diferentes autores tanto de libros genéricos de “sociología general” como de “criminología”, existe un cierto consenso en establecer que las principales corrientes teóricas sociológicas de la delincuencia son la ecológica procedente de la escuela de Chicago, la de la anomía procedente de Durkheim y Merton, la de la

asociación diferencial de Sutherland, la estructural o subcultural de Cohen, la de la neutralización de Matza, la de control de Hirchi, y la del etiquetado de Beckert y Lemert. Aunque hay que decir que no existe coincidencia, Haralambos y Holborn⁵, por ejemplo las encuadran en funcionalistas, estructural y subcultural, deriva; Giddens⁶ en la quinta edición de su popular *Sociology*, reconociendo que en este campo nunca ha existido una perspectiva teórica particular preeminente que encuadre a todas las versiones en teorías funcionalistas (subcultura), teorías interaccionales (etiquetado), teorías de conflicto (nueva criminología, realismo de izquierdas) y teorías de control (realismo de derechas, ventanas rotas); Jorgensen, Bird, Heyhoe, Russell y Savvas⁷, utilizan funcionalistas, subcultura, conflicto y desviación y neomarxismo; Macionis y Plummer⁸, las engloban en tensión, subculturas, etiquetado, asociación diferencial y control; Adler, Mueller y Lauder⁹, las dividen en tensión, cultural, subcultural, control, etiquetado, conflicto y radical. La tipología teórica utilizada en la tesis ha tomado en cuenta todas estas aportaciones, dividiendo a las diferentes teorías en primer y segundo rango, dependiendo del año en que fueron ideadas, de su aceptación y de su contrastación empírica. Algunas teorías de reciente irrupción como la de “broken windows” o neoconservadoras han sido incorporadas.

Con respecto al análisis de la delincuencia real, empírica, o legal, especificada en diferentes, numerosos y variados delitos, la tesis se ha sustentado en la fundamentación de delincuencia utilizada por el Ministerio del Interior en sus anuarios estadísticos basados en una reducción sintética del código penal español. Dado que para que exista un arresto o una imputación debe existir un marco legislativo legal probado por un gobierno en una ley o en un decreto ley que especifique que tipo de delito es y cuánto es su pena, por lo que detener a alguien sin una justificación, o sin un marco de referencia es en sí mismo un delito. Así pues es necesario atenerse a estos datos y plasmar la delincuencia en base a ellos. El código penal español tiene más de 639 artículos porque algunos de ellos están duplicados, triplicados o cuádruplicados. A ellos hay que sumarles las leyes especiales que desarrollan lo que se denomina como artículos en blancos porque se espera que sean desarrollados con más especificidad, al igual que ocurre con la Constitución Española.

1.7. Metodología

⁵ Haralambos M. and Holborn M. (2000). *Sociology. Themes and perspectives*. London. HarpersCollins Publishers.

⁶ Giddens (2006). *Sociology*. Cambridge. Polity Press.

⁷ Jorgensen et alt. (1997). *Sociology. An interactive approach*. London. Collins Educational.

⁸ Macionis J. y Plummer K. (1999). *Sociología*. Madrid. Prentice Hall. Pág. 215.

⁹ Adler, Mueller y Lauder (2001). *Criminology*. Boston. McGraw Hill.

El método utilizado para la parte empírica es el de las series temporales, el cual tiene una amplia tradición sociológica, como lo demuestra el hecho de que uno de los primeros manuales de estadística orientado a la sociología escrito por Sierra Bravo, ya contenía un capítulo dedicado a esta técnica. De acuerdo a diversos autores, desde el momento en que los valores de una serie temporal van ligados a instantes del tiempo, podemos decir que el análisis de una serie implica el uso de varias variables, una de las cuales es la representada en el eje de abscisas y la otra en el eje de ordenadas representando diferentes momentos en el tiempo sobre los cuales se llevan a cabo las medidas. Tomando en cuenta que una anotación comparada de la variable principal en un instante dado supone que los indicadores deben de coincidir en su media con los indicadores expresados en unidades de tiempo. Las anotaciones de una variable métrica, de intervalo o de razón pueden estar expresadas bien en un momento de tiempo dado o bien en una fluctuación que se haya podido producir en un espacio temporal determinado, por lo que nos encontraríamos con dos magnitudes importantes para ser tomadas en cuenta en nuestro caso, el momento en que se produce (nivel dado) y su variación (flujo que se produce en un intervalo temporal). Una variable fija sería el número de delitos cometido por una población en un año determinado o en un trimestre determinado, mientras que un flujo serían los diferentes delitos que se han ido cometiendo en cada una de su unidades de medición, como por ejemplo días, La diferencia entre una y otra es que la primera no es acumulable para los distintos instantes de un intervalo, pues se incurriría en duplicaciones de los valores de esa magnitud.

Una cuestión importante a resaltar es la incidencia de homogeneidad de los datos, lo cual constituye un serio problema en nuestro caso como veremos. Para que el análisis de una serie temporal conduzca a conclusiones acertadas no basta con utilizar las técnicas apropiadas sino que es imprescindible que esos datos puedan ser equiparables y no lo serán nunca si no son homogéneos. Si cada año cambia la metodología de observación, se cambian las definiciones, se modifica la población de referencia, etc., el resultado será una serie temporal compuesta por un conjunto de valores no comparables porque son muy heterogéneos. Esta falta de homogeneidad se pierde, de una forma natural, con el transcurso del tiempo, de manera que cuando las series son muy largas no hay garantía de que los datos del principio de la serie y del final sean comparables.

La forma más sencilla de iniciar el análisis de una serie temporal es a través de una representación gráfica a lo largo de varios años o décadas que refleje los cambios que se han producido. Ello da pie para desarrollar varios análisis. Por una parte nos permite un análisis temporal de evolución de una sola variable que indica las diferentes vicisitudes por las cuales ha atravesado a lo largo de los años y la cual puede ser explicada acudiendo a

aquellos hechos externos que han podido influenciarla. Es decir permite un análisis univariable en el tiempo. Pero por otra parte, cuando se analiza esta misma variable con otra que también esté referida en el tiempo, las posibilidades de análisis comparativo aumentan porque se puede observar de una manera gráfica sencilla si las dos han variado conjuntamente a través del tiempo. También permite un tipo de análisis que algunos autores han llevado a cabo en la relación entre desempleo y delincuencia y es la incidencia temporal que una pueda tener sobre otra en lo que se puede denominar como efecto retrogrado, es decir los cambios producidos en una variable cómo influenciaron sobre la otra, pasado un cierto espacio temporal. Por ejemplo, cómo afecta el desempleo sobre la delincuencia con un año, dos, tres o cuatro de diferencia o cómo afecta la inmigración sobre la delincuencia pasado un cierto tiempo desde que el inmigrante desembarca en un país dado.

Según autores como Peña¹⁰, una serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, observaciones o valores, medidos en determinados momentos del tiempo, espaciados entre sí de manera uniforme y por tanto ordenados cronológicamente. El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo de datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones subyacentes como a la posibilidad de extrapolar y predecir su comportamiento futuro. De hecho uno de los usos más habituales de las series de datos temporales es su análisis para predicción y pronóstico, como por ejemplo los datos climáticos, las acciones de bolsa, o las series pluviométricas. Resulta difícil imaginar una rama de las ciencias en la que no aparezcan datos que puedan ser considerados como series temporales.

De acuerdo a Uriel¹¹, el análisis más clásico de las series temporales se basa en la suposición de que los valores que toma la variable de observación es la consecuencia de varios componentes, cuya actuación conjunta da como resultado los valores medidos, estos componentes son: tendencia secular, factor cíclico, estacionalidad y movimiento irregular.

1.8. Presentación y discusión de los principales resultados

Respondiendo al título de la tesis y reduciendo muchos sus particularidades, se puede avanzar de manera hiperresolutiva que de acuerdo a las series temporales construidas en base a los datos procedente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la delincuencia en España medida desde el año 1980 ha aumentado progresivamente tanto a nivel absoluto como relativo con una caída en los últimos años que coincide con la crisis económica y con la evolución que muestran otros países. Existe una

¹⁰ Peña D. (2010). Análisis de series temporales. Alianza. Madrid.

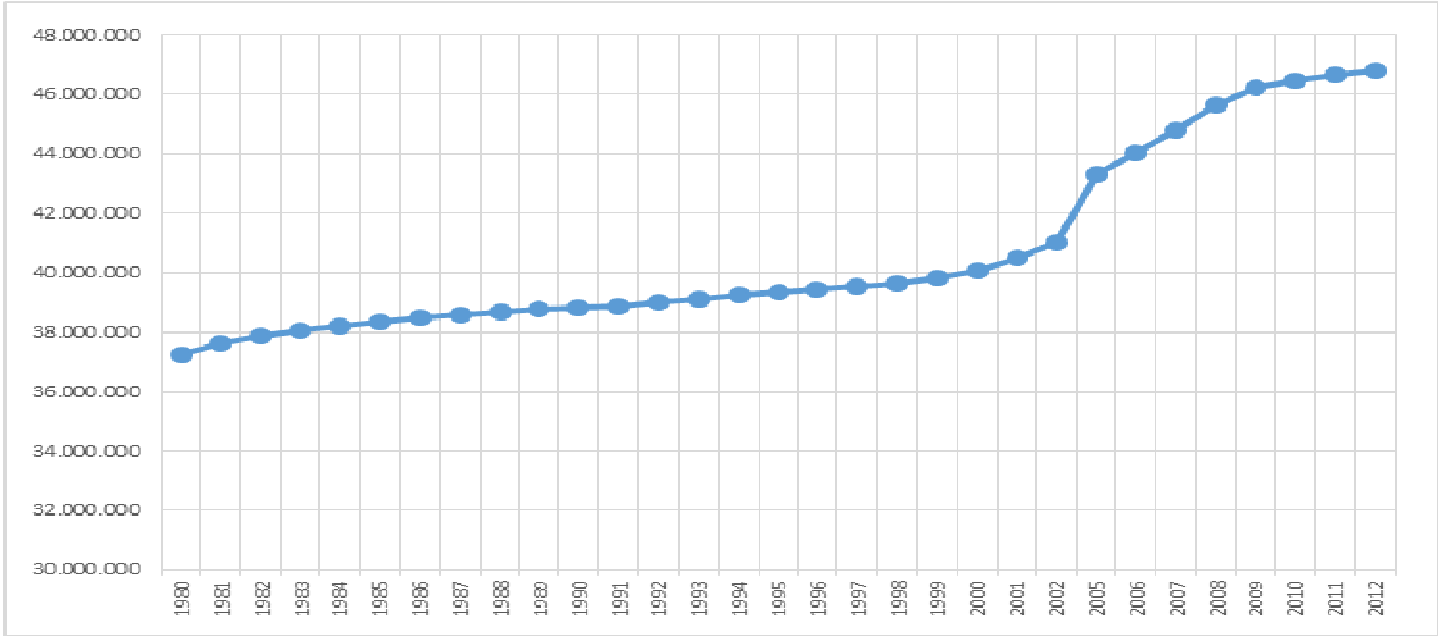
¹¹ Uriel E. (1995). Análisis de datos. Series temporales y análisis multivariante. Madrid. Editorial AC.

cierta relación entre el aumento de la población y la delincuencia medida en términos absolutos y relativos. Aunque en las curvas de evolución de la delincuencia hay un punto de inflexión muy claro en el año 1987, que no se produce en la evolución de la población. Esta evolución se corresponde a grandes rasgos con lo que se refleja en los resultados anuales de las memorias tanto de la Judicatura como de la Fiscalía General del Estado y que recogen con grandes titulares los medios de comunicación masivos. Esta conclusión es importante porque el grado de delincuencia mide el grado de cohesión social como se establece desde diferentes estancias.

En términos de población (gráfico 1 y cuadro 1) hay que resaltar el gran cambio que se produce desde el año 1990 cuando por motivo de la llamada del boom inmobiliario desembarcaron en España seis millones de extranjeros a lo largo de la década siguiente. El aumento de la delincuencia en base a la inmigración fue una excusa alimentada desde una fuente política que sin embargo, no parece que se sostiene. Excepto en el sentido de que al ser una situación irregular haya aumentado el número de detenciones, pero no existe una prueba empírica que demuestre que la delincuencia haya aumentado por la acción de los inmigrantes, lo cual tiene una parte de lógica porque al cometer un delito, el inmigrante irregular se expone a ser expulsado después de las numerosas penalidades por las que ha atravesado para llegar a la tierra prometida.

La lectura de la delincuencia en términos absolutos sobre la serie construida (gráfico 2 y tabla 2) muestra el aumento progresivo año tras año de la delincuencia. Mientras que la lectura de la delincuencia relativa, es decir en relación al número de habitantes, muestra una subida continua desde sus orígenes, pero no acredita ningún salto cuantitativo importante en la fase del aumento de la población inmigrante, poniendo en tela de juicio la tesis xenófoba de que la inmigración ha provocado un aumento espectacular de la delincuencia en España. Finalmente la delincuencia medida por el número de condenados judicialmente no parece que tenga una secuencia que se pueda asociar a los gráficos y cuadros anteriores, en primer lugar porque su serie histórica se inicia en el año 1995, que es cuando se han podido conseguir los datos y en segundo lugar porque el procedimiento judicial afecta a una secuencia estable que se pueda asociar con el devenir de la delincuencia por el hecho de que un delito puede tarde muchos años en ser resuelto.

Gráfico 1. Evolución de población en España.

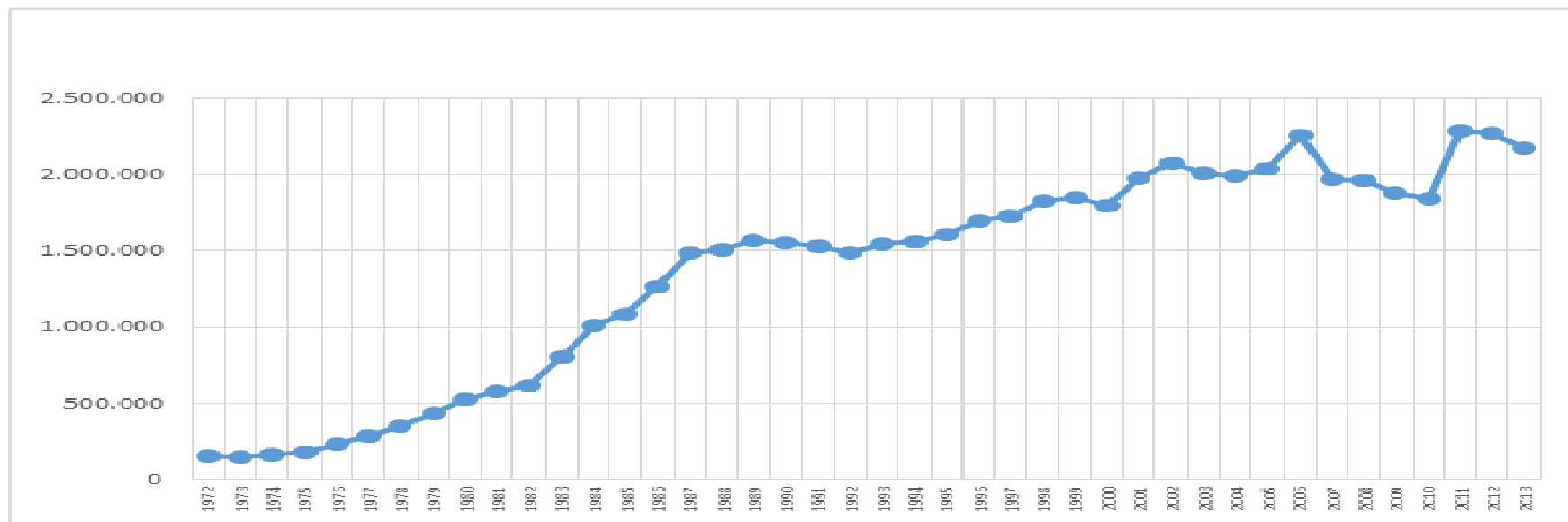


Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento de la población.

Cuadro 1. Evolución de población en España.

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
37.241.868	37.636.201	37.844.910	38.040.699	38.204.159	38.352.991	38.484.642	38.586.591	38.675.049	38.756.648	38.826.297	38.874.573	39.003.524	39.131.966	39.246.833	39.343.100
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
39.430.933	39.525.438	39.639.388	39.802.827	40.049.708	40.476.723	41.035.278	43.296.338	44.009.971	44.784.666	45.668.939	46.239.273	46.486.619	46.667.174	46.818.219	

Gráfico 2. Evolución delincuencia absoluta (delitos+ faltas) en España.



Cuadro 2. Evolución delincuencia absoluta (delitos + faltas) en España.

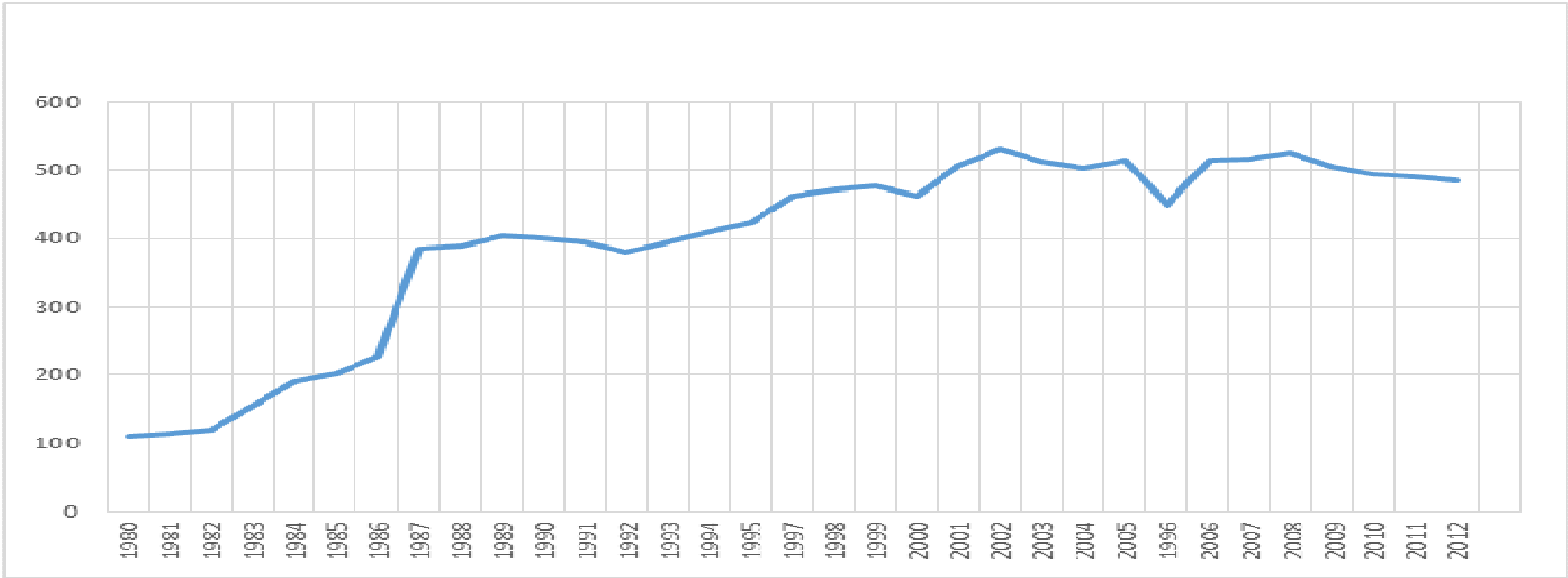
Cuadro 2. Evolución del comercio exterior (datos a 1º de mayo) en España.																					
1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991		
154.170	151.592	165.423	181.140	230.348	284.252	350.423	436.594	529.228	580.219	616.676	806.071	1.008.004	1.085.185	1.263.493	1.487.500	1.506.664	1.565.619	1.553.833	1.530.026		
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.481.117	1.544.975	1.561.888	1.603.182	1.695.248	1.726.346	1.822.763	1.842.518	1.789.989	1.976.405	2.074.293	2.003.665	1.985.595	2.034.816	2.256.470	1.963.011	1.961.866	1.877.664	1.840.896	2.285.525	2.268.867	2.172.133

Hasta 1980 los datos proceden del anuario de 1998 (pág. 75) que aunque proporciona datos hasta 1998 éstos discrepan con los de los siguientes anuarios. Desde 1980 hasta 1990 datos procedentes de anuario 2005 (pág. 182), datos que discrepan con posteriores anuarios desde 1998 porque no contabiliza los delitos de las policías autonómicas. Desde 1990 hasta 2006 los datos proceden del anuario estadístico del año 2006 (Pág. 186). Desde 2007 proceden de Eurostat y de la página electrónica del Ministerio del Interior.

Como se mantiene desde Naciones Unidas, las estadísticas sociales sobre cualquier esfera prestan el máximo de utilidad e información si están vinculadas con las estadísticas de otras esferas. Ello no es menos cierto en lo que respecta a las estadísticas sobre delincuencia. Incluso los análisis rudimentarios requieren datos de series estadísticas distintas de las relativas a la justicia. Si los analistas desean determinar, por ejemplo, la correlación entre el incremento de la criminalidad y el de la población, evidentemente es necesario poseer datos sobre población. Para calcular la tasa de criminalidad (por ejemplo, la cantidad de delitos por 100.000 habitantes) se necesitan, pues, datos sobre población. Las estadísticas sobre justicia penal son de la mayor utilidad si pueden vincularse con estadísticas que describan el contexto social y económico, el medio ambiente en el que opera el sistema de justicia penal. La evolución de delitos relacionados con la población española son los siguientes:

$$\text{Tasa de delincuencia} = \frac{\text{Cantidad de delitos}}{\text{Población total}} \times 100.000$$

Gráfico 3. Evolución tasa de delincuencia por 100.000 habitantes.



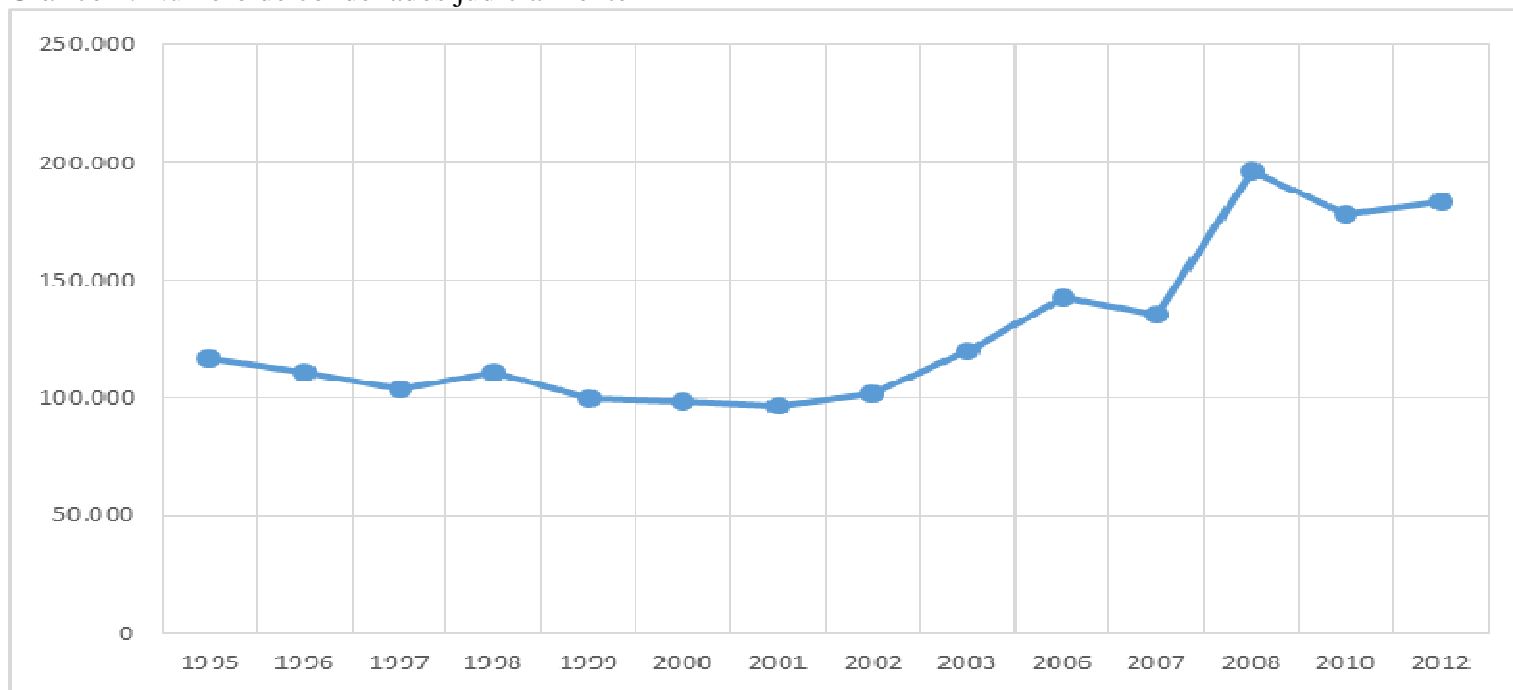
Fuente: Configuración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. Hasta 1980 los datos proceden del anuario de 1998 (pág. 75) que aunque proporciona datos hasta 1998 éstos discrepan con los de los siguientes anuarios. Desde 1980 hasta 1990 datos procedentes de anuario 2005 (pág. 182), datos que discrepan con posteriores anuarios desde 1998 porque no contabiliza los delitos de las policías autonómicas. Desde 1990 hasta 2006 los datos proceden del anuario estadístico del año 2006 (Pág. 186). Desde 2007 proceden de Eurostat y de la página electrónica del Ministerio del Interior.

Cuadro 3. Evolución de tasas de delincuencia por 100.000 habitantes.

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1996	1997
109,808402	114,116725	118,248399	154,952463	190,91691	202,468955	228,616392	385,496609	389,57003	404,219426	400,201183	393,580143	379,739277	394,811495	408,743809	448,89097	461,305

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
470,635924	476,343803	462,639578	507,079587	532,092655	512,61435	503,272217	515,264363	515,136445	515,770063	524,840308	505,890956	494,2248	489,7500329	484,611984

Gráfico 4. Número de condenados judicialmente



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios estadísticos INE.

Cuadro 4. Número de condenados judicialmente

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2006	2007	2008	2010	2012
116.730	110.844	103.649	110.672	99.936	98.500	96.813	102.031	119.980	142.746	135.224	196.143	178.143	183.099

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios estadísticos INE.

Aunque faltan datos suficientes como para correlacionar, asociar o encausar las teorías sociológicas con las cifras de los delitos porque las estadísticas policiales o las encuestas de victimización en España no reflejan características esenciales de los delincuentes, podemos concluir algunas explicaciones teóricas de la delincuencia en base al escrutinio transversal de las teorías. Las principales propiedades de la delincuencia serían:

1. La delincuencia no se explica por las características fisiológicas de las personas, tales como tamaño del cráneo, estatura, peso, color de piel, etc.
2. La delincuencia no es un acto individual o psicopatológico.
3. Una parte de la delincuencia es un producto de las necesidades materiales no satisfechas de la sociedad.
4. Una parte de la delincuencia procede de la configuración estratificacional de la ciudad, que aumentó de manera no controlada con la irrupción de la industrialización.
5. Una parte de la delincuencia es un producto de la anomía o falta de identificación con las normas y valores de una sociedad.
6. Una parte de la delincuencia es un producto de las tensiones originadas entre los objetivos que publicita la sociedad y la falta de medios para conseguirlos.
7. Una parte de la delincuencia es un producto de la falta de control de los agentes socializantes tales como la familia, la escuela y el gobierno.
8. Una parte de la delincuencia es un producto de las asociaciones diferenciales de los jóvenes.
9. Una parte de la delincuencia procede de la deriva o ausencia de normas y valores.
10. La delincuencia es un producto cultural que depende del criterio cambiante de la sociedad y de las leyes.
11. La delincuencia de cuello blanco pasa desapercibida o es tolerada en mayor medida que la de otros grupos sociales.
12. La delincuencia es un producto del aburrimiento de ciertos grupos sociales especialmente los jóvenes.
13. La delincuencia es un producto de hombres por una tendencia biológica y cultural instalada en el patriarcado.
14. La delincuencia es un producto de los jóvenes ya que existe una curva de Bell en la que fluctúa dependiendo de la edad.
15. La delincuencia es un producto de los grupos étnicos diferentes del dominante, como los gitanos.
16. La delincuencia no es un producto de los inmigrantes o extranjeros que llegan a un país con pocos medios para subsistir.
17. La delincuencia es un producto del desempleo.

18. El desempleo mitiga la delincuencia porque hay más personas vigilando sus bienes.
19. La explicación que goza de mayor predicamento en la actualidad es la procedente de Merton que asocia a la delincuencia con las condiciones materiales y con la cultura occidental.

Empíricos:

20. Puede ser erróneo sacar conclusiones sobre la delincuencia en España en base a las cifras oficiales existentes, mientras no exista contrastación con encuestas.
21. Es probable, que las estadísticas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no den cuenta de la delincuencia sino de su actuación.
22. Igual ocurre con los datos procedentes de la Fiscalía y de la Judicatura.
23. Este déficit no es solamente de España sino de todo el área occidental, aunque algunos países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, han reaccionado en este sentido y han adecuado el conocimiento de la delincuencia en su país.
24. En España si cabe es más complicado el estudio de la delincuencia por la variedad de policías autonómicas que han irrumpido en la escena en los últimos años y cuyas estadísticas no han sido incorporadas por diversas circunstancias.
25. Si con todas las salvedades, se utilizan estas estadísticas procedentes del año 1980, y si hablamos desde una cifra global, la delincuencia ha crecido en España si se contempla tanto desde el ángulo absoluto como del relativo.
26. Aunque a primera vista, la delincuencia se encuentra supeditada a las leyes, al final la situación no cambia tanto, ya que los mismos delitos son englobados en diferentes sanciones, lo que hace que aumente o disminuya la pena, pero que la cantidad de delito permanezca invariable.
27. La delincuencia dependen claramente del género, es masculina y no ha variado en los últimos años, ya que los ratios entre hombres y mujeres son del orden de 10: 1 y se mantienen prácticamente constantes
28. La delincuencia varía con la edad, tiene el punto más alto en torno a los 29 años y luego desciende. Aunque cronológicamente ha bajado la edad del delito.
29. Existe una población étnica ampliamente perjudicada por la situación social y son los gitanos y las gitanas. El caso no es que cometan menos delitos, sino que por su situación de marginalidad están obligados a cometerlos. La población de las prisiones en España tienen una tasa muy altas de gitanas, hasta el punto que la población penitenciaria femenina española está formada casi en su

totalidad por gitanas.

30. La delincuencia en España está asociada a las condiciones socioeconómicas, principalmente al desempleo, lo que hace que podamos etiquetarla como una delincuencia de “oportunidad”.
31. Existe una amplia delincuencia oculta que no queda reflejada en las estadísticas oficiales y que podría rondar el 20 por ciento.

Los caminos a seguir en posteriores estudios deberían orientarse hacia el análisis de unas estadísticas más completas que necesariamente deben proceder del Ministerio del Interior y que deberían incluir las cifras de la policía local o municipal, para lo cual habría que pedir al Ministerio de Interior la elaboración de estas cifras en sus anuarios, así como de las policías autonómicas. Mención aparte, es la utilización de encuestas de victimización y de autoinculpación, en donde habría que solicitar, de nuevo, al citado Ministerio que encargase los pertinentes estudios a nivel nacional a instancias como el Centro de Investigaciones Sociológicas o a un centro estadístico especializado dentro del propio organismo como ha ocurrido recientemente en países como Francia. Esto supondría no solo un gran adelanto sino la incorporación de España a los países más avanzados en esta materia como son la mayoría de los que forman la OCDE. En los últimos años se ha dado un gran paso adelante con la publicación de los anuarios de manera electrónica y con facilidades para incorporarlos a las hojas Excel.

PARTE II

Capítulo 2. Teorías y métodos de la delincuencia

2.1. Estudio teórico de la delincuencia.

En el ámbito de la sociología, la delincuencia se ha estudiado como un fenómeno de desviación de las normas que se establecen en una sociedad sometida a la temporalidad y a la cultura imperante en cada momento. La principal influencia en este sentido proviene del estudio seminal de Durkheim sobre la desviación, denominándola como una “patología social” que es universal, que es relativa, y funcional. En su análisis pionero sobre la desviación según Macionis y Plummer¹², llegó a la conclusión de que no existe nada anormal en la desviación, porque cumple cuatro funciones esenciales para la sociedad: 1. Genera y refuerza el acuerdo social establecido en torno a la cultura porque redefine continuamente lo que está bien y lo que está mal, si no existiera el delito no podrían reforzarse el hecho social. 2. Establece un proceso continuo de adecuación del hecho social porque la desviación va estableciendo nuevas vías según progresa la sociedad y esto hace que la voluntad general vuelva a generarse sobre pautas nuevas, sino acabaría por perecer el alma colectiva que es independiente de actores individuales. 3. Ayuda a que se establezca la cohesión social poniendo de acuerdo a los que forman una sociedad en sus aspectos más extremos sobre los que nadie puede estar en contra, construyendo una solidaridad colectiva frente al ultraje. 4. Contribuye y fomenta el cambio social porque los actos que transgreden las normas sociales invitan a reflexionar sobre la naturaleza de esas normas y sobre la conveniencia de seguir manteniéndolas. Las conductas desviadas presentan alternativas al orden vigente que pueden empujar en la dirección de un cambio en las normas.

“En primer lugar, el delito es normal porque una sociedad exenta del mismo es del todo imposible ...Ahora bien, suponiendo que esta condición pudiera realizarse efectivamente, el delito no desaparecería por ello, tan sólo cambiaría de forma; porque la causa misma que cegaría así las fuentes de la criminalidad abriría inmediatamente otras nuevas”¹³

Una característica fundamental de la desviación es que se tiende a tomar la naturaleza de la delincuencia como algo aceptado, y aunque se sabe más o

¹² Macionis J. y Plummer K. (1999). Sociología. Madrid. Prentice Hall. Pág. 209.

¹³ Durkheim E. (1984). Las reglas del método sociológico. Madrid. Morata. Pág. 85.

menos lo que es y lo que no es un comportamiento aprobado y respetable, es difícil establecer una noción precisa y verdadera de la desviación. ¿Es desviación llevar un piercing en la nariz? ¿Utilizar los servicios de una prostituta? ¿Es desviación vivir con alguien sin el beneficio del matrimonio? ¿Es emborracharse los fines de semana? ¿Conducir a más de ciento treinta por hora? La perspectiva sociológica busca desenredar las complejidades que rodean al tema de la desviación, definiéndola como cualquier comportamiento que los miembros de un grupo social establecen como una violación a sus normas, normalmente morales, religiosas o políticas. Este concepto se aplica tanto a los actos delictivos (comportamiento que toda la sociedad ha declarado formalmente ilegal) como a los actos no delictivos que los miembros de un grupo ven contrarios a la ética, inmorales, raros, enfermizos, o de cualquier otra forma que se encuentre fuera de los límites de respetabilidad o que permita funcionar adecuadamente a la sociedad¹⁴.

Desde la perspectiva sociológica se cuestionan diversos conceptos populares falsos sobre la desviación. Uno es que ciertos actos son inherentemente desviados, sin embargo, el que un acto sea considerado como desviado o no, depende de la sociedad y de las circunstancias sociales. Una amplia gama de comportamientos puede considerarse 'irregular' o 'delictivo' porque viola las prescripciones legales o normativas. Propuestas, de que la sociedad se basa en un consenso moral o que el derecho penal es un simple reflejo de ese consenso, son también discutibles. La escuela interaccionista de sociología, por ejemplo, sostiene que no hay ningún consenso subyacente o duradero en la sociedad. Por el contrario, el delito es visto como consecuencia de la interacción social: es decir, como resultado de un proceso de negociación que involucra al desviado, a la policía, a los tribunales, a los abogados y a los legisladores. La mayor parte de las sociedades tienen normas que prohíben el asesinato, el robo, el rapto, la corrupción y otras formas de desviaciones delictivas evidentes, aunque existen excepciones a estas reglas. En principio, matar a otra persona es un crimen, pero matar al enemigo en una guerra no lo es, como tampoco matar en defensa propia. Consumir y traficar con drogas es un serio delito en algunos países, mientras que en otros su consumo está permitido. Igual ocurre con la prostitución, con la homosexualidad, con el aborto, o con la seguridad vial. Por lo tanto, debido a que las normas difieren en el tiempo y de una sociedad a otra, lo que se considera como desviación también varía¹⁵.

Los individuos que componen una sociedad llegan a aceptar las normas básicas a través del control social que implica sanciones y castigos por una conducta que no cumple con una norma social. Las leyes componen el núcleo central del orden social y suelen estar estructuradas en torno a varias directrices básicas que determinan lo valioso para la convivencia. En las

¹⁴ Light, Keller y Calhoun (1991). Sociología. Madrid. McGraw Hill.

¹⁵ Box S. (1986). Changing conceptions of deviance, official data and deviants. In Box S. (Ed.). Deviance, reality and society. London. Holt, Rinehart and Winston. Pág. 1-5.

sociedades occidentales estos elementos son la vida humana, la propiedad privada y colectiva, el honor, la libertad, la política y la administración. En torno a ellos se estructura la cohesión social y se instauran los principios básicos para su funcionamiento. Las normas guían prácticamente todo el rango de actividades humanas, de manera que el concepto de desviación cubre un espectro igualmente amplio. Existen, por ejemplo, normas en el campo de la sexualidad o en el de la religión, y quienes violan dichas normas se transforman automáticamente en perversos o herejes, respectivamente. Como es obvio, en algunos casos, la desviación apenas produce reacción alguna, mientras que en otros puede dar lugar a respuestas severas por parte de la sociedad. Nadie presta prácticamente ninguna atención al detalle de ser zurdo pero la sociedad es más severa con quien conduce bajo los efectos del alcohol o maltrata a su mujer o a sus hijos. La desviación no implica en todos los casos una acción o una opción voluntaria¹⁶.

La mayor parte de los ejemplos de desviación o disconformidad son casos en los que alguien rompe una norma social perjudicando a terceros, como el que roba en el supermercado, el que maltrata a un animal o el que conduce borracho. Pero también se suele considerar como desviados a quienes cumplen con las normas superando las expectativas. Tanto en unos casos como en otros, cuando se rompe la norma perjudicando a terceros o cuando existe un exceso en el cumplimiento de las leyes y las normas sociales, existe algún grado de diferencia. En todas las sociedades hay reglas y normas, y en todas las sociedades sus miembros ejercen cierto control social, que es una forma de presión social informal y difusa, que tiene como objetivo evitar la conducta desviada. Las alabanzas y las críticas, por ejemplo, forman parte de un control social, pues pueden animar a seguir rumbos de acción que parecen apropiados o a desistir de otros que pueden ocasionar muchos problemas. En casos más serios, la sociedad reacciona de otro modo más formal (y contundente). Aquí es cuando interviene el sistema jurídico y penal, esto es, el conjunto de instituciones policiales, judiciales y penitenciarias que se pone en funcionamiento cuando se produce una violación de la ley¹⁷.

Para Gelles y Levine¹⁸, desviación en la forma más simple es una violación de las reglas sociales. Ocurre cuando alguien traspasa los límites de lo correcto. Pero no todas las violaciones de las reglas sociales están identificadas y etiquetadas como desviantes. Algunas son tan comunes que casi nadie las nota. Por ejemplo, mucha gente ocasionalmente dice alguna pequeña mentira inocente cuando quieren librarse de un compromiso social (tuve un resfriado u olvidé que tenía otras cosas pendientes) o consideran un

¹⁶ Maconis J. y Plummer K. (1999). *Sociología*. Madrid. Prentice Hall.

¹⁷ Becker (1973). *Outsiders*. New York. The Free press.

¹⁸ Gelles y Levine (1996). *Sociología*. Madrid. McGraw Hill

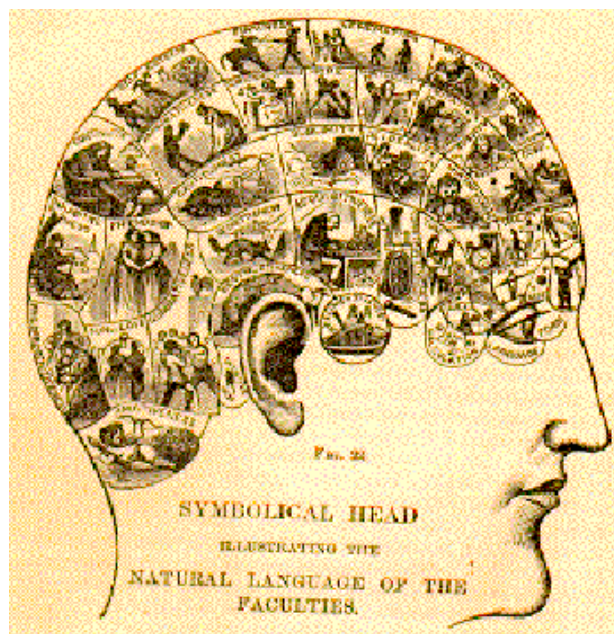
tanto extraños a los vegetarianos, pero no los condenan como locos o criminales. Otras conductas no convencionales se hacen a un lado como triviales, excéntricas, bohemias, accidentales y no peligrosas. Desde este punto de vista se puede definir el término desviación como la violación de normas sociales que atentan contra un gran número de personas o gente en una posición dada para influir sobre los juicios sociales. Desviación será cualquier acto que perturba las expectativas sociales, que provoca la desaprobación social y que hace que la gente exclame que hay que hacer algo. La desviación social es universal y cada sociedad establece leyes y reglamentos, sufre violaciones de estas leyes y, de un modo o de otro, castiga a los infractores.

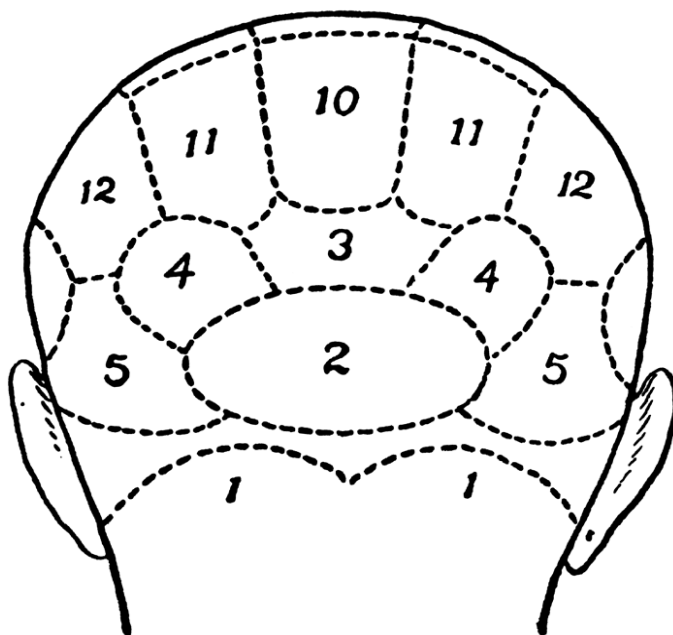
2.1.1. Teoría frenológica.

Las primeras teorías en abordar el problema de la delincuencia, procedentes del siglo XVIII, se basaron en la apariencia física de las personas. La fisiognomía de “physis” (naturaleza) y “gnomon” (juzgar, interpretar) es la más antigua de las explicaciones del comportamiento delincuente. Esta teoría es considerada habitualmente como una ciencia folklórica, basada en la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse el carácter o personalidad de ésta. Sustentándose en la creencia de que la delincuencia tiene unos antecedentes en la apariencia física es quizás el enfoque teórico más desacreditado de todos los que existen. El principal promotor de la fisiognomía fue el pastor suizo Johann Caspar Lavater (1741-1801), gran amigo de Goethe. Sus influyentes ensayos sobre la materia fueron publicados en alemán en el año 1772 y su libro *Fragmentos Fisionómicos* de 1775 gozaron de gran popularidad, siendo traducidos al francés y al inglés. En sus libros recogía la creencia popular de que existía una causalidad entre rasgos faciales y delitos. Otro autor al que se le suele asociar con esta orientación es el italiano Cesare Beccaria (1738 - 1794), también conocido como Cesare Bonesana Marchese di Beccaria, literato, filósofo, jurista y economista, el cual, después de algunos ensayos de economía, publicó la obra *De los delitos y las penas* en 1764, un breve escrito que tuvo mucho éxito en toda Europa, particularmente en Francia, donde obtuvo el aprecio entusiasta de los filósofos enciclopedistas.

Poco después e influida por la anterior surgió la frenología (conocimiento de la mente). En ella se afirmaba que era posible determinar el carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. Se trataba de una pseudociencia muy parecida a la fisiognomía porque mantenía que son determinadas partes del cerebro las causantes de algunos comportamientos desviados, siendo su principal valedor el anatomista alemán Franz Joseph Gall, a través de sus publicaciones *Introducción al*

curso de fisiología del cerebro de 1808 y *Anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular* de 1810 en donde establecía una correlación entre las funciones cerebrales y las estructuras externas del cráneo, de las que dependería el comportamiento del individuo. Algunas particularidades de la cabeza como algunas características personales eran los causantes del comportamiento desviado; existiendo veintiséis facultades dentro del cerebro que se podían agrupar en tres regiones o compartimentos, una especializada en el amor, otra basada en sentimientos morales, y una tercera en facultades intelectuales; la violencia se encontraba ubicada en la primera región, aunque podía ser afectada por la segunda región o incluso por la tercera.





Ilustraciones obtenidas a través de Internet.

Ya en el siglo XIX, una especie de compilación de las dos teorías anteriores fue la realizada desde el estudio de todos los rasgos anatómicos posibles por un médico penitenciario italiano llamado Cesare Lombroso en su obra: “El delito. Sus causas y Remedios” de 1876 en lo que se dio en llamar el positivismo criminológico. Según este autor, “el delito era el resultado de tendencias innatas, de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales (asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.). Sin embargo, en sus obras se mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión”¹⁹. A través del estudio de 66 criminales, 832 hombres y mujeres ex delincuentes y 390 soldados italianos normales, lanzó la idea de que los delincuentes tenían unos rasgos físicos característicos como eran: estrechos de frente, mandíbulas y pómulos prominentes, orejas separadas, vello abundante y brazos extremadamente largos, es decir un tipo de físico muy parecido al de los simios “A la vista de aquel cráneo, me

¹⁹ Lombroso C. (1902).El delito. Sus causas y remedios. Traducción de Bernaldo Quirós. Madrid. Victoriano Suárez. Pág. 21

pareció ver de repente, iluminarse como una explanada inmersa bajo un cielo radiante, el problema de la naturaleza del criminal, un ser atávico que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y de los animales inferiores”²⁰. Aunque las tesis de este autor alcanzaron una gran popularidad en su momento, al poco tiempo se mostraron como erróneas toda vez que los rasgos físicos que describía como típicos de los delincuentes se encontraban aleatoriamente repartidos en el conjunto de la población hasta el punto que era imposible distinguir al delincuente del que no lo era; el problema residía en que los datos estadísticos de Lombroso procedían de una muestra no representativa de la población reclusa de Italia, por lo que al realizar estudios más rigurosos no se encontraron diferencias sustantivas entre la población reclusa y la gente normal, con lo cual la teoría de que los violentos nacían, no se hacían, cayó en descrédito.

Dentro de esta teoría cabe mencionar a la denominada como escuela positiva, iniciada después de que un grupo de juristas retaran a otros juristas del campo de la criminología para poder contrastar sus ideas. De acuerdo a Ferri²¹, la escuela positiva consistió en estudiar al delito, primero en su génesis natural, y después en sus efectos criminológicos, para adaptarlo jurídicamente a las causas que lo producen y a los remedios que supuestamente serían eficaces para evitarlos. Esta escuela fue de alguna manera una reacción a los excesos de la escuela clásica, basada en el positivismo. Todo se debió al abuso de la dogmática, al olvido del hombre delincuente a sus creencias de haber agotado la problemática jurídico-penal. El principal medio de difusión de esta escuela fue la revista "Archivi di Psichiatria, Scienze Penali e Antropologia Criminale". La existencia de esta corriente ha sido agitada y fecunda, llena de aciertos y de errores y como consiguió muchas adhesiones también acumuló muchas críticas. Por ello algunos autores explican que la conducta delincuente positiva consiste únicamente, en el estudio antropológico del delito, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal, y de los de más eficacia entre los remedios sociales y jurídicos que se ofrecen. La ciencia de los delitos y de las penas se suponía que consistía en una exposición doctrinal de silogismos, dados a luz por la fuerza exclusiva de la fantasía lógica.

Esta escuela gozó de cierto prestigio por el descrédito de las teorías anteriores y por intentar encuadrar a la delincuencia dentro de la ciencia de la observación positivista que defendían autores como Comte y Saint-Simón, por el que toda ciencia debía atenerse a los principios de la ciencia empírica basada en la observación y en la racionalización de lo observado, pero también debería basarse en el derecho penal y en los estudios penitenciarios de la época, hasta poder fundar una escuela que podría

²⁰ Cit. En Cohen S. (1966). Visiones de control social. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias. Pág. 50.

²¹ Ferri E. (1913). The positive school of criminology. Chicago. Kerr and Co.

denominarse como sociología criminal, y así esta ciencia, aplicando el método positivo al estudio del delito, del delincuente y del medio, no haciendo otra cosa que llevar a la ciencia criminal clásica el método de los últimos avances hechos por la ciencia del hombre y de la sociedad, renovada por las doctrinas evolucionistas. Dentro de los representantes de esta supuesta escuela si es que se pudiera denominar así estaría autores tan destacados como Ferri y Garofalo. Los postulados de este enfoque son:

- La escuela positiva se identifica por su método riguroso.
- La escuela positiva debe estudiar el delito como un hecho de la naturaleza.
- La escuela positiva debe cambiar la responsabilidad moral por la responsabilidad social.
- La escuela positiva mantiene que aunque no exista responsabilidad moral, no se puede desechar el delito.
- La escuela positiva sustituye la pena por la sanción, al reconocer la responsabilidad subsidiaria de la sociedad.
- La escuela positiva no restablece el orden jurídico, sino que tiene por misión la de combatir la delincuencia en tanto que fenómeno social.
- La escuela positiva sostiene que imponer sanciones pertenece al estado a título de defensa social.
- La escuela positiva estudia la tipología de las personas sociales que llegan a ser delincuentes.

2.1.2. Teoría fisiológica.

La hipótesis de que la biología puede tener efectos sobre el comportamiento delincuente de una persona implica contemplar la posibilidad de que ciertos rasgos biológicos puedan ser desencadenantes de comportamientos violentos o antisociales. Desde esta versión se está intentando encadenar estructuras genéticas específicas con tipos de comportamientos²². Estas teorías conocidas como biosociales, insisten en que es la interacción entre las características biológicas y el medio ambiente social la causa del acto delincuente, más que achacar a una sola condición biológica el posible resultado de la acción. Los avances en genética, bioquímica y neuropsicología han renovado el interés de los científicos por las explicaciones biológicas de la desviación²³. Las investigaciones sobre la biología y la conducta indagan si existen nexos de unión entre una y otra y

²² Williams K. (2008). Textbook on criminology. Oxford. Oxford University Press. Pág. 153.

²³ Plomin R., DeFries J, Knopik S. and Neiderheiser J. (2013). Behavioral Genetics. 6º edition. Worth Publishers, New York.

cómo los procesos genéticos interactuando con los procesos medioambientales predisponen a un comportamiento antisocial²⁴. La conclusión parece apuntar a que determinados rasgos genéticos combinados con determinadas experiencias sociales podrían explicar determinadas conductas, o el hecho de que ciertas formas de desviación como la patología mental tenga un origen biológico. Algunas investigaciones en el campo de la biología social podrían explicar ciertamente algunos hechos importantes asociados a la delincuencia, como por ejemplo, el que el 90 por ciento de los crímenes violentos y homicidios sean responsabilidad de los hombres. La investigación biológica basada en los componentes hormonales de la agresión, diferentes en el hombre y en la mujer apuntaría a que los hombres parecen más predispuestos que las mujeres a emplear la violencia por efectos de la testosreina. En definitiva, aunque no se trata de volver a las teorías más primitivas, la consideración de que el comportamiento es la interacción entre factores biológicos y ambientales se ha consolidado mínimamente como una hipótesis prometedora²⁵.

El uso de las características fisiológicas para explicar la delincuencia fue iniciado por Sheldon, a través de 200 jóvenes de un centro de tratamiento y reeducación de Boston, estudiados entre 1939 y 1949, en los que pareció descubrir la existencia de una clara asociación entre los promedios del somatotipo y la delincuencia. A partir de la embriología y más concretamente del blastodermo o unidad celular de la que procede todo individuo y que está compuesto por capas que de dentro hacia fuera son conocidas como endodermo, mesodermo, y ectodermo; establecía que la constitución corporal podía ser utilizada para explicar la predisposición al delito, de manera que su conclusión fue que la probabilidad de delinquir era mayor entre las personas de constitución muscular y atlética, teniendo en cuenta que el cuerpo humano se compone de tres niveles físicos: endomórfico (vísceras digestivas pesadas y muy desarrolladas, con estructura somática relativamente débil, bajo peso específico, tendencia a la gordura, formas redondeadas, miembros cortos, piel con vello y suave); mesomórfico (gran desarrollo de las estructuras somáticas como huesos, músculos, tejido conjuntivo, alto peso específico, duro, erecto, fuerte y resistente, tronco grande, pecho consistente, manos grandes); y ectopomórfico (cuerpo frágil, alargado, delicado, extremidades largas y delgadas, músculos pobres, tórax chato, huesos poco consistentes y finos, hombros caídos, cara pequeña, nariz afilada, y pelo fino).

En esta vertiente destacan los estudios llevados a cabo por el matrimonio S. y E. Glueck²⁶ en su estudio de 500 personas violentas (grupo

²⁴ Beaver (2013). Biosocial criminology. Kendall-Hunt. Dubuque.

²⁵ Raine A. (2002). Biosocial studies of antisocial and violent behavior in children and adults. *Journal of Abnormal Child Psychology*. Págs. 311-326.

²⁶ Glueck S. and E. (1956). *Physique and delinquency*. New York. Harper.

experimental) y 500 personas no violentas (grupo de control), incluyendo variables como edad, inteligencia media, factor étnico-racial, y residencia en áreas desfavorecidas. Los resultados, utilizando la tipología de Sheldon con el añadido de un cuarto grupo (delincuentes equilibrados, en el que el factor físico era un componente más de la desviación pero no el principal) mostraron que el 60% de los delincuentes eran predominantemente mesomórficos, una proporción muy superior a la que se daba en el grupo de control. Otra parte del estudio se focalizó en el estudio de 67 rasgos de personalidad y 42 factores socioculturales, al objeto de conocer cuál de ellos se encontraba más asociado al delito. La conclusión fue que los individuos mesomórficos exhibían unos rasgos especialmente idóneos para la comisión de actos violentos: fortaleza física, energía, insensibilidad, tendencia a expresar por la acción sus tensiones y frustraciones, así como para liberarse de ciertos frenos que inhibían las conductas antisociales, como sentimientos de inadecuación, acusado sometimiento a la autoridad, inestabilidad emocional, etc.

Los tres factores socioculturales más importantes que se hallaban asociados con la delincuencia en los individuos isomórficos eran: desatención de las actividades domésticas ordinarias, ausencia de diversiones y actividades de recreo en familia y falta de esparcimiento en el propio hogar. No obstante, y a pesar de que el trabajo de los Glueck fue meticuloso y sólido no pudo librarse de numerosas críticas y reservas, dado que las características de la muestra del grupo delictivo impedían generalizaciones válidas para el total de la población; además las críticas señalaron una cierta imprecisión en el proceso de asignación de tipos, por lo que algunos expertos llegaron a calificar su trabajo como de nueva frenología.

Por otra parte, desde la genética se han estudiado diversos casos que podría poseer una cierta correlación con variables fisiológicas, por ejemplo se han estudiado la propensión de cometer delitos de hijos adoptados de padres naturales delincuentes (predisposición congénita) y padres adoptivos no delincuentes, en donde un estudio desarrollado en Suecia dio resultados positivos. Las complicaciones que se pueden dar en el embarazo como malformación neuronal fetal al final de los tres primeros meses en tanto que un desarrollo anormal del cerebro podrían ser también constitutivas de comportamiento antisocial. Los efectos de una exposición fetal al consumo del alcohol o del tabaco podían desencadenar un déficit cerebral provocado por los efectos neurotóxicos de dos sustancias del tabaco como el monóxido de carbono y la nicotina que podrían conducir a un comportamiento antisocial o delictivo. También, las complicaciones obstétricas al nacer junto con un medio ambiente familiar complicado podría disponer al individuo a cometer actos violentos o antisociales²⁷.

²⁷ Duster T. (2003). *Backdoor to eugenics*. New York. Routledge.

Otro acercamiento a los potenciales efectos genéticos sobre conducta delictiva se puede encontrar en el estudio de anomalías cromosómicas - casos en que hay alguna anomalía en el desarrollo del número de cromosomas. Normalmente, hombres y mujeres comparten 46 cromosomas en 23 pares, de los cuales uno es un par de cromosomas sexuales: la Y denota el cromosoma masculino y el X el femenino. En circunstancias normales los hombres tienen un par XY y las mujeres un par XX. La investigación en los primeros años de la década de los sesenta encontró una nueva configuración de mal cromosómico: un hombre con una estructura cromosómica XYY (no debe confundirse con el síndrome de Klinefelter que se refiere a los hombres con un cromosoma extra X) denominado “síndrome supermacho”. Tales anomalías son raras, pero han sido vinculados con diversos trastornos conductuales. La investigación en la década de 1960 fue capaz de identificar un número de XYY responsable de algunos delitos graves²⁸.

Dentro del campo fisiológico son de destacar también, los efectos de los neurotransmisores, las hormonas, y el sistema nervioso central. Los neurotransmisores son partículas químicas que permiten la transmisión de impulsos eléctricos dentro del sistema nervioso central, posibilitando el proceso de información, los niveles de tres de estos transmisores relacionados con la conducta antisocial son la serotonina, la dopamina, y el noradrenalina. La serotonina reduce la agresividad mediante la inhibición de respuestas a estímulos emocionales externos, mientras que la dopamina y norepinefrina contrarrestan el impacto inhibitor de la serotonina. Normalmente, los tres están en alguna especie de equilibrio, pero una perturbación de este equilibrio puede llevar a conductas agresivas o impredecibles. Diversos experimentos han mostrado cómo un bajo nivel de serotonina podría inducir en la delincuencia y cómo el alcohol, en tanto que inductor enzimático, podría afectar las rutas metabólicas de todos los neurotransmisores provocando episodios de violencia y de conducta antisocial. Otras pruebas han ido dirigidas al análisis del ADN de la sangre para mostrar cómo los defectos genéticos en la dopamina y la serotonina provocarían comportamientos violentos. También se ha podido comprobar cómo determinados cambios en el ambiente pueden afectar a los niveles de neurotransmisores, por ejemplo cambios en la dieta, o el llevar una vida muy estresada como la que se da en las grandes ciudades.

Las hormonas han constituido un objeto de estudio asociado a la delincuencia a partir del siglo pasado y de la multiplicación de estudios que han tratado de correlacionar el comportamiento humano desviado con procesos hormonales o endocrinos patológicos desde determinadas disfunciones de las glándulas de secreción internas, dada la aparente conexión de éstas con el sistema neurovegetativo, y del sistema

²⁸ Newburn T. (2007). Criminology. Willan Publishing.

neurovegetativo con el comportamiento instintivo-afectivo. La testosterona, en tanto que la principal hormona sexual masculina, aunque también producida por mujeres en cantidades mucho más pequeñas, ha despertado la curiosidad de la comunidad científica por sus posibles efectos sobre la agresividad. No obstante las conclusiones no parecen que sean uniformes, sino en muchos casos contradictorias, ya que, aunque los efectos de la hormona en la conducta de diversos animales ha sido probada, en el caso del ser humano quedan por contestar algunos interrogantes cómo el hecho de si los altos niveles de esta hormona puedan causar el comportamiento violento, o más bien si es al revés, es decir si ciertos tipos de comportamientos agresivos pueden desencadenar un aumento de la testosterona²⁹.

Por otra parte, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo juegan un papel importante en las conductas violentas, el primero porque contiene neuronas y sistemas alojados en el interior del cerebro y en la espina dorsal, concretamente, el cerebro está constituido por dos hemisferios divididos en cuatro subhemisferios que reciben el nombre de frontal, temporal, parietal, y occipital; especialmente interesante en lo que se refiere a los comportamientos agresivos y violentos son los lóbulos frontal y temporal, ya que se encuentran implicados en gran parte de los impulsos y emociones que emanan desde el cerebro, de manera que las irregularidades dentro del lóbulo frontal influye en las cuestiones neurofisiológicas, mientras que el lóbulo temporal está especializado en las emociones y las expresiones; además, las disfunciones del lóbulo temporal pueden caracterizar a personas violentas, mientras que disfunciones en el otro lóbulo pueden caracterizar agresiones sexuales.

El sistema nervioso autónomo, controla muchas de las funciones involuntarias del cuerpo, tales como la presión sanguínea, las actividades del corazón e intestinales, o los niveles de hormonas; por ello juega un papel primordial ya que de él dependen determinadas reacciones del cuerpo humano que escapan al control de la voluntad, especialmente en situaciones de lucha o huida porque prepara al cuerpo para un máximo rendimiento acelerando algunas de sus funciones fisiológicas (dilatación de pupilas, estimulación de las glándulas de la sudoración, aceleración del pulso cardiaco). Precisamente los detectores de mentiras están basados en la medición de estas reacciones para determinar si se está mintiendo o no, la teoría es que al igual que los niños, la mayor parte de la gente se siente condicionada para anticipar el castigo cuando dicen una mentira. Por ejemplo, la reacción de ansiedad en la anticipación de un castigo ha sido descrita como el primer agente de socialización en los niños³⁰.

Una desorganización eléctrica en el cerebro puede conducir a convulsiones recurrentes, una condición conocida como epilepsia

²⁹ García Pablos A. (1988). Op. Cit. Pág. 327.

³⁰ Vold G. Et alt. (1998). *Theoretical criminology*. Oxford. Oxford University Press. Pág. 81.

(Lombroso fue quizás el primer erudito importante para establecer un enlace entre la epilepsia y el delito). Estimaciones generales sugieren que tal vez 0.5 por ciento de la población sufre de epilepsia. Investigación en prisiones ha encontrado mayores niveles de asociación que el resto de la población. Si en realidad existe alguna asociación, la pregunta que surge es qué vínculo puede existir con la delincuencia. Se han explorado dos hipótesis principales: la idea del automatismo en el cual están comprometidos delitos sin que el autor sea consciente de ello y la posibilidad de que ciertas formas de epilepsia estén vinculadas con mayor agresividad y violencia. En relación a la investigación de esta última, no existe prácticamente evidencia de una relación concreta de delinquir automáticamente durante las convulsiones

También han resultado especialmente reveladoras y concluyentes las investigaciones encaminadas a determinar los efectos del alcohol y las drogas en el comportamiento violento, hasta el punto de que por ejemplo cada día parece haber más evidencia que el efecto del alcohol no solo se produce porque actúa como desinhibidor, sino que podría tener mayor intensidad a través del efecto que posee sobre el sistema endocrino, y el efecto selectivo que tiene sobre determinadas personas, no obstante, a pesar de que existe una demostrada evidencia de que el alcohol acentúa la violencia, todavía no se han determinado sus causas con suficiente claridad. Con respecto a las drogas están suficientemente comprobado que pueden tener una asociación biológica con la delincuencia sobre todo determinadas sustancias como los opiáceos, las anfetaminas, la cocaína y los alucinógenos.

La disfunción cerebral mínima (CDM), término comúnmente utilizado en relación con alguna disfunción cerebral como el déficit de atención e hiperactividad que se caracteriza por la impulsividad (el actuar sin pensar en las consecuencias), hiperactividad (actividad excesiva) y falta de atención (problemas para concentrarse). Los niños con CDM experimentan frustración y ésta puede conducir a la agresión y la violencia porque existe una asociación con causas biológicas como una predisposición genética, daño cerebral e inmadurez neurológica. Sin embargo, en este tipo de estudios existen limitaciones importantes para evaluar su impacto. En primer lugar, mucho trabajo en esta área se ha centrado en hombres, por lo tanto, es limitada en su aplicación general. En segundo lugar, mientras que puede haber alguna relación entre disfunción cerebral y ciertos tipos de comportamiento, esto no es lo mismo que decir que uno es la causa de los otros y excluir otros factores sociales.

2.1.3. Teorías psicológicas y psiquiátricas.

Mientras que algunos científicos han considerado las características biológicas de las personas para explicar los comportamientos desviados, otros han puesto su atención en el perfil psicológico o psiquiátrico del indi-

viduo. Al igual que en el caso de las explicaciones biológicas, las que provienen de la psicología suelen estar centradas en los rasgos individuales. El agente causal es aquí la personalidad del individuo; o mejor dicho, los problemas en la formación de la personalidad. Aunque algunos rasgos de la personalidad son hereditarios, la mayor parte de los psicólogos cree que, antes que la herencia, las experiencias sociales son más importantes en la formación de la personalidad. En concreto, muchos psicólogos piensan que la conducta desviada es el resultado de una socialización fallida.

La personalidad se puede definir como el complejo grupo de atributos emocionales y de comportamientos que permanecen relativamente constantes aunque el individuo cambie de situación o contexto. Los principales modelos que han incluido a la personalidad como una de las variables explicativas de la delincuencia proceden principalmente de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología. La psiquiatría, en tanto que una especialidad de la medicina que se ocupa del hecho psíquico morboso, es decir del enfermo psíquico, ha tendido a la adopción de una perspectiva clínica, y a contemplar el comportamiento violento como un producto de alteraciones de la personalidad procedente de enfermedades mentales. Desde este ámbito del saber, se han explorado las disfunciones mentales que podrían originar la conducta desviada, principalmente el delirio, la histeria, y algunas otras deficiencias cerebrales. Según Kaplan et alt.³¹, los indicadores comunes de peligrosidad son:

- Alto grado de intentos de agresión
- Presencia de una víctima
- Amenazas abiertas y frecuentes
- Plan concreto
- Acceso a instrumentos de delincuencia
- Historia de pérdida de control
- Ira crónica, hostilidad o resentimiento
- Disfrute al provocar o ver provocar daño
- Falta de compasión
- Considerarse a sí mismo una víctima
- Resentimiento contra la autoridad
- Maltrato o abandono en la infancia
- Pérdida del cariño y afecto en el hogar
- Pérdida de los padres a una edad temprana
- Juego con fuego, mojar la cama y crueldad con animales
- Actos violentos anteriores
- Conducción temeraria

³¹ Kaplan H.I. et alt. (1996). *Tratado de psiquiatría*. Madrid. Ediciones Científicas y Técnicas.

La confusión, que tiene lugar cuando uno no puede resolver la ambivalencia normalmente presente que crea una actitud dividida entre amor y odio; el aburrimiento, en tanto que estadio de insatisfacción y no disposición a actuar, y que se caracteriza porque el tiempo pasa despacio, de forma similar a como sucede en la depresión, pero la sensación es de vacío o apatía, por lo que algunos casos de delincuencia en adolescentes, que aparentemente no están motivados, pueden presentar un intento de vencer el aburrimiento; la impulsividad, una de las más estudiadas en su relación con las conductas antisociales que se manifiesta en aquellas personas que actúan sin pensar, que son impacientes, y que buscan la gratificación inmediata, con una tendencia a ser alocados, especialmente dañina cuando se tiende a juzgar en objetivos de corto alcance frente a objetivos de largo alcance³².

La psicopatía o desorden de personalidad antisocial, términos que en los últimos tiempos se ha utilizado como conceptos sinónimos, y que según la Asociación Americana de Psiquiatría, se podrían definir como “individuos que están básicamente sin socializar y cuyos patrones de conducta les llevan a continuos conflictos con la sociedad. Son incapaces de una lealtad relevante hacia individuos, grupos y valores sociales. Son extremadamente egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos e incapaces de sentirse culpables y de aprender de la experiencia y del castigo. Su tolerancia de frustraciones es bajo. Tienden a culpabilizar a los otros o a racionalizar de modo plausible su propia naturaleza”³³, es decir, se podría caracterizar por la tendencia a hacer caso omiso y violar los derechos de los demás, con un comienzo en la infancia o en la temprana adolescencia y con un final en la época adulta.

Otra rama del conocimiento científico dedicada a la descripción de la personalidad delincuente es el psicoanálisis, calificado como una especie de puente entre la psiquiatría y la psicología por sus aportaciones en el estudio de los conflictos psíquicos profundos, de las patologías (neurosis, histerias) y de los desequilibrios de la personalidad. Sus representantes más cualificados explican las conductas violentas, aunque con diferentes matices, por el hecho de que el individuo posee un superego muy desarrollado que le conduce a continuos estados de culpa y ansiedad, lo cual deriva en delincuencia, aunque A. Aichhorn³⁴, basándose en sus años de experiencia en la dirección de una institución de reforma, encontró tres tipos de dificultades asociadas al desarrollo del superego relacionadas con la delincuencia, así un grupo numeroso de jóvenes que adoptaron un superego por debajo de lo normal producto de que los padres se encontraban ausentes o poco cariñosos con ellos, si no desarrollaban adecuadamente el superego, la delincuencia era primariamente una expresión de una identidad

³² Kaplan H.I. et alt. (1996). Op. cit. Pág. 576.

³³ Vold G.B. (1986). *Theoretical criminology*. New York. Oxford University Press. Pág. 148.

³⁴ Aichhorn A. (1963). *Wayward youth*. New York. Viking.

desregulada; otro grupo de jóvenes, aunque no muy numeroso, pertenecía a un grupo de niños sobreprotegidos y sobreconsentidos por los padres, a los que se les permitía todo tipo de licencias; finalmente el último grupo estudiado se trataba de jóvenes que habían desarrollado un superego adecuado pero cuya identificación con los padres les conducía a un comportamiento desviado.

2.1.4. Teoría jurídica

Una de las publicaciones más influyentes sobre la teoría jurídica del delito procede del italiano Cesare Beccaria en 1740 con su libro *Dei Delitti e dell Pene.*, en el cual se dedicó a evaluar los diferentes tipos de derecho penal existentes en Europa, los cuales se caracterizaban por su extrema crueldad, arbitrariedad e injusticia, lo que inspiraría más tarde a los movimientos ilustrados que posibilitaron la Ilustración del siglo XVIII. Si por algo se caracterizaban las leyes penales existentes era porque constituían un mezcla de restos de leyes antiguas procedentes nada menos que de Constantinopla y de su rey Justiniano I, con sus consiguientes reinterpretaciones y actualizaciones farragosas e inexactas: “Algunos restos de leyes de un antiguo pueblo conquistador, hechas recopilar por un príncipe ... mezcladas después con ritos lombardos y envueltas en farragosos volúmenes de privados y oscuros intérpretes, forman aquella tradición de opiniones que en una gran parte de Europa tiene todavía el nombre de leyes”³⁵. Por otra parte, las leyes deberían estar fijadas para que cualquier persona sepa a qué atenerse y los jueces no deberían de ser los dueños de la justicia: “Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces criminales, por la misma razón de que no son legisladores... las reciben de la sociedad viviente o del soberano que la representa, como legítimo depositario del resultado actual de la voluntad de todos”³⁶

Esta teoría, resurge en Alemania tras la promulgación del código penal de 1871, por medio de dos corrientes o líneas representativas, por un lado estaría la teoría causa lista del delito, según la cual la acción de delinquir es un movimiento voluntario que provoca un resultado que es adoptado por el código penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. Por otra parte, y frente a la anterior, la teoría finalista del delito presupone que la conducta es un hecho voluntario con un destino determinado en el cual deben tomarse en cuenta los aspectos referidos a la manifestación externa que persigue esa finalidad, que combinados con el funcionalismo conducen a los principios y categorías de la política criminal. La teoría *finalista* del delito aprecia que cualquier manifestación humana se rige por una voluntad cuya expresión

³⁵ Beccaria C. (2015). *Tratado de los delitos y de las penas*. Universidad Carlos III de Madrid. , Versión electrónica disponible en e-Archivo <http://hdl.handle.net/10016/20199>. Pág. 13.

³⁶ Beccaria C. (2015). Op. cit. Pág. 22

externa no puede dejar de ser tomada en cuenta a la hora de enjuiciar el hecho delictivo, por lo que se pone mayor atención en la falta de valor de la conducta, es decir, en el reproche sobre el comportamiento del delincuente, sea este intencionado (dolo) o negligente (culpa).

2.1.5. Teoría sociológica

La teoría sociológica sobre el delito, y sobre la conducta desviada, engloba una serie de teorías que son tan antiguas como las teorías fisiológicas, y de hecho rápidamente entraron en colisión con ellas. Quetelet en 1835, en Francia, publicó un primer ensayo sobre los efectos sociales que podrían explicar las estadísticas de la delincuencia, en el cual hacía referencia a la delincuencia como un aspecto del estado moral de la nación, Guerry más tarde continuando con la obra del autor anterior estableció la influencia de aspectos como el género, la edad, la instrucción o la profesión de los delincuentes. Rawson en 1839, y más tarde Fletcher, en Inglaterra, analizaron las estadísticas de la delincuencia desde un punto de vista sociológico relacionando la edad, el género, diferentes tipos de delitos y diferentes ambientes en la sociedad puritana de la revolución inglesa. Son innegables también las influencias de autores como Comte y Saint-Simon en la escuela positivista del delito.

Ateniéndonos a las primeras manifestaciones de la sociología como disciplina institucional, sus aportaciones en este campo estuvieron vinculadas a cursos sobre criminología, y no en balde, una revista del prestigio como la *American Journal of Sociology*, nada menos, que en su primera edición de 1895 ya contenía artículos y revisión de libros sobre criminología, en donde, frente a las explicaciones lombrosianas, de inmediato se establecieron diferencias en el sentido de que el comportamiento violento era el proceso de determinadas condiciones sociales. El sociólogo francés Tarde en 1890 fue uno de los primeros en contestar la teoría lombrosiana del atavismo biológico, por la constatación de que la delincuencia se aprendía a través de la imitación. Las leyes de la imitación estarían basadas en tres premisas fundamentales: las personas imitan a otras en proporción al grado de contacto que tienen con ellas (se imita la conducta de las personas con las que se trata, y esta imitación se produce con mayor intensidad en las ciudades que en las zonas rurales), los inferiores imitan a los superiores, y las nuevas modas desplazan a las antiguas también en las costumbres y hábitos delictivos.

Igual ocurrió, aunque más tarde, con las teorías psicológicas basadas en la personalidad, contra las que se objetó la importancia de la cultura. Pero muchas teorías sociológicas, al igual que había pasado con las teorías psicológicas, intentaron armonizar las explicaciones debidas al hecho individual con el hecho social. De cualquier forma la delincuencia en tanto

que conducta desviada se contempló como una cuestión definida socialmente, como lo demuestra el hecho de que para determinadas culturas la delincuencia sea aceptada socialmente en tanto que funcionalmente ritualista, es decir no existe delincuencia, no existe delito, mientras que para otras, sea un motivo de desviación, de etiquetaje, y en definitiva, de sanción. El hecho de que la conducta así definida sea una realidad sui generis que se construye socialmente implica que no exista un único paradigma que concite toda la explicación, sino que su tratamiento implique distintas escuelas y diferentes enfoques. Las principales teorías construidas de manera ad hoc desde la sociología han intentado dar una explicación lo más certera posible de las implicaciones que el fenómeno del comportamiento desviado de algunos de sus grupos representa para el consenso de sus respectivas sociedades, y dado que éstas en tanto que industriales y avanzadas comparten unos rasgos comunes que las asemejan en sus respectivas estructuras sociales, hacen que la caracterización del fenómeno sea extensible a nivel internacional, es decir, cabría argumentar la hipótesis de que determinadas sociedades con economías, instituciones y pautas demográficas comunes, comparten parecidos comportamientos delictivos.

Uno de los precursores de la sociología de la delincuencia fue Ferri nacido en 1856 en San Benedetto, provincia de Mantua y fallecido en 1929 en Roma, lo cual le hizo coincidir con numerosos autores sociológicos importantes, por ejemplo, Saussure, Tarde, Spencer, Durkheim, Weber, Mosca o Pareto. Es de suponer que gran parte de sus aportaciones se vieran contagiadas por las teorías innovadoras de todos estos autores, con lo cual su aportación fue incorporar las corrientes más importantes al análisis de la delincuencia. Más en concreto la vertiente positivista que en ese momento gozaba de gran predicamento en base a las teorías de Comte y Saint Simon. Autor de diversas y variadas obras como Sociología Criminal (1884), Socialismo y Ciencia Positiva (1894), La Escuela de Criminología Positiva (1901), Sociología Criminal (1905), El Fascismo en Italia y la Obra de Benito Mussolini (1928). Estableció que el delincuente es un producto de la sociedad porque es ésta la que determina las pautas de los individuos y no su conciencia individual. En su tesis doctoral titulada “la Teoría de la imputabilidad y la negación del libre albedrío”, ya apunta que el delincuente es una especie de marioneta movida por las cuerdas que la sociedad utiliza sobre sus miembros. Un concepto ya expuesto en Durkheim en sus “hechos sociales”. En base a estos principios habría que borrar todo vestigio de causalidades morfológicas o fisiológicas que otros autores sustentaban.

Según este autor, los diferentes tipos de delincuentes pueden ser: el delincuente loco, el delincuente nato, el delincuente habitual, el delincuente ocasional y el delincuente pasional. Los sentimientos como la religión, el honor y la lealtad no contribuían al comportamiento criminal, pues estas ideas eran muy complicadas para tener un impacto definitivo en la moral básica de las personas. Eran otros sentimientos más mundanos los que

afectarían al delincuente, como el odio, el amor, la vanidad, porque su influencia era mucho más manifiesta al incidir sobre el control que las personas podía efectuar sobre su moral individual. Resumió su teoría al definir la sicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones, debido a una impulsividad desbalanceada que caracteriza solo a los niños y a los salvajes.

Continuando con el concepto desarrollado por Durkheim, pero adaptándolo a las condiciones de la dura depresión experimentada por los Estados Unidos en la década de los años treinta, Merton³⁷, sostuvo que muchas de las apetencias de los individuos no son naturales, sino más bien originadas en la cultura que impera en la sociedad. Las contradicciones que se producen entre la estructura cultural (objetivos) y la estructura social (medios institucionalizados) producen una tendencia a la anomia en las sociedades avanzadas que afecta con particular intensidad a las clases bajas. Los periodos recurrentes de desviación se deben a coyunturas sociales específicas, es decir dependen del grado en que los miembros de una sociedad pueden llegar a cumplir los objetivos culturales vigentes en esa sociedad. Surge entonces un tipo especial de estrategia que se define como innovación cuando se consigue un objetivo cultural convencional a través de mecanismos ilícitos o delictivos, como por ejemplo los niños que se crían en ambientes marginales con pocas oportunidades de alcanzar el éxito incluso si siguen las reglas del juego y que recurren a la utilización de otros medios que se consideran como desviados.

Merton establece la aparición de la delincuencia en las duras condiciones que establecía la cultura americana del éxito. En un artículo titulado “Estructura social y anomia: revisión y ampliación”³⁸, resalta las implicaciones del papel de la familia en las pautas de conducta y de actitudes divergentes de los hijos porque la familia es la principal correa de transmisión para la difusión de las normas culturales en la generación siguiente; y si anteriormente se podía atribuir el funcionamiento defectuoso de las estructuras sociales a las deficiencias del control social sobre los imperiosos impulsos biológicos del hombre, más tarde se pudo comprobar cómo el orden social consiste en un aparato para manejar y reducir los impulsos, para la canalización social de las tensiones y para la renuncia a las satisfacciones instintivas.

Entre los diversos elementos de la estructura social y cultural, dos tienen una gran relevancia: los objetivos y las metas. Los objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos que consideran legítimos todos los miembros de la sociedad, aun cuando estén en diversos niveles, porque siendo predominantes implican diversos grados de sentimiento y de significación y comprenden un marco de referencia de las aspiraciones. Las

³⁷ Merton R. (1986). Estructura social. Alianza. Madrid.

³⁸ Merton R. (1986). Estructura social y anomia: revisión y ampliación. En Fromm E. et al. (Ed.). *La familia*. Barcelona. Península. Págs. 67-107.

metas, porque definen, regulan y controlan los modos admisibles de alcanzar los objetivos, es decir, suponen muchos procedimientos que desde el punto de vista de los individuos particulares serían altamente eficaces para alcanzar los valores deseados –la fuerza, el fraude, el poder –, pero se encuentran proscritos de la zona institucional de la conducta permitida, además la elección de los medios para luchar por la obtención de objetivos se encuentran limitados por normas institucionalizadas o controles, es decir costumbres que operan a través de instituciones sociales, y pueden representar normas de conducta prescritas en forma definida, o bien preferentes o permisivas, de manera que al examinar el funcionamiento de los controles sociales hay que tener en cuenta variaciones como prescripción, preferencia, permiso y proscripción. Los tipos de adaptación individual a la sociedad portadora de cultura, serían básicamente cinco, en los que el signo (+) significa aceptación, el signo (-) significa rechazo, y el signo (+/-) rechazo de los valores vigentes y su sustitución por nuevos valores:

Tipología de los modos de adaptación individual

Modos de adaptación	Objetivos culturales	Medios institucionalizados
I. Conformidad	+	+
II. Innovación	+	-
III. Ritualismo	-	+
IV. Retraimiento	-	-
V. Rebelión	+/-	+/-

Fuente: Merton R. Op. Cit. Pág. 80.

Algunos autores denominan esta teoría como “teoría de la tensión”. Entre ellos se encuentra Agnew, el cual sostiene en “teoría general de la tensión”, que la mayor parte de éstas, afirman que la delincuencia se produce cuando las personas son incapaces de alcanzar sus metas a través de canales legítimos. Estas teorías se concentran en las metas de éxito monetario o sobre las metas algo más amplias del estatus de las clases medias. La clase baja individuos se dicen que tienen problemas especiales alcanzar estas metas porque están menos preparados para la escuela, asisten a escuelas inferiores y carecen de medios para la educación avanzada. La frustración que resulta de esta obstrucción aumenta la probabilidad de la delincuencia; y pueden tratar de obtener dinero a través de actos tales como robo y venta de drogas, pueden pegarlos a otros en su ira o pueden enfocarse en objetivos alternativos que conducen al delito (por ejemplo, roles de masculinidad enfatizando la dureza). Las teorías de la tensión fueron las principales teorías de la delincuencia en los 50 y 60 y tuvieron un efecto importante en las políticas públicas, siendo una inspiración para la guerra contra la pobreza. La teoría iniciada por Merton había caído en popularidad porque tendía a focalizar sobre la infraclase, ignoraba las numerosas metas

convencionales de las clases medias, pasaba por alto las barreras para otros logros en lugar de la estratificación social, le resultaba difícil explicar por qué algunas personas que experimentan tensión no acaban realizando actos delictivos, de hecho tanto la tensión como la frustración son experimentados por muchas personas que continúan con la conformidad.

Otra versión es la de Cloward y Ohlin³⁹, en lo que se ha considerado como una integración de las teorías de Merton y Sutherland, de los cuales eran alumnos, sostienen que la tensión o conducta desviada no sólo depende de la ausencia de oportunidades lícitas o legítimas sino también de la oferta de las oportunidades ilegítimas, o sea, la conformidad o la desviación estarían correlacionadas en mayor o menor medida con las estructuras relativas de oportunidades que es en definitiva lo que condiciona la respuesta de los jóvenes; además no todas las clases sociales bajas tienen idéntica organización y estabilidad, por ello establecen la existencia de tres tipos diferentes de actitudes: las subculturas criminales, las subculturas de conflicto y las subculturas de retraimiento. En las dos primeras categorías las motivaciones son muy parecidas a las que había establecido anteriormente Cohen, pero dado que su conducta desviada se trataba de ajustar a los valores de la clase media, no constituyen el principal grupo. Mientras que la conducta desviada más intensa se produce en el tipo III, en el que los jóvenes se ven orientados a un tipo de consumo más conspicuo porque están orientados al consumo y no a los valores de las clases medias. Además al no percibir la existencia de oportunidades legítimas o ilegítimas la frustración y el descontento crecen exponencialmente, por lo que la falta de oportunidades es a menudo el síntoma de la falta de organización social en la comunidad, lo que significa que existen pocos controles sobre el comportamiento de los jóvenes.

Tipo de adaptación	Metas convencionales	Medios legítimos	Medios ilegítimos
Delincuente	+	-	+
Retraimiento	-	-	-
Conflicto	+/-	+/-	+/-

Para Cohen⁴⁰ un sistema de control social implica todas aquellas medidas que se toman para prevenir, evitar o castigar el delito. Se podría definir como todas las formas organizadas con que la sociedad responde a comportamientos y a personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos o indeseables de una u

³⁹ Cloward R. and Ohlin LL. (1966). *Delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs*. New York. The Free Press.

⁴⁰ Cohen Stanley (1988). *Visiones de control social*. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias.

otra forma; una respuesta que aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o defensa social; y que está acompañada de muchas ideas y emociones: odio, venganza, desquite, disgusto, compasión, salvación, benevolencia o admiración ante un comportamiento que es clasificado bajo diversas denominaciones: crimen, delincuencia, desviación, inmoralidad, perversidad, maldad, deficiencia o enfermedad.

Frente a la mayor parte de las teorías anteriores en los años treinta surgió esta teoría al amparo del interaccionismo simbólico, ganando prominencia en la década de los sesenta al cambiar el foco del estudio de la delincuencia desde el comportamiento observable hacia el estatus de la persona basado en la importancia del significado en la interacción social. Tiene sus orígenes en la interpretación que se hace desde el interaccionismo simbólico de la conducta desviada y cómo se construye la realidad. Se trata de descubrir como emerge el self, como se construyen los significados y cómo varían de una sociedad a otra y de una época a otra. En definitiva, como los actores negocian lo humano desde el significado individual de una vida colectiva. De acuerdo a autores como Mead, Cooley o Blumer, los tres principales rasgos que definen al interaccionismo simbólico son: a) los seres humanos actúan sobre las cosas en base al significado que dichas cosas tienen para ellos; b) esos significados son el producto de la interacción social en la sociedad humana; c) esos significados son manejados y modificados mediante un proceso interpretativo utilizado por cada individuo cuando trata las cosas con las que se encuentra.

Otro autor destacado fue Lemert⁴¹, al aplicar su teoría del comportamiento desviado a la delincuencia: “la tarea de la sociología no es estudiar teóricamente la materia concebida de la delincuencia, sino el proceso por el cual una variedad de comportamientos en su contexto reciben un significado oficial y no oficial que es la base para asignar un estatus especial en la sociedad”⁴². Existen dos tipos de desviación: la primaria y la secundaria. En el primer modelo la característica principal es que constituye la violación inicial de una regla social, mientras que en el segundo se trata de las reacciones sociales de otras personas a la violación inicial, el ejemplo clásico es el de quien usa drogas (desviación primaria) y convierte esto en delito al mantener su hábito (desviación secundaria), ya que según esta teoría los delitos de los adictos no son resultado, por sí mismo, del uso de drogas, sino la consecuencia de etiquetar, por parte de la sociedad, ciertas sustancias como drogas ilícitas, empujando a esas sustancias al mercado delictivo, de tal modo que se aumenta el costo de esas drogas, y como resultado de ello, el posible adicto a las drogas puede volverse un traficante

⁴¹ Lemert E. (1972). Human deviance, social problems, and social control. Englewood Cliffs. Prentice- Hall. Pág. 59.

⁴² Lemert E. (1972). Op. cit. Pág. 59.

de drogas o puede cometer otros delitos (como el robo o la prostitución) para poder mantener su hábito.

Cabe destacar la teoría de la desorganización social, la cual es vista actualmente como una explicación prominente de la distribución del crimen por barrios. Sin embargo, esto no siempre ha sido el caso. Durante décadas, investigación de desorganización social fue impedido por la falta de consenso sobre la definición y medida de la desorganización de la comunidad. Suponiendo que los residentes de barrios de alta delincuencia prefieren una existencia libre de crimen, se puede implicar que una comunidad socialmente desorganizada es incapaz de darse cuenta de sus valores. Sin recurrir a datos de la encuesta, la teoría infirió la existencia de la desorganización de las relaciones observadas entre delincuencia oficial y características estructurales de la comunidad. Aunque inicialmente adoptado, esta estrategia creó confusión y en última instancia fue rechazada. *En la década de 1960, muchos criminólogos habían abandonado la perspectiva.* La década de 1980 marcó un momento crucial para la teoría de la desorganización social. Tomando prestado de la ecología urbana y el modelo sistémico, los teóricos de desorganización pudieron definir con más precisión la organización comunitaria en tan to que un complejo sistema de redes de amistad y parentesco y relaciones asociativas formales e informales arraigados en la vida familiar y los procesos de socialización permanente. En consecuencia, las comunidades organizadas socialmente fueron concebidas como cohesivos lugares donde las familias y vecinos saben interactuar con y confían uno al otro; donde los residentes son capaces de identificar a extraños; y donde los residentes voluntarios promueven acciones para el beneficio mutuo de la comunidad. La lógica del modelo señala que las personas por el hecho de conocerse personalmente, a menudo elaboran acuerdos interpersonales para el logro de metas deseadas, y al contrario, las personas que no se conocen están sistemáticamente menos dispuestos o capaces de participar en tales acuerdos mutuos. Desde este punto de vista, cuando las redes son fuertes, la capacidad del residente local de participar en el control informal para el beneficio mutuo de los vecinos, tales como la intervención para prevenir un delito o vigilancia consciente del espacio, se fortalece evitando la delincuencia en sus barrios⁴³.

Una de las últimas teorías procede de 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), Zimbardo llevó a cabo realizó un experimento dentro de la disciplina de la psicología social. Colocó dos coches que parecían abandonados en la calle, los dos eran idénticos pues compartían la misma marca, el mismo modelo y hasta el mismo color. Uno lo aparcó en el distrito del Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el

⁴³Bellair P. and Browning Ch. (2010). Further Test of the Systemic Model of Neighborhood Crime Contemporary Disorganization Research: An Assessment and Further Test of the Systemic Model of Neighborhood Crime. N° 10. Págs.. 496-521

otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto, nadie lo tocó, pasó desapercibido por todo el mundo.

Esta teoría denominada “ventanas rotas” se basa en que un factor importante en la determinación de la conducta colectiva son las normas sociales o reglas interiorizadas acerca de la forma adecuada de actuar en una situación determinada. Ello requiere, un seguimiento constante de evaluación de cómo se comportan otras personas y su entorno con el fin de determinar cuáles son las normas correctas que rigen en una situación concreta. Para mantener el orden, es necesario vigilar los comportamientos que realizan otros con el fin de asegurarse de que actúan de una manera aceptable. En otras palabras, la gente como grupo se debe asegurar de que se cumplen las reglas en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando no hay gente alrededor, como suele ocurrir en un ambiente anónimo de carácter urbano, el control de los otros no acaba de funcionar. En tal ambiente, los delincuentes tienen muchas más probabilidades de cometer pequeños robos, hurtos y vandalismo contra el mobiliario urbano. Cuando hay otras personas presentes o vigilantes los individuos se ven obligados a buscar otras formas de transgredir el orden social, respetando las más elementales normas sociales, ya que si no se pueden enfrentar a un innecesario problema cuando son atrapados o denunciados. Un ambiente ordenado y limpio envía una primera señal de que se trata de un lugar que se controla y la gente que vive allí, se ajusta a las normas comunes de comportamiento no delincuente. Por el contrario, un espacio o entorno desordenado, que tiene muestras de actos de vandalismo, y que no envía una señal de lo contrario, es un lugar que invita a que la gente haga lo que quiera y salirse con la suya sin ser detectados. Por lo tanto, como la gente tiende a actuar de la manera en que piensan que los otros actúan, son más propensos a un tipo de comportamiento desordenada en un entorno que consideran desordenado, o lo que es lo mismo abandonado.

2.2. Indicadores de la delincuencia:

2.2. 1. Antecedentes del estudio empírico de la delincuencia

Al igual que ocurrió con el estudio teórico, desde el siglo XIX, el estudio empírico de la delincuencia se convirtió en un nuevo foco de interés científico por el creciente uso de los datos que proporcionaban instancias oficiales. De hecho gran parte de las premisas teóricas primigenias fueron

formuladas partiendo de las deficientes estadísticas que existían en aquellos momentos. El propio Lambroso dio carta de cientificidad a su teoría por la constatación contable de una serie de medidas craneales sobre presos delincuentes en las cárceles italianas. La primera estadística nacional sobre delincuencia se publicó en Francia en 1827. La siguiente tabla nos da idea de la cuantificación de la delincuencia en aquel momento:

Cuadro 5. Cuentas generales de la Justicia criminal en Francia.

	1826	1827	1828	1829	1830	1831
Asesinatos en general	241	234	227	230	205	266
Fusil y pistola	56	64	60	61	57	88
Sable, espada, estilete, puñal, etc.	15	7	8	7	12	30
Cuchillo	39	40	34	46	44	34
Palo, bastón, etc.	23	28	31	24	12	21
Piedras	20	20	21	21	11	9
Instrumentos cortantes, punzantes y cont	35	40	42	45	46	49
Estrangulamientos	2	5	2	2	2	4
Tirar por un precipicio o ahogar	6	16	6	1	4	3
Patadas y puñetazos	28	12	21	23	17	26
Fuego	-	1	-	1	-	-
Desconocidos	17	1	2	-	2	2

Según autores como Zauberman y Robert⁴⁴, se podían distinguir dos edades epistemológicas de la medida de la delincuencia: la que se reduce a la actividad judicial y la que surge cuando otras fuentes entran en disputa. La primera aparece en la segunda mitad de la Europa del siglo XVIII y se desarrolla en el siglo siguiente, como hemos visto desde 1826, son básicamente estadísticas procedentes de los tribunales sobre delitos violentos, a pesar de algunas vacilaciones, para medir lo que se conocía como “el estado moral de la nación”. Durante el siglo XX, la estadística policial reemplazó o compaginó, más o menos rápidamente según el país, a las procedentes de los tribunales.

Durante este tiempo, el único cambio concreto fue la promoción de las estadísticas de la policía como una medida de la delincuencia en detrimento de los datos judiciales. Un movimiento que se vio justificado por Thorsten Sellin cuando sostuvo que era mejor situarse en la comisión del delito producido que del delito considerado por los jueces. Lo cual marcará un cambio de tendencia en beneficio de los datos policiales a expensas de la justicia. Tal enjuiciamiento constituirá un problema en países como Estados

⁴⁴ Zauberman R. et Robert P. (2011). Sur l'évolution de la estatistique criminelle et plus largement de la mesure de la délinquance. Journal Electronic d'Histoire des probabilités et de la Statistique. Vol. 7. N° 1. Págs. 1-13.

Unidos, en donde la policía y la fiscalía han estado históricamente y estrechamente vinculados o en la Europa continental donde la fiscalía cuenta con diversas y especializadas policías como aduanas, impuestos, inspecciones tributarias, o pequeños conflictos, cruciales por otra parte para resolver algunas formas de delincuencia, aunque en menor medida en otros países como en el Reino Unido, en donde la policía ejerce todas las pesquisas del delito.

2.2.2. La delincuencia en base a estadísticas

Las primeras tentativas de medir la delincuencia surgen en Francia a finales del siglo XVIII bajo el impulso del consejero de estado Jean-Baptiste de Montyon (1733-1820), cuando en 1786 hizo una recapitulación de los delitos cometidos a partir de 1775 por edad, sexo, profesión y lugar de infracción. Más tarde en 1806 una circular del ministro de Justicia André Joseph Abrial (1750-1828), fundó la primera estadística judicial y fue a partir de 1827 que se publicó la *Compte Général de l'Administration de la Justice Criminelle*, que se divulgó a través de toda Europa⁴⁵. En ella se presentaba en un informe al Rey, una tabla sinóptica denominada “en todo el Reino” con los principales delitos acontecidos en el año 1825. Se daba cuenta de que se habían juzgado 5.653 acusaciones, de los cuales 1.547 habían sido crímenes contra las personas y 4.106 delitos contra la propiedad privada⁴⁶. Esta información se publicó interrumpidamente desde entonces hasta 1932, exceptuando 1827, aunque cambiando el destinatario ya que en 1932 fue dirigida al presidente de la República y cubría los territorios de Francia, Argelia y Túnez⁴⁷.

Desde Montyon, la utilización de la estadística judicial para medir la delincuencia o más exactamente a través de la delincuencia medir el estado moral de la nación se encontrará con las aportaciones de autores como d'Ange-Marie Guerry y sobre todo de Adolphe Quételet⁴⁸ (1796-1874),

⁴⁵ Zauberman R. et Robert P. (2011). Op. cit.

⁴⁶ Ministre Secrétaire d'État au Departament de la Justice (1827. *Compte Général de l'Administration de la Justice Criminelle en France. Présent au Roi*. Imprimerie Royaele. París.

⁴⁷ Aubusson de Cavarlay B. (2007). Des comptes rendus à la statistique criminelle : c'est l'unité qui compte (France, XIX^e-XX^e siècles). *Historie et Mesure*. N° 2. Vol. XXII. Págs. 39-73.

⁴⁸ Quetelet A. (1835). *Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale* (2 vols). Bélgica.

Quetelet A. (1871). *Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l'homme*. Bruxelles : G. Muquardt.

Quetelet A. (1848). *Du système social et des lois qui le régissent*. Paris : Guillaumin et Cie, libraires
Quetelet A. (1860). *De la statistique considérée sous le rapport du physique, du moral et de l'intelligence. Bulletin de la commission centrale de statistique*. Bruxelles : F. Hayez.

auténtico precursor de la sociología en base estadística moderna y de la estadística criminológica. Enviado a Francia por el gobierno belga para estudiar los mecanismos celestes, cambió rápidamente de trayectoria cuando tuvo conocimiento de las estadísticas sociales, concretamente de las referidas a la delincuencia. A partir de un planteamiento sociológico, explicó el delito no como un hecho aislado e individual sino como un fenómeno colectivo, un hecho social, y un dato estadístico. Partiendo de la observación de las cifras que componían las tasas de delincuencia trató de desentrañar qué leyes regían esa circunstancia, poniendo un especial énfasis en encontrar los factores que influían en la comisión de los delitos. De alguna manera, este autor, se anticipó a los planteamientos de la sociología criminal posterior al estudiar el delito como una magnitud cuantificable, basada en cifras estadísticas e incidiendo en la influencia de los factores socioeconómicos.

Por medio de las estadísticas se estableció una inequívoca correlación entre determinados delitos y ciertos factores muy heterogéneos: el clima, la situación geográfica, el analfabetismo, el pauperismo y la miseria. Y en base a los números y por medio de técnicas estadísticas tales como las medias y las desviaciones típicas trató de desentrañar las leyes que regulan el crimen como fenómeno social, porque pensaba que descubriéndolas era posible predecir el número y clase de delitos que se cometerían en el futuro. Esto le permitió resaltar la regularidad con que, año tras año, con absoluta precisión y regularidad, no solo en su número sino en el tipo se repetían los delitos. Además, puso de manifiesto la importancia de los factores socioeconómicos, entendiendo que una forma de prevenir el delito era incidir sobre ellos, por lo que unas mejoras en las condiciones de vida conllevarían un descenso en las tasas de criminalidad.

Quetelet encontró la regularidad estadística del asesinato y suicidio como fascinante porque era no esperada a la vista de su manifiesta irregularidad cuando eran contempladas a nivel individual. En su opinión, la estadística se debería enfocar hacia la anatomía del cuerpo social y obedecería a leyes que existen fuera del tiempo y de los caprichos del hombre conformando una ciencia distintiva de física social ya que cuando se trata de estos fenómenos a través de los grandes números “el individuo desaparece” por lo que si se conocen las causas a través de las cuales las sociedades existen y se perpetúan se podría determinar el futuro tal como sucede con las ciencias físicas. La regularidad de la delincuencia implicaría responsabilidad social más que individual. Analizando las estadísticas referentes a todos los asesinatos que se cometieron en Francia entre 1826 y 1831, llegó a las siguientes conclusiones: a) el delito es un fenómeno social de masas, no un acontecimiento individual; b) el delito es una dimensión sorprendentemente constante; c) el delito se repite con una precisión mecánica, producto de

leyes sociales que el investigador debe descubrir y analizar; d) el delito presenta una normalidad estadística; e) el delito es un fenómeno social, inevitable, necesario y constante y se puede comparar la tasa anual de delitos con la de nacimientos o defunciones⁴⁹.

Mientras que los factores que incidían en la delincuencia eran:

-Ley térmica basada en el factor clima que relaciona los cambios climáticos con los delitos cometidos: 1. En invierno se comete el mayor número de delitos contra la propiedad. 2. Los delitos contra las personas se cometen en mayor número en el verano, pues el calor excita las pasiones humanas. 3. En la primavera tienen mayor ocurrencia los delitos sexuales.

-Factor sexo: establece una relación de 6 a 1 según el sexo, con claro predominio masculino. Cuantitativamente, la mayoría de delitos se cometen a edades intermedias, las mayores tasas se sitúan en torno a 14-25 años para los hombres y 16-27 para las mujeres.

-Factor edad: determinados delitos se cometen en función de la edad: Infancia (hurtos domésticos); Adolescencia (delitos sexuales); Juventud (delitos más violentos); Madurez (delitos de fraude y astucia); Vejez (delitos contra la propiedad, abusos sexuales)⁵⁰.

En todo lo relacionado con los delitos, los mismos números se reproducen con una constancia tal que sería imposible de ignorar, incluso para aquellos delitos que más parecería que debieran escapar a toda previsión humana, tales como los asesinatos, puesto que en general se cometen como consecuencia de riñas que nacen sin motivos y en las circunstancias, aparentemente, más fortuitas. Sin embargo, la experiencia muestra que no solamente el número de asesinatos es el mismo cada año, sino que incluso los instrumentos que sirven para cometerlos se emplean en las mismas proporciones. La sociedad lleva en sí misma los gérmenes de todos los crímenes que se van a cometer. De alguna manera es ella misma la que los prepara, y el culpable no es sino el instrumento que los ejecuta. Esta afirmación, que puede parecer desalentadora a primera vista, por el contrario, se torna consoladora cuando se la examina de más cerca, puesto que muestra la posibilidad de mejorar a los hombres a través de la modificación de sus instituciones, sus costumbres, el estado de sus luces y, en general, todo lo que influye en su manera de ser. En el fondo, no nos presenta sino la ampliación de una ley conocida por todos

⁴⁹ Theodore M. Porter (1995). Statistical and Social Facts from Quetelet to Durkheim. Sociological Perspectives Vol. 38, No. 1, Pág. 15-26.

⁵⁰ Quetelet A. (1984). Adolphe Quetelet's research on the propensity for crime at different ages. Cincinnati. Anderson Publishing.

los filósofos que se han ocupado de la sociedad bajo el punto de vista físico: en tanto que subsistan las mismas causas, como contrapartida se deben esperar los mismos efectos. Aquello que pudiera hacer esperar que no ocurriría así en los fenómenos morales es la influencia demasiado grande que se le había atribuido al hombre en todo lo que tiene que ver con sus acciones⁵¹.

Siguiendo en esta línea y en lo que se podría considerar como la escuela francesa de estudios cartográficos de delincuencia hay que destacar a Guerry (1802-1866), contemporáneo de Quetelet. Su mapa de la delincuencia está basado en estadísticas recogidas en Francia e Inglaterra y otros países europeos. Su cartografía contiene datos sobre la geografía del delito en base al sexo, la edad, instrucción, profesión de los delincuentes, influencia del clima y condiciones geográficas, constatando la asombrosa regularidad con que se repite el delito, en tanto que un fenómeno social y de masas que debía analizarse con métodos estadísticos. Las regiones septentrionales de Francia se caracterizaban más por los delitos contra el patrimonio que los delitos contra las personas, mientras que en las meridionales los índices de delitos contra las personas rebasarían los de la delincuencia patrimonial ponderando los porcentajes respectivos en el total de la criminalidad de Francia.

Como legado se puede decir que la famosa Ley Térmica ha tenido sus seguidores. En la actualidad, un trabajo reciente de la revista *Emergency Medicine Journal*, sostenía que la delincuencia sigue un patrón estacional, con un punto álgido al final del verano y un punto más bajo en primavera. Estas conclusiones se obtuvieron después de recoger información estadística de 33 servicios de urgencias del Reino Unido, entre 1995 y 1998, que demostraba que de los 121.000 casos de delincuencia registrados contra las personas, la mayor parte de los actos violentos se desarrollaron entre los meses de julio y septiembre, mientras que el registro más bajo se produjo en el periodo de febrero a abril; de todos los actos violentos, tres de cuatro fueron perpetrados por hombres, con una gran mayoría de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y con un aumento de los actos violentos contra las mujeres llevados a cabo en lugares públicos y un descenso de ellos entre los que se llevaron a cabo en el hogar.

Otro firme partidario del uso de estadísticas para analizar la realidad social fue E. Durkheim, a través de su insistencia vehemente de que los sociólogos tenían que limitar su atención a grupos claramente definidos de hechos sociales y formular hipótesis específicas, empíricamente comprobables acerca de aquellos. En su gran estudio sobre el suicidio, sostuvo que la totalidad de suicidios en una sociedad, medida por la proporción de

⁵¹ Quetelet A. (1999). Física social o ensayo sobre el hombre y el desarrollo de sus facultades. Revista española de Investigaciones Sociológicas. Nº 87. Págs. 305-325.

suicidios debía ser tratada como un hecho social que tenía que ser explicado como una característica de una sociedad en su conjunto y no como una característica individual.

La unidad de análisis sería la sociedad porque lo importante son las variaciones en las proporciones de suicidios entre distintas sociedades. “si se considera el conjunto de los suicidios cometidos en una sociedad dada, durante una unidad de tiempo determinado, se comprueba que el total así obtenido no es una simple adición de unidades independientes, o una colección, sino que constituye por sí mismo un hecho nuevo... que tiene su naturaleza propia, y que además es eminentemente social”⁵². Así el suicidio egoísta propio de sociedades con factores culturales como el encarnado en el protestantismo y el esfuerzo concentrado en el yo; el suicidio altruista que se encuentra en sociedades rápidamente estructuradas que pone por encima del individuo un código de deberes de sentido grupal, y hacen del sacrificio por el grupo una exigencia moral; el suicidio anómico propio de sociedades con un fallo o dislocación de los valores sociales que lleva a una desorientación individual.

La utilización de estadísticas para explicar el hecho social quedó suficientemente establecida. A través de factores tales como la religiosidad, el clima y el temperamento, se demostró que las tasas de suicidio variaban dependiendo de la religión, país, estación y otras variables parecidas; desmontando la creencia ampliamente asumida de que el suicidio era un acto individual. Según autores como Akers⁵³, fue esta cuestión más que cualquier otra la que condujo a la creación de la sociología como una disciplina académica, dado que otros investigadores emularon este método conduciendo directamente a la sociología a constituirse como un campo distintivo de estudio. Los estudios enfocados a la comunidad y cohortes de grupos fueron habituales en las investigaciones de autores como Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Henry McKay, and otros de la Chicago School of Sociology. En el dominio de la salud pública, más concretamente en el campo de la epidemiología social de la mitad del siglo XX creció la creencia que las características social afectaban los modelos de enfermedad y salud en una sociedad. La principal cuestión de la epidemiología fue investigar los efectos que los factores sociales tenían sobre los individuos y sobre la salud de la población, es decir, las mismas cuestiones que Durkheim ‘planteó en su estudio de 1864.

Sin embargo, Durkheim criticó las aportaciones de Quetelet, sobre la sorprendente regularidad con que ciertos fenómenos sociales se repetían durante periodos idénticos de tiempo, basada en su teoría del hombre medio, que había quedado, en palabras de Durkheim, como la única explicación sistemática de esa notable propiedad. Esta teoría como hemos visto consistía

⁵² Durkheim E. (1998). El suicidio. Madrid. Akal. Págs. 8.

⁵³ Akers R.L. (1998). Social learning and social structure. A general theory of crime and deviance. Boston. Northeastern University Press.

en establecer una medida aritmética de las sociedad. Pero este concepto no tenía sentido cuando se lo identificaba con la raza y se aplicaba al suicidio porque “para que esta aplicación pueda convenir al suicidio, sería preciso que la tendencia que arrastra al hombre a matarse dependiese estrechamente de la raza; y ya sabemos que los hechos son contrarios a esta hipótesis... en un país como Francia... la intensidad media de la tendencia al suicidio sería explicada por la relación $150/1.000.000 = 0,00015$; y en Inglaterra sería de $0,00008$... Tales cifras son prácticamente iguales a cero... no tiene fuerza para poder determinar un suicidio... no es pues la generalidad de tal tendencia la que ha de hacer comprender por qué se cometen anualmente tantos suicidios en una u otra de esas sociedades”⁵⁴. En opinión de Porter⁵⁵, entendió la discusión de Quetelet como una explicación de los ratios de suicidio en términos de tipos raciales, largamente uniformes en una población dada, pero diferente entre por ejemplo italianos y alemanes. Y aunque fue correcto al encontrar implicaciones en la doctrina del hombre medio que estaban fuera de la armonía de la explicación social, mal interpretó a Quetelet cuando le atribuyó una explicación individualista o racial de fenómenos como la delincuencia.

2.2.2.1. Estadísticas judiciales

El registro de la delincuencia más antiguo en todo el planeta procede de los jueces. En muchos países del mundo este tipo de medición se ha mantenido hasta nuestros días. Su vigencia remite al hecho de que al final para elucidar cuándo existe un delito hay que acudir a las leyes y al código penal, toda vez que muchas actuaciones de la policía pueden acabar sin constituir un delito. La calificación penal final de una infracción es una materia propia de los jueces y por eso sus estadísticas pueden ser importantes para evaluar la delincuencia de un país. Incluso, aunque parezca paradójico la contabilidad de la delincuencia no se debería aplicar más que estrictamente a las decisiones judiciales últimas porque es cuando se confirma una acción.

El inicio de las estadísticas sobre delincuencia en España habría que buscarlo en las Cortes de Cádiz en las que se constató la necesidad de reunir una mínima información sobre los delitos que se producían en su territorio. Fue en la Constitución de 1812, en donde se establece ese mandato por medio del título V, artículo 261 requiriendo al Supremo Tribunal para que lleve a cabo una tarea importante e innovadora para la época: “Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la

⁵⁴ Durkheim E. (1998). El suicidio. Madrid. Akal. Págs. 330-331

⁵⁵ Porter T. (1995). Statistical and social facts from Quetelet to Durkheim. Sociological Perspectives. Vol. 38. Nº 1. Págs. 15-26.

imprensa"⁵⁶. Sin embargo, los acontecimientos políticos de 1814, ocasionaron la paralización de estos trabajos, enlazados en su ejecución con el enjuiciamiento y la organización judicial. El 5 de febrero de 1837, el Gobierno encargó al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que consultando los métodos adoptados en otros países, y estableciendo las instrucciones convenientes a las Audiencias, reuniese los elementos más adecuados para que en lo sucesivo pudiese formarse una estadística anual completa⁵⁷.

Como sostiene Del Pueyo en sus apuntes, en enero de 1844 se publicaron los "Datos Estadísticos de la Administración de Justicia" referidos al ejercicio del año anterior, siendo Ministro de Gracia y Justicia Luis Mayans, el cual puso todo su empeño en hacer realidad la citada publicación, que supondría a todos los efectos, la primera colección estadística oficial sobre este tema en España. Once años más tarde, se publicó un nuevo Real Decreto cuya finalidad fue la de dar un renovado impulso al tema requiriendo de los jueces de primera instancia que el día 5 de cada mes remitieran una hoja por cada procesado. Esta información, que debía acabar en el Ministerio, incluía el tipo delito cometido, los medios empleados en su ejecución, el género, la edad, el estado civil, el nivel de educación, la profesión u ocupación del procesado, la pena que se le había impuesto y la instancia en la que se hubiese recogido sentencia para ser ejecutada.

DESIGNACIÓN POR HECHOS.

DELITOS
<p><i>Contra la religión</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por tentativa para variar la religión católica, apostólica romana. 2. - Celebración de actos públicos de culto extraño. 3.- Inculcación pública de la inobservancia de los preceptos religiosos. 4. - Mofa o desprecio público de alguno de los ministerios o sacramentos de la Iglesia 5. - Persistencia en publicar doctrinas o máximas contrarias al dogma católico, después de condenas por la autoridad eclesiástica. 6.- Profanación de las sagradas formas de la Eucaristía. 7.-.....
<p><i>Contra la seguridad exterior de Estado</i></p>

⁵⁶ Del Pueyo J. (1863). Apuntes sobre estadística de la administración de justicia. Madrid. Espiritu Santo. Pág. 22.

⁵⁷ Del Pueyo J. (1863). Apuntes sobre estadística de la administración de justicia. Madrid. Espiritu Santo. Pág. 24.

20.- Suministro de medios directos a las tropas de una Potencias para hostilizar a España.
21.- Reclutamiento de gente para el servicio de las armas de una Potencia enemiga.
22.-.....
<i>Contra las personas</i>
65.- Parricidio.
66.- Homicidio.
67.- Prestación de auxilio a otro para suicidio.
68.- Mutilación ejecutada de propósito.
69.....
<i>Contra la propiedad</i>
122.- Robo con violencia en las personas.
123.- Id. Con fuerza en las cosas.
124.- Conspiración para robar.

Fuente: Del Pueyo J. (1863). Apuntes sobre estadística de la administración de justicia. Madrid. Espíritu Santo.

En 1858, año y medio después de la creación de la Comisión de Estadística General, se estableció en el Ministerio de Gracia y Justicia una Institución de Estadísticas judiciales para la mejor administración de justicia⁵⁸. Como sostiene el Real decreto de 2 de mayo de 1858: “La administración de justicia no puede ser llevada al grado de perfección que requiere su importancia sin la asistencia de dos instituciones, que dirigiéndola en su marcha y uniformándola en sus aplicaciones, al elevan cada vez más a la altura de su difícil misión. Estas dos instituciones son la inspección judicial y la estadística civil y criminal”⁵⁹. Al año siguiente, en el mismo Ministerio, se creó una sección de estadística criminal y se aprobó su reglamento. En los años siguientes hubo un debilitamiento institucional para la Estadística Judicial, pero volvió a resurgir con la Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882 cuyo título XIII del Libro Primero contenía las obligaciones de los jueces y tribunales relativas a la estadística judicial. En 1884 se restablece el servicio de estadística en la administración de justicia en lo criminal. En 1887 se organizó la sección de estadística civil y criminal en el Ministerio de Gracia y Justicia. En 1890 un negociado de estadística se encargó de la estadística administrativa de este ministerio. En 1901, el reglamento desarrolló una Ley de 1889, reorganizando el servicio de estadística judicial, poniéndolo a cargo de un jefe de sección del

⁵⁸ Este anuario se puede obtener en la página web del Consejo del Poder Judicial. Como curiosidad se pueden consultar los delitos contra la Hacienda Pública.

<http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/Estadistica%20judicial%20Historica/Forms/AllItems.aspx>

⁵⁹ Real decreto de 2 de Mayo de 1858. .

mencionado ministerio, con capacidad para dirigirse a los tribunales y negociados en reclamación de los datos necesarios⁶⁰.

En la Dirección de Prisiones se creó en 1903 un Negociado de Inspección y Estadística para llevar el servicio de estadísticas penitenciarias, que en 1907, al reorganizarse este servicio, recibió el nombre de Negociado de Estadística, dentro de la correspondiente sección y bajo la iniciativa de un director general. Por un Real Decreto de 1915 se centralizan en la Sección de Estadística, del Ministerio de Gracia y Justicia, todos los servicios de estadística judicial, civil y comercial, criminal, penitenciaria y del Registro Civil, lo cual se refuerza en 1917 al disponerse que la Sección especial de los servicios de estadística, integrada en la Subsecretaría del Ministerio, centralizase toda la actividad estadística del mismo.

En los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, Giner de los Ríos, creó el Laboratorio de Criminología y la Escuela de Criminología que serán dirigidos por Salillas y en la que destaca la figura de Bernaldo de Quirós y su estudio sobre la criminalidad de sangre en España en base a estadísticas que comienzan en 1883 y acaban en 1900⁶¹. Como sostiene el autor se ofrecen datos sólo hasta 1900 debido al retraso de las estadísticas, fenómeno que denomina como “animales tardígrados”. La dificultad de la tarea se puede comprobar cuando refleja que la estadística más antigua en España data del año 1838, pero después salta hasta el año 1943, luego vuelve a interrumpirse hasta el 1959, después hasta el 1962, y de aquí hasta 1883, en que al fin la serie se hace continua.

Como sostiene Bernaldo de Quirós:

“¿Qué intensidad alcanza en el día en nuestra España la actividad productora de estos delitos sangrientos? La estadística puede decírnoslo. Pero ante todo, librémonos de creer que sus cifras sean otra cosa que la expresión sólo aproximada, no de los delitos que se cometen realmente en un país, dado un determinado Código penal, sino únicamente de los castigados. De lo uno a lo otro ¡cuánta diferencia! ...Después los crímenes impunes, por todas las, causas de impunidad, de hecho y de derecho, que nuestro estado social admite. Estáticamente, pues, estos dos coeficientes menguan la cifra real de la criminalidad; pero, además, dinámicamente; obran con una intensidad variable, dependiente de factores personales que diríamos arbitrarios, en tanto que, como sucede, no nos sea sensible el ritmo, la regularidad propia de los hechos sociales. A un tiempo de relajación de la actividad procesal, sucede un tiempo de mayor celo; por donde si estáticamente no conocemos la intensidad real de la delincuencia en

⁶⁰ Merediz A. (2004). Historia de la estadística oficial como institución pública en España. Sevilla. Instituto de estadística de Andalucía.

⁶¹ Serrano A. (2007). Historia de la criminología en España. Madrid. Dykinson.

un momento determinado, dinámicamente tampoco sabemos bien las oscilaciones de su marcha, supuesto que éstas se hallan, para la estadística, en función de las oscilaciones de la actividad procesal, varias en cada país y en cada momento, é inapreciadas y quizá inapreciables para aquélla”⁶².

El ejercicio de los jueces en la administración de la delincuencia a través de sus sentencias ya queda recogido a principios del siglo XIX en las estadísticas nacionales, como se puede observar en el cuadro de abajo.

Cuadro 6. Procesados en 1913 por las causas que se expresan

	Absueltos		Condenados		Total	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer
Contra el orden público	958	7	1.284	28	2.242	35
De falsedades	256	59	2.274	67	2.530	126
Contra las personas	849	53	4.670	40	5.519	93
Contra la propiedad	3.281	1.163	1.971	55	5.252	1.218
Contra la honestidad	856	14	376	40	1.232	54
Demás delitos	931	42	2.184	182	3.115	224
Total	7.131	1.338	12.759	412	19.890	1.750

Fuente: consejo general del poder judicial (2013). La justicia dato a dato. <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/La-Justicia-dato-a-dato>

Las estadísticas que anualmente presenta el sistema judicial coexisten con las que elaboran los fiscales así como con las de los diversos cuerpos policiales de ámbito nacional, autonómico y local con competencia en la investigación criminal e incluso en determinadas materias, como la siniestralidad laboral o la violencia de género, con los datos que hayan recopilado durante el año otros organismos e instituciones implicados en la erradicación de concretos fenómenos criminales. Cada una de estas estadísticas recoge de forma ordenada y sistematizada la actividad de la institución u organismo de la que procede de acuerdo con las pautas y criterios establecidos por el mismo en atención a la función encomendada y obviamente de la finalidad que en cada caso justifica el control establecido. En consecuencia estas estadísticas ofrecen resultados distintos porque son reflejo de ámbitos de actuación que no son exactamente iguales sino que ofrecen entre sí importantes diferencias. Así pues, resulta imposible que se produzca una plena coincidencia entre unas y otras estadísticas. Sus resultados serán necesariamente distintos porque son reflejo de diferentes realidades, aunque concurren zonas comunes en todas ellas. De un lado, las estadísticas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en sus correspondientes áreas de competencia, computan separadamente la actividad de cada uno de

⁶² De Quirós Bernaldo (1906). Criminología de los delitos de sangre en España. Madrid. Internacional. Pág. 15.

ellos pese a que, en ocasiones, puede ser coincidente respecto de unos mismos hechos que hayan motivado la actuación de más de un cuerpo policial. Además hay que recordar que las intervenciones que realizan y los datos que registran, en el ejercicio de las funciones que les corresponden como fuerzas de seguridad, no siempre se refieren a hechos o acontecimientos con trascendencia penal.

Otra característica importante de la estadística judicial es que da cuenta de los procedimientos de uno u otro tipo incoados, en los distintos órganos judiciales del territorio nacional durante el año y si bien, en su mayoría, derivan de atestados policiales, éstos no constituyen el único motor de inicio de la actividad judicial, sino que un volumen difícilmente cuantificable de causas judiciales tienen otro origen como denuncias presentadas directamente por los particulares ante el juzgado, causas incoadas por testimonio de particulares de otros procedimientos, diligencias derivadas de la remisión de partes médicos desde hospitales o centros asistenciales o denuncias o querellas presentadas directamente por el Ministerio Fiscal⁶³.

A pesar de las deficiencias que hemos señalado en referencia a las estadísticas judiciales, éstas pueden resultar interesantes y complementarias si se contemplan a nivel longitudinal. Una especial consideración es que por la tardanza de los tribunales de justicia en juzgar a los delincuentes, las cifras procedentes de esta estadística hay que situarlas en desajuste con la estadística policial. Por lo tanto, sus cuentas anuales no dan fe de lo que ha sucedido ese año, sino en años anteriores. Ello supone que entran en un desfase temporal imposible de ajustar con las estadísticas policiales ya que no contemplan los mismos años. A pesar de estas dificultades son importantes porque al fin y al cabo proporcionan la segunda pieza del puzzle de la delincuencia, toda vez que las personas que han sido detenidas o denunciadas se enfrentan en un juicio justo y equilibrado ante los expertos en la aplicación de las leyes: los fiscales y los jueces, que puede modificar la comisión del delito y rebajar así las cantidades manejadas por la policía. Los delitos y faltas conocidos por las diferentes policías son remitidos a los jueces, con lo cual se establece un nuevo paso que consiste en determinar si las personas detenidas son culpables o inocentes.

La lentitud de enjuiciar a los delincuentes que tanto influye en la comparación transversal de las estadísticas judiciales es un proceso lógico si tenemos en cuenta el procedimiento que rodea a un hecho delictivo que debe contar con pruebas y testigos y que deben ser citados en un momento determinado. Esta lentitud y la diferencia de criterio en aplicar la ley entre diferentes jueces, a lo cual habría que añadir la machacona publicidad de los medios de comunicación del cliché de que la policía detiene y los jueces absuelven, es la que ha motivado la baja consideración que la sociedad

⁶³ Fiscal General del Estado (2011). Op. Cit. Pág. 200.

española tiene sobre la justicia, una de las instituciones peor valoradas en las encuestas de imagen institucional. Además, la diferencia de criterio entre jueces hace difícil establecer cuándo se trata de un delito o no, por no considerar la influencia de un buen abogado para determinar el resultado de una condena. Todas estas variables suponen además que una parte de las estadísticas policiales habría que rebajarlas toda vez que muchas detecciones acaban no siendo delitos. Por lo tanto estamos ante otra visión de la delincuencia y ante otra manera de medirla.

Otro problema que afecta a las estadísticas judiciales en España es la elevada proporción de suspensiones de juicios, que alcanza el 26 por 100 de los señalamientos en los Juzgados de lo Penal y el 21 por 100 en las Audiencias Provinciales, con el consiguiente retardo de las causas. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, una vez que se ha concluido con el juicio oral y una vez que se ha dictado la sentencia en la instancia, el tiempo medio de resolución de los recursos que se interponen contra la misma es de 179 días. Es por ello que el proceso es bastante engorroso, como se mantiene desde la Fiscalía: “La suma de los tiempos de cada fase del procedimiento nos suministra la imagen más acabada de la morosa cadencia que lastra la justicia penal en nuestro país. Su impacto en el rendimiento del servicio es bien conocido: la eficacia de la acción penal decae, las pruebas, singularmente las personales, se debilitan o dispersan, las oficinas judicial y fiscal se congestionan con el aluvión de expedientes inconclusos que acrece las nuevas incoaciones, y la aplicación en sentencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas se convierte en un remedio de última hora que sólo compensa, y de forma muy relativa, a la parte pasiva del proceso, cuando no se produce, en los casos más extremos, la declaración judicial de prescripción, que frustra definitivamente las expectativas de las víctimas y de la sociedad en general de lograr una respuesta condigna al hecho delictivo”⁶⁴.

Existe, además, otras circunstancias que pueden condicionar la exactitud de la información estadística sobre la actividad de los órganos judiciales; son las disfunciones inherentes al propio planteamiento del sistema de registro tal y como se encuentra configurado en la fiscalía y en los órganos judiciales, y que, en definitiva, dan lugar a anotaciones que distorsionan, en mayor o menor medida, los resultados finales. Como se sostiene desde el Informe de 2011 de la Fiscalía General del Estado, el problema del registro estadístico es que se lleva a cabo en un momento de la incoación de las diligencias previas, acerca de la calificación jurídica de los hechos investigados, en un momento en el que, por tratarse de la fase de incoación del procedimiento criminal, todavía no concurren datos suficientes para su correcta valoración jurídica. Sin embargo, este inicial registro puede quedar

⁶⁴ Fiscal General del Estado (2014). Informe 2013. Madrid. Fiscal General del Estado. Pág. XIII.

perpetuado –como de hecho ocurre– en aquellos supuestos en que el expediente es directamente archivado o sobreesido por inexistencia de datos para la identificación del autor de los hechos o por cualquier otra razón, lo que inevitablemente puede incidir en las cifras globales relativas a las distintas categorías o tipos delictivos⁶⁵.

En España, las cifras finales proceden de diferentes estancias judiciales, entre las que se encuentran:

- 01.- Tribunal Supremo
- 02.- Audiencia Nacional
- 03.- Tribunales Superiores de Justicia
- 04.- Audiencias Provinciales
- 05.- Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
- 06.- Juzgados de lo Mercantil
- 07.- Juzgados de lo Penal
- 08.- Juzgados de lo Social
- 09.- Juzgados de Menores
- 10.- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
- 11.- Juzgados de Violencia Sobre La Mujer
- 12.- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
- 13.- Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos.

Mientras que la Jurisdicción Penal está conformada por los siguientes juzgados⁶⁶:

- Juzgados Instrucción
- Juzgados de Violencia contra la Mujer
- Juzgados Vigilancia Penitenciaria
- Juzgados de lo Penal
- Juzgados de lo Penal especializados en Violencia contra la Mujer
- Juzgados de lo Penal de Ejecutorias
- Juzgados de Menores
- Juzgados Centrales Instrucción
- Juzgados Centrales de lo Penal
- Juzgados Centrales de Menores
- Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria

La estadística judicial de adultos condenados, es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística⁶⁷ a partir de la información procedente del Registro Central de Penados cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia. Su explotación estadística es consecuencia de un acuerdo de colaboración suscrito en 2007 entre ambas instituciones, que sostiene textualmente que el objetivo fundamental de esta estadística es el análisis de las características

⁶⁵ Fiscal General del Estado (2011). Memoria 2010. Pág. 201.

⁶⁶ Consejo General del Poder Judicial (2013). La justicia dato a dato. <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Analisis-estadistico/La-Justicia-dato-a-dato>.

⁶⁷ INE. <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t18/p466&file=inebase>

sociodemográficas de las personas mayores de edad condenadas por sentencia firme a lo largo del período de referencia. Otra información relevante que ofrece son los delitos que han sido cometidos por personas condenadas así como de las penas que les han sido impuestas. Hasta finales de 2006 la recogida de información de esta estadística se realizaba trimestralmente mediante un boletín en papel que debían cumplimentar los distintos órganos judiciales por cada sentencia dictada. A partir del año de referencia 2007, y gracias al citado acuerdo con el Ministerio de Justicia, se sustituyó el modelo de recogida directa de los datos de la fuente primaria por el modelo alternativo de recogida a partir de registros administrativos, con la consiguiente reducción de carga de trabajo que eso suponía para la administración judicial. En la página web del INE existen resultados disponibles de esta estadística desde el año 1998, aunque han cambiado en varias ocasiones su formato.

Siguiendo con la metodología empleada, según el INE, en la descripción técnica del procedimiento, hay que citar el Registro Central de Penados en donde se registran las condenas correspondientes a las resoluciones firmes dictadas por los Juzgados o Tribunales españoles que suponen penas o medidas de seguridad adicionales por la comisión de un delito o falta. Además, se inscriben las sentencias dictadas por juzgados y tribunales de Estados extranjeros sobre españoles cuando así se determine por los tratados internacionales sobre la materia suscritos por España; las dictadas por juzgados y tribunales europeos, de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales de asistencia jurídica en materia penal y con las disposiciones dictadas por la Unión Europea, así como las dictadas por juzgados y tribunales extranjeros cuando la ejecución de las mismas se realice en España. El Registro contiene información relativa al condenado, al órgano judicial que acuerda la resolución, a la sentencia y al órgano judicial que la ejecuta, al delito, a la víctima y a la pena. El Registro Central de Penados depende del Ministerio de Justicia y está integrado en el sistema de registros administrativos⁶⁸.

Además, la incorporación de datos al Registro Central de Penados se lleva a cabo a través de los medios electrónicos correspondientes utilizados por el secretario judicial de turno, que tiene la obligación de verificar la exactitud del contenido de la información transmitida. Siempre que las condiciones técnicas lo permitan, la transmisión se realiza directamente desde las aplicaciones de gestión procesal. La información sobre las resoluciones que ya son firmes se envían de manera urgente e inmediata y, en cualquier caso, en el plazo máximo de cinco días desde la firmeza de la sentencia. Todo lo cual queda recogido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, que sostiene : “La consecución de este objetivo pasa por proporcionar a los

⁶⁸ INE (2014). Estadística de Condenados: Adultos. Metodología. <http://www.ine.es/metodologia/t18/t1830466.pdf>

jueces, fiscales, secretarios judiciales y policía judicial nuevas herramientas de trabajo que faciliten el manejo de la información y permita que determinados usuarios -previamente definidos, en función del tipo de información que van a manejar- tengan un conocimiento completo de la información que precisan para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y para la correcta toma de decisiones”⁶⁹. Además establece que la administración general del estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia podrán elaborar estadísticas de los datos contenidos en los registros centrales, eludiendo toda referencia personal en la información.

Los delitos se clasifican atendiendo a la denominación y estructura (títulos y capítulos) establecidos en el código penal. Asimismo también se recogen delitos derivados de la ley Orgánica de Represión del Contrabando, ley Orgánica del Régimen Electoral General y la ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Los títulos que hacen referencia a los distintos tipos de delitos de los que se proporciona información en esta estadística son los siguientes⁷⁰:

- I - Homicidio y sus formas
- II - Aborto
- III - Lesiones
- IV - Lesiones al feto
- V - Manipulación genética
- VI - Contra la libertad
- VII – Torturas e integridad moral
- VIIb – Trata de seres humanos
- VIII – Contra la libertad e indemnidad sexuales
- IX - Omisión del deber de socorro
- X - Contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio
- XI - Contra el honor
- XII - Contra las relaciones familiares
- XIII – Contra el patrimonio y orden socioeconómico
- XIV – Contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
- XV - Contra los derechos de los trabajadores
- XVb – Contra los derechos de ciudadanos extranjeros
- XVI - Ordenación del territorio, urbanismo, protección patrimonio histórico y medio ambiente
- XVII – Contra la seguridad colectiva
- XVIII – De las falsedades
- XIX - Contra la Administración Pública
- XX - Contra la Administración de Justicia
- XXI - Contra la Constitución
- XXII - Contra el orden público
- XXIII – Traición, contra la paz y defensa nacional
- XXIV – Contra la comunidad internacional

⁶⁹ Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Pág. 12.994.

⁷⁰ INE (2014). Estadística de Condenados: Adultos. Metodología. <http://www.ine.es/metodologia/t18/t1830466.pdf>

Existen 103 delitos tipificados y 18 clasificaciones que cubren los condenados (7 características sociodemográficas), los delitos (5 categorías) y las penas (6 categorías). La clasificación a la cual se tiene acceso desde 2007 por medio de la página web del Instituto Nacional de Estadística es la siguiente:

- 1.1 Condenados según sexo, edad y nacionalidad
- 1.2 Condenados según sexo, edad y número de delitos
- 1.3 Condenados según sexo, nacionalidad y número de delitos
- 1.4 Condenados según sexo, edad, nacionalidad y número de delitos
- 1.5 Condenados según sexo, edad y número de penas
- 1.6 Condenados según sexo, nacionalidad y número de penas
- 1.7 Condenados según sexo, edad, nacionalidad y número de penas
- 1.8 Delitos según tipo
- 1.9 Delitos según sexo
- 1.10 Delitos según edad
- 1.11 Delitos según nacionalidad
- 1.12 Delitos según grado de comisión
- 1.13 Penas según sexo
- 1.14 Penas según edad
- 1.15 Penas según nacionalidad
- 1.16 Penas según tipo de pena y tipo de delito
- 1.17 Penas de prisión según duración de la pena, sexo, edad y nacionalidad
- 1.18 Penas de prisión según duración de la pena y tipo de delito

Como se puede observar en el cuadro de abajo, las personas condenadas se sitúan en una horquilla que va de los cien mil a los ciento cincuenta mil por año. Un análisis de los delitos más penados arroja cuestiones muy interesantes, por ejemplo, el cambio que se produce entre los años 1997 y 1998, procedente de aplicar la ley 5/1997 de reforma del *tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial*, que establecía la consideración de infracciones muy graves la conducción bajo la ingestión de bebidas alcohólicas o bajo los efectos de estupefacientes, lo que provocó que los delitos contra la seguridad del tráfico crecieran de manera exponencial al igual que decreciera en la misma medida los delitos contra la salud pública, lo que denota que los que eran condenados anteriormente en un capítulo a partir de ese año acabaron siendo condenados en otro, manteniendo así la cifra total de condenados sin grandes variaciones a pesar del cambio de leyes.

Cuadro 7. Principales delitos condenados por las audiencias provinciales y juzgados de lo penal.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Condenados	116.730	110.844	103.649	110.672	99.936	98.500	96.813	102.031	119.980
Homicidio y formas	3.629	3.856	3.550	4.114	4.451	4.891	5.420	6.726	10.225
Contra la libertad	2.661	2.548	2.421	498	575	643	707	753	1.091

Contra la libertad sexual	1.182	931	454	981	974	993	938	1.057	1.147
Omisión del deber de socorro	40	32	24	16	24	41
Contra la intimidad	118	94	68	76	56	81
Contra el honor	25	31	39	62	43	42	60	39	66
Contra las relaciones familiares	13	13	1616	1.995	1.956	1.970	2.220	2.332	2.690
Contra el patrimonio	55.425	49.642	45.279	47.380	41.787	39.256	35.327	37.944	42.866
Medio ambiente ordenación territorio	146	133	108	131	137	129
Contra la seguridad colectiva	120	38	71	86	78	123
Contra la salud pública	30.613	31.208	31.076	7.317	6.805	7.278	7.126	7.406	8.047
Contra la seguridad del tráfico	1.056	1.007	874	29.310	27.079	26.437	27.792	28.201	32.262
De las falsedades	2.848	2.633	2.607	2.081	1.942	1.880	1.920	1.802	1.972
Contra la Administración Pública	258	341	614	242	142	189	169	118	107
Contra la Administración de Justicia	3.647	4.006	3.991	3.745	2.707	2.702	2.715	3.303	4.259
Contra la Constitución	3.892	3.802	3.547	222	77	533	889	86	27
Contra el orden público	3.489	3.063	3.294	3.451	3.584	4.583
Contra la paz e independencia	587	584	785	446	33	8
Contra la Comunidad Internacional	2	0	0	0	0	0
Concurso de delitos	8.086	8.139	7.314	7.428	6.858	7.052	7.016	7652	9.463

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del INE de Registro Central de Penados de titularidad del Ministerio de Justicia.

En un estudio sobre el impacto de la droga en la justicia española llevado a cabo por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología sobre las sentencias penales de 1999⁷¹, se señala cómo del conjunto de sentencias penales vistas por los tribunales españoles, más de una de cada tres tenían vinculación con las drogas, entendiendo por vinculación cualquier tipo de delito que sea inducido por el consumo e intoxicación de la droga como conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras drogas, delinquir con el objeto de obtener drogas, contra la salud pública en que la droga es el objeto material o cuando el inculcado es adicto o ha consumido drogas o cuando la droga aparece como determinante causal o coadyugante de la ejecución.

En las audiencias provinciales casi un 40 por ciento tenían relación con las drogas, especialmente con el alcohol y el delito predominante era contra la seguridad del tráfico. Estas cifras servirían como referente para las numerosas teorías que asocian la propensión de los drogadictos frente a los no drogadictos de cometer delitos y de tener asuntos pendientes con la justicia, aunque, a pesar de que el consumo de drogas pueda ser el catalizador para cometer el delito, habría que ser prudente al establecer el posible modelo de causalidad, toda vez que tanto el consumo de drogas como la delincuencia puedan ser a su vez causas de variables tales como la pobreza, los bajos ingresos económicos o la pérdida de estabilidad familiar⁷². Lo cierto es que el usuario crónico de estupefacientes necesita

⁷¹ Muñoz J. (2002). Las drogas en la delincuencia y su tratamiento por la administración de justicia. *Boletín Criminológico*. Nº 61. Págs. 1-4.

⁷² Zhang J. (1997). The effect of welfare programs on criminal behaviour: a theoretical and empirical analysis. *Economy Inquiry*. Nº 35. Págs. 120-137.

cantidades importantes de dinero para el suministro necesario, lo cual en muchas ocasiones le conduce al delito y a ser víctima del delito contribuyendo desproporcionadamente a los costes sociales del delito⁷³. Los informes policiales sobre muchos detenidos indican el consumo de sustancias prohibidas en el momento del arresto.

A partir de 2007 se cambian la presentación de las estadísticas y se amplían las categorías.

Cuadro 8. Condenados según número de delitos (1 delito).

	2006	2007	2008	2010	2012
TOTAL	142.746	135.224	196.143	178.143	183.099
Homicidio y formas	570	367	474	637	612
Del aborto	4	13	11	9	11
De las lesiones	23.429	18.227	20.007	22.258	21.720
De las lesiones al feto	2	11	12		9
Relativos a la manipulación genética	1	2	2		
Contra la libertad	3.657	2.504	3.583	5.474	5.264
De las torturas y otros delitos contra la integridad moral	2.238	370	1.028	1.447	1.029
De la trata de seres humanos					6
Contra la libertad e indemnidad sexuales	1.322	908	1.137	1.450	1.566
De la omisión del deber de socorro	38	66	28	25	25
Contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio	88	82	96	124	176
Contra el honor	72	66	60	71	71
Contra las relaciones familiares	3.094	2.187	2.704	4.214	5.244
Contra el patrimonio y el orden socioeconómico	36.238	23.472	27.507	32.529	36.513
Contra la hacienda pública y la seguridad social	242	134	104	133	165
Contra los derechos de los trabajadores	720	293	300	342	345
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros		211	308	262	105
Ord. del territorio y proteger patri. histórico y medio ambiente	274	216	406	589	704
Contra la seguridad colectiva	42.512	46.947	84.988	90.242	87.599
De las falsedades	2.409	2.060	2.345	2.955	3.943
Contra la Administración Pública	80	55	408	141	363
Contra la Administración de Justicia	7.827	5.154	60.020	8.119	9.675
Contra la Constitución	75	83	47	35	75
Contra el orden público	6.391	5.354	5.712	6.967	7.781
Delitos de traición y contra la paz o independencia	10				1
Contra la comunidad internacional	1	16	20	3	7
Concurso de delitos	11.452				
Ley Orgánica de represión del Contrabando				53	54
Ley Orgánica del Régimen Electoral General				64	36

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del INE de Registro Central de Penados de titularidad del Ministerio de Justicia. Último año 2014. Pág. 191.

2.2.2.2. Las estadísticas fiscales

⁷³ French M. Et Alt. (2004). Revolving roles in drug-related crimes: the cost of chronic drug users as victims and perpetrators. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 20. Nº 3. Págs. 217-241.

El segundo organismo oficial en proporcionar datos sobre la delincuencia es el Ministerio Fiscal. Su importancia radica no tanto en las estadísticas que aporta que no son presentadas como tales, sino las incidencias que recogen sus memorias. Sus cifras de actuación contra la delincuencia se encuentran publicadas en sus respectivas memorias, pero no son recogidas por el Instituto Nacional de Estadística como ocurre con las de los jueces. Al igual que en las anteriores, ofrecen datos anuales sobre delitos circunscritos a sus ámbitos de competencia, algo que suele ocasionar un gran desconcierto en los no legos en la materia porque lógicamente nunca coinciden con las de los jueces o la policía. Como es lógico el funcionamiento de todo el entramado es complementario, aunque aparentemente pudiera resultar contradictorio, el caso es que la policía tiene conocimiento del delito o falta, levanta un atestado o si se ha producido una detención envía al presunto delincuente a la justicia. El primer paso conduce al detenido al juzgado de guardia en donde se determina la libertad provisional y la cuantía de la fianza; de ahí al juzgado de instrucción donde el fiscal decide mantener la acusación y solicitar la pena adecuada; más tarde al juzgado de lo penal donde se admiten las pruebas, se condena o se absuelve, se fija la pena y se decide sobre la sustitución de ésta si fuera procedente; si finalmente va a la cárcel, el juzgado de vigilancia penitenciaria decide sobre los diferentes permisos y la concesión o no de la libertad condicional. Muchos presuntos autores saldrán sin cargos por faltas de pruebas o por considerarles inocentes⁷⁴.

Cuando un hecho delictivo es constatado por la policía, su calificación jurídica no siempre es posible, por lo que se produce una calificación provisional que permite una primera orientación del procedimiento de manera que puede acabar en nada o ser objeto de una instrucción. Por lo que en este primer paso se produce ya un desajuste en la medición de la delincuencia. Las estadísticas de la Fiscalía reflejan los datos referentes a su intervención en los procedimientos criminales tramitados por los juzgados y tribunales, si bien restringida a los delitos públicos y semipúblicos y también sus propias actividades de investigación, al amparo del artículo 5 de su Estatuto Orgánico, que pueden o no dar lugar, según los casos, a la posterior incoación de un procedimiento penal. Estas diferencias determinan también, por sí mismas, un factor importante de divergencia en el tratamiento de la información, ya que un mismo hecho puede haber sido contabilizado en todas las estadísticas a las que antes nos hemos referido o constatarse únicamente en alguna o algunas de ellas⁷⁵.

⁷⁴ Fernández E. et alt. (2014). el proceso de producción de datos de la fiscalía: reflexiones sobre la tipificación de los hechos. *Centro de Investigación en Criminología. Universidad de Castilla-La Mancha*.

⁷⁵ Fiscalía General del Estado. Op. Cit., Pág. 199.

Según la Fiscalía General del Estado, en su Memoria del 2012, las memorias que publican este órgano, ofrecen a los poderes públicos y a la sociedad en general una imagen de la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal, tanto ante los órganos jurisdiccionales –mediante el ejercicio de las correspondientes acciones procesales o la oposición a las ejercitadas por otras partes– como en las restantes facetas de su intervención oficial de acuerdo con las funciones que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, y tal como se reconoce las diferentes memorias que se publican cada año, “no puede aspirar a realizar un análisis sociológico afinado y exacto, pues las aplicaciones informáticas y los sistemas de recogida y explotación de datos estadísticos de los que se sirven las Fiscalías adolecen de la metodología adecuada para alcanzar la precisión científica en la evaluación de estas realidades. Dado que según se reconoce una correcta valoración de la evolución de la criminalidad no puede alcanzarse desde la contemplación cuantitativa de los procedimientos judiciales, por lo que debería evitarse particularmente el establecimiento de una equivalencia matemática entre el número de causas y los delitos. Es por todo ello que el crecimiento o decrecimiento del conjunto de procedimientos judiciales o intervenciones fiscales, en su comparación con ejercicios anteriores, no guarda necesariamente proporción con el crecimiento o decrecimiento del índice real de los delitos”⁷⁶.

Por otra parte, y como se sigue sosteniendo desde la citada Memoria, la última década ha sido testigo de un proceso acelerado de reforma estructural del Ministerio Fiscal que ha servido para acreditar su extraordinaria versatilidad y su capacidad de adaptación. Su estructura interna, su modo de implantación territorial y su articulación en el seno de su organización jerárquica, se ha modificado profundamente a través de leyes como la 24/2007, de 9 de octubre, en donde se sostiene que : “En efecto, el desarrollo social, económico y tecnológico de un lado, y la consolidación del Estado de las Autonomías de otro, junto a la evolución del proceso -en especial del proceso penal -hacia fórmulas que exigen una presencia e intervención mucho mayor del Fiscal, exigen hoy la reordenación íntegra de las coordinadas organizativas del Ministerio Público, en el doble plano de su capacidad de especialización y de implantación territorial, de modo que su necesaria unidad de actuación se traduzca, como garantía esencial de los ciudadanos, en una presencia del Fiscal igual, y con el mismo grado de especialización por materias, en cualquier punto de España”⁷⁷. Otra modificación a destacar fue la del año 2012 para evitar la configuración que tradicionalmente se venía dando en virtud de la cual se aquilataba la actividad del Fiscal y la evolución de la delincuencia en función del volumen cuantitativo de procedimientos judiciales incoados o tramitados en

⁷⁶ Fiscalía General del Estado (2013). Memoria 2012.

⁷⁷ Ley de 24/2007, de 9 de octubre. Pág. 41197.

el año memorial, por entender que resulta escasamente representativa de la actividad del Fiscal, cuando no claramente desviada de la realidad sociológica de la evolución cualitativa del delito⁷⁸.

La información que recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado es fruto del trabajo de un colectivo variado de fiscales y funcionarios, que actúan en todas las fiscalías con herramientas y condiciones de trabajo no siempre similares, sin que tampoco la sensibilidad acerca de la relevancia de esta cuestión sea siempre la misma. El Ministerio Fiscal hace inventario de sí mismo y de la administración de justicia en la que actúa y reflexionando sobre ello, por lo que cada año, los datos que proporciona son de mayor calidad. Planificar la tarea estadística requiere definir con precisión los objetivos, priorizarlos y poner medios para que el resultado responda a unos mínimos de calidad. Según la fiscalía en su informe del año 2010:

Debe descartarse, por tanto, cualquier pretensión de utilizar los resultados que exponemos en este capítulo para extraer conclusiones de carácter general sobre la evolución de la delincuencia en nuestro país en el último período anual, ya que los datos que ofrecemos han de interpretarse en el contexto en el que se han originado que es el de la actuación del Ministerio Fiscal en el año objeto de estudio. Las comparaciones meramente numéricas entre las cifras obtenidas y las que puedan ofrecer otros organismos o instituciones también vinculados a esta misma labor, obviando los parámetros que enmarcan este estudio, implica un serio riesgo de incurrir en interpretaciones erróneas que en nada ayudan a una adecuada reflexión sobre el alcance y la incidencia de la delincuencia⁷⁹.

De acuerdo a la Memoria de 2011, aunque habitualmente se hacen las oportunas reservas para comprender mejor la naturaleza de la información que se brinda, es fundamental dejar asentados dos puntos: 1.º) La estadística básicamente se refiere a tres momentos procesales bien diferenciados: los delitos por los que se incoan los procedimientos, los delitos por los que el Ministerio Fiscal acusa y los que definitivamente se consignan en las sentencias condenatorias que se dictan. 2.º) La incoación es un momento en el que prima la indefinición, por lo que la estadística que se corresponde con los datos de incoación carece de solidez para un estudio serio científico o estadístico. Su valor es solo aproximativo. El curso del procedimiento sirve para depurarlo y esa depuración se hace precisamente en la calificación primero y, finalmente, en la sentencia. La información se presenta en forma

⁷⁸ Fiscalía General del Estado (2013). Memoria 2012.

⁷⁹ Fiscal General del Estado (2013). Memoria 2012. Pág. IX.

de porcentaje, ya que ofrece una imagen más gráfica de la realidad y permite corregir algunas lagunas de información.

Otra cuestión importante recogida en la memoria del año 2012 es que no se omite la necesaria relación cuantitativa de los procedimientos judiciales en los que el Fiscal ha tenido participación, pues dicha relación numérica constatada en la entrada de asuntos en las Fiscalías según los diferentes tipos de procedimiento, no hace nada más que reflejar una dimensión que resulta imprescindible en el trabajo que el fiscal desempeña; sin embargo, lo que sí varía es la metodología de análisis de la evolución cualitativa de la delincuencia, que se desvincula de la relación numérica de procedimientos judiciales para concentrarse en grupos predeterminados de delitos de fuerte impacto social, en relación con los cuales se ha instado de los jefes de los órganos y a las unidades del Ministerio Fiscal que desarrollen un esfuerzo especial en la valoración de las causas sociales, económicas o de otra índole explicativas del surgimiento de estos hechos delictivos en sus respectivos ámbitos de competencia territorial o funcional.

Las áreas de análisis establecidas son las siguientes:

- Vida e integridad física.
- Libertad sexual.
- Violencia doméstica.
- Relaciones familiares.
- Patrimonio y orden socioeconómico.
- Consumo.
- Administración Pública.
- Hacienda Pública.
- Salud pública.

Igualmente relevante es la aportación a la Memoria de las dos grandes Fiscalías Especiales: la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, cuyos efectos se pueden observar en temas como:

- La Corrupción social, política y económica.
- Sustracción de menores recién nacidos.
- Valoración del cumplimiento del protocolo sobre conformidades y referencia a las expectativas sobre mediación penal.
- Tramitación de los procedimientos de ejecución penal en las diferentes Fiscalías.
- Propuestas de reformas legislativas.

Por otra parte, hay que señalar que no todos los procedimientos judiciales o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal incoadas en un año se corresponden con acciones criminales realmente ejecutadas. Es un dato fácilmente constatable en la actividad de las Fiscalías y de los Tribunales que, en múltiples ocasiones, comportamientos que llegan a conocimiento de estos órganos como presuntamente constitutivos de delito o falta, resultan

finalmente atípicos. Los ejemplos son numerosos: procedimientos incoados como consecuencia de partes hospitalarios o asistenciales expedidos en atención a lesiones causadas fortuitamente o subsiguientes a conductas sin trascendencia penal; denuncias relativas a supuestas sustracciones al descuido de documentos u objetos que responden realmente a pérdidas o extravíos y, en fin aquellas otras relativas a comportamientos sin trascendencia penal aun cuando impliquen irregularidades o incumplimientos de naturaleza civil, mercantil, administrativa o laboral. La cuantificación de las diligencias y/o procedimientos judiciales o del Ministerio Fiscal computables en este apartado y su incidencia en las cifras globales y parciales de delincuencia anual resulta extremadamente difícil, al menos con las herramientas informáticas de que disponemos, por lo que esta circunstancia constituye otro elemento importante de distorsión a los efectos que nos ocupan⁸⁰.

A ello debe unirse un segundo factor de desviación que incide en esta misma línea: tampoco el número de causas judiciales o investigaciones del Ministerio Fiscal tramitadas en el año coincide plenamente con el de los hechos presuntamente ilícitos denunciados en el mismo periodo pues, en un número indeterminado de ocasiones, un mismo acontecimiento puede determinar dos o más incoaciones procesales o pre procesales y, en consecuencia, una pluralidad de anotaciones estadísticas. Esta circunstancia es especialmente frecuente en relación con aquellos comportamientos presuntamente delictivos, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se ven afectadas dos o más personas y que pueden generar diversas denuncias en relación con un mismo hecho o en los delitos cuyos efectos se han detectado simultánea o sucesivamente en distintos lugares del territorio nacional, dando en todos ellos ocasión a la incoación de la correspondiente investigación. Evidentemente todas estas circunstancias se solventarán durante la tramitación de los distintos procedimientos a través de los mecanismos procesales oportunos pero ello difícilmente subsanará, a los efectos estadísticos que aquí nos interesan, la anotación múltiple efectuada inicialmente que como tal quedará registrada generándose de esta forma divergencias en el cómputo efectivo de procedimientos que difícilmente pueden ser corregidas con posterioridad⁸¹.

2.2.2.3. Las estadísticas policiales:

Las estadísticas policiales surgieron en Francia, cuando se constató las limitaciones de las estadísticas judiciales. Durante mucho tiempo las estadísticas de la delincuencia en Francia fueron una cuestión de la vía judicial plasmada en la *Compte Général de l'Administration de la Justice*

⁸⁰ Fiscalía General del Estado (2012). Memoria 2011. Pág. 198.

⁸¹ Fiscalía (2011). Op. Cit. Pág. 199.

Criminelle, publicada por primera vez en 1825. A finales del siglo XIX aparecieron unas estadísticas de arrestos establecidas por la prefectura de policía del Sena. Después de la II Guerra Mundial, la estadística judicial decreció en sus objetivos de estudiar la criminalidad y se concentró, sobre datos globales de la actividad de los tribunales de justicia y de la jurisdicción de sentencias a través de herramientas de colección de datos denominados “cuadros de tribunal de justicia” destinados a elaborar una estadística de actividad interna. A partir de aquí comenzó a cuestionarse la utilización de esas cifras para ilustrar el conocimiento de la delincuencia. Y aunque se pensó seriamente que este procedimiento no era válido, la explotación de la ficha de los antecedentes judiciales siguió enmascarando las deficiencias de esta contabilidad, sobre todo durante los años en los que la gestión le fue confiada a un nuevo centro de investigación denominado el *Service d'Études Pénales et Criminologiques* (SEPC) que inició sus actividades en el seno del Ministère de la Justice a partir de 1968⁸².

El hecho es que las estadísticas sobre la delincuencia demostraron su innegable utilidad por lo que el estudio cuantitativo de un fenómeno social tan importante como éste se fue depurando año tras año por medio de unas mediciones más completas y más fiables tanto en su tamaño como en sus categorías⁸³. Como sostiene Hope⁸⁴ existen dos visiones sobre las estadísticas de la delincuencia dentro de la criminología, una de ellas se podría denominar como la visión realista, porque contempla las cifras oficiales como el indicador del delito en una sociedad. Se trataría de que éstas se refinan, se depuren de manera que ofrezcan un dato con una alta acuracidad del modelo y tendencia del delito en una sociedad. Una de las utilidades de estas estadísticas es que los poderes públicos puedan actuar en este terreno modificando las leyes o los castigos para que como sostiene el Government Review of Crime Statistic for England and Wales se pueda reducir el impacto de la delincuencia en la población. La siguiente visión está relacionada con las estadísticas delictivas al tratarlas como “hechos sociales”, es decir un indicador de las condiciones generales de una sociedad como un todo y de cómo opera contra la desviación de las normas.

⁸² Aubusson de Cavarlay B. (2007). Des comptes rendus à la statistique criminelle : c'est l'unité qui compte (France, XIX^e-XX^e siècles). *Historie et mesure*. Págs. 39-73.

⁸³ Van Dijk, J. J. M. (2008). *The World of crime; breaking the silence on problems of crime, justice and development*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Jupp, V. (1989). *Methods of Criminological Research*. Contemporary Social Research Series. London: Unwin Hyman. ISBN 0-04-445066-4.

Van der Westhuizen, J. (1981). *Measurement of crime*. Pretoria: University of South Africa. ISBN 0-86981-197-5.

Van Dijk, J. J. M.; van Kesteren, J. N.; Smit, P. (2008). *Criminal Victimization in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*. The Hague: Boom Legal Publishers.

⁸⁴ Hope T. and Matrix Research and Consultancy and (2006). Report No. 30. *Crime Statistics: User Perspectives*. London. Statistics Commission

A nivel europeo existen dos procedimientos básicos en este tipo de contabilidad, la de aquellos países que anotan los delitos según se han denunciado en la policía (España, Reino Unido) y los que lo hacen una vez que se ha efectuado la investigación y se determina si es o no delito (Francia), lo que supone que la delincuencia sea siempre mayor en el primero de los casos. De una manera o de otra las series policiales están ampliamente reconocidas como útiles o por los expertos en criminología, ya que aunque no puedan poseer mucho valor en su faceta de análisis comparativo a nivel transnacional, si lo posee en las series históricas, siempre que se tomen en cuenta las transformaciones legales que hayan ocurrido.

Como sostiene Maguire⁸⁵ aunque las diferentes instancias ministeriales imponen el marco formal para la contabilización de la delincuencia, luego existen muchos recovecos que son difíciles de controlar, por ejemplo, la declaración de un delito por parte del público, en donde un bolso robado sea simplemente un bolso perdido, lo que incide poderosamente a la hora de decidir si se computa o no como delito por parte de la policía. Por eso, a través de los años han surgido muchas dudas sobre la validez de las estadísticas oficiales. Los investigadores han identificado ejemplos de la ocultación de delitos por parte de la policía en base a aminorarlos por una parte de exceso de trabajo y de mejorar las estadísticas y de inflarlos al incorporar pequeños delitos con objeto de llamar la atención de la falta de medios. Según Coleman y Moynihan (2004)⁸⁶, Las estadísticas policiales conocidas como oficiales dependen de tres procesos: descubrimiento, denuncia, registro.

En cuanto a la actuación de la policía al reflejar los delitos, una simple modificación de los estándares de registro, como en el caso inglés, han puesto en evidencia las enormes dificultades de llevarlas a cabo en algunos distritos policiales. Solamente el hecho de considerar una sospecha o una pequeña denuncia –comportamiento antisocial que provoca una llamada telefónica- como delito hizo incrementar en el año 2003 en Inglaterra y Gales el 75 por ciento el número de las denuncias. Otra gran incidencia en la estadística de la delincuencia procede de la política policial o prioridades operacionales en base a altos niveles de victimización provocados por ejemplo por la prensa, en donde una gran actividad al patrullar la ciudad o en labores preventivas puede tener efectos considerables. Una simple comprobación de pertenencia de drogas en un macro concierto juvenil o una comprobación exhaustiva de niveles de alcoholemia al volante en unas fiestas locales tendría sin duda un gran impacto en las estadísticas de delincuencia de ese año.

Los investigadores de la criminología y justicia criminal han lamentado largamente la "cifra oscura de la delincuencia" porque están muy

⁸⁵ Maguire (2011). Oxford handbook of criminology. Pág. 261.

⁸⁶ Coleman y Moynihan (2004). Understanding crime data. United Kingdom. Open University Press. Pág. 31- 36.

conscientes de que la mayoría de los delitos no se denuncian en la aplicación de la ley. Este hecho socava la fe en las fuentes oficiales como representaciones exactas del delito en países como los Estados Unidos. En su análisis de la notificación a la policía entre 1973 y 2005, Baumer y Lauritsen⁸⁷ encontraron que sólo el 40% de los incidentes violentos no letales y 32% de delitos contra la propiedad fueron denunciados. Estos ratios son bastante consistentes con otros análisis llevados a cabo por ejemplo en el Reino Unido⁸⁸. Basándose en los datos de la victimización de la encuesta británica de del delito sobre cambios en la tasa de denuncias de informes en Gran Bretaña entre 1991 y a 2007/2008, Tarling and Morris⁸⁹ descubrieron que los informes de incidentes disminuyeron aproximadamente cuatro puntos porcentuales durante esos años. Este hallazgo contrasta con Baumer y de Lauritsen cuyos resultados muestra que los Estados Unidos han experimentado modestos incrementos en la tasa de denuncias policiales en los últimos 30 años.

La investigación sugiere que es importante entender las diversas razones por las que un delito no es denunciado a la policía⁹⁰. La no denuncia socava la capacidad del sistema de justicia penal para realizar sus funciones claves. Cuando un incidente no es declarado, es poco probable que el agresor será aprehendido, disuadido o tratado adecuadamente ya sea a través de estrategias punitivas o reintegración. Las víctimas en estos casos es poco probable que recuperen lo perdido o que reciban atención mental o física. Por otra parte, las mediciones oficiales juegan un papel importante en la comprensión de cómo el delito afecta a individuos y comunidades. Datos inexactos distorsionan la visión de los procesos sociales que dan origen a la delincuencia en nuestra sociedad. En la medida en que las estimaciones que comparan los niveles del delito en el vecindario son defectuosas, las medidas para el control de la criminalidad pueden ser asignadas erróneamente, dejando a las comunidades más desfavorecidas y a los que no han denunciado marginadas. La falta de denuncia sugiere además una relación problemática entre el público y la policía y supone una falta generalizada de confianza pública y fe en el sistema de justicia penal⁹¹.

⁸⁷ Baumer y Lauritsen (2010). Reporting crime to the police, 1973–2005: a multivariate analysis of long-term trends in the national crime survey (ncs) and national crime victimization survey (ncvs). *Criminology*. V. 48. N. 1. Págs. 131-185.

⁸⁸ Hart, T., and Rennison C. (2003). *Reporting Crime to the Police, 1992–2000*. Bureau of Justice Statistics Special Report. Washington, DC: U.S. Department of Justice.

⁸⁹ Tarling R. and Morris K. (2010). Reporting Crime to the Police. *British Journal of Criminology* N° 50, 474–490.

⁹⁰ Rennison, C. Gover A. Bosick S. & Dodge M. (2011). Reporting Violent Victimization to the Police: A Focus on Race/Hispanic Origin of the Victim among Adolescents. In “Health Disparities in Alcohol Use, Delinquency and Violence among Minority Adolescents,” Special Issue of *Open Family Studies Journal* N° 4. Págs. 54-67.

⁹¹ Bosic et al. (2012). Reporting violence to the police: predicted through the life course. *Journal of Criminal Justice*. Págs. 441-451.

La baja notificación constituye un problema significativo, incluso si estuviera igualmente distribuido en la población. Pero, de hecho, parece que la notificación a la policía es más probable entre ciertas poblaciones. Huey y Quirouette⁹² sugirieron, por ejemplo, que un "código antisnitching" desalienta la información a la policía de los desamparados. Esta expectativa puede ser diferente para las mujeres que se consideran inherentemente más vulnerables. El hecho de que la victimización en los hombres es menos probable que sea denunciada que la victimización de las mujeres está ampliamente difundido en la literatura⁹³. Los resultados de diversas investigaciones sugieren la necesidad de iniciar procesos de socialización de género que puedan contribuir a etiquetar a victimización como anti masculina.

La falta de denuncias o subregistros también son más comunes en los barrios caracterizados por una baja eficacia colectiva, en la que los vecinos no se implican en la seguridad de todos. Esta situación crea una desafortunada paradoja en aquellas comunidades que más podrían ganar con unas relaciones mejoradas y con un incremento de confianza en el sistema de justicia penal ya que son probablemente los menos propensos a informar a la policía en momentos críticos. Avakame, Fyfe y McCoy⁹⁴ encontraron que numerosos factores extralegales, tales como raza, género, riqueza y educación, afectan a las víctimas de delincuencia violenta en su decisión de informar a la policía. Otros estudiosos han demostrado que el estatus de inmigrante, posición marital y raza de la víctima más influyen en las tasas de notificación.

Las víctimas pueden optar por no denunciar el crimen a la policía o pueden no ser conscientes de que han sido víctima de la delincuencia. Además, informes pueden ser auto incriminatorias (por ejemplo cuando una víctima también es un delincuente) o humillantes; o la víctima puede pensar que nada se ganará por la divulgación (por ejemplo la víctima cree que la policía no será capaz de resolver el crimen). Si una víctima no reportar un crimen, y la policía no aprenden sobre el delito de otra fuente, el delito no será registrado y por consiguiente no cuentan en las estadísticas policiales. La investigación sugiere que las víctimas de asaltos o violaciones tienden a ser menos propensos a denunciar el delito que las víctimas de delitos de propiedad. Incluso cuando se informa de un crimen a la policía, no se pueden grabar en las estadísticas oficiales. Esto ocurre principalmente después de las investigaciones que llevan a la policía al creer que el evento

⁹² Huey, L., and Quirouette, M. (2010). Any girl can call the cops, no problem. *British Journal of Criminology*, 50(2), 278–295.

⁹³ Catalano, S. M. (2006). *The Measurement of Crime: Victim Reporting and Police Recording*. New York: LFB Scholarly Pub. ISBN 1-59332-155-4.

⁹⁴ Avakame EF, Fyfe JJ, McCoy C. (1999). "Did you call the police? What did they do?" An empirical assessment of Black's theory of mobilization of law. *Justice Quarterly* N° 16. Págs. 765-792.

reportado no constituía en realidad un crimen. Investigaciones han demostrado que la grabación es menos probable que ocurra por delitos contra las personas que por delitos de propiedad. No todos los delitos son divulgados por una víctima o testigo⁹⁵.

2.2.2.4. Las encuestas de victimización.

Existe una parte importante de delincuencia que no se refleja en ninguna de las estadísticas que hemos manejado, se trata de la delincuencia oculta para los medios oficiales, pues no en balde, las estadísticas policiales se etiquetan como “delitos y faltas conocidos”. Una referencia que sirve para llamar la atención sobre el hecho de que los datos que se computan, se refieren única y exclusivamente a aquellos que son o bien denunciados por la población o bien obtenidos por medio de la acción policial, existiendo otra gran parte que nunca llega a ser denunciada por diversos motivos. Por ejemplo, las infracciones de tráfico sobre velocidad son numerosas, pero solo se castigan las que son detectadas bien por un radar o bien por un control en algún punto determinado de la carretera. Igual cabe decir de conducir ebrio, solo detectable en algún control de alcoholemia. También se podrían citar los numerosos pequeños hurtos que se producen en el comercio o los pequeños robos que no se denuncian o la violencia familiar que suele quedar confinada de puertas adentro.

Así, en primer término, es de todos conocido que un número indeterminado de acciones criminales realmente ejecutadas, delitos o faltas según su entidad, nunca llegan a conocimiento de los órganos encargados de su persecución y por tanto nunca pueden ser computadas a efectos estadísticos en los estudios y valoraciones que anualmente presentan los distintos organismos e instituciones que tienen atribuida esta función. Hechos ilícitos de los que nadie, salvo su autor, llega a tener conocimiento efectivo por lo que nunca son descubiertos o aquellos que, aun descubiertos, no son comunicados a quien tiene atribuciones para su persecución y castigo, entre los que se encuentran aquellos comportamientos criminales que víctimas o perjudicados, por muy diversas razones, optan por no denunciar. En definitiva, desconocemos el volumen y la naturaleza de todos estos comportamientos ilícitos que quedan extramuros de cualquier estadística oficial, y las variaciones que, por uno u otro motivo se producen anualmente en relación con ello, circunstancia que constituye un primer factor de distorsión en cualquier estudio acerca de esta materia⁹⁶.

Otro elemento a tener en cuenta en las estadísticas, según Garrido,

⁹⁵ Torrente, D. (1998). La medición de la delincuencia: Análisis comparativo sobre la elaboración de estadísticas delictivas en Inglaterra y España. *Cuadernos de Política Criminal*(65), 495-520

⁹⁶ Fiscalía General del Estado (2011). Informe. Pág. 197.

Stangeland y Redondo⁹⁷ es el proceso de la delincuencia en España, que podría ser resumido en los siguientes pasos:

- . *Delitos que nadie detecta*. Normalmente son delitos contra una colectividad de personas, como fraudes a la Hacienda Pública, corrupción, delitos contra el medio ambiente, robos en grandes almacenes, tráfico de drogas u otros delitos donde no hay una víctima concreta (consciente de serlo).
- . *Hechos que no se definen como actos delictivos*. La bicicleta que falta, ¿es un préstamo o un robo? El marido que insulta, ¿es un maltratador?
- . *Hechos que no vale la pena denunciar* (en la valoración de la víctima). En estos casos existe una víctima que aunque considera que ha sufrido un delito no presenta denuncia.
- . *Avisos a la policía*. Cualquier policía que patrulle por las calles de una ciudad a pie, observa que difícilmente puede caminar más de cien metros sin que alguien se dirija a él o ella.

Ello supone que cuando se trabaja con las estadísticas policiales o judiciales estamos ante un margen de error, toda vez, que existe una importante diferencia entre los delitos conocidos por estos organismos y la delincuencia real, delincuencia negra o delito no denunciado. La distancia entre ambas quedó patente en los países occidentales cuando a mediados del siglo pasado y desde ámbitos sociológicos se empezó a cuestionar los estereotipos sobre clase social y raza con que los organismos oficiales impregnaban sus datos para explicar las causas de los delitos. Surgieron los autoinformes y las encuestas de victimización. Los resultados de esta manera alternativa de medir la delincuencia acompañada del contexto social que la motivaba no se hicieron esperar y fue posible analizar las circunstancias de la policía y de los jueces que efectivamente detenía y se juzgaba más a determinadas clases sociales y a determinados grupos étnicos como producto de estereotipos clasistas, machistas y racistas en la gestión de la delincuencia.

Investigadores de Estados Unidos, bajo el auspicio de la *President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice*, creada por Lyndon Johnson en 1965, desarrollaron una innovadora herramienta de estadística basada en encuestas de victimización para medir la frecuencia de los fenómenos de delincuencia y poder así complementar y sustituir las limitaciones de las estadísticas recogidas por la policía. Este tipo de estudio consiste en examinar una muestra de la población sobre los abusos sufridos durante los últimos años. Preguntando directamente a las personas que han sido víctimas personalmente de una agresión (físicas o sexuales, amenazas) o en sus bienes (vuelos, destrucción o daño), se puede obtener información

⁹⁷ Redondo S. y Garrido V. (2013). *Principios de criminología*. Valencia. Tirant lo Blanch.

sobre todos los actos sufridos, que han sido objeto de una denuncia o no⁹⁸. Desde entonces han alcanzado el rango de interés nacional en países como Estados Unidos (National Crime Victimization Survey) con un estudio panel anual desde 1974, o Gran Bretaña (British Crime Survey), en donde desde 1981 se han desarrollado con una periodicidad bianual o anual, o a nivel internacional (International Crime Victimization Survey) comenzado en el año 1989 y cubriendo 15 países industrializados, uno de Europa del este y uno subdesarrollado. Las deficiencias observadas en las encuestas de victimización también han seguido un importante control de depuración en los últimos años, ya que existen algunas limitaciones por ejemplo el que aquellos que sufren un altercado grave no puedan informar sobre él por haber fallecido, el que no se recuerden bien los atropellos sufridos al cabo de algunos años o algunos meses, el inflar el número de delitos que se ha padecido, el no informar sobre agresiones sexuales, el tamaño necesario de entrevistas para aminorar los sesgos del muestreo.

A pesar de que estas encuestas presentan problemas de financiación, de intervención política y de cuestiones metodológicas son sumamente interesantes por el tipo de análisis sociológico que permiten. En el caso de la NCVS americana ha posibilitado el que algunos autores hayan podido demostrar con estudios longitudinales cómo la delincuencia afecta en mayor medida al quintil de ingresos más bajos que al resto de los grupos de ingresos, concretamente en los delitos más violentos detectados por este tipo de estudios la relación era de tres veces más en el grupo de abajo que en el grupo de arriba, lo que permite demostrar la relación que existe entre desigualdad y delincuencia. En el caso de la BCS inglesa, la llevado a cabo en 1997 reflejaba aspectos tan interesantes cómo tan solo el 44 por ciento de los delitos había sido denunciado a la policía, aunque este porcentaje varía intensamente dependiendo del tipo de delito que se contemplaba, por ejemplo, aunque el 97 por ciento de los vehículos sustraídos había sido denunciado, no lo había sido hecho el 57 por ciento de los robos, o el 26 por ciento de los actos de vandalismo. Las causas del por qué no se presentaban denuncias también eran variadas: el 44 por ciento de los delitos violentos no era denunciado porque se consideraba demasiado trivial, el 33 por ciento porque se consideraba que la policía no habría podido hacer nada, el 22 por ciento porque pensaba que la policía no estaría interesada.

En España, los únicos estudios sobre victimización nacionales proceden de la participación en 1989, la primera encuesta a nivel internacional del International y 2004 del Crime Victimization Survey (ICVS), dado que declinó su participación en las 1992, 1996 y 2000; así como las encargadas y desarrolladas en los años 1978, 1980, 1982, 1991, 1995, 1996 y 1999 por el Centro de Investigaciones Sociológicas – los dos últimos, estudios 2.200

⁹⁸ Lagrange H. et al. (2004). Enquêtes de victimation et statistiques de police : les difficultés d'une comparaison. *Déviance et Société* 3/2004 (Vol. 28), p. 285-316.

y 2.315-, el Ayuntamiento de Barcelona (1984-2012)⁹⁹. La ausencia de tales investigaciones ha sido calificada como desastrosa por algunos autores¹⁰⁰ que esgrimen que lógicamente al no llevarse a cabo estas encuestas, es prácticamente imposible conocer la situación de la delincuencia real en nuestro país. De las dos últimas encuestas materializadas por el CIS, cabe sin embargo, rescatar aspectos esenciales del delito en España, por ejemplo, cuando se pregunta sobre si han sufrido algún delito y no lo han denunciado, las contestaciones revelan una gran bolsa de infracciones no denunciadas. En un porcentaje que sobrepasa el cincuenta por ciento no habían sido denunciados los atracos, la sustracción de objetos en vehículo, las estafas o timos, las intimidaciones o amenazas, las agresiones, las violaciones o abusos sexuales, los abusos o coacción por parte de agentes de la autoridad y los actos de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana. Mientras que los delitos que más se denuncian son el robo del vehículo, el robo en la vivienda o local, y los tirones y robos del bolso o de la cartera. Los datos comparativos entre las dos encuestas ponen de manifiesto dos realidades insoslayables y es que los porcentajes de no denunciar los delitos son casi los mismos, mientras que el escepticismo de no iba a servir para nada se ha rebajado sustancialmente, lo cual podría ser porque ha aumentado la confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado – en estos momentos, una de las instituciones mejor valoradas- mientras continúa la creencia de que la reparación no merece la pena.

Como ninguno de estos tipos de sondeo se realizan en nuestro país con cierta regularidad es realmente difícil conocer el alcance real de la delincuencia y su evolución, estimándose que dependiendo de las subcategorías de los delitos puedan rondar entre un 20 y un 50 por ciento. Las conclusiones de los pocos estudios que se han llevado a cabo en este ámbito son sin embargo, sumamente útiles, por ejemplo en un auto informes se pudo detectar el gran porcentaje de jóvenes que cogen el coche sin el carné de conducir obligatorio, de los cuales sólo un 3,4 % había sido detectado por la policía, así como del uso de sustancias prohibidas en porcentajes muy altos. En los estudios sobre victimización destacan los del CIS de los años 1995 y 1999, en donde se informaba del 50 % de delitos no denunciados como atracos, sustracción de objetos del vehículo, estafas o timos, intimidación física, gamberrismo o abusos sexuales. Todo ello hace que la inseguridad ciudadana se encuentre siempre entre los tres principales problemas que afectan a la población española. Una cifra que aumentaría si incluyésemos los problemas de drogas o los de inmigración.

⁹⁹ Una lista más completa se puede ver en Redono S. y Garrido V. (2013). Op. Cit. Pág. 215-216.

¹⁰⁰ Medina J. (2003). Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. RECPC 05-03. <http://criminnet.ugr.es/recpc>.

Como sostienen García et alt.¹⁰¹: “En España no contamos con encuestas de victimización periódicas debido a que ningún organismo ha asumido esta relevante tarea. Para conocer el volumen y evolución de la delincuencia en este país ha habido que recurrir, hasta el momento, a las estadísticas oficiales como único referente, siendo por todos conocidas las deficiencias que presentan estas fuentes por sí solas para tales fines. La comparación longitudinal se ha realizado entre los dos pases internacionales de la ICVS (1989 y 2005) en los que España participó, y la encuesta realizada por el Observatorio de la Delincuencia (ODA) en 2009 con el mismo cuestionario ICVS. Con estas tres encuestas se ha podido realizar un análisis de la evolución de la delincuencia en España en las últimas dos décadas. A pesar de que la opinión pública considera que la delincuencia en España ha aumentado en las décadas analizadas, los resultados de las encuestas de victimización muestran que en realidad ha descendido”.

Cuadro 9. Países europeos con encuestas de victimización¹⁰²:

Belgium	Normally every two years, but the most recent survey
Bulgaria	Annual
Denmark	Annual
Georgia	Last three years 2010-2012
France	Annual
Iceland	Annual for the capital area but every two years for th
Ireland	3-6 years
Italy	About every five years
Netherlands	Annual
Sweden	Annual
Turkey	Annual
England and Wales	Continuous (with annual results)
Northern Ireland	Continuous (with annual results)
Scotland	Every two years

2.2.2.4.1. La Encuesta Internacional de Victimización Criminal

Un grupo de criminólogos europeos (Jan van Dijk, Ministerio de justicia - Pat Mayhew, British Home Office - Martin Killias, Universidad de Lausanne) inició un estudio de victimización internacional con el único propósito de generar datos de victimización y crimen internacional

¹⁰¹ García E. et alt. (2010). Evolución de la delincuencia en España: Análisis longitudinal con encuestas de victimización. Revista Española de Investigación Criminológica. Artículo 2, N^o 8 www.criminologia.net.

¹⁰² Aebi M. 82014). Op. Cit. Pág. 342.

comparativo. El proyecto es conocido como la International Crime Victims Survey (ICVS), los estudios se iniciaron en 1989 cuando participaron 11 países europeos¹⁰³. Después de la primera ronda en 1989, las encuestas se repitieron en 1992, 1996 y 2000 y 2004/2005. Las Naciones Unidas (UNICRI) se involucraron en el proyecto en 1992 para organizar las encuestas en los países en desarrollo y en Europa Oriental. Sólo unos pocos países han participado en las cinco encuestas. Las muestras variaron desde el principio en tamaño entre las 498 desde el primer momento hasta las 5.393, estabilizándose entre las 1.000 y las 2.000 por países. Las entrevistas se llevaron a cabo mediante el sistema CATI (entrevistas telefónicas asistidas por ordenador), aportando datos hasta el año 2004 sobre los niveles de victimización para un número de países desarrollados¹⁰⁴. A finales de 2005 se habían realizado 140 estudios en más de 78 países diferentes (en 37 países en todo el país). Más de 320.000 ciudadanos han sido entrevistados en el curso de la ICVS hasta ahora. La base de datos actual cubre los 325.454 encuestados individuales

La última versión de la ICVS se llevó a cabo en algunos estados miembros de la Unión Europea con apoyo financiero de la Comisión Europea, y se le denominó *European Union International Crime and Safety Survey*. La encuesta fue realizada por un consorcio europeo liderado por Gallup Europe, comprendiendo el UNICRI (Italia), Hungría Gallup, el Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Alemania), CEPS /INSTEAD (Luxemburgo) y Geox (Hungría)¹⁰⁵. El mencionado consorcio recibió una subvención de la Dirección General de Investigación para llevar a cabo la EU ICS en 2005 entre los antiguos 15 estados fundadores. El consorcio incluyó, al menos, tres de los nuevos estados miembros (Polonia, Estonia y Hungría). La recogida de datos en Estonia y Polonia se organizó de forma independiente en 2004/2005, pero en estrecha cooperación con el consorcio. Ambos países utilizaron elementos de la metodología estandarizada de la ICVS, incluyendo el cuestionario. Las entrevistas se realizaron a través de teléfonos fijos, con la excepción de Finlandia, donde se entrevistó una sub-muestra adicional a través de teléfonos móviles. En Polonia y Estonia las entrevistas se materializaron cara a cara, lo cual no influyó en el resultado pues se demostró que ambos mecanismos producían las mismas tasas de prevalencia¹⁰⁶.

¹⁰³ Van Kesteren, J.N., et alt. (2000). *Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Countries: Key-findings from the 2000 International Crime Victims Survey*. The Hague, Ministry of Justice.

¹⁰⁴ Van Dijk, J.J.M., et alt. (2008). *Criminal Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*. The Hague, Boom Legal Publishers.

¹⁰⁵ Van Dijk, J. et alt. (2007). *The Burden of Crime in the EU, a Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety*. Brussels, Gallup Europe

¹⁰⁶ Pérez A. y Benito D. (2013). Estudio de los instrumentos existentes para medir la delincuencia. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

En 1987 la iniciativa fue tomada por un grupo de criminólogos europeos involucrados en las encuestas nacionales de delincuencia, para lanzar una encuesta totalmente estandarizada para futuras investigaciones criminológicas comparativas. Las dos principales premisas metodológicas fueron: las comparaciones de los resultados de las encuestas nacionales independientes que ya existían como las de los Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, Gales & demostrado para ser prácticamente inservibles debido a las diferencias en los cuestionarios, muestreo, métodos de entrevistas, clasificación de delitos etcétera¹⁰⁷. Incluso en casos donde podrían acceder y manipular post hoc para mejorar la consistencia de datos, muchos problemas resultaron ser insuperable. La segunda consideración fue que las nuevas técnicas de recolección de datos tales como aleatoriedad de marcación de dígitos y entrevistas computerizadas por telefónica (CATI) mejoraron la estandarización de la recolección de datos en diferentes países reduciendo significativamente el costo. Desde el principio la ICVS fue diseñada con el objetivo de realizar amplias comparaciones entre países, en lugar de proporcionar estimaciones precisas de nivel de los países

Un experto en encuestas de delincuencia como el americano J. Lynch fue el encargado de realizar una revisión crítica de los intentos de comparar las tasas de victimización entre los países. Concluyendo que, aunque las encuestas específicas nacionales producen mayor calidad de datos para las naciones individuales, la ICVS proporciona mejores datos comparables entre países¹⁰⁸. Dos décadas de experiencia en efecto han demostrado la viabilidad técnica y la sostenibilidad financiera del enfoque. En definitiva, las encuestas estandarizadas, las diferencias estadísticamente significativas en los niveles de victimización por amplias categorías de delitos de países o ciudades pueden ser identificadas, incluso cuando los tamaños de muestra se mantienen relativamente pequeños. La experiencia obtenida a través del este método ha demostrado que repitiendo las mismas encuestas a través de un tiempo se obtienen resultados estadísticamente significativos en la victimización y en las actitudes hacia la delincuencia, así como en la prevención del delito ayudando a las víctimas.

En cuanto a las limitaciones y debilidades del estudio hay que destacar que la ICVS no cubre todos los delitos. Por razones prácticas sólo se preguntaron 10 tipos de delitos, aunque estos cubrían una gran proporción de los que son experimentados por las víctimas en los hogares. Además, con un instrumento como la ICVS es imposible medir los supuestos delitos "sin víctimas". Esto significa que tipos de delitos como delitos de drogas, muchos tipos de delitos de cuello blanco, conducir bajo la influencia de

¹⁰⁷ Mayhew, P., & Van Dijk, J.J.M. (1997). Criminal victimisation in eleven industrialised countries. Key findings from the 1996 international crime victims survey. The Hague: WODC.

¹⁰⁸ Lynch, J.P and Addington, L.A. (2007). Understanding crime statistics; revisiting the divergence of the NCVS and UCR. Cambridge: Cambridge University Press.

alcohol o drogas, posesión ilegal de armas, pornografía infantil, etc. no estuvieron incluidos. Y también delitos donde la víctima no es una persona o un hogar sino una empresa. La mayoría de los delitos recogidos representan los experimentados por las víctimas. En segundo lugar, los tamaños de las muestra pequeños producen error de muestreo relativamente grande y no pueden excluirse en el conjunto de resultados en estudios individuales. Por esta razón, los resultados siempre deben interpretarse con la debida precaución, incluso en la medida en que resultados sorprendentemente inesperados puedan compararse con los resultados de estudios específicos de cada nación. El proyecto enfrenta a varios otros desafíos técnicos que son comunes a todas las encuestas de delito mayor. Una de las preocupaciones técnicas es el impacto de las diferentes técnicas de entrevista y bajo- o sobrerrepresentación de subgrupos de la población debido al bajo nivel de la cobertura de la muestra de los encuestados que no responden.

Los resultados del 2005 ICVS muestran que en promedio, el 15,7% de los ciudadanos sufrieron al menos una forma de victimización en el año anterior a la entrevista. De las personas que vivían en las principales ciudades fueron víctimas el 21,7%. Los países con las mayores tasas de prevalencia por delito convencional fueron Irlanda, Inglaterra & país de Gales, Nueva Zelanda e Islandia. Contrariamente a la percepción común, las tasas generales de delincuencia volumen – como el hurto, robo, asalto y amenazas – no son más altas en los Estados Unidos que en la mayor parte de Europa occidental. De hecho las tasas de Estados Unidos son significativamente más bajas que los de, por ejemplo, Irlanda y Gales & Inglaterra. Aunque, los robos y asaltos en los Estados Unidos son más a menudo relacionadas con las armas de fuego que en Europa. La tasa global de Canadá y Australia está algo por debajo de la media de la Unión Europea y en el mismo rango que los de los Estados Unidos. Suiza, aunque en menor medida que los primeros estudios, se muestra comparativamente con las tasas más bajas. Los países con las tasas más bajas se encuentran en la Europa del sur y oriental además de Japón y Hong Kong.

2.2.2.4.2. La British Crime Survey

La British Crime Survey tiene sus orígenes en 1982 (encuesta llevada a cabo en 1981) y ha funcionado en intervalos de dos años hasta 2001, cuando se convirtió en una encuesta continua. Aunque ha habido cambios en la encuesta con el tiempo, la redacción de las preguntas que se hacen para obtener experiencias de victimización ha permanecido en su mayoría constantes. La muestra del núcleo está diseñada para ser representativa de la población de los hogares en Inglaterra y País de Gales para personas adultas de 16 o más años que conviven en hogares. Funciona a través del código postal y es ampliamente aceptado como el mejor marco de muestreo de la

población en general, aunque no cubre la población que vive en residencias de grupo u otras instituciones porque se considera que excluyendo a la minoría de la población que vive en dichos establecimientos se consigue una validez considerable en la acuracidad de los resultados¹⁰⁹. El cuestionario establecido desde el principio ha sufrido escasas modificaciones con el objetivo de facilitar las comparaciones longitudinales y tiene una duración de unos 50 minutos. En él se pregunta a las personas si han sufrido algún altercado y si la respuesta es afirmativa se les envía un cuestionario más elaborado y específico para dar cuenta de los detalles. Posteriormente se la ha denominado Crime Survey for England and Wales (CSEW)¹¹⁰, es una encuesta nacional representativa, basada en un muestreo de más de 45.000 participantes, de la población residente en hogares en Inglaterra y Gales¹¹¹.

Las razones de estas encuestas se encuentra en la afirmación según la cual a menudo los ciudadanos no reportan violaciones a la policía ('ciudadanos a menudo no informan a la policía'). Así tenían como objetivo interrogar el hogar y en los actos de los cuales eran las víctimas un año sobre su posible informar a la policía, y, si procede, las razones de la ausencia de informes ("preguntando si la persona cuestionada, o cualquier miembro de su familia, había sido una víctima de la delincuencia durante el año pasado"¹¹². Para 2011/2012, aproximadamente 46 000 entrevistas se realizaron entre de abril y marzo de sobre los hechos en los cuales esas personas podrían haber sido víctimas en los doce meses anteriores a la entrevista 1. Un componente de la encuesta cubre temas en relación con la delincuencia, como sentimientos de inseguridad o la percepción del funcionamiento del sistema judicial y los servicios de policía. Se registran intentos con los ataques reales.

Los objetivos de esta encuesta cabe enmarcarlos en un contexto general de auxilio y contrastación de las cifras policiales. Las variaciones que se pueden detectar por medio de este método es un instrumento eficaz para establecer comparaciones basadas en fluctuaciones en el tiempo, por lo que pueden aportar información relevante sobre los fenómenos de delincuencia, si existen datos adicionales de otras fuentes. La ausencia de datos de victimización no permite saber si la variación de los hechos constatados es debida a una modificación de la propensión de las víctimas a presentar una queja, a la evolución del número de incidentes sufridos, o una combinación de los dos factores. Se recuerda a este propósito que las encuestas de victimización también permiten estimar la proporción de las infracciones por la cual la víctima declara tener quejas o "tasa de queja". Una

¹⁰⁹ Pickering et al.2008. User Guide to Home Office Crime Statistics Last Updated October 2011. Pág. 6.

¹¹⁰ Matheson J. (2011). National Statistician's Review of Crime Statistics: England and Wales. London. Government Statistical Service

¹¹¹ En el año 2012/13 fueron 35.000 hogares entrevistados,

¹¹² Pickering et al.2008. User Guide to Home Office Crime Statistics Last Updated October 2011. Pág. 6.

disminución o un aumento en la tasa de denuncia tendrán repercusiones sobre el número de hechos probados, independientemente de si se varía el número de incidentes sufridos¹¹³

En comparación con el registro policial, la CSEW es considerada un mejor instrumento para medir las tendencias a largo plazo porque no se ve afectada por cambios en el nivel de denuncias públicas o por las prácticas policiales de registrar los delitos. Las estimaciones de delito procedentes de la CSEW son mayores que el número registrado por la policía porque la encuesta capta los que no han sido denunciados por diversos motivos a la policía. Dado que la CSEW se ha realizado de manera consistente desde 1981 no se ha visto afectado por las cuestiones de registro y presentación de informes que pueden haber afectado a los datos de la policía. Así cubre mejor la tendencia de la delincuencia a largo plazo. Sin embargo, está limitada en su cobertura a los delitos contra las personas residentes en los hogares por lo que no puede cubrir todos los grupos de la población. Además existen ciertos tipos de delito (por ejemplo, homicidio, delitos contra las empresas y otras organizaciones, fraudes y drogas) que por sus características tampoco puede cubrir, lo que la diferencia del registro policial que posee una cobertura más amplia (incluyendo delitos de drogas que a menudo se denominan "sin víctimas")¹¹⁴. En 2012/13 se estimó que sólo el 44 % de los delitos comparables reportados al CSEW lo fueron a la policía.

Junto a las series de registro policiales, con la intención de acceder a la cifra negra de delitos que no se declaran a la policía y enlazando con la tradición americana, se ha desarrollado la encuesta nacional denominada Crime Survey for England and Wales (CSEW), antes conocida como British Crime Survey¹¹⁵. La CSEW es una encuesta nacional representativa, basada en un muestreo de más de 45.000 participantes, de la población residente en hogares en Inglaterra y Gales. Desde 1982 los datos de la policía sobre delincuencia se complementan con los de la encuesta CSEW, que desde 2001 ha sido llevada a cabo anualmente ya que anteriormente era bianual¹¹⁶. El cuestionario establecido desde el principio ha sufrido escasas modificaciones con el objetivo de facilitar las comparaciones longitudinales y tiene una duración de unos 50 minutos. En él se pregunta a las personas si han sufrido algún altercado y si la respuesta es afirmativa se les envía un cuestionario más elaborado y específico para dar cuenta de los detalles.

¹¹⁴ Flatley J., et al. (2010). Crime in England and Wales 2009/10. London. Home Office Statistics Bulletin

¹¹⁵ Matheson J. (2011). National Statistician's Review of Crime Statistics: England and Wales. London. Government Statistical Service

¹¹⁶ En el año 2012/13 fueron 35.000 hogares entrevistados.

En comparación con el registro policial, la CSEW es considerada un mejor instrumento para medir las tendencias a largo plazo porque no se ve afectada por cambios en el nivel de denuncias públicas o por las prácticas policiales de registrar los delitos. Las estimaciones de delito procedentes de la CSEW son mayores que el número registrado por la policía porque la encuesta capta los que no han sido denunciados por diversos motivos a la policía. Dado que la CSEW se ha realizado de manera consistente desde 1981 no se ha visto afectado por las cuestiones de registro y presentación de informes que pueden haber afectado a los datos de la policía. Así cubre mejor la tendencia de la delincuencia a largo plazo. Sin embargo, está limitada en su cobertura a los delitos contra las personas residentes en los hogares por lo que no puede cubrir todos los grupos de la población. Además existen ciertos tipos de delito (por ejemplo, homicidio, delitos contra las empresas y otras organizaciones, fraudes y drogas) que por sus características tampoco puede cubrir, lo que la diferencia del registro policial que posee una cobertura más amplia (incluyendo delitos de drogas que a menudo se denominan "sin víctimas")¹¹⁷. En 2012/13 se estimó que sólo el 44 % de los delitos comparables reportados al CSEW lo fueron a la policía.

2.2.3. Los auto informes:

Los estudios sobre auto informes consisten en entrevistas a una muestra de personas a las que se formulan preguntas sobre los delitos cometidos por ellas mismos¹¹⁸. Este tipo de estudio es especialmente importante para reunir información sobre los llamados delitos sin víctima (por ejemplo, delitos relacionados con las drogas, el juego, el contrabando y la prostitución), que no es probable que aparezcan en las estadísticas formadas con datos comunicados por la policía ni en los estudios sobre victimización. En general, la confiabilidad y la validez de esas estadísticas dependen en gran medida de la disposición de los entrevistados a declarar que han cometido un delito y de su capacidad para recordar lo acontecido. En la mayoría de los casos las comprobaciones realizadas en relación con esos estudios han determinado que son bastante confiables, en particular para los delitos menos graves.

Los autoinformes se empiezan a utilizar en los años cincuenta del pasado siglo en Estados Unidos, por medio de ellos, la sociología norteamericana pudo comprobar in situ numerosas teorías sociológicas que se abrieron

¹¹⁷ Flatley J., et al. (2010). Op. cit.

¹¹⁸ Lucia, S. et al. (2007). How important are interview methods and questionnaire designs in research on self-reported juvenile delinquency? An experimental comparison of Internet vs paper-and-pencil questionnaires and different definitions of the reference period. *Journal of Experimental Criminology*, Volume 3, Number 1. Pág. 39-64

camino en la criminología como alternativas válidas a las explicaciones frenológicas y psicológicas. Los primeros resultados fueron sorprendentes ya que del escepticismo general se pasó al estupor al comprobar que las clases medias y altas tenidas como ejemplo de actitudes cívicas declaraban unos delitos bastantes más altos que lo normal como por ejemplo en el estudio de Sutherland de 1941, donde el 99% de los interrogados confesaron haber cometido uno o más delitos de los 49 establecidos por el código penal del estado de Nueva York, o cuando en otro estudio algunas personas declararon haber participado en un homicidio del cual estaba todavía impune o incluso cuando un clérigo confesó haber mentado al vender una mercancía. Muchos de estos primeros estudios empíricos se dirigieron a combatir las teorías basadas en la correlación entre clase social y delincuencia, intentando demostrar que ésta no era una necesidad imperiosa o de anomía de las clases bajas, sino que más bien era producto del sesgo policial y judicial, lo cual quedó patente en muchos de ellos, ya que mientras las estadísticas oficiales indicaban un ratio de delito entre la clase trabajadora y la clase media de 5 a 1, las encuestas basadas en auto informes lo hicieron en una proporción bastante más baja de 1,5 a 1.

En los sesenta años siguientes, estas técnicas han conocido una depuración importante, al comprobar numerosos defectos como falta de representatividad en las preguntas, ítems superpuestos, respuestas imprecisas y falta de anonimato en las respuestas, y muestras pequeñas y no representativas. Muchos cuestionarios basados en auto informes contenían preguntas bastantes triviales (desobedecer a los padres, no asistir a clase, beber por debajo de la edad permitida o tirar petardos a la calle) que no admitían comparación con las utilizadas en las estadísticas oficiales basadas en el homicidio, en el robo con violencia, en el secuestro, en la violencia sexual o en el tráfico de drogas, etc. En la actualidad este tipo de encuestas se sigue haciendo con relativa frecuencia en Estados Unidos y en menor medida en Europa porque es más propicia para gente joven y para reflejar pequeños delitos.

Entre los escasos auto informes realizados en España¹¹⁹, destaca el de Rechea C. et al.¹²⁰, por medio de una encuesta de 2.100 cuestionarios sobre una muestra a jóvenes de catorce a veintiún años, llevada a cabo en 1992, para medir la delincuencia juvenil en España, y basada en un estadio global desarrollado en trece países europeos, además de USA y Nueva Zelanda. La delincuencia juvenil se midió a través de un cuestionario estándar compartido por todos los miembros de la investigación que consistía en 574

¹¹⁹ En la última década han proliferado en España los autoinformes sobre el fenómeno del bullying, pero se trata de poblaciones de jóvenes que llegan como mucho hasta los 16 años. Véase Hernández de Frutos (2002).

¹²⁰ Rechea C. Et Alt. (1995). *La delincuencia juvenil en España*. Madrid. Ministerio de Justicia e Interior.

ítems agrupados en seis categorías: infracciones contra la propiedad, conductas violentas, drogas, conductas delictivas relacionadas con los jóvenes, conductas problemáticas, teniendo en cuenta que muchas de las afirmaciones no constituían delito en España, es decir, no estaban penalizadas por la Ley, tales como faltar al colegio, fugarse de casa, etc. Se utilizaron tanto las prevalencias o tasas de sujetos que habían cometido algún delito a lo largo de su vida, como si lo habían hecho en el último año, como la incidencia o número de veces que el entrevistado admite haber realizado una conducta determinada según cinco categorías: raramente (1 o 2 veces), ocasionalmente (de 3 a 5 veces), ocasionalmente (de 6 a 10 veces), habitualmente (de 11 a 50 veces), cotidianamente (más de 50 veces). A nivel internacional los datos más significativos fueron que los hombres cometieron dos veces más delitos que las mujeres, la edad donde se cometen más infracciones fueron de 16 a 17 años, la delincuencia estaba fuertemente correlacionada con los niveles de educación, el uso de drogas estaba asociado con el abandono temprano de la escuela y el desempleo, el fracaso escolar estaba relacionado con los delitos violentos.

En la actualidad muchos autores se siguen quejando de la existencia de grandes bolsas de delincuencia no oficial o consentida, por ser de clases altas o de empresas como la que se conoce por la etiqueta de institucional y ecológica. Los auto-informes y las encuestas de victimización han acabado formalizándose como una herramienta imprescindible para el conocimiento de la delincuencia, tal como se argumenta en el *Juvenile Offender and Victims: 1999 National Report* de EE.UU., en donde se sostiene que esta práctica es imprescindible porque estos estudios pueden capturar información sobre el comportamiento que nunca llega a concitar atención en los registros oficiales, encontrando comparativamente una mayor proporción de delitos que implican a la población juvenil. E igual ocurre con otros países que la han incorporado a sus datos oficiales como Reino Unido o capitales como Barcelona. De cualquier manera, existe una opinión ampliamente compartida que sostiene que la plena comprensión de la etiología delincuente sólo es posible cuando se integran los datos oficiales y los auto-informes, de manera que a los datos oficiales siempre se les incluye un porcentaje adjudicado a los delitos no registrados por la policía por diversas razones.

Entre los hallazgos del estudio en España, cabe citar la constatación de que era posible aplicar un auto informe, es decir, la gente colaboraba abiertamente en él, por lo que se pudo apreciar numerosos aspectos del delito que resulta imposible conseguir por medio de las estadísticas oficiales. Entre los delitos no detectados por la policía, sobresalieron el llevar un coche sin el carné de conducir pertinente, en donde el 42,2 % de los jóvenes admitían haberlo hecho alguna vez y el 22,5% en el último año, pero solo el 7,7 % de todos ellos había sido detectado o cogido, habiéndolo hecho la policía sólo en un 3,47%. Una parte muy importante de la muestra,

el 81,1 % admitió haber cometido algún delito “alguna vez en su vida”, mientras que el 57,8% admitió haberlo hecho el último año en donde se incluye el consumo de drogas. Y una parte, también muy importante de la muestra reveló el consumo habitual de alcohol 85,7% en “alguna vez” y el 79,3% en “el último año”.

2.2.4. La inseguridad ciudadana

Otro indicador de la delincuencia muy parecido a las encuestas de victimización y los auto informes son las encuestas o más bien preguntas sobre inseguridad ciudadana. Junto a la victimización se suele estudiar la inseguridad ciudadana, un concepto polisémico que suele referirse al miedo que tiene la población a ser objeto de un delito. La naturaleza, grado y consecuencias de la actividad delictiva, así como la percepción de la gente sobre su seguridad son cuestiones que influyen directa e indirectamente en su calidad de vida. El miedo a la delincuencia puede afectar sus vidas de muchas maneras, influyendo financieramente, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. En España los primeros estudios sobre este tema proceden de la década de los años 70 del Centro de Investigaciones Sociológicas, en donde algunos autores como Alvira y Rubio presentaron los primeros resultados de tal actividad. Desde entonces y en muchas ocasiones respaldado por motivos de índole político, la cuestión se ha medido de manera intermitente a través de preguntas aisladas y sin continuidad en el tiempo. Sin embargo, la incorporación de las series históricas del Centro de Investigaciones Sociológicas ha permitido rescatar una visión longitudinal del tal fenómeno ya que por medio de un barómetro mensual se ha preguntado con regularidad desde el año 2001 cuáles son las tres grandes preocupaciones de la población, en lo que se considera como una medida del clima general de confianza.

Es de destacar cómo los datos de los diferentes años colocan a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana siempre en el tercer puesto después del paro y del terrorismo (las dos cuestiones que más preocupan a la población española), además algunas cuestiones asociadas a ella o que pudiera incidir en ella, como el consumo de drogas o la inmigración descontrolada se colocan en puestos subyacentes. Si contemplamos desde el año 1998 hasta el 2005, cuadro de abajo, se puede comprobar cómo en los años 2002 y 2003 se ha experimentado un crecimiento que ha bajado en el 2004. Cabe añadir además que la percepción de la opinión pública sobre estos temas se externaliza al futuro, como lo demuestra la encuesta prospectiva de la editorial Sistema que cuando pregunta sobre los grandes problemas a diez años vista, la población encuestada señala las drogas en segundo lugar y la delincuencia en sexto lugar.

Como se sostiene en la tesis doctoral¹²¹ leída en el Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, se trata de un concepto multidimensional que aúna elementos objetivos y subjetivos. Los objetivos harían referencia a la tasa de delitos cometidos y de los cuales tiene consciencia la persona, mientras que la subjetiva sería la percepción de la persona de la posibilidad de ser objeto de un delito, lo cual tiene que ver con su situación personal –viejo, mujer, hipocondriaco, etc.- y con la influencia de los medios de comunicación. De acuerdo a la teoría de las “ventanas rotas”, el hecho de vivir en un barrio abandonado, descuidado, sin presencia policial, sin capital social de los vecinos, hace que la inquietud de poder ser atacado aumente. Pero también, el excesivo énfasis de los medios de comunicación de incidir machaconamente en los delitos más escabrosos, contribuye a su incremento. La seguridad ciudadana constituye en estos momentos uno de los desafíos de política pública más relevantes en las sociedades de principios de siglo¹²². Existen pocos asuntos de la agenda política que hayan concitado tanta expectación e impulsado debates tan intensos como lo ha hecho la seguridad pública en los últimos tiempos. Ello es así porque a pesar de las diferentes culturas que existen a nivel internacional, los asuntos de delincuencia y seguridad componen el interés primordial en la mayoría de ellos. Basta con leer los periódicos o asistir a los debates televisivos o acudir a los programas de los principales partidos políticos en las democracias occidentales para darse cuenta que la percepción de la seguridad subjetiva es un hecho común. Ello explicaría el que en determinados países avanzados en la gestión de la delincuencia se empiecen a publicar datos sobre el nivel de delito que existe a nivel pormenorizado de barrios. Después de todo es un tema de “sensación de inseguridad”¹²³.

2.2.5. Los efectos del cambio de leyes

También es necesario considerar la incidencia en el número de delitos y en su condena, el cambio de leyes y el surgimiento de nuevas, que lógicamente inciden en el cómputo de infracciones computadas, así como de las penas correspondientes porque persigue nuevas formas delictivas no consideradas como tales anteriormente¹²⁴. Una decisión que queda en manos del poder político y que se suele argumentar como una reacción ante la demanda de la

¹²¹ Zuluaga L. (2011). La priorización de la inseguridad ciudadana como problema. Tesis doctoral. Universidad Pública de Navarra.

¹²² Torrente D. (2009). Cicles economics i seguretat. Informe 2009 de l'Obseartori. Institut d'Estudis de la Seguretat. Barcelona.

¹²³ Socorro M. (2008). Aspectos político-criminales de la seguridad ciudadana en España y Brasil. Reflexiones comparadas. Tesis Doctoral Universidad de Salamanca.

¹²⁴ Von Hofer, H. (2000). Crime statistics as constructs: The case of Swedish rape statistics. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8(1), 77-89.

opinión pública y los avances tecnológicos de la sociedad. Nuevas tipificaciones que son incorporadas año tras año y que pueden cuestionar si el aumento de la delincuencia es el producto de cometer más actos desviados y penados por la ley o simplemente la consecuencia de leyes más exigentes que persiguen delitos que anteriormente no estaban considerados como tales¹²⁵.

Por otra parte, desde ciertas instancias se ha resaltado cómo aunque existen determinadas prácticas burocráticas que pueden hacer cambiar los resultados delictivos mirados de manera longitudinal como la obtención de datos, el registro de éstos o la dotación policial para recoger denuncias, no se debe minusvalorar los efectos manipulativos procedentes de la clase política que nada tienen que ver con la reducción o con el aumento de la violación de la ley¹²⁶. Concretamente se ha empezado a extender la idea de que determinadas políticas criminales pueden hacer variar los niveles de delincuencia. De igual manera, habría que señalar la manipulación intencional cuando se persiguen determinados efectos en la actitud de población ante unas elecciones como pueda ser el reciente caso francés en donde parece que la determinación de la lucha contra la delincuencia por parte de los partidos políticos pudo jugar una baza determinante en la orientación del voto.

En España cabe mencionar, como se denuncia desde el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía en enero del año 2004, la política seguida por el gobierno conservador del Partido Popular en la criminalización de la inmigración. Una política que modificó sustancialmente el código penal de 1995, como ya hemos visto, sin el que aunque no necesario, si conveniente respaldo mayoritario de la cámara de representantes y que se orientó hacia una serie de reformas que de alguna manera se contagiaron de la política norteamericana de “tolerancia cero” que según Wacquant fue impuesta por el alcalde Giuliani y exportada desde Nueva York a los principales países conservadores europeos e inspirada en la doctrina de las ventanas rotas, cuyos principales derroteros discurren por una clara orientación carcelaria; a lo que habría que añadir el recorte sufrido en los Presupuestos Generales del Estado para luchar contra las mafias y organizaciones internacional que se han empezado a organizar desde nuestras fronteras, y que de acuerdo al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) habían colocado a España entre las tres o cuatro primeras posiciones del ranking europeo en el tráfico de estupefacientes.

¹²⁵ Jaén M. (2004). Las reformas del código penal (2002/2003). Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. recpc 06-r2 (2004) _ <http://criminet.ugr.es/recpc> _ issn 1695-0194.

¹²⁶ Harrendorf (2012). Offence Definitions in the European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics and Their Influence on Data Quality and Comparability, European Journal on Criminal Policy and Research 18(1), 23-53.

En el caso español cabe mencionar la gran proliferación de leyes que han irrumpido en los últimos años como la del tráfico de 1997 que considera delito la conducción bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, o la de extranjería del 2000 que explicaría el gran número de detenciones policiales de extranjeros por delitos contra la propiedad que no se corresponde con el número de condenas y estancias en prisión. Como especialmente importante es la reforma del Código Penal de 1995 que se llevó a cabo en el 2003 (15/2003)¹²⁷, o las reformas parciales acometidas en el año 2002 y en el 2003: delitos contra miembros de las corporaciones locales (1/2003), cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (7/2003), seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (11/2003), penalización de la convocatoria ilegal de elecciones (20/2003), o en el 2004 con la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Igual cabe mencionar, por su incidencia, las reformas procesales de la ley de enjuiciamiento criminal (los juicios rápidos 8 y 38/2002, la prisión provisional 13/2003); y las reformas penitenciarias de la ley general penitenciaria (cumplimiento íntegro de las penas 7/2003). El cambio de las reformas penales, procesales y penitenciarias ha sido de tal magnitud que algunos autores han subrayado que se ha producido el abandono de un modelo penal garantista o de derecho penal mínimo hacia otro que se podría calificar como de seguridad ciudadana.

Pero, sin lugar a dudas la reforma más profunda del código penal de 1995 procede de la ley orgánica 5/2010 de 22 de junio. De acuerdo al texto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, de 15 de enero de 2007, el derecho penal había recogido al paso de su aparición cuantas orientaciones comunes, plasmadas en los diferentes instrumentos jurídicos de la Unión Europea, determinaban modificaciones u adiciones al código penal, y eso explica buena parte de las alteraciones introducidas. Pero además, en los últimos años, especialmente a partir del Tratado de Ámsterdam en 1997, se fortaleció la importancia de hacer efectiva la cooperación policial y judicial en materia penal, lo cual exigía necesariamente la armonización o aproximación de las leyes estatales en materia penal, y por esa razón se han ido produciendo decisiones sobre un amplio catálogo de problemas penales. Decisiones que empujan a una necesaria similitud de las formulaciones de delitos y responsabilidades en los derechos internos: Junto con ello, se afrontan dos reformas importantes: se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al libro II del Código reguladas como delitos leves; y se reducen

¹²⁷ Por medio de esta ley se hicieron nada menos que 186 modificaciones del código penal y 28 de la ley de enjuiciamiento criminal.

el número de faltas —delitos leves en la nueva regulación que se introduce— orientado por el principio de intervención mínima, que debía facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, podían encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles ¹²⁸.

Entre las reformas introducidas en esta importante Ley que incidió de manera importante en los niveles de medición de la delincuencia hay que destacar, la tipificación como delito el soborno entre particulares, aumentando las penas para los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, que ingresarán en prisión y no sólo de multa o inhabilitación. También para los delitos de ordenación del territorio, castigando con hasta cuatro años de prisión las obras ilegales, así como a las autoridades que las hayan aprobado. Aumento de la protección de las víctimas, endureciendo las penas por abusos a menores, que llegarán a los quince años de prisión, e introduciendo la posibilidad de privar de la patria potestad a los padres para proteger al menor. Incorporación en tanto que delito de la captación de niños para participar en espectáculos pornográficos. Supresión de las penas de prisión que regían anteriormente para delitos de venta de material audiovisual ilegal conocido popularmente como el “top manta”, cuando el beneficio de las ventas no supere los 400 euros. Especialmente importante fue el endurecimiento del castigo para los hurtos reiterados, de tal forma que los autores de pequeños robos -de menos de 400 euros- reincidentes podían ser condenados a penas de cárcel para cumplir los fines de semana. Además, se contempla la creación de un registro de este tipo de faltas. En cuanto a otras tipificaciones consideradas como delitos cabe mencionar las labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, y especialmente el acoso laboral e inmobiliario, así como, los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos.

Entre las nuevas tipificaciones interesantes y continuamente solicitadas desde la perspectiva de igualdad de género, cabe mencionar al acoso laboral¹²⁹, también conocido como mobbing, en tanto que un tipo de conductas que sin duda no es nuevo, pero que ha alcanzado el indiscutible grado de notoriedad: “Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcional que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de las relaciones jurídico-

¹²⁸ Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, de 15 de enero de 2007.

¹²⁹ Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio

públicas”¹³⁰. Para responder a esa clase de acciones que no encuentran respuesta suficiente en otras ramas del derecho, se consideró que los delitos de torturas y contra la integridad moral, era la ubicación adecuada para tipificar el acoso psicológico u hostil en las relaciones laborales, que humillen al que los sufre, así como, en el marco de otras relaciones contractuales, la alteración de condiciones imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad.

Otras área afectada por las modificaciones procede del capítulo de los delitos contra la libertad sexual¹³¹, dado que un examen detenido de las diferentes figuras legales puso de manifiesto la existencia de algunos graves vacíos que afectaban, además, al grave problema de las agresiones o abusos sexuales de los que son víctimas niños, condición de las víctimas que ha marcado claramente los delitos de tráfico de pornografía —cuya regulación penal se ampliaba incluyendo más conductas— porque no había completado su despliegue en todas las infracciones del grupo. Hay que mencionar también, siguiendo con la misma fuente, la renovación de los delitos financieros¹³² partió de la consideración de que la garantía de una competencia justa y honesta pasaba por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas en manera similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. La corrupción del administrador de una empresa por parte de otra empresa a fin de que haga u omita algo que puede repercutir en las actividades de su propia empresa, sea en prestación de servicios, adquisición o venta de mercancías, sea para dañar a esa misma empresa o a una tercera, no es simplemente un conflicto que no excede de la esfera de lo privado sino que rompe las reglas de buen funcionamiento del mercado.

Mención aparte merecen los delitos informáticos, en donde, el desarrollo de la informática y, especialmente, de Internet, en la sociedad actual, ha conllevado la proliferación de nuevas formas de ataque a derechos individuales o colectivos. Uno de los nuevos preceptos incorporados en esta dinámica al texto punitivo que más críticas y desacuerdos doctrinales ha recibido es el artículo 264.2, referente a los daños en sistemas informáticos o en datos contenidos en los mismos¹³³: “1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno,

¹³⁰ Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Pág. 58416.

¹³¹ Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio

¹³² Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio

¹³³ Mata N. y Hernández L. (2009). El delito de daños informáticos: una tipificación defectuosa. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXIX. Págs. 311-362

introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.”¹³⁴

Otras reformas importantes, aunque no del calado de la anterior ley, proceden de los efectos de la crisis económica tan grave que ha padecido España en los últimos, provocando la ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social. Los objetivos de la reforma en el ámbito tributario han sido: la creación de un tipo agravado como respuesta a los fraudes de especial gravedad; la posibilidad de perseguir a las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; el incremento de las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo. Por otra parte, en lo que se refiere a los delitos contra la Seguridad Social, se reduce la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito; se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores; se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. En otro capítulo se lleva a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del código penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí sean cumplidores de sus obligaciones legales.

La última reforma del código penal es del 2015. Entre las principales medidas que incorpora cabe destacar el énfasis en la lucha contra la corrupción. El texto vigente tipificaba la administración desleal como un delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal castiga los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo. Así se castigan los contratos para prestación de servicios no útiles, los firmados sin que exista contraprestación y los realizados a un precio superior. La reforma incluye una ambiciosa revisión del comiso, que se adelanta a la Directiva europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la que trabaja la Unión Europea. Además, la reforma incluye nuevos delitos para aumentar la protección de la mujer. Uno de ellos es el matrimonio forzado, con el que se castiga la violencia o intimidación

¹³⁴ Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio

para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad. También se castiga los actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no ha podido ser tipificada como delito de coacciones o de amenazas porque no se produce violencia. Igualmente, como ya ocurría con los delitos de violencia de género, en los sexuales no se podrá aplicar el delito continuado y se impondrá una pena por cada uno de los cometidos.

PARTE III

Capítulo 3. La delincuencia a nivel internacional:

Establecer comparaciones de cualquier tipo a nivel internacional es complicado. Como ocurre siempre con este tipo de estudios hay que tomar en cuenta diversas cuestiones relacionadas con la cultura e idiosincrasia de un país que lo diferencia de otro. Para el caso de la delincuencia las dificultades del análisis proceden del hecho de que aunque la policía puede considerarse como la primera etapa del proceso penal, esto no significa que las cifras sobre la delincuencia registrada, den cuenta exacta de la entrada total al sistema de justicia penal. Esto es así porque, en un número de países, la fiscalía puede iniciar procesos penales sin recibir un informe policial. En algunos estados europeos, los delitos graves no siempre están registrados por la policía, sino por la fiscalía. Además, otros organismos (aduanas, policía fronteriza, escuadrones de fraude fiscal) e individuos (los jueces o incluso los ciudadanos) tienen el poder para iniciar procesos que instrumentalicen una queja a las autoridades de la fiscalía o la judicatura. No obstante, la mayor parte de los delitos instruidos en las causas penales que suponen una detención y/o la apertura de un procedimiento son los reportados o detectados por la policía.

Otra cautela importante es que la posición de la policía en el sistema de justicia penal puede influir directamente en el número de delitos registrados y cómo son clasificados. En algunos países la policía puede ser absolutamente independiente en sus actividades mientras que en otros puede trabajar bajo la estrecha supervisión del fiscal o el tribunal. La policía puede tener el poder de etiquetar los hechos que se investigan sobre delitos específicos, o lo puede hacer el fiscal. Esta diferencia puede tener consecuencias para la distribución relativa de los distintos tipos de delitos incluidos en el manual de consultas. Además, cuando se considera los cuerpos de fuerzas y seguridad del estado, es importante señalar que existen diferencias sustanciales entre los países en las tareas que realizan. Por ejemplo, en la mayoría de los estados la policía tiene que vigilar o denunciar las infracciones de tráfico (conducir con niveles altos de alcohol, lesiones graves, exceso de velocidad, estacionamiento ilegal). Por otra parte, en muchos países, la policía tiene la tarea adicional de mantener el orden público y de ayudar a la población en diversas situaciones (proporcionar información para la prestación de primeros auxilios). Sin embargo, esto no se aplica a todos los tipos de policía u organismos relacionados que se incluyen en los cuadros respectivos. Por lo tanto, debe tenerse una cierta cautela cuando se consideran los recursos policiales en el volumen de delincuencia registrado o en el número de arrestos de presuntos delincuentes¹³⁵.

¹³⁵ European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (2010). Pág. 25-26.

Los sistemas de reunión de datos para las estadísticas sobre el delito comunicadas por la policía suelen estar diseñados de modo que quienes deban proporcionar la información o suministrar los datos sean los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley. El proceso de cómputo se inicia cuando un delito llega a conocimiento de la policía o la policía actúa estando de servicio. Las personas que investigan el incidente elaboran un “informe sobre el suceso” que sirve de base para el sistema de reunión de datos. La información contenida en los informes sobre sucesos se utiliza para determinar la naturaleza del incidente penal, la cantidad de violaciones del derecho, la cantidad de delincuentes involucrados, la fecha y el lugar del incidente, un identificador singular del caso para cada delincuente y las características básicas de los delincuentes. Existen diferentes maneras de acometer la tarea de resumir la información contenida en los informes sobre sucesos para posteriormente incorporarla a las estadísticas de nivel nacional o subnacional.

Entre las diversas formas posibles se cuentan las siguientes¹³⁶:

- Enviando copias de los informes sobre sucesos a la oficina de estadísticas designada, en la cual se podrá captar el contenido a fin de crear una base de datos sobre el delito con datos agregados o registros individuales;
- Utilizando los informes sobre sucesos para producir hojas de recuento que pueden enviarse a una oficina de estadísticas en la que se puede captar el contenido a fin de crear una base de datos agregados sobre el delito;
- Utilizando los informes sobre sucesos para llenar formularios de reunión de registros individuales que pueden enviarse a una oficina de estadísticas en la cual se puede captar el contenido a fin de crear una base de datos sobre el delito integrada por registros individuales;
- Automatizando los informes sobre sucesos y reuniendo datos sobre el delito mediante programas especiales de computadora para la reunión de datos a fin de proporcionar a una oficina de estadísticas datos agregados o registros individuales.

El número de policías en servicio, su equipamiento y eficacia puede jugar un papel muy importante en los ratios de delitos. Como se aprecia en el cuadro de abajo, España es el segundo país de Europa con mayor número de policías por 10.000 habitantes, solo superada por Chipre.

Cuadro 10. Agentes de policía en la Unión Europea, 1999-2010

	Unidades de policías			Policía por 100.000 habitantes		
	1999	2004	2010	1999	2004	2010
EU-27			1.694.601			337.7
Bélgica	36.179	37.008	39.861	354.2	356.0	370.7
Bulgaria			30.807			405.0

¹³⁶ Naciones Unidas (2004). Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal. Departament de Asuntos Económicos y Sociales. Serie F, nº 89.

Rep. Checa	44.083	47.232	43.472	428.4	462.5	415.3
Denmark	10.048	10.483	10.850	189.1	194.2	196.9
Alemania	252.230	246.756	245.752	307.5	299.0	299.7
Estonia	3.584	3.520	3.183	259.9	260.5	237.5
Irlanda	11.458	12.209	14.547	307.0	303.0	326.9
Grecia	48.981	50.171	50.798	451.0	454.4	453.0
España	187.450	198.072	231.801	470.9	467.8	505.8
Francia	227.123	235.792	243.900	388.3	389.7	390.5
Italia	273.422	250.237	245.152	480.5	432.3	411.2
Chipre	4.258	4.903	5.353	623.6	671.3	671.7
Lituania	13.663	11.526	10.957	386.4	334.5	327.1
Luxemburgo	1.162	1.352	1.603	271.9	297.2	324.8
Hungria	2.9878	29.516	33.487	291.4	291.8	333.8
Holanda	32.374	35.996	36.498	205.4	221.4	221.4
Austria	26.883	27.111	26.623	336.8	333.0	318.6
Polonia	98.647	100.770	98.955	255.1	263.9	259.5
Portugal	47.303	47.647	49.152	466.1	454.9	462.5
Rumania	48.106	45.770	45.779	213.9	210.8	212.9
Eslovenia	6.465	7.618	7.842	326.8	381.6	385.9
Eslovaquia	13.957	14.079	14.498	258.8	261.7	267.9
Finlandia	7.960	8.247	8.308	154.3	158.0	156.0
Suecia	16.201	16.891	19.144	183.0	188.2	206.8
Inglaterra y Gales	126.096	139.200	142.151	243.6	263.0	260.2
Escocia	14.684	16.001	17.409	286.8	315.7	336.0
Irlanda del Norte	11.240	8.936	7.758	664.4	523.6	435.3
Japón	226.401	244.947	251.939	180.4	193.9	199.1
Estados Unidos	637.551	675.734	706.886	228.3	229.8	229.7

Fuente: Eurostat y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (World Population Prospects). 2014.

3.1. La delincuencia registrada en Naciones Unidas.

La evaluación de las tendencias de la delincuencia y justicia penal ha sido una preocupación permanente de las organizaciones internacionales. La necesidad de recopilar estadísticas sobre la delincuencia a nivel internacional fue tempranamente formulada en 1853. Cronológicamente, las Naciones Unidas iniciaron sus estudios mundiales de la delincuencia en 1978. El primer estudio recopiló estadísticas sobre una pequeña gama de delitos y del proceso de justicia criminal durante los años 1970-1975. El segundo estudio recogió datos sobre una amplia gama de delitos, delincuentes y datos de proceso penal para los años 1975-1980. El tercer estudio, concluido en 1991, recopiló una amplia gama de datos de la justicia penal en los años 1980-1985. Por muchas razones, los estudios de la primera y segunda fase no se complementan muy bien, dificultando el análisis longitudinal, toda vez que el 25% de los países consultados respondieron al primer estudio, pero no respondieron al segundo. Del mismo modo, un 30% de quienes respondieron al segundo no respondió a la primera encuesta. Además, hubo muchas preguntas en el segundo estudio que no se pidieron en el primero.

Una fecha importante fue el 25 de mayo de 1984 cuando en el marco de las Naciones Unidas, el Consejo económico y Social, en su resolución 1984/48, pidió que el Secretario General mantuviera y desarrollara la base

de datos las Naciones Unidas relacionadas con la delincuencia para llevar a cabo estudios sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de Justicia Penal. El principal objetivo de las encuestas de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y operaciones de los sistemas de justicia penal fue recopilar datos sobre la incidencia de delitos reportados con miras a mejorar el análisis y la difusión de esa información a nivel internacional. Los resultados del estudio proporcionaron una visión general de las tendencias y las interrelaciones entre diversas partes del sistema de justicia penal para promover la toma de decisiones en la administración, a nivel nacional e internacional¹³⁷

El órgano creado para llevar a cabo esta función fue el United Nations Criminal Justice Information Network (UNCJIN), el cual buscó la información correspondiente a su mandato a través de seleccionar a las personas relevantes en los países miembros con el fin de verificar y añadir sus opiniones en un conjunto de datos publicados en un formato de anuario. Muchos de estos expertos se identificaron a partir de información proporcionada en el estudio que registró el nombre de la persona de contacto que debía de rellenar el cuestionario. Se adjuntaron los documentos y los datos de manuales de los países miembros publicados oficialmente. Los datos fueron cotejados y comprobados en gran medida siguiendo el método desarrollado por Archer y Gartner¹³⁸. El cuestionario fue modificado después de la tercera encuesta mundial del delito de las Naciones Unidas y se utilizaron las mismas categorías de delitos y justicia penal. Los datos procedentes de estos formularios se aplicaron al conjunto de estadísticas existentes. En aquellos lugares en los que las discrepancias fueron evidentes, se modificaron las conclusiones.

Como se sostiene en el Informe metodológico¹³⁹, para determinar detalladamente las necesidades en materia de información de cada componente del sistema de justicia fue importantísimo elaborar un sistema completo de clasificación de los delitos aceptable para todos los componentes. Para los programas de reunión de datos agregados se necesitaron categorías uniformes de delitos que permitieron reunir la información básica sobre la cantidad de casos. Incluso los programas de reunión de datos unitarios, que por lo común reúnen información sobre los delitos al nivel más detallado posible, fue necesario que tuvieran algún método para resumir la información sobre los delitos con miras a la presentación. En todo caso fue indispensable un sistema de clasificación jerarquizada de los delitos. Una cuestión técnica esencial fueron los métodos de cómputo dado que las decisiones relativas a la clasificación tienen

¹³⁷ Naciones Unidas (2004). Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal. Departamaneto de Asuntos Económicos y Sociales. Serie F, nº 89.

¹³⁸ Archer, D. y Gartner R. (1984). Violencia y delincuencia en perspectiva Cross-national. New Haven: Yale University Press.

¹³⁹ Naciones Unidas (2004). Op. cit.

profundas consecuencias respecto de la utilidad de los datos producidos. Por ejemplo, ¿cómo debe registrar la policía los incidentes delictivos? Si un solo delincuente comete varios delitos en un mismo “incidente”, ¿cuántos delitos deberían registrarse para fines estadísticos? Si, como ocurre en muchos países, sólo se computa para fines estadísticos el delito más grave, las estadísticas de incidencia sufrirán una deflación y al mismo tiempo se incrementará la proporción de incidentes graves en relación con los que carecen de gravedad. El problema se agudiza cuando las estadísticas se utilizan en una tasa única, como, por ejemplo, la tasa del problema de la delincuencia.

Debe apuntarse que los datos de este conjunto de estadísticas representan las cifras oficiales de los países miembros de las Naciones Unidas. Son, en definitiva, las estadísticas que las diferentes naciones optaron por poner a disposición de las Naciones Unidas. Las cifras se recogieron de la encuesta original de la delincuencia mundial de Naciones Unidas realizada a partir de 1976. Los países que respondieron en un primer momento fueron: Argelia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Ecuador, Egypt, El Salvador, Finland, France, German Fed Rep, Greece, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Kuwait, Malaysia, Maldives, Morocco, New Zealand, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Qatar, San Marino, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Rep, Trinidad Tobago, United Kingdom, United States, Yugoslavia, Norway, Canada, Mauritius, Turkey¹⁴⁰.

Algunos datos procedentes del informe Global Study on Homicide 2013¹⁴¹ son interesantes porque proporcionan una descripción comprensiva de homicidio doloso en todo el mundo. Como homicidio es uno de los indicadores más exactos y comparables para la medición de la violencia, el objetivo de este estudio es mejorar la comprensión de la violencia criminal proporcionando una amplia variedad de información sobre donde se produce el homicidio y con qué intensidad, sobre ¿quién corre más riesgo, por qué están en riesgo y exactamente cómo sus vidas toman de ellos? Además, los patrones de homicidio con el tiempo arrojan luz sobre las diferencias regionales, especialmente cuando se observa las tendencias a largo plazo. El homicidio doloso causó la muerte de casi medio millón de personas (437.000) en todo el mundo en 2012. Más de un tercio de esos (36%) ocurrieron en las Américas, 31 por ciento en África y el 28 por ciento en Asia, mientras que Europa (5 por ciento) y Oceanía (0.3 por ciento) representaron las partes más bajas de homicidios a nivel regional.

¹⁴⁰ First and Second United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (1970-1980). United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (CTS)

¹⁴¹ UNODC (2014). Global study on homicide. Viena. United Nations Office on Drugs and Crime.

Cuadro 11. Países con mayor número de homicidios por 100.000 habitantes en África.

País	Fuente	Indicador	2012
Etiopia	WHO	Ratio	12,0
Mozambique	WHO	Ratio	12,4
Rwanda	WHO	Ratio	23,1
South Sudan	National police	Ratio	13,9
United Republic of Tanzania	WHO	Ratio	12,7
Central African Republic	WHO	Ratio	11,8
Congo	WHO	Ratio	12,5
Democratic Republic of the Congo	WHO	Ratio	28,3
Equatorial Guinea	WHO	Ratio	19,3
Sudan	WHO	Ratio	11,2
Botswana	WHO	Ratio	18,4
South Africa	National police	Ratio	31,0
Swaziland	WHO	Ratio	33,8
Cabo Verde	Judicial police	Ratio	10,3
Côte d'Ivoire	WHO	Ratio	13,6
Gambia	WHO	Ratio	10,2

Fuente: Naciones Unidas. Anuario 2015.

3.2. La delincuencia registrada en la Unión Europea

En la Unión Europea (UE), la oficina estadística Eurostat¹⁴² publica datos sobre delincuencia y sistemas de justicia penal desde 1950 en lo que respecta al número total de delitos registrados, y desde 1993 en lo relativo a una serie de delitos concretos. La base de datos también incluye estadísticas sobre las poblaciones reclusas desde 1987 y sobre el número de agentes de policía desde 1993. Las cifras sobre el Reino Unido se notifican por jurisdicciones separadas: Inglaterra y País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por norma general, las comparaciones se basan más en las tendencias que en los datos concretos, partiendo de la hipótesis de que las características del sistema de registro de un país se mantienen constante a lo largo del tiempo. No obstante, hay numerosas interrupciones de las secuencias temporales así como otros cambios metodológicos y de definición. Además, la comparación de las estadísticas sobre delincuencia entre países puede verse afectada por una serie de factores, por lo que la información presentada debe analizarse con precaución. Entre las peculiaridades cabe señalar: las diferencias entre los sistemas legales y de justicia penal; la proporción de delitos denunciados a la policía y registrados por ella; las diferencias en el momento de registro de los delitos (por ejemplo, cuándo se denuncia a la policía, cuándo se identifica a un sospechoso, etc.); las diferencias en las normas de contabilización de las

¹⁴² Eurostat, Database. <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

infracciones múltiples; y las diferencias en la lista de infracciones incluidas en las cifras de delincuencia globales.

Las cifras relativas a la población reclusa también pueden verse afectadas por una serie de factores como: el número de asuntos tramitados por los órganos jurisdiccionales; el porcentaje de delincuentes condenados que reciben penas de privación de libertad; la duración de las penas impuestas; el tamaño de la población en prisión preventiva; la fecha en que se realizó el estudio (especialmente cuando ha habido amnistías u otro tipo de liberación anticipada). La población reclusa se mide como el número total de reclusos adultos y menores de edad (incluidos los detenidos en prisión preventiva) a uno de septiembre de cada año. Las cifras incluyen a los delincuentes reclusos en centros penitenciarios, centros para delincuentes juveniles, centros para toxicómanos y hospitales psiquiátricos o de otro tipo.

Los primeros pasos hacia un sistema más comparable de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal se esbozaron en la Comunicación de la Comisión Europea titulada ‘Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 - 2010’¹⁴³, cuyo objetivo a corto plazo fue recopilar datos nacionales y evaluar la calidad de los datos. Sin embargo, el objetivo a más largo plazo de la Dirección General de Interior de la Comisión Europea fue desarrollar, en estrecha colaboración con Eurostat, una metodología armonizada en la que basar la recopilación de estadísticas de la UE para permitir las comparaciones de la estructura y las tendencias de la delincuencia entre estados miembros. Esta labor prosigue todavía con arreglo al Programa de Estocolmo de 2009 ‘Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano’.

Normalmente no existen controversias al analizar los tipos y niveles de delincuencia entre los países, porque la legalidad y los sistemas de justicia penal difieren en áreas tales como: definición de delitos; métodos de presentación de informes, grabación y registro de delitos; y las tasas de delito no denunciadas. Aunque las cifras nacionales han sido agregadas para proporcionar estimaciones globales en el conjunto de la Unión Europea, ésto es solamente con el fin de identificar las tendencias generales. De cualquier manera, las inferencias a nivel de la UE o de los Estados miembros deben basarse en las tendencias temporales y no en años concretos. Las cifras totales registradas muestran sólo las ofensas contra el código penal o criminal; quedan excluidos los delitos menos graves (delitos menores). En este sentido hay que apuntar que el número de delitos registrados en la UE ha disminuido constantemente desde 2005, con un 10% menos de delitos registrados en 2010.

¹⁴³ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo. Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 – 2010. COM(2006) 437 final

Al mirar las cifras nacionales detalladas, la situación es sin embargo más equilibrada: doce Estados miembros de la UE contempló su número de delitos aumentar dentro de este período de cinco años. En contraste, este número ha disminuido en 13 países de la UE, los cambios más notables se registraron en Malta (-28%), Grecia (-27%) e Inglaterra y Gales (-25%). Este último ha influido en gran medida en la tendencia descendente de EU con la mayor disminución de delitos en términos de casos registrados (1.5 millones) entre los estados miembros en este período. Más allá de las fronteras de la UE, el número total de delitos registrados por la policía en Turquía aumentó un 57% entre 2007 y 2010 (después de un descenso en la serie en 2006).

Analizando las cifras de los delitos violentos que incluyen aquellos en que se ejerce violencia contra la persona (por ejemplo, agresión física), robo (robar por la fuerza o amenaza de fuerza) y delitos sexuales (incluida la violación y agresión sexual); y aunque los análisis detallados de esta clase de delito es difícil porque no todos los Estados miembros utilizan una definición estándar, hay que señalar que la tendencia general en el nivel global de la UE es un descenso de alrededor del 6% en el número de este tipo de delitos registrados entre 2007 y 2010. Este descenso generalizado está fuertemente influenciado por las cifras de Inglaterra y Gales, donde hubo una caída de más de 146 mil delitos violentos registrados entre 2007 y 2010. Contemplando al resto de los estados miembros, la imagen aparece heterogénea, con subidas significativas entre 2007 y 2010 en Hungría (+ 30%), Dinamarca (+ 28%) e Irlanda (+ 19%) y grandes disminuciones en Letonia (-26%), Lituania (-22%) y Eslovaquia (-21%).

Con respecto a los homicidios definidos como el asesinato intencional de una persona, incluyendo asesinato, homicidio involuntario, la eutanasia y el infanticidio y excluyendo la muerte por aborto, la conducción de manera arriesgada y el suicidio asistido, hay que decir que las cifras son bastante consistentes, aunque las definiciones varían entre unos países y otros. Para esta figura delictiva se suele utilizar el número de víctimas (más que el número de casos en cuanto a otros tipos de delitos). Los resultados presentados, con excepción de Letonia, donde las cifras incluyen intento de homicidio, y aquellos países donde la policía registra homicidios como cualquier muerte que inmediatamente no se pueda atribuir a otras causas. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes revela una tendencia a la baja: comparando las proporciones promedio para 2005-2007 con los del 2008-2010.

Eurostat es la oficina de estadística de la Unión Europea. Recibió su mandato en el marco del Programa de La Haya para desarrollar estadísticas comparables sobre delincuencia y justicia penal. Se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas a este fin en el marco del Plan de Acción 2006-10 de la UE sobre el desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal. Desde la finalización

de este Plan de Acción, el sistema está siendo mejorado y ampliado como parte de la ejecución del Programa de Estocolmo. La metodología utilizada por Eurostat se basa en la desarrollada por el European Sourcebook y por las encuestas de Naciones Unidas llevada a cabo por la UNODC (UN CTS). A los países se les pidió que se adhirieran a una definición estándar para elaborar las cifras¹⁴⁴.

Como se señala desde EUROSTAT¹⁴⁵, efectuar comparaciones de los niveles del delito basándose en las cifras absolutas que pueden ser engañosa porque se pueden ver afectadas por muchos factores, incluyendo:

- Sistemas legales y de justicia penal diferentes
- Ratios de sistemas en el cual delitos son denunciados a la policía y registrados por ellos
- Diferencias en el momento en el cual se mide el delito (por ejemplo, cuando se denunció a la policía, en la identificación de sospechosos, etc.)
- Diferencias en el Reglamento por el cual varios delitos se cuentan
- Diferencias en la lista de delitos que se incluyen en la lista general

Por estas razones, las comparaciones directas de los niveles de delincuencia en los diferentes países son difíciles de hacer. Por ello, las tasas per cápita no se presentan, excepto el homicidio y la prisión de población donde las cifras pueden ser más fácilmente comparables. En estos casos, se calculan las tasas per cápita promediado por más de 3 años. Debe tenerse cuidado al considerar las tasas de homicidio ya que pueden variar considerablemente en algunos años, especialmente en los países pequeños, donde puede haber saltos de no tener ningún homicidio en un año, a uno o dos al siguiente. En general las comparaciones se realizan mejor acudiendo a las tendencias que a los niveles, bajo el supuesto de que las características del sistema de grabación dentro de un país siguen siendo bastante constantes en el tiempo. Incluso aquí, sin embargo, hay muchas excepciones debido al cambio de método, provocando roturas en la serie. En las series nacionales los cambios están disponibles para los años entre 2007 y 2010, los índices se calculan utilizando el año de 2007 como base, para hacerla más fácil en el seguimiento de las tendencias. El sitio web permite a los usuarios el acceso a los datos y los metadatos. Existen cifras sobre el total de delitos a partir de 1950 en adelante; desde 1993 en adelante para algunos delitos específicos; desde 1993 para el número de agentes de la policía; y desde 1987 para la

¹⁴⁴ Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 - 2010 (COM (2006) 437 Final, 07.08. 2006).

¹⁴⁵ Tavares C.; Thomas G. y Bulut F.: Population and social conditions. Eurostat Statistics in focus 6/2012. 2012.

población carcelaria. Los archivos de metadatos contienen información adicional sobre la definición precisa del delito utilizado por cada país y están disponibles a través de Internet.

La recogida de datos de Eurostat abarca no sólo los actuales 27 Estados miembros de la Unión¹⁴⁶, sino también los países candidatos (Croacia, Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía), los países candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Serbia), los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EEE) (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), otros países europeos, tales como la Federación Rusa, y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Sudáfrica. Los ítems que se incluyen son los siguientes: delincuencia total, homicidio, delitos violentos, robo con violencia, robo en casa habitada, robo de vehículos y tráfico de drogas, así como población carcelaria y número de agentes de policía. Europeo.

Además de los datos sobre el número de delitos registrados oficialmente y presentados por la policía, esta fuente también ofrece información sobre las poblaciones carcelarias. Al igual que la policía y sus prácticas, hay algunas cuestiones con respecto a las cifras de la prisión que deben ser consideradas al hacer valoraciones sobre los datos que aporta esta fuente. Las cifras de población penitenciaria pueden verse afectadas por los siguientes factores: la carga de trabajo (número de casos tratados) de los tribunales, la probabilidad de recibir una pena privativa de libertad, las diferencias entre los países en la extensión de las penas de prisión impuestas por un determinado delito, las diferencias entre los países en relación con el tamaño de la población en prisión preventiva, la fecha de la encuesta, especialmente cuando se aplican amnistías o beneficios penitenciarios, y las diferencias entre los países con respecto a prisión preventiva (los sistemas jurídicos de algunos países pueden ser más propensos a mantener sospechosos detenidos antes y durante el juicio, lo que, en consecuencia, aumenta el tamaño de la población reclusa).

Sin embargo, esta base de datos también tiene algunos puntos fuertes que merecen ser destacados, tales como el número y el tipo de los países cubiertos, no limitado a los países de la UE. Respecto a las diferencias en la definición de ciertos delitos, que anteriormente se ha mencionado como un posible punto débil, el sistema de recogida de datos SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) empleado por Eurostat proporciona detalles sobre la divergencia de las cifras nacionales desde la definición estándar propuesta, lo que no deja de ser un avance hacia la comparación de los datos. Un ejemplo de los cuadros proporcionados por Eurostat, lo podemos

¹⁴⁶ Las “statistics in focus” sobre delincuencia y justicia penal están disponibles en la página web: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/introduction> (última consulta: 18.06.2013).

comprobar abajo, en donde destaca Francia que ha dejado de considerar publicables el número total de delitos o la denominada delincuencia total.

Cuadro 12. Evolución número total de delitos en algunos países de la UE.

GEO/TIME	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgium	999.396	1.022.813	1.034.430	1.043.628	1.067.295	1.072.011	1.110.972	1.073.773
Denmark	432.704	425.093	445.271	476.953	491.792	471.088	466.765	440.772
Germany	6.391.715	6.304.223	6.284.661	6.114.128	6.054.330	5.933.278	5.990.679	5.997.040
Spain	2.230.906	2.267.114	2.309.859	2.396.890	2.339.203	2.297.484	2.285.525	2.268.867
France	3.775.838	3.725.588	3.589.293	3.558.329	3.521.256	:	:	:
Italy	2.579.124	2.771.490	2.933.146	2.709.888	2.629.831	2.621.019	2.763.012	2.818.834
Netherlands	1.348.285	1.311.770	1.303.835	1.277.775	1.254.480	1.194.030	1.194.055	1.139.720
Austria	605.272	589.495	594.240	572.695	591.597	535.745	540.007	548.027
Portugal	392.714	399.563	398.575	430.486	426.040	422.587	413.702	403.200
Sweden	1.241.843	1.224.958	1.306.324	1.377.854	1.405.626	1.370.399	1.416.280	1.402.588
England and Wales	5.555.172	5.427.558	4.952.277	4.702.697	4.338.295	4.150.916	4.023.253	3.731.338
Norway	275.684	277.016	271.712	264.199	277.121	270.656	264.247	273.541
Switzerland	352.723	335.157	326.232	323.235	676.309	656.858	692.954	750.371
Montenegro	9.579	9.564	9.258	8.277	8.101	6.994	6.147	5.827

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Database.

3.3. La delincuencia registrada en el Consejo de Europa

El Consejo de Europa es una institución relativamente poco conocida, aunque sumamente importante, se compone de unos 40 Estados en una relación más flexible que la Unión Europea. Todos los miembros de la UE pertenecen al Consejo de Europa y ha habido cooperación en asuntos de delincuencia y justicia desde la década de 1950¹⁴⁷. Los inicios de sus informes sobre delitos se remontan a principios de 1990 cuando un grupo de expertos en estadística fue convocado por el Consejo para desarrollar un modelo para la recolección de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal de los estados miembros. El primer informe se generó en 1995 y fue publicado en 1999 con datos retrospectivos de 1990–1996, con cifras procedentes de 34 países europeos. El siguiente informe salió a la luz en 2003, incluyendo los datos de 1996–2000 con 36 países europeos. La tercera edición salió en 2006, patrocinada por Francia, Holanda, Suiza y el Reino Unido, abarcando los años 2000 – 2003 para 37 países. La cuarta edición, cubriendo los años 2003–2007 es una actualización de la tercera edición ampliada y abarca los años 2003–2007. La quinta edición cubre el periodo 2007–2011 y ha sido publicada en septiembre de 2014¹⁴⁸.

El primer proyecto European Sourcebook comenzó en 1996. En ese año el Consejo de Europa estableció un comité para preparar un compendio de

¹⁴⁷ European Sourcebook on Crime and Criminal Justice Statistics. (Europeo Sourcebook, 2003. <http://europeansourcebook.org/>).

¹⁴⁸ Aebi M. et alt. (2014). European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014. Helsinki. European Institute for Crime Prevention and Control.

datos del delito y justicia penal para sus miembros Estados. Se recopiló información de 36 países europeos para el período 1990-1996 y se incluyeron los datos estadísticos e información sobre las reglas estadísticas y las definiciones de las diferentes figuras delictivas. Esto dio lugar a la publicación por el Consejo de Europa de la primera consulta Europea en 1999. También se publicó un boletín sobre “hallazgos clave” en el año 2000 y un número de la revista *European Journal on Criminal Policy and Research*¹⁴⁹ se dedicó principalmente a algunos resultados de los consulta de datos. El segundo proyecto *European Sourcebook* fue patrocinado por los gobiernos de Suiza, Reino Unido y Holanda y los resultados fueron publicados en diciembre de 2003 en una serie de publicaciones. Las estadísticas recopiladas se nutren de las cifras oficiales de las fuerzas policiales, servicios de fiscalía, tribunales y sistemas penitenciarios. También incluye algunos resultados de la Encuesta Internacional de Victimización. En cada país un corresponsal nacional recoge estos datos según un cuestionario detallado. Este cuestionario cubre los siguientes delitos¹⁵⁰:

- Homicidios,
- Violación,
- Asalto
- Robo,
- Hurto (robo total y doméstico),
- Sustracción de vehículo de motor ,
- Tráfico de drogas
- Narcotráfico
- Otros

Para cada uno de estos delitos se proporciona una definición estándar y se solicita a los encuestados que indiquen las posibles desviaciones de esta definición de manera sistemática. Los datos recogidos son revisados por un grupo de coordinadores regionales y se puede solicitar información suplementaria sobre datos de un corresponsal nacional. Todas las fuentes de información pueden consultarse en la página web del *Europea Sourcebook*: <http://www.europeansourcebook.org>. El libro de consultas publicado contiene además las tasas habituales, las tasas por cada 100.000 habitantes e incluye proporciones (por ejemplo, de jóvenes delincuentes, son femeninas, inmigrantes) para las estadísticas policiales¹⁵¹. También proporciona de una

¹⁴⁹ *European Journal on Criminal Policy and Research* (2000). Volumen 8, número 1.

¹⁵⁰ Lewis, C. (2012). *Crime and Justice Statistics Collected by International Agencies*. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 18, 5-21.

¹⁵¹ Ana I. Pérez Cepeda & Demelsa Benito *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2013, núm. 15-08, p. 08:1-08:34 – ISSN 1695-0194. 08: 28

manera comparable, los resultados de las partes técnicas del cuestionario (por ejemplo, desviaciones de la definición estándar de delitos, contando las unidades, cambios en la recolección de datos). Además contiene un comentario útil que incorpora conclusiones procedentes de un grupo de expertos en la clasificación de cambios en las tasas de criminalidad en un sentido amplio.

Debido a la ampliación de los miembros del Consejo de Europa y de la Unión Europea en la década de 1990, la necesidad para una evaluación periódica comparando los niveles de delincuencia se hizo aún más evidente. En este contexto se creó en 1993 una comisión europea sobre problemas de la delincuencia [CDPC] por un grupo de especialistas en estadísticas y otros datos cuantitativos sobre tendencias de la delincuencia y justicia penal. El grupo estuvo integrado por expertos de Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Durante un período relativamente corto, se abordaron un gran número de cuestiones teóricas y técnicas. Estos temas incluyen delitos que debían ser considerados, sus definiciones y comparación de datos, los formatos de tablas correspondientes, prácticas estadísticas incluyendo las normas en los distintos países, interpretación de los datos disponibles, infraestructura necesaria para una implementación completa del proyecto europeo. En 1995, el grupo presentó el Sourcebook europeo del delito y justicia penal estadísticas.

Dado que la criminología comparada tiene que enfrentarse al problema de las definiciones del delito nacional que a menudo son incompatibles. El grupo adoptó el siguiente procedimiento: para todos los delitos incluidos en el libro europeo, se utilizó una definición estándar y los países fueron invitados a seguir la definición estándar siempre que fuera posible. Definiciones de delito y comentarios relacionados con figuran en el apéndice a este libro, proporcionando para cada uno de los delitos seleccionados: – la definición estándar; – una lista de los países que no fueron capaces de cumplir totalmente con esta definición con indicación de los elementos de la definición que eran incapaces de satisfacer. Los países que no figuran fueron capaces de ajustarse a la definición estándar

Todos los países fueron capaces de dar datos sobre estadísticas de la policía, con sólo pequeñas desviaciones de la definición estándar, por homicidio, violación, hurto, robo, delitos de drogas y delitos totales. Sin embargo, para otros delitos había más desviaciones de la definición estándar. Las variaciones de la definición estándar son importantes cuando se comparan los niveles de delincuencia registrado entre los países europeos. Cinco países (Dinamarca, Italia, Rumania, Suiza y Turquía) informaron que no habían especificado las normas de registro (es decir, normas que regulan la manera en que delito se muestran datos en las tablas).

Este punto es importante porque los datos que se registran varían entre países

Los diferentes países informaron que se registraron delitos tan pronto como el primer delito fue denunciado a la policía. Nueve países informaron que la grabación se realiza posteriormente, ocho que la grabación ocurre solamente después de la investigación. Es difícil interpretar estos resultados, pero parece que 'cuanto antes' y 'posteriormente' implica que el etiquetado legal del delito es la tarea de la policía, mientras que 'investigación después' parece indicar que el etiquetado es hecho por la Fiscalía una vez se haya completado la investigación policial. Esto podría explicar algunas de las diferencias en los niveles entre los países, en particular por delitos como homicidio y asalto.

Las reglas para registrar delitos múltiples varían entre países. Por ejemplo, 20 países declararon que se aplica una prioridad al delito principal y 18 que no lo hacen. Además, los delitos múltiples se cuentan como dos o más delitos en 21 países, y al contrario como una ofensa en 13 países (la situación era incierta o relacionados con el tipo de delito en cinco países). La mayoría de los países cuenta un delito cometido por más de una persona como un delito. Mientras que muchos países respondieron a la pregunta sobre el número de agentes de la policía, pocos eran capaces de satisfacer la definición estándar.

Para la cifra del total de delitos a nivel policial, las diferencias entre los países eran grandes, incluso cuando eran eliminadas las infracciones de tráfico. Esto refleja las diferencias en los delitos incluidos o excluidos y el punto en el cual se registran las estadísticas. Por otra parte, las tendencias para los delitos totales cubran situaciones muy diferentes en cuanto al tipo de delitos comprendidos ya que muchos países restringen su contabilidad a sólo un grupo pequeño de delitos. En este sentido, se pueden apreciar variaciones muy amplias en delitos de tráfico registrados en Europa oriental con países mostrando unos niveles muy bajos (menos de 100 delitos por cada 100 000 habitantes) en comparación con Finlandia (3 894 en 2007), Holanda (952) y Suecia (889). Por otro lado, los robos registrados son mucho más comunes en Suecia e Inglaterra y Gales en comparación con otros países. Tales variaciones suelen reflejar las diferencias en la manera en la que se registran el número de delitos. Por lo tanto, las cifras de los delitos totales y diferentes tipos de delitos no deben utilizarse para llevar a cabo comparaciones detalladas, país por país.

Para las ofensas criminales totales a nivel policial, las diferencias entre los países eran grandes – incluso cuando fueron quitados infracciones de tráfico. Esto refleja las diferencias en los delitos incluidos o excluidos y el punto en el cual se registran las estadísticas. Por otra parte, las tendencias para las ofensas criminales totales cubran situaciones muy diferentes en cuanto al tipo de delitos comprendidos desde muchos países restringen su conteo de crimen a sólo un grupo pequeño de delitos. Amplias variaciones

encontradas en delitos de tráfico grabados con Europa Oriental los países mostrando muy bajos niveles (a menos de 100 delitos por cada 100 000 habitantes) en comparación con Finlandia (3 894 en 2007), Holanda (952) y Suecia (889). Por otro lado, robos registrados son mucho más comunes en Suecia e Inglaterra y Gales en comparación con otros países. Tales variaciones suelen reflejar las diferencias en los delitos de manera más que las diferencias en el número de delitos registrados se tratan. Por lo tanto, especialmente las figuras en total o criminal también en tipos diferentes de crimen, no debe utilizarse para realizar comparaciones detalladas, país por país, niveles

Según Pérez¹⁵². Esta fuente de datos sobre delincuencia adolece de ciertas deficiencias, uno de los puntos débiles de este instrumento es la limitada comparabilidad de los datos que ofrece. Aunque el objetivo del European Sourcebook es presentar información comparable sobre la delincuencia y la justicia penal en Europa, la comparación cronológica de los datos de un país, así como la comparación internacional entre países es limitada. Dentro de un país, los cambios de un año a otro pueden deberse no sólo al aumento o disminución real en el número de delitos, sino a los cambios en la legislación o a las modificaciones en las reglas para la recogida y presentación de estadísticas. La comparación internacional es aún más difícil porque los países son muy diferentes en su forma de organizar tanto la policía como los sistemas judiciales, así como en la forma de definir sus conceptos jurídicos, y en los procedimientos para recopilar y presentar sus estadísticas. De acuerdo con el European Sourcebook, “la falta de definiciones uniformes de los delitos, así como de instrumentos de medición comunes y de una metodología común hace que las comparaciones entre países sean extremadamente arriesgadas”⁵⁵. Para evitar una interpretación errónea de los datos, el European Sourcebook ofrece numerosas notas e información técnica que explica las cifras de cada tabla.

Otro defecto del European Sourcebook es el hecho de que no todos los datos están disponibles para todos los países. En general, el European Sourcebook presenta datos recogidos por los corresponsales nacionales. Donde esta información no estaba disponible, las cifras de los respectivos países no aparecen. De hecho, hay muchas tablas donde la información disponible se refiere únicamente a menos de la mitad de los países. A pesar del problema de la comparabilidad, el European Sourcebook es el único instrumento que existe en toda Europa para la recopilación y presentación de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal. Entre sus ventajas cabe destacar, por ejemplo, la metodología para la recopilación y presentación de los datos (destinada a garantizar la máxima precisión de la información

¹⁵² Pérez A. y Benito D.(2013).Estudio de los instrumentos existentes para medir la delincuencia. Revisya Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

mediante la introducción de definiciones estándar de los delitos y proporcionando explicaciones detalladas país por país de lo que en realidad se denuncia), las oportunidades para el análisis comparativo (aunque sujeto a importantes limitaciones) y el amplio alcance en términos de cobertura geográfica y de tipos de delitos (en particular, con la inclusión de las nuevas categorías de delitos en la edición más reciente)

El análisis comparativo generalmente caen en una de tres categorías: (A) comparaciones distributivas, (B) niveles comparaciones y, (C) tendencia comparaciones¹⁵³.

A. Las comparaciones distributivas están dirigidas a responder a preguntas tales como: ¿los delitos de robo dominan el cuadro de delincuencia en la mayoría de los países? ¿Cuál es el perfil de edad de los delincuentes sentenciados en los distintos países?

B. Cuestiones relevantes para el nivel de comparación son del tipo siguiente: ¿qué país reporta el mayor índice de robo? ¿Qué países muestran tasas bajas de delincuentes encarcelados? ¿Qué sistemas de justicia penal tienen un alto nivel de deserción, por ejemplo, medido por la relación entre condenado y persona sospechosa?

C. Por el contrario, las interpretaciones de las tendencias tratan con preguntas tales como: la disminución en los delitos de robo difiere con el tiempo en varios países.

¹⁵³ Aebi M. (2014). Op. cit. Pág. 20.

PARTE IV

Capítulo 4. La delincuencia en España¹⁵⁴

La mayoría de los análisis comparados sobre la evolución de la seguridad ciudadana en el ámbito internacional, siguen basándose casi exclusivamente en el comportamiento que anualmente reflejan las diferentes estadísticas policiales de criminalidad como hemos visto en los casos de Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra. Son, análisis todavía limitados, porque siguen faltando en la mayoría de los países otros instrumentos o fuente de información periódica que permita complementar este complejo fenómeno desde sus más variados ángulos. En el caso de España el mejor medio para medir la delincuencia, después de lo que hemos apuntado para los datos procedentes de la Judicatura y de la Fiscalía, es el de la policía. Sin embargo, analizar la evolución de la delincuencia en España a través de las estadísticas policiales es severamente complicado. De hecho se podría decir que cada vez que un autor ha intentado hacerlo ha venido precedido de un lamento sobre el estado de la cuestión. De acuerdo, entre otros, a Garrido¹⁵⁵ “dadas las limitaciones que presentan las estadísticas oficiales en nuestro país, sólo a través de una depuración crítica de los datos estadísticos se conseguirá informar adecuadamente a la opinión pública acerca de la evolución y volumen de la delincuencia”. Por todo ello, una opinión muy extendida en la criminología española es considerar que las estadísticas policiales no ofrecen mucha confianza, que están mal hechas y que deben rechazarse, aunque al mismo tiempo se reconoce que existen tan pocas fuentes que no es posible renunciar a ninguna de ellas y menos si es oficial.

García y Pérez¹⁵⁶ también emiten una queja sobre este tema: “Los datos oficiales de la delincuencia que se ofrecen públicamente, aun siendo por lo común válidos y fiables, dan una información parca. Se suelen elaborar según las necesidades e intereses de la institución correspondiente, que no son siempre los de facilitar la información más amplia y completa a la población. Un ejemplo de la ausencia de información completa es que los datos por cada mil habitantes que se ofrecen en el presente trabajo, sobre la incidencia de los distintos tipos delictivos en las ocho provincias andaluzas extraídos de fuentes policiales, aportan una información muy distinta a la que se obtiene del análisis de los datos”. No es de extrañar por tanto que Aebi y Linde titulen su artículo “El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas” o que Serrano lo haga como “dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en España”.

¹⁵⁴ Algunos epígrafes están configurados gracias a la información inédita del Ministerio del Interior. Al cual debo agradecerle las facilidades ofrecidas.

¹⁵⁵ Garrido V. (2010). La prevención de la delincuencia en Europa y en España: los retos pendientes. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, Nº 3 Págs. 377-408.

¹⁵⁶ García E. y Pérez F. (2004). Reciente evolución de la delincuencia en Andalucía. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. <http://criminnet.ugr.es/recpc>.

A todo ello hay que sumar las denuncias efectuadas desde los medios de comunicación. En una noticia publicada en el diario El País de 13 de mayo de 2013, bajo la rúbrica de “los muertos resucitan en las estadísticas de Interior” pone en tela de juicio estas estadísticas que tacha de manipuladas con fines políticas. Uno de los epígrafes más comentado es el de que no es posible que el número de asesinatos sea mayor que el de personas muertas, cosa que ocurre en el anuario estadístico de los años 2005 y 2006. “se produjo el absurdo de que de que el número de homicidios consumados era superior al de víctimas”. Otro tema que aborda es el de la manipulación política de los datos, trátase del ministro que se trate, ya que la tasa de criminalidad no para de bajar, como no para de subir el porcentaje de casos resueltos, lo cual conduce a la creencia política de que el Ministerio de Interior es una fuente de buenas noticias frente a cualquier crisis económica. Incluso cuando el número de robos aumenta, se explica que es debido a que se ha añadido en la contabilidad “las segundas residencias, garajes, trasteros, patios y zonas comunes”. Igualmente se critica la ruptura de las series estadísticas a partir de 2006. El portavoz del sindicato de la asociación Unificada de la Guardia Civil, declara en la misma noticia: “Hubo un mes que controlamos todas las denuncias en lagunas unidades... Luego vimos que muchos delitos se coinvertían en faltas para rebajar la gravedad o por cuestiones de productividad”.

4.1. Las estadísticas policiales en España:

Las estadísticas sobre delincuencia en España empiezan a ser oficiales y publicadas, aunque con limitaciones, desde la primera edición del Anuario Estadístico de España de 1860-1861, procedentes del Ministerio de la Gobernación, Dirección General del Gobierno, y accesible a través de la red, que ya recoge los delitos en un epígrafe especializado denominado “estadística criminal” compuesto por 23 tablas y que refleja en su primer capítulo el número de personas aprehendidas en todo el Reino desde 1858 por los agentes de la autoridad, exceptuando la Guardia Civil, por medio de cuatro columnas: delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, otros delitos y faltas. En el segundo de los capítulos recoge las capturas verificadas por las fuerzas de la Guardia Civil desde el año 1848 hasta 1858 inclusive, de acuerdo a seis columnas: delincuentes, ladrones, reos prófugos, desertores, detenidos y contrabando.

Ya en fechas más tempranas, la elaboración periódica de las estadísticas policiales comenzó a ser una exigencia oficial a partir de una orden comunicada del Ministerio del Interior de 26 de diciembre de 1979. Con anterioridad a esta fecha existían estadísticas policiales de delincuencia pero como hemos dicho de escasa fiabilidad. El Plan General de Estadística del Ministerio del Interior tenía como objetivo alcanzar un conocimiento estadístico de las actividades desarrolladas por los centros directivos y

Unidades dependientes del Ministerio y establecer la coordinación precisa en esta materia, que permitiera elaborar periódicamente las estadísticas de conjunto de tales actividades y darlas a conocer a los organismos y entidades interesadas. Los primeros anuarios estadísticos son de 1989, pero van dedicados a dar información de organigramas y de materiales con que cuenta el Ministerio.

Por otra parte, la necesidad de información periódica a los diversos organismos oficiales y, en su caso, a la opinión pública, sobre las actividades que desarrollaba el departamento en el ámbito de sus competencias y que se reflejaba en una serie de estadísticas relativas al ejercicio de las libertades públicas, a la seguridad ciudadana en general y a la seguridad vial en particular, justificó la aprobación de un plan general de estadística del Ministerio, en el que se integraban de forma coordinada las estadísticas que elaboraban sus distintos centros directivos, se establecía la periodicidad con que ha de suministrarse por los mismos dicha información y se encomendaba a la pertinente unidad administrativa; así como la función coordinadora de tales actividades estadísticas, y los estudios e informes que se estimasen oportunos. Como se establece en la Orden de 1979¹⁵⁷:

“Las Unidades o Dependencias suministradoras de la información que sirve de base para la elaboración de las estadísticas integradas en el Plan y que se recogen en el Anexo, cumplimentarán mensualmente los impresos normalizados y los remitirán a los responsables de la función estadística dentro de cada Centro Directivo antes del día 10 del mes siguiente. Estos, una vez globalizados los datos estadísticos, cursarán dicha información al Director del Programa de Estadística y Análisis de Datos de la Secretaría General Técnica del Departamento antes del día 20 del mismo mes.”¹⁵⁸

Sin embargo, no fue hasta 1985 con la aprobación del Programa Estadístico de Seguridad (PES) por orden comunicada al Ministerio del Interior de 27 de febrero de 1985, cuando las cifras sobre delincuencia en España empezaron a ser fiables y listas para el análisis¹⁵⁹. En ésta se establecía que la ejecución de éste programa estadístico le correspondía a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través del Gabinete de Coordinación y Estudios. Dicho gabinete se encargaba de la coordinación de los servicios de estadística de las direcciones generales de la policía y de la guardia civil, impartiendo criterios, recabando información y evacuando las consultas que aquellas formulaban.

“Finalmente, con el nuevo sistema se pretende acabar con la actual dispersión estadística, estableciendo un impreso único

¹⁵⁷ Orden de 26 de diciembre de 1979 por la que se aprueba el Plan General de Estadística del Ministerio del Interior. Pág. 2.

¹⁵⁸ Op. Cit. Pág. 5

¹⁵⁹ Orden Comunicada del 27 de febrero de 1985. Pág. 2.

que sustituya a todos los actualmente utilizados y a través del cual, una vez procesados debidamente sus datos, se pueda proporcionar a todas las Autoridades, Centros Directivos y Unidades, tanto centrales como periféricas, del Departamento, toda la información estadística que requieran, con el detalle y periodicidad que en cada caso demanden”

El Programa Estadístico de Seguridad comprende:

1. Las normas necesarias para lograr la coordinación estadística de los centros y unidades del departamento competente en la materia.
2. Lo impresos normalizados de recogida de datos.
3. Las tablas estadísticas de presentación de los datos obtenidos.
4. Los programas informáticos de tratamiento de los referidos datos.
5. Las normas sobre difusión y publicación de la información estadística”¹⁶⁰.

De acuerdo a un documento interno de la Secretaría de Estado de Seguridad¹⁶¹, la Ley que regula las competencias de los diferentes cuerpos de Policía, es la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además de esta normativa, los cuerpos dependientes de las diferentes autonomías, vienen observando los preceptos fijados en la normativa autonómica en cuestión. Por otro lado, los cuerpos de Policía Local, aparte de todo lo añadido anteriormente, deben tener en cuenta la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En Ley Orgánica 2/86 se pergeñan todos los aspectos relacionados con las funciones y principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como consecuencia del modelo policial regulado en dicha Ley, se observan tres niveles de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1º Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil: con competencia en todo el territorio nacional.

2º Cuerpos de Policía Autonómicos: con capacidad de actuación en su ámbito territorial (actualmente existen en Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias)

3º Policías Locales: con competencias delimitadas a su ámbito municipal y a las funciones descritas en la Ley Orgánica 2/86. Un aspecto innovador, es la forma de llevar a cabo la colaboración en funciones de Policía Judicial, por parte de los cuerpos de Policía Local. Para ello, en los municipios que lo soliciten y cumplan una serie de requisitos, descritos en el convenio marco, sus cuerpos de Policía Local podrán, ejercer funciones de colaboración en materia de Policía Judicial, tanto en lo que se refiere a la recepción de denuncias, como a la investigación de los hechos, en relación con las

¹⁶⁰ Orden Comunicada del 27 de febrero de 1985. Pág. 4.

¹⁶¹ Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Coordinación y Estudios. “El sistema estadístico de criminalidad en España”. Documento interno.

siguientes infracciones penales, cuando constituyan falta o delito menos grave.

A través del tiempo, las estadísticas policiales fueron adaptando sus variables y categorías a las reformas penales habidas, entre las que destacaba la aprobación del nuevo código penal de 1995. Los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística procedieron de una operación estadística que se realizaba en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en virtud de un convenio suscrito entre ambos organismos el 14 de febrero de 1995¹⁶². Más tarde, el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, introduciendo diferentes modificaciones en la estructura orgánica de la misma, creando el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), al que se le encomienda, entre otras, la competencia de desarrollar el Sistema Estadístico de Seguridad¹⁶³, entre cuyas competencias se encontraba el desarrollar el sistema estadístico de seguridad interior, elaborando y difundiendo las informaciones estadísticas relacionadas con la misma, así como impulsar los estudios e investigaciones dirigidos a conocer la situación y evolución de las diferentes formas delincuenciales y de la percepción social de seguridad. El 1 de enero de 2008, se decidió poner en marcha el nuevo Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), con una serie de variables estadísticas que ampliaban de manera considerable el conocimiento de la criminalidad, a la par que se implantaban novedosos procesos técnicos de obtención de la información estadística. Como consecuencia de la implantación del SEC, se dictó la Orden INT/2783/2009, de 29 de septiembre, a fin de habilitar su registro en la Agencia de Protección de Datos.

4.2. La recogida de datos: los impresos normalizados.

La finalidad del sistema estadístico de criminalidad es tener un conocimiento más profundo de los factores que inciden en la seguridad ciudadana, derivado del caudal de información que genera la actividad delictiva e infractora, así como estructurar, de acuerdo con criterios rigurosos y técnicos, la obtención, explotación y difusión de datos estadísticos relacionados con las infracciones penales y contra las leyes de seguridad ciudadana. Las personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos

¹⁶² Serrano A. et alt. (2006). Evolución de la delincuencia en España según las estadísticas oficiales (1998-2005). Revista de derecho penal y criminología. N18. Págs. 571-591.

Hernández M. (2001). Las estadísticas policiales. Los problemas de la investigación empírica en criminología: La situación española. Díez R. y Cerezo D. (Ed.). Tirant lo Blanch. Valencia, 2001. Pág. 26

¹⁶³ Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior

son: denunciantes y víctimas de infracciones contempladas en las leyes penales y de protección de la seguridad ciudadana, así como las personas sobre las que, presuntamente, pudiera recaer alguna responsabilidad por las indicadas infracciones. El procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Los datos procederán de las diligencias instruidas con ocasión de actuaciones policiales, reseñas de detenidos, denuncias recibidas a través de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diferentes Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con las que se establezcan acuerdos de colaboración. Los datos que se recogen son los relativos a la comisión de infracciones penales contra las leyes de Seguridad Ciudadana: Implicación y consumo de drogas y/o alcohol por parte de los responsables de la comisión de infracciones penales.

Posteriormente, esta orden ministerial fue modificada por la Orden INT/3310/2009 y por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo. Durante una serie de años, se fueron acometiendo procesos técnicos y de integración sucesiva de los diferentes cuerpos policiales en el nuevo sistema estadístico de criminalidad. Como consecuencia del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, el Gabinete de Coordinación y Estudios asumió las funciones en materia de estadística de criminalidad, que hasta esa fecha venía realizando el GESI. Con fecha 31 de enero de 2013, se dictó la Instrucción 1/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre la Estadística Nacional de Criminalidad, que daba carta de naturaleza al nuevo sistema de criminalidad, y regulaba una serie de cuestiones relacionadas con el mismo. Entre otros temas, se establecieron los objetivos de la estadística de criminalidad, instituciones participantes, funciones del Grupo Técnico del SEC, procedimiento de recogida y tratamiento de datos, publicación y difusión de datos estadísticos.

En la actualidad, el Ministerio del Interior, elabora una serie de estadísticas que están contempladas en el Plan Estadístico Nacional. Las operaciones estadísticas incluidas en dicho Plan, son las siguientes:

- 68001 Estadística de Seguridad: Delitos y Faltas
- 68002 Estadística de Seguridad: Detenciones
- 68003 Estadística del Documento Nacional de Identidad
- 68004 Estadística de Movimiento de Viajeros por Frontera
- 68006 Estadística de Intervenciones Humanitarias, Procedimientos de Habeas Corpus e Incendios Forestales
- 68008 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
- 68009 Registro de Asociaciones
- 68010 Estadística de Asociaciones
- 68020 Estadística General de la Población Reclusa. Periodicidad Mensual
- 68021 Estadística de los Internos en los Centros Penitenciarios. Evolución Semanal
- 68024 Información Estadística de Penas y Medidas Alternativas a la Prisión.
- 68030 Estadística Anual sobre Drogas
- 68040 Estadística de Población Extranjera Solicitante de Protección Internacional, Refugiados, Beneficiarios de Protección Subsidiaria, Desplazados y Apátridas
- 70021 Estadística sobre Actuaciones de Extinción de Incendios y de Salvamento

70041 Estadística de Matriculación de Vehículos
 70042 Estadística de Transferencia de Vehículos
 70043 Estadística de Bajas de Vehículos
 70044 Estadística del Parque Nacional de Vehículos
 70045 Estadística de Exámenes para la Obtención de Permisos y Licencias de Conducción
 70046 Estadística de Expedición y Revisión de Permisos y Licencias para Conducir
 70048 Estadística de Accidentes de Tráfico con Víctimas
 70049 Estadística de Denuncias por Infracciones de Tráfico
 70050 Estadística de Expedientes Incoados por Infracciones de Tráfico
 70051 Censo de Conductores
 70052 Estadística del Sistema de Permiso por Puntos
 70081 Estadística de Resultados Electorales
 70082 Estadística de Partidos Políticos

Los impresos normalizados de las estadísticas de seguridad ciudadana, se cumplimentan por aquellos funcionarios que, en cada caso, instruyan las respectivas diligencias (en la Guardia Civil se cumplimentan a nivel de Puesto, y en la Policía, a nivel de Inspecciones de Guardia, Grupos o Brigadas correspondientes). Una vez cumplimentados los impresos y antes de su grabación, se procede a la depuración de los datos recogidos por el personal estadístico. Con posterioridad a la depuración de los datos se produce la grabación y almacenamiento en los respectivos Servicios Centrales de Informática de las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil. Finalizados estos procesos los servicios de estadística de ambas Direcciones Generales remiten al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad los datos mensualmente, para que sean procesados por su servicio de estadística. De igual forma son remitidos los datos referentes a las policías autónomas.

La difusión interna de las estadísticas de seguridad corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad y la externa, así como su publicación, la lleva a cabo la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y se difunde habitualmente a través de publicaciones de carácter periódico. La difusión de la estadística delincriminal no contenida en las publicaciones periódicas y que sea solicitada por Organismos y Entidades Públicas o por los medios de comunicación social, debe ser autorizada por la Secretaría General Técnica del Departamento, previo informe de la Comisión de Coordinación Estadística y Vigilancia, formada por representantes de todos los organismos involucrados. La información estadística que haya de suministrarse a los Organismos Internacionales se centraliza y tramita por conducto de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Estadística, para su envío a través de Ministerio de Asuntos Exteriores¹⁶⁴.

Según los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, la recogida de datos se lleva a cabo mediante la cumplimentación de dos tipos de impresos: “actuaciones policiales” y “detenidos. En estos dos impresos se incluyen

¹⁶⁴ Pérez J.L. (). Información sobre delincuencia generada por el programa Estadístico de seguridad del ministerio de Interior. administracionelectronica.gob.es/pae.../Ponencia_054.pdf

alrededor de 80 variables, realizándose el enlace entre los dos impresos mediante 5 de ellas. Por cada intervención policial que dé lugar a la instrucción de diligencias debe cumplimentarse, al menos, un impreso de actuaciones. En caso de hechos conocidos, en cualquier grado de ejecución (consumado o tentativa) se cumplimentará un impreso de actuaciones, haciéndose constar todos los epígrafes correspondientes al mismo, significándose que en el caso de que concurran varias infracciones en una misma diligencia se cumplimentará un impreso por cada una de las infracciones. En caso de que el hecho, sea conocido y esclarecido simultáneamente, se cumplimenta un único impreso de actuaciones. Si por el contrario se trata de una ampliación de información en relación con un hecho ya consignado en su día como conocido o esclarecido, se procederá a cumplimentar un nuevo impreso haciendo constar los datos del hecho inicial.

La cumplimentación del impreso de actuaciones no procede en los siguientes supuestos:

- Accidentes de tráfico, salvo que existan indicios de infracción penal.
- Extravío o pérdida de documentos.
- Infracciones meramente civiles (ej.: incumplimiento de contrato).
- Precinto y desprecinto de vehículos.
- Catástrofes naturales, salvo que se trate de incendios forestales fortuitos.
- Aquellas infracciones administrativas que corresponde su seguimiento e investigación a otros Ministerios, tales como infracciones en materia de alimentación, fiscalidad, salubridad, etc.

En el impreso se recoge información referente a si la actuación se origina por iniciativa propia (acción policial) o por denuncia de terceros. Esta información permite establecer el grado de colaboración ciudadana y la eficiencia policial. Se refleja el número de las mismas, la fecha y la unidad que la recoge. Al asignarse un número único y correlativo a cada diligencia permite evitar duplicidades en las denuncias en una misma dependencia policial a la vez que constituye un indicador del trabajo administrativo realizado por la dependencia. En caso de que la actuación policial esté relacionada con un hecho conocido con anterioridad, se hará constar el número de las primeras diligencias por las que se tuvo conocimiento de tal hecho.

La definición del concepto esclarecido es similar a la utilizada por Interpol, así se considerará esclarecido cuando concurra una o más circunstancias de las siguientes:

- Detención del autor *in fraganti*.
- Identificación plena del autor, o alguno de los autores, sin necesidad de que esté detenido, aunque se encuentre en situación de libertad provisional, huido o muerto.
- Cuando exista una confesión verificada, cuando existan pruebas sólidas o cuando haya una combinación de ambos elementos.

- Cuando la investigación revele que en realidad no hubo infracción.
- Cuando no concurre ninguna de las circunstancias anteriores, aunque se recuperen objetos o efectos procedentes del delito, y siempre que se trate de las primeras diligencias en las que se conoce el hecho se considerará el hecho como no esclarecido.

Además se recogen todos los medios empleados en la ejecución del hecho, hasta un total de tres, atendiendo a la naturaleza del medio de que se trate, y no a la utilización que se realice del mismo (si en un robo con violencia se utiliza una escopeta y se golpea a la víctima con ella, se consignará arma larga y no objeto contundente). Se incorpora información sobre los autores, siendo sólo numérica, especificando el sexo y alguna característica especial de los mismos (particulares, funcionarios, educadores, profesionales, etc.). En el impreso de detenidos se recoge más información sobre los mismos. También se señala la naturaleza del lugar en que se perpetró el hecho, reservando el apartado "vía pública" para aquellos casos en los que el tipo de hecho tenga lugar en la misma, sin que concurre otro lugar más específico, como cabina telefónica, aparcamiento o los señalados en el apartado de transportes (aeropuerto, autobús, etc.).

Se consideran víctimas aquellos sujetos pasivos o perjudicados por las infracciones penales. La cumplimentación de esta información se realiza sólo en aquellos delitos en los que el disponer de información sobre las víctimas sea relevante (delitos contra las personas, contra la libertad sexual, robos con violencia o intimidación, sustracción de vehículos con intimidación, desaparición y reintegro de personas, suicidios, descubrimientos de cadáveres y muertes por sobredosis, etc.). La información referente a las víctimas se refiere a: sujeto pasivo (persona o personas físicas contra las que se dirija de modo principal y directo el hecho, especificando si se trata de un particular, de una autoridad o de sus agentes). Se consideran Agentes de la Autoridad, únicamente, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y Policías Locales).

El proceso vigente hasta diciembre del año 2007, de obtención de la estadística criminal se puede esquematizar en los siguientes puntos:

- Conocimiento de un hecho por parte de las unidades policiales.
- Ejecución de la actuación policial concreta y documentación, bien por medio de atestado policial, acta, etc.
- Generación de un impreso de actuaciones policiales o de detenidos.
- Introducción de los datos por agentes especializados de los cuerpos policiales, recogidos en los impresos anteriormente mencionados en sus correspondientes bases de datos.
- Remisión de la estadística mensual a la Secretaría de Estado de Seguridad, entre los días 10 y 15 del mes siguiente.

- Procesamiento de los ficheros remitidos por cada cuerpo policial y elaboración de los informes pertinentes.

Este proceso se caracterizaba por la existencia de unas normas generales de gestión que no eran lo suficientemente explícitas para atender todas las dudas que pudiera surgir; en suma, era un proceso que requería a todas luces una revisión crítica y adoptar las medidas necesarias para mejorar los procedimientos hasta la fecha empleados. Con el nuevo Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)¹⁶⁵, desde el 01 de enero de 2008, la obtención de la estadística criminal sigue el siguiente esquema:

- Conocimiento de un hecho por parte de las unidades policiales.
- Ejecución de la actuación policial concreta y documentación.
- En el Cuerpo Nacional de Policía, por personal especializado, introducción de los datos en un aplicativo informático habilitado a tal fin. En la Guardia Civil, mediante la aplicación SIGO, cualquier usuario a la vez que realiza unas diligencias policiales puede grabar estadísticamente un hecho.
- Remisión de la estadística mensual a la Secretaría de Estado de Seguridad, entre los días 10 y 15 del mes siguiente, para ello se reciben los datos bien a través de la intranet corporativa o por medio de correos con estándares de seguridad criptográficos.
- Procesamiento de los ficheros remitidos por cada cuerpo policial y elaboración de los informes pertinentes.

Este nuevo sistema mejora los procedimientos mediante la reducción de un paso intermedio, como es la generación de los impresos policiales. Entre los cambios más notables de este nuevo sistema se incluyen, aspectos tan destacados como es el aumento de las variables estadísticas que se obtienen, la inclusión del fichero mediante Orden Ministerial en los ficheros que contienen datos de carácter personal, mejora en los procedimientos técnicos e informáticos. Uno de los principales avances llevados a cabo en el SEC, ha sido la utilización de un lenguaje de programación distinto para el intercambio de ficheros (anteriormente txt y actualmente xml), lo que trajo consigo la necesidad de acometer la reforma de todo el hardware y software que se venía empleando y consistió en cuatro aspectos principales:

- Creación de una nueva base de datos, adaptada a los requerimientos técnicos del nuevo sistema.

¹⁶⁵ Orden INT/2783/2009, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se crean nuevos ficheros cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

- Implantación de una nueva herramienta de gestión y explotación de datos (Microstrategy).
- Migración de todos los datos contenidos en el anterior PES.
- Mejora de los procesos de carga, debido al uso de herramientas más ágiles y cercanas al usuario, así como de un entorno físico (hardware) más evolucionado y con mayor capacidad.

Otra consideración que merece ser subrayada es la clasificación de los delitos por parte de la policía y las leyes. El Código Penal de 1995 distingue entre los hechos penalmente punibles clasificándolos en nuestro ordenamiento jurídico en delitos (infracciones que la Ley castiga con penas graves o menos graves) y faltas (infracciones menores de 300 euros, que la Ley señala con penas leves). Los delitos se encuentran tipificados en 24 apartados que van desde el homicidio y sus formas hasta los delitos contra la comunidad internacional, lo que supone en total unos 500 tipos de delitos penados por la justicia. Sin embargo, el programa estadístico del Ministerio del Interior los ha agrupado en 11 apartados, dentro de los cuales se reserva uno, el último, para infracciones penales no recogidas en el código penal, sino en leyes especiales. Las faltas se agrupan en cuatro títulos que por su sencillez coinciden entre el código penal y el programa estadístico de seguridad (faltas contra las personas, contra el patrimonio, contra los intereses generales, contra el orden público).

No obstante, siempre existe una cierta discrecionalidad a la hora de etiquetar el delito, concretamente en aquellos relacionados por ejemplo con las salud pública (drogas), en donde una cierta cantidad puede ser vista como de consumo propio o como de tráfico. Igual ocurre con las circunstancias bajo las cuales se comete una infracción, no siendo lo mismo que lo cometa un menor que un adulto, o que el homicidio se haya producido bajo el efecto del alcohol o la drogas, o que sea en defensa propia. Tampoco será lo mismo cuando en un mismo acto concurren diferentes delitos, siendo computados sólo los más graves y dejando al margen los meramente accesorios. Y tampoco es lo mismo contabilizar las tentativas con los hechos consumados, como se decía en el anuario del 2000: “En los homicidios están incluidos solamente el doloso (art.138) que, sumados a los asesinatos, aumentan un 8,17 % en 2000. Aquí la unidad de cómputo son los casos policiales de homicidios y asesinatos que no los muertos... el número de personas muertas en casos de homicidios han sido 412, y por asesinatos, 142. Y es que una cosa son los casos y otras el resultado de los hechos criminales”¹⁶⁶. Una consideración sumamente importante a la hora de contabilizar el delito y que supone a nivel internacional que sea muy difícil establecer comparaciones, por ejemplo tres robos sobre un mismo comerciante sería contabilizado en Francia como tres delitos, mientras que en Gran Bretaña lo sería como uno solo.

¹⁶⁶ Ministerio del Interior (2001). Anuario estadístico 2000. Pág. 131.

4.3. El grupo técnico del sistema estadístico de criminalidad

Dentro del Sistema Estadístico de Criminalidad opera el Grupo Técnico del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). En el seno de dicho grupo se procede a proponer y discutir las variables a medir, los valores de cada variable y los criterios de explotación y cómputo estadístico, elevando a la consideración del Secretario de Estado de Seguridad las posibles modificaciones en la Estadística Nacional de Criminalidad. Con dicho fin, se editan unas normas de grabación, cómputo y elaboración de registros informáticos, para que exista un tratamiento homogéneo por todos los participantes en el Sistema. Con periodicidad mensual, los cuerpos policiales remiten a la Secretaría de Estado de Seguridad, dos ficheros informáticos (actuaciones y responsables), donde dan cuenta de todos los hechos penales, infracciones administrativas y los denominados hechos de interés policial (hechos no constitutivos de infracción penal o administrativa), que tienen relevancia para la labor policial.

Como se sostiene en el Anuario de 2007, en el fichero de actuaciones, se detallan los hechos conocidos, esclarecidos, víctimas y objetos aprehendidos. En el fichero de responsables, se especifican los diferentes roles de las personas que entran en contacto con el sistema policial: detenidos, imputados, etc., así como variables conexas al hecho producido. Para la elaboración de los registros en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), como norma general, se contabilizan los hechos conocidos en primera instancia, contenidos tanto en los atestados instruidos, como los reflejados en el resto de las intervenciones por infracciones administrativas o hechos de interés policial que se determinan, efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, así como las policías locales que se han adherido al SEC.

El Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) vino a sustituir al Programa Estadístico de Seguridad (PES), vigente hasta diciembre del año 2007. Los datos que se recopilan en el SEC son las actuaciones policiales a partir de las que se sucede la instrucción de atestados. El proceso de la recogida de datos se efectúa mediante dos archivos informáticos (actuaciones policiales y responsables). Los datos se obtienen de las correspondientes diligencias y, una vez depurados, son remitidos para su explotación al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, establece que el Gabinete de Coordinación y Estudios tendrá, entre sus funciones, la de desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando todos los datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales.

La recogida y explotación de la información se rige por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y su aplicación al secreto estadístico. Esta norma ha sido adoptada ante la necesidad de establecer los criterios que definan los diferentes conceptos que vienen recogidos en la legislación vigente, articular el contenido de las diferentes disposiciones, y regular de forma efectiva el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), determinando los actores y estableciendo sus responsabilidades y las medidas de coordinación. Asimismo, cabe poner de relieve que el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), ante los diferentes cambios legislativos, sociales y nuevas formas delictivas, está en constante proceso de actualización. Proceso que va dirigido a dar cumplimiento a las demandas de información que se requieren por parte de la sociedad en general, y que se lleva a cabo mediante la coordinación permanente entre todos los organismos e instituciones implicadas en el mismo. A la hora de configurar el Sistema Estadístico de Criminalidad, con vistas a la explotación de los datos recogidos en el mismo, se tiene en cuenta y se trata de adecuar a la tipología penal que marca la legislación vigente en España.

En algunos países como Francia, se enfatiza mucho el correcto cumplimiento de toda la actuación que envuelve a un delito (registro de 43 procedimientos), con una clara connotación a las instancias procesales. La principal estadística institucional con que se ha contabilizado la delincuencia en Francia procede de un registro mensual de la policía, la gendarmería y la prefectura de policía de París (nomenclatura diferente según la capital) sobre hechos delictivos constatados denominado como “L’État 4001”. Desde su creación en 1972 proporciona un estado general del número de hechos probados, y desde 1985 de hechos elucidados (cuando un sospechoso ha sido arrestado) para cada circunscripción de la policía urbana y cada brigada de la gendarmería nacional. La estadística policial se nutre de cerca de 7.000 servicios de base de la policía (circunscripción) y de la gendarmería (brigadas). La constatación de un hecho delictivo es la primera etapa de un proceso judicial que es transmitida al tribunal de justicia, a continuación el proceso establecido puede seguir todas las vías posibles de clasificación, pero, obviamente un hecho delictivo que no es llevado al conocimiento de la policía o gendarmería no puede figurar en L’État 4001. Esta estadística administrativa refleja la denuncia de las personas y la acción de los servicios, tomando en cuenta que puede existir un desfase desde el conocimiento del delito hasta su registro y que puede provocar el hecho de que un millar de robos con allanamiento de morada registrados en un mes dado no signifique que constituyan los robos perpetrados en el curso del mes en cuestión ya que puede que el dato de la comisión de un hecho sea anterior al mes en el cual se han registrado¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Aubusson de Cavarlay, Bruno (2007). “Des comptes rendus à la statistique criminelle : c’est l’unité qui compte”. (France, XIX^e-XX^e siècles). *Historie et mesure*.: 39-73.

Las estadísticas son codificadas por la policía en las 442 circunscripciones de la seguridad pública, por una aplicación interna del Ministerio del Interior denominado *Système de Traitement de l'Information Criminelle; Faits Constatés-Élucidés* (STIC-FCE), que permite registrar en las casillas de las tablas de recogida de datos cuestiones de procedimientos tratados por los oficiales de la policía judicial y obtener para cada servicio un fichero de contabilidad estadística. La prefectura de la policía de París utiliza para el mismo servicio un sistema específico denominado como *OMEGA*. Mientras que la gendarmería en cada una de las 3.607 brigadas territoriales utiliza un mensaje de información estadística generado por el software *BB2000* (bureautique brigada). Después de la verificación de los niveles intermedios en la estructura de la policía y la gendarmería, los datos son centralizados y tratados a nivel nacional por el *Service Central d'Étude de la Délinquance* (SCED). Esta dirección ejecuta la misión de centralización, clasificación y difusión de los datos estadísticos recogidos por los servicios de seguridad del estado. Los datos mensuales son gestionados a nivel local y enviados a la *Direction Départementale de Sécurité Publique* (DDSP). Después de la verificación y agregación de cifras de todas las circunscripciones L'État 4001 se envía a la *Direction Centrale de la Sécurité Publique* (DCSP) y son publicadas en Internet anualmente con un retraso de unos tres meses.

En otros países como Inglaterra y Gales, una característica de sus sistema es la incorporación desde el año 20002 del código “prima facie” que consiste en registrar cualquier delito independientemente de la importancia que le adjudique la policía¹⁶⁸. El tema se retrotrae a la constatación de que mientras que algunas policías aceptaban rápidamente los incidentes como delitos, adoptando una norma “prima facie”, otras insistieron en tener una prueba mayor o evidente de que se había cometido un delito, adoptando un estándar probatorio de “modelo evidente”. Tras el informe de estos autores, la policía implementó un nuevo procedimiento que requiere que todas las fuerzas policiales incorporen la norma “prima facie”. El objetivo del cambio fue mejorar la integridad y la consistencia de las cifras de los registros de la policía, así como motivar un cambio de actitud por parte de la policía que podría hacer aumentar la disposición de las víctimas a informar, sabiendo que ésta es más propensas a aceptar su relato de lo que pasó¹⁶⁹, y fue diseñada para garantizar una mayor coherencia entre las fuerzas de seguridad en el registro del delito y al mismo tiempo adoptar un enfoque más orientado a las víctimas en la delincuencia registrada.

Los delitos se recopilan por medio de 43 fuerzas de policía territoriales, además de la Policía de Transporte. Los hechos puestos de manifiesto por

¹⁶⁸ Burrows, John et al. (2000). *Review of Police Forces' Crime Recording Practices*, Home Office Research Study 204. London: Home Office. DC: U.S. Department of Justice.

¹⁶⁹ Tarling, Roger and Morris, Katie (2010). “Reporting Crime to the Police”. *British Journal of Criminology*, 50: 474–490.

estos servicios se registran cada vez que alguien presenta una denuncia o hay una intervención de la policía y dan lugar a una declaración obligatoria. También se registran incidencias y tentativas no delictivas como la agresión sin lesión. La información así obtenida se envía al Home Office sobre una base mensual para cada tipo de delito dentro de la lista de infracciones. Éstos incluyen todos los que posiblemente podrían ser tramitados por un jurado y los menos graves, como robo menor, además de un par de delitos adicionales estrechamente relacionados. Los datos definitivos, una vez que han sido revisados y corregidos, se ofrecen sobre una base anual en la publicación *Criminal Statistic, England and Wales* y los datos provisionales sobre una base trimestral a lo largo del año. Toda esta información ha sido ampliada recientemente a través de tres publicaciones sectoriales nuevas denominadas focus: “focus on property crime”, “focus on violent crime” y “focus on cross-cutting issues”¹⁷⁰.

4.4. El registro de los datos:

La explotación estadística se fundamenta en la localización del hecho en virtud del lugar donde se ha producido y la fecha de su instrucción, sin perjuicio de explotarlos por otros conceptos como el de unidades o cuerpos policiales instructores. Cada vez que en una Unidad Policial se instruyan diligencias como consecuencia de cualquier infracción del orden penal, o las que se determinen del ámbito administrativo, así como de hechos de interés policial; o bien se instruyeran como consecuencia de la detención, imputación o identificación de algunas de las personas implicadas en los mismos, así como por infracción a la Ley 1/92, se tiene la obligación de cumplimentar y generar un registro de actuaciones y, en su caso, el de personas responsables. Junto a las estadísticas de la Policía Nacional, cuya jurisdicción se limita a las zonas urbanas, y la Guardia Civil, más orientada a las zonas rurales y de carácter militar, se encuentra como hemos visto las policías autonómicas. De hecho, en el contexto de la división territorial del estado en 17 comunidades autónomas, tres de ellas han decidido desarrollar sus propias fuerzas policiales: Cataluña (Mossos d'Esquadra), el país Vasco (Ertaintza) y Navarra (Policía Foral de Navarra).

Las estadísticas de la delincuencia publicadas por el Ministerio del Interior, sólo recientemente incluyen datos generados por todos los servicios de policía territorial en el país. Los datos proporcionados por los Mossos d'Esquadra se actualizan con regularidad, lo que puede crear distorsiones. Los indicadores clave de los datos registrados son los delitos contra la integridad y la libertad (tipo I), que corresponden a los ataques contra la

¹⁷⁰ Torrente D. (1998). La (des)medida de la delincuencia: Análisis comparativo sobre la producción de estadísticas delictivas en Inglaterra y España. Cuadernos de Política Criminal Nº 65. Págs. 495-520.

integridad física; los delitos contra el patrimonio (tipo II), que incluyen daños a la propiedad y el fraude y los delitos económicos y financieros; las faltas de lesiones y las faltas de hurtos, infracciones que no constituyen delitos en el código penal español (tipos III y IV). Dentro de estos indicadores, los índices se corresponden con las infracciones tal como son definidas en el código penal. Los intentos se cuentan. La categoría de destrucción y degradación (daños) fue creada en 2008. En este período han sido implementadas gradualmente nuevas reglas de registro lo que dificulta el estudio de la evolución de las personas afectadas. Además, las estadísticas detalladas de "delitos contra el orden socio-económico" no se publican en España. Por lo tanto sólo hay degradación y destrucción total anual y daños socioeconómicos. Finalmente, ha habido cambios metodológicos que han afectado a la contabilidad para los robos en coches y de coches lo que no permite más que estudiarlos por separado.

Una cuestión importante en la contabilidad de la delincuencia en España, es que procede de la realidad autonómica del país, en el cual han hecho acto de presencia tres policías autonómicas nuevas, la Policía Autónoma Vasca (Ertzaintza) (7.260 agentes), la Policía Autónoma Catalana (Mossos d'Esquadra) (7.500 agentes) y la Policía Foral de Navarra (622 agentes). En las estadísticas ofrecidas por el Ministerio del Interior por medio de sus anuarios que se pueden obtener fácilmente vía Internet, existe varias complicaciones por esta realidad que dificultan el análisis longitudinal de la delincuencia en España. En los primeros años se recogían diferenciados los datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a los que se unió los de la Ertzaintza desde 1998 cumplimentados de acuerdo con sus propios procedimientos, estando previsto que se iban a incorporar progresivamente los de los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Sin embargo, los últimos datos disponibles en donde se menciona a las policías autónomas, en el de 2006, se ofrecen datos de la Ertzaintza desde 1998 hasta 2006, se deja vacante la aportación de los Mossos d'Esquadra hasta el 2006 y los mismo ocurre con la Policía Foral de Navarra que sólo presenta datos en 2006.

Otra consideración que merece ser subrayada es el registro de los delitos por parte de la policía en base a las leyes. El Código Penal de 1995 distingue entre los hechos penalmente punibles clasificándolos en nuestro ordenamiento jurídico en delitos (infracciones que la Ley castiga con penas graves o menos graves) y faltas (infracciones menores de 300 euros, que la Ley señala con penas leves). Por otra parte, los delitos se encuentran tipificados en 24 apartados que van desde el homicidio y sus formas hasta los delitos contra la comunidad internacional, lo que supone en total unos 500 tipos de delitos penados por la justicia. Sin embargo, el programa estadístico del Ministerio del Interior los ha agrupado en 11 apartados, dentro de los cuales se reserva uno, el último, para infracciones penales no recogidas en el código penal, sino en leyes especiales. Las faltas se agrupan

en cuatro títulos que por su sencillez coinciden entre el código penal y el programa estadístico de seguridad (faltas contra las personas, contra el patrimonio, contra los intereses generales, contra el orden público).

De todo ello dependen las estadísticas, pero es poco menos que imposible pedir que en todos los casos se actúe de la misma manera. Además, es necesario tomar en cuenta que la evolución de delito se podría achacar al aumento de las denuncias que se presentan ante la policía, lo cual no refleja exactamente que se cometan más delitos, sino que existen más facilidades para denunciarlos, entre las cuales han tenido una gran incidencia la ampliación de la cobertura telefónica casi al cien por cien de los hogares, el uso de los teléfonos móviles, el acceso a Internet (en 2001 se formularon 250.000 denuncias vía Internet y telefónica, las cuales probablemente no se hubieran cursado de tener que acudir a una comisaría)¹⁷¹, el reclamo de las compañías de seguros de una denuncia previa a la policía para cobrar la indemnización, el aumento del número de pólizas de este tipo. Según la encuesta del CIS de 1999 entre la Policía Nacional y la Guardia Civil agrupaban el 77 % de las denuncias presentadas por los ciudadanos.

La contradicción más grande se produce en el caso de la contabilización de los homicidios en donde a nivel internacional se pide a los países que sólo incluyan los delitos consumados y se indica que la unidad de cuenta sea la víctima¹⁷². Por todo ello, autores como Aebi, y ante la perspectiva que más tarde o temprano se tendrá que elaborar estas estadísticas para las instancias internacionales no entiende el paso atrás que inició el Ministerio del Interior que debería proporcionar datos adecuados para los investigadores y obligar en la medida de sus posibilidades a las policías autónomas y municipales para que faciliten sus cifras. La comparación del delito es en sí misma complicada porque depende desde la óptica y desde el país que se contemple.

4.5. La clasificación de los delitos

El primer anuario que aporta una clasificación de delitos o lo que es lo mismo los delitos clasificados con un cierto orden y rigor es el de 1993, en donde se expone que “Con el fin de dar carácter unitario y sistemático a la cantidad ingente de datos que maneja este Departamento ministerial en lo que a los asuntos de Interior se refiere, aparece este primer anuario estadístico, fruto de la colaboración de las distintas unidades del Ministerio competentes en la materia. Aun siendo susceptibles de cambios, se acomoda a la actividad administrativa y operativa que se expone en la Orden Comunicada de 26 de diciembre de 1979”¹⁷³. El apartado de información

¹⁷¹ Ministerio del interior (2002). Anuario estadístico 2001. Madrid. MIR

¹⁷² Aebi y Linde. Op. cit.

¹⁷³ Ministerio de Justicia e Interior (1994). Madrid. Secretaría General Técnica.

operativa comprendía los cinco subapartados siguientes: 1.- Seguridad del Estado: tal vez el más amplio y de gran tradición estadística en el Departamento. 2.- Tráfico: igualmente de metodología muy sistematizada. 3.- Juego: con datos sobre casinos, bingos y máquinas recreativas. 4.- Protección Civil: sobre extinción de incendios. 5.- Drogas: datos de detenidos por tráfico ilícito de droga, y decomisos. Con respecto a la seguridad ciudadana las categorías se clasifican por grandes conceptos¹⁷⁴:

- Delitos y faltas contra la propiedad
- Robo con fuerza en las cosas-naturaleza de lugar
- Robo con fuerza en las cosas-Modos operandi
- Robo con violencia e intimidación
- Delitos de delincuencia económica
- Utilización ilegítima de vehículos de motor
- Delitos y faltas contra las personas
- Delitos contra la libertad sexual
- Delitos de falsedad
- Delitos contra la libertad-Seguridad
- Delitos contra la Seguridad Interior del Estado
- Delitos contra la Administración de Justicia
- Delitos, faltas e infracciones contra la legislación especial
- Otros hechos.

Pero todos muy desarrollados, por ejemplo en los robos a los bancos se especifica el tipo de arma utilizada y su frecuencia. En el siguiente anuario, ya se ofrece una secuencia histórica de delitos y faltas desde 1980 a 1994, pero la especificación tan pormenorizada que se incluía en el anterior ha desaparecido. En 1995, el Ministerio pasó a denominarse solo de Interior, y en 1996, ante la reforma del código penal del año anterior, la tipología se modificó para adaptarse mejor a la nueva configuración, quedando de la siguiente manera¹⁷⁵:

Propiedad.
Personas.
Libertad Sexual.
Riesgo.
Falsedad.
Libertad y Seguridad.
Administración de Justicia.
Seguridad Interior del Estado.
Seguridad Exterior del Estado.

¹⁷⁴ Ministerio de Justicia e Interior (1994). Madrid. Secretaría General Técnica. Pág. 50.

¹⁷⁵ Ministerio del Interior (1997). Anuario estadístico 1996. Madrid. Secretaría General Técnica. Pág. 79.

Funcionario Ejercicio Cargos.
 Hacienda Pública.
 Honor.
 Estado Civil de las Personas.
 Imprudencia Punible.
 Legislación Especial.

Sin embargo, a la hora de presentar los delitos conocidos la tipología seguida por los anuarios desde 1997 ha sido la misma, ya que ha elaborado de acuerdo a una nueva clasificación penal desarrollada para adaptar la estadística criminal a la normativa del Código Penal de 1995 (LO 10/1995 de 23 de noviembre) estando agrupada en 12 tablas:

TABLA I	PERSONAS
TABLA II	LIBERTAD
TABLA III	LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL
TABLA IV	RELACIONES FAMILIARES
TABLA V	PATRIMONIO
TABLA VI	SEGURIDAD COLECTIVA
TABLA VII	FALSEDADES
TABLA VIII	ADMINISTRACION PUBLICA
TABLA IX	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
TABLA X	ORDEN PUBLICO
TABLA XI	LEGISLACION PENAL ESPECIAL
TABLA XII	RESTO

A partir de 1997 se incorpora una nueva tipología que sustituye a las anteriores¹⁷⁶.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS — asesinato — homicidio por imprudencia — inducción/cooperación suicidio — eutanasia activa — aborto — lesiones — malos tratos ámbito familiar — riña tumultuaria — lesiones al feto — manipulación genética — homicidio doloso	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD — detención ilegal — secuestro — amenazas — coacciones — tortura y contra la integridad moral — omisión del deber de socorro — contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad-dad de domicilio
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL — agresión sexual — agresión sexual con penetración	DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIO-ECONÓMICO — hurto — robo con fuerza en las cosas

¹⁷⁶ Ministerio del Interior (1998). Anuario estadístico 1997. Madrid. Secretaría General Técnica. Pág. 90.

<ul style="list-style-type: none"> — abuso sexual — abuso sexual con penetración — acoso sexual — exhibicionismo — provocación sexual — corrupción de menores/incapaces — coacción a la prostitución — pornografía de menores — matrimonios ilegales — suposición de parto/sustitución de niños — tráfico de niños — quebrantamiento de deberes de custodia e inducción de menores al abandono de domicilio — abandono de familia — impago de prestaciones económicas — abandono de menor de edad — explotación de la mendicidad 	<ul style="list-style-type: none"> — robo con violencia/intimidación — extorsión — sustracción por tirón — sustracción interior vehículo — sustracción de vehículos — usurpación — ocupación de inmuebles — estafa bancaria — otras estafas — apropiación indebida — defraudación fluido eléctrico/análogas — insolvencia punible — alteración precios concursos/subastas — daños — contra propiedad intelectual/industrial — relativos al mercado/consumidores — sustracción cosa propia — reaceptación/otras conductas afines — blanqueo de capitales
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA <ul style="list-style-type: none"> — delitos de riesgo catastrófico/estragos y otros — incendios — incendios forestales — tráfico de drogas — otros contra la salud pública — contra la seguridad del tráfico — conducción bajo influencia de alcohol-drogas — negativa a someterse a pruebas legales — conducción temeraria — otros contra la seguridad del tráfico 	DELITOS DE FALSEDADES <ul style="list-style-type: none"> — falsificación de moneda/tarjetas, cheques de viaje y efectos timbrados — falsificación de DNI/pasaportes — otras falsificaciones documentales — fabricación/tenencia útiles para falsificar — usurpación del estado civil — usurpación de funciones públicas — intrusismo
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA <ul style="list-style-type: none"> — prevaricación — abandono destino/omisión deber perseguir delitos — desobediencia/denegación de auxilio — infidelidad custodia documentos/violación de secretos — cohecho — tráfico de influencias — malversación — fraudes y exacciones ilegales — negociaciones-actividades prohibidas/abusos 	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA <ul style="list-style-type: none"> — encubrimiento — quebrantamiento de condena — evasión de establecimiento penitenciario — otros contra la administración de justicia DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO <ul style="list-style-type: none"> — sedición — atentado contra la autoridad/sus agentes/funcionarios públicos — resistencia/desobediencia — desórdenes públicos — tenencia/tráfico/depósito de armas y explosivos — terrorismo
DELITOS CONTRA LA LEGISLACIÓN PENAL ESPECIAL Y DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA	RESTO DE DELITOS <ul style="list-style-type: none"> — contra el honor — calumnias

<ul style="list-style-type: none"> — ley de caza — ley de pesca — ley de la marina mercante — montes — ley de control de cambios — ley de contrabando — estancia ilegal — rechazos en frontera: +con documentación incompleta +con documentación falsificada/alterada +falta de requisitos económicos +prohibición de entrada u otros — detenidos para identificación — acta por posesión/consumo de droga — otras leyes especiales — contra disposiciones de la autoridad gubernativa 	<ul style="list-style-type: none"> — injurias — defraudaciones a la hacienda pública y la seguridad social — contra la constitución — contra la paz y la independencia del estado — relativos a la defensa nacional — contra la comunidad internacional
--	---

En 1998 se empieza a incluir la actividad de las policías autonómicas, concretamente la Ertzaintza. El anuario MIR del año 2000¹⁷⁷ decía:

La Policía Autónoma Vasca (Ertzaintza) está remitiendo datos estadísticos sobre delincuencia desde enero de 1998, los cuales son obtenidos de acuerdo con sus propios procedimientos. Este Cuerpo policial recoge la mayor parte de la información referida a actuaciones policiales y detenidos, pero, sin embargo, no son homogéneos con el programa los datos referentes a índices de esclarecimiento, grado de ejecución, información sobre víctimas ni algunos modus operandi, por lo que en el presente anuario no se puede ofrecer este tipo de información ... Por lo que respecta a la Policía Catalana (Mossos d'Esquadra), todavía no se han integrado en el sistema estadístico, estando previsto que se incorpore durante el año 2001”

El problema es que no se incorporaron ni en ese año ni en los posteriores, por lo que en los siguientes anuarios se repetía el mismo párrafo pero suprimiendo la fecha de incorporación. Ello supone que desde la creación de las respectivas policías autónomas, a excepción hecha de los años de colaboración de la Ertzaintza, los datos no sean fiables para el conjunto de España. Estableciendo un territorio MIR, al que hay que incorporar los datos de estas comunidades autónomas. Aunque desde el Anuario Estadístico del año 2000¹⁷⁸, estas categorías se cambiaron de orden y de denominación sin mayor explicación y generando confusión, quedando como sigue:

GRUPO PENAL I

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN
SOCIOECONOMICO
Robos con violencia o intimidación

¹⁷⁷ Ministerio del interior (2001). Anuario estadístico 2000. Madrid. MIR

¹⁷⁸ Ministerio del interior (2001). Anuario estadístico 2000. Madrid. MIR.

	Sustracciones por tirón
	Atraco bancario
	Sustracción interior vehículos
	Sustracción vehículos
GRUPO PENAL II	DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
GRUPO PENAL III	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL
	Violaciones
GRUPO PENAL IV	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
GRUPO PENAL V	DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES
GRUPO PENAL VI	DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
GRUPO PENAL VII	DELITOS DE FALSEDADES
GRUPO PENAL VIII	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
GRUPO PENAL IX	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
GRUPO PENAL X	DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO
GRUPO PENAL XI	RESTO DELITOS CODIGO PENAL
GRUPO PENAL XII	DELITOS CONTRA LA LEGISLACION ESPECIAL

Esta distribución se simplificó para el análisis desde el principio en dieciséis categorías englobadas en cinco grandes grupos, porque como se dice en el Anuario Estadístico del año 2000¹⁷⁹: “Tras la exposición del volumen y evolución de delitos conocidos (excluidas las faltas) pasamos al análisis de su distribución por tipos de delitos. La tipología que se utiliza se deriva del Código Penal, clasificando los delitos en cinco grupos penales. De cada grupo se destacan las figuras penales más relevantes; así, en el grupo quinto *otros delitos* compuesto por un heterogéneo elenco de tipos penales, se resaltan los delitos contra el medio ambiente”. El esquema resultante a lo largo de los siguientes años, fue el siguiente:

CONTRA EL PATRIMONIO

- Hurtos
- Robos con fuerza en las cosas en inmuebles
- Robos con fuerza en las cosas en vehículos
- Robos violencia o intimidación personas
- Sustracción de vehículos
- Resto

CONTRA LAS PERSONAS

- Homicidio y asesinato
- Lesiones y malos tratos
- Resto

CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

- Agresión con penetración
- Resto

CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

- Seguridad del tráfico
- Tráfico de drogas
- Resto

OTROS DELITOS

- Medio ambiente

¹⁷⁹ Ministerio del interior (2001). Anuario estadístico 2000. Madrid. MIR. Pág. 121.

- Otros delitos.

No obstante, la tipología empleada por el Ministerio del Interior y que se recoge en sus anuarios hasta 2006 está confeccionada “intentando acomodarse a los tipos penales existentes en el vigente Código Penal de 1995, con las peculiaridades que se harán constar al analizar cada grupo de infracciones”¹⁸⁰. La clasificación utilizada hasta 2006, se compone de las siguientes categorías:

DELITOS		
GRUPO	LIBRO II CÓDIGO PENAL	
	TITULO	
PERSONAS	I	Del homicidio y sus formas
	II	Del aborto
	III	De las lesiones
	IV	De las lesiones al feto
	V	Delitos relativos a la manipulación genética
LIBERTAD	VI	Delitos contra la libertad
	VII	De las torturas y otros delitos integridad moral
	IX	De la omisión del deber de socorro
	X	Delitos intimidad, propia imagen, inviolabilidad domicilio
LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL	VIII	Delitos contra la libertad e indemnidad sexual
RELACIONES FAMILIARES	XII	Delitos contra las relaciones familiares
PATRIMONIO	XIII	Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico
SEGURIDAD COLECTIVA	XVII	Delitos contra la seguridad colectiva
FALSEDADES	XVIII	De las falsedades
ADMINISTRACION PUBLICA	XIX	Delitos contra la Administración Pública
ADMINISTRACION JUSTICIA	XX	Delitos contra la Administración de Justicia
ORDEN PUBLICO	XXII	Delitos contra el orden público
RESTO CODIGO PENAL	XI	Delitos contra el honor
	XIV	Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social
	XV	Delitos contra los derechos de los trabajadores
	XV bis	Delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros
	XVI	Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente
	XXI	Delitos contra la Constitución
	XXIII	Delitos traición, paz, independencia del Estado y defensa nacional
	XXIV	Delitos contra la Comunidad Internacional

¹⁸⁰ Ministerio del Interior (2007). Anuario estadístico 2006. Madrid. Ministerio del interior. Pág. 183.

Pero la tipología permanecerá intacta hasta el año 2007, en que se rompe definitivamente. En ese año, se produce un cambio muy importante y definitivo en los anuarios estadísticos que afectan al análisis que nos proponemos y que explica porque nuestro análisis acaba en ese año, ya que la información que se presenta sobre las infracciones penales registradas sólo se corresponden a las del ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Sin una explicación clara se empieza a mencionar el Territorio MIR “La información que se ofrece en esta edición se circunscribe al ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”¹⁸¹, por lo que se elimina toda referencia al resto de policías dificultando notablemente la comparación longitudinal siendo necesario acudir a fuentes de información autonómicas para completar el estudio de España: estadísticas de los Mossos d’Escuadra, Informe sobre la Seguretat a Catalunya, estadísticas de la Ertzaintza y Memoria de la Policía Foral de Navarra¹⁸². No obstante, desde 2007¹⁸³ se cambió radicalmente este esquema por cuatro grandes indicadores:

Indicador I. Delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas

Indicador II. Delitos contra el patrimonio

Indicador III. Faltas de lesiones

Indicador IV. Faltas de hurto

Ya que según el mencionado anuario de ese año:

1. Porque en ellos se recogen adecuadamente las infracciones penales que suponen un ataque directo contra las personas –bien contra su vida o su integridad física y psíquica bien contra su libertad individual y sexual- o contra su propiedad y sus bienes.
2. Porque los estudios demoscópicos y de victimización señalan que las infracciones que se agrupan en estos indicadores están directamente asociados con la percepción de seguridad o inseguridad de los ciudadanos.
3. Porque se corresponden con criterios estadísticos y de análisis homologables a los que se utilizan en los países de referencia de la UE y los que va a poner en marcha EUROSTAT
4. Porque su conversión en tasas específicas de criminalidad –y, por tanto, su relación con las cifras efectivas de población existente en cada momento- permiten observar las tendencias de fondo en la

¹⁸¹ Ministerio del Interior (2008), Anuario estadístico 2007.

¹⁸² Aebi M. y Linde A. (2010). El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas. *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*. Nº 12-07. Págs. 07:1-07:30.

¹⁸³ Ministerio del interior (2008). Anuario estadístico 2007. Madrid. MIR

evolución de la delincuencia y la eficacia de los servicios policiales frente a la misma.

En el año 2009 se inicia otro cambio ya que se habla definitivamente del territorio MIR cumpliendo, según se comenta, con lo dispuesto en el punto uno de las proposiciones no de ley aprobadas respectivamente, por la Comisión de Interior del Congreso y del Senado, en la cual se acordó que el Gobierno remitiría al Parlamento un “Informe sobre situación y evolución de los principales indicadores de criminalidad –tasas de criminalidad, tasa de delitos contra la vida y la integridad, tasas de delitos contra el patrimonio, y tasas específicas de los delitos más significativos y que más inciden en la percepción de seguridad”.

Uno de los problemas que tenemos que abordar a la hora de analizar la delincuencia en España, es su realidad territorial que se acerca a la británica en la cual existen cuatro estadísticas de delincuencia: Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y País de Gales –estos dos últimos ofrecen las estadísticas conjuntamente. El caso es que en España operan cuatro cuerpos policiales distintos que interfieren en los datos contemplados de manera longitudinal.

4.6. Las estadísticas policiales en Cataluña:

Cataluña, en tanto que comunidad autónoma tiene transferidas las competencias a nivel de seguridad interior, a pesar de que en su territorio opera la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según se sostiene en el Preámbulo de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad de Cataluña «Mossos d'Esquadra, la policía de la Generalidad fue creada por la Ley 19/1983, de 14 de julio. Se trataba entonces de la refundición de una policía que adoptaba como núcleo inicial al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, denominación histórica que se conserva. De esta forma se establecía el vínculo de continuidad de la actual Policía de la Generalidad con un cuerpo que data de finales del siglo XVII y que fue la primera fuerza de policía profesional en Cataluña y pionera en todo el Estado. Por otro lado, deben tenerse en cuenta, como precedente histórico inmediato en el ámbito policial, las competencias de la Generalidad republicana, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, según las cuales el Estado sólo se reservaba la seguridad pública de carácter extra y supracomunitario, dejando al Gobierno catalán todas las funciones de policía y orden interiores. Fue ello un factor decisivo en la defensa de la legalidad democrática y de las instituciones de autogobierno, en julio de 1936.

El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y el cuerpo policial de Mossos d'Esquadra elaboran las estadísticas de los “delitos conocidos” en su ámbito geográfico. Además, el Departamento de Interior

publica desde 2004 el “Informe sobre la Seguretat a Catalunya”, conocido como Informe CAT. Las estadísticas policiales en Cataluña están reguladas a partir del artículo 4.3 de la Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, que prevé *"un informe anual sobre la seguridad en Cataluña"*. Además, corresponde al director o al consejero del departamento con responsabilidades en materia de seguridad pública "sujeto a la aprobación del gobierno un informe anual sobre la seguridad en Cataluña, que, una vez aprobado debe presentarse ante el Parlamento. Sin embargo, la normativa no especifica claramente cómo debe ser el informe a pesar de que en varios artículos, tales como el 23 (de seguridad interior en Cataluña) o el 14.3, menciona el concepto de seguridad ciudadana en lo referente a la necesidad de llevar a cabo estudios, o el 15, cuando se habla de planificación.

Según el Informe del año 2004, uno de los problemas de las estadísticas de seguridad es que se hace referencia a varios conceptos (seguridad, seguridad pública, seguridad y seguridad pública). Esta multiplicidad, vinculada a la falta de concreción, implica una definición del concepto de seguridad, con el fin de no dejar que este término sea una incertidumbre que se difuminaría en los límites y los contornos. La voluntad política fue consolidar una herramienta que permitiera conocer el estado de la seguridad en el territorio catalán, a la vez que también sirviera para apreciar tendencias, analizar dinámicas y elaborar políticas públicas. Tomando en cuenta que se debería convertir en una herramienta cada vez más importante con el paso del tiempo y la perspectiva histórica o bien, en una herramienta de análisis retrospectivo que permita desarrollar secuencias a medio y largo plazo. Las estadísticas policiales se configuran con la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña y con el Plan de Seguridad de Cataluña aprobado en el año 2006 por la Comisión de Gobierno para la Seguridad¹⁸⁴.

La primera publicación data del año 2004 y la última del año 2012, con un alto en el año 2005, dado que el informe sobre la seguridad en Cataluña de 2006 se refiere a la situación de seguridad en 2005. En el primer informe se concretan los objetivos que deberían posibilitar ser leídos como una exposición de la situación de seguridad en Cataluña según los datos disponibles a partir de la perspectiva de una recomendación sobre las posibles acciones que deben llevarse a cabo para cumplir con lo que también se establece en el artículo 22 de la ley 4/2003, esto es: el establecimiento de un sistema estadístico "consistente, confiable, actualizado, comparable con los sistemas del medio ambiente y útil para la toma de decisiones" y "la comparabilidad de la información estadística".

Con respecto a las categorías utilizadas, hay que mencionar que existe un gran obstáculo para la exigencia de trabajar con categorías muy amplias de

¹⁸⁴ Informes 2004 y 2007 sobre la seguretat a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior.

delitos, que dificultan la explicación de la causalidad en el aumento o la disminución del número de hechos penales. Con el fin de compensar esta limitación se ha creído adecuado trabajar únicamente con algunos datos registrados, referentes a determinadas tipologías penales, los cuales permiten realizar un análisis más detallado de la evolución de aquellos hechos que no tienen más afectación sobre la ciudadanía, sin alteración de los datos de conjunto ni de su calidad. Estos datos se presentan en dos modalidades diferenciadas: 1. Totales. Se presentan de forma exhaustiva la totalidad de delitos y faltas recogidos por todos los cuerpos policiales con competencias en Cataluña. 2. Seleccionados. Se ha hecho una selección de aquellas tipologías delictivas que se consideran más ligadas a la seguridad pública desde el punto de vista de la afectación a los ciudadanos.

Estas tipologías delictivas seleccionadas pueden resumirse en dos grandes categorías: la de los hechos penales contra el patrimonio y la de los denominados hechos penales contra las personas. En el primer caso, la elección se justifica, por una parte, por el gran volumen que supone respecto de la totalidad del fenómeno delictivo conocido por parte de la policía. Por otra parte, dentro de esta categoría se han escogido algunos tipos delictivos en razón de la existencia de víctimas individualizables. En el segundo caso, se trata principalmente de hechos penales que suponen un ataque contra la integridad física, psicológica o moral de la persona. Esta elección se justifica por la alarma social que habitualmente generan en el conjunto de la población. Estas tipologías de hechos penales seleccionados (tanto los relativos al conjunto del territorio de Cataluña como los que se refieren a la zona de despliegue de la PGME) se presentan en cifras absolutas y según el ratio de hechos por 1.000 habitantes. Otro factor clave es el hecho de que un análisis más detallado debe permitir establecer comparaciones, así como con los informes más importantes a escala europea, lo cual tiene que posibilitar ofrecer una visión mucho más aproximada a la realidad del estado de la seguridad en Cataluña¹⁸⁵.

Cuadro 13. Evolución de la delincuencia en Cataluña

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Delictes contra les perones	25.074	3.774	28.848	24.174	3.509	27.683	24.979	3.382	28.361
Temptatives d'homicidi i seves for	246	57	303	181	47	238	181	47	
Homicidis consumats	81	0	81	96	0	96	77	0	77
Delictes contra persones àmbit fam	11.740	2.008	13.748	10.317	1.796	12.113	9.675	1.675	
Amenaces	3.883	569	4.452	4.327	499	4.826	5.235	522	5.757
Delictes de lesions	3.486	622	4.108	3.555	625	4.180	3.782	626	4.408
Delictes contra la llibertat sexual	1.711	146	1.857	1.594	151	1.745	1.645	135	1.780
Altres delictes contra les persones	3.927	372	4.299	4.094	391	4.485	4.384	377	
Faltes contra les persones	27.421	4.581	32.002	27.204	4.639	31.843	27.650	4.748	32.398
Falta de lesions	12.192	2.634	14.826	11.855	2.648	14.503	11.738	2.712	14.450
Falta d'amenaces	8.264	1.193	9.457	7.782	1.153	8.935	7.469	1.101	8.570

¹⁸⁵ Informe 2004 sobre la seguretat a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior. Pág. 21.

Falta d'incompliment d'obliga famil	3.400	98	3.498	3.790	139	3.929	4.527	183	
Falta d'injuries	1.386	303	1.689	1.583	277	1.860	1.670	310	1.980
Falta de coaccions	940	88	1.028	896	115	1.011	901	92	993
Altres faltes contra les persones	1.239	265	1.504	1.298	307	1.605	1.345	350	1.695

Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat de Cataluña.

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Estudis%20i%20enquestes/Informes%20de%20seguretat/Docs/Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf.

En cuanto a los delitos totales, el informe del Ministerio de Interior, refleja una subida muy importante por parte de la gestionada por los Mossos d'Esquadra y una disminución muy significativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía nacional y guardia Civil. Lo cual se corresponde con el aumento de unos y la disminución de otros.

Cuadro 14. Evolución de la delincuencia en Cataluña. Total de policías.

Cataluña	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mossos d'Esquadra	62.868	76.087	87.844	117.058	128.575	167.188	302.221	346.848	435.024	461.539	456.588
CNP y Guardia Civil	268.061	277.803	281.402	245.055	228.908	213.699	103.664	70.288	41.565	7.838	8.319
Total	330.929	353.890	369.246	362.113	357.483	380.887	405.885	417.136	476.589	469.377	464.907

Fuente: Ministerio del Interior. Gabinete de Estudios de Seguridad Interior

4.7. Las estadísticas policiales en el País Vasco.

El País Vasco en tanto que una comunidad autónoma del Estado en su estatuto de autonomía tiene asignadas las competencias de Interior. La Ertzaintza es la policía autonómica integral y fue creada en 1982 a partir del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979. Es heredera de la *Ertzaña* constituida por el Gobierno de Euskadi durante la Guerra Civil española. Se denomina *ertzaina* ('cuidador del pueblo') a cada uno de los 8.000 agentes del cuerpo y *ertzain-etxea* (casa de *ertzainas*) a las comisarías. En la actualidad, casi el 90% de los agentes son varones. La Policía vasca dispone de 25 comisarías repartidas en las distintas comarcas del País Vasco, así como distintas oficinas de atención al público como la del Aeropuerto de Bilbao (en Lujua, Vizcaya) y las del centro de las capitales.

Los orígenes de la Ertzaintza actual se remontan a las antiguas milicias municipales que eran, por otra parte, muy comunes en toda España, en tanto que organizaciones populares al mandato de los ayuntamientos, con la principal misión de ser garantes de la seguridad pública tan amenazada en esa época. Ahora bien, no fue hasta el siglo XIX cuando, abandonando las primeras instancia por las que se crearon, se fundaron los primeros cuerpos que se podría determinar cómo policías profesionales. Se trató de responder al continuo bandidaje que existía en ese momento, consecuencia de las tremendas desigualdades que llevaron a las convulsiones políticas y sociales de final del siglo XVIII en España. El momento preciso para su constitución fue durante la Primera Guerra Carlista que sacudió con especial virulencia al

País Vasco, cuando los miqueletes de Vizcaya y de Guipúzcoa, así como los miñones de Álava, comenzaron sus actividades.

Durante la Guerra Civil, el primer Gobierno Vasco asumiendo sus competencias de mantenimiento de la paz social y el orden público, disolvió los cuerpos de seguridad que existían en ese momento, creando una nueva organización policial a la que se la denominaría como Ertzaña, aunque su primera denominación fue la de Policía Militar de Euzkadi y estaba compuesta por la conocida como Ertzaña de a pie y la Ertzaña Igiletua, o policía motorizada. En estos momentos, la Ertzaintza tiene asignadas todas las competencias en materia de orden público, seguridad ciudadana, tráfico y juego y espectáculos del País Vasco. También ejerce labores de lucha contra el terrorismo, investigación y policía judicial. El cuerpo depende del departamento de seguridad del Gobierno Vasco. La Consejería de Interior del Gobierno Vasco y el cuerpo policial de la Ertzaintza, elaboran estadísticas de la criminalidad en la Comunidad Autónoma, y no sólo de los delitos conocidos, sino comparativos con otros territorios, resúmenes del Estado, etc.

Cuadro 15. Delincuencia en el País Vasco por tipo según territorio. Año 2001.

	ALAVA	VIZCAYA	GIPUZCOA	TOTAL
Homicidio y sus formas	9	24	8	41
Aborto	-	-	-	-
Lesiones	197	836	381	1.414
Lesiones la feto	-	-	-	-
Manipulación genética	-	-	-	-
Contra la libertad	123	602	281	1.006
Tortura y contra la integridad	476	1.695	830	3.001
Trata de seres humanos	-	2	-	2
Omisión del deber de socorro	1	5	2	8
Contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, etc.	34	118	80	232
Contra la libertad e indemnidad sexuales	48	222	85	355
Contra las relaciones familiares	46	327	90	463
Contra el patrimonio y el orden socioeconómico	3.545	17.845	8.278	29.668
Contra la seguridad colectiva	203	1.249	1.046	2.498
Falsedades	94	291	153	538
Contra la Administración Pública	8	10	2	20
Corrupción de transacciones comerciales internacionales	-	-	-	-
Contra la Administración de Justicia	149	723	429	1.301
Contra el orden público	127	586	431	1.144
Contra el honor	12	101	53	166
Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	-	1	-	1
Contra los derechos de los trabajadores	5	48	27	80
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	-	-	-	-
De ordenación territorio y urbanismo, protección patrimon	7	25	21	53
Contra la Constitución	4	25	19	48
De traición, contra la paz, etc.	-	-	-	-
Contra la comunidad internacional	-	-	-	-
Otras Leyes penales	-	1	-	1
TOTAL DELITOS	5.088	24.736	12.216	42.040
Faltas contra las personas	1.335	5.920	2.585	9.840
Faltas contra el patrimonio	5.297	17.706	6.174	29.177
Faltas contra los intereses generales	12	24	3	39
Faltas contra el orden público	48	190	233	471
TOTAL FALTAS	6.692	23.840	8.995	39.527
TOTAL DELITOS Y FALTAS	11.780	48.576	21.211	81.567

TASA X 1.000 HABITANTES	36,52	41,93	29,79	37,19
-------------------------	-------	-------	-------	-------

FUENTE: http://www.ertzaingia.net/wps/portal/ertzaingia/tut/p/c5/04_SB8K8xLLM

En cuanto a los delitos totales, el informe del Ministerio de Interior, refleja una subida muy importante por parte de la gestionada por la Ertzaintza y una disminución muy importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y guardia Civil. Lo cual se corresponde con el aumento de unos y la disminución de otros.

Cuadro 16. Evolución delincuencia en el país Vasco.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ertzaintza	68.901	78.287	75.481	71.202	73.810	75.208	79.100	80.369	88.037	92.883	88.277
CNP y Guardia Civil	2.398	3.061	3.101	2.990	3.018	2.946	2.341	2.307	2.421	2.188	1.862
Total	71.299	74.348	78.582	74.192	76.828	78.154	81.441	82.676	90.458	95.071	90.139

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

4.8. Las estadísticas policiales en Navarra:

Al igual que las anteriores comunidades autónomas, Navarra tiene asignadas las competencias de Interior. Sus orígenes se remontan al año 1928 cuando la Diputación Foral, puso en marcha una especie de policía con el objetivo de vigilar lo que ocurría por entonces en las carreteras y controlar los impuestos provinciales. En un primer momento su misión consistió sólo en esta actividad, toda vez que el tráfico de vehículos por carretera, así como la vigilancia y la ordenación del tráfico era competencia de la Diputación Foral de Navarra desde su creación en 1841, al heredar las competencias que había tenido la anterior Diputación del Reino de Navarra; estas competencias se conservaron en virtud de dicha reducción foral desde 1841.

Ya en épocas más modernas, concretamente en Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en el artículo 51, se dispone que “1. Corresponde a Navarra la regulación del régimen de la Policía Foral que, bajo el mando supremo de la Diputación Foral, continuará ejerciendo las funciones que actualmente ostenta. Corresponde igualmente a la Comunidad Foral la coordinación de las Policías Locales de Navarra, sin detrimento de su dependencia de las respectivas autoridades municipales o concejiles. 2. Navarra podrá ampliar los fines y servicios de la Policía Foral en el marco de lo establecido en la correspondiente Ley Orgánica. A fin de coordinar la actuación de la Policía Foral y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se establecerá, en su caso, una Junta de Seguridad, formada por un número igual de representantes de la Diputación Foral y del Gobierno de la Nación”.

En virtud de su disposición adicional primera, la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Uno de esos derechos históricos es, indudablemente, la función policial. Ese amparo se materializó en el artículo 51 que dispone al respecto varias líneas sobre las que se asienta la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en la materia: la regulación del régimen de la Policía Foral corresponde a Navarra; se respetan como, núcleo mínimo, las competencias que la Policía Foral viene ostentando históricamente; se faculta a la Comunidad Foral para ampliar los fines y servicios de la Policía Foral en el marco de la correspondiente Ley Orgánica; y, finalmente, Navarra coordina las policías locales sin detrimento de su dependencia de las respectivas autoridades municipales o concejiles.

Posteriormente y mediante la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que se remite al Amejoramiento del Fuero) no se introdujeron novedades en el régimen de la Policía Foral, únicamente quedaron definidas las funciones que se atribuían a las policías autonómicas, dentro de las cuales la Policía Foral podría ampliar sus funciones anteriores. La sentencia del Tribunal Constitucional 140/1990, de 20 de septiembre, sobre los derechos históricos plenamente aplicable a la competencia sobre la Policía Foral de Navarra, indica que Navarra en razón de sus derechos históricos, en determinadas materias, y ante el hecho cierto de que Navarra haya venido ejerciendo competencias, permite incluir dentro de ese ámbito competencial lo que en cada momento histórico haya de considerarse como régimen de la Policía Foral.

La Ley foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra, establece: “desde la modificación de los Fueros de Navarra en el siglo XIX, Navarra ha sabido en cada momento actualizar sus instituciones propias y adaptarlas a las necesidades derivadas de los nuevos tiempos. De su concepción residual de Reino, Navarra ha conservado durante más de siglo y medio, como una de sus funciones esenciales, la de policía en determinadas actividades, como protección de edificios, custodia de autoridades, vigilancia de carreteras y caminos, ordenación de transportes, etcétera. Esas actividades se organizaron en la Policía Foral de Navarra, esto es, en un cuerpo de policía propio que, vinculado al régimen foral, la Diputación Foral de Navarra conservó hasta 1982”.

Además según la citada Ley: “Entrando ya en la regulación de la Policía Foral de Navarra, se contempla ésta como lo que hoy es: un instituto armado de la Comunidad Foral, de carácter civil, organizada de forma jerarquizada. Su enfoque es el de una policía propia, integral y de referencia de la Comunidad Foral, esto es, actual y moderna, lejos de reminiscencias históricas o simbólicas, perfectamente compatible con las competencias que el ordenamiento jurídico atribuya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que sus funciones sean, además de las clásicas o históricas, las propias de una policía integral, responsable de garantizar en todo

momento y lugar, dentro del ámbito de la Comunidad Foral, la seguridad pública y el pacífico ejercicio de los derechos y libertades públicas y la protección de todas las personas y bienes”(Preámbulo V).

Mediante la Orden Foral 38/2006 de 23 de febrero del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior se aprobó la Carta de Servicios del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, entre las que se encuentran:

1. Proteger y velar por las libertades y derechos de las personas reconocidos por el ordenamiento jurídico.
2. Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad y seguridad pública, el respecto de la ley y del orden en la sociedad.
3. Prevenir y combatir la delincuencia.
4. Facilitar la asistencia y servicios a la población.

En cuanto a las funciones que desarrollan, recogidas en el artículo 9 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra encontramos las siguientes:

1. Garantizar la seguridad ciudadana y el pacífico ejercicio de los derechos y libertades públicas y la protección de personas y bienes.
2. Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones generales aplicables en las materias de la competencia de la Comunidad Foral, así como de los actos emanados de los órganos institucionales de la Comunidad Foral de Navarra, mediante las actividades de inspección, denuncia y ejecución forzosa.
3. Velar por la protección y seguridad de las autoridades de la Comunidad Foral.
4. Velar por la protección y seguridad de las personas, edificios e instalaciones dependientes de las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra y sus entes instrumentales.

En el año 2008, se aprobó una segunda carta de servicios en la que se recogían 26 compromisos adaptados a los servicios que presta al ciudadano navarro. La Consejería de Interior del Gobierno de Navarra ha publicado hasta el momento cuatro informes que van del 2009 hasta el 2012, en los cuales se ofrece información concisa y muy resumida sobre diversos procedimientos policiales como: recursos humanos, seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, medio ambiente, juego y espectáculos públicos, atestados, detenciones, denuncias administrativas, e incautación de drogas. Asimismo hay que destacar el esfuerzo realizado para la modernización de los sistemas de información policiales que han convertido a la Foral en una policía con más medios y, por tanto, más moderna. El proyecto de Sistema de Información Policial (SIP), ha evolucionado incorporando nuevas funcionalidades de las que existían en el año 2009, lo cual ha implicado un avance sustancial para la prestación de servicios. Además, se han intensificado los contactos con la Secretaría de Estado de Seguridad para la colaboración con los Sistemas de Información policial nacional e internacional que operan en la actualidad.

Cuadro 17. Evolución de la delincuencia en Navarra por tipo de actuación.

TIPO DE ACTUACIÓN	2009	2010	2011	2012
Detenciones practicadas	1.076	822	938	864
Imputaciones practicadas		190	421	268
Denuncias por consumo/tenencia de drogas (LO 1/92)	2.542	2.383	2.932	2.444
Otras denuncias por infracciones a la LO 1/92	589	564	645	563
Denuncias por infracción al reglamento de Armas	502	424	494	248
Otras denuncias administrativas interpuestas	4.790	4.110	4.470	3.686
Horas de patrulla a pie	12.622	12.892	13.987	13.425
Incautaciones de drogas	2.600	2.401	3.797	2.166
Incautaciones de armas	636	517	540	257
Vigilancias realizadas	3.234	6.595	16.584	15.257
Identificaciones de personas	57.878	59.810	68.241	58.794
Identificaciones de vehículos	36.752	38.361	39.390	35.025
Denuncias penales recepcionadas	2.212	2.220	2.567	2.527
Despliegues estáticos	5.228	4.844	4.146	18.112
Dispositivos estáticos de control	851	1.188	1.778	1.034
Dispositivos de control policial de seguridad ciudadana	488	5.662	5.713	9.830
Concentraciones o manifestaciones protegidas	275	605	610	931

Fuente: Página web del Gobierno de Navarra.

Una de las cuestiones más novedosas de esta policía es que se somete a auditorías, concretamente ha habido dos hasta el momento, en los años 2007 y 2010, señalando en la última que el promedio en el cumplimiento de compromisos, ha sido superior al 90 %, concretamente un 92.1%. En 5 de los 26 compromisos asumidos, el porcentaje de compromiso alcanzado ha sido inferior al 100%, resultando el promedio de los compromisos no cumplidos del 69,6%. De los 26 compromisos asumidos, se ha conseguido cumplir el 100%, en un total de 21 compromisos. En algunos compromisos se ha superado ampliamente el 100% objeto del compromiso. Es oportuno concluir a este respecto, que los resultados generales ofrecidos en la presente auditoria de la Carta de Servicios, representan la actividad global en aquellos compromisos orientados al ciudadano, que la Policía Foral de Navarra ha asumido de forma voluntaria, y no son fruto de esfuerzos de unidades concretas. Es por ello que los resultados mencionados, se deben entender como la consecuencia del reflejo de la actividad policial dirigida hacía el ciudadano, ofreciendo una oportunidad de poder medir el trabajo realizado bajo unos parámetros e indicadores previamente establecidos bajo un prisma de calidad y cultura hacía el trabajo bien hecho, con la clara pretensión de progresar en el servicio público de seguridad. Debe considerarse que el “Servicio de Atención personalizada a víctimas de accidentes de circulación”, está sujeto a modificación al comprobar que el efecto conseguido en los ciudadanos era el contrario al pretendido en el compromiso.

En cuanto a los delitos totales, el informe del Ministerio de Interior, refleja una subida muy importante por parte de la gestionada por la policía foral y una disminución muy importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado, es decir, Policía nacional Y guardia Civil. Lo cual se corresponde con el aumento de unos y la disminución de otros.

Cuadro 18. Evolución delincuencia en Navarra.

Navarra	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Policía Foral	0	0	0	0	0	3.195	4.344	5.977	5.233	6.625	7.307
Policía Nacional y Guardia civil	13.387	16.132	15.780	15.621	14.686	14.309	13.383	13.683	13.361	13.117	12.298
Total	13.387	16.132	15.780	15.621	14.686	17.504	17.727	19.660	18.594	19.742	19.606

Fuente: Ministerio del Interior. Gabinete de Estudios de Seguridad Interior

4.9. Series temporales sobre delitos hasta 2006:

Como ya se ha visto, las cifras de la delincuencia en España han sido severamente criticadas. La insatisfacción de los criminólogos queda reflejada en un comunicado publicado en el diario El Imparcial, de 24 de marzo de 2010, en el que con el encabezamiento de «Investigadores y académicos denuncian el secretismo de Interior sobre criminalidad», sostenía que era de lamentar que, hasta el año 2006, la información suministrada en la página electrónica del Ministerio del Interior fuera espinosa de encontrar para un investigador no habituado, o para cualquier ciudadano que estuviera interesado en el tema. Se denunciaba tanto la dificultad de conseguir los anuarios, como el hecho de que las cifras no estaban suficientemente claras, como hemos visto a lo largo de la tesis. Como continuaba la denuncia, las cifras estaban mal colocadas y además no coincidían de un año para otro. Una vez localizadas, el investigador descubría que los datos se ofrecían en formado cerrado, no pudiéndose acceder a las matrices, lo que impedía cualquier tipo de profundización en ellos mediante análisis secundarios. Finalmente, la integración de los datos procedentes de las Comunidades autónomas con competencias de seguridad transferidas no se ofrecían o se mencionaba que se haría en el siguiente Informe, sin llegar a hacerlo, hasta el punto de que hasta la fecha del año 2013 no se incorporan de forma sistemática a las estadísticas nacionales de delincuencia los datos procedentes de Cataluña. Además y en referencia a la ruptura que se produce en 2007, que obliga a esta tesis a efectuar un análisis por separado, el comunicado denunciaba que: “los defectos precedentes, aun siendo importantes, no son comparables a la situación que se ha generado a partir de la publicación de los anuarios estadísticos de 2007 y 2008, últimos aparecidos. Su estructura, contenido y presentación de los datos han sido sustancialmente reducidos, y se puede afirmar que la información suministrada carece de utilidad científica”.

De acuerdo a Serrano et al.¹⁸⁶, “la tendencia estable de la delincuencia que se observa en las estadísticas de delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales y autonómicos), recogidos en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior es estable. Sin embargo, en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado sí se aprecia un notable incremento de la delincuencia, como se expuso en su momento, pues en 1998 se incoaron 3.227.757 diligencias previas por la presunta comisión de delitos y en 2005, las diligencias previas incoadas ascendieron a 4.096.277, lo que supone un incremento de un 26,9%”.

Según Garrido¹⁸⁷, “un análisis más cuidadoso muestra que buena parte de ese aumento se debe a delitos menores; tan sólo a partir de 2001 los delitos graves empiezan a destacarse. No obstante, buena parte de ese incremento ha de entenderse debido a la mayor gravedad con que desde hace tres años se castigan los delitos de violencia doméstica, ya que han pasado de ser tipificados como faltas, (en inglés, misdemeanours) actos antijurídicos leves, que no tienen el estatus de delito) a serlo como delitos (felonies). El resto del aumento habría que atribuirlo a la mayor presencia de bandas organizadas que se dedican al contrabando de drogas y al tráfico ilegal de personas”.

Aebi y Linde¹⁸⁸ cuando han analizado la evolución de los delitos en España han mantenido que: “en definitiva, estas tendencias contradictorias son muy difíciles de explicar con la información disponible... debe desconfiarse de la fiabilidad de las estadísticas publicadas. En tal caso habría que concluir que es imposible conocer las tendencias de la delincuencia en España. En efecto, si no se pueden calcular los homicidios dolosos y asesinatos, que constituyen el delito más grave y al mismo tiempo más simple de registrar, es imposible calcular el resto de delitos”. En esta misma línea, otro autor¹⁸⁹ sostienen: “la cuestión que quiero plantear a todos los organismos que se ocupan de elaborar estadísticas sobre criminalidad es que se tomen en serio esta cuestión y no se limiten a ofrecer unos datos generales de dudosa credibilidad y carentes de valor criminológico... Hay que adelantar que nuestro sistema relacionado con las estadísticas policiales sobre criminalidad siempre han sido muy deficientes en lo que han jugado razones políticas”.

Haciendo un análisis de todos los anuarios publicados por el Ministerio del Interior, nos encontramos con que las series estadísticas comienzan a publicarse en el anuario de 1991 con descripción de los diferentes gabinetes

¹⁸⁶ Serrano et al. (2006). Evolución de la delincuencia en España según las estadísticas oficiales (1998-2005). revista de derecho penal y criminología, Nº 18. Pág. 590.

¹⁸⁷ Garrido (2010). Op. Cit. Pág. 405.

¹⁸⁸ Aebi, M.F., y Linde A. (2010). El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. Pág. 15

¹⁸⁹ Serrano A. (2011). Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en España. *Revista de Derecho Penal y Criminología*. Nº 6. Págs. 425-454.

y direcciones que componen el Ministerio, En el 1933, los datos están referidos a ese mismo año con bastante despliegue de delitos. En el anuario del año 1994 se publica la evolución desde el año 1980. En el anuario del año 1996 se presenta una serie histórica desde 1990. En los anuarios de 1997 y 1998 se ofrecen los datos más antiguos que se remontan hasta 1972. Estos datos no se volverán a repetir porque desde 1999 los datos comienzan en 1990. Los anuarios siguientes continúan pero siempre desde la base de 1990 hasta el año 2007 que se para abruptamente las series. Si construimos una serie histórica que dé por buenos o inevitables, ya que no existen otros datos, desde 1972 hasta 2006 dado que en esa fecha el Ministerio del Interior dejó de publicar en el mismo formato que hasta entonces, obtenemos el gráfico de abajo. Por esta razón se analizan los datos en dos secuencias distintas que van desde el primer conocimiento que se tiene de los delitos en España hasta esa fecha y luego en otra secuencia desde 2007 hasta el 2014, último año en que se han ofrecido datos, esta vez de forma sistemática e incluyendo a las policías autonómicas y a algunas locales.

La evolución de la delincuencia en España de los últimos veinticuatro años medida por las estadísticas policiales sobre la que existe una amplía literatura resaltando sus fortalezas y debilidades, muestra para el conjunto de delitos un incremento continuo con una bajada desde al año 2002. Se escoge como punto de partida el año 1972 porque a partir de aquí hemos conseguido estadísticas, aunque no fueran muy fiables. Contemplando el asunto en términos absolutos, en el caso de los delitos se puede comprobar una subida sostenida desde 1980 hasta 1990 y una bajada tenue desde entonces, mientras que en el caso de las faltas se puede constatar un crecimiento continuo desde 1980 que ha supuesto que se haya sobrepasado a los delitos. Desde 1991 hasta 2006 el incremento fue de 726.444 casos es decir sobre la base de 1991 supone un aumento del 24,95 por ciento. Tomando en cuenta esta evolución, y la importancia entre estas dos figuras delictivas, la conclusión parece suficientemente clarificadora como para decir que la delincuencia severa ha disminuido mientras que la leve ha aumentado, es decir, aunque la delincuencia en general, haya podido subir por el peso de las faltas, la que verdaderamente importa –los delitos– por los especiales efectos negativos que tiene en la sociedad en su conjunto ha disminuido de manera importante, tanto en términos absolutos como relativos en este periodo histórico. Más faltas pero menos delitos, indica sin ningún género de dudas una progresión constante en la evolución de una sociedad más segura, más equitativa y con menos problemas sociales de desviación de las normas generales de convivencia.

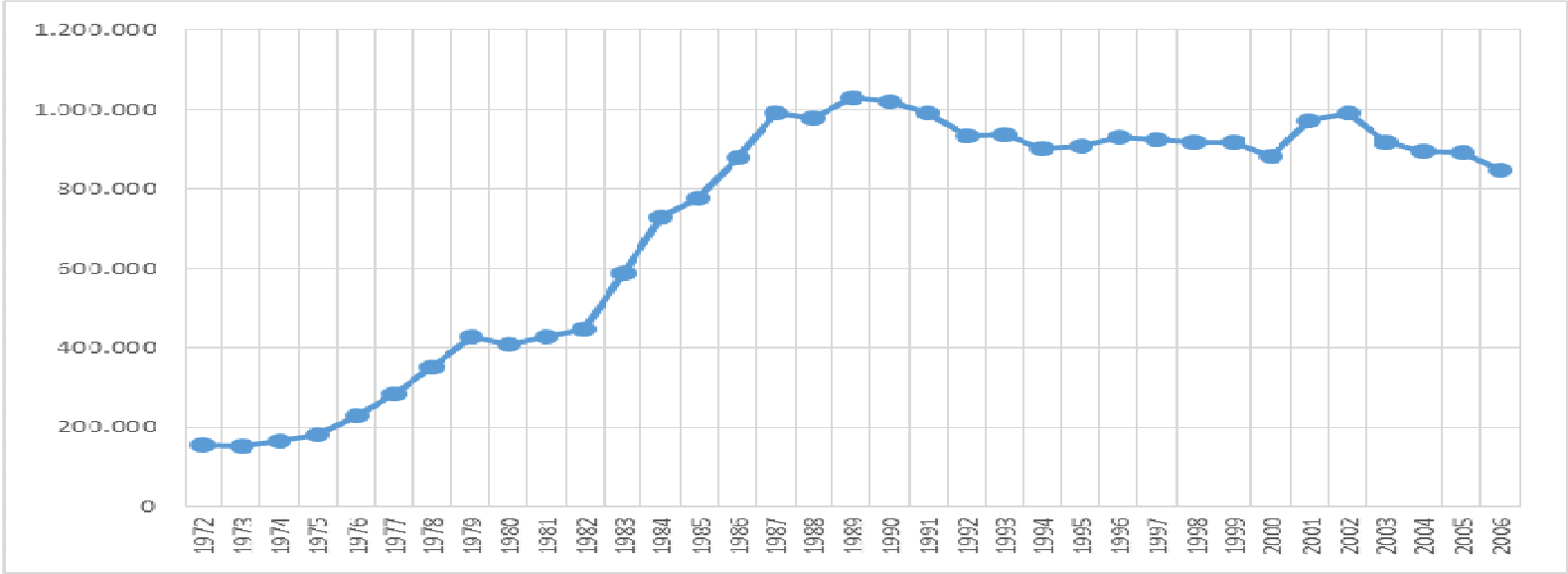
Un análisis de los datos disponibles, centrados en el capítulo de los delitos en detrimento de las faltas, arroja un panorama de estabilidad desde finales de la década de los ochenta tanto en su versión absoluta como relativa, con una ligera caída en los últimos años. Dentro de las diferentes categorías de la delincuencia destaca la acuracidad de los porcentajes de los

delitos contra las personas, ya que tanto los homicidios y asesinatos como las lesiones y malos tratos son resueltos casi en el cien por cien de los casos, los primeros se ha mantenido estables en torno a los 1.200, mientras que los segundos han aumentado considerablemente desde 2003 hasta 2004 como reflejo de un cambio legislativo. Los delitos contra el patrimonio siguen siendo los más numerosos, suponen el 80 por ciento del total, pero han descendido de manera considerable en el año 2004, producto de la caída de los robos y de la sustracción de vehículos. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se han mantenido estables. Y los que van contra la seguridad colectiva han descendido de manera importante en un 30 por ciento. Finalmente los considerados como otros delitos también han descendido, aunque con un repunte en el último año considerado. Por otra parte, de los aproximadamente un millón de delitos y un millón de faltas de los que tienen conocimiento las FCSE, los jueces condenan una media de cien mil personas la año, producto de que como hemos visto gran parte de los delitos contra el patrimonio quedan sin resolverse, otros quedan sin instrucción y otros acaban apilándose en la larga montaña de asuntos pendientes con que se desenvuelve la judicatura. La mayor parte de los condenados lo son por delitos contra el patrimonio seguidos de los que van contra la seguridad del tráfico y contra la salud pública, intercambiados estos dos últimos por la inflexión que se produce en el año 97 y que supone los que eran condenados por acciones contra la salud pública pasaran a serlo contra la seguridad del tráfico.

La lectura de todo ello, podría ser la de constatar una nueva delincuencia que estaría menos anclada en delitos contra la propiedad y más en dos fenómenos nuevos como son la seguridad de tráfico y las relaciones de género (ambos con un gran número de delitos contra las personas). La elevación del nivel de vida y de la protección social estaría repercutiendo en esta emergente situación que empieza a parecerse poco en sus orígenes a la delincuencia tradicional, producto de una nueva sociedad de cambio acelerado en donde adquieren una gran importancia, las nuevas relaciones de género consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo; de las nuevas formas familiares surgidas del aumento del número de divorcios auspiciados por las mujeres; de la ampliación de los mercados del este con el surgimiento de la delincuencia organizada, del tráfico de drogas y de personas; de la inmigración masiva que sustituye a la vieja delincuencia en los delitos contra la propiedad; de los cambios tecnológicos que posibilitan el fraude fiscal incorporando nuevas formas de estafa; y del aumento del número de coches y de accidentes de tráfico cuya conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas ha empezado a ser penado. Sin embargo, esta nueva delincuencia sigue siendo una responsabilidad del Estado porque en definitiva, la socialización y los controles indirectos siguen siendo responsabilidad suya y del conjunto de la sociedad y por ello, la resocialización de los delincuentes.

A partir de 2013 se produjo un gran cambio en la publicación de las estadísticas desde el Ministerio del Interior. A través del denominado “Gobierno Abierto”, se reproducen los datos en diversos formatos, entre ellos el denominado open data, en la web del Ministerio y en datos.web.es. Se incorporan los datos de criminalidad conocidos por las policías locales, de proporciona una difusión con carácter trimestral de los datos de criminalidad, se mejoran los datos y la metadato publicados en los anuarios y se recuperan las series históricas a partir de 2008.

Gráfico 5. Evolución de delitos 1972-2006.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 19. Evolución de delitos desde 1972 hasta 2006.

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
154.170	151.592	165.423	181.140	230.348	284.252	350.423	429.492	408.947	429.172	447.537	589.450	729.382	776.529	879.832	992.223	979.839	1.029.996	1.021.050

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
990.306	934.070	938.612	901.696	908.264	930.780	924.393	917.314	918.053	881.778	972.418	991.570	916.621	896.689	891.116	848.881

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

4.10. Series temporales sobre faltas hasta 2006:

A diferencia de los delitos, de las faltas sólo se tiene constancia a partir de 1980, por lo que el análisis de la serie histórica es diferente de la de los delitos en un desafe de 8 años. Como sostienen Serrano et alt.¹⁹⁰, en la evolución de las faltas de 1985-2005, se observa con bastante claridad la influencia de las reformas penales, al aumentar las faltas contra el patrimonio, desde el año 2000, debido en parte a la reforma del Código penal que al convertir las cuantías de pesetas a euros, incrementó en las infracciones patrimoniales la cuantía que diferencia el delito de la falta (de 50.000 pts., se ha pasado a 400 €), de modo que un cierto número de infracciones que antes se contabilizaban dentro de los delitos patrimoniales, ahora aparecen reflejados como faltas, haciendo así incrementarse su tendencia. Por su parte, el descenso operado por las faltas contra las personas en 2004, se podría explicar por las reformas del delito de malos tratos. En este caso, conductas que antes eran tipificadas como faltas del art. 617.2 CP, han pasado a ser consideradas como delito del actual art. 153 CP, con la consiguiente disminución en las estadísticas del Ministerio del Interior del número de faltas contra las personas.

Si contemplamos las faltas o acciones que merecen menor atención estadística en el anuario del Ministerio del Interior por su gravedad y que por eso son analizadas en un único párrafo, es necesario destacar que desde 1980, primer año que se puede rescatar, hasta 2006 se han doblado en una escalada continúa, que tiene un pequeño descenso en el año 2000. La mayor parte de las faltas contra el patrimonio lo son por el subapartado de hurto en superficies comerciales y gasolineras, las cuales son cometidas en numerosas ocasiones por clientes habituales que aprovechan algún momento de descuido, representando el 70 por ciento del total, seguidas de las producidas por daños que suponen el 25 por ciento, seguidas ya a mucha distancia por las estafas no bancarias, por la sustracción de vehículos sin usurpación, por apropiación indebida, por estafas bancarias, y deslucimiento de bienes inmuebles; se esclarecieron sólo el 11 por ciento y se detuvo por ello a nueve mil sospechosos.

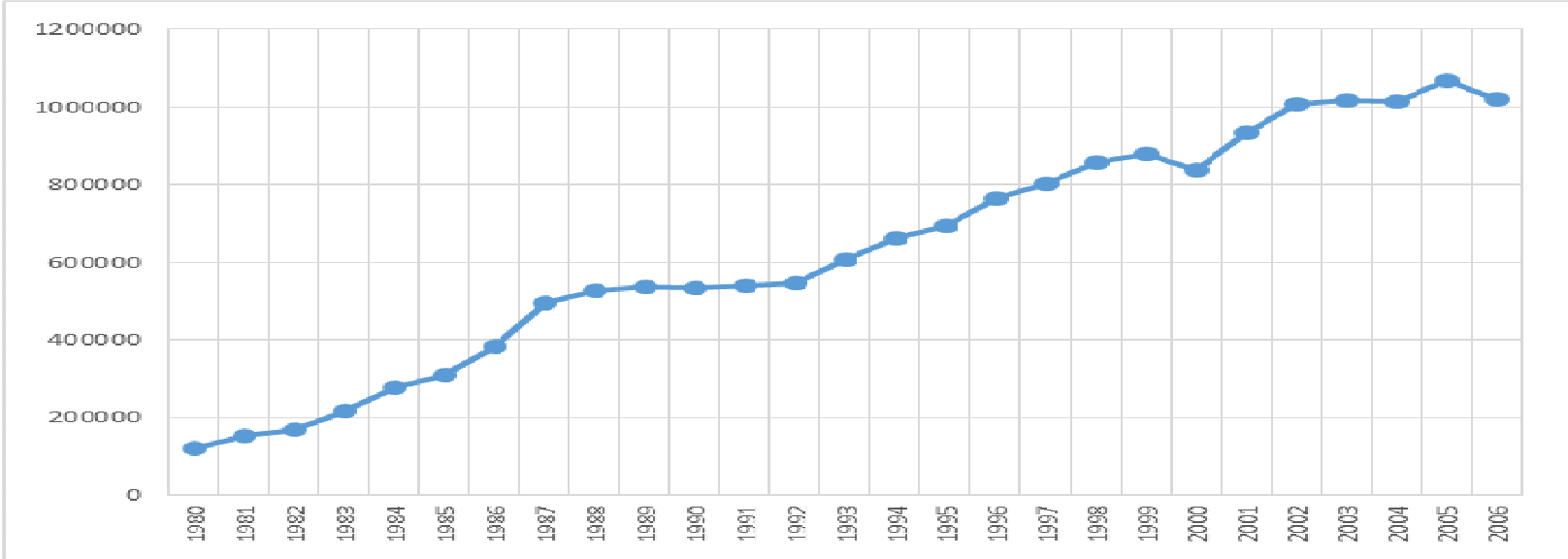
Analizando el corte del año 2005, se puede apreciar que las faltas contra las personas que aunque sólo representan el 18 por ciento se concentran en lesiones (44%) y en amenazas (37%), seguidas a distancia por injurias, malos tratos en el ámbito familiar, coacciones, malos tratos de obra sin lesión y apoderamiento de un menor; de estas faltas se esclarecieron el 86 por ciento y se detuvieron a 2.734 personas. Les siguen las faltas contra intereses generales y contra el orden público que representan un porcentaje

¹⁹⁰ Serrano et alt. (2006). Evolución de la delincuencia en España según las estadísticas oficiales (1998-2005). revista de derecho penal y criminología, N° 18. Pág. 586.

muy bajo con un porcentaje muy alto de detenciones¹⁹¹. A pesar de que las faltas engrosan las cifras de la delincuencia hasta el punto de que una perspectiva que agrupe a ambas puede conducir a la conclusión del aumento general de la delincuencia, estamos hablando en realidad en un porcentaje muy elevado de pequeños hurtos menores de 300 euros – el 56 %- y de pequeños daños – el 21 %- que juntos suponen el 77% de todos ellos, producto del auge de las grandes superficies comerciales que han arrinconado a los pequeños comercios donde era más difícil cometer hurtos. Por otra parte, la dimensión de lo que representan las faltas en el cómputo total de la delincuencia la proporciona el hecho de que suponen sólo la detención de 13 mil personas frente a las 236 mil de las detenidas por cometer delitos. Todo ello refuerza la tesis de que la delincuencia deba ser diferenciada y presentada de manera discriminada cuando se ofrecen datos desde instancias oficiales, lo cual entre otras cosas, tendría el efecto de no alarmar a los sectores más sensibles de la población.

¹⁹¹ Ministerio del Interior 2005. Anuario estadístico 2005. Págs. 259- 267.

Gráfico 6. Evolución de faltas 1980-2006



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 20. Evolución de faltas entre 1980 y 2006.

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
120281	151047	169139	216621	278622	308656	383661	495277	526825	535623	532783	539720	547047	606363	660192

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
694918	764468	801953	856928	880731	839311	932700	1007242	1015842	1015096	1068492	1021924

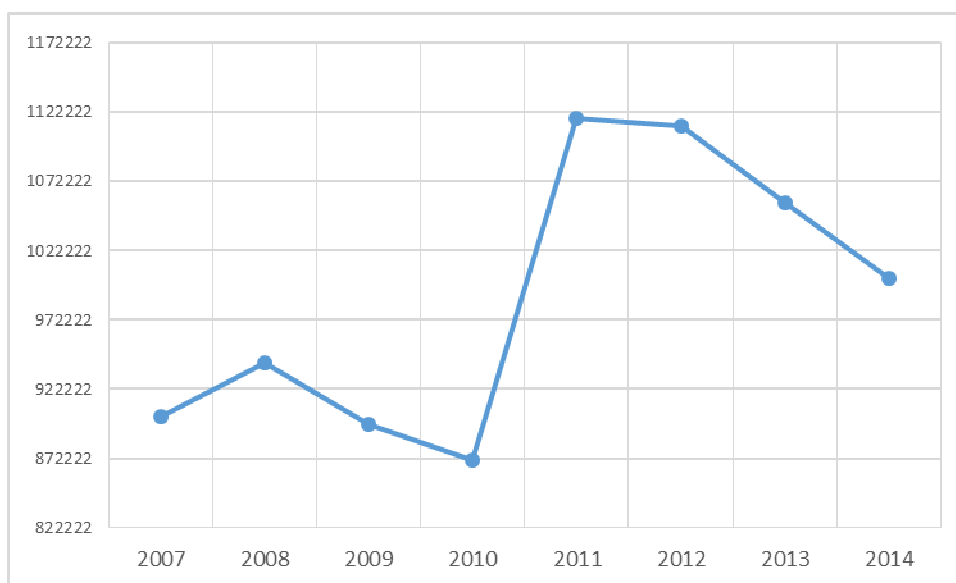
4.11. Series temporales sobre delitos a partir del 2007:

En los últimos anuarios publicados por el Ministerio del Interior se observa una gran mejoría toda vez que los datos son proporcionados de manera electrónica a través de series estadísticas en formato Excel. Concretamente a partir del año 2007 que es el más antiguo del que se ofrece información las cifras proceden, como hemos dicho, de un conjunto de policías mucho más amplio que los anteriores. En el gráfico y en la tabla de abajo se puede contemplar la estabilidad de la serie comprendida entre los años 2007-2010 y la abrupta subida de 2010 a 2011. No hemos encontrado en los diferentes anuarios del Ministerio del Interior una justificación o explicación para ese cambio. La hipótesis más plausible es que se haya debido a las modificaciones producidas por la reforma del código penal que se llevó a cabo en el año 2010. A partir de ese año baja moderadamente pero se sostiene en los niveles marcados por el año 2010.

Acudiendo a datos sectoriales o agrupados por categorías, para explicar estos cambios, se puede apreciar que los delitos contra las personas subieron de 70.007 casos a 81.97, principalmente por la subida de los malos tratos en el ámbito familiar que se incrementaron de 53.857 a 62.260. Los delitos contra la libertad también crecieron de manera muy abrupta desde los 31.938 hasta los 45.131. E igual cabe decir para los delitos procedentes del orden socioeconómico y patrimonio que de 626.498 se alzaron hasta 805.355. La seguridad colectiva también creció de 63.960 hasta 85.010 con una subida también muy importante de los delitos contra la seguridad vial que de 48.491 se situó en los 67.374 casos. Todos los tipos de robos subieron, exceptuando curiosamente el de robos en establecimiento que bajó de los 48.958 a los 41.250. Falsedades creció de 14.002 hasta los 20.175 e igual cabe decir del resto de delitos referidos a la administración de justicia, al orden público, a la legislación especial y a “otros delitos”.

Nos encontramos con una subida generalizada de prácticamente todos los delitos de la delincuencia. Ello se debería explicar caso por caso, pero a nivel general cabría argumentar que la relación de género, y la crisis económica afectando a todos los niveles podrían ser los desencadenantes de un cambio de estas magnitudes, en torno al 34 por ciento.

Gráfico 7. Evolución de delitos a partir de 2007.



Cuadro 21. Evolución de delitos a partir de 2007.

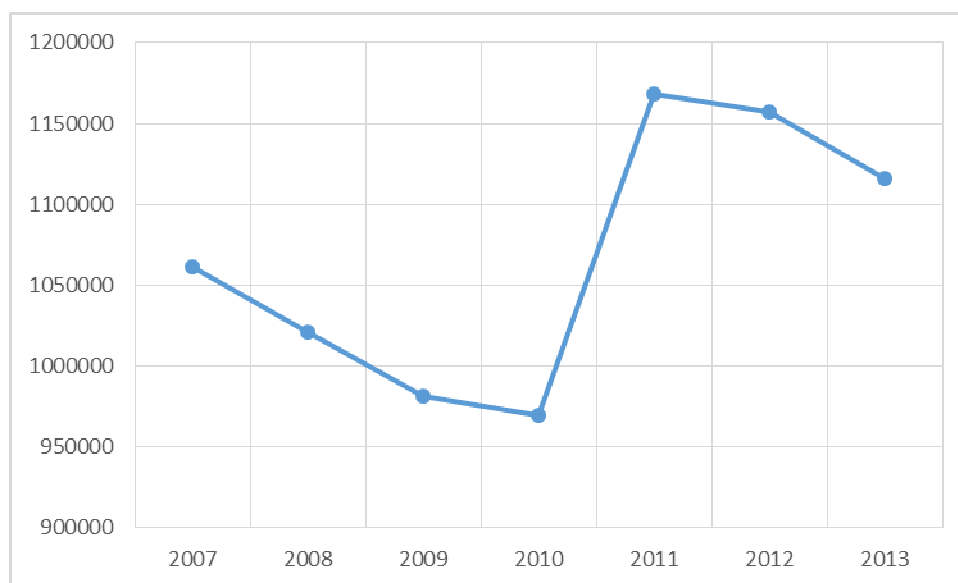
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
902058	941144	896561	871143	1117293	1111695	1056445	1002555

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

4.12. Series temporales sobre faltas a partir del 2007:

Frente a la evolución que han seguido los delitos, las faltas han experimentado una continua subida en casi todas las categorías exceptuando “amenazas y coacciones”. El asunto es que las faltas no se suelen mencionar en los informes que distribuye el Ministerio del Interior y publicita la prensa. O se suelen comunicar como una tendencia de “delito menor”. Como se puede apreciar en el gráfico de abajo ha habido una fuerte subida en el año 2011, cuyas consecuencias han sido posiblemente la de bajar los delitos.

Gráfico 8. Evolución de faltas a partir del año 2007.



Cuadro 22. Evolución de faltas a partir del año 2007.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1060953	1020722	981103	969753	1168232	1157172	1115688

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Finalmente cabe apuntar cómo desde ciertas instancias se ha resaltado que aunque existen determinadas prácticas burocráticas que pueden hacer cambiar los resultados delictivos mirados de manera longitudinal como la obtención de datos, el registro de éstos o la dotación policial para recoger denuncias, no se debe minusvalorar los efectos manipulativos procedentes de la clase política que nada tienen que ver con la reducción o con el aumento de la violación de la ley¹⁹². Concretamente se ha empezado a extender la idea de que determinadas políticas criminales pueden hacer variar los niveles de delincuencia¹⁹³. De igual manera, habría que señalar la manipulación intencional cuando se persiguen determinados efectos en la actitud de población ante unas elecciones como pueda ser el reciente caso francés en donde parece que la determinación de la lucha contra la delincuencia por parte de los partidos políticos pudo jugar una baza determinante en la orientación del voto. En España cabe mencionar, como

¹⁹² Fattah E.(1997). *Criminology: past, present and future*. Basingtoke. MacMillan.

Morrison W. (1995). *Theoretical criminology: from modernity to postmodernism*. London. Cavendish Publishing.

¹⁹³ Kiññias M. et Alt. (2001). Guns, violent crime and suicide in 21 countries. *Canadian Journal of Criminology* . N° 42. Págs. 429-448.

se denuncia desde el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (enero 2004), la política seguida por el gobierno conservador del Partido Popular en la criminalización de la inmigración: “la actuación del Gobierno no ha tenido en la práctica apenas nada de gestión y sí mucho de descontrol, enmascarado detrás de una reiterada táctica de sucesivas, vertiginosas y populistas reformas de la reforma, siempre acompañada de un mensaje general y negativo a la opinión pública sobre inmigración -a la que incluso desde el Consejo de Ministros se llegó a responsabilizar indiscriminadamente y con datos falsos o cuando menos muy inexactos del fuerte incremento de la criminalidad-”. Una política que modificó sustancialmente el código penal de 1995, como ya hemos visto, sin el que aunque no necesario si conveniente respaldo mayoritario de la cámara de representantes y que se orientó hacia una serie de reformas que de alguna manera se contagiaban de la política norteamericana de “tolerancia cero” impuesta por el alcalde Giuliani y exportada desde Nueva York a los principales países conservadores europeos¹⁹⁴ e inspirada en la doctrina de las ventanas rotas, cuyos principales derroteros discurren por una clara orientación carcelaria; a lo que habría que añadir el recorte sufrido en los Presupuestos Generales del Estado para luchar contra las mafias y organizaciones internacional que se han empezado a organizar desde nuestras fronteras, y que de acuerdo al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) nos habían colocado entre las tres o cuatro primeras posiciones del ranking europeo en el tráfico de estupefacientes.

En definitiva algo parecido al recurso de la represión de la delincuencia sustentada por Sarkozy o a la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la manipulación de los datos de seguridad por parte del Gobierno Británico.

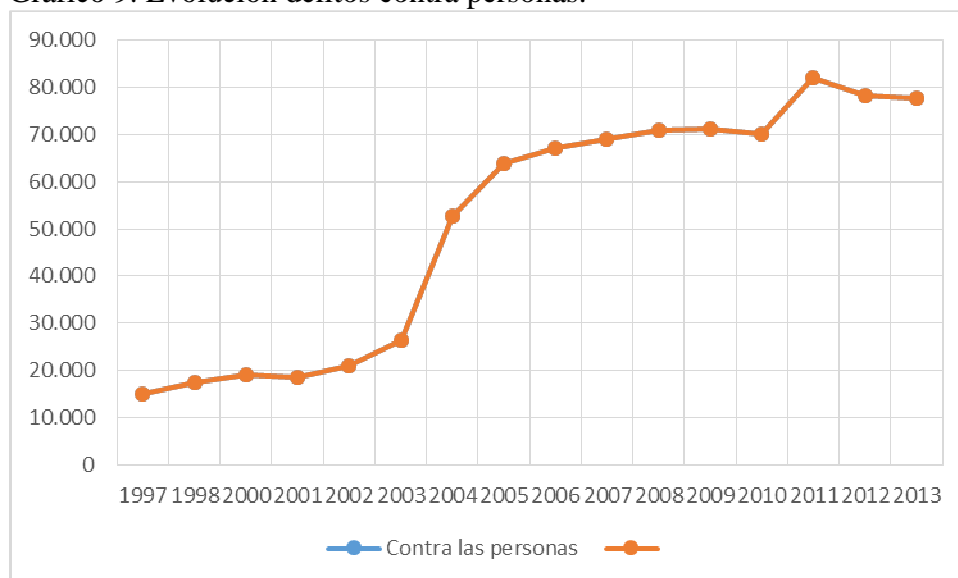
¹⁹⁴ Wacquant L. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Madrid. Alianza.

Capítulo 5. La Delincuencia contra las personas

Un examen pormenorizado de los delitos, requiere diferenciar las diferentes figuras o categorías delictivas, toda vez que no adquieren la misma importancia los que van contra las personas entre los que se encuentran los homicidios, asesinatos, abortos, genocidio, eutanasia, lesiones y malos tratos que no tienen reparación posible y que despiertan la alarma de la población que los que están asociados al patrimonio, tales como hurtos, robos, sustracción de vehículos, o los que se dirigen a la seguridad colectiva como el tráfico de drogas y la seguridad del tráfico. Comenzando por la importancia que tanto la sociedad, la justicia y la policía otorga al considerado delito de los delitos toda vez que es imposible enmendar el daño causado, destacan los cometidos contra las personas, es decir, homicidios, asesinatos, lesiones y malos tratos, que en el año 2006, supusieron el 7,35 por ciento del total, destacando por su importancia los homicidios (quitar la vida a una persona con la voluntad o la intención de hacerlo o por una imprudencia grave) y asesinatos (quitar la vida a una persona con alevosía, con ensañamiento o por una recompensa) en donde se recogen las dos formas establecidas en el código penal: el doloso y el cometido por imprudencia y en donde la unidad de cómputo son los casos de homicidio y asesinato, pero no los muertos. En estos casos, la relación del autor con la víctima en un porcentaje alto es ninguna, es decir desconocido, seguido por los cónyuges o asimilados, familiares y parientes, amigos íntimos, y los vecinos.

Las dos principales causas de muertes violentas en las ciudades suelen ser los ajustes de cuentas y las peleas callejeras. De 1997 a 2013 el aumento ha sido de 62.852 casos, lo que representa un incremento nada menos que del 423 por ciento. Este considerable aumento se explica porque en el año 2004 se incluyó la violencia doméstica. El valor más alto se produjo en el año 2011 y a partir de entonces ha disminuido. En el año 2011 se incrementó en 11.964 casos más lo que supuso un aumento del 17 por ciento, mientras que en año 2012 se redujo en 3.606 caso, es decir, un 4,39, y en el año 2013 la reducción fue casi del doble que el año anterior, 677 casos, o sea un 8,63 por debajo. El porcentaje de esclarecimiento y de detenciones es muy alto, y de todos los cometidos, se solucionaron en el año 2005, el 95 por ciento y se detuvieron a 1.636 personas. Mientras que en el año 2013 quedaron impunes 3.288 casos, es decir, se resolvieron el 96 por ciento.

Gráfico 9. Evolución delitos contra personas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 23. Evolución delitos conocidos contra personas.

1997	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14.836	17.341	19.143	18.573	20.870	26.460	52.717	63.973	67.027	69.110	70.816	71.350	70.007	81.971	78.365	77.688

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 24. Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra personas.

	HECHOS CONOCIDOS							HECHOS ESCLARECIDOS					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Contra las Personas	69.110	70.816	71.350	70.007	81.971	78.365	77.688	65.634	66.831	67.748	66.698	77.352	74.400
Homicidios dolosos / Asesinatos	1.015	1.045	955	908	1.210	1.125	964	935	982	878	840	1.107	1.031
Homicidios/Asesinatos consumados	364	381	364	343	385	364	302	311	347	303	281	271	252
Lesiones	15.737	15.631	15.032	14.730	17.904	17.005	16.385	13.420	12.974	12.463	12.267	14.642	13.967
Malos tratos ámbito familiar	51.844	53.659	54.895	53.857	62.260	59.703	59.819	50.809	52.445	53.980	53.013	61.043	58.903
Otros contra las Personas	514	481	468	512	597	532	520	470	430	427	578	560	499

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio del Interior. Anuarios estadísticos varios años.

Entre los delitos contra las personas suele haber una casuística muy grande que va desde el homicidio hasta las lesiones al feto como se puede comprobar en el cuadro de abajo, en donde se recogen algunas de las categorías utilizadas por las fuerzas del orden público, en un año escogido aleatoriamente en el cual se especificaron estas subcategorías.

Cuadro 25. Categorías de delitos contra personas desglosadas. Año 2006.

	Total	Consumados	Tentativa	Esclar.
HOMICIDIO DOLOSO	1.047	323	724	94,73
ASESINATO	82	57	25	98,73
HOMICIDIO IMPRUDENTE	95	92	3	101,15
INDUCCIÓN Y COOP. SUICIDIO	3	2	1	66,67
EUTANASIA ACTIVA	0	0	0	0,00
ABORTO	30	28	2	81,48
LESIONES	16.044	15.981	63	91,00
MUTILACIÓN GENITAL	13	13	0	115,39
MALOS TRATOS FAMILIAR	49.280	49.237	43	99,14
RIÑA TUMULTUARIA	426	421	5	88,52
ÑESIONES AL FETO	7	7	0	71,43
TOTAL	67.027	66.161	866	97,13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

5.1. Homicidio doloso y asesinato

Una de las primeras cuestiones que cabe mencionar aquí es la diferencia entre homicidio y asesinato, una diferencia que no siempre se distingue en el lenguaje común, pero que sin embargo adquiere una gran diferencia en el código penal. Mientras que el homicidio es el delito que alguien comete para acabar con la vida de una persona, un asesinato es un delito contra un congénere, de carácter muy concreto, que supone acabar contra una persona o contra varias concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosía, precio, recompensa o promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. El asesinato es un tipo de homicidio cualificado, tomando en cuenta que no es un simple homicidio agravado, sino ante una de las infracciones más graves que existen que es diferente del homicidio mismo (según la mayoría de la leyes y de la jurisprudencia), en las que por concurrir unas circunstancias determinadas son elementos constitutivos del mismo. En el asesinato se produce una mayor intensidad del ánimo criminal que en el homicidio, por el uso de unos medios perjudiciales contra la persona de un modo especial o por la denostada malicia y peligrosidad que se revela.

El grado en que los delitos son o no son denunciados a la policía varía con el tipo de delito. Los homicidios suelen tener altas tasas de denuncias y esclarecimientos. A menudo las personas informan de la desaparición de sus seres queridos y la policía adopta un especial interés en buscarlos, además es difícil deshacerse de los cuerpos; y los cadáveres descubiertos casi siempre son denunciados a la policía. Pero incluso en el caso de los asesinatos no existe un 100 por ciento de denuncias. Por razones obvias, la víctima real es incapaz de denunciar el delito, por lo que a veces el descubrimiento puede depender de un hecho fortuito “serendepity”, como el caso de Harold Shipman, en el Reino Unido, un médico de familia que fue

condenado por el asesinato de 15 de sus pacientes femeninos y que fue descubierto después de muchos años. Normalmente, sin embargo, una proporción muy elevada de asesinatos, en tanto que el más grave de los delitos, son comunicados, perseguidos, investigados y esclarecidos. Y ello es así, no solamente por la gravedad del delito, sino también porque la denuncia de delitos de asesinato cuyo origen es la propiedad depende en gran medida de las indemnizaciones de las compañías de seguros de vida. Las pólizas de seguro se basan como primera condición de pago que el delito que se haya denunciado¹⁹⁵.

El estudio de por qué la gente asesina a otra gente es vital desde una perspectiva política, ya que sin ese conocimiento es muy difícil de implementar estrategias apropiadas para la prevención y reducción de homicidios. Un número elevado de homicidios puede ser identificado en base a elementos como la premeditación, la motivación, el contexto, la instrumentalidad y la relación víctima-victimario, en la que todos desempeñan papeles de diferentes magnitudes en las diferentes formas de homicidio. Pero desarrollar tipologías de homicidio es un asunto complejo, no menos importante debido a que a veces se superponen y, en la vida real, las causas de homicidios pueden ser múltiples. De hecho, se necesita más investigación y trabajo metodológico para ayudar a desarrollar una clasificación completa del homicidio, pero algunas de sus tipologías, que son particularmente relevantes desde la perspectiva de la prevención del delito, pueden identificarse a nivel mundial de la siguiente manera: homicidios relacionados con otras formas de actividades delictivas; homicidios interpersonales; y homicidios sociopolíticos¹⁹⁶.

Según Reiner¹⁹⁷ los modelos internacionales de homicidio se corresponden sistemáticamente con las variaciones en economías políticas. Específicamente, los países neoliberales tales como Sudáfrica y Estados Unidos presentan los ratios más altos de homicidios, seguidos por los países corporativistas conservadores como Italia, Francia y Alemania, mientras que las social democracias tales como Suecia, Dinamarca y Noruega, los más bajos. Esto se podría explicar en base a que los estados neoliberales favorecen la violencia por altos niveles de desigualdad, pobreza relativa y desempleo. Sin embargo, la asociación no es perfecta ya que existen algunas anomalías en el modelo si consideramos a Finlandia y Japón (la tasa de homicidios más baja del mundo), en donde la proporción de población joven podría explicar sus variaciones en los ratios de homicidio.

¹⁹⁵ Williams K. (2012). Textbook on criminology. Oxford. Oxford University Press.

¹⁹⁶ UNODC (2014). Global study on homicide. Viena. United Nations Office on Drugs and Crime

¹⁹⁷ Reiner R. (2007). Political economy, crime and criminal justice. In Maguire M. et alt. (Ed.). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford. Oxford University Press..

En el caso de África y Latinoamérica, algunos autores¹⁹⁸ han señalado cómo las condiciones socioeconómicas influyen en una mayor tasa de homicidios, concretamente se señala los altos niveles de desigualdad económica, el bajo desarrollo humano (PNUD), una población muy joven, los procesos de urbanización incontrolados, la deficiencia del sistema penal, la corrupción policial y la proliferación de armas de fuego. McAlister¹⁹⁹ en un estudio sobre diecinueve países señala cómo los factores culturales de aceptación o justificación moral explicarían las diferencias internacionales en la comisión de homicidios, y aunque no se pueda considerar como una causación entre ambas variables, aquellas naciones en las que se tolera o se justifica de alguna manera o se siente como inevitable, son los lugares en donde se cometen mayores homicidios.

Una causa generalmente esgrimida levantando una gran discusión a nivel internacional es que existe una relación entre la posesión de armas de fuego y homicidio. En general, los oponentes de las leyes estrictas de posesión de armas sostienen que dichas leyes son ineficaces porque los ciudadanos todavía pueden ser capaces de obtenerlas de manera ilegal a través del mercado negro, lo cual dejaría sin posibilidad de defensa al ciudadano honrado que quisiera defenderse de un asalto. Otra consideración es que prohibiendo las armas, se minimiza el riesgo de represalias letales, lo que conduce a disminuir el costo potencial de realizar un acto criminal, especialmente cuando el agresor tiene un arma, pero la víctima no la tiene. Lo cual, en cierto sentido, permite a ciertas personas que poseen armas legalmente, una externalidad positiva al hacer más difícil saber si la víctima está armada antes de que sea atacada, aumentando los costes para cometer delitos criminales.

Los defensores de leyes estrictas sobre armas sostienen que la disponibilidad inmediata de armas de alta potencia es efectivamente coaccionada, lo que supone una poderosa herramienta que hace más difícil su posesión, disuadiendo de alguna manera a los delincuentes a utilizarlas en un acto delictivo, o a disuadirlos de cometer un acto criminal en general. Además, las prohibiciones legales aumentan el coste esperado de poseer un arma: confiscación potencial del arma, posibles sanciones aplicadas por la policía, y la posibilidad de ser declarado culpable y condenado en un tribunal de justicia, lo que supone que la propiedad siempre será relativamente más oneroso que no tenerlas. Si la legislación de las armas se convierte en más estricta, el coste de poseer una pistola, aumentará debido a la creciente probabilidad de sanciones o de ser condenado en un tribunal de

¹⁹⁸ Brookman F. (2010). Homicide. In Brookman F. et al. (Ed.). *Handbook of crime*. United Kingdom. Willan Publishing.

¹⁹⁹ McAlister A. (2006). Acceptance of killing and homicide rates in nineteen nations. *European Journal of Public Health*. Nº 16. Págs. 259-265.

justicia por el mero hecho de su adquisición o tenencia²⁰⁰. En España, la posesión de armas de fuego está prohibida y supone sanciones muy duras, lo que ha sido utilizado como un argumento para explicar el bajo número de homicidios en comparación con otros países. Las actas por posesión de armas u objetos peligrosos fueron de 67.170 en el año 2009, lo que contrasta con que en el año 2002 fuera de 16.543.

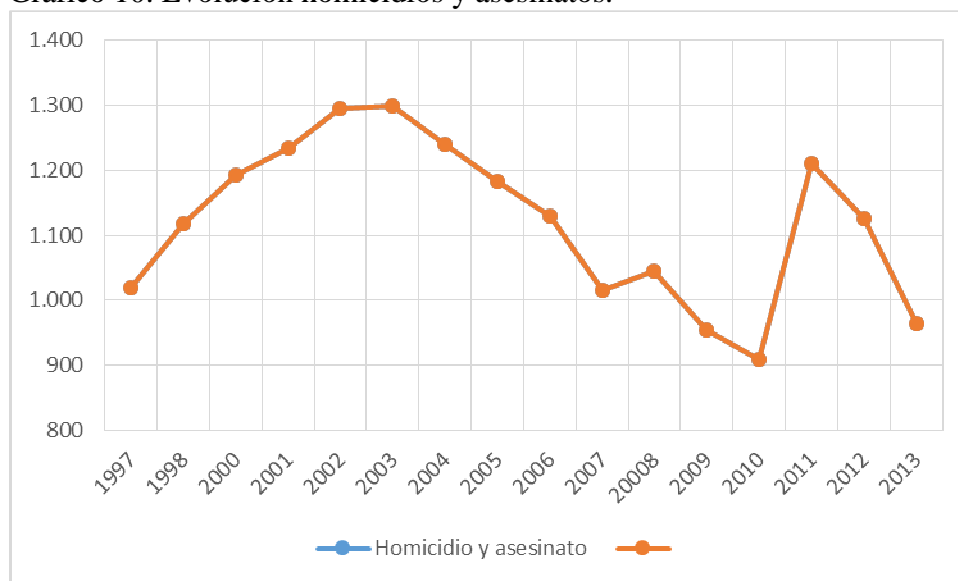
Una parte importante de esta categoría delictiva procede de las víctimas de violencia machista. Suelen suponer unos 70 asesinatos anuales, de los que un porcentaje muy alto no fue denunciado previamente (el 85 por ciento, no acusó a su agresor). Muchas de las víctimas comparten la característica de ser inmigrantes (en torno al 38 por ciento) y estar aisladas al haber dejado en su país de origen a su entorno familiar y de amigos. Tanto desde organizaciones como “Malos Tratos a Mujeres” como desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género coinciden en que el ambiente (hermanos, amigos, padres) es fundamental para denunciar los malos tratos que preceden a los asesinatos.

En el contexto europeo, España destaca por ser el país con la tasa más baja de homicidios: 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; cosa que también ocurre con la criminalidad violenta o conjunto de delitos que conllevan el uso de la violencia física o psíquica en donde con una tasa del 3,1 se sitúa por debajo de la media europea que se encuentra en el 4,7. Es de destacar la internacionalización del crimen que se ha producido en España, en donde en 2004, según la policía, operaban 494 grupos mafiosos de delincuencia organizada, procedente de redes del Este, del norte de África y de algunos países de Suramérica, que agrupaban a 2.645 delincuentes y lograban unos ingresos anuales de 1.020 millones de euros (Europol, 2005). La diferencia favorable que muestra España y en general los países occidentales en este apartado, en comparación con otras partes del mundo, se explica por dos variables básicas: por una parte, el control de las armas de fuego, y por otra, el alto nivel de los servicios de urgencia sanitaria que, como ocurre en Estados Unidos, se encarga de salvar muchas vidas.

Como se puede observar en los gráficos y cuadros de abajo desde el año 2003 ha habido una disminución de los homicidios y asesinatos con una abrupta subida en el año 2011. A partir de entonces, este tipo de delito ha continuado bajando.

²⁰⁰ Jing Li and Benjamin Taylor (2015). Do Fewer Guns Lead to Less Crime? Evidence from Australia”. *International Review of Law and Economics*. Volume 42, Pages 72–78

Gráfico 10. Evolución homicidios y asesinatos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 26. Evolución de homicidios dolosos y asesinatos

1997	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.020	1.118	1.192	1.234	1.295	1.300	1.240	1.182	1.129	1.015	1.045	955	908	1.210	1.125	964

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Entre 2007 y 2013, los homicidios conocidos y esclarecidos se han reducido en 62 casos, el descenso más pronunciado se ha producido entre estos dos últimos años. Los hechos esclarecidos son muy alto, situándose en esta serie temporal entre el 70 y el 90 por ciento. El mayor número sin esclarecer le correspondió al año 2011, mientras que el porcentaje más alto fue el que se produjo en el año 2012, con un 30,76 por ciento de casos sin resolver.

Cuadro 27 . Evolución homicidios conocidos, esclarecidos y su diferencia.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Homicidios conocidos	364	381	364	343	385	364	302
Homicidios esclarecidos	311	347	303	281	271	252	228
Diferencia	53	34	61	62	114	112	74
% sin esclarecer	14,56	8,92	16,75	18,07	29,61	30,76	24,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Entre los homicidios con más impacto en España en los últimos años cabe citar los de Rocío Wannikhof, Sonia Carabantes, Sandra Palo, niñas de Alcásser, Mari Luz, Marta del Castillo, los hermanos Breton.

5.2. Lesiones y malos tratos en el ámbito familiar

Esta categoría delictiva destaca por las repercusiones que tienen en la prensa y en los medios audiovisuales, las lesiones y los malos tratos en el ámbito familiar, que desde el 2003 al 2004 se duplicaron como producto de un cambio en el código penal, pasando de ser 26.460 a 52.717. Este delito viene especificado en el artículo 153 del código penal de 1995 cuando dice textualmente: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”.

Es lo que se puede considerar como la nueva delincuencia. Reflejando un aumento que podría ser artificial porque existiera en la misma medida y sin embargo, no se acabara denunciando. En todo caso refleja una subida que se duplica solamente en un año, motivada por una elevada concienciación de denuncia de la violencia de género propiciada por las importantes modificaciones legislativas llevadas a cabo 2003, que supusieron nuevos tipos delictivos y la modificación de alguno de los ya existentes (muchas de las infracciones consideradas hasta entonces como faltas pasaron a tipificarse como delitos)²⁰¹ y que desembocaron en la “Ley sobre Medidas Integrales sobre la Violencia de Género” I/2004. La importancia de este delito queda reflejado en la sucesivas modificaciones producidas, entre las que se encuentran, el art. 2.1 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907, el art. 1.7 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Ref. BOE-A-2003-18088, art. 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760,

Finalmente ha sido modificado por el artículo único.83 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que dice: Se modifica el apartado 1 del artículo 153, con la siguiente redacción: 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a

él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Los delitos contra las relaciones familiares son bastante variados y van desde los malos tratos en el ámbito familiar hasta la sustracción de menores, o la explotación de menores para la mendicidad, como se aprecia en el cuadro de abajo.

Cuadro 28. Delitos contra las relaciones familiares en 2006.

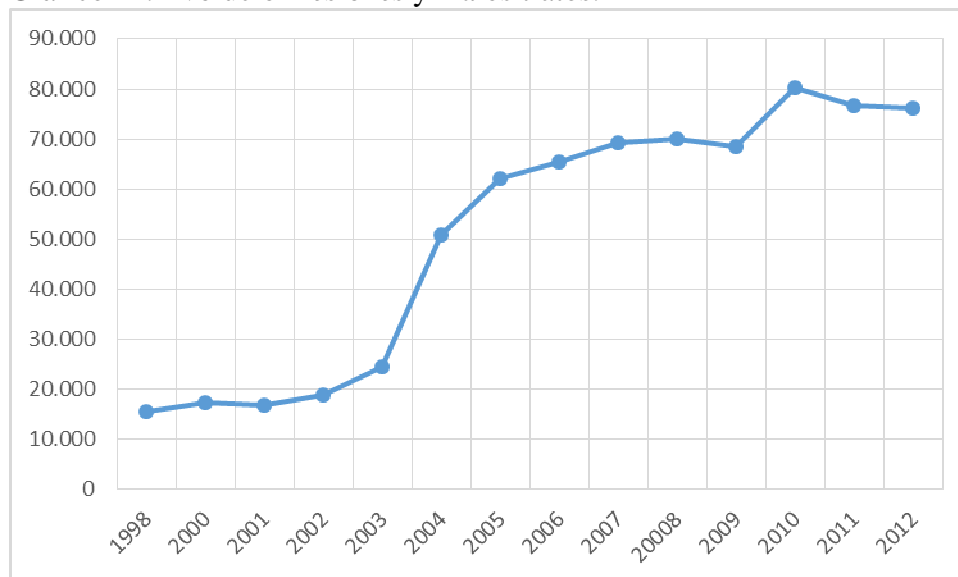
	Conocidos			%	Detenciones		
	total	consumada	tentativa		total	hombres	mujeres
MALOS TRATOS FAMILIAR	49.280	49.237	43	99,14	36.869	35.973	1.796
MATRIMONIO ILEGAL	13	13	0	100,00	7	5	2
SUPOSICIÓN DE PARTO SUSTITUCIÓN DE NIÑOS	7	6	1	60,00	1	1	0
TRÁFICO DE NIÑOS	4	3	1	100,00	5	3	2
QUEB. DEBER DE CUSTODIA / NDUC. MENOR ABANO. DOM	523	523	0	83,11	54	41	13
SUSTRACCIÓN DE MENORES	168	167	1	92,86	37	20	17
ABANDONO FAMILIA	1.057	1.056	1	88,90	83	60	23
IMPAGO PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.376	2.375	1	96,61	362	353	9
ABANDONO MENOR DE EDAD	505	503	2	92,16	127	51	76
EXPLOTACIÓN DE LA MEDICIDAD	103	103	0	101,98	99	29	70
TOTAL	4.756	4.749	7	93,09	775	563	212

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Como se puede observar en el cuadro siguiente, existe un gran salto en este tipo de delitos entre el año 2003 y el 2004 por la incorporación de los delitos de género a la categoría. Los cuales han ido creciendo en la serie hasta llegar al punto más alto en 2010, a partir de cual empieza un ligero descenso. Si comparamos la evolución desde el año en que se incorporaron, el aumento es también notable ya que desde 2004 hasta 2012 se incrementaron en 25.341, un 49,82 por ciento más. La cifra de delitos

esclarecidos es alta, en 2012, solo 800 casos no fueron resueltos, es decir, el 13,30 por ciento.

Gráfico 11. Evolución lesiones y malos tratos.



Fuente: Ministerio del Interior. Anuarios estadísticos varios años.

Cuadro 29. Evolución delitos lesiones y malos tratos.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
15.440	17.286	16.710	18.924	24.588	50.863	62.176	65.324	69.290	69.927	68.587	80.164	76.708	76.204

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

5.3. La violencia de género:

Dentro del apartado de los delitos contra las personas, cabe citar como destacado, el que se produce contra las mujeres en las relaciones de pareja o en el ámbito familiar. No se exige convivencia entre el agresor y su víctima y además no se trata de un problema que afecte al ámbito privado de relaciones entre iguales. Al contrario, se trata de una manifestación exacerbada de la desigualdad que todavía existente en nuestra sociedad. Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. La Constitución Española no incorporó grandes novedades a un tema que ya en esa época era manifiesto. La Ley Orgánica 3/1989, de actualización del Código Penal, introdujo un nuevo artículo 425, que castigaba la violencia física ejercida habitualmente sobre el cónyuge o persona con la que el autor estuviera unido por análoga relación de afectividad», sobre las hijas o hijos sometidos a potestad o sobre

pupilas, pupilos, menores o incapaces sometidos/as a tutela o guarda de hecho. La pena prevista era la de arresto mayor (de uno a seis meses de privación de libertad). Pero, el nuevo tipo penal, acabó inaplicado durante muchos años, manteniéndose en la mayor parte de casos las acusaciones por supuestas faltas, cuyo enjuiciamiento correspondía a los Juzgados de Instrucción, con un resultado de impunidad en más de un 80% de los casos. La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, supuso un paso más, especialmente relevante, en la lucha contra esta lacra social, introduciendo por primera vez la diferencia entre la violencia de género en el ámbito de las relaciones de afectividad y otras violencias intrafamiliares y reclamando tanto la coordinación entre todos los sectores como la actuación de toda la sociedad para conseguir su erradicación: “La violencia ejercida en el entorno familiar, y, en particular, la violencia de género, constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos. La situación que originan estas formas de violencia trasciende el ámbito meramente doméstico para convertirse en una lacra que afecta e involucra a toda la ciudadanía”.

Dos meses más tarde, llegaría otra ayuda legislativa para combatir esa lacra, aunque de soslayo ya que se trataba de un tema diferente, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, la cual afirmaba directamente en su exposición de motivos, apartado III, haciéndose eco de diversos instrumentos internacionales, que “El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación, y también con medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos delitos”. Y se adivina el deseo de combatir la impunidad de algunas de las primeras manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o ex pareja, y por situar determinadas manifestaciones de violencia en la parte del Código Penal donde se ubican las conductas merecedoras de la mayor repulsa social, al considerar las antiguas faltas de lesiones ejercidas en el ámbito familiar como delitos, en el nuevo artículo 153 del Código Penal, e incluyendo en éste cualquier menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito (esto es, la que no precisara para la sanidad tratamiento médico o quirúrgico posterior a la primera asistencia médica) así como golpes o maltrato de obra que no causaran lesión o la amenaza leve con armas y otros instrumentos peligrosos.

El anterior delito de violencia física o psíquica habitual en el ámbito de la violencia doméstica del artículo 153 del Código Penal pasaba ahora a ubicarse sistemáticamente como delito contra la integridad moral, en el nuevo artículo 173.2 del Código Penal. Se continuaba ampliando, además de

los sujetos pasivos contra los que podía ir dirigida la conducta prevista, pasando a incluir a hermanos, hermanas, a otras personas amparadas en cualquier otra relación por la que se encontraran integradas en el núcleo de su convivencia familiar o a otras personas que por su especial vulnerabilidad se encontraran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. La posterior Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía la adopción de la medida cautelar de prisión provisional para estos delitos, incluso aunque el delito presuntamente cometido estuviera castigado con pena inferior a dos años, que pasaba a constituir el nuevo límite temporal de referencia para acordar la medida cautelar, cuando tuviera como finalidad evitar que el imputado actuase contra bienes jurídicos de la víctima. La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal, introducía, como principal novedad en esta materia, hurtándola a la ponderación judicial del caso concreto, en los delitos de violencia doméstica, la imposición obligatoria de la pena accesoria de prohibición de aproximación (alejamiento) de la víctima.

En este contexto nace la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Un ambiente marcado por una larga cadena de reformas, que no siempre pudieron ser evaluadas en su eficacia, por la escasa vigencia temporal de las mismas. La Ley, en su artículo 1.1., define la violencia de género “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Entre los muy diversos instrumentos y medidas articulados en la Ley, ésta preveía la constitución del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, configurado como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja o ex pareja, así como contra sus hijos e hijas, con la función, entre otras, además, de asesorar y colaborar con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia. Como complemento de las anteriores medidas, y al objeto de facilitar el conocimiento de las decisiones judiciales previamente adoptadas, lo que habría de redundar en una mejor protección de las víctimas, el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, creaba el registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, centralizando en un solo Registro la información sobre la totalidad de penas y medidas de seguridad impuestas en esta materia por sentencias así como de medidas cautelares, incluyendo

órdenes de protección, adoptadas en el curso de un procedimiento penal, posibilitando su uso por jueces, fiscales y policía judicial²⁰².

Una de las teorías que más ha enfatizado la violencia de género es la del feminismo radical. La principal base de esta teoría consiste en identificar que el sistema sexo/género es la primera causa de la opresión de la mujer, lo que en términos de este enfoque debe ser interpretado como que la mujer ha sido históricamente el primer grupo oprimido. Las bases materiales de la ideología sexual y de la política de la violencia contra la mujer y la dominación del hombre se encuentran enraizadas en la reproducción de roles del hombre y la mujer. El materialismo histórico es la visión de que las últimas causas que mueven el curso de la historia se encuentra en la dialéctica del sexo: la división de la sociedad en dos clases biológicas distintivas para la procreación de la reproducción, y la lucha de estas clases entre sí, en los cambios en los modos de matrimonios, reproducción y cuidado de niños creado por estas luchas; en el desarrollo conectado de otras clases físicamente diferenciadas (castas), y en la primera división de trabajo basado en el sexo que se desarrolló en el sistema de clases (económico-cultural).

Algunas sentencias judiciales emitidas a finales de los ochenta sobre denuncias de violencia sexual suscitaron una viva controversia en la opinión pública española. La publicidad que se le dio a este tipo de delitos y su distinto tratamiento legal centró un debate sobre el que la mayoría de los españoles²⁰³ manifestaron que no sólo no se castigaba adecuadamente a los malhechores, sino que en la mayoría de los casos los delincuentes quedaban escondidos en la impunidad; es por ello, que una gran mayoría todavía seguía desconfiando de la actuación de policías, fiscales y jueces ante las denuncias que se les presentaban y opinando que si estos delitos fueran juzgados por un jurado popular, las sentencias serían mucho más duras. Según datos de una encuesta de los años noventa, los actos de violencia sexual arrojaban una gravedad parecida a la de los delitos más contumaces que se producían contra las personas en cualquier ámbito de la vida ordinaria. Es por ello que en una escala de cero a diez (en donde la valoración cero equivalía a ninguna gravedad, y la valoración de diez, a la máxima gravedad), puntuaban una media de 9,77 puntos al asesinato y una media de 9,63 puntos (la segunda puntuación más alta) a la violación de un/a menor.

²⁰² Bengoechea Mercedes (Ed.)(2007). Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

²⁰³ Muestra de 1.200 personas mayores de 18 años y ambos sexos, representativa de la población residente en la Península, Baleares y Canarias, con un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de $\pm 2,7$ para datos globales, mediante entrevistas a domicilio con selección final de entrevistados por el sistema de rutas aleatorias. Proceso de datos en ODEC-Unitec.

De acuerdo a la III encuesta de percepción de la opinión sobre la violencia de género del año 2011, un 50% de las mujeres acudiría en primer lugar a un familiar en busca de ayuda en caso de sufrir violencia de género. En segundo lugar, recurrirían a las administraciones: el 38,6% al juzgado, la policía o los servicios sociales. Este porcentaje se elevaría al 47,5% en caso de que fuera alguien allegado quien sufriera la agresión. Respecto a la valoración de las políticas contra la violencia de género, los datos reflejan que más del 67% de los participantes evalúa que los recursos públicos de tele protección y las pulseras contra el maltrato han mejorado considerablemente la protección de las mujeres que han padecido violencia de género. Un ejemplo de ello es el aumento de estos servicios a lo largo de los años. Como ejemplo, los servicios de tele asistencia cuentan con un número de usuarias de 9.749 (desde 2005 se han beneficiado 36.204 mujeres) y las pulseras contra el maltrato se han utilizado en 1.072 casos, de los cuales, 693 están activos. Otro tema importante que se refleja en la encuesta es la cuestión de las denuncias que se llevan a cabo. Según la encuesta, el 60% de la muestra cree que el principal motivo de no denunciar las agresiones es el miedo, mientras que un 32% piensa que las mujeres que no denuncian continúan con su agresor por una dependencia emocional de sumisión. Por otro lado, el 88,4% de la muestra considera que cuando una mujer retira la denuncia no significa necesariamente que fuera falsa, y el 64% piensa que quienes utilizan de manera fraudulenta las denuncias falsas contribuyen a que las mujeres sigan soportando violencia de género.

Otra encuesta importante fue la encargada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, número 2.968²⁰⁴, llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2012 a una muestra de 2.580 personas de ambos sexos, de 18 y más años, sobre las opiniones y actitudes en relación al problema de la violencia de género y algunas de las medidas puestas en marcha para combatirla. Las principales conclusiones de los datos obtenidos fueron las siguientes: El 92% consideró inaceptable la violencia de género. El 98 %, prácticamente toda la población, rechazó el maltrato físico y sexual. Un 6,5% de la población toleraba las amenazas verbales por (7% hombres y 6% mujeres). Y un 9% (10% hombres y 8% mujeres) admitía el el maltrato psicológico de desvalorización por El 31% (32% hombres y 29% mujeres) aceptó algún tipo de violencia de control en el seno de la pareja (como el control de horarios o decir a la pareja lo que puede o no puede hacer) y un 14% consideró en mayor o menor grado aceptable la ‘restricción de la libertad’ de la pareja. Aunque hay un rechazo muy generalizado, una parte significativa de la población no tuvo plena conciencia de qué tipo de comportamientos constituían de hecho maltrato. El 66% (65% de hombres y

²⁰⁴ Meil Gerardo (2014). Análisis de la encuesta sobre percepción social de la violencia de género. Madrid. Minsiterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

68% de mujeres) consideró que la violencia de género no había aumentado en los últimos años sino que salían a la luz más casos.

Con respecto a las cifras de este tipo de delito, considerado en estos momentos por la opinión pública como el más importante, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 murieron a manos de sus parejas o exparejas 54 mujeres. Esta cifra supuso un incremento respecto del año anterior, en el que se produjeron 52 víctimas mortales. Desde 2003 hasta 2013 el total de víctimas mortales ha sido de 712 mujeres. Tan sólo 11 de las víctimas mortales (el 20,4% del total) habían denunciado a su agresor y únicamente 4 víctimas mortales (el 7,4% del total) tomaron medidas de protección cuando se produjeron los hechos. De acuerdo a la relación entre la víctima y el agresor, en 31 casos eran pareja (cónyuges, compañeros sentimentales o novios) y en 23 casos eran expareja o estaban en fase de ruptura. Los ratios de una y otra circunstancia representaban, respectivamente, el 57,4% y 42,6%. De las 54 víctimas mortales de 2013, un 20,37 % (11 mujeres) había denunciado a su agresor. Por otra parte, la víctima y el autor declararon que convivían en el momento del homicidio en 29 casos (el 56,2% del total) y declararon que no había convivencia entre ambos en 25 casos (46,3%). Por grupos de edad, las víctimas mortales con 30 años o menos fueron 14 (lo que representaba el 25,9% del total), entre 31 y 64 años fueron 33 (el 61,2%) y entre las de 65 o más años fueron 7 (el 12,9%). De las 54 víctimas mortales registradas durante ese año, 38 (el 70,4%) poseían nacionalidad española y 16 (el 29,6%) eran ciudadanas extranjeras. La comunidad autónoma en la que se produjeron más víctimas mortales por violencia de género fue Andalucía con 11 casos. Desde el año 2003 hasta el 2013 han muerto 712 mujeres.

Siguiendo a las diferentes manifestaciones internacionales que han combatido esta lacra, destacan las conferencias de 1975 en México, en Copenhague en 1980, en Nairobi en 1985, en Beijing en 2004. Son también relevantes, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU del 20 de diciembre de 1993, reconociendo: “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”²⁰⁵. Un poco más tarde, la

²⁰⁵ Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En parecidos términos, la IV Conferencia Internacional de Beijing de 1995 proclama que la violencia contra las mujeres es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer”.

Véase: Instituto Español de la Mujer (1994). “La violencia ejercida contra las mujeres”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Número 42. Pág. 231.

misma organización en la IV Conferencia Mundial de 1995, sostuvo que “la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, por lo que viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Además la definió taxativamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Además, incluyó una primera definición denominada como “síndrome de la mujer maltratada”, que consistía básicamente en reconocer que las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, constituía una clara posición de subordinación al hombre que se podía constatar en tres ámbitos básicos de poder de género: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral.

Al igual que ocurre con los homicidios y asesinatos, en este tipo de delito tanto el conocimiento de los actos delictivos como el esclarecimiento es muy elevado: en las lesiones el 91 por ciento (11.328 detenidos) y en los malos tratos en el ámbito familiar el 99 por ciento (26.355 detenidos)²⁰⁶. Es de destacar que de las 76.267 denuncias por violencia doméstica presentadas en 2003 en los juzgados españoles, se retiraron el 13,2 por ciento, se juzgaron a 50.450 hombres y las medidas cautelares más abundantes fueron las de alejamiento que las incumplieron el 5,4 por ciento de los condenados.

Una parte significativa procede de la población inmigrante, en donde muchas parejas procedentes de países con estructuras muy severas de patriarcado no han podido asimilar las nuevas normas de un país de acogida como España, en el que la sociedad es mucho más respetuosa y tolerante con los derechos de la mujer. De acuerdo a los datos del PNUD del 2011, nuestro país ocupaba el puesto vigésimo segundo en el índice de “desarrollo relativo al género” como en el de “potenciación de género” de un total de 177 naciones. Según la Organización Mundial de la Salud de 2009 una cuarta parte de los casos de violencia machista estaba vinculado al alcohol, dato que se corresponde con que la mitad de los españoles opine que el abuso de la bebida influya mucho o bastante en la delincuencia machista. De cualquier manera delata a la sociedad española como patriarcal y con un gran grado de tensión en cuanto al proceso de liberación de la mujer se refiere. A nivel europeo el incremento de las cifras sobre las lesiones y malos tratos proporcionadas por los datos policiales se contradicen con la bajada que muestran las encuestas de victimización, lo que ha sido explicado como una mayor sensibilización de la población sobre este delitos que son denunciados en mayor medida que hace algunos años²⁰⁷.

²⁰⁶ Ministerio del Interior (2004). *Anuario estadístico del Ministerio del Interior*. Secretaría General Técnica. www.mir.es.

²⁰⁷ Aebi M. (2004). Crime trends in western Europe from 1990 to 2000. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Nº 10. Págs. 163-186.

Según datos del Consejo del poder Judicial, el año 2014 fueron enjuiciados por este motivo 19.624 hombres, de los que 14.045 eran españoles y 5.579 eran extranjeros, siendo condenados en total 15.743 hombres. Es de destacar que mientras que el número de españoles ha permanecido casi invariable en los 14 mil casos, el de los extranjeros ha disminuido en 500 casos, si comparamos la evolución de las cifras desde 2010.

Las víctimas mortales por violencia de género desde el 2003 fueron:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
71	72	57	69	71	76	56	73	61	52	54

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

En el año 2013 existían 64.063 mujeres víctimas de violencia de género que se encontraban protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como víctimas de este tipo de infracción, de ellas, 16.015 eran denuncias graves que suponían una mayor protección.

Las denuncias por violencia de género desde 2007 fueron:

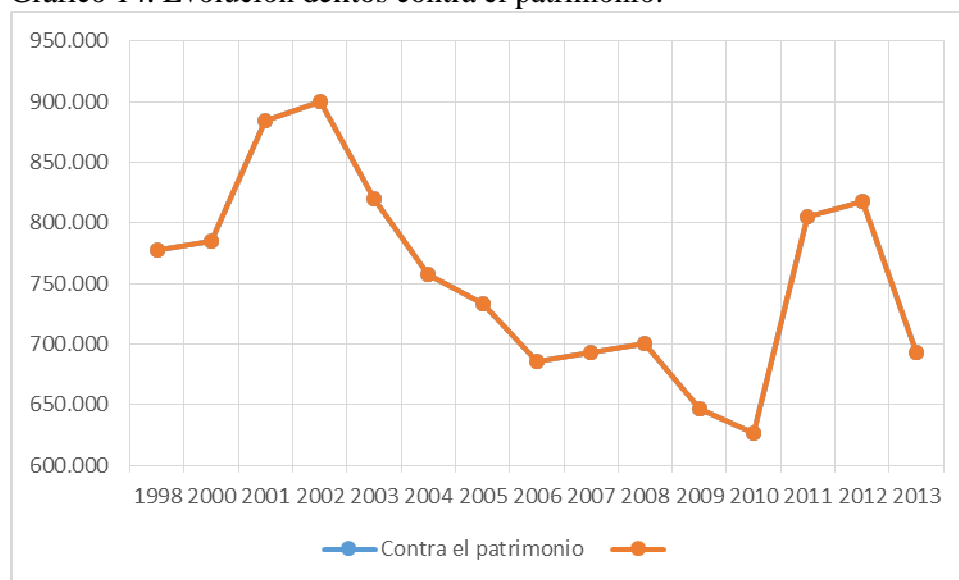
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
126.293	142.125	135.540	134.105	134.002	128.477	124.893

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

Capítulo 6. Delincuencia contra el patrimonio y el orden socioeconómico:

Los delitos que se cometen contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, son los más numerosos y los que engrosan las cifras de la delincuencia en cualquier país, suponiendo nada menos que en torno al 80 por ciento del total de la delincuencia y representando una medida fidedigna de la evolución de las desigualdades o de los mecanismos de control directo e indirecto de la sociedad. De 1998 hasta 2013, gráfico y cuadro de abajo, este tipo de delito ha conocido fluctuaciones, pero comparando estos dos años, el descenso ha sido de 84.779 casos, es decir, un 10,99 por ciento. Su evolución desde el principio ha sido la del alza hasta el año 2002, en donde comienza una continuada bajada bastante acentuada en los años 2003, 2004 y 2005, tocando fondo en el año 2010. Cabe destacar, el aumento de los hurtos producto del gran número de mega superficies comerciales abiertas en los últimos años y que propician el acto delincuyente en mayor proporción que el pequeño comercio. Dentro de este apartado es significativo la estabilidad o el descenso de los tres tipos de robos: violencia o intimidación (homicidio doloso, lesiones graves, violación, homicidio culposos, torturas, toma de rehenes, uso de armas o de medios peligrosos y ejecución en cuadrilla), robos con fuerza en las cosas en inmuebles, el robo con fuerza en los vehículos. De ellos, un porcentaje muy elevado se comete en la vía pública, seguido por los que se cometen en un local comercial, en el portal de una vivienda, en un bar, o en un parque.

Gráfico 14. Evolución delitos contra el patrimonio.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 30. Evolución delitos contra el patrimonio.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
777.394	785.149	884.659	900.373	820.201	757.456	733.200	685.627	692.615	700.903	646.096	626.498	805.355	817.391	692.615

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

El esclarecimiento de este tipo de delincuencia es bajísimo, en el año 2004, sólo se solucionaron el 15 por ciento de los hurtos, el 12 por ciento de los robos con fuerza en las cosas y el 18 por ciento de las sustracciones de vehículos sin intimidación; aun así, por estos tres conceptos se detuvieron a 59.313 personas. Mientras que en el año 2012 se dejaron de solucionar 546.545 casos, es decir, el 77,98 por ciento. Es de destacar que las series históricas de la mayor parte de las subcategorías reflejan una caída en la actividad, así las sustracciones por tirón en doce años han bajado a más de la mitad, los atracos a establecimientos bancarios se han reducido la quinta parte, mientras que las sustracciones en el interior de los vehículos han bajado en un 20 por ciento probablemente por la dificultad de sustraer los equipos de música. Mientras que se han mantenido estables, con pequeñas fluctuaciones los robos con violencia o intimidación, las sustracciones de vehículos sin intimidación, normalmente utilizados para perpetuar atracos o para venderlos en el extranjero. Obviamente si este análisis se llevara a cabo en referencia al número de habitantes podríamos estar hablando de una caída todavía mayor. Si consideramos todas las subcategorías incluidas en este epígrafe y que incluye en total a 22 delitos, tales como los arriba mencionados y otros como la extorsión, la estafa bancaria, el blanqueo de capitales, los daños, la propiedad intelectual o industrial; el porcentaje de esclarecimiento sigue siendo bajísimo y se sitúa en el 18,41, y supone la detención de unas cien mil personas. En el análisis de la situación europea se subraya el aumento del robo con fuerza por la irrupción de pequeños aparatos electrónicos portátiles como el walkman, las cámaras digitales o los teléfonos móviles²⁰⁸.

²⁰⁸ Lewis CH. Et Alt. (2004). Crime trends in the EU. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Nº. 10. Págs. 187-223.

Cuadro 31. Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra personas.

	HECHOS CONOCIDOS							HECHOS ESCLARECIDOS					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hurtos	95.559	100.760	89.035	92.991	155.122	165.297	163.464	16.902	17.836	16.760	17.891	26.457	28.313
Robos con fuerza en cosas	370.866	381.642	357.462	350.496	414.961	405.939	381.777	45.188	49.772	47.768	49.020	55.755	54.572
En vehículos	0	108.939	107.465	97.158	153.259	139.483	123.355	0	10.502	11.957	10.725	14.786	13.354
En domicilios	73.721	81.949	80.756	90.350	100.780	126.422	127.380	9.638	10.545	11.244	12.948	10.737	13.643
En establecimientos	89.062	92.812	84.009	80.731	60.799	61.991	39.940	16.117	17.479	15.749	16.001	12.167	12.021
Robos violencia o intimidación	71.628	71.421	65.159	59.370	87.718	96.607	86.034	17.005	17.315	16.553	15.421	21.146	21.820
En vía pública	50.194	49.516	45.249	42.238	38.831	45.144	38.975	10.042	9.978	9.502	9.330	8.516	9.278
En domicilios	3.480	3.720	3.777	3.607	5.450	6.929	6.326	1.032	1.158	1.235	1.211	1.205	1.420
En establecimientos	12.019	12.135	10.789	8.738	7.169	7.578	6.747	4.816	4.883	4.660	3.839	3.162	3.279
Sustracción de vehículos	85.935	72.106	55.964	45.373	51.799	47.125	41.499	18.808	16.275	11.490	9.962	14.564	12.873
Estafas	28.936	33.936	41.030	41.110	43.350	50.664	48.041	11.294	12.314	11.397	12.343	13.696	14.854
Estafas bancarias	6.449	7.481	9.548	9.629	5.033	9.292	8.655	2.265	2.383	2.228	2.830	1.347	1.887
Daños	24.903	26.392	23.566	23.344	32.059	31.442	27.635	6.633	6.284	5.981	5.926	7.161	7.040
Contra la propiedad intelectual e in	5.965	5.235	4.613	3.418	1.390	1.355	1.389	5.650	4.877	4.349	3.214	1.233	1.247
Blanqueo de capitales	112	106	116	177	171	199	243	111	109	111	160	149	182
Otros contra el patrimonio	8.711	9.305	9.151	10.219	18.785	18.763	22.633	6.306	6.692	6.634	7.308	11.667	13.427
TOTAL		646.096	626.498	805.355	817.391	772.715	700.903		131.474	121.043	121.245	151.828	154.328

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Algunas de las categorías que se incluyen en este apartado se pueden contemplar en el cuadro de abajo. De todas ellas la que menos se soluciona por la dificultad que entraña su esclarecimiento es el de robo con fuerza en las cosas que representa en ese año el 47,4 por ciento, solo se llega a solucionar en apenas un al 13 por ciento. En el ranking de importancia le siguen los hurtos, la sustracción de vehículos y el robo con violencia que se sitúan en torno al 10 por ciento.

Cuadro 32. Categorías desglosadas de delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico 2005.

	CONOCIDOS			%
	Total	Consuma	tentativa	Esclar.
HURTO	92.487	91.506	981	17,31
ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS	360.149	349.746	10.403	12,78
ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDA	74.041	71.683	2.358	25,15
EXTORSIÓN	336	318	18	77,78
SUSTRACCIÓN VEHÍCULO SIN INTIMI	90.751	90.208	543	18,48
SUSTRACCIÓN VEHÍCULO CON INTIMI	1.102	1.087	15	39,49
USURPACIÓN	945	942	3	66,45
OCUPACIÓN INMUEBLES	1.191	1.183	8	66,11
ESTAFA BANCARIA	5.560	5.219	341	37,79
OTRAS ESTAFAS	19.774	19.286	488	42,52
APROPIACIÓN INDEBIDA	3.840	3.827	13	83,58
APROPIACIÓN INDEBIDA DE VEHÍC	4.408	4.392	16	80,45
DEFRAUDACIÓN FLUIDO ELÉCTRICO	271	270	1	65,77
INSOLVENCIA PUNIBLE	96	95	1	95,75
ALTERACIÓN DE PRECIOS CONCURS	5	5	0	75,00
DAÑOS	23.543	23.367	176	32,52
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTU	5.985	5.965	20	94,48
ACCESO FRAUDULENTO A SERVICIOS R	57	57	0	33,33
RELATIVOS AL MERCADO ICONSU	71	70	1	60,87
SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA	107	104	3	24,53
DELITOS SOCIETARIOS	30	30	0	93,10
RECEPTACIÓN / OTRAS CONDUCTAS	753	750	3	104,18
BLANQUEO DE CAPITALES	125	125	0	92,80
TOTAL	685.627	670.235	15.392	19,15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

6.1. Hurtos.

La palabra hurto procede del latín *furtum* y significa acción de hurtar, que se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, también da su propia acepción jurídica como el “delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurren las circunstancias que caracterizan el delito de robo”. Los hurtos representan el mayor porcentaje de la delincuencia en todos los países del mundo, de manera que se podría decir que es el delito de los delitos por excelencia. El Barómetro Mundial del Hurto, un estudio anual que lleva a cabo el Centre

Retail Search en colaboración con el Checkpoint Systems²⁰⁹ en 42 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China, India, Europa, Japón, Australia y Rusia, calcula que en 2010 se ha registrado una disminución del hurto del 5,6 %, es decir 107.300 millones de dólares a nivel mundial. Los costes de las pérdidas (por hurto, empleados desleales y errores administrativos) en la industria global de la distribución entre julio de 2009 y junio de 2010 revelaban que la pérdida desconocida disminuye en todas las regiones objeto del estudio. El mayor decremento se ha producido en Norteamérica.

El hurto global en el *retail* representaba el 1,36 % de las ventas de este tipo, lo que provocó que los minoristas incrementaran su inversión en seguridad en un 9,27 % respecto al 2000, es decir, 21.878 millones de euros globalmente. El país con el mayor índice de pérdidas como porcentaje de las ventas es India (2,72% de las ventas minoristas), mientras que el porcentaje más bajo lo registra Taiwán (0,87%), el índice europeo es del 1,29%. Los hurtos –o pérdida desconocida como se menciona en el Informe- varían en función del tipo de negocio, del mercado vertical y del país, siendo los más repetidos los de ropa/prendas de vestir, moda/complementos y accesorios, cosmética, perfumes, productos de belleza y farmacia; aunque han avanzado en los últimos años la ropa de niños, ropa de calle, elaborados cárnicos, productos para el afeitado, y embutidos. La mayor parte de los hurtos son llevados a cabo por clientes (42%), seguidos de los empleados (35,3%).

En el informe de 2014, revelaba que España es el segundo país de Europa que afronta un mayor índice de pérdida desconocida, sólo por detrás de Finlandia. A nivel mundial, ocupa el quinto lugar. Las causas de la pérdida desconocida en España han tendido a diversificarse. Según el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución, el hurto externo sigue siendo el principal motivo de las pérdidas (30,9%), pero su incidencia en España disminuye en comparación con la media europea, que se sitúa en el 38,6%. Además, se reduce respecto al año pasado, cuando representaba el 50% de las pérdidas. También se contrae el hurto interno perpetrado por los trabajadores (del 27% al 23,5% sobre las pérdidas). En cambio, aumenta muy significativamente el fraude de proveedores, que pasa del 5% al 20,6%. También se incrementan los errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia (del 18% al 25%). Complementos de moda, joyas, herramientas eléctricas, pilas, accesorios para móviles, *smartphones*, vinos y licores, cárnicos frescos, productos de maquillaje y cremas faciales se encuentran entre los productos más robados. Estos artículos tienen en común que son fáciles de ocultar y cuentan con una buena acogida en el mercado de la reventa. Los índices de pérdida desconocida más elevados en Europa se registraron en los grandes

²⁰⁹ European Market (2014). About the Global Retail Theft Barometer.
<http://checkpointsystems.com/es-ES/news-events/press-releases/2014/Spain/GRTB-2014.aspx>. <http://www.globalretailtheftbarometer.com/>

almacenes (1,98%), las joyerías y relojerías (1,55%) y los autoservicios mayoristas (1,42%), debido a la escasa implantación de soluciones de pérdida desconocida en este tipo de establecimientos. La Navidad es la época en la que más hurtos se producen según el 63% de las empresas de Europa consultadas. La gran afluencia de transeúntes, los clientes que tienen que comprar regalos, las tiendas repletas de existencias y el personal temporal son las principales causas de este fenómeno. Según los minoristas europeos encuestados, el perfil principal de los delincuentes externos que cometen estos hurtos es el de una persona de entre 18 y 45 años con unos ingresos bajos y el deseo de llevar un tren de vida que no se puede permitir.

La Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) informó que el hurto supuso a los comerciantes españoles unas pérdidas de 2.510 millones de euros, el 1,31% de su facturación en el año 2009²¹⁰. De manera que empresas como el Corte Inglés ha implicado a sus vendedores en la tarea de disminuir el hurto premiando al trabajador con un 10% del valor del producto robado si colabora en atrapar a un ladrón. Si lo primero para los ladrones es pasar inadvertidos, lo siguiente es estudiar bien el comercio y acudir a él en las horas que esté repleto de clientes. En cuanto a las técnicas desarrolladas se asiste a una continua diáspora de actualización que consiste en conocer de memoria las medidas de seguridad que hay en la tienda, e incluso el fabricante del sistema de seguridad. El ladrón que va solo, sin nadie, en las tiendas de ropa siempre usa el probador para tratar de burlar el sistema de seguridad y a su vez no ser grabado por las cámaras. Ahí se libra una de las batallas más encarnizadas del hurto. Las tiendas de este tipo encargan a un trabajador la tarea de buscar las alarmas desconectadas por los suelos del probador. Otra característica es que los ladrones nunca sustraen artículos de más de 400 euros. Si robasen algo más caro se trataría de un delito. Y por supuesto nunca utilizan la violencia ni la intimidación con las personas o fuerza en las cosas. Eso sería un robo y supondría penas de cárcel.

“Sábado por la tarde. Centenares de personas se agolpan en una conocida gran superficie de la capital. Mientras unos compradores se deciden por una mermelada, otros esperan la cola del pescado. Ajenos a este trasiego, algunos *clientes* se dedican a hurtar todo lo que esté a su alcance. Aprovechan las horas de mayor trasiego para pasar inadvertidos y sisar perfumes, libros, discos compactos y artículos de informática. Así, disco a disco, las empresas pierden 1.700 millones de euros al año. Esas cifras manejaban ayer 120 directivos integrantes de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), que engloba a 24.000 firmas de toda España”. El País 18-10- 2007

²¹⁰ Información recogida en El País 22 de agosto de 2009.

Siguiendo con los informes de AECOC²¹¹, las temporadas de mayores hurtos siempre coinciden con dos grandes momentos de ventas: Navidad y rebajas. A eso se une que las tiendas están repletas de gente. Las mejores horas, a mediodía o en plena hora punta. Existen dos tipos de delincuentes, los que podría llamarse particulares se quedan con lo que roban, optando por objetos caros que no se pueden permitir. En esta categoría entran los estudiantes, personas que acuden con sus hijos a las tiendas o los que se sirven de una persona mayor o un minusválido para dar el pego. "Es gente que suele pedir perdón, que temen la denuncia y que están dispuestos a pagar la mercancía para no tener problemas". El segundo grupo sería el de los profesionales. Se trata de grupos organizados que acuden en grupos de cinco o seis personas y van directamente a los productos que les interesan. Saben que tiene compradores esperando esa mercancía. Entran en tropel y salen a la carrera, sin que les dé tiempo a los responsables de la tienda a detenerles. "En contra de lo que se cree, las personas enfermas [cleptómanas] son muy pocas, menos de un 1%". Los comercios sufren más robos están igualados entres los grandes y los pequeños.

Las grandes superficies tienen más medidas de seguridad, como detectores, cámaras y personal contratado, mientras que los pequeños cuentan con menor superficie para vigilar. Los pequeños tienen en contra que, cuando un cliente entra en un probador, éste se convierte en un espacio cerrado totalmente vulnerable. Los robos a veces se producen antes de que los productos lleguen a la tienda. Los trabajadores de las empresas de distribución también se dedican a hurtar, en especial productos pequeños muy caros, difíciles de controlar. Por otra parte, la "pérdida desconocida" (hurtos y errores administrativos), que supone un 1% de la facturación anual de las empresas españolas es una de las fuentes de ineficiencia que está restando productividad y competitividad a nuestras compañías. Prueba de ello son las 400.000 horas anuales que las compañías dedican a gestionar este tipo de cuestiones. No obstante, a pesar de que las empresas están más preocupadas que nunca por depurar sus procesos para ahorrar gastos innecesarios, de las 130.000 incidencias que se registran anualmente en este sentido, tan sólo se denuncia un 13%, debido especialmente al exceso de burocracia y los impedimentos en los procesos. No en vano, el 92% de las compañías de distribución españolas consideran el código penal demasiado indulgente a la hora de "castigar" las sustracciones.

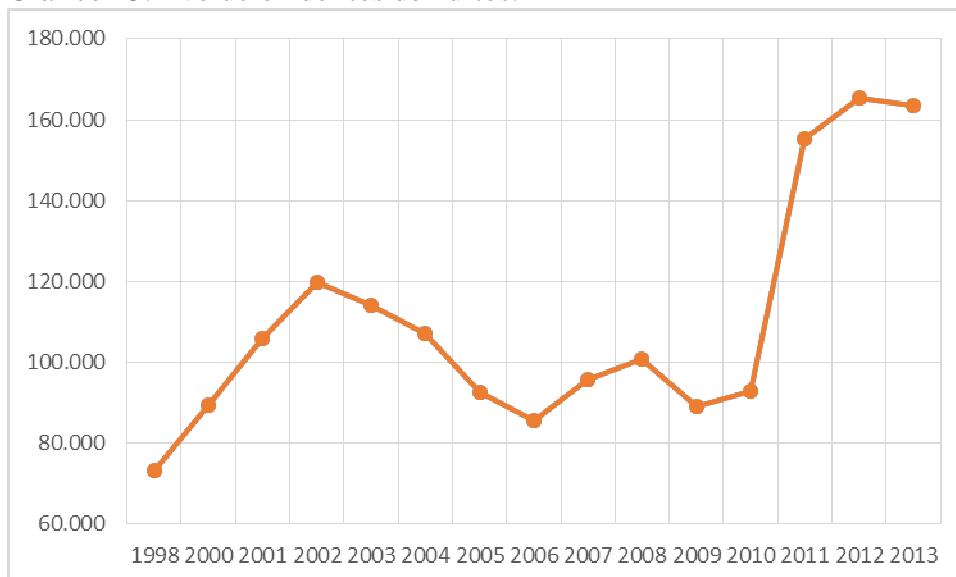
Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro de abajo, los hurtos crecieron continuadamente de 1998 hasta 2002, año en que inicia un descenso que tóca fondo en 2006 para después volver a subir alcanzando una cota máxima en el año 2012. Contemplando la serie desde sus inicios

²¹¹ AECOC. Informe on-line. Recomendación para prevención pérdida desconocida en la cadena de suministro.

[http://sede.aecoc.es/web/proyectos.nsf/0/72fdf4b7047aa71ec1256ddd00517a33/\\$FILE/Recomendaciones%20AECOC%20Pérdida%20Desconocida.pdf](http://sede.aecoc.es/web/proyectos.nsf/0/72fdf4b7047aa71ec1256ddd00517a33/$FILE/Recomendaciones%20AECOC%20Pérdida%20Desconocida.pdf)

hasta el final los hurtos han crecido en 90.271 casos, es decir, en un 123,33 por ciento, es decir, prácticamente se ha doblado.

Gráfico 13. Evolución delitos de hurtos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 33. Evolución delitos de hurtos.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
73.193	89.328	105.688	119.789	114.191	107.095	92.485	85.411	95.559	100.760	89.035	92.991	155.122	165.297	163.464

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

6.2. Robos con fuerza en inmuebles.

En cuanto a este segundo delito tipificado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el robo, etimológicamente tienen unos orígenes que se remontan al latín vulgar “raubare” y éste del germánico “raubôn” (saquear, arrebatar) que deriva del alemán antiguo roubôn; de donde proceden las actuales voces rauben, en alemán, y *reave*, en inglés. La RAE también lo define, jurídicamente, como el delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas. A simple vista, sólo con leer estas dos definiciones, ya podemos apuntar la principal seña de identidad que caracteriza a estos delitos –apoderarse de una cosa mueble ajena con ánimo de lucro y el matiz que los distingue: emplear, o no, violencia o intimidación sobre las personas o fuerza en las cosas a la hora de sustraer ese bien. En el ranking de delitos ocupa la primera posición, siendo una especialidad de la Guardia Civil.

En líneas generales, el robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento. La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifican que la pena sea superior a la que se establece por el hurto²¹². Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. El primero es aquel en el que se emplea una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como robo aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir como robo a aquel que se produce mediante el uso de una llave falsa o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de una llave falsa con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que protege del robo. El segundo se estudiará más tarde.

“Dos individuos de nacionalidad serbia y búlgara, S.P. y T.V., respectivamente, han sido detenidos como presuntos autores de hasta nueve robos con fuerza cometidos en domicilios perpetrados en agosto y septiembre en Pamplona. La actuación policial comenzó con la detención de los individuos por parte de la Policía Municipal, si bien el Cuerpo Nacional continuó las diligencias al apreciarse evidencias de que podrían tratarse de los autores de estos robos. Según la Jefatura Superior de Policía de Navarra, las gestiones policiales localizaron los vehículos con el que los detenidos operaban, vehículos de alquiler con los que delinquían en toda España, de forma que pernoctaban dos o tres días en las ciudades elegidas y posteriormente regresaban a su domicilio habitual en la costa levantina. A los detenidos se les ha podido imputar los robos con fuerza de nueve inmuebles pamploneses ubicados en la avenida de Galicia y la avenida de Zaragoza, y se les han intervenido los objetos con los que operaban”. Diario de navarra, 25-10-2011.

Según el Balance de Criminalidad presentado por el Ministerio del Interior, en España se produjeron 33,2 robos con fuerza por cada 10.000 domicilios en 2007²¹³. Muchos de estos hurtos se llevaron a cabo mediante

²¹² Mayhew, P. (1987). Residential Burglary: a Comparison of the US, Canada and England & Wales, National Institute of Justice. Washington D.C.: Government Printing Office.

²¹³ Ministerio del interior (2008). Anuario estadístico 2007.

la manipulación de la puerta de entrada y la del garaje. Según informaciones recogidas en varios medios de comunicación, los ladrones intentan robar objetos de valor almacenados en el garaje, como bicicletas, aparatos de deporte y herramientas. Una vez dentro pueden también acceder al coche. Si existe una puerta que comunique el garaje con la vivienda, los daños y perjuicios pueden ser mucho mayores. La intrusión en domicilios es uno de los delitos más recurrentes. Uno de los últimos casos se producía a finales de 2008. Cuatro mujeres de origen bosnio eran detenidas por 14 robos en domicilios de Barcelona, concretamente en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts. Las ladronas actuaban siempre en pareja y aprovechaban una puerta mal cerrada para entrar en los inmuebles. En el momento de la detención, la policía halló en poder de estas mujeres material para forzar las puertas de las casas y de los pisos. Otro caso se producía en Alicante, en donde se detenía a una pareja de nacionalidad argelina como presunta autora de 20 robos en domicilios a los que accedían abriendo la puerta con el método del 'plástico'. Los detenidos abrían con un plástico las puertas de las viviendas que no habían sido cerradas con llave. Madrid y Barcelona son las dos ciudades donde más viviendas se roban, pero además de estas grandes ciudades, la costa es otra de las zonas más afectadas.

Una característica esencial de esta figura delictiva es el carácter grupal y organizado de los delincuentes. Según una información procedente de la Policía Nacional en el año 2012, ocho miembros de nacionalidad georgiana fueron detenidos al formar un grupo organizado que se dedicaba al robo con fuerza en viviendas. También se arrestó a una perita española que erigió como el eslabón que permitía la salida del oro robado desde un negocio de compraventa que regentaba en el centro de Madrid. Hasta el momento se les imputan 32 hechos delictivos, aunque se estima que podrían haber cometido más sustracciones. Actuaban en todo el territorio nacional, sus últimos delitos se realizaron en Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos, Palencia, Toledo y la Capital de España. Las intervenciones de los presuntos integrantes del entramado se llevaron a cabo cuando los delincuentes regresaban a Madrid tras cometer diversos robos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, interviniéndoles todos los efectos usurpados en sus últimos asaltos. Ocho personas fueron arrestadas en Madrid y otra en la ciudad burgalesa, además se practicaron siete registros en los que se han recuperado piezas de joyería, 40 relojes, 15 ordenadores portátiles, 6 cámaras de vídeo, 18 cámaras de fotos, 6 DVD portátiles, 6 GPS, perfumes de primeras marcas, 2.000 dólares, 12.000 euros en efectivo y gran cantidad de útiles para la comisión de sus actos delictivos, entre ellos palanquetas, destornilladores, guantes, tres armas detonadoras o pasamontañas. El dinero obtenido con la venta de los efectos sustraídos era inmediatamente enviado a Georgia²¹⁴.

²¹⁴ Información recogida en www.20minutos.es/noticia/2233988/0

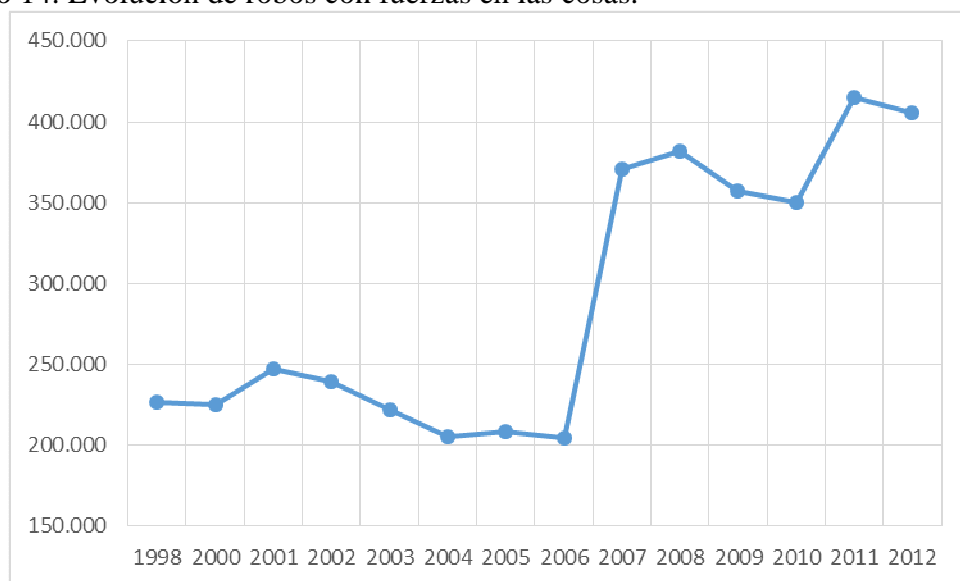
El modus operandi de los ladrones consiste en trabajar en grupos de unos tres individuos principalmente en viviendas que se encuentran vacías. Para ello efectúan unas mínimas comprobaciones, como una llamada al portero automático, suelen operar por la noche porque el hecho de llevar a cabo sus delitos durante la mañana hace muy probable que alguien se encuentre en el interior del domicilio. Mientras uno fuerza la puerta de entrada, extrayendo el bombín de la cerradura, moviendo el resbalón con una radiografía o mediante una palanqueta, otros dos miembros del grupo vigilan las escaleras y la puerta de acceso a la finca. Intentan cometer varios robos en lugares distanciados de una misma ciudad, llegando a forzar hasta cinco casas en una mañana los días laborales. A un grupo de este tipo detenido por la Policía Nacional se les imputaron 32 delitos en Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos, Palencia, Toledo y Madrid, pero los efectos intervenidos apuntan a su participación en más sucesos de estas mismas características.

De acuerdo a una rueda de prensa del 16 de febrero de 2015, Agentes de la Policía Nacional han desactivado en Valencia una "célula" especializada en asaltar viviendas. En la operación han sido detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer de nacionalidades albanesa y rumana, a los que hasta el momento se atribuyen cuatro robos en viviendas unifamiliares de diferentes localidades valencianas. Se han practicado dos registros en Manises en los que se han recuperado centenares de joyas, relojes de gran valor económico, bolsos de marcas exclusivas, numerosos teléfonos móviles, material informático y más de 6.000 euros en efectivo. Asimismo se han intervenido un vehículo sustraído y una pistola -con su cargador y munición-, así como gran cantidad de herramientas, un inhibidor de frecuencias, cinco documentos de identidad falsos y tarjetas bancarias en blanco listas para su clonación. Los arrestados constituían una auténtica organización criminal especializada en asaltar viviendas, al frente de la cual se encontraba un ciudadano albanés, que tenía una prohibición de entrada en nuestro país, y se ocultaba bajo una identidad falsa. El grupo adoptaba férreas medidas de seguridad para alcanzar sus objetivos. Residían en inmuebles alquilados siempre por la mujer arrestada para eludir eventuales controles policiales. Además, cuando regresaban de ejecutar los robos vigilaban previamente el entorno para detectar la posible presencia policial antes de introducir el vehículo sustraído en el que viajaba en el garaje del inmueble y accedían a la vivienda de forma escalonada. Los cuatro arrestados serían responsables de decenas de robos cometidos en viviendas unifamiliares, a tenor del material recuperado en los dos registros domiciliarios realizados en la localidad de Manises. Se han recuperado centenares de joyas y otros efectos, muchos de los cuales ya han sido devueltos a sus propietarios. Entre el material intervenido figura una pistola del calibre 7.65 con su correspondiente cargador y munición. La operación

ha sido realizada por agentes de la UDYCO y los GOES de la Jefatura Superior de Policía de Valencia²¹⁵.

Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro de abajo, en las series históricas, desde 1998 hasta 2006, el número de robos de este tipo ha permanecido poco variable, sufriendo un elevado aumento en el año 2007 y 2011. La variación desde el año de inicio hasta el año final ha sido de 179.732 casos más que representa el 179,45 por ciento más de casos.

Gráfico 14. Evolución de robos con fuerzas en las cosas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 34. Evolución delitos de robos con fuerza en las cosas.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
226.207	224.725	247.491	239.472	221.477	205.120	207.999	204.751	370.866	381.642	357.462	350.496	414.961	405.939

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

6.3. Robos con violencia o intimidación

La segunda modalidad de robo según el artículo 237 del Código Penal es el de violencia e intimidación en las personas. Está caracterizado porque se ejerce una fuerza *vis física* o una intimidación *vis compulsiva* para vencer la resistencia del dueño o poseedor de las cosas a su entrega. Según el Anuario de 2006, la mayor parte de estos delitos de esta naturaleza se cometieron en los espacios abiertos: vía pública, parques y aparcamientos; seguidos de los robos en locales y establecimientos: comercial, de hostelería, de alimentación y gasolineras; seguidos de los cometidos en las viviendas: portal de finca, domicilio particular, garaje; y finalmente de los realizados

²¹⁵ http://www.policia.es/prensa/20150216_2.html

en los transportes: metro, vehículos particulares, estación de ferrocarril y taxis.

Según los boletines y las noticias de prensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional como “seguridad semanal” o “segurpri”, los delincuentes prefieren asaltar casas con gente dentro porque es más fácil y eficaz²¹⁶. Entran en las casas de noche. Les da igual si sus habitantes están durmiendo o viendo la televisión. Irrumpen por la fuerza y los obligan bajo amenazas de muerte a entregarles todo el dinero que tengan. Si no tienen o no les parece suficiente, les exigen las claves de las tarjetas de crédito y en el acto acuden a un cajero y los desvalijan. Esta es la modalidad más peligrosa del robo de pisos en España, un «negocio» que prospera a razón de un asalto, atraco o desvalijamiento por minuto. Un tipo especial son los “murcigleros” porque actúan de noche- y en ambos cuerpos se admite que su actuación se ha disparado en los últimos tiempos. Se trata de delincuentes extranjeros, por lo general, originarios de países del Este y suramericanos. Su objetivo son las casas unifamiliares ubicadas en urbanizaciones de clase media alta de cualquier lugar de España, especialmente en las grandes ciudades y la costa. Buscan aquellos domicilios con puntos débiles que les permitan acceder más fácilmente a la vivienda. Una vez que encuentran la casa más asequible a sus posibilidades, actúan sin más», explica un agente del Cuerpo Nacional de Policía destinado a la investigación de este tipo de asaltos.

Lo habitual hasta ahora era que los asaltantes esperaran a que el domicilio estuviera vacío para atacar. Desconectaban la alarma, saltaban la valla y trepaban por los canalones hasta alcanzar la ventana de un piso superior sin protección. Una vez dentro, registraban la vivienda y se llevaban todo aquello de valor que encontraban a su paso, desde dinero, joyas y ordenadores, hasta tarjetas de crédito. Sin embargo, los delincuentes se han dado cuenta de que en las casas no suele haber ya mucho dinero y pueden obtener más beneficios, y de una manera mucho más fácil y eficaz, con los dueños de la casa dentro. Aunque la irrupción en un domicilio con gente dentro conlleva un indudable riesgo ante la reacción que pueda suscitar el asalto entre los moradores, los atracadores cuentan a su favor, a juicio de los psicólogos, con el factor sorpresa y la impresión intimidatoria que causa un despliegue indiscriminado de violencia.

Por tanto, lo más normal es que las víctimas accedan a todas sus pretensiones. Los “murcigleros” suelen actuar en grupos de entre tres y cinco personas. Van armados y en muchas ocasiones portan mazas, hachas y gatos hidráulicos para reventar las entradas a los domicilios. Una vez dentro, si están sus moradores, éstos son amordazados y maniatados para que no puedan defenderse ni alertar del robo fuera de la casa. En primer lugar exigen el dinero y las joyas. Si no consideran suficiente lo que hay conminan a los propietarios la clave de las tarjetas de crédito. Uno de los

²¹⁶http://www.policia.es/org_seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/pdf.pdf

asaltantes acude en el acto al cajero más cercano y extrae todo el dinero disponible. Se han dado casos en los que incluso se han llevado hasta el banco al dueño de la tarjeta para que él mismo sacara la cantidad. Por norma general, fijan su objetivo por los signos exteriores de la vivienda. «La ausencia de grandes medidas de seguridad y la presencia de ciertos elementos ostentosos como, por ejemplo, coches de alta gama, son factores que les son muy útiles para intuir el valor del botín que pueden conseguir con el menor riesgo», añade un oficial de la Guardia Civil.

En muchos casos, los vehículos se convierten en el señuelo involuntario que expone la víctima a los delincuentes. En no pocas ocasiones, los asaltantes de un chalet han llegado hasta el domicilio siguiendo a un vehículo lujoso «pinchado» (descubierto) a la puerta de un restaurante o en una discoteca. Cuando los ladrones penetran en la vivienda, intimidan a su propietario para obtener las llaves del coche y, después de desvalijar la casa, se llevan el turismo con todos los efectos valiosos a bordo. Los investigadores de este tipo de robos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, coinciden en que por lo general las bandas dedicadas a los atracos en domicilios establecen sus objetivos de forma aleatoria por el procedimiento ya citado de explorar los exteriores de las casas. No obstante, también se han dado casos en que los asaltantes disponían de información desde dentro. Es lo que se conoce en el argot policial como tener «un santo», es decir, alguien que conoce el domicilio y el botín que se puede obtener en su interior, generalmente, por algún tipo de relación laboral mantenida con el mismo. La profesionalidad con la que actúan estos grupos organizados supone un inconveniente para su desarticulación. Van preparados para no dejar rastro de su presencia, tan sólo de su actuación. «Es muy raro encontrar alguna huella tras los robos porque van con guantes y eso impide tenerlos fichados», reconoce un agente policial.

En 2010, la Policía Nacional desarticuló unos quince grupos denominados como “murcigleros” y, en la mayoría de los casos, fue posible la actuación policial, bien porque alguna víctima -muy pocas- les pudo identificar o porque tras una ardua investigación pudieron relacionar las herramientas usadas en un asalto con los desperfectos sufridos en las puertas o ventanas de la casa atacada. Hasta hace cinco años este tipo de robos era casi exclusivamente una especialidad de delincuentes procedentes de los países del Este. Últimamente, sin embargo, se ha detectado también la presencia de “murcigleros” magrebíes, lo que demuestra que esta modalidad delictiva ha dejado de ser una especialidad de un determinado grupo extranjero, lo que preocupa a la Policía. Por la gran cantidad de nacionalidades detectadas en este tipo de robos violentos -albano-kosovares, ucranianos, rumanos, chilenos, colombianos, marroquíes- los investigadores policiales se muestran convencidos de que el paso de muchos de estos delincuentes por la cárcel alimenta un intercambio de información, a través

del cual «cada vez más “choros” se inclinan por estos atracos», según un responsable policial²¹⁷.

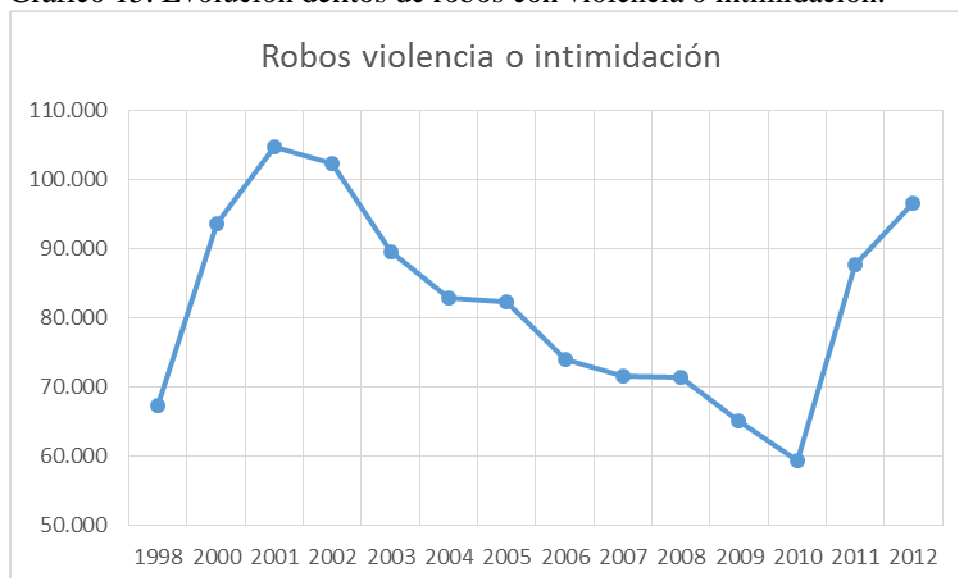
Sólo en la zona rural de la Comunidad de Madrid -controlada por la Guardia Civil- fueron denunciados hasta el pasado mes de septiembre 2.700 robos con fuerza, lo que constituye un tres por ciento más que en el mismo período del pasado año. Municipios madrileños como Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, Galapagar, Torrejón de la Calzada o Batres han sido especialmente castigados este año por los amigos de lo ajeno. El 39 por ciento de los detenidos en lo que va de año por este tipo de delitos eran extranjeros, fundamentalmente, procedentes de los países del Este y suramericanos. Una de estas bandas, compuesta sólo por tres delincuentes kosovares, perpetraron más de 300 robos en cuatro meses. «Vivían en una pensión del centro de Madrid y se trasladaban todos los días a urbanizaciones situadas en las afueras y, sin ningún tipo de información previa, entraban o robaban en chalés», cuenta un mando de la Comandancia de Madrid. Además de las grandes ciudades, la costa es otra de las zonas más afectadas por esta epidemia. En municipios como el almeriense de Vera se tuvieron que movilizar numerosos efectivos policiales en el verano de 2012 por el aumento vertiginoso de asaltos a domicilios mientras los inquilinos dormían plácidamente.

“Algunos chavales del barrio barcelonés de Turó de la Peira vivían atemorizados por sus propios compañeros de instituto. En grupos de dos o tres, varios jóvenes llevaban al menos medio año esperándoles a la salida, intimidándoles y robándoles lo poco que pudiesen llevar encima: móvil, dinero, ropa... Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 menores, la mayoría de 15 o 16 años, acusados de siete robos con violencia o intimidación. Amenazaban a las víctimas, de entre 13 y 16 años, mostrándoles una navaja o diciéndoles que les apalearían. La investigación se enmarca dentro del que pretende hacer aflorar posibles víctimas de este tipo de delitos, que en muchos casos no se denuncian por miedo a las represalias, así como dar mayor visibilidad a los agentes policiales en los alrededores de los centros escolares”. El País 5-9- 2011

Observando la evolución de los robos con violencia o intimidación desde 1998, se puede comprobar que desde 1998 hasta 2001 se produce un aumento bastante pronunciado y a continuación una larga y continuada caída hasta llegar al punto más bajo en el año 2010, momento en que vuelve a resurgir alcanzando cotas que se daban en el año 2000. La diferencia entre el inicio y el final es de 29.227 casos más, lo que representa un aumento del 69,74 por ciento más.

²¹⁷ <https://www.foropolicia.es/.../noticias-generales-seguridad-privada-t1731>

Gráfico 15. Evolución delitos de robos con violencia o intimidación.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 35. Evolución delitos de robos con violencia o intimidación

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
67.380	93.504	104.735	102.325	89.440	82.850	82.328	74.041	71.628	71.421	65.159	59.370	87.718	96.607

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Existe una amplia casuística de este tipo de delito como se puede comprobar en el siguiente cuadro, cuya variable más representativa es la de vía pública.

Cuadro 36. Evolución delitos de robos con violencia o intimidación 2005-2006.

	2005	2006	DIF %
ESPACIOS ABIERTOS	62055	56183	-9,46
AGUAS INTERIORES	11	13	18,18
APARCAMIENTO	638	599	-6,11
CABINA TELEFÓNICA	23	25	8,70
CAMPING	16	17	6,25
DESCAMPADO URBANO	228	210	-7,90
ESPECTÁCULO ABIERTO	91	58	-36,26
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA	12	20	66,67
EXPLOTACIÓN GANADERA	10	5	-50,00
INSTALACIÓN DEPORTIVA	66	58	-12,12
MAR TERRITORIAL	6	7	16,67
MERCADILLO	324	303	-6,48
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	82	120	46,34
PARQUE	1.916	1.571	-18,01
PLAYA	421	393	-6,65
TERRENO RURAL	197	204	3,55
VÍA PÚBLICA	57.794	52.347	-9,43

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	10	8	-20,00
OTROS ESPACIOS ABIERTOS	210	225	7,14
LOCALES /ESTABLECIMIENTOS	13136	11703	-10,91
ARMERÍA	3	5	66,67
BANCO	721	647	-10,26
CAJERO DE BANCO	452	384	-15,04
CENTRO DOCENTE	123	93	-24,39
CENTRO MÉDICO	81	65	-19,75
CENTRO OFICIAL	29	24	-17,24
CENTRO PENITENCIARIO	1	0	-100,00
CENTRO RELIGIOSO	19	16	-15,79
DISCOTECA / LOCAL JUEGO	380	441	16,05
DOMICILIO JURÍDICO / OFICINA	199	188	-5,53
ESPECTÁCULO CERRADO	29	20	-31,03
DE ALIMENTACIÓN	1.489	1.245	-16,39
COMERCIAL	4.934	4.147	-15,95
DE HOSTELERÍA	1.791	1.872	4,52
FÁBRICA / ALMACÉN HOSTELERÍA	195	181	-7,18
FARMACIA	625	650	4,00
GASOLINERA	991	763	-23,01
JOYERÍA	194	139	-28,35
LOTERÍA / ESTANCO	141	122	-13,48
MUSEO / SALA ARTE	5	5	0,00
TALLER MECÁNICO	58	52	-10,35
OTROS LOCALES / STABLECIMIENTOS	676	644	-4,73

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

6.4. Sustracción de vehículos

Esta modalidad de delito es la tercera en importancia en términos numéricos después de los robos con fuerza en inmuebles y la sustracción en vehículos. Es el año 2006 se dieron 96.261 casos un 7,46 % menos que en año anterior, siendo una competencia exclusiva de la Policía Nacional por el carácter urbano del robo. Según el “Informe Detector”²¹⁸, procedente de la mayor empresa dedicada a rescatar los coches robados en España, la sustracción de vehículos es del 0,5% del total del parque nacional, es decir, un coche de cada 200. En la actualidad el 80% de los robos de automóviles exigen a los posibles ladrones robar directamente las llaves al propietario o de lo contrario, cargar el vehículo en una grúa o remolque por lo que el tiempo de actuación tiene que ser profesional y reducido. Aun así, los sistemas de seguimiento en algunos coches de gama alta suponen que estos vehículos son recuperados con bastante rapidez. Existen dos tipos perfiles de vehículos robados: los coches de gama alta, cuyo fin es ser vendidos en países de Europa del Este o África y coches de gama media/baja que son sustraídos para cometer algún tipo de delito. Por otra parte, en España se roba un vehículo cada 2,5 minutos, 12 coches a la hora, 300 al día, es decir, entre 100.000 y 120.000 al año.

Siguiendo con el citado informe, las ciudades que presentan un mayor índice de robos son: Madrid, Barcelona, Valencia y el eje de Marbella –

²¹⁸ Informe Detecor (2012).

http://www.grupodetector.com/uploaded/noticias/pdf/2012_06_14_13_47_12.PDF

Málaga. El mayor número de robos se produce en aparcamientos públicos: parkings, centros comerciales, cines, etc. Los vehículos de gama media (para delitos) más robados son Volkswagen Golf, el Seat León y Opel Astra los cuales suelen aparecer a los pocos días con desperfectos importantes. De entre los de gama alta los vehículos más “golosos” son modelos como BMW X5 y Serie 3, los Audi A3 y Q7 y los Mercedes-Benz ML y Clase C. Respecto a Europa, España es el tercer país donde más robos de vehículos se registran al año por detrás de Italia y Reino Unido. En tantos por ciento los robos en España suponen el 18% de todos los robos en Europa. Italia registra más del 38 % y Reino Unido se queda en un 27,5 %. A España le siguen Francia, Suecia, Polonia, Países Bajos y Portugal.

Los golpes policiales importantes, sobre todo a mafias de búlgaros y españoles, han permitido mejorar las estadísticas. Si en 2002 se sustrajeron 153.000 vehículos y 106.000 en 2005, la cifra se redujo a 71.000 en el año 2008 y a 44.000 en 2010, según datos oficiales del Ministerio de Interior. Como sostienen fuentes policiales: "Aunque siempre se maquillan un poco los datos, ya que a veces una banda que ha robado 60 coches se considera como un solo delito, lo cierto es que sí han bajado los robos de coches de gama media, aunque no los de gama alta o de lujo. De hecho, el número de condenados por este delito se ha mantenido entre los 2.900 y los 3.100 entre los años 2007 y 2010. Los robos de coches tienen dos salidas: los de gama media son sustraídos por delincuentes para cometer sus delitos o por grupos que se dedican a desguazarlos y luego vender las piezas. Mafias más organizadas roban los de lujo para venderlos en Europa del Este o países centroafricanos (donde los todoterrenos tienen buena salida). O incluso a Irak o Kuwait, destinos elegidos por dos de los últimos grupos desarticulados.

Los coches recuperados en España no son siempre vehículos robados con destino a Europa o África. Recientes operaciones policiales han desarticulado dos grupos que sustraían los coches de lujo en Bulgaria y Hungría para venderlos en España. Los de Bulgaria eran ‘maquillados’ en Alemania antes de ser vendidos a precios más asequibles en España. Los de Hungría eran comprados a bajo precio a propietarios de aquel país que, a su vez, estafaban a las aseguradoras denunciando falsos robos. Luego eran vendidos en España a precios muy bajos. Las policías de media docena de países europeos han coordinado operaciones como la denominada “Alto Impacto”, destinada a pulsar las tendencias en uno de los negocios delictivos más prósperos del momento, junto al tráfico de drogas y al de personas: el tráfico ilícito de vehículos. Los resultados de la operación dieron una buena radiografía del estado en el que se encuentra esta especialidad. En 48 horas –la operación se hizo entre el 2 y el 3 de mayo– fueron controlados más de 100.000 vehículos en los países participantes en el dispositivo. Se recuperaron un total de 312 coches robados y se detuvo a 123 personas. La policía española lideró todos los apartados de la operación Alto Impacto: en nuestro país se verificaron 38.040 coches, se intervinieron 207 y se practicaron 77 detenciones. Casi el

58 por ciento de los coches robados y recuperados durante el operativo tenían como destino países de la Unión Europea, especialmente Bulgaria, Polonia y Rumania, hasta donde viajan por carretera. Un tercio de los coches recuperados tenían como destino el norte de África, especialmente Marruecos y Argelia.

Desde la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Comisaría General de Policía Judicial, creada en 1997, a la que pertenece el grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos (TIV)²¹⁹, aseguran que “la operación Alto Impacto sirvió para reafirmar las tendencias que veníamos observando desde hace años. Operación tras operación, observamos una mayor profesionalización en este tipo de delincuentes y la búsqueda de nuevas rutas”. Las estadísticas hablan de un importantísimo descenso en el número de coches robados cada año en España: de los 153.000 vehículos sustraídos en 2002 se ha pasado a los menos de 70.000 de 2009. Los mandos policiales atribuyen este espectacular descenso a varias razones, pero principalmente a los golpes asestados a las principales bandas de ladrones. “Se han desarticulado grupos de búlgaros que eran activísimos, con capacidad para robar 10 o 15 coches al día”. La caída de históricos del negocio ha dado paso a jóvenes, con una gran especialización y con ganas de abrir nuevas rutas y campos de acción.

Según un informe de la Udyco²²⁰: Los ‘ojeadores’ localizan el coche y lo roban. Los ‘electrónicos de bastidor, el color ni hace falta). Un conductor lo saca de España y un proveedor lo ‘coloca’ en el extranjero. Es un negocio que controlan sobre todo búlgaros y marroquíes, pero también polacos, especialistas en furgonetas, españoles, rumanos, ucranianos y lituanos, que actúan en Levante. Existen cinco métodos para robar:

El método Toli: Atar latas o dar un golpe por detrás al coche. Cuando el conductor se baja, suele dejar las llaves puestas. Los cacos aprovechan entonces para subirse al vehículo y darse a la fuga.

El robo del tapón: Robar el tapón de gasolina para hacer una copia de la llave. Robo por satélite: Colocar debajo de un coche un chip localizador para tenerlo en todo momento controlado.

El segunda mano: El ladrón elige a su víctima a través de anuncios. Queda con él en alguna zona para probar el coche. Cuando el dueño se apea para que lo conduzca el ladrón, éste se lleva el coche. Inhibidores: Los ladrones usan inhibidores que neutralizan la señal que emite la llave cuando el dueño cierra su coche. Éste cree que lo ha cerrado, cuando en realidad lo ha dejado abierto.

La modificación de un vehículo robado para su introducción en el mercado legal resulta compleja, aunque en los países del Este de Europa se dan las condiciones para ello. Hay que cambiar las placas de matrícula, es decir, el registro documental. Y para ello hay que conseguir una placa de matrícula

²¹⁹ http://www.policia.es/org_central/judicial/udyco/udyco.html

²²⁰ <http://www.faeditorial.es/web/images/stories/capitulos/trafico-ilicito-vehiculos.pdf>

limpia. También hay que modificar el número del chasis. Esto es más fácil que ocurra en países donde existen controles menos rigurosos que en España. Otras medidas complementarias que podría dificultar el blanqueo de un turismo robado es el rotulado con chorro de arena del número de matrícula en todas las ventanillas del vehículo, lo que implica el cambio de todo el sistema de ventanillas, con el costo adicional que eso supondría para quien quiere lucrarse con la venta de un vehículo robado. Esto es algo que fue muy habitual hace uno 5 o 10 años y ahora prácticamente ha desaparecido, ante el avance de los sistemas antirrobo electrónicos que incorporan los turismos modernos.

Según revela un informe de Detector²²¹, Los lugares que más afectados se ven el robo de vehículos son los aparcamientos públicos y los de los centros de ocio de las principales ciudades del país. El riesgo de robo aumenta con el período estival. A pesar de que el índice de sustracciones de coches de gama alta ha remitido, por su dificultad para ser vendidos en el mercado ilegal, ha aparecido un eje formado por la Costa del Sol y el litoral mediterráneo en el que se ha disparado el robo de vehículos de lujo. Las principales causas que llevan al robo de vehículos son, por un lado, la venta ilegal de segunda mano; y, por otro, la apropiación de automóviles para realizar actividades delictivas. El informe revela la dificultad que entraña para los propietarios poder encontrar los vehículos que les han sido sustraídos, especialmente si el robo se ha cometido para vender el coche en mercados ilegales extranjeros. Si se trata de hurto para cometer delitos, el coche es habitualmente recuperado con destrozos.

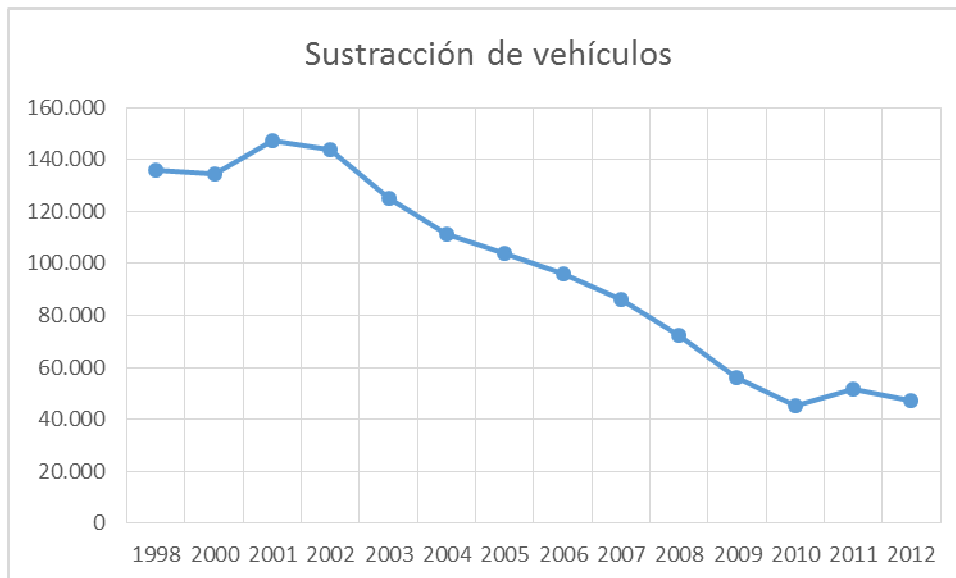
Como sostiene una información procedente de una rueda de prensa del Ministerio del Interior de 24 de febrero de 2014, la policía desarticuló un grupo criminal organizado itinerante especializado en la comisión de robos en comercios mediante el procedimiento del "alunizaje". Fueron detenidos tres hombres como presuntos responsables de al menos 15 robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal, contra la seguridad del tráfico y de robo con fuerza de vehículo a motor. Los arrestados utilizaban un vehículo de alta gama sustraído en la provincia de Madrid para cometer los alunizajes. Se esclarecieron 15 robos con fuerza perpetrados en distintos establecimientos comerciales -principalmente perfumerías, joyerías, estancos, tiendas de electrónica y peleterías- de las provincias de Málaga, Granada, Almería, Jaén, Cádiz y Córdoba. Durante el operativo se practicaron tres registros domiciliarios en los que se lograron recuperar ... el coche de gama alta que robaron para cometer los robos... los agentes comprobaron la existencia de varios robos de similares características cometidos en distintas provincias de la comunidad andaluza, que habían sido cometidos por un mismo grupo de personas. Los detenidos elegían primero el objetivo potencial y acudían a visitar previamente el lugar durante las horas de apertura del negocio para

²²¹ <http://www.detectorseguridad.com/>

estudiar tanto las medidas de seguridad como la disposición de la mercancía.²²².

De acuerdo al gráfico y cuadro de abajo sobre series temporales de este delito, se distingue una clara evolución descendente que va de los aproximadamente 140 mil del principio hasta los 47 mil del último año. Con 88.959 mil casos menos, supone una rebaja del 34,6 por ciento.

Gráfico 16. Evolución delitos sustracción de vehículos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 37. Evolución delitos de sustracción de vehículos.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
136.084	134.583	147.441	144.000	124.946	111.528	104.023	96.261	85.935	72.106	55.964	45.373	51.799	47.125

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

6.5. Robos con fuerza en las cosas en vehículos

Estos robos pueden ser de varios tipos. Por un lado, los que se producen en los atascos o semáforos estando dentro del coche el propietario. Y por otro, cuando se deja el vehículo en un parking. En el interior de las ciudades, los ladrones aprovechan los atascos y las paradas en los semáforos para distraer al conductor con la venta de cualquier producto o con el aviso de alguna incidencia en su vehículo. Los ladrones abren la puerta del copiloto y roban el bolso o cualquier objeto de valor a la vista. Otro momento de alto riesgo es cuando se está aparcando. Los robos en carretera son más espectaculares. Sobre todo en las entradas y salidas de zonas turísticas. En estos casos, actúan en bandas organizadas. Los ladrones avisan

²²² http://www.policia.es/prensa/20150224_1.html

al conductor sobre un posible pinchazo de una rueda o queman algo cerca del vehículo para que parezca que hay un incendio. Cuando el conductor aparca el vehículo, mientras uno de los delincuentes lo distrae, el otro o los otros roban sus pertenencias o se llevan el vehículo directamente. Las estaciones de servicio y las zonas de peaje también son puntos críticos.

Los robos en el parking, se producen porque es un lugar grande y normalmente poco vigilado, en donde el conductor suele relajar las medidas de seguridad como dejar cosas de valor a la vista. El problema añadido es demostrar qué se guardaba en el coche y qué fue sustraído ya que sin esa prueba no hay reclamación ni indemnización posible, a pesar de que el responsable es el establecimiento en el que se encuentra el coche, debido a la figura jurídica de la “guardia y custodia”. Algunos aparcamientos colocan carteles o imprimen en sus tickets sentencias en las que se eximen de responsabilidad en caso de robo o daños a los vehículos o los objetos del interior. Estas cláusulas son abusivas y no tienen ninguna validez legal. Desde el momento en el que se deja el coche en el aparcamiento se formaliza un contrato por el que éste es el encargado de custodiar debidamente el coche hasta que se retira. Cualquier cosa que le pase mientras tanto, es responsabilidad suya. Aun así, para luego formalizar la denuncia es necesario el ticket del aparcamiento ya que hace las veces de comprobante. En caso de robo, el parking tiene obligación de presentar una denuncia y entregar una copia de la misma al perjudicado. Además, las compañías de seguros suelen obligar al perjudicado para que denuncie por su cuenta, lo que incluye presentar una reclamación contra el parking para la indemnización.

Otro tipo de incidencia es el robo de alguna pieza o parte exterior del coche como un espejo retrovisor o una rueda, normalmente se suelen sustraer la rueda de repuesto. También hay que contabilizar los desperfectos que ocasionan este tipo de robos que suelen ser incluso mayores que lo robado como lunas rotas o puertas forzadas. Existe también una diferencia importante entre hurto y robo, ya que si no existe fuerza en las cosas como cuando se sustraer algo porque se han dejado las puertas abiertas o las llaves puestas, entonces ya no se considera robo sino hurto. Si para llevarse un radiocasete se rompe el cristal para acceder al coche entonces será un robo. Pero si las puertas del coche estaban abiertas, y el "caco" solamente tiene que entrar, ver, y llevárselo, hablaremos de hurto.

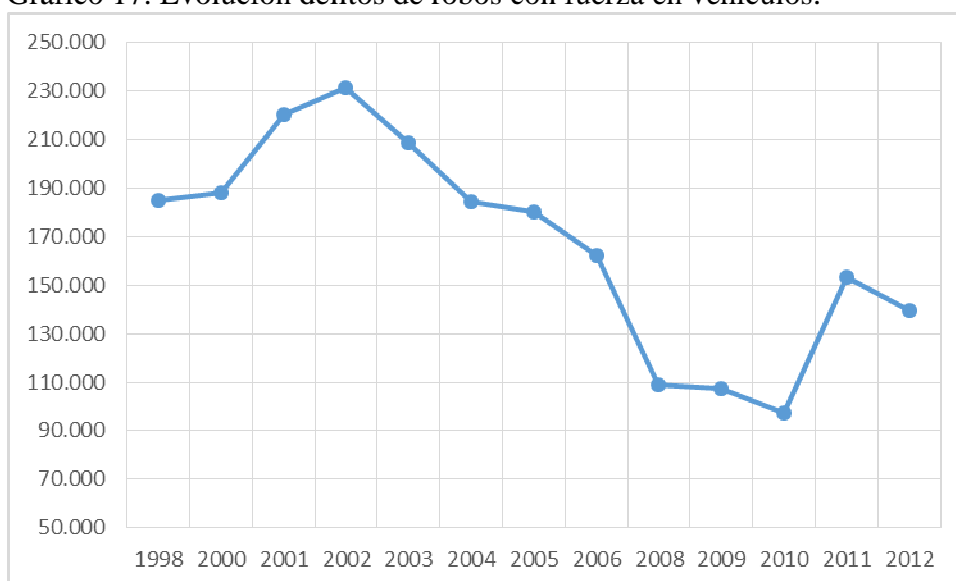
Este tipo de delincuencia se suele denunciar en un grado muy alto por la obligación que imponen las compañías de seguros para hacerse cargo del robo.

“Un joven de 28 años, que acumula más de veinte detenciones por delitos contra la propiedad, ha ingresado en prisión por orden del juez tras haber sido detenido en Albacete acusado de los robos cometidos en garajes de esta ciudad en los últimos meses. El detenido aprovechaba la apertura o cierre de puertas automáticas

para introducirse en el aparcamiento, donde fracturaba el cristal triangular de la puerta trasera del vehículo para abrir y registrar el coche. En otras ocasiones, sin embargo, entraba en el garaje aprovechando que la puerta permanecía abierta por avería o defectos mecánicos. Los efectos sustraídos en los vehículos los utilizaba el detenido para adquirir cocaína. Hace tres años, antes de ingresar en prisión para cumplir condena, también fue detenido varias veces por robos en vehículos dentro de garajes o en la vía pública, especialmente en el entorno del Hospital General de Albacete”. Diario ABC, 28 de febrero de 2012.

De acuerdo al gráfico y cuadro de abajo, este tipo de delito ha disminuido en 14 años, 45.476 casos, lo que representa un 25,22 por ciento menos. La evolución presenta una subida desde el inicio hasta el 2002 de 46.662 casos, lo que representa el 12,52 por ciento, a partir de entonces una bajada hasta 2010 de 134.463 casos, o sea un 41,94 por ciento menos, y una fuerte subida en el 2011 de 56.101 casos, es decir, el 63,39 por ciento, y vuelta a bajar en el 2012.

Gráfico 17. Evolución delitos de robos con fuerza en vehículos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 38. Evolución delitos de robos con fuerza en las cosas en vehículos.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012
184.959	188.027	220.597	231.621	208.788	184.381	180.089	162.474	108.939	107.465	97.158	153.259	139.483

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

6.6. Delitos económicos y fraude empresarial

Con la crisis económica y el cierre de empresas, el fraude empresarial ha ido en aumento: el entorno económico, la presión por resultados, el enriquecimiento o la venganza a costa de la empresa, la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores inciden en su origen. De acuerdo a la encuesta sobre delitos económicos llevada a cabo por Pricewaterhouse Coopers²²³ en el ejercicio 2009, con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados la mayoría de las economías mundiales se encontraban inmersas en una importante crisis económica que ha afectado a numerosos sectores de actividad. Con respecto a España, un 74,5% de los participantes han declarado haber sufrido un deterioro en los estados financieros de sus respectivas empresas, frente a un 25,5% que declara que se ha mantenido igual o que sus resultados han mejorado. En momentos de crisis económica, como en la que actualmente estamos inmersos, determinados agentes ven como sus motivaciones y presiones para cometer fraude se incrementan. De hecho, según los resultados de la Encuesta, un 34,5% de los encuestados ha declarado que en sus respectivas compañías se había sufrido al menos un tipo de fraude económico a lo largo de los últimos 12 meses.

A este respecto, si analizamos el incremento de delitos económicos en los últimos 12 meses, el 52,6% de los participantes españoles, ha declarado que el número de delitos económicos se ha incrementado respecto al año anterior, frente al 39,6% en Europa y un 43% a nivel global. Por tanto, los primeros datos de la Encuesta indican que la correlación entre la crisis económica y los delitos económicos sufridos por las compañías españolas es mayor en España, que en el resto de países participantes. A pesar de que en el 52,6% de los casos ha habido un incremento en el número de incidencias en los últimos 12 meses, la opinión de los encuestados está dividida, mientras un 50,9% de los encuestados españoles no perciben la correlación entre el riesgo de sufrir fraude y el entorno de crisis financiera que actualmente vivimos, un 49,1% considera que la crisis económica ha aumentado el riesgo de fraude. Una primera lectura de estos datos nos lleva a reflexionar sobre la percepción del fraude corporativo ya que a pesar de que los delitos económicos han sufrido un incremento en los últimos 12 meses, los directivos españoles no perciben el riesgo. Este hecho, sin lugar a dudas, va a influir en la forma en la que los directivos van a gestionar sus recursos para luchar contra el fraude en las empresas, pudiendo disminuir los recursos dedicados a la vigilancia sobre los controles de fraude.

²²³ Pricewaterhouse Coopers (2012). Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España. https://www.pwc.es/en_ES/es/servicios/forensic-services/assets/informe-delitos.pdf

Los resultados de la encuesta, muestran además que un 34,5% de los participantes en España han declarado haber sufrido algún tipo de delito económico en los últimos 12 meses. De estos, más de una tercera parte indicó que había sido objeto de algún caso de apropiación indebida de activos. Este tipo de fraude es el más habitual también a nivel global, ya que abarca una amplia gama de delitos menores y, si bien es el más complicado de prevenir, es el más sencillo de detectar. Los incentivos y presiones para cometer delitos económicos han aumentado, siendo los principales el “Mantenimiento del resultado económico” de las compañías y la “Consecución de los objetivos”. En este sentido, se puede observar una conexión evidente entre las presiones anteriormente descritas y algunos de los fraudes más habituales, entre los que podemos destacar la “manipulación contable”, la “obtención fraudulenta de financiación e indirectamente el “soborno y corrupción”. El caso de la “apropiación indebida de activos” (el más frecuente), es dónde los directivos españoles consideran que “mantener el estilo de vida” es uno de los principales motivadores de los defraudadores, y en esta época de crisis económica, este aspecto, se puede ver incrementado.

Siguiendo con el estudio, durante una crisis económica, los incentivos y las presiones sobre los perpetradores son mayores. En algunos casos una necesidad, personal, de tesorería o la necesidad imperiosa de conseguir alcanzar unos determinados resultados empresariales, incrementan los incentivos del perpetrador a cometer algún tipo de delito económico. En el caso de la Encuesta, el 68% opina que existen más incentivos o presiones de cara a cometer fraude que en el pasado. Lamentablemente la crisis económica, lleva acarreadas una serie de consecuencias que pueden inducir a cometer delitos económicos. Tal y como han declarado los directivos españoles, las acciones que suponen un incremento del riesgo de fraude son las siguientes:

- (i) La disminución de los recursos humanos disponibles y la focalización de los mismos hacia las áreas que los ejecutivos consideran más relevantes para la supervivencia empresarial conlleva la reducción de recursos internos en la lucha contra los delitos económicos;
- (ii) La falta de recursos económicos que conlleva la reducción de algunos gastos que no están directamente ligados a la generación del negocio de la sociedad, afectando fundamentalmente a la inversión en el fortalecimiento de los controles y sistemas informáticos y;
- (iii) La dificultad de obtener buenos resultados económicos, obstaculiza tanto el cumplimiento de los objetivos marcados por la compañía matriz como la consecución de la parte variable de la retribución.

En un informe de la misma compañía²²⁴ llevado a cabo en 2014, se sostenía como rasgos sobresalientes del fraude empresarial, que en la actual crisis económica y el incremento del peso de la tecnología en la economía han implicado una persistencia en el delito económico en prácticamente todas las industrias y regiones, dado que, a pesar del incremento (i) del esfuerzo regulatorio, (ii) de las medidas de lucha contra el fraude que están tomando las organizaciones y (iii) del esfuerzo que están realizando los profesionales contra el fraude, el delito económico persiste en prácticamente todas las industrias y regiones. En términos generales, el número de delitos económicos sufridos en España se ha incrementado respecto a la anterior encuesta. En concreto, un 40% de los participantes españoles ha indicado haber sufrido más de 10 delitos económicos en su organización, frente al 20% de la Encuesta del 2011. Es decir, el número de organizaciones que han sufrido más de 10 delitos económicos en España se ha duplicado respecto a la Encuesta realizada en 2011. Por otro lado, a nivel global, las organizaciones que han sufrido más de 10 delitos económicos han pasado de representar un 31,8% en la Encuesta de 2011 a un 38,9% en la de 2014.

En los últimos años este tipo de delito en su versión internacional ha alcanzado un gran impacto en la opinión pública como pone de manifiesto un informe de la Fiscalía General del Estado²²⁵ de 2012, en donde se destaca en los últimos años el esfuerzo desplegado para la desarticulación y persecución de los integrantes y directivos de organizaciones criminales. La creciente implicación en la lucha contra la criminalidad organizada arraiga en el criterio asentado en la Instrucción 4/2006, de 12 de julio, donde ya se afirmaba con la debida rotundidad que la lucha del Ministerio Fiscal contra la delincuencia organizada económica y relacionada con la corrupción debía ser ajustada al mantenimiento del orden económico definido en los artículos 38 y 128 de la Constitución Española y la real efectividad de los principios rectores de la Administración Pública establecidos en su artículo 103. La necesidad de combatir a las organizaciones criminales presenta un sesgo especialmente urgente cuando se trata de redes de corte mafioso que extienden sus tentáculos criminales a nuestro territorio nacional. En el año 2011 ha adquirido notoriedad, por ejemplo, la detección de importantes actividades de blanqueo de capitales desarrolladas en España por extensiones de la Camorra –como el caso del clan Nuvoletta seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 6–, así como por diversas mafias rusas –como caso «Izmailovskaya» en el Juzgado Central de Instrucción n.º 4,

²²⁴ Pricewaterhouse Coopers (2014). Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial en España. http://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/encuesta-fraude-economico-2014.pdf

²²⁵ Fiscalía General del Estado (2013). Informe 2012. Pág. XXX).

organización que ha revelado un extenso control de la producción mundial de aluminio, níquel y materiales ferrosos²²⁶.

²²⁶ Fiscalía General del Estado (2012). Anuario 2011. Pág. XXX.

Capítulo 7. Delitos contra la libertad, la libertad sexual y las relaciones familiares.

Esta figura delictiva tal como está clasificada presenta cierta confusión que nace no de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, sino del código penal de 1995 al incluir dos epígrafes con el mismo adjetivo: el Título VI del libro II que se denomina como “delitos contra la libertad” y que incluye -de las detenciones ilegales y secuestros, -de las amenazas, y -de las coacciones; y el Título VIII denominado “delitos contra la libertad e indemnidad sexuales” que incluye -de las agresiones sexuales, -de los abusos, -del acoso, -del exhibicionismo, -de la prostitución y corrupción de menores. El Código Penal dedica el capítulo I de este apartado al denominado delito de agresión sexual, delito enmarcado entre los delitos contra la libertad sexual. La agresión sexual en sus distintas modalidades viene definida por el legislador como un atentado contra la libertad sexual de una persona usando de violencia o intimidación. En este título, integrado por seis capítulos, se recogen las conductas tipificadas como delito, tales como las agresiones sexuales, entendiéndose por tales, el ataque contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación.

Mientras que en el capítulo II se recoge la figura de los abusos sexuales, consistentes en los actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual, pero sin violencia o intimidación y sin consentimiento, debiendo tener presente que se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años o sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. De tal configuración deriva de modo inmediato la afirmación de que el bien jurídico protegido por esta figura delictiva es la libertad sexual, esto es, la capacidad de determinarse por propia iniciativa en el ámbito de la sexualidad. Sujetos activo o pasivo del delito pueden serlo cualquiera, hombre o mujer, pues cualquiera puede atentar contra la libertad sexual de otro, y cualquiera puede ser víctima de ese atentado, sin perjuicio de que para la concurrencia de determinadas circunstancias de las enunciadas, es preciso se dé en el sujeto activo o pasivo una determinada cualificación, o que en determinadas modalidades de agresiones -la penetración anal o bucal- se exija la condición de hombre en el agresor. Consecuentemente, la agresión sexual comprende cualquier tipo de ataque a la libertad sexual, realizado con violencia o intimidación, salvo los consistentes en el acceso carnal. En todo caso, la acción ejecutada ha de tener un claro contenido sexual y exigirá en la mayor parte de las acciones un contacto físico íntimo entre agresor y agredido.

Por su parte, intimidación es equivalente a constreñimiento psicológico provocado por una amenaza grave de un mal injusto. Violencia e intimidación han de estar en relación de causa a efecto con el acto sexual. La violencia o intimidación pueden ser ejercidas por el sujeto activo o un

tercero, bastando que el sujeto use de aquélla para obtener el fin perseguido, el acto sexual contra la voluntad de la víctima. Desde el punto de vista subjetivo, todo abuso sexual el doloso, requiriendo el dolo que el sujeto quiera atentar contra la libertad sexual de la víctima, realizando cualquiera de las acciones típicas y que la violencia o intimidación ejercida vayan a dicho fin. Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación». Esta circunstancia agravatoria incide sobre la vulnerabilidad del sujeto pasivo, esto es, sobre la sensible disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, sobre sus dificultades objetivas para oponerse al designio del agresor sexual. Será aplicable en cualquier situación en que la víctima se encuentre en manifiesta desventaja respecto del agresor y éste conociéndola se aproveche de ella.

“El día 7 de enero del año 2006, sobre las 08:10 horas, cuando una mujer de 40 años de edad cruzaba la pasarela existente sobre los muelles de la Estación de RENFE de Salamanca para dirigirse a su trabajo, fue abordada a traición por un individuo que la agarró, amenazándola con pegarle un tiro ante su resistencia, y la condujo hasta un descampado situado detrás de las viviendas de la empresa ferroviaria, donde a pesar de la oposición de la víctima, a la que golpeaba en la cara para evitar que se girara y poder verlo, consumó por la fuerza el acto sexual.

7.1. Delitos contra la sexualidad

Aunque existe una variedad muy grande de delitos dentro de este apartado, la mayor parte de ellos están referidos a las relaciones sexuales. Los abusos sexuales, consisten en los actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual, pero sin violencia o intimidación y sin consentimiento, debiendo tener presente que se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecutan sobre menores de trece años o sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. De tal configuración deriva de modo inmediato la afirmación de que el bien jurídico protegido por esta figura delictiva es la libertad sexual, esto es, la capacidad de determinarse por propia iniciativa en el ámbito de la sexualidad. Sujetos activo o pasivo del delito pueden serlo cualquiera, hombre o mujer, pues cualquiera puede atentar contra la libertad sexual de otro, y cualquiera puede ser víctima de ese atentado, sin perjuicio de que para la concurrencia de determinadas circunstancias sea preciso que se produzca en el sujeto activo o pasivo una determinada cualificación, o que en determinadas modalidades de agresiones -la penetración anal o bucal- se exija la condición de hombre en el agresor. Consecuentemente, la agresión sexual comprende cualquier tipo de ataque a la libertad sexual, realizado

con violencia o intimidación, salvo los consistentes en el acceso carnal. En todo caso, la acción ejecutada ha de tener un claro contenido sexual y exigirá en la mayor parte de las acciones un contacto físico íntimo entre agresor y agredido.

Por su parte, intimidación es equivalente a constreñimiento psicológico provocado por una amenaza grave de un mal injusto. Violencia e intimidación han de estar en relación de causa a efecto con el acto sexual. La violencia o intimidación pueden ser ejercidas por el sujeto activo o un tercero, bastando que el sujeto use de aquélla para obtener el fin perseguido, el acto sexual contra la voluntad de la víctima. Desde el punto de vista subjetivo, todo abuso sexual doloso requiere que el sujeto quiera atentar contra la libertad sexual de la víctima, realizando cualquiera de las acciones típicas y que la violencia o intimidación ejercida vayan a dicho fin, cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. Esta circunstancia agravatoria incide sobre la vulnerabilidad del sujeto pasivo, esto es, sobre la sensible disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, sobre sus dificultades objetivas para oponerse al designio del agresor sexual. Será aplicable en cualquier situación en que la víctima se encuentre en manifiesta desventaja respecto del agresor y éste conociéndola se aproveche de ella.

Dentro de este tipo de delitos ha cobrado actualidad el que se comete utilizando drogas de sumisión química que provocan que la víctima esté expuesta a que sus agresores empleen con ella una violencia extrema anulando cualquier capacidad de respuesta o defensa, El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses²²⁷ ha detectado en los últimos años un notable incremento del uso por parte de los delincuentes de drogas que provocan pérdida o disminución de memoria, lo que aprovechan para perpetrar agresiones sexuales. Las sustancias psicoactivas son utilizadas para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento con fines delictivos. En estas situaciones los efectos farmacológicos de la sustancia administrada evitan que la víctima se encuentre en condiciones de prestar su consentimiento legal o de presentar resistencia a su atacante. Normalmente, se proporcionan de forma subrepticia, lo que puede disminuir la capacidad de la víctima para identificar una situación peligrosa o para resistirse a la agresión. El paso del tiempo desde la agresión hasta la

²²⁷ El Instituto Nacional de Toxicología es el laboratorio de referencia para todos los Institutos de Medicina Legal de España, que forman parte de la red de atención urgente a las víctimas de agresiones sexuales en coordinación con la red asistencial hospitalaria y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esto permite la investigación toxicológica de todas las pruebas realizadas en delitos contra la libertad sexual y, por lo tanto, la posibilidad de determinar si ha existido «sumisión química».

denuncia es decisivo para determinar los tóxicos utilizados, ya que estas sustancias poseen una acción rápida y de corta duración, que rápidamente son eliminadas del organismo.

Son escasas las denuncias que se presentan de agresiones sexuales debido a la pérdida o disminución de memoria, derivada de las drogas que les fueron administradas por los agresores. Provocan desinhibición, que constituye una ventaja para el agresor en el curso de la agresión sexual, ya que la víctima puede aceptar situaciones que hubiera considerado intolerables en un estado de consciencia normal²²⁸. En concreto, se estima que las denuncias no llegan al 20 por ciento de las que realmente suceden. Sólo en la Comunidad de Madrid un grupo de especialistas estudiaron 306 casos sospechosos ocurridos entre los años 2010 a 2012 y se concluyó que en 107 de ellos las mujeres habrían sido víctimas de sumisión química. La sumisión química se introdujo en el año 2010 en el Código Penal, dentro del apartado de abusos sexuales, artículo 181.2. Sin embargo, no se tipificaron como agravante el uso de sedantes con fin sexual. Por lo tanto, estos casos no están incluidos entre las agresiones sexuales, como una violación, sino en el apartado de los abusos sexuales.

7.2 La homosexualidad

La homosexualidad definida como una relación entre personas del mismo género masculino o femenino, es una de las categorías consideradas en otros tiempos como delito, o en todo caso como conducta desviada y reprobable, que más ha cambiado con el acontecer de la historia. Semipermitida en algunas formas y bajo algunas condiciones en las civilizaciones Griega y Romana pasó a estar proscrita en el cristianismo dado que chocaba contra la reproducción natural. Estuvo prohibida y perseguida en el nazismo dado que era considerada como inferior y un defecto genético que constituía una serie amenaza para la raza pura. En España su feroz persecución coincidió con el franquismo que la tildó como “violeta” recogiendo como delito en la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954: “A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que viven de la mendicidad”. En 1967, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, la incluía entre los delitos de conducta antisociales que radicaban más en conductas genéricas que en hechos concretos y que se manifestaban con cierta frecuencia: homosexualidad, uso de drogas y delincuencia juvenil. Más tarde en 1970 se les incluyó en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que sustituyó a la anterior ley para el control de todos elementos considerados antisociales, y peligrosos por el Régimen, y por la que se trataba de curar o rehabilitar a la enfermedad de la

²²⁸ Angelines Cruz-Landeira A. et alt. (2008). Sumisión química: epidemiología y claves para su diagnóstico. Medicina Clínica. Vol. 131. Nº 20.

homosexualidad. Esta ley fue complementada con otras disposiciones que la etiquetaban como de “escándalo público, artículos 431-433 del código penal de 1973. Ni el indulto de 1975 ni la amnistía de 1976 incluyeron a los homosexuales que habían sido detenidos anteriormente. La Transición introdujo todos los cambios necesarios en 1979 para derogar la primera ley, mientras que la segunda disposición lo fue en 1980. Pasos necesarios e imprescindibles para legalizarla y para su plena incorporación a la sociedad, hasta el punto de que en el año 2005 España fue el tercer país del mundo después de Holanda y Bélgica en legalizar el matrimonio homosexual.

7.3. La violación en las relaciones de pareja

Los delitos contra la libertad sexual en el seno de la familia son muy difíciles de contabilizar. La violación sexual dentro del matrimonio es un aspecto novedoso que ha ido surgiendo en los últimos años vinculado a la liberación de la mujer y constituye una pieza más dentro de la violencia de género, aunque no figura como delito en muchos países porque se enmascara dentro de la relaciones a que se comprometen las consortes. En Polonia, Lituania, Hungría o Estonia, por ejemplo, este tipo de violaciones quedan impunes. Las legislaciones de estos países no definen como delito explícito las agresiones sexuales dentro del matrimonio. Ello a pesar de que desde organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa e haya llamado a nivel internacional a penalizar de manera clara la violación dentro de una relación de pareja pero, en la Unión Europea, siete de los 28 Estados miembros no lo han hecho. Además, solo nueve de 20 países que lo firmaron han ratificado el Convenio de Estambul, también conocido como convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que habla claramente sobre este tipo de violencia sexual. De acuerdo a Organización Mundial de la Salud, un 25% de las mujeres con pareja ha sufrido alguna vez abusos sexuales por parte de su compañero.

Una encuesta de la European Union Agency for Fundamental Rights²²⁹ basada en una muestra de 42.000 personas de 28 países de la Unión Europea sobre experiencias sobre violencia física y mental, incluyendo incidentes de violencia íntima de pareja, mostró recientemente que una de cada cuatro mujeres había pasado por esa situación. La falta de datos sobre estas agresiones, alerta el Instituto Europeo de Igualdad de Género, invisibiliza el problema. La falta de concreción en la tipificación del delito no implica que no se pueda perseguir al violador si está casado, por ejemplo, con la víctima, pero sí provoca lagunas legales que fomentan que pueda quedar impune en un 99% de los casos tanto porque el nivel de denuncia es sólo de un 20% de

²²⁹ European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: a EU-wide survey. [Fra.europa.eu](http://fra.europa.eu).

las agresiones; como porque después solo se condena entre el 1% y el 5%, según diferentes investigaciones. Las principales causas que suelen declarar en las encuestas las mujeres suelen ser la demostración de la virilidad por parte del marido y la embriaguez.

En España, el Código Penal no menciona explícitamente la violación conyugal, aunque la ley contra la violencia de género sí incluye los atentados contra la libertad sexual. Pese a esto, denunciarlo no es fácil para las mujeres porque todavía denunciar las relaciones sexuales forzadas es un gran tabú. Tampoco en los países con leyes proteccionistas como Francia, donde el Gobierno y una ONG pusieron en marcha una campaña en 2013 para sacar a la luz este delito, es sencillo lograr condenas. Hay sentencias que hablan de “lesiones propias del juego amoroso” o que se refieren a “por la obligación de fidelidad”, o por una relación de sometimiento habitual; no a una violación. El último informe de ONU²³⁰, que analiza los sistemas que penalizan la violencia contra la mujer indica que se han producido algunos avances en la última década en el reconocimiento de la violación conyugal como delito. Turquía, por ejemplo, lo ha tipificado en su código penal; Costa Rica, Etiopía, Perú, Guatemala o Uruguay han derogado las leyes que permitían al violador evitar la pena si se casaba con la víctima. Sin embargo, en otros países, la situación todavía es crítica. En India, por ejemplo, conforme a una ley de 2013, una relación sexual en el ámbito de la pareja solo podría considerarse violación si la esposa es menor de 15 años.

7.4. La prostitución

La prostitución es otra variación de moralidad pública cuyas líneas de legalidad no están claramente establecidas. Considerada por algunos como la profesión más antigua del mundo ha pervivido hasta nuestros días, constituyendo dentro de los negocios opacos el que más recursos económicos mueve en la sombra por encima del negocio de armas o de drogas. Según estimaciones del INE, esta actividad supone en nuestro país el 0,35 por ciento del PIB anual, lo que equivale a 3.783 millones de euros en el año 2010. En España no está considerada como delito, aunque sí algunas actividades que giran en torno a ella como el proxenetismo (lucrarse de la prostitución de terceras personas) y la trata con el propósito de explotación sexual. La prostitución en España se encuentra en una situación de 'ilegalidad', es decir, no es legal ni ilegal y su ejercicio es libre y como tal no está penado. El ejercicio de la prostitución no es un delito ni tampoco la compra de servicios sexuales. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo y su consumo cuando éste se solicite y se disfrute, según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015. Las sanciones para esta falta grave se

²³⁰ UN Women (2015). Progress of the world's women 2015-2016. Transforming economies, realizing rights. UN Women. New York.

establecen en multas de entre 601 y 30.000 euros. Algunos municipios o comunidades autónomas siguiendo criterios sanitarios, urbanísticos, de seguridad vial o de orden público, en su intención de erradicarlos han publicado ordenanzas municipales que impiden su ejercicio en determinadas zonas públicas "en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial" o "en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial". Como informa la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres en 2011, el 99% de la demanda por prostitución es masculina.

De acuerdo a la Unión Europea²³¹ existirían 23.632 víctimas de trata en los 27 países comunitarios entre los años 2008 y 2010, con un crecimiento del 18% en ese periodo. El dato resulta aún más impactante si se considera que el 61% eran europeos de pleno derecho, la mayoría mujeres explotadas sexualmente. España es el segundo país con más casos registrados en 2010, año en el que los datos son más fiables. El 61% de los casos detectados reflejan explotación sexual, que afecta particularmente a la mujer. Si a ese porcentaje se le añade el 12% constituido por niñas, la incidencia de esos delitos en el género femenino sube a ocho de cada 10 casos. El informe atribuye el problema a la pobreza, la falta de cultura democrática y a la desigualdad de género, y a la floreciente industria del sexo y la consiguiente demanda de servicios sexuales. Según cálculos de la policía, dado que están prohibidos los burdeles, existirían unos 1.500 locales donde se practica la prostitución, sin incluir los pisos de citas. El tráfico y la trata están, en muchas ocasiones, bajo el control de redes mafiosas de carácter internacional, que comercian y trafican con mujeres, secuestradas o engañadas, del mismo modo que pueden hacerlo con drogas, armas o cualquier otro producto que permita obtener grandes y rápidas cantidades de dinero. Las mujeres víctimas de estas mafias son captadas en sus países de origen aprovechando su situación personal, generalmente caracterizada por carencia de recursos económicos, desempleo, bajos niveles educativos y dificultades para poder emigrar de forma regular, utilizando para ello diferentes procedimientos engañosos tales como la inserción en los medios de comunicación locales, de anuncios con ofertas de empleo falsas (normalmente para trabajar en el sector hostelero o doméstico), o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos, que trabajan para la organización²³².

España firmó en el año 2008 el Convenio Europeo contra la Trata de Personas, poniendo en marcha el I Plan Integral contra la Trata de Seres

²³¹ Comisión Europea (2012). Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012 – 2016). Bruselas, 19.6.2012. COM(2012) 286 final

²³² Ministerio de Igualdad. Madrid (2010). Plan integral contra la trata de seres humanos. Madrid. Ministerio de Igualdad Secretaría General.

Humanos con Fines de Explotación sexual. En el año 2010 se dio un paso muy importante legislativamente en la lucha contra la trata ya que se modificó el código penal para realizar una distinción muy clara entre trata de seres humanos e inmigración ilegal. Se trata de dos delitos bien diferentes que antes de esta reforma se encontraban confundidos. Asimismo, la modificación del artículo 59 de la Ley de Extranjería, incorporó el derecho de las víctimas en situación administrativa irregular a un periodo de restablecimiento y reflexión que les permita evaluar su posible colaboración con la justicia aportando información. En octubre de 2011, el gobierno español ratificó el Protocolo Marco de las Víctimas de Trata. Este acuerdo establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas con las debidas garantías, y facilita su asistencia y protección abordando de forma integral las distintas etapas del proceso. Asimismo establece los mecanismos necesarios para la coordinación entre todos los agentes institucionales, así como los agentes sociales²³³. Según el Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos del 2013, se habían realizado 462 operaciones que se saldaron con 1.450 detenidos y 11.751 víctimas potenciales detectadas. Asimismo, se mantuvieron 3.379 contactos con organizaciones no gubernamentales e instituciones, que acogieron a 774 víctimas; se produjeron 963 actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo en el ámbito de la explotación sexual, y se intervinieron 29 millones de euros fruto de las investigaciones patrimoniales llevadas a cabo. El Ministerio del Interior ha subrayado la importancia de la solidaridad ciudadana, fruto de la cual se pudieron liberar a 44 víctimas de trata y detener a 56 personas. Cabe señalar que con la puesta en marcha del Plan se activaron la línea telefónica 900 105 090 y el email trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana. Asimismo, en el periodo 2012-2014, las unidades de la Guardia Civil desarrollaron 217 operaciones, deteniendo a 534 personas y liberando a más de 1.200 víctimas y desde el punto de vista de la prevención, se llevaron a cabo 3.754 inspecciones en lugares en los que se ejercía la prostitución, identificando a 32.687 personas en situación de riesgo²³⁴.

La cuestión de la prostitución, y dentro de ella la cuestión de la igualdad de género, es un tema complicado como se puede comprobar en la coexistencia de los dos modelos básicos y enfrentados que tienen vigencia en Europa. El primero considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres y un medio para perpetuar la desigualdad de género. El enfoque legislativo que le sustenta es claramente abolicionista y penaliza las actividades relacionadas con la prostitución, a veces incluyendo la

²³³ Scelles A. (2014). La situación de la prostitución en España. YoungPeople against prostitution and human trafficking: the greatest violence against human beings. Vatican City. <http://www.globalfreedomnetwork.org/scelles-torres>.

²³⁴ Policía Nacional. Comunicado de prensa. Lunes 27 de Julio de 2015. http://www.policia.es/prensa/20150209_1.html

compra de servicios sexuales, mientras que la prostitución en sí misma no es ilegal. El segundo modelo sostiene que la prostitución mejora la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo. Quienes proponen este modelo afirman que la prostitución es solo otra forma de trabajo y que la mejor manera de proteger a las mujeres que ejercen la prostitución es mejorar sus condiciones laborales y profesionalizar la prostitución considerándola como un empleo sexual. En consecuencia, dentro de este modelo que podría denominarse como regulacionista, la prostitución y las actividades relacionadas con ella, son legales y están legalmente establecidas por lo que las mujeres son libres de contratar personal auxiliar de ayuda y apoyo, también conocidos como proxenetas. Sin embargo, puede considerarse que hacer de la prostitución y el proxenetismo actividades normales, o legalizarlas de algún modo, es legalizar la esclavitud sexual y la desigualdad de género para las mujeres. Las dos concepciones de la prostitución como hemos dicho rigen en la Unión Europea.

El proxenetismo es legal en algunos Estados miembros entre los que se encuentran Holanda, Bélgica, Alemania, Austria y Dinamarca, mientras que se penaliza o se penaliza parcialmente a las personas que ejercen la prostitución o algunas de sus actividades (como el ofrecimiento de servicios) en el Reino Unido, Francia y la República de Irlanda, y España. Sin embargo, de acuerdo al Parlamento Europeo, la desigualdad de género y la subordinación sexual no pueden combatirse eficazmente si se asume una simetría de género que no existe en las actividades de la industria del sexo. Allí donde la prostitución y el proxenetismo son legales existe un número creciente de pruebas que demuestran las carencias de este sistema. En 2007, el Gobierno alemán admitió que la ley de legalización de la prostitución no había reducido la delincuencia y más de un tercio de los fiscales alemanes señalaron que la legalización de la prostitución ha complicado su labor de perseguir la trata de seres humanos y el proxenetismo. Teniendo en cuenta que la legalización de la prostitución y el proxenetismo no contribuyen en manera alguna a la promoción de la igualdad de género o a reducir la trata de personas, la diferencia esencial entre los dos modelos estriba en que la percepción de la prostitución como un empleo que contribuye a que las mujeres se mantengan en dicha actividad. Considerar la prostitución como una violación de los derechos humanos de las mujeres contribuye a evitar que las mujeres caigan en ella²³⁵.

Para la Fiscalía de Pontevedra²³⁶ los clubes de alterne, que aumentaron en gran número en los últimos años, esconden un submundo de inmigración ilegal y, en la mayoría de las ocasiones, la comisión de delitos de

²³⁵ Parlamento Europeo (2014). Sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Ponente Mary Honeyball.

²³⁶ FGE (2006). Op. Cit.

coacciones, amenazas y actos de violencia sobre las extranjeras dedicadas a la prostitución. Las denuncias y los procedimientos seguidos por la actuación de la policía terminan en sentencias de distinto signo bien porque las víctimas desaparecen sin que puedan ser encontradas, bien por las retractaciones a la hora de declarar en el juicio oral o en la instrucción. Gran cantidad de estas conductas delictivas no son denunciadas por miedo de las víctimas a represalias o a ser expulsadas por encontrarse en situación de ilegalidad. Las mujeres son reclutadas generalmente en origen aprovechándose de la situación de precariedad económica en que se encuentran. Tales acciones son llevadas a cabo a través de un intermediario que les ofrece ganar de forma rápida y legal gran cantidad de dinero en un puesto de trabajo ofertado por un español. Estas mujeres nunca saben qué cantidad de dinero tendrán que devolver hasta que se encuentran trabajando como prostitutas. Forzosamente tienen que mantenerse en la prostitución en condiciones deplorables hasta el pago de la cantidad debida por el pasaje y otros gastos, siempre muy elevados, por la amenaza que pesa sobre ellas del peligro que corren si no cumplen con el pago de la totalidad de la deuda. Por otra parte están sometidas a un control exhaustivo por parte de los dueños o encargados de los locales dedicados a la prostitución, hasta el punto de que apenas gozan de libertad. Se puede decir que estas organizaciones tienen todas las características de las mafias por la jerarquización de las mismas, donde cada uno cumple un determinado rol claro y preciso.

La Fiscalía de Palencia²³⁷ informa que en los llamados «clubes de alterne», trabajan, generalmente ciudadanas sudamericanas, rusas, ucranianas, nigerianas y de otros países del área subsahariana. Las investigaciones que se han realizado por la Brigada de Extranjería y Documentación por posibles coacciones, aprovechamiento o favorecimiento de la prostitución por parte de los responsables de los establecimientos, tropiezan con el silencio y la negativa de las víctimas de estas conductas delictivas a formular denuncias contra aquellos ante el miedo a represalias, no sólo en cuanto a ellas mismas, sino en cuanto a los familiares que dejan en sus países de origen, cuya seguridad no puede ser garantizada.

En 2009 (datos extraídos del informe de evaluación del primer año de cumplimiento del Plan integral contra la trata con fines de explotación sexual) el número de mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual detectadas fue de 1301, de ellas, el 50% se encontraban en situación administrativa irregular. Por otro lado, el número de víctimas de trata y/o explotación sexual, menores de edad, fue 13. Como se apunta anteriormente, los datos oficiales sobre casos de trata y/o explotación sexual (base de datos del CICO) se limita al registro de las actuaciones policiales.

²³⁷ FGE (2006). Op. Cit.

Estas menores han recibido atención especializada de tipo psicológica, sanitaria, social, así como asesoramiento jurídico.

7.5. Delitos sexuales contra menores.

La pedofilia es la atracción sexual de una persona adulta hacia niños de un mismo o distinto sexo, consistente en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. Mientras que la pederastia es el abuso sexual deshonesto de un adulto sobre un niño. Según la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual de niñas y niños consiste en la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringen las leyes o los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la otra persona. El rango de los conductas sexualmente inapropiados va desde varias formas de acoso sexual y de conductas de no contacto sexual como las llamadas telefónicas obscenas y el voyerismo, hasta distintos grados de agresión sexual que conllevan contacto directo sexual, incluyendo frotamientos, rozamientos, penetración con los dedos o el pene, fellatio, sodomización y otros actos sexuales agresivos. Una forma de agresión sexual que se está haciendo cada vez más visible es el acoso sexual entre niños, que comporta una inclinación sexual no deseada dirigida a otros niños y adolescentes. El acoso sexual niño sobre niño se ha convertido en algo evidente en nuestras escuelas, en donde algunas investigaciones revelan que hasta un 50% de los niños de primaria y secundaria han sufrido algún tipo de acoso sexual. Éste suele ser descubierto en el entorno escolar y suele ser más frecuente el acoso entre estudiantes que no entre adulto-estudiante. Se sabe que los niños víctimas de experiencias de acoso experimentan una serie de efectos emocionales y comportamentales.

Dentro de la delincuencia que utiliza la pornografía como modo de ataque al menor son más numerosos los delitos que se ejecutan como distribución o tenencia de material pornográfico que como uso del menor con tales fines. El diagnóstico de abuso sexual de niñas y niños casi siempre es un difícil desafío para el médico forense porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o una persona muy allegada. Según datos de la policía, el 70% de las agresiones sexuales conllevaban penetración y/o conducta genital-oral; un 35% de penetración vaginal o anal sin contacto genital oral; un 14,7% contacto oral-genital; y un 18% de penetración y contacto oral-genital. Los diferentes estudios de la población de jóvenes que abusan

sexualmente de otros indican que las agresiones sexuales más comunes son mimos o “libertades indecentes” en un 40-60%; violación y/o sodomización en un 20-40%; agresiones sexuales sin contacto en un 5-10%. La media de un joven agresor es ser menor de 18 años y haber cometido 8-9 agresiones sexuales sobre una media de 4-7 víctimas. Mientras que los adolescentes normalmente usan la coacción en el proceso de cometer agresiones sexuales, son menos propensos a dañar físicamente a sus víctimas que los agresores adultos. La coacción se expresa normalmente como soborno, intimidación, amenazas de daño o lesión violenta, fuerza física, y rara vez el uso de un arma. Sin embargo, se sabe que las víctimas informan de mayores niveles de coacción y fuerza que la que relatan los propios agresores. Hasta un 22% de los agresores continúan con los actos sexuales agresivos incluso cuando las víctimas expresan “daño o miedo”. Una de las características más importante de esta figura delictiva es que por afectar a aspectos muy personales e íntimos de las personas que los sufren, frecuentemente no son denunciados.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entró a formar parte de la agenda política internacional tras el I Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual de la Infancia (ESI) celebrado en Estocolmo (Suecia) en 1996. El principal objetivo del Congreso fue visualizar el problema y obtener el compromiso global de los Estados para combatirlo. En su Declaración Programa de Acción la ESI quedó definida del siguiente modo: “La explotación sexual comercial es una violación fundamental de los derechos de la niñez. Ésta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño o niña es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra los niños y niñas, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud. Esta primera definición de explotación sexual comercial ha sufrido algunas modificaciones dado que el término comercial no parecía el más adecuado, puesto que no abarca algunas manifestaciones de la explotación sexual infantil, concretamente las imágenes de abuso sexual en Internet cuyos fines no siempre son comerciales.

Por esta razón, cuando en 2001 se celebró en Yokohama (Japón) el II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de la Infancia se acordó suprimir el término “comercial” y en sus conclusiones se utilizó el término Explotación Sexual Infantil. La explotación sexual de la infancia y la adolescencia es una grave vulneración de los derechos contra la infancia ante todo porque atenta contra la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. En todas sus formas constituyen delitos que producen daños en el desarrollo de los niños y niñas víctimas –físicos, psicológicos y sociales. Según la INTERPOL, son manifestaciones extremas y degradantes del abuso de poder sobre niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son tratadas

como objetos sexuales y como mercancías. La magnitud real de la explotación sexual infantil presenta un evidente subregistro resultado de una baja denuncia, de la naturaleza clandestina e ilegal de los delitos asociados a la explotación sexual. El desarrollo y facilidad de acceso a las nuevas tecnologías facilita la producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil facilitando la naturaleza transfronteriza de estos delitos así como la impunidad en la explotación sexual del turismo. Todo ello dificulta la identificación y la atención integral de las víctimas²³⁸.

En España este serio problema provocó adoptar un compromiso en el I Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial infantil, celebrado en Estocolmo en 1996, de luchar contra este tipo de explotación, lo que se fue traduciendo en diferentes propuestas de protocolos de actuación, ratificación de convenios y apoyo a ONGs implicadas en el tema. Así se creó El Observatorio de la Infancia, por Acuerdo del Consejo de Ministros en el año 1999 adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siendo una plataforma de participación de todos los agentes sociales interesados en el tema en sus diferentes entornos, tanto desde las distintas administraciones públicas como en las asociaciones de infancia.

Además, España, ratificó del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000, publicado en el BOE de enero del año 2002 (pág. 3917). Según éste, por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; mientras que por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Por su parte, el recientemente ratificado Convenio de Lanzarote entiende por “pornografía infantil”, todo material que represente de forma visual a un niño o niña manteniendo una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño o niña con fines sexuales.

En este contexto, en España se han impulsado numerosas publicaciones²³⁹, así como importantes desarrollo como el Primer Plan de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia y la Adolescencia (Observatorio de la Infancia) a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos

²³⁸ INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), Informe de Actividades de INTERPOL 2007, disponible en <http://www.interpol.int/Public/ICPO/InterpolAtWork/iaw2007ES.pdf> (03/09/2008).

²³⁹ Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (Observación general n.º 13 de 2011). Defensor del Pueblo (en sus documentos «Menores o adultos. Procedimientos para la determinación de la edad» de 2011 y «La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles» de 2012). Fiscalía General del Estado (en sus Circulares 8/2011, de 16 de noviembre, y 1/2012. Comisión Especial del Senado de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines (2010).

Sociales (2002-2005), en el que se enmarcaban distintos objetivos, propuestas y acciones de las diferentes entidades públicas y privadas, necesarias para luchar contra esta problemática. A partir de aquí se han llevado a cabo un Segundo (2006-2009) y un Tercer Plan (2010-2013) de actuación. Precisamente, el segundo Plan destacaba que “entre las distintas maneras de explotación sexual infantil se pueden destacar dos: la pornografía y la prostitución infantil, además de otros medios utilizados por los mayores, como el tráfico de niños y niñas con fines sexuales, la explotación sexual comercial en los viajes y los matrimonios precoces. Estas formas y medios de explotación sexual infantil correlacionan entre sí con frecuencia y son consideradas como actos delictivos. Entre las conclusiones que se plantean en el II Plan se podía constatar cómo la coacción a la prostitución a menores afectaba principalmente a niñas entre 15 y 17 años, mientras que la pornografía infantil incidía tanto a niñas como a niños, especialmente a los menores de 13 años²⁴⁰. Entre los temas abordados en el III Plan destaca todo lo relacionado con la “trata de menores”. Un niño, niña o adolescente es víctima de trata cuando es captado/a, transportado/a, trasladado/a, acogido/a o recibido/a con fines de explotación desde dentro o fuera de un país; exista o no coacción, intimidación o engaño, uso de violencia, abuso de una situación de superioridad de necesidad o de vulnerabilidad. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual pueden ser utilizados en relaciones sexuales remuneradas, en la elaboración de imágenes u otros materiales de abuso sexual infantil, o, en matrimonios serviles. El auge de estas prácticas hace imprescindible un análisis de la demanda desde un enfoque de género y de derechos de la infancia que permita diseñar adecuadas estrategias de prevención²⁴¹.

Atendiendo a la correspondencia de este problema con el código penal, hay que destacar las numerosas modificaciones que ha sufrido, nada menos que cinco en algunos artículos con respecto a la ley original de 1995. Entre ellas cabe mencionar la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, donde se introdujeron importantes incrementos de las penas, así como nuevos tipos delictivos tales como la posesión para el propio uso del material pornográfico en el que se ha utilizado menores o incapaces y la denominada pornografía infantil virtual, consistente en producir, vender, distribuir, exhibir o facilitar por cualquier medio material pornográfico en el que se ha empleado la voz o imagen, alterada o modificada, de menores o incapaces, aunque éstos no hayan sido utilizados directamente.

²⁴⁰ II Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia. http://www.meetingmadridleuropedelenfance.es/images/ficheros/IIPlan_contra_ESI.PDF. Cit. III plan, pág. 22

²⁴¹ III Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia (2010-2013).

Más tarde, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio de 2010, introdujo importantes cambios promovidos por la necesidad de trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Dado que como se sostiene en el preámbulo de la ley, resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidos sobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante las mismas se lesiona no sólo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, sino también la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor. Por ello se procede a la incorporación, en el Título VIII del Libro II el Capítulo II bis denominado «De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años». Por otra parte, la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevo artículo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado «child grooming», previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

Además se incrementó significativamente la protección otorgada a los menores de edad, mejorando técnicamente la regulación de las agresiones y abusos sexuales cometidos sobre menores de 13 años, con la penalización de forma expresa de la conducta del cliente de prostitución tanto de menores como de incapaces y se crearon modalidades agravadas en los delitos de prostitución para el caso de que la víctima fuera menor de trece años. Se ampliaron las conductas típicas en los delitos relativos a la pornografía infantil. Se establecieron dos nuevas consecuencias penales para los delitos sexuales, por un lado, los condenados por estos delitos podrán ser sometidos a la medida de seguridad y libertad vigilada cuando tras la ejecución de la pena privativa de libertad subsista un pronóstico objetivo de peligrosidad. Se establece la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de prostitución y corrupción de menores.

Otro tema relevante abordado en esa importantísima reforma del código penal llevada a cabo en el año 2010 fue la relativa al delito de comercio de seres humanos, dado que se incorporó un nuevo Título, el VII bis, dentro del Libro II, con un único artículo el 177 bis, denominado “De la Trata de Seres Humanos”, en el que el bien jurídico protegido es la libertad y la dignidad. Este delito abarcó todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o transnacionales, relacionados o no con la delincuencia organizada, recogiendo expresamente que las penas previstas por este delito se impondrán con independencia de los delitos efectivamente cometidos. Así,

se establece que “será castigado con la pena de 5 a 8 años de prisión, como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad²⁴²”.

A esta reforma le siguió la del 2015, la que introduce por su parte modificaciones en los delitos contra la libertad sexual para llevar a cabo la transposición de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Como novedad más importante, se eleva la edad del consentimiento sexual a los dieciséis años, dado que la Directiva define la edad de consentimiento sexual como la edad por debajo de la cual, de conformidad con el derecho nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor. En ese momento, la edad prevista en el código penal era de trece años, y resultaba muy inferior a la de los restantes países europeos –donde la edad mínima se sitúa en torno a los quince o dieciséis años– y una de las más bajas del mundo. Por ello, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño sugirió una reforma del código penal español para elevar la edad del consentimiento sexual, adecuándose a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y así mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil.

De esta manera, la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años es considerada, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. En el caso de los menores de edad –de menos de dieciocho años– pero mayores de dieciséis años, constituirá abuso sexual la realización de actos sexuales interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima. Por otra parte, se tipifica expresamente la conducta de hacer presenciar a un menor de dieciséis años actos o abusos sexuales sobre otras personas y se prevé la imposición, en estos casos, de penas de hasta tres años de prisión. En los delitos contra la prostitución, se establece una separación más nítida entre los comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En este segundo caso, se elevan las penas previstas con el fin de armonizar las legislaciones europeas, y se introducen nuevas agravantes para combatir los supuestos más lesivos de prostitución infantil. Además se establece el deber de toda persona que tuviera noticia de un hecho que pudiera constituir un delito de este tipo de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

²⁴² Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Otra innovación es la modificación del artículo 177 que recoge expresamente los pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control de la víctima, es decir se prohíbe el denominado turismo sexual. Incluyendo además un apartado, el e, sobre la celebración de matrimonios forzados. Se modifica el artículo 187 con el objetivo de perseguir con mayor eficacia a quien se lucre de la explotación de la prostitución ajena. En relación con la pornografía infantil, se castigan los actos de producción y difusión, e incluso la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También se castiga el mero uso o la adquisición de pornografía infantil, y se incluye un nuevo apartado para sancionar a quien acceda a sabiendas a este tipo de pornografía por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. La protección de los menores frente a los abusos cometidos a través de internet u otros medios de telecomunicación, debido a la facilidad de acceso y el anonimato que proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el artículo 183 ter del Código Penal destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de quince años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas²⁴³. El embaucamiento de menores con fines sexuales constituye una amenaza con características específicas en el contexto de Internet, ya que este medio ofrece un anonimato sin precedentes a los usuarios puesto que pueden ocultar su identidad y sus circunstancias personales, tales como la edad.

Se crea el Registro Central de Delincentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN. Se lleva a cabo una reforma de las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Entre otras medidas, se definen a nivel estatal las situaciones de riesgo y desamparo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados.

Los Cuerpos de Seguridad del Estado señalan que el consumidor de pornografía infantil no responde a un perfil determinado. Prácticamente en su totalidad son hombres, en su mayoría jóvenes o adultos menores de 50

²⁴³Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

años (aunque también hay casos de adolescentes y mayores de 50 años), con cualquier grado de nivel cultural (desde elemental hasta universitario), y cualquier actividad laboral (desde docentes, directivos, profesionales, oficinistas, estudiantes). Su nivel de conocimiento informático generalmente es a nivel de usuario, raramente se hallan auténticos “hackers”. Tanto los estudios internacionales como los hallazgos en España, señalan que, las motivaciones de estas personas para descargar pornografía infantil, son variadas, desde la curiosidad, el interés por imágenes impactantes hasta los auténticos pedófilos con una atracción sexual hacia los niños. Todavía no se ha determinado científicamente si la exposición permanente a este tipo de imágenes puede aumentar el riesgo futuro a la comisión de delitos sexuales contra menores, aunque es un tema que está siendo estudiado en muchos países.

La información general que se tiene sobre los casos conocidos de explotación sexual infantil en España procede de la Base de Datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Estos datos se refieren a las denuncias efectuadas a la policía y las investigaciones realizadas por esta institución, que dispone de recursos especializados en los asuntos que afectan a los y las menores como son el Grupo de Menores de la Policía Judicial (GRUME) y el Equipo del Menor y la Familia (EMUME) de la Guardia Civil. Con respecto a los casos registrados de pornografía infantil y tráfico de imágenes en internet, la Dirección General de la Policía cuenta con la Brigada de Delitos de Nuevas Tecnologías, dotada por personal cualificado y medios adecuados para la detección, investigación y persecución contra la pornografía infantil. Igualmente la Guardia Civil dispone de un Departamento especializado en delitos informáticos.

A continuación se recogen datos suministrados por el Ministerio de Interior relacionados con los delitos vinculados a la Explotación Sexual Infantil: La evolución de los hechos conocidos por los diferentes delitos vinculados a la explotación sexual, queda reflejada en la siguiente tabla:

Cuadro 39. Evolución de delitos contra menores.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Corrupción de menores o incapacitados	59	93	112	157	161	201	255	272	268	305	253	278	320	386
Pornografía de menores	77	87	84	157	337	392	677	1.197	1.159	877	715	569	508	625

Fuente: III plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia 2010-2013. Pág. 36

Cuadro 40. Delitos contra menores por edades.

	2006	2007	2008	2009
Menores de 14 años	111	152	100	106

Corrupción de menores/ incapacitados	De 14 a 15 años	59	75	60	77
	De 16 a 17 años	56	63	47	45
	Total menores	226	290	207	228
Pornografía de menores	Menores de 14 años	123	209	227	206
	De 14 a 15 años	32	56	61	82
	De 16 a 17 años	26	33	42	32
	Total menores	181	298	330	320
Adopción ilegal	Menores de 14 años	3	8	9	1
	Total menores	3	8	9	1
Total		410	596	546	549

Fuente: III plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia 2010-2013. Pág. 36

7.6. Las relaciones familiares:

La familia es un bien jurídico muy importante para el funcionamiento de una sociedad porque a través de las diferentes funciones básicas que se la encomiendan se articula la sociedad. Es el primer grupo humano al que se pertenece, creando vínculos afectivos y de responsabilidad que duran toda la vida, estando presente en todas las fases de lo considerado como humanidad y de todas las latitudes del mundo bajo una forma u otra. Por eso es tan esencial su protección y defensa. La familia es el último de los apartados que se incluye en este epígrafe, incluye el Título XII denominado “delitos contra las relaciones familiares” que agrupa toda una problemática abarcando artículos 217-233, que regulan aspectos importantes como los matrimonios ilegales, la paternidad, sustracción de menores, el abandono de la familia, el impago de pensiones, el abandono de menores o el uso de éstos para la mendicidad. Las figuras delictivas que se agrupan en esta rúbrica se pueden dividir en dos grandes grupos²⁴⁴: por un lado, las que atacan a las bases legales de la familia, a través de las cuales el individuo se integra en la misma (matrimonio, filiación) y, por otro, el incumplimiento de las expectativas y deberes de asistencia que incumben recíprocamente a los miembros integrados en la esfera familiar, muy especialmente a los más necesitados de protección, que suelen ser los menores. El primer grupo recoge delitos que se producen muy escasamente, tales como el matrimonio ilegal, la suposición de parto o la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Así lo confirman las algo más de 300 diligencias incoadas por el ministerio fiscal en el año 2012 o las nueve causas que fueron sentenciadas. La cuestión de los matrimonios ilegales ha cobrado en los últimos años especial incidencia como problemática derivada de las oleadas de inmigrantes llegados a España al socaire de un clima de bonanza económica; sin embargo, la problemática jurídica ha venido teniendo mayor reflejo en el ámbito del registro civil y muy limitado en el penal, donde incoaciones y calificaciones siguen siendo escasas y anecdóticas.

²⁴⁴ FGE (2013). Op. Cit. Pág. 602.

El otro grupo aglutina conductas que son formas diversas y acoge, pero al incluir el pago de pensiones, artículo 227, incluye con diferencia, el mayor número de incoaciones y calificaciones. Los más de 38.000 delitos recogidos en diligencias previas y urgentes del segundo grupo contrastan con los poco más de 120 que se producen en el primero; de este limitado conjunto solo se derivan 17 delitos calificados y 8 sentenciados, mientras que se cuentan por miles los delitos calificados y sentenciados en los ámbitos de protección²⁴⁵. En el caso del pago de pensiones el incluir la pena de prisión ha sido criticado al ir contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1962 que dice “nadie será encarcelado por el mero hecho de no cumplir una obligación contractual”. Una norma jurídica tiene como finalidad evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del pagador, adoptándose una especial protección hacia los hijos menores y facilitar la obtención de las cantidades adeudadas.

En el año 2008, el Gobierno puso en marcha el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para ayudar a las madres o padres separados o divorciados que tengan a su cargo hijos y que no reciban del otro cónyuge la pensión que estableció la justicia. La cantidad de 10 millones de euros con que se dotó este fondo e consideró como una cantidad ínfima de beneficiarios si se compara con las decenas de miles de sentencias judiciales por impago de pensión de alimentos que se incumplen anualmente en España y, en consecuencia, de las decenas de miles de hijos afectados por esa situación. Esa ayuda pública es de 100 euros mensuales por hijo durante un tiempo máximo de 18 meses, ya sea de forma continua o discontinua.

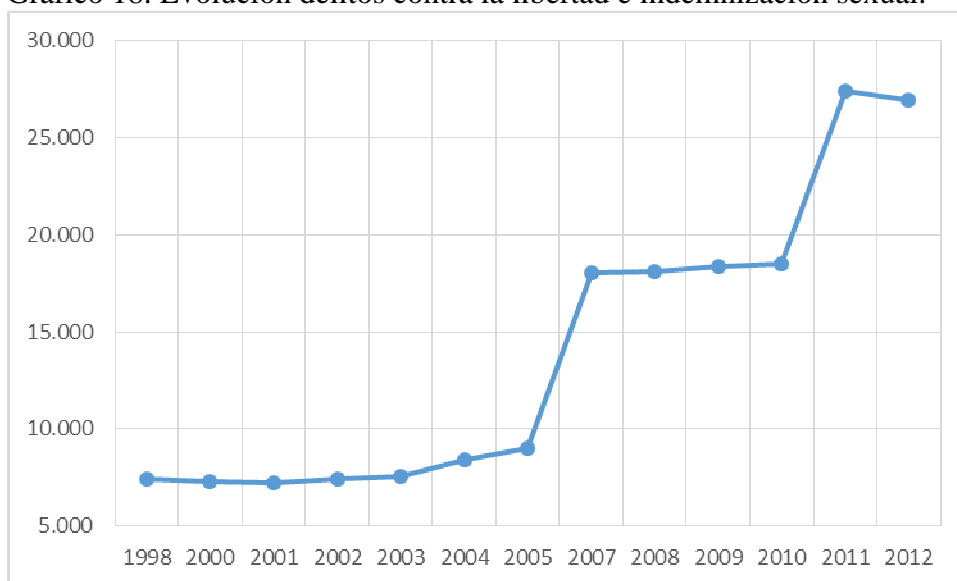
Para poder acceder a ella este año se exige que los ingresos del hogar del progenitor no superen 1,5 veces la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, 9.489 euros al año. Ese coeficiente aumenta en un 0,25 por cada hijo. Es decir, el mínimo es 9.489 euros (1,5 veces el indicador) si se trata de un hijo; 11.070,5 euros cuando la pensión debe cubrir los gastos de dos hijos; 12.652 euros para tres, y así sucesivamente, aumentando la cantidad en 1.581,5 euros anuales por cada hijo. El fondo de garantía del pago de alimentos se creó por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 (Ley 42/2006) y su gestión se atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

De acuerdo a la serie histórica reflejada en el gráfico y cuadros de abajo, hay que destacar la fuerte subida que se produce del año 2005 al 2007. Si se contempla la serie desde el inicio hasta el final, el número de casos ha aumentado en 19.535 delitos, es decir, el 275 por ciento. Desde el 2005 al 2007, el incremento fue de 9.047 casos, lo que representó el 49,90 por ciento. El hecho es que desde el año 2005 no ha hecho más que aumentar con excepción de una ligera bajada en el último año de 484 casos, el 7,11

²⁴⁵ FGE (2014). Op.cit. Pág. 655.

por ciento. En cuanto a la relación de hechos conocidos y esclarecidos, en el año 2012, la diferencia en los delitos contra la libertad fue de 8.618 casos representado un elevada cifra de esclarecimientos, el 81 por ciento, en los malos tratos en el ámbito familiar la diferencia fue de 3.409 casos, es decir, de nuevo el 81 por ciento, y en el “otros contra la libertad”, la diferencia fue de 5.209 casos, de nuevo el 81 por ciento de casos esclarecidos.

Gráfico 18. Evolución delitos contra la libertad e indemnización sexual.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 41. Evolución delitos contra la libertad e indemnización sexual.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
7.418	7.276	7.237	7.423	7.548	8.379	9.011	18.058	18.141	18.353	18.535	27.437	26.953

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Como se puede apreciar en el cuadro de abajo los delitos más numerosos son los de “otros contra la libertad”, los cuales engloban una serie de delitos relacionados con aspectos familiares.

Cuadro 42. Evolución delitos conocidos contra la libertad, libertad sexual y relaciones familiares.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. Contra Libertad	31.907	31.950	31.938	45.131	44.476	43.322
Malos tratos hab. ámbito familiar	13.766	13.597	13.403	17.694	17.523	16.676

Otros contra la libertad	18.141	18.353	18.535	27.437	26.953	26.646
III. Libertad Sexual	9.837	8.976	8.364	9.892	9.008	8.923
Agresión sexual con penetración	1.386	1.304	1.177	1.513	1.280	1.298
Corrupción de menores o incapacitados	284	268	305	253	278	320
Pornografía de menores	1.251	1.159	877	715	569	508
Otros contra la libertad/indemnidad sexual	6.916	6.245	6.005	7.411	6.881	6.797
IV. Relaciones Familiares	5.628	6.043	6.096	9.087	10.424	10.331

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

La casuística de este tipo de delitos va desde la agresión sexual hasta la pornografía de menores. En el anuario del año 2006, cuadro de abajo, se detuvieron a 4.886 hombres y 292 mujeres, lo que da una clara idea de que este tipo de delincuencia está discriminado por género.

Cuadro 43. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Anuario2006.

	CONOCIDOS			%	DETENCIONES		
	Total	Consumados	tentativa		Total	Hombres	Mujeres
AGRESION SEXUAL	2.468	2.354	114	69,65	1.430	1.407	23
AGRESION SEXUAL	1.481	1.480	1	77,13	975	964	11
ABUSO SEXUAL	2.182	2.156	26	76,95	1.161	1.146	15
ABUSO SEXUAL	258	258	0	84,38	170	170	0
ACOSO SEXUAL C	409	406	3	78,66	134	133	1
EXHIBICIONISMO	644	644	0	71,52	335	326	9
PROVOCACIÓN SEX	73	73	0	56,16	16	16	0
CORRUPCIÓN MENO	206	204	2	81,10	165	142	23
COACCIÓN LUCRO PROSTITUCIO Y	395	395	0	92,91	548	349	199
PORNOGRAFIA DE MENORES	406	406	0	68,88	244	233	11
TOTAL	8.522	8.376	146	75,09	5.178	4.886	292

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Según informa la Fiscalía General del Estado, en este tipo de delito fue esencia la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a partir de cuya entrada en vigor un fenómeno oculto durante siglos tras el velo de la intimidad y la reserva familiar ha sido expuesto en toda su gravedad a la luz del Derecho. El constante incremento de los casi 40.000 procedimientos incoados en la segunda mitad de 2005 por esta clase de delitos hasta los cerca de 120.000 en 2005 no muestra tanto el crecimiento real de los actos de violencia sobre la mujer como el reflejo estadístico y la respuesta penal a un fenómeno antes oculto o lo sumo escondido en las cifras de los juicios de faltas. Se ha necesitado un gran esfuerzo por parte del Ministerio Fiscal para atender a la creación y puesta en marcha de una jurisdicción especializada y de una reacción legal efectiva

que hoy, solo siete años después, ha llegado a constituir para la sociedad española una herramienta asimilada e incluso irrenunciable en la lucha contra la discriminación por razón de sexo²⁴⁶

²⁴⁶ Fiscalía General del Estado. Memoria 2010. Pág. XIV-XV.

Capítulo 8. La Delincuencia contra la seguridad colectiva.

Esta categoría es probablemente una de las que más artículos penales concita y la que requiere mayor actualización. Una primera reforma ya se produjo en el nuevo Código Penal de 1995 que regulaba en el Título XVII del Libro II, bajo la rúbrica de «Delitos contra la seguridad colectiva», una serie de infracciones caracterizables como delitos de peligro en general. Por peligro se entendía la probabilidad de que se produjera la lesión o menoscabo de un bien jurídico. Abarcaba este título los artículos 341 a 385. El nuevo título mejoraba notablemente lo que en el Código anterior era un único y heterogéneo capítulo «de los delitos de riesgo en general» (arts. 340. bis.a-348.b del C.P. de 1973), al reunir este grupo de delitos bajo la nueva denominación. Englobando cuatro capítulos, el primero «de los delitos de riesgo catastrófico», con una Sección 1.^a donde se tipifican los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, una Sección 2.^a, de los estragos, y una Sección 3.^a, de otros delitos de riesgo provocado por otros agentes. El capítulo segundo recogía los delitos del incendio en general, forestales, zonas no forestales e incendios en bienes propios. El capítulo tercero tipificaba los delitos contra la salud pública, y el último capítulo, los delitos contra la seguridad del tráfico. El bien jurídico protegido en estos delitos era la seguridad colectiva, por lo que los ámbitos típicos se referían no al riesgo para individuos concretos, sino para la colectividad, y ello con independencia de que la comisión del delito concreto pudiera o no crear peligro efectivo o bien sólo para unos pocos.

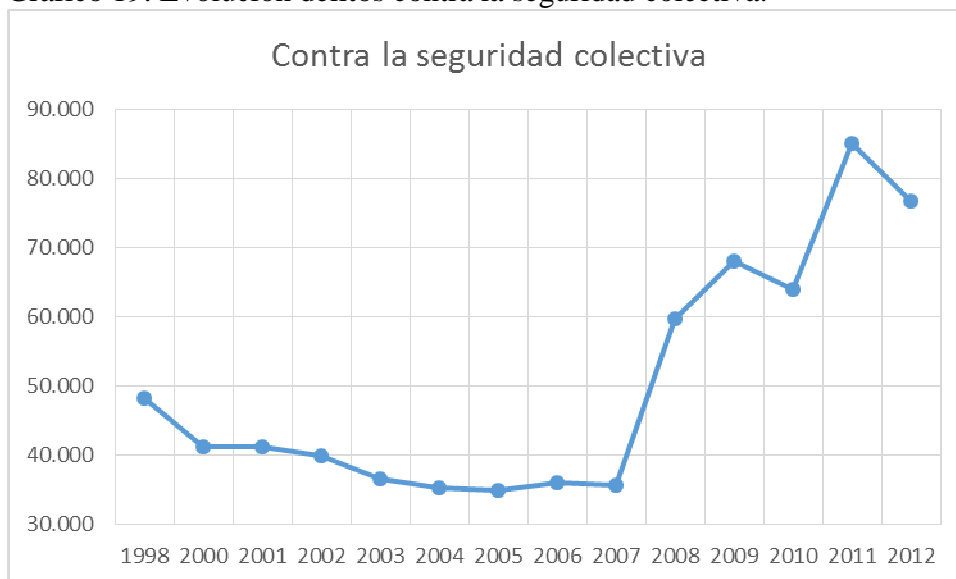
La reforma del último código penal intenta prevenir resultados lesivos para ciertos bienes jurídicos, resultados que la estadística demuestra en un alto porcentaje que se ocasionan cuando se desarrolla la conducta tipificada. La nota diferenciadora de estos tipos penales es, pues, la ausencia de un resultado material de lesión a un bien jurídico, y la existencia de un riesgo o contingencia inmediata de que se produzca un mal. El auténtico objetivo de los tipos de peligro es la prevención de situaciones objetivamente peligrosas. Unas veces el código penal exige que se dé la situación peligrosa para los bienes jurídicos individuales (delitos de peligro concreto), otras veces sólo exige que se realice la conducta prevista como peligrosa, aunque no se dé la situación de peligro (peligro en abstracto).

La distinción entre peligro concreto y peligro abstracto tiene su importancia, ya que mientras en los primeros, además de realizarse la conducta prevista como peligrosa, es necesario que se demuestre la existencia del peligro, en los segundos basta con la realización de la conducta en sí, sin que se precise la constatación del peligro para considerarse delictiva. En ambos tipos, la conducta peligrosa se lleva a cabo normalmente de forma dolosa, y sólo si el legislador prevé expresamente la realización imprudente de hechos, ésta puede ser objeto de sanción penal. En los delitos de peligro abstracto, el dolo debe abarcar la realización de la

conducta peligrosa en el momento de su realización, mientras que debe preverse la modalidad peligrosa sin pleno conocimiento ni volición respecto de los elementos que la integran. En cambio, en los delitos de peligro concreto, la comisión dolosa requiere conocimiento y volición de la situación de peligro concreto que se crea (V. delitos de riesgo catastrófico; incendios; delitos contra la salud pública; delitos contra la seguridad del tráfico).

La serie histórica de este delito muestra, gráfico y cuadro de abajo, una bajada continuada desde 1998 hasta 2007 y un fuerte aumento a partir de entonces que alcanzó la cota más alta en el año 2011 y una ligera caída en el 2012. Si comparamos el momento inicial y el final de la serie el incremento es de 28.486 caos, o sea un 59,13 por ciento. El momento de más subida entre los años 2007-2008, el incremento fue de 23.964 delitos, es decir, el 67,04 por ciento más. En el año 2012 los delitos contra la seguridad colectiva fueron esclarecidos en un 95 por ciento, es decir, solo quedaron sin resolver 4.272 delitos de 76.654. El delito del tráfico de drogas fue resuelto en el 96 por ciento de los casos y solo quedaron pendientes 589 casos.

Gráfico 19. Evolución delitos contra la seguridad colectiva.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 44. Evolución delitos contra la seguridad colectiva.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
48.168	41.265	41.201	39.921	36.611	35.339	34.879	35.965	35.743	59.707	67.997	63.960	85.010	76.654

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 45. Evolución delitos conocidos y esclarecidos contra la seguridad colectiva.

	HECHOS CONOCIDOS						HECHOS ESCLARECIDOS					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VI. Seguridad Colectiva	35.743	59.707	67.997	63.960	85.010	76.654	32.373	54.398	63.558	59.510	80.297	72.382
Tráfico de drogas	12.574	12.800	12.852	12.948	15.220	14.509	11.958	11.829	12.000	11.658	14.583	13.920
Contra la seguridad vial.	20.365	44.208	52.171	48.491	67.374	59.634	18.395	40.619	49.288	45.977	64.012	56.652
Otros seguridad colectiva	2.804	2.699	2.974	2.521	2.416	2.511	2.020	1.950	2.270	1.875	1.702	1.810

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Una tipología más extensa que la anterior muestra algunas categorías por su importancia en el cuadro de abajo, en donde destaca los dos relacionados con las drogas y la seguridad de tráfico. Por todos ellos se detuvieron en ese año a 32.028 hombres y 3.725 mujeres, de nuevo un delito discriminado claramente por género ya que los hombres representaron el 90 por ciento de las detenciones.

Cuadro 46. Delitos contra la seguridad colectiva

	CONOCIDOS			Esclar.	DETENCIONES		
	Total	Consumados	Tentativa		Total	Hombres	Mujeres
riesgo, estragos y otros	65	65	0	68,29	22	22	0
incendio	834	826	8	39,93	219	201	18
incendios forestales	857	850	7	77,78	190	173	17
tráfico de drogas	11.363	11.346	17	97,52	17.601	14.765	2.836
otros contra la salud pública	1.721	1.710	11	96,07	2.033	1.810	223
conducc. bajo influenc. drogas i alcohol	16.698	16.698	0	99,95	12.839	12.334	505
negativa sometimiento a pruebas legales	1.172	1.172	0	100,43	987	937	50
conducción temeraria	1.540	1.539	1	94,67	888	861	27
otros contra la seguridad del tráfico	1.715	1.712	3	96,86	1.249	1.200	49
total	35.965	35.918	47	96,57	36.028	32.303	3.725

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

8.1. Los incendios forestales:

Aunque los incendios forestales son un elemento presente desde siempre en los montes españoles, es a partir de 1973 cuando empezaron a representar un serio problema dado que las superficies afectadas por ellos crecieron de manera extensiva y vertiginosa. La permanencia en el tiempo de estas prácticas así como su progresivo aumento en magnitud, plantearon la necesidad de intensificar las medidas de planificación específica para este tipo de riesgo. Un Plan Básico de Lucha Contra Incendios Forestales y normas complementarias fue aprobado por la Orden del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1982 y denominado Plan INFO-82, constituyendo la norma básica para la elaboración de los Planes correspondientes al riesgo

de incendios forestales, en relación con la articulación de medidas de coordinación preventiva y operativa. Las Comunidades Autónomas, ejerciendo las funciones en materia de conservación de la naturaleza que les fueron transferidas, han realizado los Planes INFO correspondientes a su ámbito territorial. Esta planificación se ha llevado a cabo siguiendo en líneas generales las pautas marcadas en el Plan INFO-82 y en la legislación específica de incendios forestales, adaptándolo en cada caso a la diferente organización que adoptó cada Comunidad.

Desde el Plan INFO 82, se sostiene que los incendios forestales constituyen un grave problema, tanto por los daños que ocasionan de modo inmediato en las personas y bienes, como por la grave repercusión que tiene la destrucción de extensas masas forestales sobre el medio ambiente, lo que contribuye a degradar las condiciones básicas para asegurar la necesaria calidad de vida a la población. La permanencia en el tiempo y el progresivo incremento del problema han provocado un importantísimo impacto sobre la masa forestal, en términos tales que nos podemos encontrar ante un fenómeno de recesión total de la misma al haberse roto el equilibrio entre la superficie forestal recuperada y la afectada por el fuego. La situación, continúa el Plan INFO-82, requiere una intensificación de la política de lucha contra los incendios forestales, en términos tales que no sólo permita controlar el problema a su natural escala, sino erradicarlo, por un lado, y por otro, algo tan sustancialmente importante como el poder operar con eficacia frente a las causas que originan los incendios forestales.

Las circunstancias que concurren en los incendios forestales, como factores capaces de originar situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública quedan recogidos posteriormente en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, haciendo necesario el empleo coordinado de los recursos y medios pertenecientes a las distintas administraciones públicas e incluso a los particulares. Como se dicta en la Ley, la extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y naturales que han de ser movilizados para hacerles frente convierten a la protección civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de organización. Dicha organización corresponde al Estado principalmente, por cuanto constituye una competencia de protección de personas y bienes integrada en el área de la seguridad pública.

Posteriormente, el Consejo de Ministros adoptó a propuesta del Ministro del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, el Acuerdo por el que se aprobó la Directriz Básica de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. La citada Directriz, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, determina en su artículo 6 que los riesgos por incendios forestales serán objeto de planes especiales, y que debe ser objeto de un conocimiento general a efectos de aplicación de su contenido para lograr la consecución de los importantes objetivos y finalidades que

persigue. Además recoge el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la que se reconoce la concurrencia de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado, señalando que, si bien las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de protección civil, esta competencia se encuentra con determinados límites que derivan de la existencia de un posible interés nacional o supra autonómico. Esta sentencia permite ya diseñar y perfilar el modelo nacional de protección civil y establecer los criterios comunes mínimos para la elaboración de los Planes.

Para dar una idea de esta figura delictiva, baste mencionar que los incendios costaron en el año 2010 once vidas humanas, nueve de las cuales corresponden a personal dedicado a las labores de extinción de incendios forestales, y han afectado a más de 76.000 hectáreas de diferentes Comunidades Autónomas. Un ejemplo de las consecuencias de este delito es el incendio originado en la provincia de Guadalajara la tarde del sábado 16 de julio de 2010 que causó la pérdida de 11 vidas humanas, además de arrasar más de 12.000 hectáreas de masa forestal y pasto. Los fuegos, en algunos casos, han afectado a la seguridad de las personas y sus bienes, ya que se han producido en zonas muy próximas a núcleos urbanos y viviendas en el ámbito rural, que, en ocasiones, han obligado a su desalojo. En otros casos, han llegado a afectar a importantes vías de comunicación. Los incendios se han declarado a lo largo de todo el territorio, pero han tenido especial repercusión en algunas comunidades autónomas: en Cataluña, principalmente en Tarragona; en Andalucía, especialmente en Almería y Granada; en Aragón, sobre todo en Zaragoza y Teruel; en la Comunidad de Madrid; en Castilla-La Mancha, en especial relevancia los de Cuenca y Guadalajara; en Castilla y León, en Ávila; en Extremadura, en Cáceres; en la Comunidad Valenciana, en Castellón.

Puesto que las circunstancias que determinan la coyuntura de alto riesgo en la que se encuentra España no hacen sino agravarse día a día, y podrían prolongar sus efectos durante las estaciones de verano y parte del otoño, el Gobierno ha considerado conveniente, atendiendo a razones de emergencia y en aras de la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente, establecer un conjunto de medidas mínimas que vienen a recoger en parte algunas experiencias autonómicas y locales desarrolladas y contrastadas en los últimos años. Por ello, el Real Decreto-ley mencionado prevé expresamente la compatibilidad de las medidas que las comunidades autónomas hubiesen adoptado o decidieran adoptar en el futuro con el fin de asegurar un mayor grado de protección frente a los incendios y sus consecuencias. Para este fin se establecen dos tipos de previsiones normativas: un catálogo de prohibiciones muy severas, que se proyecta sobre todas las actividades que pudieran entrañar algún riesgo para la producción de incendios; y un modelo orgánico-funcional de coordinación entre los departamentos ministeriales de la Administración del Estado, de un lado, y las comunidades autónomas, de otro, que se articula,

respectivamente, sobre dos órganos de funcionamiento permanente. La finalidad de este nuevo modelo de coordinación no es otra que la de favorecer las respuestas más ágiles y expeditivas posibles a los siniestros provocados por el fuego, basadas en una eficaz conjunción de la información y de los medios que se encuentren en cada momento al alcance de todas las Administraciones públicas.

En la actualidad, la defensa contra incendios forestales en España es competencia de las comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal tiene encomendada la coordinación básica de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las Administraciones Autonómicas. Los departamentos de defensa y medio ambiente españoles suscribieron el 28 de diciembre del año 2007, el protocolo específico para atender las necesidades de los medios aéreos propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y su coordinación y complementariedad con el conjunto de medios de la Unidad Militar de Emergencias. Este protocolo sustituyó al anteriormente vigente y es su objeto establecer las condiciones de atención por el Ministerio de Defensa a las necesidades de operatividad, mantenimiento y disponibilidad de los medios aéreos de los que es titular el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), así como las condiciones de coordinación y complementariedad de los medios aéreos del MARM con el conjunto de los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los medios aéreos de lucha contra incendios operados por el 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la UME, se adscriben orgánicamente a Defensa y funcionalmente a Medio Ambiente, que decidirá sobre su utilización.

8.2. La seguridad vial.

Según el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon en el Global Status Report on Road Safety, un plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020, los accidentes de tráfico causan todos los años más de 1,27 millones de defunciones y otros 50 millones sufren traumatismos, se prevé que en 2030 se habrán convertido en la quinta causa principal de mortalidad, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. En torno al 46% de los fallecidos por accidentes de tráfico en el mundo son peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros (usuarios vulnerables). Asimismo, aunque en los países industrializados el número de personas propietarias de automóviles es mayor que en los países en desarrollo, más del 90% de los fallecidos causados por el tráfico en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medianos, en los que circula solo el 48% de los vehículos

matriculados a nivel mundial. Además de las sorprendentes tasas de mortalidad, los traumatismos por accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de pérdida de salud y una verdadera sangría para el sistema de salud. Según datos disponibles, en algunos países una de cada 10 camas de hospital está ocupada por víctimas de accidentes de tráfico. La mayoría de las víctimas de esos accidentes eran personas que nunca podrán permitirse la adquisición de un automóvil: peatones, ciclistas y usuarios del transporte público²⁴⁷.

Cada vez hay una mayor concienciación de que la situación actual en materia de seguridad vial constituye una crisis con repercusiones sanitarias, sociales y económicas devastadoras. Es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, la tercera entre los de 30 a 44 años y la octava entre los de 45 a 69 años. La seguridad vial no es una cuestión reciente, pero las actividades han cobrado un nuevo impulso en los últimos años. Según la Comisión para la Seguridad Vial Mundial y el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas es el momento oportuno para acelerar las inversiones en la seguridad vial en los países de ingresos bajos y medianos y para formular estrategias y programas de seguridad vial sostenibles que redefinan la relación entre las personas y las vías, estimulen el uso del transporte público y modifiquen también la forma de mediar los avances nacionales en las políticas de transporte. Dos informes de la Organización Mundial de la salud han puesto el énfasis en el problema de los accidentes de tráfico que provocan muertes y discapacitados por el problema del alcohol y las drogas, siendo la principal causa de mortalidad en la población joven de los países industrializados²⁴⁸.

A pesar de que los vehículos son ahora cuatro veces más seguros que en 1970 y se han reducido en un 50 % el número de muertes en la Unión Europea de 15 Estados miembros, desde esa fecha (periodo durante el cual el volumen de tráfico se ha triplicado), los accidentes de tráfico en carretera provocaron en el 2009, 35.000 muertes -es decir el equivalente a una ciudad media- y 1,7 millones de accidentados en la UE y producen costes conexos directos e indirectos estimados en 130 billones de euros²⁴⁹(traslado de los heridos, hospitalización, daños materiales, rehabilitación, trámites, etc.). Según datos publicados por la European Road Safety Observatory de la Unión Europea en su informe “Traffic Safety Basic Facts 2010”, la UE ha avanzado mucho con este problema en los últimos diez años, ya que el número de víctimas mortales en la UE-23 fue de 36.721 personas en 2008,

²⁴⁷ World Health Organization (2009). *Global status report on road safety*. WHO. Switzerland.

²⁴⁸ World Health Organization (2007). *Drinking and driving: a road safety manual for decision makers and practitioners*. WHO. Geneve. (2008). *Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners*. WHO. Switzerland.

²⁴⁹ European Commission (2010). *Towards an European road safety area: policy orientations on road safety*. Brussels Com (2010)389 final.

una reducción de casi un tercio en comparación con 1999. Solamente Rumanía aumentó el número de accidentes comparando esos dos años. Pero, en esa comparación destacan países como Portugal que había reducido las víctimas en un 55,7 por ciento, Francia en un 45,9 por ciento y España en un 45,9 por ciento. Los accidentes de tráfico se ceban principalmente entre la población joven, constituyendo un problema de salud pública de gran magnitud en la UE, donde más de 58.000 personas entre 18 y 24 años murieron por este problema entre 1999 y 2008, aunque si comparamos estos dos años, en el último murieron un 40 por ciento menos de jóvenes²⁵⁰. La mayor parte de los muertos suele ser el conductor, un 65%, seguido de pasajero, un 18% y de viandantes, un 7%, entre las causas se suele encontrar factores de riesgo añadidos como el exceso de velocidad, la inexperiencia al volante o el consumo de alcohol y drogas durante los fines de semana.

La gravedad de esta figura delictiva también se refleja en la importancia de las secuelas que los accidentes llegan a ocasionar. El 40 por ciento de las minusvalías que se producen en España están causadas por estos accidentes, que constituyen la primera causa de lesión medular como consecuencia de un traumatismo y también de incapacidad laboral entre la población joven. Se calcula que cada año aparecen 500 nuevos casos de paraplejia en España por traumatismo de tráfico y el 75 por ciento de éstos se producen entre jóvenes. En cada accidente de tráfico suelen confluir diversas circunstancias que determinan la aparición del percance, aunque las diversas investigaciones realizadas al respecto coinciden en señalar al comportamiento humano como el factor más determinante en los accidentes, por encima de otros aspectos como los ambientales o los mecánicos. Entre estos factores humanos, el consumo de alcohol ocupa un lugar predominante. El abuso de bebidas alcohólicas está implicado en el 30-50 por ciento de los accidentes mortales, en el 15-35 por ciento de accidentes con heridos graves y en el 10 por ciento de los accidentes sin víctimas. En España, los accidentes de tráfico constituyen actualmente la quinta causa más frecuente de muerte, sólo por detrás de las enfermedades cardiovasculares, las neoplásicas, las respiratorias y las digestivas. Así, en el año 2002, se registraron 5.347 víctimas mortales en nuestras carreteras.

La Comisión Europea auspició a principios de los noventa la realización de un estudio²⁵¹ encuadrado en la acción COST 313 en el que se revisó de qué forma estimaban 14 países europeos los costes de accidentes de carretera y se formularon recomendaciones acerca de cómo deberían cuantificarse. Se identificaron tres amplias categorías de costes: los costes económicos directos (costes médicos, costes de reparación o reemplazamiento de los vehículos dañados y costes administrativos), los

²⁵⁰ OECD (2011). *Trends in the transport sector*. Geneve. OECD Publishing.

²⁵¹ Alfaro, J-L., Chapuis, M., Fabre, F. (Eds.). (1994). COST 313. *Socioeconomic cost of road accidents*. Report EUR 15464 EN. Commission of the European Communities, Brussels, Belgium.

indirectos (el valor de la capacidad productiva perdida a consecuencia de la muerte prematura, de la incapacidad permanente o de la temporal causada por los accidentes) y el valor de la calidad de vida perdida, también denominado valor de la seguridad, pérdidas humanas, costes humanos o valor humano, representando "el valor de la pérdida de disfrute de la vida o la salud de la víctima, así como el dolor, aflicción y sufrimiento de la víctima y sus familiares"²⁵². La suma de las tres categorías de costes enunciadas proporciona el coste total por víctima en un accidente de tráfico o, alternativamente, el valor total que representa evitar o prevenir un fallecido.

El hecho de que los costes directos e indirectos puedan relacionarse claramente con transacciones reales de mercado o con el gasto público mientras que los costes humanos no se reflejan automáticamente ni en los precios de mercado ni en el gasto público, explica que durante varias décadas los costes humanos fueran ignorados por la mayor parte de las estimaciones oficiales realizadas en los países motorizados o , en el mejor de los casos, fueran aproximados por medio del valor de las indemnizaciones pagadas a las víctimas o a sus familiares; este es el caso de España. Hay al menos tres razones²⁵³ por las cuales es importante monetizar correctamente dichos costes. En primer lugar porque así podrá juzgarse adecuadamente la eficiencia de las medidas de seguridad vial que se planea desarrollar. De esta manera podrían compararse, en el marco del análisis coste-beneficio, los costes de implementación de una nueva autovía con los beneficios derivados del ahorro de víctimas o con otro tipo de costes asociados a la construcción y utilización de la infraestructura como son la congestión y la polución. En segundo lugar, podrían compararse los costes totales de la seguridad vial con los de otros problemas sociales como los costes de la seguridad en otros medios de transporte no por carretera o, incluso, otros tipos de políticas de seguridad como la que tiene que ver con los riesgos laborales. Finalmente, poseer una estructura completa de los costes sociales de los accidentes de tráfico podría ser relevante para las reclamaciones antes las compañías aseguradoras. El Valor de una Vida Estadística (VVE) en España en el contexto de los accidentes de tráfico asciende a 1,3 millones de euros que, una vez sumadas las pérdidas netas de output y los costes médicos y de ambulancia, se traduce en un Valor por Evitar o Prevenir un Fallecimiento (VPF) de 1.4 millones de euros²⁵⁴.

²⁵² Evans, A. (2001). The economic appraisal of road traffic safety measures in Great Britain. Paper for ECMT Round Table 117 *Economic evaluation of road traffic safety measures*. Paris: ECMT. Pág. 86.

²⁵³ SWOV (2009b). *Road crash costs*, Fact sheet, August 2009.

²⁵⁴ Abellán J.M. et alt. (2009). El valor monetario de una vida estadística en España. Informe de la Dirección General de Tráfico. Universidad de Murcia y Pablo Olavide.

Con todos estos datos es lógico que la legislación sobre la seguridad vial haya cambiado tanto durante los últimos 40 años²⁵⁵. En 1980 se inaugura el Primer Plan nacional de seguridad Vial. En 1984, el Real decreto sobre tiempos de conducción y descanso. En 1989, la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En 1990, el Real Decreto Ley de Tráfico que desarrolla la ley de 1989. En 1994, el Reglamento Sancionador y Nuevas Tasas de Alcoholemia. En 1997, el Reglamento General de Conductores. En 2001, LA Ley 19/2001 de Reforma del R.D.L. de 1990. En 2003 el Real decreto 318/2003 que modifica el procedimiento sancionador y el Real Decreto 1428/2003 que aprueba el reglamento general de circulación. En 2004, el real Decreto 1598/ 2004 que modifica el reglamento general de conductores. En 2005, la Ley 17/2005, que regula el permiso por puntos y el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008. En 2007, la ley orgánica 15/2007 de modificación del Código Penal. En 2009 la Ley 18/2009 que modifica la ley de tráfico en materia sancionadora. Especialmente importantes fueron la de 1989 al crear un nuevo delito de conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás, la del 2005 y la del 2007 procedente del debate sobre el Estado de la Nación de 2006 según las propuestas de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

Una de las decisiones que más ha intervenido en esta figura delictiva es la firme decisión del Gobierno en 2004 de establecer la seguridad vial como una prioridad política, creando el Plan Estratégico de seguridad Vial 2005-2008. En este contexto se aprueba un año más tarde el sistema de permiso y licencia de conducir por puntos, que ya había demostrado su eficacia en otros países europeos. Como se manifiesta en su exposición de motivos, se pretendía establecer un sistema que incidiendo sobre las autorizaciones administrativas para conducir, fuera la combinación de dos elementos esenciales. En primer lugar, se trata de aplicar una medida que sirva para volver a educar a los conductores mediante la modificación de los comportamientos peligrosos, según sostiene la ley “mediante la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial de los conductores multirreincidentes, con el objetivo esencial de modificar los comportamientos infractores, cursos cuya superación, junto al cumplimiento de otros requisitos y pruebas que se establecieran, permitirían la recuperación parcial o total del capital de puntos que, según los casos, correspondiera a un conductor”.

Como continua la ley 17/2005 de 19 de julio el propósito de volver sobre el correcto uso de la conducción de un vehículo requiere de manera especial “un claro objetivo de sensibilización y permanente llamada de atención sobre las gravísimas consecuencias que, para la seguridad vial y para la vida

²⁵⁵ Vizueta J. (2011). Delitos contra la seguridad vial. Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología. RECPC 13-02. Págs. 1-24

de las personas, tenían los comportamientos reincidentes en la inobservancia de las normas que regulaban el fenómeno creciente y cada vez más complejo de la circulación o tránsito de vehículos a motor”, porque sus consecuencias ponen en un peligro permanente los derechos fundamentales establecidos en torno al derecho a la vida y a la integridad física y moral de los usuarios que circulan por las vías públicas. En segundo lugar constituye un efecto de castigo para todos aquellos comportamientos que por los motivos que fueran, han llevado hasta la disminución o la pérdida del crédito en puntos con que cuenta un conductor, titular de permiso o licencia de conducción. Puntos que, de alguna manera eran el “reflejo del nivel de confianza que como tal conductor le otorgaba la sociedad en un momento dado y cuya pérdida, a su vez, señalaba el reproche que tales conductas merecen, derivado y con un claro sustento en la reiterada comisión de infracciones”. Hay que destacar que el resultado del primer año de vigencia del sistema del denominado carné por puntos –del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007– supuso una reducción en 467 fallecidos menos, es decir, un 14,3 por ciento inferior al registrado en el mismo período del año anterior.

Otra ley importante y definitiva fue la de 2007 de reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, que surgió de un debate previo celebrado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP, por la que se endurecieron las sanciones por conducción temeraria, con penas de cárcel en los casos más graves. En la votación final, la modificación recibió 189 votos a favor, por 133 en contra y tres abstenciones. De este modo, a partir de entonces el Código Penal contemplaba penas de cárcel para los conductores temerarios que superaran en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. Conducir sin tener el permiso se castigó con hasta seis meses de cárcel o una multa, y trabajos con las víctimas de tráfico. Aquellos que conducían un vehículo habiendo consumido alcohol o drogas podían ser condenados con hasta cinco años de cárcel y la retirada temporal del carné. Además, negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas también tenía consecuencias: de tres a seis meses de cárcel. También se castigaba a aquellos que provocaran un accidente o con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida de los demás o con desprecio a la vida de otros usuarios de la vía, ya que podían ser condenados con hasta cinco años de cárcel y la retirada del carné de conducir durante diez años.

Según el diario El País del 23 de octubre de 2010, la reforma del código penal que entró en vigor en diciembre de 2007 contemplaba una medida que castigaba con especial dureza a los infractores de la conducción vial pero evitando llenar las ya abarrotadas prisiones españolas de infractores. La norma consistía en que el que cometía el delito, a cambio de no ir a la cárcel (salvo en el caso de los reincidentes) podría ser condenado a una pena alternativa, lo que significaba cumplir una media de 25 jornadas de trabajos

sociales, el pago de una multa y la suspensión de entre uno y cuatro años del permiso. Sin embargo, en los dos años y medio que siguieron a la implantación de esa medida, el efecto fue más disuasorio que práctico. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nunca pudo llevar al día la ejecución de estas condenas, que en algunos casos prescribían en los juzgados, antes de que la ejecutoria llegara a Prisiones. En un intento desesperado de atender las 200.000 condenas de este tipo dictadas desde principios de 2008, el Ministerio del Interior implementó una solución urgente al sustituir algunas condenas de trabajos sociales por unos talleres viales.

La última reforma del Código Penal del 2010 trae importantes reformas en el capítulo dedicado a los delitos relacionados con la seguridad vial. Uno de los más relevantes afecta precisamente a los trabajos en beneficio de la comunidad. Los delitos por circular con una tasa de alcohol por encima de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, por superar en 60 u 80 kilómetros por hora (según la vía) la velocidad máxima permitida o por conducir sin puntos, con el carné retirado o sin haber pasado nunca por la autoescuela, están castigados con penas de cárcel, que pueden ser sustituidos por un *pack* compuesto por una multa económica y trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que no se trate de un infractor reincidente. Además, en los supuestos de alcohol y velocidad también se aplica la retirada del carné entre uno y cuatro años. Con la nueva redacción, el juez tiene tres alternativas: o la cárcel o una multa o los trabajos. Según el diario El País del 23 de octubre de 2010, las condenas que implican el ingreso en la cárcel seguirán siendo para los casos más extremos. Para el resto, el juez correspondiente tiene que decidir, atendiendo a la gravedad del delito, entre una sanción económica o trabajos sociales sustitutorios. Esto supone un alivio para el Gobierno, y supuestamente una forma de suavizar la reforma de 2007, calificada por distintas fuentes como "demasiado dura y poco flexible". Hasta ahora las multas que se imponían en los juzgados, de hasta 24 meses (a razón de entre 2 y 400 euros diarios) eran normalmente las mínimas al acompañar a los trabajos. Con este argumento, una infracción que por ejemplo, acarrea hasta ahora una sanción de 360 euros podría alcanzar con el nuevo código penal, si el fiscal pide el máximo, hasta 288.000 euros.

Después de todas estas reformas, el delito contra la seguridad del tráfico, se puede considerar como lo que hemos denominado como nueva delincuencia, por la importancia que ha adquirido el coche en la sociedad moderna, en donde están censados en 2010 31 millones de vehículos (22 millones de turismos, el 71,25 %) frente a los 24 millones que había en 2001. El censo total de conductores en 2010 era de 25.799.005 permisos frente a los 20.486.861 que había en 1998, de los cuales se ha producido un importante trasvase entre hombres y mujeres, ya que los primeros representaban en 1998 el 65,55% frente a las segundas que suponían el

34,45 %, lo que en el 2010 es del 59,80% frente al 40,20%. En estas cifras destacan años muy importantes para la obtención de nuevas incorporaciones producto de la inmigración y el boom económico: desde 2002 se incorporaron 303.231, hasta 2008 cuando se incorporaron 444.119.

En el año 1995 sólo existían 16 millones y medio de permisos de conducir, en donde como producto de la inmigración en los dos últimos años se han canjeado 415 mil nuevos carnés de conducir, y en donde como producto de la incorporación de la mujer al mundo laboral en los doce últimos años hayan subido de representar el 34 por ciento a situarse en el 39 por ciento del censo de conductores. Tratándose de un delito típicamente de “hombres”, toda vez que nueve de cada diez multas de tráfico por exceso de velocidad van destinadas a varones, nueve de cada diez muertos al volante son hombres, y el 90 por ciento de carnés retirados son de hombres cuando les corresponderían sólo el 70 por ciento. Las diferencias entre ambos sexos también se traducen en las preferencias por los coches, mientras que las mujeres priorizan el precio, la seguridad, los factores ecológicos y el consumo, los hombres prefieren la potencia, el prestigio de la marca -que permitirá a los vecinos observar su poderío económico y el precio²⁵⁶.

El número de muertos por la carretera desde 1980 hasta el 2006 ronda anualmente con ligeras fluctuaciones entre las 4.000 y las 6.000 personas lo cual hace que hayan fallecido por este concepto y en este periodo de tiempo más de cien mil personas, mientras que la evolución del número de víctimas entre muertos, heridos graves y heridos leves ha supuesto en el año 2000 las 155.557 personas, lo cual nos da una idea de la magnitud de la tragedia que se repite anualmente en las carreteras, en muchas ocasiones producto de conducir bajo los efectos de las drogas y del alcohol. No es de extrañar, que las leyes sobre circulación se hayan modificado con regularidad en los últimos años, hasta llegar en la actualidad al carné por puntos. El código penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años a quien conduce con temeridad manifiesta y pone en peligro la vida o seguridad de las personas. Sólo en los últimos diez años, 41.665 personas se dejaron la vida en el asfalto y 205.774 resultaron heridas graves. La buena noticia es que en este periodo de tiempo la mortalidad por tráfico ha descendido más del 50 por ciento, al pasar de las 5.517 víctimas mortales de 2001 a las 2.478 del año pasado; aún demasiadas, sin duda, pero al menos España se sitúa en los estándares de siniestralidad de los países de nuestro entorno.

La entrada en vigor en julio de 2006 del sistema previsto por la ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, propició que se rompiera esta tendencia, con una reducción del número de fallecidos superior al seis por ciento en la Semana Santa de 2007, hasta situarse al

²⁵⁶ El País 1-4-2006

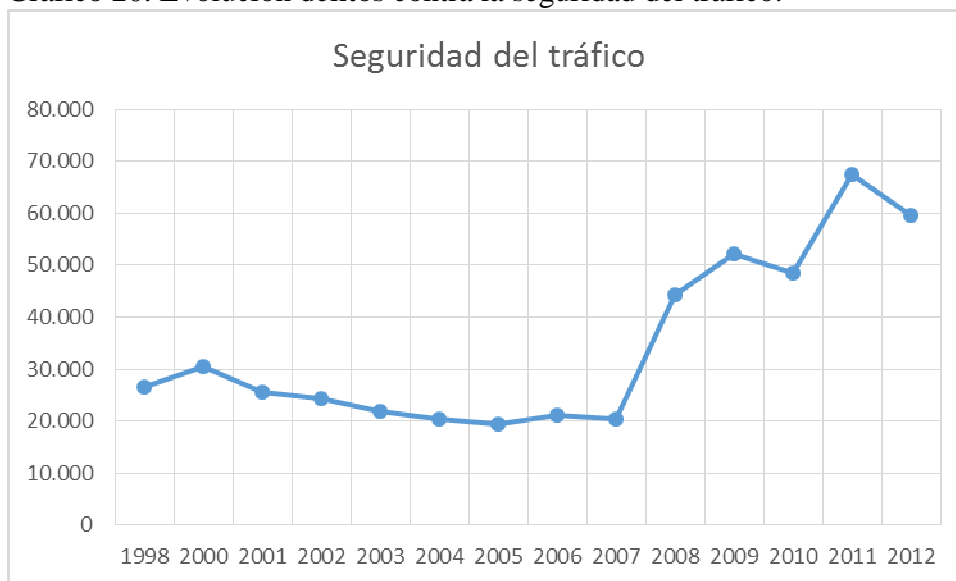
mismo nivel de la Semana Santa de 2004, con un total de 103 fallecidos. En la campaña de Pascua de 2008, la cifra se redujo hasta las 63 víctimas mortales, lo que supone una disminución en un 39 por ciento respecto del año anterior. La explicación ofrecida por el entonces Ministro del Interior, concluía que la consecución de «la mejor cifra histórica» en la accidentalidad en carretera se debía a que los conductores son cada vez más responsables, lo que ha sido propiciado por tres razones, como son la implantación del carné por puntos, la modificación del código penal y las campañas divulgativas de los medios de comunicación que persiguen la concienciación de los conductores. El Plan Estratégico de seguridad vial incluido en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones del año 2004, recogía como objetivos y prioridades la disminución en el número de accidentes, víctimas y fallecidos, mediante la erradicación de la impunidad de las conductas irresponsables, garantizando el cumplimiento efectivo de las normas de tráfico e incrementando el control y las sanciones respecto de quienes habitualmente conducen peligrosamente.

Según la Revista tráfico y Seguridad Vial de 2011, en ese año se produjeron 1.338 accidentes mortales en carretera, en los que fallecieron 1.479 personas, un 14,5% menos que el año pasado y un 65% menos que en el 2000. En el promedio de víctimas mortales, se ha pasado de lamentar 11,6 muertos diarios en 2000 a 4,1 en 2011, según los resultados del último balance de seguridad vial del Ministerio del Interior, elaborado con datos provisionales de accidentes mortales en carretera a 24 horas. También se confirma el descenso en el número de heridos graves: en 2011 fueron 7.069, un 9,8% menos que el año anterior y un 63% menos que hace once años. Dicho de otra manera, de 52 heridos graves diarios en 2000, se pasó a 19 en 2011. Teniendo en cuenta que en el primer año de la década de los 60 había un millón y medio de vehículos y que el año pasado se contabilizaron 31 millones, el éxito es considerable. Por edades, el grupo entre 35 y 44 años es el que registra mayor número de víctimas mortales (292 fallecidos), seguido del de mayores de 65 años, con 269. Respecto al año 2000, el grupo de edad que ha tenido un descenso acumulado mayor ha sido el de los más jóvenes: menores de 14 años (-79%) y el de 15-24 años (-78,6%). Los accidentes mortales más frecuentes se producen en turismo (56%), en moto (16%) y a causa de un atropello (10%). El escenario más habitual, en el 78% de los accidentes, es una carretera convencional, donde el accidente se produce por salida de la vía (37%) o por colisión frontal (22%). Es de destacar el alto porcentaje de accidentes mortales que se producen en las carreteras convencionales, con mucho menos tráfico que en autovías o autopistas, en las que en total se originan el 22% de la siniestralidad: el 18% en las autovías y el 4% en las autopistas.

Según la serie histórica de este tipo de delito, existe poca variación entre los 9 primeros años computados, pero a partir de 2007 se produce una

subida que solo se detendrá en el año 2012. La diferencia entre el año de inicio y el final es de 33.075 casos, representado un aumento del 124 por ciento. El incremento más importante fue entre 2007 y 2008, donde se produjeron 23.843 casos más que representaron una subida del 117 por ciento.

Gráfico 20. Evolución delitos contra la seguridad del tráfico.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 47. Evolución delitos contra la seguridad del tráfico.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
26.559	30.375	25.543	24.323	21.944	20.509	19.473	21.125	20.365	44.208	52.171	48.491	67.374	59.634

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

8.3. Salud pública

De acuerdo a Vives- Regor et al.²⁵⁷. El enfoque de una intervención de salud pública es prevenir y controlar enfermedades, lesiones y otras condiciones de salud a través de la vigilancia de casos y la promoción de conductas saludables, comunidades y ambientes. Muchas enfermedades se pueden prevenir a través de simples, métodos no médicos. El tratamiento de una enfermedad o el control de un patógeno puede ser vital para prevenir su propagación a otros, como por ejemplo durante un brote de las

²⁵⁷ Vives-Regor J. et al. (2007). Delito medioambiental y delito contra la salud pública: problemas terminológicos jurídicos y científicos de la legislación actual y propuestas legislativas. *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*. Nº 16. Págs. 1-9.

enfermedades infecciosas, o la contaminación de los alimentos o el agua. La salud pública juega un papel importante en los esfuerzos de prevención de la enfermedad, tanto en el mundo en desarrollo y en los países desarrollados, a través de los sistemas de salud locales y las organizaciones no gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo internacional que coordina y actúa sobre los problemas mundiales de salud pública. La mayoría de los países tienen sus propias agencias gubernamentales de salud pública, a veces conocidos como Ministerios de salud, para responder a los problemas de salud nacionales. Existe una gran discrepancia en el acceso a servicios de salud y las iniciativas de salud pública entre las naciones desarrolladas y naciones en desarrollo. En el mundo en desarrollo, las infraestructuras de salud pública aún se están formando. Desde una perspectiva jurídico-penal se suscita la cuestión de si ésta recibe una protección autónoma respecto de la salud individual, o si realmente salud pública es sencillamente la suma de estados de salud individuales. En todo caso, para concretar el concepto de salud pública es necesario partir de un determinado concepto de salud individual. Una definición en consonancia con la sociedad actual, nos la proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en su Constitución de 1946, define la “Salud” como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales.

Siguiendo a Luzón Cuesta²⁵⁸, los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio son:

1. Sustancias nocivas a la salud y productos químicos, que castigan la elaboración, despacho, suministro o comercio de estas sustancias cuando puedan causar estragos, incluyendo un tipo atenuado en el caso de realizar la misma conducta hallándose autorizado para el tráfico de dichas sustancias, pero incumpliendo las formalidades previstas en sus normas reguladoras.
2. Medicamentos. El código penal no da un concepto de medicamento, pero se puede considerar como tal las sustancias a que se refiere el art. 361, que castiga la expedición o despacho de medicamentos deteriorados o caducados o que incumplan las normas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, o sustituyan unos por otros poniendo en peligro la vida o la salud de las personas. Un tipo agravado es cuando la conducta típica viene determinada por la alteración de medicamentos o bien por la imitación y simulación de éstos, extendiéndose incluso a sustancias productoras de efectos beneficiosos.
3. Alimentos y productos nocivos. Caracterizado porque el sujeto activo es un productor, distribuidor o comerciante que ofrezca, fabrique, elabore u oculte alimentos o productos nocivos o realice cualesquiera otras de las

²⁵⁸ Luzón J.M. (2010). *Compendio de derecho penal*. Madrid. Dykinson.

conductas contenidas en el precepto. En todo caso, el elemento esencial lo constituye el hecho de que dichas conductas supongan un peligro para los consumidores. Como delito de peligro, se consuma con la mera actividad en la que, generalmente, no se exige la venta, pero se castiga el supuesto de adulteración de alimentos, bebidas o sustancias destinadas al comercio alimentario, cuando ésta sea susceptible de causar daño a la salud. Si el reo fuera propietario o responsable de producción de una fábrica de estos productos, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial.

4. Animales destinados al consumo humano. El código penal castiga la puesta en circulación de animales o productos derivados de los mismos que hayan sido tratados con sustancias que puedan generar un riesgo para la salud de las personas. Se configura este tipo como un supuesto de norma penal en blanco en el que son básicas las condiciones sanitarias de productos de origen animal.

5. Envenenamiento o adulteración de aguas o sustancias alimenticias destinadas al uso o consumo público.

8.4. El tráfico de drogas

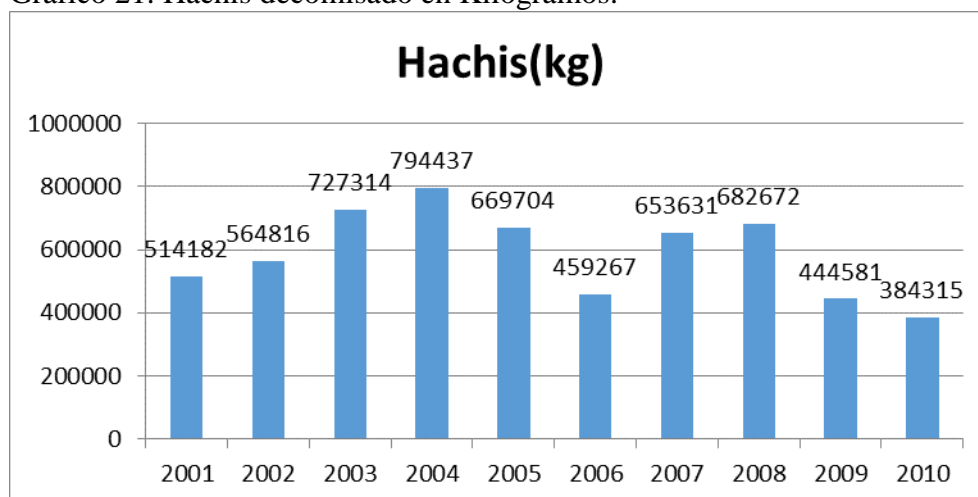
El tráfico y el consumo de drogas se encuentran entre las variables prohibidas que más afectan a la delincuencia en España. En cuanto a los delitos procedentes del tráfico y consumo de drogas cabe argumentar la importancia de la internacionalización de esta sustancia a la cual se le abren nuevos mercados de suministro con la caída del muro de Berlín, con la apertura de los países del Este, y con la conexión de dos mundos con realidades socioeconómicas diferentes, por lo que la droga se vuelve moneda de cambio para los intereses de grupos mafiosos que se expanden por la Unión Europea, y como no podía ser menos por España, favorecida en este caso por las importantes conexiones que desarrolla con los países iberoamericanos y con el norte de África. El hecho de que sea un país con un importante número de turistas abre una posibilidad inmejorable para que estos grupos se valgan de la gran avalancha que se produce en los meses de verano convirtiendo la geografía española en la puerta de entrada de la droga hacia Europa²⁵⁹.

Entre las principales drogas consumidas se encuentran la marihuana, la cocaína, el *speed*, el éxtasis, la ketamina, el cristal y la heroína. Entre 1996 y 2002, una droga como el éxtasis estuvo relacionada con 35 muertes en España, y se calcula que el 2,5% de las muertes cuya causa son las drogas en nuestro país tienen que ver de alguna manera con su consumo. Aunque tanto desde la “encuesta domiciliaria sobre el alcohol y drogas en España”

²⁵⁹ EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (2003). Annual report 2003. Lisboa. EMCDA. <http://annualreport.emcdda.eu.int/download/ar2003eu>.

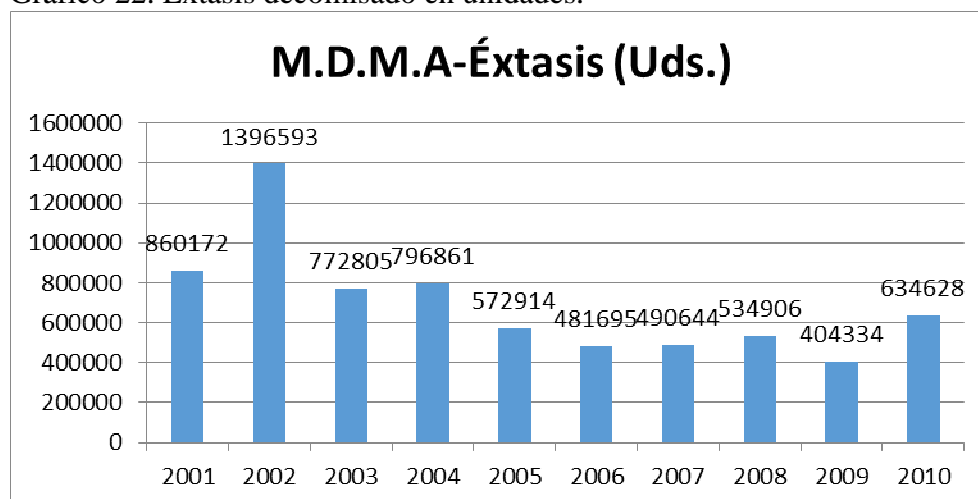
como desde Observatorio Europeo de las drogas y las Toxicomanías apuntan a su disminución. Ello se explicaría porque mucha gente de las generaciones de los ochenta y noventa se trasladó a la cocaína porque la primera sustancia provoca una tolerancia inversa, es decir, porque cuanto más droga toma una persona en el tiempo, menos efecto placentero siente, y más densidad cobran las resacas, lo contrario que sucede con la cocaína ya que el efecto placentero no disminuye de ese modo. Se estima en un 3% de la población los consumidores de cocaína en España, aunque desde estancias europeas se eleva al 5,2 %. Esta droga es la principal causa de entradas hospitalarias de urgencias. La evolución del consumo de drogas en España por tipos de drogas es:

Gráfico 21. Hachís decomisado en Kilogramos.



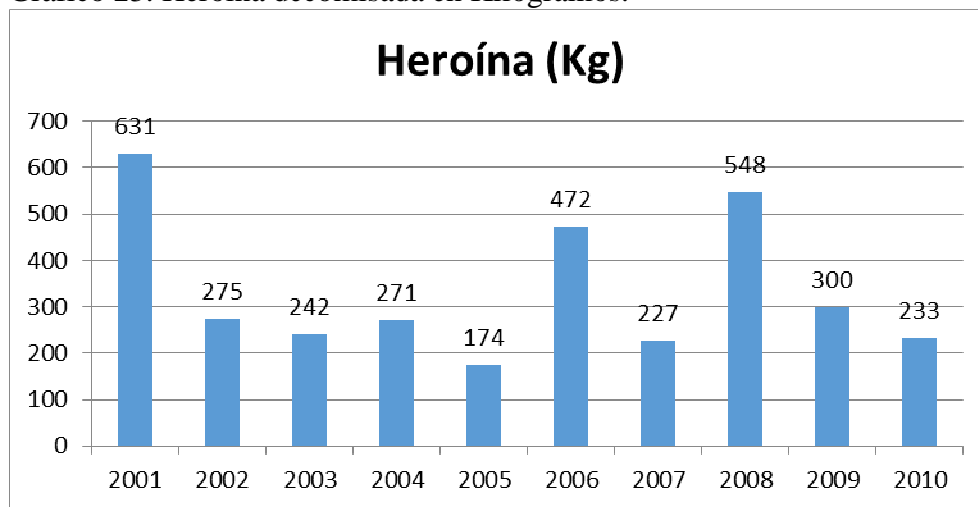
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Gráfico 22. Éxtasis decomisado en unidades.



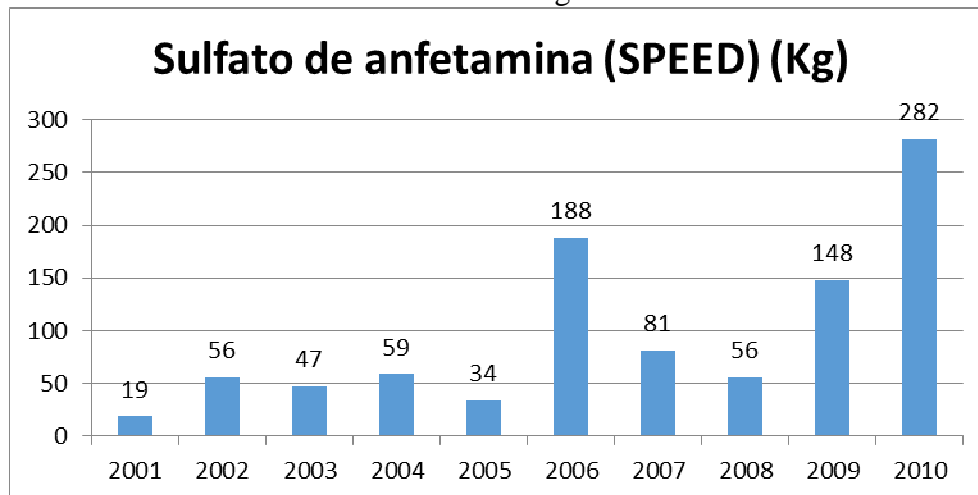
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Gráfico 23. Heroína decomisada en Kilogramos.



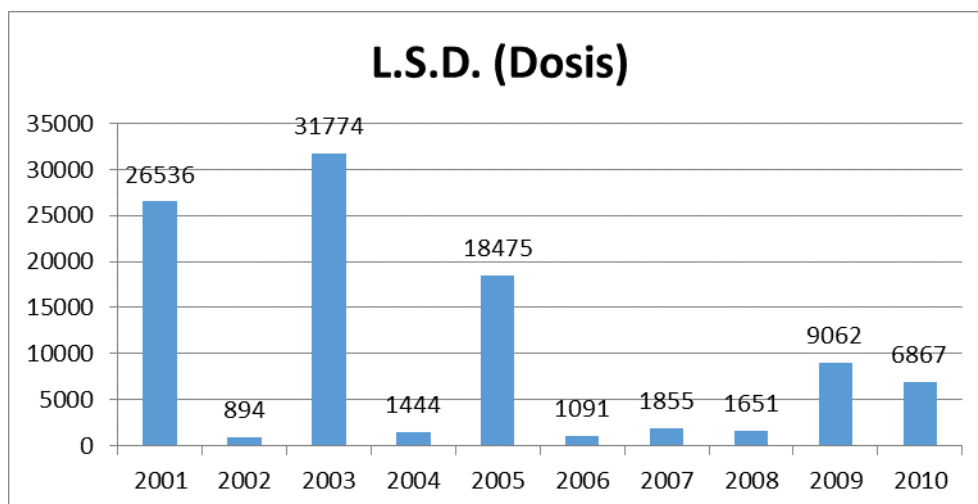
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Gráfico 24. Sulfato de anfetamina en kilogramos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Gráfico 25. LSD decomisado en dosis.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Por otra parte, España se sitúa como el país europeo con un mayor consumo de cannabis, un 20,3%, siete puntos más alto que la media comunitaria, lo que se podría explicar por el hecho de que se sea la puerta de entrada de las drogas a la unión europea, por el clima, por el sentido del ocio, por la vida en la calle y por una asunción del exceso bastante generalizada. Al consumo de estas drogas habría que añadir la preferencia juvenil por las drogas de diseño como la ketamína, el éxtasis, etc., las cuales frente a las anteriores se caracterizan por tener poca incidencia sanitaria. A diferencia de la cocaína las drogas de síntesis no se suelen registrar en los hospitales porque no generan adicción diaria, no suelen llegar a lo asistencial, y eso hace que su impacto resulte muy difícil de precisar. De hecho en países como en Reino Unido se originó un debate sobre si debería desaparecer de la lista de drogas peligrosas. Otra incidencia importante en este grupo delictivo es la compra de plantas y psicoestimulantes de origen natural a través de Internet. El testigo de un traficante de drogas al periódico El País reflejaba la realidad de este delito: “vender droga ahora me da una seguridad económica, es algo que muchos hacemos como sobresueldo”, en donde el ambiente es muy importante. “la discoteca se prolonga hasta el amanecer, la cocaína se usa al final de la noche, y el LSD, el cristal y las pastillas durante la madrugada: “la gente de mi edad está por lo barato, la coca se compra entre varios para esnifarla y llegar despiertos a casa, con buen acara y una presencia decente”²⁶⁰

La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas proporciona una visión de la situación actual en nuestro país del tráfico ilícito de las principales drogas, con datos que han sido, en parte, proporcionados por el Gabinete de Análisis y Prospectiva sobre Tráfico de

²⁶⁰ El País, 10 de noviembre de 2008.

Drogas, Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se trata de disponer de una radiografía del narcotráfico y del grado de eficacia de la respuesta estatal frente a ese fenómeno criminal, y para ello nada mejor que analizar los parámetros que definen y miden la actuación represora de los órganos judiciales y policiales: detenciones, decomisos, sustancias decomisadas, denuncias por tenencia o consumo de estupefacientes y procedimientos judiciales.

Un informe del año 2004 del Ministerio del Interior cifraba un total de detenciones (14.267) en 2004 fue superior a la del año anterior (12.718) en un 10,86 por 100, aunque en comparación con el número de detenidos del año 2000 (17.067) se había producido un descenso del 16,41 por 100. Aunque debe pensarse que dicha comparación no se ajusta plenamente a la realidad, porque no se han incluido las detenciones por tráfico ilegal de drogas efectuadas por las policías autonómicas. Es conveniente destacar algunas particularidades de interés: los detenidos extranjeros fueron 4.838, lo que supone más de la mitad del total de detenidos nacionales (concretamente el 33,91 por 100 del total de detenidos); esta cifra representó porcentualmente un 19,75 por 100 más que el año 2003, aunque la comparación con los años anteriores permite una lectura bien distinta hasta el punto de que el incremento respecto al año 2000 se situó en un 0,94 por 100 exclusivamente. De los detenidos extranjeros, 2.487 pertenecen al continente africano (51,41 por 100) y 1.259 al continente americano (26,02 por 100), y hay que reconocer que en ambos casos el aumento de estos detenidos durante los últimos cinco años es progresivo e imparable (tomando como referencia el año 2000 los porcentajes de incremento se sitúan en el 43,01 por 100 y 60,38 por 100, respectivamente).

Es especialmente reseñable que la cifra de detenidos marroquíes asciende a 1.964 (40,60 por 100 de los detenidos extranjeros y 13,75 por 100 del total nacional de detenidos), debido a la enorme incidencia del tráfico de resina de cannabis en nuestro territorio, seguidos muy de lejos por los colombianos con 616 detenidos (12,73 por 100 de los detenidos extranjeros y 4,28 por 100 del total nacional de detenidos). Mientras que la cifra de detenidos europeos asciende a 1.039 (lo que supone un crecimiento del 21,95 por 100 en los últimos cinco años), con estimable predominio de franceses (235), británicos (156), portugueses (110) e italianos (102).

Según el informe de la Fiscalía General del Estado²⁶¹ del año 2005, España estaba estableciendo nuevos registros históricos de incautaciones de resina de cannabis, consolidando nuestra posición como primer país del mundo por volumen incautado, con más del 50 por 100 del total mundial, que se eleva al 77 por 100 si reducimos la comparación al continente europeo. En cuanto a los lugares de incautación, diferenciando las

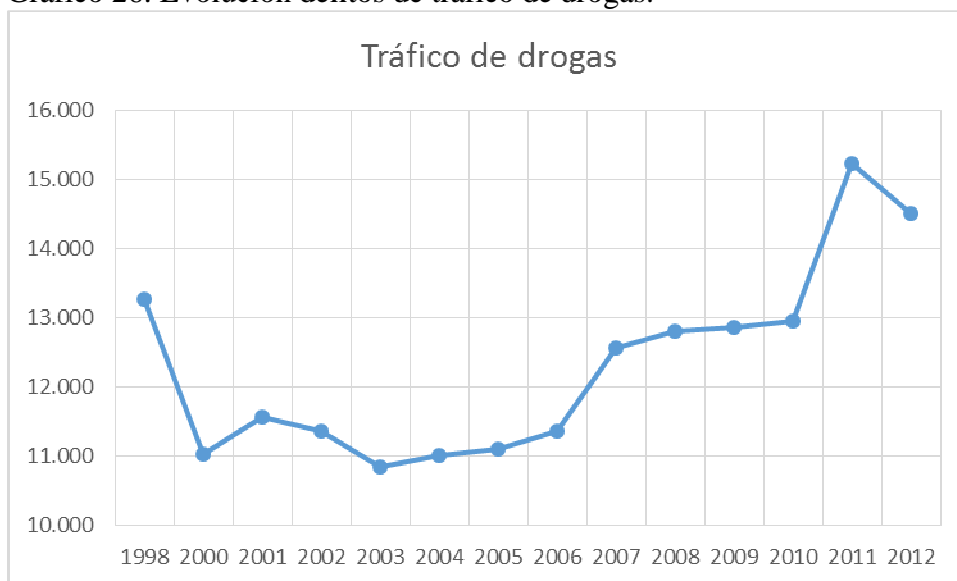
²⁶¹ Fiscalía General del Estado (2006). Informe 2005. Pág. 94.

aprehensiones realizadas en el mar –incluida la propia costa– con las realizadas dentro del territorio nacional, el mayor volumen de intervenciones se producen en el segmento mar-costa, como es lógico dado el mapa geográfico donde se desarrolla este tráfico, con un total de hachís intervenido de 466.510 kilos; mientras que en el interior la cifra ascendió a 292.979 kilos. En la zona costera se incautó el 61 por 100 del hachís, mientras que en tierra lo fue el 39 por 100. Con respecto al anterior año, el primero de los conceptos perdió cuatro décimas que pasaron a incrementar el porcentaje de las aprehensiones realizadas en tierra. Pero esto no debe llevar a pensar que el 39 por 100 de hachís circula por las provincias del interior; de hecho, todo el hachís incautado en España se intervino en las provincias costeras, salvo 30.334 kilos que lo fueron en provincias del interior (apenas un 3,99 por 100 del total).

La cercanía con los centros de producción del Norte de África y el aumento de la eficacia en los controles fronterizos, coadyuvan a situar a España como potencia mundial en la materia. Esta efectividad policial, centrada en las zonas más próximas al Estrecho, está motivando desviaciones en las rutas de introducción, con importantes desplazamientos hacia las costas de Murcia y Alicante, aunque las principales incautaciones siguen centrándose todavía en las provincias costeras de Andalucía. En la comunidad autónoma de Andalucía se incautaron nada menos que 491.786 kilos de hachís durante el año 2003, lo que supuso el 74 por 100 del total nacional. En este año las aprehensiones se redujeron hasta 472.777 kilos, es decir, 20 toneladas menos, y su relación porcentual con respecto al total nacional bajó al 62 por 100. Todo ello, en un contexto en el que, como se ha indicado, el total de intervenciones ascendió significativamente.

La serie histórica del tráfico de drogas muestra claramente que se trata de una categoría delictiva que no ha presentado grandes cambios a través de los años de estudio. La diferencia entre el primer año de medida y el último arroja una cifra de 1.246 casos más, lo que representa el 9 por ciento más de delitos. Sólo es de señalar el incremento entre 2010 y 2011 de 2.272 casos que supuso un incremento de 17,5 por ciento. Otra ligera variación se dio entre 1998 y 2000, con 2.231 casos menos, o sea un 16,8 por ciento de caída.

Gráfico 26. Evolución delitos de tráfico de drogas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 48. Evolución delitos de tráfico de drogas.

1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
13.263	11.032	11.574	11.370	10.851	11.015	11.101	11.363	12.574	12.800	12.852	12.948	15.220	14.509

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Capítulo 9. Delincuencia contra el medio ambiente y otros.

9.1. Medio ambiente.

Este tipo de delitos es el más global de todos los analizados hasta ahora por la profunda interdependencia de la ecología. Como se ha demostrado cualquier atentado ecológico en un punto del planeta puede afectar a otra parte de la tierra, aunque se encuentre a muchos kilómetros de distancia. Además es un delito que tiene memoria histórica, es decir sus efectos se heredan de una generación a otra por la necesidad temporal que exige su reparación. Los recursos naturales no son eternos y sencillamente muchos de ellos se pierden sin posibilidad de recuperación. La simple existencia del ser humano sobre la tierra ha tenido consecuencias sobre la naturaleza, ya que como decía Ortega y Gasset, el hombre ha creado una segunda naturaleza llamada tecnología que ha transformado la primera: de la noche ha hecho el día, del invierno el verano y del verano el invierno.

Como sostiene Vercher²⁶², desde hace aproximadamente seis mil años el hombre ha venido provocando concentraciones de plomo en la atmósfera, superando los niveles considerados naturales y destruyendo con ello el medio ambiente como lo pone de prueba investigaciones realizadas en un antiguo pantanal suizo sobre los niveles de plomo acumulados, retrotrayéndose a hace catorce mil años y que han revelado que la Humanidad comenzó a destruir el medio ambiente desde hace aproximadamente seis mil años con la irrupción de los primeros agricultores europeos. En España, la ganadería de la Mesta, la construcción de la flotas reales, la obtención del hierro a partir del combustible de madera de las ferrerías del Norte y el progresivo incremento de las necesidades alimenticias, contribuyó decisivamente a la destrucción de la cubierta vegetal y la erosión del país que permitían según algunas crónicas, que una ardilla pudiera desplazarse desde el norte hasta el sur de árbol en árbol.

Sin embargo, el atentado de mayor profundidad y extensión sobre la naturaleza se produjo con la revolución industrial y su exigencia de combustibles fósiles. Grandes masas forestales sucumbieron en Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Unión Soviética, y los países industriales más prominentes del siglo XIX-XX. Además con la llegada de la producción en serie por medio de grandes acerías, fábricas textiles, coches, ferrocarriles, nucleares, barcos, la contaminación provocó la erosión de la capa de ozono con la consiguiente alarma a nivel mundial que se exteriorizó en los grandes foros internacionales. Junto a estos efectos hay que añadir la explosión mundial de la población que se duplica cada treinta y cinco años, la urbanización del planeta que supone la existencia de

²⁶² Vercher A. (2001). La evolución del delito contra el medio ambiente a través de la jurisprudencia. *Revista Derecho y Medio Ambiente*. Nº 8. Pags. 37-70.

grandes megalópolis, la extensión de la agricultura, la extinción de especies, la contaminación del mar y la lucha por el agua potable a nivel mundial, la erosión del terreno que conduce a una creciente desertización, el calentamiento del planeta. O hechos concretos como Bhopal, Three Miles Islands, Chernobil, o la reciente explosión de una central nuclear en Fukushima (Japón) que provocó la consideración por parte de las autoridades niponas de la evacuación nada menos que de Tokio. De acuerdo a Reichman²⁶³ desde mediados del siglo XX, la expansión del sistema socioeconómico se ha acelerado hasta convertirse en un proceso prácticamente fuera de control.

Según el Informe de la Organización Mundial de la salud del 2007, en el mundo actual, cada vez más interconectado, aparecen a un ritmo sin precedentes nuevas enfermedades que en muchos casos pueden atravesar rápidamente fronteras y propagarse. Desde 1967 se han identificado al menos 39 agentes patógenos nuevos, entre ellos el VIH y los causantes de la fiebre hemorrágica del Ebola, la fiebre de Marburgo y el SRAS. Otras amenazas existentes desde hace siglos, como gripes pandémicas, paludismo y tuberculosis, siguen amenazando la salud debido a una combinación de mutaciones, resistencia creciente a los medicamentos antimicrobianos y sistemas de salud frágiles. Uno de cada cinco europeos muere de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el anuncio de la expansión del Centro de Europeo para Ambiente y Salud de Bonn. Cabe señalar que el estudio sobre las desigualdades de salud ambiental en Europa, indica también que ese tipo de padecimientos ocupa entre 14% y 54% de los presupuestos de salud de las economías de la región. Cada europeo pierde unos 8,6 meses de esperanza de vida por respirar aire contaminado por encima de los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Además, la población pobre está expuesta hasta cinco veces más que la sociedad favorecida económicamente a los riesgos ambientales, en donde las viviendas inadecuadas causan más de 100 mil muertes anuales en algunas regiones pobres del planeta. En la actualidad el medio ambiente cambia constantemente, por lo que hacen falta estrategias innovadoras para responder a los desafíos que estos cambios suponen para la salud. La presente vulnerabilidad general a estas amenazas exige solidaridad mundial para mejorar la seguridad sanitaria internacional, en tanto que una aspiración colectiva y una responsabilidad recíproca. Siguiendo con el informe de OMS de 2007, las nuevas consignas son: diplomacia, cooperación, transparencia y preparación. Ello supone que tanto la OMS como sus asociados participaran estrechamente en la respuesta mundial que

²⁶³ Reichman J. (2000). *Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia*. Madrid. Catarata.

se dio a la gripe aviar por H5N1, que supuso que se registraran grandes brotes de ésta en aves de corral y al menos 308 defunciones humanas desde 1997, cuando se aisló por primera vez su agente causal en seres humanos. La OMS, en su último informe sobre la salud en el mundo relata la historia de las actividades encaminadas a contener las enfermedades infecciosas (incluidas la peste, el cólera y la viruela), describiendo la evolución de las actividades de vigilancia de brotes y las respuesta desplegadas por asociaciones internacionales de organismos e instituciones técnicas entre las cuales figuran la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN), el sistema de alerta y respuesta ante incidentes químicos y de salud ambiental y la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis; esta última respaldando la vigilancia de muchas otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Siguiendo con el informe de la OMS mencionado, un aspecto que preocupa a todos los gobiernos del mundo es que las enfermedades amenazan cada vez más la seguridad sanitaria mundial. Un factor determinante de riesgo sería la facilidad de una movilidad intensa y rápida a nivel planetario. Las compañías aéreas transportan a más de 2000 millones de pasajeros por año, y de esa manera las personas y sus enfermedades pueden ir de un país a otro en algunas horas. Las posibles repercusiones sanitarias y económicas se observaron claramente en 2003 con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, una neumonía atípica que surgió por primera vez en noviembre de 2002 en China y que se propagó a las vecinas Hong Kong y Vietnam a finales de febrero de 2003, y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas infectadas que costó a los países asiáticos unos US\$ 60 000 millones en gastos brutos. Algunos de los factores humanos de la inseguridad sanitaria que la OMS publicó en el Informe fuero: “inversiones insuficientes en la salud pública por un sentido falso de seguridad ante una ausencia de brotes de enfermedades infecciosas; cambios inesperados de políticas, como la decisión de detener temporalmente la inmunización en Nigeria que condujo a la reaparición de casos de poliomielitis; situaciones de conflicto que dan lugar a migraciones forzadas y hacinamiento, falta de higiene y empobrecimiento y con ello aumentan el riesgo de epidemias; la evolución microbiana y la resistencia a los antibióticos; y amenazas asociadas a la cría de animales y al procesamiento de alimentos, entre ellas la forma humana de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y el virus de Nipah”²⁶⁴.

En España, el delito contra el medio ambiente incluye desde grandes desastres ecológicos como el accidente del *Prestige* ocurrido en 2002, cuando 20.000 toneladas de crudo escaparon de los tanques del barco a 28 millas del cabo Fisterra; o el de los vertidos de Bolidén en Aznalcóllar en 1998 contaminando 4.500 hectáreas de tierra en los lindes del Parque

²⁶⁴ Comunicado de prensa de la OMS.

Natural Coto de Doñana, hasta la generación de ruidos, la caza furtiva, la tala de un árbol, la pesca, la caza, la venta ilegal de productos alimentarios, verter residuos tóxicos en un río, la captura de especies protegidas, las infracciones por llevar a los animales sin bozal o sin correa, las construcciones en vías pecuarias, la extracción de minerales: o los casos que parecen desgracias involuntarias o simples accidentes fortuitos, pero que por su magnitud han sido llevados a los tribunales bajo la misma acusación de delito contra el medio ambiente.

El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, tras lo cual alude directamente a la necesidad de reforzar la protección de ese derecho mediante sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. En virtud de lo cual podríamos definir el bien jurídico protegido en estos delitos, son el mantenimiento de las propiedades del suelo el aire y el agua, así como la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales. Sin perjuicio de anotar la dificultad evidente para concretar un bien jurídico de tan amplio espectro, esa definición puede ser asumida sin dificultad.

El desarrollo de este artículo de la Constitución provocó la promulgación de la Ley Orgánica de 23 de junio de 1983, de Reforma del Código Penal de 1973, incorporando a ese texto punitivo un precepto que por primera vez de forma específica, pero deficiente e insatisfactoria, se ocupaba de la materia. La inoperatividad del mismo, pese a que durante su vigencia las agresiones ecológicas fueron incesantes, fue unánimemente puesta de relieve por la doctrina. Ante este estado de cosas, la regulación que de la materia efectúa más tarde el vigente texto punitivo de 1995 supone un importante paso adelante, si bien presenta una serie de inconvenientes. En un mismo título (XVI), bajo la rúbrica “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”, recoge, en capítulos aparte, los delitos sobre la ordenación del territorio (I), sobre el patrimonio histórico (II), contra los recursos naturales y el medio ambiente (III)

El 23 de diciembre de 2010, con algunos meses de retraso, entró en vigor la modificación del Código Penal, aprobada por Ley Orgánica 5/2010, por la que se modificaron algunos artículos de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, que afectaba a los delitos relacionados con la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Los cambios que esta modificación supone sobre la anterior regulación de dichos delitos son diversos y muy relevantes. Así, por ejemplo, se produce un “aumento generalizado y significativo de las penas para la mayoría de ellos como, en el caso del delito urbanístico (artículo 319), en donde la nueva pena era de un año y cuatro meses a cuatro años de prisión, cambio

este que suponía en muchos casos (cuando la condena supere los dos años), el ingreso efectivo en prisión del que pudiera ser condenado. En esta misma línea, se aumentan las penas de los delitos de emisiones al medio ambiente “Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar” (artículo 325) o el establecimiento de depósitos de residuos tóxicos o peligrosos: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años quienes establezcan depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas” (artículo 328).

Para este tipo de delitos existe una unidad específica de la Guardia Civil conocida como Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que desarrolla funciones asignadas en materia de medio ambiente por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este cuerpo, que existe desde 1988, es el único que tiene competencia exclusiva sobre cualquier tipo de infracción medioambiental. Está presente en todas las comunidades autónomas menos en el País Vasco, donde prácticamente no existe vigilancia sobre estas cuestiones. Esta policía especializada está considerada como una de las mejores de Europa por su preparación. Las áreas de su competencia son las mismas que menciona el artículo 325 del Código Penal: “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera”.

Por otra parte, los delitos contra el medio ambiente algunas veces son muy complicados de detectar y aplicar la legislación. Existen 4.000 normas en vigor, cada caso tiene su normativa especial. Incluso para el SEPRONA es complicado cada vez que ocurre algo tener que aplicar los códigos. No sólo contaminar un río o arrancar un árbol en un parque natural constituye un delito, sino que temas poco conocidos como la contaminación acústica que se produce en una bar nocturno o cualquier otro medio que supere los decibelios permitidos, como el ladrido de un perro, también lo es. Precisamente en las grandes ciudades la contaminación acústica es el tipo de

delito contra el medio ambiente que más veces se repite. Hasta un 60% de las denuncias contra el medio ambiente que se producen en Madrid tienen que ver con el ruido. En marzo de 2006 el dueño del bar de copas Cartoon de Madrid fue condenado a 32 meses de prisión por causar ruido y superar los límites fijados en la Ordenanza de Medio Ambiente Urbano La Fundación de Juristas contra el Ruido, por ejemplo, tiene abiertos más de 200 casos relacionados con el medio ambiente al considerar a éste como “contaminación de materia por forma de energía.

Algunas actuaciones importantes en esta materia se desarrollaron a principios del año 2005 cuando se produjeron brotes de gripe aviar en diferentes países de Asia y África principalmente, aunque también, en menor medida, se detectaron casos de aves infectadas en países pertenecientes a la Unión Europea. Ante esta situación y existiendo serias probabilidades de que se pudieran producir episodios similares a los acaecidos en territorio Español, las autoridades competentes al efecto pusieron en marcha una serie de medidas cautelares de protección encaminadas a evitar o combatir la aparición de la enfermedad. La especificidad del problema obligó a la Guardia Civil a activar mecanismos preventivos, siendo la Orden de Servicio 7/2006, sobre *Adopción de medidas policiales contra la Influenza Aviar*, el documento dónde se dispuso que los componentes del Cuerpo, principalmente a través del SEPRONA, colaboraran con los diferentes servicios de las Administraciones Públicas competentes en la materia. Es de significar que las Comandancias de Melilla y Ceuta fueron las únicas que tuvieron actuaciones relativas a esta materia durante 2010. Melilla, con un total de 70 servicios, siendo intervenidos 86 aves y 784 huevos, y Ceuta con 1 servicio y la incautación de dos aves vivas, que originó la única infracción administrativa en esta materia durante 2010²⁶⁵.

Otra intervención importante fue cuando el día 27 de diciembre de 2006 surgió la primera alerta comunitaria al comunicar Alemania que en una partida de pimientos españoles se había detectado la presencia de un pesticida prohibido en el ámbito de la Unión Europea. Dicha alarma no fue aislada, llegándose a producir durante todo el mes de enero de 2007 hasta 14 notificaciones más, procedentes de Finlandia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, de lo que se desprendió que el problema adquiriría una dimensión internacional. Como consecuencia de esta situación, fue convocada una reunión en la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, acordándose adoptar ciertas medidas para incrementar el control de los productos fitosanitarios. Por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil se dictó la Orden de Servicios 7/2007 enfocada a la vigilancia

²⁶⁵ Ministerio del Interior (2010). Anuario estadístico 2010. Madrid. Ministerio del Interior.

y control de los mencionados productos en todo el territorio nacional, que se desarrolló entre el 10 de marzo y 31 de mayo del 2007²⁶⁶.

Según el Informe de la Fiscalía del Estado²⁶⁷ del año 2011, otro tanto ocurre en el ámbito de la protección del medio ambiente y el urbanismo. La acción coordinada del Fiscal desde que se creó la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, ha supuesto, por ejemplo y a título meramente ilustrativo, que de 141 sentencias condenatorias por delitos contra la ordenación del territorio en el año 2006 hayamos pasado a 426 en 2011, o que su actividad en el ámbito de los incendios forestales haya llegado a constituir una referencia obligada no ya para la represión de las conductas delictivas, sino también en las tareas de prevención.

La serie histórica de los delitos sobre el medio ambiente son difíciles de obtener porque se ofrecen dentro del epígrafe del Grupo Penal XI “resto delitos código penal” y allí se hace referencia a los delitos sobre ordenación del territorio, sobre el patrimonio histórico, emisiones a la atmósfera, depósitos vertidos residuos tóxicos-peligrosos, otros contra recursos naturales y medio ambiente, caza, pesca, otros relativos protección flora y fauna. Además, al no existir un anuario con series históricas es necesario acudir a todos los anuarios desde 1999 con la dificultad de conseguir los anuarios de 2001 y 2002.

Cuadro 49. Evolución denuncias cursadas por la Guardia Civil en materia de medio ambiente.

	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	122	117	86	130	348	567	825	639	569	402	296
PATRIMONIO HISTÓRICO	66	71	48	52	40	37	33	32	24	36	30
EMISIONES ATMÓ	36	40	26	41	33	38	33	39	15	11	19
RESIDUOS TÓXIC	192	247	134	173	68	73	68	45	33	40	38
RECURSOS NATURALES	251	216	185	202	189	178					
CAZA	44	33	30	42	122	79					
PESCA	8	3	7	6	9	7					
PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA.	245	238	161	250	417	283	260	283	306	223	306

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Anuarios del Ministerio del Interior

A partir de 2007 se produjo un vuelco de gran magnitud en el Anuario Estadístico de ese año en lo que a datos sobre delitos contra el medio ambiente se refiere ya que un apartado específico se enumera pormenorizadamente los delitos llevados a cabo en este apartado. Por conceptos como: ordenación del territorio, vías pecuarias, minería, turismo, ocio y deportes, leyes, sanitarias, flora bosques montes, incendios forestales,

²⁶⁶ Ministerio del Interior (2008). Anuario estadístico 2007. Ministerio del Interior. Pág. 455.

²⁶⁷ Fiscal General del Estado (2011). Informe general 2010. Pág. XIV.

fauna salvaje, c.i.t.e.s, animales, domésticos, aguas marítimas, costas, aguas continentales, residuos, atmósfera, patrimonio, históricos, otros. Según estos a lo largo de 2007 se produjeron en España un total de 4.029 delitos, 350 faltas y 138.706 infracciones administrativas, en total 143.085 casos contra el medio ambiente. Fueron detenidas 474 personas. Entre los más frecuentes, los relacionados con la ordenación del territorio, concretamente, 587 edificaciones para uso residencial. También fueron muy numerosos los que tuvieron que ver con incendios forestales de: monte bajo (796), arbolado (472), pastos, dehesas (328), construcciones (171), muertes de animales (68), robos domésticos (165), utilización indebida de aguas continentales (92).

Llaman la atención algunas cifras, como las 83 infracciones administrativas cometidas por el uso de detectores de metales en zonas declaradas de patrimonio histórico, los 16 detenidos por venta ilegal de productos alimentarios o los 9 por la captura de especies protegidas. Hubo también un total de 605 casos de infracciones por llevar a los animales sin bozal o sin correa. Otro de los datos más llamativos que se desprenden de este informe y que pone en evidencia que en el ámbito medioambiental se cometen más infracciones que delitos es que de los 22 casos de construcciones en vías pecuarias, sólo dos constituyeron delito, frente a 20 infracciones. Lo mismo con la extracción de minerales: 200 infracciones frente a ocho delitos. La distribución geográfica de los agentes va en función de la problemática medioambiental que haya en la zona. En Soria, por ejemplo, sólo existen cuatro patrullas y el personal está más centrado en la prevención. En los parques nacionales, sin embargo, hay destacamentos, unidades que no se mueven de ahí, que están destinadas específicamente en ese entorno. Hay que destacar que lo importante no es la cantidad de delitos que se producen, sino la calidad, ya que no es lo mismo cazar un conejo fuera de veda que verter residuos tóxicos en un río.

9.2. La delincuencia internacional

Hasta el momento hemos analizado los delitos originados dentro de las fronteras de España, pero existe un tipo de delincuencia cuyo germen se produce desde fuera y que no está muchas veces sujeto ni a las leyes ni a la jurisdicción de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados soberanos. Es la internalización del crimen como producto de bandas que operan entre varios países o que cometen los delitos desde fuera para verse beneficiados de una legislación más benigna. El constante progreso tecnológico que experimenta la sociedad, supone una evolución en las formas de delinquir, dando lugar, tanto a la diversificación de los delitos tradicionales como a la aparición de nuevos actos ilícitos. Esta realidad ha originado un debate en torno a la necesidad de distinguir o no los delitos informáticos del resto. Dado que la delincuencia ha adquirido dimensiones mundiales, las

respuestas nacionales son insuficientes porque simplemente trasladan el problema de un país a otro. Es por ello que según la ONU, se precisen respuestas globales sobre la base de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) aprobada en 2000. O que determinados países, entre ellos España, hayan firmados convenios multilaterales como el del ciberdelito del 2002.

El problema de la delincuencia organizada internacional se incorporó a la agenda de muchos países sólo recientemente, a pesar de ha concitado una atención considerable en los últimos años. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entró en vigor en 2003. Al año siguiente, el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio de la ONU incluyó la delincuencia organizada transnacional entre los seis grupos de amenazas que deben preocupar al mundo hoy y en los decenios por venir²⁶⁸. El Informe presentado al Secretario General de la ONU y elaborado por ex Primer Ministro de Tailandia, contenía 101 recomendaciones para hacer frente a las seis áreas identificadas por el Panel como las mayores amenazas a la seguridad mundial en el siglo XXI: estas amenazas incluían la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación del medio ambiente; la guerra y la violencia internas; la proliferación y el posible uso de armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas; el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Las amenazas provienen tanto de actores estatales como no estatales y afectan la seguridad tanto de los Estados como de los seres humanos. En febrero de 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU constató con preocupación las graves amenazas que la delincuencia organizada transnacional plantean en algunos casos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo e invitó al Secretario General a que considerase la posibilidad de incorporar esas amenazas como factor en las estrategias de prevención y análisis de conflictos, y en la evaluación y la planificación integradas de las misiones. Los problemas de la delincuencia organizada transnacional incluye la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de heroína, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, el contrabando de recursos ambientales, el contrabando de productos falsificados, la piratería marítima y la ciberdelincuencia.

De acuerdo a otro informe publicado en el año 2010 titulado "La Globalización del Delito: una evaluación de la amenaza del delito organizado transfronterizo"²⁶⁹, efectuado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), existen dos maneras de contemplar la delincuencia organizada transnacional (Transnational Organized Crime,

²⁶⁸ United Nations (2004). *A more secure World: our shared responsibility*. New York. United Nations.

²⁶⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (2010). *The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment*. Viena. United Nations Office on Drugs and Crime.

TOC): una es centrándose en los grupos del delitos múltiple llevados a cabo por delincuentes profesionales, mientras que otra, es centrándose en los mercados ilícitos. Hasta la fecha, la mayor parte de atención se ha dirigido hacia la primera aproximación, abordando los grupos TOC, por medio de herramientas que incluyen las detenciones y las incautaciones, con algunos éxitos a nivel nacional. Los éxitos obtenidos a nivel nacional a menudo han empujado a que los flujos de tráfico se desviarán hacia otros países, por medio de ruta menos vigilada de países con poca capacidad para soportar la carga de TOC. Sin embargo, los problemas del crimen organizado²⁷⁰ hoy en día parecen ser menos una cuestión menos de un grupo de individuos que participan en una gama de actividades ilícitas, y más un asunto de un grupo de actividades ilícitas en la que están involucrados algunos individuos y grupos. Las estrategias dirigidas a los grupos no detendrá la realización de actividades ilícitas, si las dinámicas del mercado permanecen inalteradas. La mayor parte de las TOC fluyen desde un continente a otro por medio de un tercero, es decir es un flujo interplanetario y sólo una intervención a ese nivel es posible que pare el problema. El narcotráfico de la cocaína es el negocio ilícito que más dinero genera en el mundo, mientras que el delito menos lucrativo sería el de la piratería. Las estimaciones de la ONU cifran en 38.000 millones de dólares al valor anual de la cocaína que llega a Norteamérica desde la región andina, mientras que la misma droga que entra en Europa generaría 34.000 millones de dólares. Cerca del 90 por ciento de la producción de la heroína procede del opio cultivado en Afganistán, consumiéndose en Europa, Rusia y países colocados en la ruta. Mientras que el flujo de la cocaína procede de la región andina y del norte de América. A las implicaciones económicas que suponen estos negocios ilícitos para las economías de los países, se suman los daños en la población generada por la adicción, las bandas de delincuencia relacionadas con el narcotráfico, la guerrilla armada en la región andina, la inestabilidad y la corrupción, y los problemas de salud, incluidos la difusión del sida.

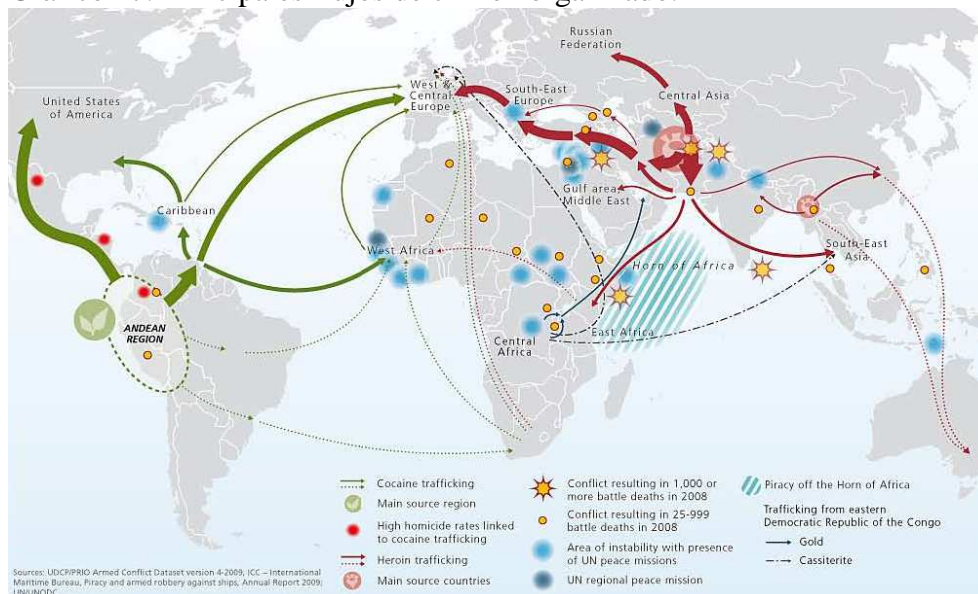
Después de la droga, destaca como negocio ilícito el contrabando de personas, que afecta a 137 países, dos terceras partes de las cuales fueron mujeres, de las que el 79 por ciento lo fueron para explotación sexual. La mayor parte del tráfico, un 51 por ciento, procede de los Balcanes y de la antigua Unión Soviética. Genera unos ingresos anuales de 6.600 millones de dólares para los contrabandistas de inmigrantes de América Latina hacia Norteamérica, con cerca de unos 3 millones de incorporaciones al mercado de destino. En Europa sólo el tráfico de personas para su explotación sexual, afecta a unas 70.000 víctimas cada año, generando unos 3 billones de dólares, mientras que otros 55.000 inmigrantes en el año 2008, facilitaron

²⁷⁰ Jaime O. y Castro L. (2010). La criminalidad organizada en la Unión Europea. Estado de la cuestión y respuestas institucionales”, Revista *CIDOB d’Afers Internacionals*. Nº. 91. Págs.173- 194.

unas ganancias a sus contrabandistas de 150 millones de dólares. Lo que provoca la existencia en todo el mundo de millones de esclavos modernos comercializados a un precio no superior, en términos reales, al de hace siglos. La red cibernética ofrece también amplias oportunidades para cuantiosos beneficios ilícitos y el "ciberdelito" a través de Internet se ha convertido en uno de los más importantes de la era informática. Según la ONU, cerca de 1,5 millones de personas son cada año víctimas del robo de identidad electrónica, principalmente en Estados Unidos, con daños en torno a los 1.000 millones de dólares, además de causar "efectos depresivos en la economía", elevar los costes del crédito y reducir la confianza en el comercio electrónico.

Siguiendo con el informe de la ONU, aunque genera menos dinero en su totalidad, no menos grave es la pornografía infantil debido al trauma que causa a los menores. Cada año se generan unas 50.000 imágenes nuevas de pornografía infantil, con un movimiento de unos 250 millones de dólares. Entre los delitos medioambientales, es de destacar, el creciente contrabando de marfil, con unos 62 millones de dólares al año, y otros productos de especies protegidas como la de los rinocerontes, en serio peligro de extinción, principalmente desde África hacia el sureste asiático. Además, unos 20 millones de metros cúbicos de madera protegida que sale de esa región hacia Europa y otros países asiáticos se vende por unos 3.500 millones de dólares. A través de la falsificación de productos se generan unos 9.800 millones de dólares anuales, de los cuales 8.200 millones de dólares corresponden a productos elaborados en Asia y vendidos en Europa. El resto se refiere a medicamentos falsos, una infracción que además de que puede resultar muy peligrosa para el consumidor final, es alarmante por el riesgo de que genere agentes patógenos resistentes desconocidos. En cuanto al tráfico ilegal de armas de fuego, las dos versiones más importantes son el tráfico de Estados Unidos a México para fines delictivos y el de fines políticos de Europa a África, se calcula que sólo de Estados Unidos a México se venden cada año unas 20.000 pistolas de particulares por unos 20 millones de dólares.

Gráfico 27. Principales flujos de crimen organizado.



Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime (2010). The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment. Viena. United Nations Office on Drugs and Crime. Pág. 2.

9.3. El cibercrimen

El cibercrimen es el término genérico utilizado para denominar aquellas operaciones ilícitas que se llevan a cabo por medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin embargo, las categorías que definen un delito informático pueden ser aún mayores y complejas y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados. En menos de dos décadas, Internet ha crecido de ser casi una curiosidad de circo a ser un elemento esencial de la vida moderna de millones de personas. Al igual que con otros aspectos de la globalización, su rápida expansión ha superado la capacidad regulatoria, y esta ausencia de autoridad ha dejado espacio para muchos abusos. El problema se agrava por el hecho de que el Internet fue creado en un sistema militar diseñado para eludir las interferencias y los controles externos. En los últimos tiempos se ha llegado a la constatación a nivel internacional que a pesar de su anarquía creativa, Internet, sólo puede alcanzar su pleno potencial si se establecen algunas reglas básicas y se desalienta su potencial delictivo.

Con la incidencia de este nuevo tipo de delincuencia, en España se creó un grupo de delitos telemáticos para investigar, dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, todos aquellos delitos cometidos a través de Internet. Su origen se remonta al año 1996 cuando se constituyó el Grupo de Delitos Informáticos (GDI) para atender a las pocas denuncias que había

entonces por los denominados como delitos informáticos. El aumento exponencial de usuarios de la red, propiciaron el crecimiento del grupo, que pasó a denominarse Departamento de Delitos de Alta Tecnología (DDAT), asumiendo como nueva competencia el fraude en el sector de las telecomunicaciones. Con la socialización de Internet y el crecimiento de los hechos delictivos, se amplió el abanico de competencias de investigación, que alcanzó a todas aquellas conductas delictivas realizadas a través de los sistemas de información o contra éstos. El departamento cambió de nombre por el actual, Grupo de Delitos Telemáticos (GDT). Estos cambios supusieron la creación de los denominados como Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) en cada una de las provincias de España.

Se entiende por ciberdelincuencia o delito informático aquellas acciones que han sido cometidas mediante la utilización de un bien o servicio informático, sin dejar a un lado que un sistema informático también es un bien jurídico que recibe protección por parte del ordenamiento jurídico. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con lo que ello supone: potenciación del comercio electrónico, globalización de la economía, posibilidad de acceso a diversos recursos, abre una nueva posibilidad de delitos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas. De acuerdo al informe “Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia”²⁷¹, de la Comisión Europea, a falta de una definición comúnmente aceptada de ciberdelincuencia, los términos «ciberdelincuencia», «delincuencia informática», «delincuencia relacionada con los ordenadores» o «delincuencia de alta tecnología» se utilizan a menudo indistintamente. En definitiva, por ciberdelincuencia se entiende las actividades delictivas realizadas con ayuda de redes de comunicaciones y sistemas de información electrónicos o contra tales redes y sistemas.

Según el Informe de la ONU sobre la globalización del delito, en la práctica, el termino ciberdelincuencia engloba tres tipos de actividades delictivas. El primero comprende formas tradicionales de delincuencia, como el fraude o la falsificación, aunque en el contexto cibernético se refiere específicamente a los delitos cometidos mediante las redes de comunicaciones y los sistemas de información electrónicos (en lo sucesivo, redes electrónicas). El segundo se refiere a la publicación de contenidos ilegales a través de medios de comunicación electrónicos (por ejemplo, imágenes de abuso sexual a menores o incitaciones al odio racial). El tercero incluye delitos específicos de las redes electrónicas, por ejemplo los ataques contra los sistemas informáticos, la denegación de servicio y la piratería. Estos ataques también se pueden dirigir contra infraestructuras críticas fundamentales en Europa y afectar a sistemas de alerta rápida existentes en

²⁷¹ Comisión de las Comunidades Europeas (2007). Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia. Bruselas. COM (2007) 267 final.

numerosos ámbitos, con consecuencias potencialmente desastrosas para el conjunto de la sociedad.

De acuerdo al “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, del Consejo de Europa del año 2001, se pueden definir los delitos informáticos como: “los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos”, las características principales, serían: Son delitos difíciles de demostrar ya que, en muchos casos, es complicado encontrar las pruebas. 2. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos, utilizando sólo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos. 3. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de los mismos.

Mientras que los delitos más conocidos son²⁷²:

Ataque DDoS (Distributed Denial of Service). Una forma relativamente sencilla y efectiva de destruir una web. Las acciones se pueden realizar de forma voluntaria siguiendo las instrucciones dadas para iniciar el ataque a una hora señalada en una convocatoria mediante foros en la Red, o utilizando redes de ordenadores previamente infectados por virus (botnet) de forma que los usuarios ni siquiera son conscientes de que participan. Anonymous es el grupo procedentes de Estados Unidos que ha protagonizado los ataques más famosos, caracterizándose porque no tienen ningún líder y deciden sus acciones mediante foros y campañas respaldadas por internautas de todas las edades y de muchos lugares (El País, 20 de octubre de 2010).

Spam. Se El Spam o los correos electrónicos, no solicitados para propósito comercial, es ilegal en diferentes grados. La regulación de la ley en cuanto al Spam en el mundo es relativamente nueva y por lo general impone normas que permiten la legalidad del Spam en diferentes niveles. El Spam legal debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos como permitir que el usuario pueda escoger el no recibir dicho mensaje publicitario o ser retirado de listas de email.

Fraude. El fraude informático es un área de crecimiento rápido del ciberdelito que puede potencialmente afectar a cualquiera que tenga acceso a Internet. El anonimato y la relativa facilidad de acceso a un ordenador junto con el desconocimiento del usuario hacen que la posibilidad de fraude para los expertos sea realmente sencilla. Las dos posibilidades de fraude más comunes son destruir el sistema informático del usuario y sustraer cantidades importantes de dinero. Una de las variedades más comunes es la que se conoce como *phishing*, consistente en una técnica usada por los

²⁷² Ministerio de Defensa (2010). Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad en el ciberespacio. Instituto Universitrio Manuel Gutierrez Mellado. Cuadernos de Estrategia. N° 149.

scanner para obtener información personal de sus víctimas online, típicamente por correos que dicen ser lo que no son, bien empresas respetables, bancos, agencias de gobierno, o incluso algún conocido o institución famosa respetable. Los ciberdelincuentes usan información confidencial, tal como número de cuenta bancaria, fecha de nacimiento, número de la seguridad social, cuentas corrientes en el banco. El término surgió en 1996 por un grupo de hacker cuyos miembros se dedicaban a estafar mediante el novedoso Internet²⁷³.

El contacto grooming, se trata de establecer un contacto físico, una vez que se ha ganado la confianza de una persona a través de la red, normalmente chicas menores que han sido ingenuas a la hora de establecer un contacto. Suele venir procedido de un chantaje sobre alguna foto, imagen o secreto que la víctima ha accedido a compartir. La reforma del código penal español del año 2010 sanciona a todos los que por medio telemático bien Internet o móviles contacten con menores de 13 años, edad de consentimiento sexual legal en España, para encuentros con fines sexuales: “El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 (atentar contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación) a 183 (atentar contra la indemnidad sexual de un menor de trece años) y 189 (captar o utilizar a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico), siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”

Muchos de los ciberdelitos se podrían incluir en el concepto de "delitos de cuello blanco", término introducido por primera vez por el criminólogo estadounidense Edwin Sutherland en 1943, porque supone que quien los comete son personas altamente cualificadas, de clase social o estatus socioeconómico también alto o por lo menos educacionalmente alto y cuya comisión del delito no pueda explicarse siempre por falta de medios económicos, carencia de recreación, poca educación, poca inteligencia, ni por inestabilidad emocional. El ciberterrorismo, constituye uno de los ámbitos a los que mayor atención se dedica por parte de las autoridades de ciertos países hegemónicos. Este fenómeno pasa a ocupar en nuestra actual Sociedad- Red un lugar central, que podría definirse como la utilización de

²⁷³ Stroik Anthony and Huang Wilson (2009). Nature and distribution of phishing. In Scmallegger Frank and Pittaro Michael (Ed.). Crimes of the Internet. Pearson. New jersey. Págs. 191-2006.

Internet con fines terroristas. No estamos aún ante una amenaza consumada de grandes proporciones, pero sí a las puertas de posibles crisis cibernéticas que, coordinadas y combinadas con ataques físicos, pueden suponer una sorpresa estratégica de incalculables consecuencias²⁷⁴.

²⁷⁴ Jaime O. (2009) (Ed.). *La Seguridad Integral: España 2020*, Madrid: Fundación Alternativas.

CAPITULO 10. Delincuencia de Falsedades, Orden público, Administración Pública.

Este tipo de delitos se puede considerar como de cuello blanco, cuya característica principal es que aunque son minoritarios son un problema global de enormes dimensiones. El fraude, la manipulación de mercado y la corrupción pueden encontrarse en diferentes grados en cada economía y sociedad en el mundo. Los esquemas fraudulentos y los escándalos de corrupción corporativa de las dos últimas décadas han confirmado una vez más la continua pertinencia de delitos como una amenaza significativa para la salud económica y social de las Naciones Unidas en todo el mundo²⁷⁵, así como una importante área de investigación criminológica. Para los criminólogos, la importancia de delitos radica en parte en sus aparentes diferencias con otras formas de delincuencia a lo largo de varias dimensiones

10.1. Falsedades:

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es falsedad la “falta de verdad”, la “falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas”. En lenguaje común, falsedad no es otra cosa que la falta de verdad, y es una voz que se aplica a las personas y a las cosas, pero no a las acciones, para las que se utiliza. Con origen en el latín *falsitas*, el concepto de falsedad describe la falta de verdad o autenticidad de un objeto o individuo. Una falsedad puede consistir en una mentira, noción que identifica a una declaración que oculta o tergiversa la realidad de manera parcial o absoluto. En sentido etimológico la palabra falsedad proviene del término latino “*falsum*” que, a su vez, es derivación del verbo “*fallere*” que significa engañar. Partiendo de esta previa aproximación conceptual, falsedad es tanto como decir ausencia de verdad, “mudamiento de la verdad” en la expresiva terminología de Las Partidas’ (“*mutatio veritatis*”)²⁷⁶.

Ya Salvador de Madariaga reseña una curiosa reflexión sobre la norma que prohíbe mentir: “Pasamos así del pensamiento (filosofía) a la acción (ética o moral). Moisés no iba, desierto adelante, rodeado de filósofos, sino de labradores y comerciantes, gentes para quienes verdad y mentira no eran aspectos y conceptos de teoría del conocimiento, sino modos de llevar a cabo actos y contratos (...). No mentir es, pues, no dar gato por liebre; no sisar en el volumen, peso o cantidad; es el principio del comercio honrado, la base de lo que iba a ser el capitalismo moderno, la banca, el cambio, la

²⁷⁵Barak, (2012). *Theft of a Nation: Wall Street Looting and Federal Regulatory Colluding*. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.

²⁷⁶ Calle M. V. (1995). *La falsedad documental inocua en la jurisprudencia española tesis doctoral*. Universidad Complutense de Madrid.

estabilidad monetaria, todo lo que reinó en el mundo atlántico hasta la primera guerra mundial (...); y sigue reinando, al parecer”²⁷⁷.

La falsificación de moneda históricamente fue considerada como un ataque a la soberanía del Rey, incluyéndose en los crímenes de lesa majestad. Siempre ha sido castigado con penas muy graves incluso la pena de muerte. En el anterior código penal se castigaba este delito con la misma pena que el delito de homicidio. En el código penal está establecido en el capítulo XVIII denominado falsedades, que incluye el capítulo I, “falsificación de moneda y efectos timbrados”, y el capítulo II “de las falsedades documentales” (Sección 1.^a De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación; Sección 2.^a De la falsificación de documentos privados; Sección 3.^a De la falsificación de certificados; Sección 4.^a De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje). Se considera moneda la metálica y papel moneda de curso legal, así como las tarjetas de créditos, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, así como los cheques de viaje, equiparándose, también a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y extranjeras²⁷⁸. Debe entenderse: 1. Moneda de curso legal: Es aquella que ha sido emitida por el Estado u organismo autorizado, ya sea nacional o extranjero y que tenga poder liberatorio como medio de pago. 2. Tarjetas de crédito y de débito: son títulos que generalmente se expiden por entidades de créditos, que tienen validez como instrumento de pago, se consideran como moneda a efectos del delito de falsificación. 3. Cheques de viaje: Es un título valor que expide una entidad a cambio de que el tenedor le haya pagado en moneda nacional, el cheque viaje contiene en divisas la suma que ha sido pagada en moneda nacional y sirve para que su titular pueda cobrar en el extranjero la cantidad que figura en el mismo.

La reforma del 2015, establece algunos cambios importantes: Se modifica el artículo 386, que queda redactado como sigue: 1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. El que transporte, expendo o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. 2. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad superior. La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su expedición o distribución o puesta en circulación será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador. 3. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expendo o

²⁷⁷ Cit. En Beneytez M. (1994). El bien jurídico protegido. Concepto de documento. El documento público”, en “Las falsedades documentales”. Madrid. Comares. Pág. 181.

²⁷⁸ Huerta G. (2007). Las falsedades documentales: jurisprudencia comentada. Cizur. Thomson Aranzadi.

distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. 4. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código. 5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.»

E igualmente se modifica el artículo 387, que queda redactado como sigue: “A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que previsiblemente será puesta en curso legal. Se equiparán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras. Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser realizada en las instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, las condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se emita no existiendo orden de emisión alguna”.

Uno de los casos de falsedad documental que más ha trascendido a los medios de comunicación españoles ha sido el de la mujer de un famoso torero que ha sido condenada dentro de lo que se ha dado en llamar Operación Karlos. Esta no era más que una trama en la que diversas autoridades sanitarias concedían de manera fraudulenta lo que eran pensiones de incapacidad laboral. Unas pensiones que se otorgaban a personas que no cumplían con los requisitos necesarios para poder ser beneficiarios de las mismas pero que habían abonado una cantidad determinada de dinero para, de por vida, contar con esta ayuda del Estado.

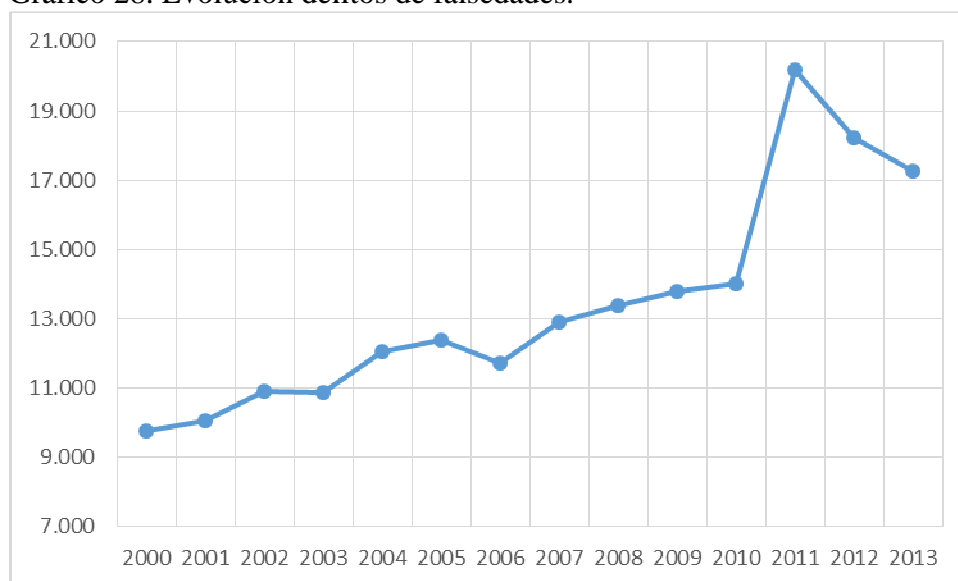
“ La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó en la Operación Karlos al inspector médico Francisco Casto; a María José Campanario, esposa del diestro Jesulín de Ubrique, y a la suegra de este por falsedad documental para intentar conseguir una pensión de forma fraudulenta. En la misma causa fue condenado a cuatro años de cárcel Carlos Carretero, como cerebro de la trama. Según el escrito de acusación, Carretero ideó entre 1999 y 2000 una estructura, con forma de sociedad y con individuos que actuarían como testaferros, con el objeto de beneficiarse ilegalmente de la dificultad de las empresas que realizan su actividad en la economía sumergida del sector de la piel en la sierra gaditana para vender sus productos y justificar sus compras y ventas. Para ejecutar su idea montó una organización dedicada a emitir y vender facturas falsas que eran compradas por empresarios para desgravar de

forma irregular el importe en sus declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades”.

El País, 22 de enero de 2013

Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro de abajo existe una cierta continuidad que se rompe en el año 2011 con una subida significativa de casi el 70 por ciento, aunque los dos años siguientes son de bajada hasta volver a situarse en ratios parecidos a años anteriores al 2011.

Gráfico 28. Evolución delitos de falsedades.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 50. Evolución delitos de falsedades.

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9.757	10.053	10.91	10.884	12.040	12.398	11.716	12.889	13.394	13.792	14.002	20.175	18.223	17.262

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Algunos delitos de los que conforman esta categoría se pueden apreciar en el cuadro transversal de abajo, en donde las falsificaciones de documentos, la usurpación del estado civil y la falsificación del documento nacional de identidad y del pasaporte, son las mayoritarias. La diferencia entre las detenciones de hombres y mujeres es considerable.

Cuadro 51. Delitos de falsedades Año 2006.

	CONOCIDOS				DETENCIONES		
	TOTAL	CONSUMADOS	TENTATIVA	%ESCLARECIDOS	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
FALSIFICACION MON., TARJ., CHEQ. VIAJE	1.313	1.305	8	87,09	771	637	134

FALSIFICACIÓN DNI PASAPORTE	2.103	2.102	1	96,86	2.210	1.840	370
FLSIFICACIONES DOCUMENTOS	5.390	5.382	8	87,63	3.955	3.455	500
FABRICACIÓN TENENCIA DE ÚTILES PARA FALSIFICAR	40	39	1	75,00	23	23	0
USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL	2.580	2.578	2	60,39	1.005	850	155
USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS	410	410	0	52,59	141	135	6
INTRUSISMO	44	44	0	76,19	16	13	3
TOTAL	11.880	11.860	20	82,01	8.121	6.953	1168

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

10.2 Administración Pública

Etimológicamente, el vocablo administrar procede del latín “ad ministrare” y se puede traducir como servir, otra posibilidad es que proceda del latín *ad manus trahere* que podría significar manejo o gestión; por lo tanto administración evoca gobernar, cuidar o regir. En definitiva se podría definir como el conjunto de organismos y personas que se dedican a administrar una empresa o una institución o una parte de ellos. O como el conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el gobierno de los asuntos de un estado. De acuerdo a Diez²⁷⁹, la administración pública es una clúster de límites de difícil precisión que incluye el conjunto de organismos públicos que llevan a cabo una función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su objeto de dedicación, la Administración Pública establece un contacto directo entre la ciudadanía por una parte y el poder político por la otra, cumpliendo con los intereses públicos de forma directa, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediatizada. Además se encuentra controlada tanto por el poder ejecutivo como por los organismos que están en contacto permanente con el mismo.

En concreto los delitos contra la Administración Pública Española se encuentran tipificados en el Título XIX, artículos 404-445 del actual código penal, cabe señalar: los casos de “prevaricación, que incluye a los nombramientos ilegales (arts. 404 a 406 C. P.), el abandono de destino (art. 409 C. P.), la desobediencia y la denegación a auxilio (arts. 410 a 412 C. P.), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (arts. 413 y s. C. P.), las figuras de cohecho (arts. 419 a 427 C. P.) y tráfico de influencias (arts. 428 a 431 C. P.), la malversación (arts. 432 a 435 C. P.), los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438 C. P.), las negociaciones y actividades prohibidas y abuso de la función (arts. 439 a 443 C. P.); y aunque en otro orden la corrupción transnacional (art. 445bis C. P.). Este

²⁷⁹ Diez, Manuel (1977). Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Plus Ultra

apartado incluye delitos con una gran repercusión en la sociedad, que aunque puedan representar una pequeña incidencia en el número total de delitos, tienen una gran repercusión porque los suelen llevar cabo políticos funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, llevan a cabo una resolución arbitraria en un asunto administrativo o cuando en el ejercicio que se les tiene encomendado y a sabiendas de su ilegalidad, propone, nombra o da posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurren los requisitos legalmente establecidos para ello. También cuando un juez o un magistrado dicten alguna sentencia sabiendo que se trata de una resolución injusta. Incluye el cohecho cuando la autoridad o funcionario público, en provecho propio o de un tercero, recibe directamente o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o cuando acepta algún ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes a que está obligado o bien para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.

Por fijar los límites a los que se refiere este apartado, cuando se habla de la Administración Pública en España, hay que decir que ya viene especificada en la Constitución Española de 1978, cuando sostiene que: “sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al derecho”. Mientras que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, establece que la Administración Pública en España está formada por la Administración General del Estado; las Administraciones de las Comunidades Autónomas; las Entidades que integran la Administración Local; y las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas señaladas cuando ejerzan potestades administrativas, sometándose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. Ello supone incorporar a las Administraciones instrumentales o institucionales (organismos públicos) y a las Administraciones corporativas (Colegios profesionales, Cámaras de Comercio, etc.). Así pues, la administración pública en España en realidad engloba un conjunto de administraciones públicas en plural, concretamente unas diez mil, que integran la estructura administrativa del Estado.

Con respecto al ingente patrimonio que debe servir a los propósitos de este enorme ente y que puede ser susceptible de delito caben mencionar los que viene regulado por varios artículos de la Constitución, según los cuales toda la riqueza del país, en sus distintas maneras y sea cual fuere su titularidad, estarían subordinados al interés general. Así, los de propiedad privada (art. 33); los reservados al sector público (art. 128.2); los bienes patrimoniales de los entes públicos (art. 132.3); los bienes de dominio público en general, los comunales y los que integran el Patrimonio Nacional (art. 132). La Ley que

desarrolla el precepto constitucional es la 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). Por tanto, la Administración General del Estado es titular de bienes de dominio públicos (demaniales) y de bienes de dominio privado (patrimoniales). Las comunidades autónomas son también titulares de bienes *demaniales* y patrimoniales, y casi todas tienen una ley de patrimonio propia. No obstante, hay que tomar en cuenta que los bienes patrimoniales de éstas últimas se encuentran controlados en la Ley de Bases de Régimen Local y por el reglamento de bienes de las entidades locales aprobado por Real Decreto 1372/1986; otra cuestión es que las comunidades autónomas hayan establecido algún tipo de normas sobre su patrimonio. Finalmente cabe mencionar a las administraciones instrumentales dependientes de todos los anteriores, es decir, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales que pueden ser titulares de un patrimonio propio o adscrito, que las administraciones territoriales ponen a su disposición para el cumplimiento de sus fines y competencias. Además hay que mencionar al patrimonio empresarial de la Administración General del Estado que posee un régimen especial.

Cabe mencionar también por su importancia a todas las personas que trabajan en lo que se conoce como empleo público o conjunto de personas que prestan sus servicios a la Administración y que a cambio de una remuneración desempeñan sus servicios a cuenta del órgano o ente al que están adscritos. Están regulados por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que distingue según el nivel de compromiso como funcionarios públicos, entre los que se incluyen funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. El número de funcionarios en España rondaría los 3 millones de empleados, casi la mitad correspondería a las comunidades autónomas, en donde casi la mitad serían funcionarios de carrera, representando en el conjunto de los trabajadores españoles a un veinte por ciento. Además y dentro del tema que estamos tratando es importante la ley de Contratos del sector público, Ley 30/2007, que garantiza la imparcialidad y la accesibilidad de los contratos en términos de igualdad de todos los ciudadanos, por la cual la Administración Pública contrata con particulares no estando regido por el derecho civil, sino por el administrativo.

Por otra parte, los efectos públicos son todos aquellos objetos o bienes (distintos del dinero) que reúnan varias características, con independencia de que sean inventariables o no (por ejemplo, sustracciones de material de oficina). El artículo 90 de la Ley General Presupuestaria (ley 47/2003) indica que constituye el tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la Administración. Hay que tener en cuenta que aquellos objetos o bienes que la administración tiene en depósito no tienen esta categoría de “públicos” por lo que si el funcionario se apodera de ellos no se infringiría en ese delito. Tal como lo entiende la sentencia del

Tribunal Supremo 2-2-1998 en relación a un funcionario de correos que se apropió de paquetes o la otra sentencia del Tribunal Supremo de 18-3-2002 relativa a un guardia civil que se apropió de un arma depositada en su comandancia, o incluso otra del mismo Tribunal Supremo 15-2-2003 en donde se castiga a un secretario judicial por la apropiación de cantidades depositadas en un juicio ejecutivo de reclamación de cantidad (se trataría de delitos de apropiación indebida, dado que los objetos son de titularidad privada, aunque ocasionalmente se encuentren en la circunscripción de la administración). Por lo que, normalmente, el autor de este delito es condenado a pagar una responsabilidad civil a la administración, que es quien sufre el daño. Corresponde al Tribunal de Cuentas establecer cuál debe de ser la cantidad, concretar el importe de los daños y perjuicios causados.

En los últimos años este tipo de delito ha despertado una gran repulsa en la sociedad española. La burbuja inmobiliaria provocó numerosos casos de corrupción llevados a cabo por políticos. Uno de ellos, si acaso el más famoso, ha sido el denominado como *caso Treball*, principalmente por la medida de indulto hacia los que se encontraban en esa trama. La connivencia política ha quedado de manifiesto en los numerosos caso de indultos hacia la clase política, como los del exalcalde y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Abdalajis (Málaga) por un caso de prevaricación o el del indulto a varios Mossos d'Esquadra condenados por torturas. Desde 2000, los gobiernos respectivos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han concedido nada menos que 226 perdones a condenados por delitos contra la administración pública.

“El Gobierno ha indultado al ex secretario general del Departamento de Trabajo Josep María Servitje, que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el llamado «caso Treball» por desviar fondos de la Generalitat a través de la contratación de estudios inútiles. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el indulto de Servitje, al que se ha sustituido la pena de prisión por una multa de 3.600 euros, junto a la del empresario de UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenado a dos años y tres meses por el «caso Treball» y a un año y un mes de cárcel por el llamado «caso Turismo»...Servitje, que fue secretario general del Departamento de Trabajo con el conseller de UDC Ignasi Farreres, fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por considerar que urdió junto Acuña la trama que permitió el desvío de 7,6 millones de las antiguas pesetas de la consellería mediante la contratación de estudios inútiles por parte de empresarios afines.. En su disposición, el Gobierno asegura que ha concedido el indulto a Servitje, acordado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, teniendo en cuenta los informes del tribunal que lo juzgó y del Ministerio Fiscal”. ABC, 13 de marzo de 2012

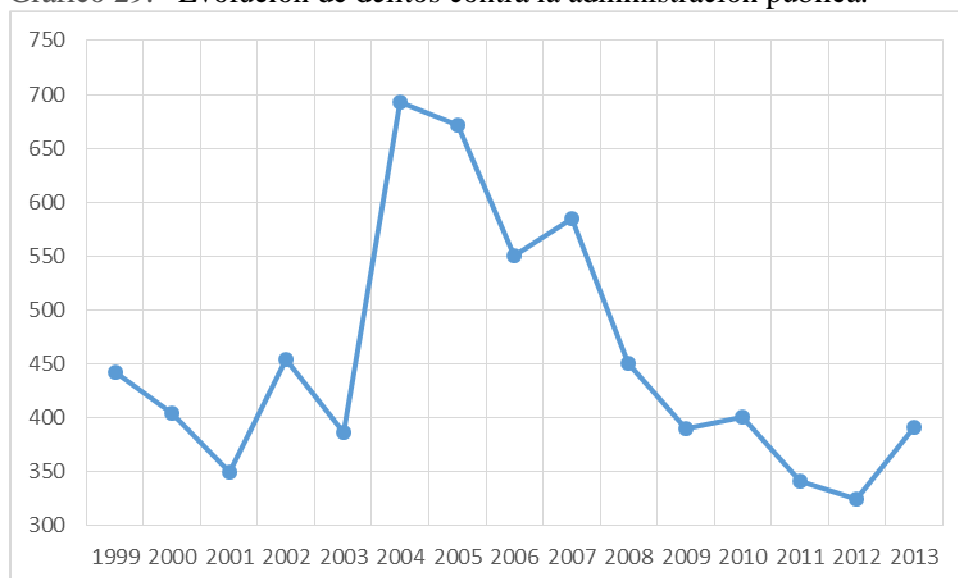
La ausencia de datos estadísticos de acceso público en España sobre los indultos dificulta notablemente el conocimiento de la práctica de su concesión, pues solamente puede reconstruirse a partir de la información que aportan los reales decretos mediante los que son otorgados. En un artículo sobre las concesiones de indultos en España durante los años 2000-2008 basado en los diferentes indultos que fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado durante los últimos 13 años relativos a las principales infracciones de este tipo, los resultados de la investigación fueron los siguientes: 25 indultos por prevaricación; 107 por malversación de caudales públicos y 16 por cohecho²⁸⁰.

Como se puede verse en el cuadro de abajo, del año 2003 al 2004, los delitos suben abruptamente un 55 por ciento, para iniciar luego una caída a través de los años que hace que la tenencia se coloque al mismo nivel que en el año 2002. El punto de inflexión al alza en 2004 se debe a la impronta de la Ley 2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, cuya transgresión de la personas sometida a esta orden fue codificada como desobediencia y en otros caso como quebrantamiento de condena²⁸¹. Por medio de esta Ley se unificaban los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos. Pretendiendo que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instrucción, se pudiera dotar a la víctima de un estatuto integral de protección que concentraba de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. En una misma resolución judicial se incorporaban conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil.

²⁸⁰ Antonio Doval A. et al. (2012). Las concesiones de indultos en España (2000-2008). Revista española de Investigación Criminológica.

²⁸¹ MIR (2006). Anuario estadístico 2005. Pág. 246.

Gráfico 29. Evolución de delitos contra la administración pública.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 52. Evolución delitos contra la administración pública.

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
442	404	349	454	386	693	672	550	585	451	390	401	341	325	391

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Algunos de estos delitos se pueden apreciar en el cuadro de abajo. Llama la atención el alto porcentaje de delitos esclarecidos.

Cuadro 53. Delitos contra la administración pública.

	CONOCIDOS			% Esclarecidos	DETENCIONES		
	TOTAL	Consumados	Tentativa 1*		TOTAL	Hombres	Mujeres
PREVARICACIÓN	37	37	0	96,88	15	10	5
ABANDONO DESTINO / OMISIÓN DEBER	11	11	0	100,00	9	7	2
DESOBEDIENCIA / DENEGACION	352	352	0	94,78	161	147	14
INFIDEL. CUSTODIA DOCUM. / VIOLACIÓN	31	31	0	70,00	10	9	1
COHECHO	83	82	1	98,80	199	171	28
TRÁFICO INFLUENCIAS	9	9	0	100,00	3	2	1
MALVERSACIÓN	17	17	0	87,50	6	4	2
FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES	18	18	0	35,29	7	5	2
NEGOCIOS O ACTDADES PROHIBIDAS	12	12	0	100,00	9	8	1
TOTAL	570	569	1	92,55	419	363	56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Según una nota de prensa de 3 de marzo de 2015²⁸²: Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil habían desarticulado un entramado empresarial ficticio dedicado a defraudar a la Seguridad Social. En el marco de esta operación habían sido detenidas 75 personas relacionadas con contratos de trabajo falsos y altas irregulares encaminados a obtener, de manera fraudulenta, subsidios por desempleo y permisos de residencia, así como a realizar estafas mediante compras a crédito. Las investigaciones practicadas por los agentes pusieron de manifiesto la existencia de un entramado de ocho empresas ficticias, supuestamente dedicadas a la construcción, que no tenían actividad real y en las que no existía una relación laboral efectiva entre trabajadores y empresas. Los agentes determinaron que los empresarios, en ocasiones a través de intermediarios, captaban principalmente a ciudadanos extranjeros en precaria situación económica. Les ofertaban contratos de trabajo que no amparaban una relación laboral real, así como el alta en la Seguridad Social a cambio de diferentes cantidades de dinero. Como continúa la nota de prensa, los métodos eran utilizados por los presuntos trabajadores para acceder a prestaciones o subsidios por desempleo, solicitar la renovación de sus permisos de residencia, tener acceso al sistema de Seguridad Social o cumplir con el periodo de carencia necesario para otras prestaciones como jubilación o maternidad. Como resultado de la investigación fueron detenidas un total de 75 personas, en Valencia capital y en distintas localidades de la provincia de Valencia, con diferente implicación en los delitos de falsedad documental, estafa, defraudación a la seguridad social y pertenencia a organización criminal. Los investigadores estimaron que la cantidad total defraudada ascendería a 400.000 euros.

Otro de los casos más famosos y recientes ha sido el de la Operación Púnica²⁸³, que todavía sigue su curso, y que debe su nombre al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias de un juez de la Audiencia Nacional de España por el que fueron arrestados 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales. Entre los arrestados se encuentran Francisco Granados, secretario general del Partido Popular de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid. Además en la misma operación están incluidos seis alcaldes de la comunidad de Madrid, el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, y el presidente

²⁸² http://www.policia.es/prensa/20150303_1.html

²⁸³ Fiscalía Anticorrupción. Nota de prensa Operación Púnica. https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/nota%20de%20prensa%20operacion%20Púnica.pdf

de la Diputación de León. Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados. La investigación de este conglomerado fue posible por la cooperación internacional a partir de la recepción de una comisión rogatoria de la Confederación Helvética por tener sospechas de que se estaba produciendo un delito de blanqueo internacional. Las diligencias previas se iniciaron en el año 2014 por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal. El cohecho supuso adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las haciendas municipales y autonómicas.

En su conjunto las acciones han sido:

- .- 51 Detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia
- .- 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos
- .- 400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.
- .- 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

10.3. Administración de justicia.

Este delito se encuentra tipificado en el código penal en el Título XX del libro II, artículos 446 a 471. Para hacernos una idea de en qué consiste este delito y de su evolución en las leyes, en el anterior código penal de 1983 se encontraba registrado en el Título IV, artículos 325 a 338 bis, que lo denominaba como “De los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos” en donde se ubicaba tanto la prevaricación judicial como la de los funcionarios públicos y la de abogados y procuradores, con lo que podemos apreciar que ha aumentado considerablemente, en lo que se ha considerado como un gran acierto de deslinde. El primer código penal que incluyó este delito fue el de 1928, consolidándose en el código de 1932 y fue aumentando progresivamente en los códigos penales posteriores. Entre los capítulos que comprende figuran la prevaricación, la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, encubrimiento,

realización arbitraria del propio derecho, acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos, falso testimonio, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional, quebrantamiento de condena, contra la Administración de Justicia de la Corte Penal internacional. Como señala su encabezamiento se trata de un delito que atenta contra una institución tan importante como es la de administrar justicia. Por ello, los artículos 508, 509, 534 a 536, 537 y 633, así como otros muchos, también están relacionados con este tipo de delito²⁸⁴.

El Poder Judicial en España está regulado por el título VI de la Constitución, configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. El artículo 122 de la Constitución española dispone que la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. La división de poderes, determina que la administración de justicia supone de manera exclusiva e independiente, ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que emanan de la voluntad popular, sometiendo a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Ley, controlando la legalidad de la actuación administrativa y ofreciendo a todas las personas una tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

En su aspecto más cualitativo incluye a los jueces, magistrados, secretarios judiciales, testigos, peritos, intérpretes, abogados, procuradores, graduados sociales, sentenciados, presos y denunciados. En su aspecto más cuantitativo, el capítulo que engrosa de manera especial esta figura delictiva dentro de las estadísticas a gran distancia es el de “quebrantamiento de condena”. Se trata de una figura delictiva que ya se encuentra registrada en el derecho romano en las Partidas y tipificado en España desde el código penal de 1822. En el actual código penal le incluye en cuatro artículos que se pueden desgajar en dos grandes bloques: el incumplimiento de la pena impuesta, perpetrados por propio reo o auto quebrantamiento de condena el referido a los incumplimientos de condena, y el relativo a conductas de participación o favorecimiento en el quebrantamiento ajeno²⁸⁵. Especialmente importante es el artículo 468 porque está relacionado con la

²⁸⁴ Goyena J. (2002). La prevaricación. En Hernández Javier et al. (Ed.). Los delitos contra la Administración de justicia. Navarra. Aranzadi. Págs. 19-77

²⁸⁵ Rodríguez P. y Sobrino A. (2008). Delitos contra la Administración de Justicia. Barcelona. Bosch. Pág. 292.

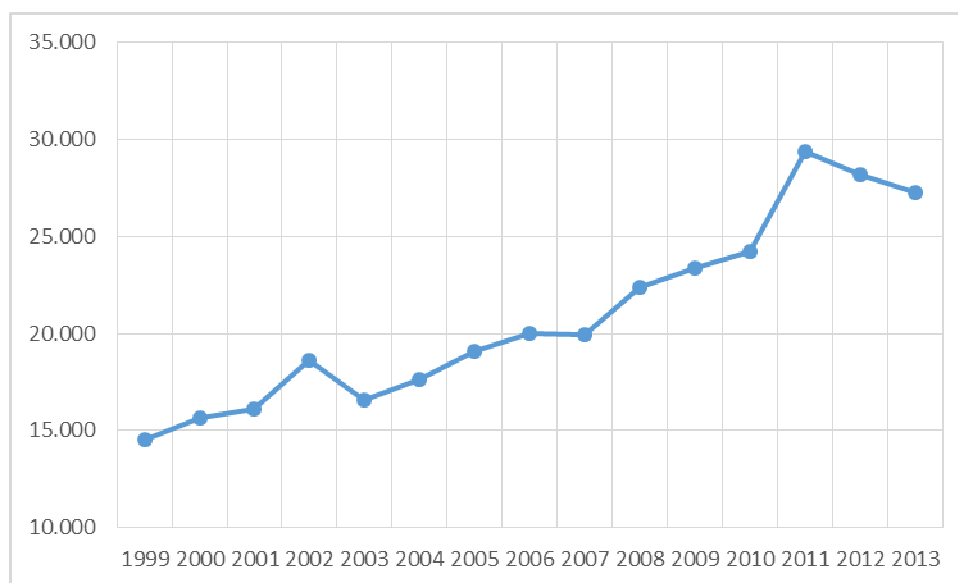
violencia de género, por ello es el que más actualizaciones ha sufrido, la última en 2015. Supone una condena o una actuación cautelar de no acercarse o comunicarse con la víctima que ha sido objeto de agresión de algún tipo con independencia de que la víctima desee reanudar la relación o la vida en común. En el caso en que sea la propia víctima la que accede a romper el mandato judicial y volver a convivir con esa persona, el delito es achacable al condenado. Otro quebrantamiento frecuente es de conducir un vehículo sin carné de conducir después de que Tráfico se lo haya retirado previamente. Es por ello que en este delito, la mayor parte de los inculpados son hombres.

En este capítulo hay que tener en cuenta el punto de inflexión al alza en 2004 debido a la impronta de la Ley 2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, cuya transgresión de la personas sometida a esta orden fue codificada como desobediencia y en otros caso como quebrantamiento de condena²⁸⁶. En el anuario del año 2006, se puede apreciar este salto ya que de 2.956 delitos del año 2002, se pasa a 4.121(2003), 7.267 (2004), 9.245(2005), 10.331(2006). Aunque hay que hay que analizar los datos con cautela ya que como se advierte en la página 249 del citado anuario estadístico el posible error originado en la Guardia Civil al no computar 10.664 infracciones penales todas en la Comunidad Autónoma de Madrid, sin poder determinar su calificación (delito o falta) ni su tipología penal.

De acuerdo a la serie histórica, este delito empezó a crecer desde 2008 hasta alcanzar el punto más alto en el año 2011. El número de casos resueltos está en torno al 90 por ciento de los delitos.

Gráfico 30. Evolución de delitos contra la administración de justicia.

²⁸⁶ MIR (2006). Anuario estadístico 2005. Pág. 246.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 54. Evolución delitos contra la administración de justicia.

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14.520	15.649	16.148	18.643	16.602	17.649	19.063	19.984	19.946	22.382	23.369	24.224	29.410	28.205	27.245

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Algunos de los delitos contra la administración de justicia en el año 2006 quedan reflejados en el cuadro de abajo.

Cuadro 55. Delitos contra la administración pública.

	CONOCIDOS		% Esclarecidos	DETENCIONES		
	TOTAL	Consumados		TOTAL	Hombres	Mujeres
ENCUBRIMIENTO	70	70	0	85	63	22
QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA	14.223	14.217	6	9.745	9.216	529
EVASIÓN ESTABLECIMIENTO	33	32	1	21	20	1
OTROS CONTRA ADMÓN. DE JUSTICIA	4.080	4.073	7	2.428	1.974	454
TOTAL	18.406	18.392	14	12.279	11.273	1006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

10.3. Orden público:

Como se sostiene desde el diccionario, el orden público es la situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Está estrechamente relacionado con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder político y el de consenso social. Desde el punto de vista del Derecho civil, el orden público es el

«conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada. Como expresión, muy a menudo se restringe en su uso a su sentido negativo: la alteración del orden público, asimilada a distintas formas de delincuencia, marginalidad, protesta pública, revuelta y, en los casos más graves, revolución o subversión; especialmente desde una concepción autoritaria del orden, que lo equipara al mantenimiento de la jerarquía social, las instituciones y el sistema político, considerando desorden cualquier alteración en lo establecido²⁸⁷.

De acuerdo a Macías²⁸⁸, el orden público es un concepto amplio que engloba las nociones de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad pública. Cuando la Administración persigue la seguridad se dedica a prevenir accidentes de todas clases, ya sean naturales (inundaciones, incendios, etc.) u ocasionados por el hombre (robos, accidentes de tráfico, etc.). La idea de orden, como concreción del orden público, hace referencia al orden externo de la calle en cuanto condición elemental para el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales; supone, por tanto, la ausencia de alteraciones, algaradas, coerciones, violencias, etc., que puedan dar lugar a la ruptura de ese orden externo. Por consideraciones a la tranquilidad, se puede iniciar una campaña de silencio, regular los ruidos nocturnos, etc. Finalmente, el orden público supone también el mantenimiento de un estado de sanidad pública, previniendo epidemias e intoxicaciones de todas clases.

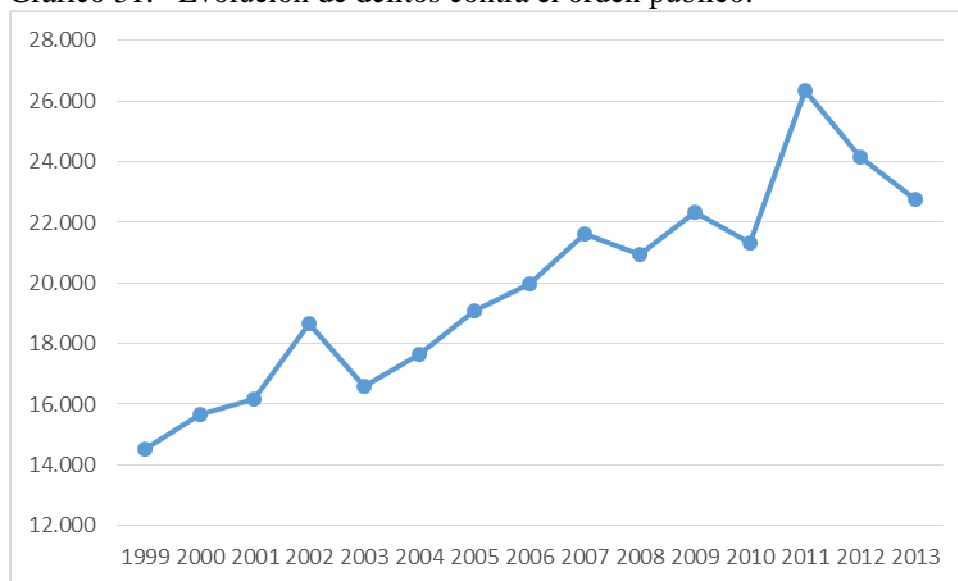
Dentro de este apartado se incluyen los delitos basados en la perturbación del orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones. Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas. El que usare pública e indebidamente uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales, o se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que no posea²⁸⁹.

²⁸⁷ Bercovitz R. (2011). Manual de derecho civil: Derecho privado y derecho de la persona. Madrid. Bercal.

²⁸⁸ <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-publico/orden-publico.htm>

²⁸⁹ Código penal. Artículos sobre delitos 557-560 y sobre faltas 633-637.

Gráfico 31. Evolución de delitos contra el orden público.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 56. Evolución delitos contra el orden público.

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14.520	15.649	16.148	18.643	16.602	17.649	19.063	19.984	21.608	20.922	22.327	21.322	26.330	24.164	22.752

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Algunos de estos delitos se pueden comprobar en el cuadro de abajo.

Cuadro 57. Delitos contra el orden público.

	CONOCIDOS			% Esclarecidos (*)	DETENCIONES		
	TOTAL	Consumados	Tentativa (*)		TOTAL	Hombres	Mujeres
SEDICIÓN	3	3	0	100,00	7	6	1
ATENTADO AUTORIDAD, AGENTES O FUNC. PÚBLICA	10.757	10.717	40	99,49	11.399	10.302	1.097
RESISTENCIA DESOBEDIENCIA	8.757	8.755	2	100,05	8.180	7.455	725
DESÓRDENES PÚBLICOS	849	846	3	70,35	637	584	53
TENENCIA / TRÁFICO DEPÓSITO ARMAS Y EXPL.	762	760	2	97,66	583	557	26
TERRORISMO	294	294	0	30,61	47	43	4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior-

10.4.1. Terrorismo:

De acuerdo al código penal se entiende por organización criminal “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Se considerarán

organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la sección siguiente. Asimismo, según el código penal, “se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1.^a Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2.^a Alterar gravemente la paz pública 3.^a Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 4.^a Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. 3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados”.

Como sostiene Jaime, la práctica del terrorismo en España cambió sustancialmente en la época de 1976- 1996 porque gran parte de los grupos terroristas desaparecieron, a excepción de ETA y de los GRAPOS que apareció ocasionalmente, por lo que la respuesta policial se podría analizar en base a periodos como el comprendido entre 1976 y mitad de 1980 caracterizado por la indefinición y por la ausencia de una ley antiterrorista específica. En 1980 comienza una segunda etapa con nuevas prácticas producto de la etapa democrática, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el poder a partir de 1982. Una tercera etapa a principios de 1983, identificada con la reordenación de la estrategia operativa y un nuevo plan de antiterrorista denominado Zona Especial Norte (ZEN)²⁹⁰. Y una cuarta etapa que cubriría el espacio 1976-1996 marcada por la dispersión carcelaria. Un año especialmente sangriento fue el de 2000, cuando la violencia etarra llevó a cabo 70 atentados que costaron la vida a 20 personas y 103 heridos. De ellos, 22 atentados, en tanto que extorsión económica, fueron dirigidos a intereses económicos como empresarios, empresas, cajas de ahorro, 20 contra adversarios políticos como militantes del PP, del

²⁹⁰ Jaime O. (2002). *Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996*. Valencia Tirant Lo Blanch.

PSOE, periodistas, personal relacionado con la administración de Justicia, 15 contra cuerpos de seguridad del estado y fuerzas Armadas y 13 contra diferentes objetivos. Entre los asesinatos con una gran significación económica destaca el de José María Korta, presidente de los empresarios guipuzcoanos.

La modificación del código penal llevada a cabo en 2010, establece una nueva perspectiva sobre este tipo de delito ya que “En atención a la gravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor amenaza para el Estado de Derecho, así como a la peculiar forma de operar de determinados grupos o células terroristas de relativamente reciente desarrollo en el plano internacional, cuyo grado de autonomía constituye precisamente un factor añadido de dificultad para su identificación y desarticulación, se opta –a diferencia del esquema adoptado en el capítulo anterior para las otras organizaciones y grupos criminales– por equiparar plenamente el tratamiento punitivo de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas, manteniendo en este punto la misma respuesta penal que hasta ahora había venido dando la jurisprudencia.. se amplía el concepto de colaboración con organización o grupo terrorista, asimilándoles conductas que hasta el presente han planteado algunas dificultades de encaje legal: así se ofrece la oportuna respuesta punitiva a la actuación de los grupos o células –e incluso de las conductas individuales– que tienen por objeto la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas. En la misma línea apuntada por la normativa armonizadora europea, se recogen en el primer apartado del artículo 579 las conductas de distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes o consignas que, sin llegar necesariamente a constituir resoluciones²⁹¹.

La evolución histórica de los delitos contra el orden público reflejado en el cuadro de abajo muestra ligeros saltos que se interrumpen en el año 2011 con una subida de cinco mil casos producto probablemente de algarabías producidas por las numerosas manifestaciones que provocaron la crisis económica. Dentro de este apartado las dos figuras más importantes cuantitativamente son el atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos y la resistencia o desobediencia.

²⁹¹ Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

23/02/2008	Bilbao	Vizcaya	Explosión de artefacto contenido en el interior de una caja de zapatos, colocada en la estructura de un repetidor de telefonía móvil y transmisiones de la Policía Local de Bilbao, ubicado en el monte Arnótegui.
29/02/2008	Derio	Vizcaya	Explosión de artefacto contenido en el interior de dos bolsas depositadas, por dos encapuchados, frente a la sede del PSE-EE sita en la calle Gernikako Arbola, 10.
07/03/2008	Mondragón	Guipúzcoa	Asesinato por disparos del ex concejal del PSE-EE, don Isaías Carrasco Miguel. Los hechos ocurrieron cuando éste se encontraba en el interior de su vehículo, estacionado en las inmediaciones de su domicilio.
1/03/2008	Calahorra	La Rioja	Explosión de un «coche-bomba» estacionado en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil en la calle General Gallarza, que causó lesiones leves a dos miembros de ese Cuerpo e importantes daños materiales en varios edificios y vehículos aparcados en la zona.
30/03/2008	Azpeitia	Guipúzcoa	Explosión de un artefacto en un repetidor de televisión sito en el monte Izarraitz, causando daños de escasa consideración en la puerta de acceso al mismo.
12/04/2008	Lapoblación	Navarra	Explosión de dos artefactos, uno de ellos parcialmente, colocados en repetidores de telefonía y televisión de esta localidad Navarra, que ocasionaron escasos daños materiales.
17/04/2008	Bilbao	Vizcaya	Explosión de un artefacto en la Casa del Pueblo del PSE-EE sita en el barrio de La Peña, resultando heridos leves siete agentes de la Policía Autónoma Vasca así como numerosos daños en las viviendas limítrofes y en ocho vehículos estacionados en las proximidades.
20/04/2008	Elgóibar	Guipúzcoa	Explosión de un artefacto compuesto por unos tres kilos de explosivo y temporizador, en la Casa del Pueblo del PSE-EE, causando daños en la sede y afectando a varios vehículos que se encontraban aparcados en las inmediaciones.
01/05/2008	San Sebastián	Guipúzcoa	Explosión de dos artefactos en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan).
01/05/2008	Arrigorriaga	Vizcaya	Explosión de un artefacto colocado en un pabellón industrial utilizado como almacén para depósito de vehículos embargados por la Tesorería de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ubicado en el polígono Martiartu.
12/05/2008	Hernani	Guipúzcoa	Explosión de dos artefactos colocados en sendas excavadoras que trabajaban en las obras de construcción de la autovía en Urnieta y se encontraban estacionadas en la ladera de Santa Bárbara. La explosión causó daños en ambas excavadoras. Las máquinas son propiedad de la empresa Amenábar, una de las compañías adjudicatarias de obras de infraestructura para el Tren de Alta Velocidad.
14/05/2008	Legutiano	Álava	Explosión de una furgoneta bomba estacionada instantes antes junto al Cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, que provocó la muerte del agente don Juan Manuel Piñuel Villalón y heridas de diversa consideración a otros cuatro guardias civiles: don José Javier Cabrerizo Fernández, doña Esther María Martínez Contreras, doña Pilar Ortiga Villalba y don Andrés Martín Domínguez, así como destrozos y daños materiales en las dependencias e inmuebles de las inmediaciones.
19/05/2008	Guecho	Vizcaya	Explosión de un «vehículo-bomba», estacionado en un callejón próximo al Club Marítimo, en el Paseo Zuazarte.
01/06/2008	Zarauz	Guipúzcoa	Explosión, de un artefacto temporizado, compuesto entre tres y cinco kg de explosivo, que se encontraba en el interior de una mochila depositada junto a la puerta de acceso a las oficinas, sede de Promociones Landa y Construcciones Amenábar, en la avenida Navarra, número 31.

08/06/2008	Zamudio	Vizcaya	Explosión de un artefacto temporizado compuesto por unos cinco kg de explosivo contenido en una mochila, que fue colocada junto al muro exterior de las instalaciones de «Grupo Vocento», edificio que alberga la rotativa del diario «El Correo» y otras publicaciones
04/07/2008	Barrundia	Álava	Explosión en un repetidor de comunicaciones ubicado en el alto de Urdingain, Sierra de Elgea. La instalación atacada pertenece a la sociedad pública Intelazpi y presta servicio a la Red de Comunicaciones del Gobierno
20/07/2008	Laredo	Cantabria	Anuncio por llamada telefónica de la colocación de cuatro artefactos explosivos. Explosión del primero de ellos colocado en la arena de la playa de Laredo, en lugar próximo al paseo marítimo, compuesto por una cantidad de entre tres a cinco kilos de un explosivo indeterminado y temporizadores no localizados por el momento.
20/07/2008	Laredo	Cantabria	Explosión del tercer artefacto de los cuatro anunciados mediante llamada telefónica, que se hallaba enterrado en las dunas de la playa a unos 50 metros del Paseo Marítimo.
20/07/2008	Noja	Cantabria	Explosión del cuarto y último artefacto en el Campo de Golf de Noja. Estaba colocado en el interior de las instalaciones, junto al muro que delimita el recinto y su deflagración causó lesiones de escasa consideración a dos personas y algunos desperfectos en las viviendas colindantes.
20/07/2008	Noja	Cantabria	Explosión, sin causar daños, del segundo artefacto de los cuatro previamente anunciados, que se encontraba enterrado en la arena de la playa de Ris.
28/07/2008	Orio	Guipúzcoa	Explosión de un artefacto en las obras de la autopista A-8 a la altura de la salida de Orio, provocando desperfectos en seis casetas de obras y en cuatro vehículos de las empresas adjudicatarias del TAV, Acciona y Fonorte, que se encontraban estacionados en el lugar.
29/07/2008	Torremolinos	Málaga	Explosión, sin previo aviso, de un artefacto en el Paseo Marítimo de Carihuela de Torremolinos, frente al hotel «Aloha Puerto», causando daños materiales de escasa consideración
17/08/2008	Málaga	Málaga	Explosión de un artefacto en la playa de Guadalmar en las proximidades del Hotel «Tryp Guadalmar», sin que se produjeran daños personales ni materiales.
17/08/2008	Benalmádena	Málaga	Explosión de un artefacto en el Puerto Deportivo de Benalmádena Costa, en la zona conocida como «Parking de Levante». El artefacto estaba colocado en el interior de un desagüe y ocasionó daños en un turismo.
17/08/2008	Málaga	Málaga	Colocación junto a un soporte del pilar del puente de la A-7 en el kilómetro 233, de un artefacto explosivo que no llegó a detonarse. Fue desactivado por Diplomados TEDAX-NRBQ del CNP.
16/09/2008	Basauri	Vizcaya	Colocación de artefacto explosivo, tipo lapa, en los bajos del vehículo particular, propiedad de un Oficial del CNP adscrito a la Comisaría Provincial de Bilbao. Ese artefacto compuesto de un kg de pentrita contaba con un sistema de activación tipo «antimovimiento» que falló y fue detectado en el control de accesos del Centro Policial Basauri, donde fue desactivado por los Diplomados TEDAX-NRBQ del CNP.
21/09/2008	Ondárroa	Vizcaya	Explosión de un «coche-bomba» junto a la Comisaría de la Ertzaintza, sita en la calle Zaldubide. Como consecuencia de la deflagración, se produjeron heridas de diversa consideración a cinco personas, dos de ellos Ertzantzak, y causó importantes daños en ese edificio y en sus inmediaciones.
21/09/2008	Vitoria	Álava	Explosión de un «coche-bomba» estacionado frente a la sede central de Caja Vital, en el barrio de Salburúa

22/09/2008	Santoña	Cantabria	Explosión de un «coche-bomba» frente al Patronato Militar Virgen del Puerto sito en la calle Almirante Carrero Blanco. Su deflagración provocó la muerte del Brigada del Ejército, don Luis Conde de la Cruz y heridas a ocho personas, entre ellas y por metralla el capitán del Ejército don José Manuel Martínez de Andrés. También se registraron considerables daños materiales en ese inmueble y sus alrededores.
04/10/2008	Tolosa	Guipúzcoa	Explosión de una «mochila-bomba» cargada con unos 10 kilogramos de una sustancia explosiva, posiblemente amonal, depositada sobre una ventana lateral del Juzgado de esta localidad. La deflagración causó importantes daños materiales en el edificio, entre ellos el derrumbamiento de su muro exterior, lo que hizo necesario el apuntalamiento del inmueble.
30/10/2008	Pamplona	Navarra	Explosión de un «coche-bomba» en el estacionamiento del edificio central de la Universidad de Navarra. Provocó heridas leves a 33 personas y cuantiosos daños materiales en vehículos así como en las dependencias de la Universidad.
20/11/2008	Bilbao	Vizcaya	Explosión, sin previo aviso, de un artefacto colocado en un repetidor de televisión y telefonía, en el monte Arnotegi, ocasionando daños de importancia en antenas y una caseta donde se encuentra el sistema eléctrico.
03/12/2008	Azpeitia	Guipúzcoa	Asesinato por disparos con arma de fuego, el empresario don Ignacio de Uria Mendizábal, copropietario de la empresa «ALTUNA Y URÍA», una de las adjudicatarias de obras del TAV.
31/12/2008	Bilbao	Vizcaya	Explosión de una «furgoneta-bomba», cargada con unos 100 kg de una sustancia explosiva, estacionada frente a la sede central de EITB, sita en la calle Capuchinos de Basurto, donde también se encuentran otros medios de comunicación como «El Mundo», Deia, Antena 3, Expansión y Onda Cero. La deflagración provocó un herido de pronóstico leve e importantes daños materiales en un lateral de la fachada del edificio

Fiscalía General del Estado (2010). Elaboración propia. Memoria 2009.

10.5 Legislación especial y otros delitos

Este apartado constituye una especie de categoría “cajón de sastre” donde se incluyen todos los delitos que tienen un difícil encaje o que por su novedad no están totalmente tipificados o que por su importancia no suponen una grave desviación de las normas. La subcategoría más amplia es la de delito contra los derechos de los trabajadores, seguida de calumnias, y de tráfico ilegal de inmigrantes.

Gráfico 32. Delitos contra la legislación especial.



Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios estadísticos.

El pronunciado descenso que se produce a partir de 1.999 se debe a la Ley de Contrabando. La modificación del artículo 368 del Código Penal en 1995, y el 2.3. de la LO 12/1995 de represión de contrabando, así como posteriores sentencias del tribunal Supremo, hizo que los hechos consistentes en la introducción en territorio nacional, desde el exterior de drogas y otras sustancias estupefacientes fueran sancionados tanto como delitos contra la salud pública como delitos de contrabando

Cuadro 58. Delitos contra la legislación especial

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.638	4.315	3.596	1.037	413	224	347	249	297	278	264	244	161	174	225	153	136

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Cuadro 59. Evolución delitos conocidos y esclarecidos de legislación especial y otros delitos.

	DELITOS CONOCIDOS							DELITOS ESCLARECIDOS					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012
XI. Legislación Especial	264	244	161	174	225	153	136	196	180	124	150	193	140
XII. Otros delitos	5.339	4.953	4.110	4.157	4.366	4.307	4.084	4.283	3.697	3.155	3.174	3.041	2.976

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En esta categoría delincuencia existe una gran variedad de tipos. Así por ejemplo, encontramos delitos contra los derechos de los trabajadores, calumnias e injurias que son los más numerosos, pero también caza, pesca, traición, y un largo etcétera.

Cuadro 60. Delitos conocidos y esclarecidos de legislación especial y otros delitos.

	CONOCIDOS			%	DETENCIONES		
	TOTAL	Consumados	Tentativa (*)		TOTAL	Hombres	Mujeres
CALUMNIAS	664	663	1	72,15	26	25	1
INJURIAS	477	471	6	66,17	41	33	8
DEFRAUDACION A LA HACIENDA PUBLICA	97	97	0	94,74	113	86	27
CONTRA DERECHOS TRABAJADORES	1.493	1.492	1	94,81	1.449	1.237	212
TRÁFICO ILEGAL INMIGRACIÓN CLANDES	659	659	0	99,09	964	788	176
TRÁFICO ILEGAL/INMIGRACION CLANDE	135	135	0	95,56	282	181	101
DELITOS SOBRE ORDENACION DEL TERRI	397	396	1	97,23	56	44	12
SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO	66	66	0	69,36	49	44	5
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	38	38	0	92,11	2	1	1
DEPOSITOS VERTIDOS RES.TÓXICOS- PELIGROSO	154	154	0	85,43	5	5	0
OTROS CONTRA RECURSOS NATURALES	178	177	1	78,53	21	21	0
CAZA	79	79	0	69,62	51	51	0
PESCA	7	7	0	100,00	1	1	0
MALTRATO/ABANDONO DE ANIMALES	167	167	0	51,37	30	27	3
OTROS RELATIVOS PROTECCIÓN FLORA Y	283	278	5	52,48	86	85	1
CONTRA LA CONSTITUCIÓN	182	182	0	84,51	254	197	57
TRAICION LA PAZ O INDEP. DEL ESTADO	3	3	0	0,00	0	0	0
CONTRA LA COMUNIDAD	0	0	0	0,00	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

Capítulo 11. Faltas

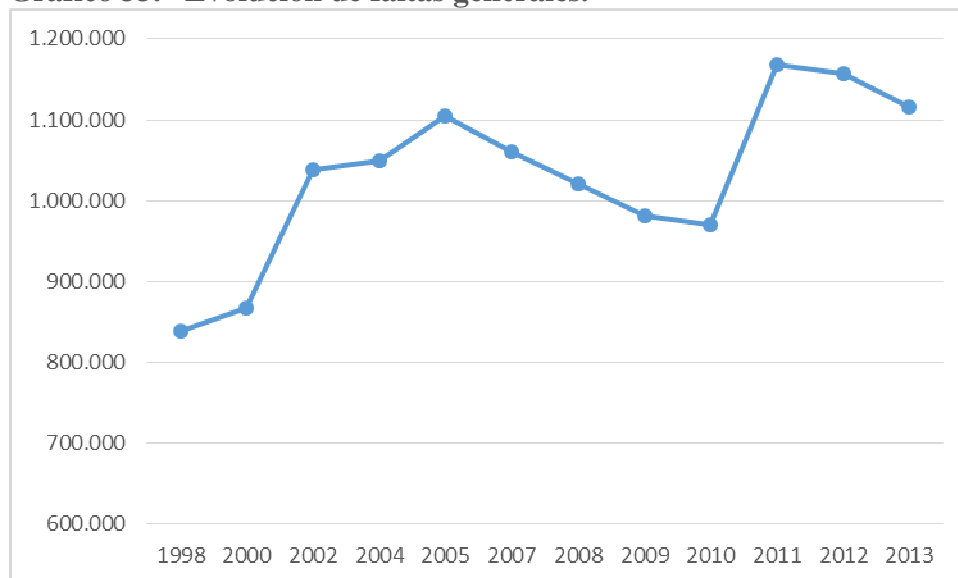
Las faltas tal como las conocemos en la actualidad sufrieron una gran transformación con la modificación del código penal de la actualización del código penal que se llevó a cabo en 1989. En donde se reconocía que era excesivamente amplio, “siendo grande el número de las infracciones penales carentes de sentido en la actualidad, sea porque ha desaparecido su razón de ser, sea porque el Derecho privado o el Derecho administrativo están en condiciones de ofrecer soluciones suficientes”. Resultando que se había llegado a un exceso de presencia de lo punitivo, así como un cierto desequilibrio entre las penas y el sistema de reacciones jurídicas no penales. Esta situación era particularmente visible en el ámbito de las faltas. “Las que en su día fueron llamadas «delitos veniales» integran un cuerpo de infracciones penales de excesiva amplitud. A ello se añaden las imaginables consecuencias de agolpamiento ante los Tribunales de Justicia de muchos pequeños problemas que no merecen ciertamente el dispendio de tantos esfuerzos de los poderes públicos. En base al principio de mínima intervención se llevó a cabo la reducción del Libro III del Código Penal, parte del sistema legal que más claramente infringe el antedicho principio. La solución más simple y tajante hubiera sido la total supresión de dicho Libro, más una lectura detenida del mismo pone de manifiesto que alguno de los comportamientos que sanciona debe proseguir en la esfera penal, y que incluso merece ser elevado a la condición de delito, por lo que el recurso a la derogación debe ser también usado cuidadosamente. Esa cautela viene además impuesta por la necesidad de comprobar en cada caso si se trata de conductas que han perdido todo sentido antijurídico o, en las que, en alguna medida, lo conserven, si existe una solución alternativa adecuada, a través de la capacidad sancionadora de autoridades administrativas”²⁹².

Si contemplamos las faltas o acciones que merecen menor atención estadística en el anuario del Ministerio del Interior por su gravedad y que por eso son analizadas en un único párrafo, es necesario destacar que desde 1990 hasta 2006 se han doblado en una escalada continúa, que tiene un pequeño descenso en el año 2000. A pesar de que las faltas engrosan las cifras de la delincuencia hasta el punto de que una perspectiva que agrupe a ambas puede conducir a la conclusión del aumento general de la delincuencia, estamos hablando en realidad en un porcentaje muy elevado de pequeños hurtos menores de 300 euros – el 56 %- y de pequeños daños – el 21 %- que juntos suponen el 77% de todos ellos, producto del auge de las grandes superficies comerciales que han arrinconado a los pequeños comercios donde era más difícil cometer hurtos. Por otra parte, la dimensión de lo que representan las faltas en el cómputo total de la delincuencia la proporciona el hecho de que suponen sólo la detención de 13 mil personas

²⁹² Código penal 1989.

frente a las 236 mil de las detenidas por cometer delitos. Todo ello refuerza la tesis de que la delincuencia deba ser diferenciada y presentada de manera discriminada cuando se ofrecen datos desde instancias oficiales, lo cual entre otras cosas, tendría el efecto de no alarmar a los sectores más sensibles de la población.

Gráfico 33. Evolución de faltas generales.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

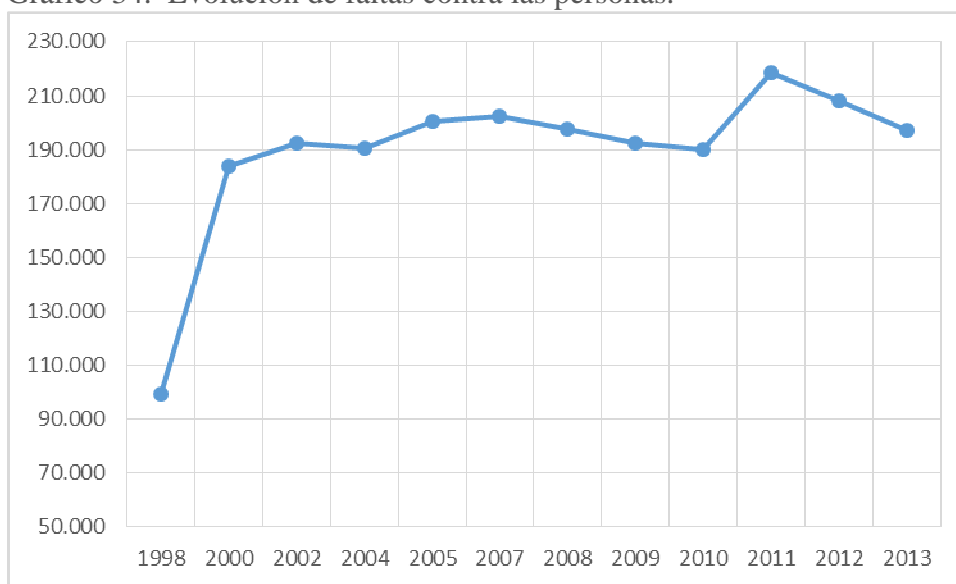
11.1. Contra las personas

Gran parte de estas faltas se entienden por la modificaciones que se llevaron a cabo en 1998, las cuales se introdujeron en el Título III del Libro III, sosteniendo que no se podían valorar simplemente como reducciones o despenalizaciones “aun cuando desaparecen casi la mitad de las infracciones actuales, pues su alcance es mucho mayor, hasta el punto de que ha obligado a que la presente Ley deba abordar la modificación de determinados preceptos del Libro II con los cuales estas faltas tienen que guardar concordancia. Tal sucede con las lesiones: hasta ahora las infracciones contra la integridad física en nuestro Derecho positivo venían tabuladas y penalizadas de acuerdo, esencialmente, con los criterios de resultado de menoscabo producido y duración del tiempo necesitado de atención médica, técnica que hace difícil la aplicación e integración del dolo cuya concurrencia viene impuesta por el artículo 1 de nuestro Código, amén de ofrecer todos los inconvenientes de las casuísticas penales basadas en datos aritméticos. Todo ello ha puesto de manifiesto la conveniencia de aprovechar la obligada modificación de la falta de proceder a una reestructuración completa de las infracciones penales atañentes a la

integridad física. Aunque después detendremos la atención en esa modificación del Libro II, destaquemos que el nuevo artículo 582 queda como tipo residual no condicionado por el tiempo de duración de los efectos de la lesión, además de recoger en su ámbito, por su clara afinidad morfológica, los malos tratos hasta ahora penados en los artículos 583 y 585.1^o²⁹³. Muchas son las faltas dedicadas en la actualidad a la protección de menores y de enajenados. Su número claramente excesivo se reduce notoriamente, sin menoscabo alguno de la tutela penal que se considera imprescindible, razón por la cual se mantiene la punición de los abandonos, omisiones leves de socorro o asistencia, aprovechamiento lucrativo – exceptuándose la utilización para la mendicidad, que pasa a la condición de delito– e incumplimiento de los deberes de custodia.

Las faltas contra las personas que vienen a continuación, aunque sólo representan el 18 por ciento se concentran en lesiones (44%) y en amenazas (37%), seguidas a distancia por injurias, malos tratos en el ámbito familiar, coacciones, malos tratos de obra sin lesión y apoderamiento de un menor; de estas faltas se esclarecieron en el año 2004²⁹⁴, el 86 por ciento y se detuvieron a 2.734 personas. Les siguen las faltas contra intereses generales y contra el orden público que representan un porcentaje muy bajo con un porcentaje muy alto de detenciones.

Gráfico 34. Evolución de faltas contra las personas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

²⁹³ Código Penal 1989.

²⁹⁴ Ministerio del Interior (2005). Anuario estadístico 2004. Pág. 259, 267

Entre las faltas contra las personas figuran los homicidios imprudentes, las lesiones, los malos tratos ámbito familiar, las amenazas, las coacciones, la omisión del deber de socorro, las injurias, los malos tratos de obra sin lesión, el incumplimiento de obligaciones, la vejación de las leyes, el apoderamiento de un menor²⁹⁵. El esclarecimiento de este tipo de delito es bajo en comparación con otros apartados.

Cuadro 61. Evolución de faltas cometidas y esclarecidas.

	FALTAS COMETIDAS					FALTAS ESCLARECIDAS				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Contra las Personas	197.428	192.289	189.988	218.683	208.081	151.015	144.762	143.897	167.109	162.900
Lesiones	85.377	83.480	82.820	94.920	88.908	64.711	62.755	62.526	72.164	69.340
Amenazas y Coacciones	76.967	74.289	70.702	77.073	72.091	59.210	55.855	53.496	58.284	55.756
Otras contra las Personas	35.084	34.520	36.466	46.690	47.082	27.094	26.152	27.875	36.661	37.804

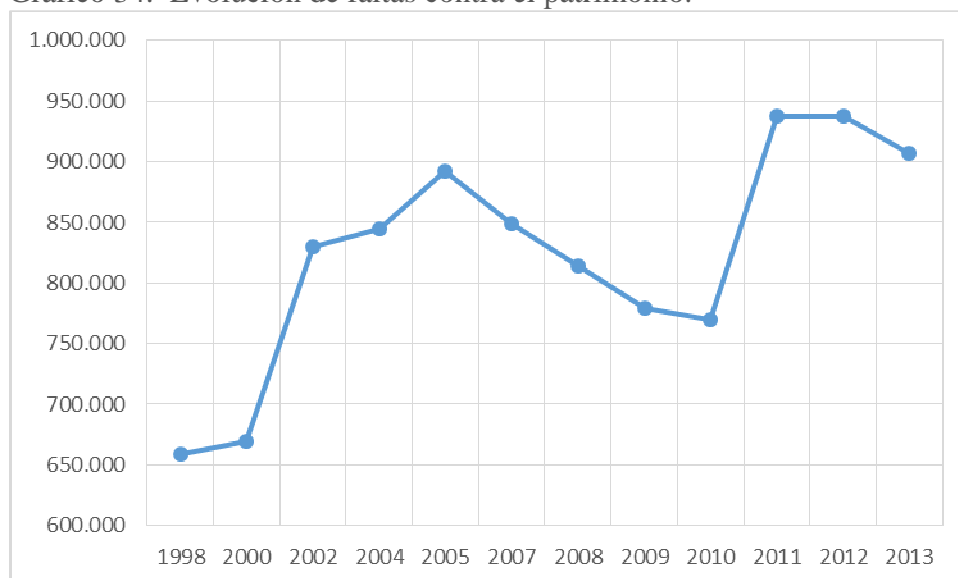
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

11.2. Contra el patrimonio

La mayor parte de las faltas contra el patrimonio lo son por el subapartado de hurto en superficies comerciales y gasolineras, las cuales son cometidas en numerosas ocasiones por cliente habituales que aprovechan algún momento de descuido, representando el 70 por ciento del total, seguidas de las producidas por daños que suponen el 25 por ciento, seguidas ya a mucha distancia por las estafas no bancarias, por la sustracción de vehículos sin usurpación, por apropiación indebida, estafa bancarias, y deslucimiento de bienes inmuebles; se esclarecieron sólo el 11 por ciento y se detuvo por ello a nueve mil sospechosos. En el cuadro de abajo se puede comprobar varias tendencias, desde una subida desde el año 2000 hasta el 2005, una bajada hasta el año 2010, una subida importante entre 2010 y 2011 y una cierta estabilidad con bajada desde entonces.

²⁹⁵ Ministerio del Interior (2006). Anuario estadístico 2006. Madrid, Ministerio del Interior.

Gráfico 34. Evolución de faltas contra el patrimonio.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Entre las faltas contra el patrimonio hay que citar a los hurtos, a la sustracción de vehículos, a la usurpación, a la estafa bancaria, a otras estafas, a la apropiación indebida, a la paropiación indebida de vehículos, a la defraudación de fluido eléctrico o análogas, a los daños, a los del patrimonio histórico, y al deslucimiento de bienes inmuebles. Si existe un capítulo en el que una infracción queda impune es en este apartado. Se trata de pequeños hurtos y daños que aunque son denunciados nunca se llegan a perseguir ni a esclarecer por la pequeña montía que suponen.

Cuadro 62. Evolución de faltas cometidas y esclarecidas.

	FALTAS COMETIDAS						FALTAS ESCLARECIDAS				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012
Patrimonio	814.110	778.752	770.136	937.276	937.240	906.870	96.551	100.165	104.994	130.852	139.593
Hurtos	550.076	520.394	513.378	631.582	624.984	606.832	54.707	62.651	67.744	82.939	89.146
Daños	218.432	204.652	195.200	222.302	214.913	198.984	27.229	23.315	21.819	24.300	23.167
Otras Patrimonio	45.602	53.706	61.558	83.392	97.343	101.054	14.615	14.199	15.431	23.613	27.280

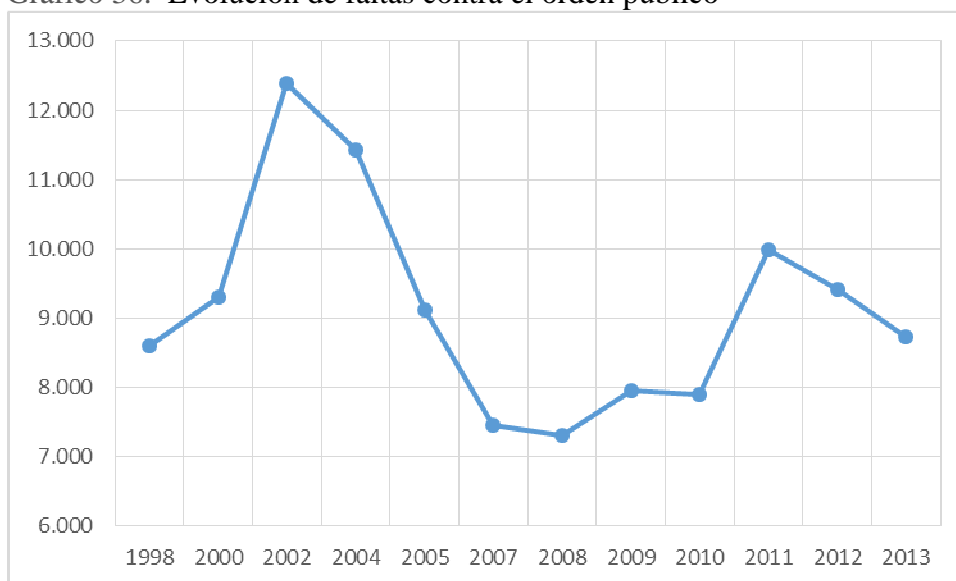
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

11.3. Contra el orden público

Este tipo de faltas proceden de las modificaciones que se introdujeron en el Libro III, Título I, del código Penal de 1989, compuesto de dos capítulos (de las faltas de imprenta y contra el orden público), quedando reducido a las faltas contra el orden público, pues las denominadas faltas de imprenta describían conductas que, de ser realmente relevantes, podían “ser

subsumidas en tipos de delito desde tiempo existentes, pero que si carecen de esa relevancia no merecen reacción punitiva alguna”. Las subsistentes faltas contra el orden público experimentan una importante reducción. Las faltas contra el orden público no son prácticamente significativas. Representan un pequeño porcentaje de las faltas totales y tienen que ver con pequeños actos de desórdenes públicos, tenencia de armas no autorizadas y desobediencia a la autoridad, agentes o funcionarios públicos.

Gráfico 36. Evolución de faltas contra el orden público



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Entre las faltas contra el orden público se encuentran el allanamiento de morada, la resistencia o desobediencia, los desórdenes públicos, el ejercicio de actividad sin licencia, el uso público uniforme/ cualidad profesional. Lógicamente el número de faltas de este tipo son esclarecidas en un porcentaje bastante alto.

Cuadro 63. Evolución de faltas cometidas y esclarecidas contra el orden público.

FALTAS COMETIDAS							FALTAS ESCLARECIDAS					
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012
7.463	7.298	7.956	7.900	9.987	9.418	8.737	6.662	6.326	7.060	7.151	8.807	8.366

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

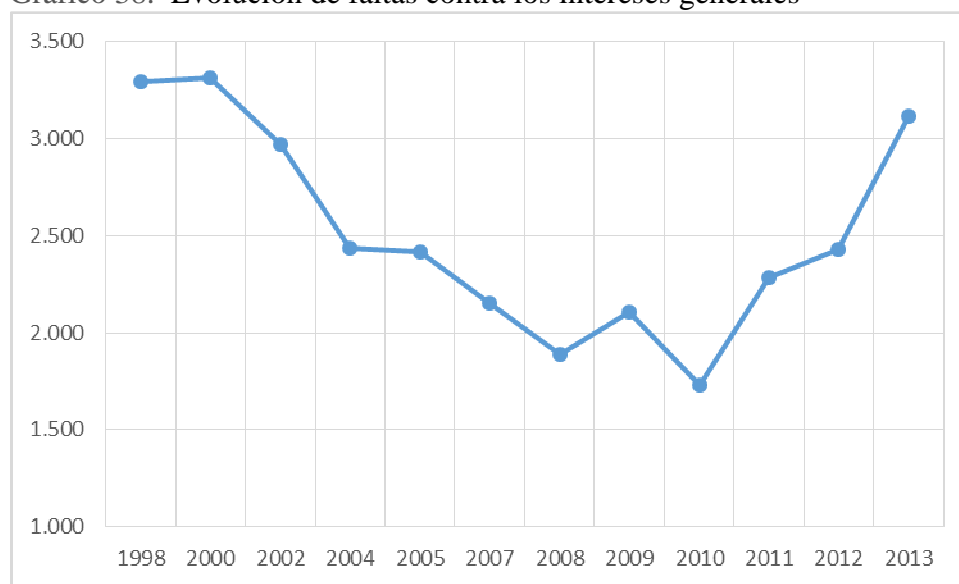
11.4. Contra los intereses generales

Se trata de un grupo de faltas que también fue sustancialmente modificado en las reformas que se hicieron en 1989 sobre el anterior código penal. El

Título II, rubricado «De las faltas contra los intereses generales y el régimen de las poblaciones», y compuesto hasta ese momento de veintiocho infracciones, quedó integrado únicamente por seis faltas. Era éste un Título de heterogéneo contenido, donde convivían la celebración de espectáculos sin licencia y el bañarse indecentemente, por ejemplo. Las infracciones que se despenalizaron fueron de muy diversa naturaleza. “Unas, como es el caso tomado como ejemplo de la celebración de espectáculos sin los necesarios permisos, tiene suficiente tratamiento en la actividad sancionadora de las Administraciones; otras, como el caso del baño ofensivo de las reglas de decencia, son exponentes de la confusión entre moral y derecho plasmada en elementos valorativos incompatibles con la seguridad jurídica; y, en general, el conjunto de conductas que se despenalizan no tienen otro carácter que el técnicamente conocido como infracciones de policía. La posibilidad de que tales comportamientos, u otros de análoga entidad, sean sancionados mediante Ordenanzas o Bandos es perfectamente ajustable a las garantías constitucionales, en cuanto a los derechos personales, y a las competencias de las autoridades administrativas, desde la Administración central a los entes locales”²⁹⁶.

Finalmente tenemos las faltas contra los intereses generales que al igual que la anterior categoría se producen en un grado muy pequeño.

Gráfico 38. Evolución de faltas contra los intereses generales



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Aproximadamente el setenta por ciento de estas faltas son esclarecidas

²⁹⁶ Código Penal 1989.

Cuadro 64. Evolución faltas cometidas y esclarecidas.

FALTAS COMETIDAS							FALTAS ESCLARECIDAS					
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2.155	1.886	2.106	1.729	2.286	2.432	3.114	1.498	1.245	1.299	1.086	1.411	1.510

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

PARTE V

Capítulo 12. La delincuencia por características sociodemográficas.

Una vez que se ha analizado la tipología de la delincuencia, es necesario abordarla desde un punto de vista sociodemográfico para determinar desde un ángulo sociológico cómo influyen los grupos sociales en su configuración. En palabras de los teóricos estratificacionalistas se trataría de determinar la sustancia de la delincuencia. La forma más sociológica de abordar la delincuencia es posible que sea la de contemplarla a través de la estratificación social²⁹⁷ proporcionada por las características sociodemográficas de los individuos, lo que la ONU denomina como categorías estadísticas contextuales. Según los teóricos de la estratificación, la estructura de las sociedades avanzadas está basada primordialmente en las clases, en el género, en la edad y en la etnia, las tres últimas las denominan como estratificación adscrita. A ello añadiríamos el desempleo como una característica genuina de la motivación para cometer un delito. Estas variables además, se ajustan a los datos proporcionados por el Ministerio del Interior en sus respectivos anuarios y en su página electrónica recientemente puesta en servicio. Desgraciadamente no es posible incluir una variable clásica como la clase social o el estatus socioeconómico por carecer de datos. Otra limitación importante es la ausencia de datos longitudinales ya que en los diferentes anuarios no se incluyen datos sobre estas tres variables de manera continuada y con un cierto rigor. Por ello, las estadísticas que sirve para el análisis son o bien de corto recorrido o bien sectoriales, lo que se denomina *cross sectional* en la literatura anglosajona. Sin embargo, el análisis que se posibilita con estos datos tiene un cierto fundamento empírico consagrado de la teoría criminológica "clásica", porque se examinan a muchas variables diferentes en un momento dado en el tiempo. No obstante, aunque estos estudios han arrojado importantes ideas sobre las correlaciones que se producen en la delincuencia en un momento dado, es necesario contextualizarlos en el tiempo.

12.1. Delitos por género

Si existe un hecho nítido y respaldado tanto por la teoría como por los datos es que la delincuencia es un asunto principalmente de género. La explicación del por qué las mujeres cometen menos actos delictivos tiene varias ramificaciones y diferentes causaciones, según se establezca el ángulo de mira²⁹⁸. Todo se remontaría a la aparición de la familia y a la

²⁹⁷ Se considera la estratificación social como la ordenación diferencial de los individuos humanos que componen un sistema social dado y el orden de superioridad o inferioridad recíprocas que guardan entre sí tal como sostiene Parsons en sus Ensayos de Teoría Sociológica.

²⁹⁸ Heidensohn F. and Gelsthorpe (2012). Gender and crime. Maguire et al. (Ed.). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford. Oxford University Press.

división de roles entre hombres y mujeres, donde por motivos de maternidad se le asignó el cuidado de niños y la recolección de plantas y vegetales, frente al hombre que se dedicó principalmente a la caza y a trabajos de desarrollo corporal. Ello trajo el isomorfismo entre ambos, con una mayor capacidad corporal en los hombres, lo que supuso una mayor aptitud para la lucha y la pelea. Este desarrollo natural se convirtió socialmente en el denominado machismo hegemónico. Desde la versión feminista se ha argumentado cómo la cultura de sexismo patriarcal o religión patriarcal ha afectado a la desigualdad y marginación de la mujer. El hecho de estar alejada de puestos directivos, de tener menor implicación en el mercado laboral, pero mayor en las responsabilidades familiares directas ahondarían en tener menos ocasiones y menos motivos para delinquir. La cultura machista ha expulsado a las mujeres de muchas transacciones económicas que es en definitiva en donde se cometen gran parte de las infracciones. Es también esta cultura la que ha moldeado los roles femeninos frente a los masculinos que inciden en una actitud menos violenta, menos de confrontación, menos física, menos activa, pero más calculada, más cerebral, más tierna²⁹⁹. La explicación criminológica de este fenómeno ha seguido dos vertientes relacionadas con la estructura social, por una parte los que se han fijado en el papel asignado a la mujer en la sociedad o posición del individuo con respecto a otros en la estructura social, en lo que se podría considerar como estatus y por otra en la función y pautas de conducta o expectativas de comportamiento del individuo en sus relaciones con otros, que desarrolla la mujer, etiquetado como rol.

12.1.1. Teorías del estatus:

La explicación de por qué las mujeres cometen menos delitos en base al estatus de la mujer sostiene que gran parte de los delitos que cometen son pasados por alto por las instancias que se dedican a la represión. Todo ello se refleja en la *tesis de la caballerosidad*, según la cual tanto la policía como los fiscales y jueces son más permisivos con la delincuencia femenina que con la masculina. Las mujeres son tratadas por estas instancias predominantemente masculinas como si fueran sus madres, sus esposas o sus hijas³⁰⁰. Sin embargo, es necesario precisar este aserto, toda vez que las comprobaciones empíricas son contradictorias ante la disyuntiva de si es que las mujeres son tratadas preferentemente o si es que se trata de una realidad en sí debido a que las mujeres cometen menos delitos. En una investigación pionera desarrollada en el Reino Unido, se encontró que las mujeres cometían menos asesinatos que los hombres y que en aquellas actividades delictivas típicamente femeninas como robar en las tiendas, lo

²⁹⁹ Kyvdgaard B. (2003). *The criminal career*. Cambridge. Cambridge University Press.

³⁰⁰ Mclaughlin E. and Muncie J. (2001). *Controlling crime*. London. Sage.

hacían en menor cantidad y valor que los hombres. En otra ocasión se ha podido constatar que no existían diferencias entre hombres y mujeres en el trato que les dispensaban los jueces cuando las sentencias eran sobre delitos leves, sin embargo, las mujeres eran mejor tratadas por los jueces en delitos graves. En un análisis sobre 13.000 casos de delitos contra personas, drogas, y robos de tiendas, Dowds y Hedderman³⁰¹ encontraron ciertas diferencias entre las sentencias hacia hombres y mujeres, lo cual podría ser explicado por una actitud machista o por diferencias en el tipo de delito, pero en todo caso, las mujeres recibían menos sentencias severas, incluso cuando se consideraban los antecedentes, tendían a ser menos castigadas regularmente y recibían o bien una descarga de sentencia o trabajos comunitarios más frecuentemente. Una segunda parte del estudio basada en entrevistas con 189 magistradas y 8 fiscales mostró una gran complejidad en las sentencias, pero en todo caso emergieron la influencia de variables relacionadas con el género como circunstancias familiares, apariencia (las mujeres fueron vistas como menos problemáticas que los hombres), y sus delitos se enfocaron desde el ángulo de una manera de sobrevivir, como el resultado de una provocación o coerción o atribuible a algún desajuste mental.

Otra teoría que encaja en esta división es la conocida como control-poder³⁰² basada en las pautas de socialización y de control por parte de la sociedad. Bajo las premisas de la teoría del control se sostiene que altas cuotas de supervisión por parte de padres, colegio, amigos regulares y personas mayores inciden para que los adolescentes cometan menos actos delictivos. De acuerdo a esta teoría, las mujeres están sobre socializadas y estrechamente supervisadas en comparación con los hombres. Las oportunidades de delinquir dependen de un factor macroestructural como es el poder y de otro microestructural como es el control. El poder depende de las clases sociales y de la situación familiar en el mercado del trabajo. El control se ve afectado por las relaciones de entendimiento que se dan entre los cónyuges y que determinan modelos familiares patriarcales, igualitarios o un cruce entre ellos, afectando a las relaciones de supervisión con respecto a los hijos. La interacción entre estas dos variables se ve supeditada por otra variable de control que puede afectar al comportamiento desviado: el “gusto por el riesgo” y la “percepción de salir indemne del acto delictivo”. Todo ello podría explicar, por ejemplo, las condiciones bajo las cuales los hombres frente a las mujeres son más delincuentes ya que se sienten libres para desviarse de las normas sociales y delinquir: presencia de poder y ausencia de control. La mayor libertad para desviarse se encuentra directamente relacionada con la posición de la clase social, lo que incide además para que los hombres tengan más posibilidades que las mujeres, y

³⁰¹ Dowds C. and Hedderman (1997). The sentencing of men and women. In Hedderman C. and Gelsthorpe L. (Ed.). *Understanding the sentencing of women*. Home Office research Study. N° 170. London. Home Office.

³⁰² J. Hagan, A. Gillis y J. Simpson (1987)

para aquellos que están situados en las clases más altas. Con respecto a las relaciones de dominación que se desarrollan en la familia, las consideraciones básicas son que las madres más que los padres constituyen los instrumentos de control de la familia y que las hijas más que los hijos son las destinatarias u objetos de control familiar. Es lo que las feministas marxistas denominan como “opresión íntima” del control social informal.

12.1.2. Teorías del rol.

Históricamente, la idea de que una mayor igualdad de género llevará a una mayor participación femenina en el conjunto de la delincuencia ha sido denominada como la "hipótesis de emancipación". Esta hipótesis fue planteada por primera vez en los años setenta en la investigación temprana sobre género y delito. Sin embargo, tanto la delincuencia de homicidios y lesiones, como la delincuencia contra el orden socioeconómico y la propiedad privada, la variación en la participación de las mujeres ya sea analizado longitudinalmente dentro de un país o transversal a través de muestras de diferentes países, parece estar más asociado con aspectos como la marginación económica, el acceso a oportunidades de delitos del empresario o a la formalización del control social, que a la igualdad de género.

Steffensmeier et al.³⁰³, sostienen que las mujeres son socializadas para aceptar obligaciones del “rol enriquecedor de la mujer” que enfatiza la importancia de las relaciones sociales y orientaciones comunales hacia los demás. A través de la asimilación de estas obligaciones, las mujeres desarrollan identidades como cuidadoras. Además, la preocupación de las mujeres por la apariencia física, la belleza y la virtud contrasta con la sordidez de las imágenes estereotipadas de criminales, haciendo que el papel de criminal o delincuente sea incompatible con la identidad femenina. Según la teoría del género de “preocupaciones focales”, la adopción por parte de las mujeres de identidades basadas en la belleza, la virtud y dar atención, también afecta a sus preferencias de riesgo, haciéndolas menos dispuestas a correr peligro en comparación con los hombres. Por lo tanto, excluyendo sólo ciertos delitos relacionados con el género tales como la prostitución o el aborto ilegal, se espera que las mujeres estén menos involucradas que los hombres en todas las categorías de delincuencia³⁰⁴.

Una segunda característica del paradigma propuesto por Steffensmeier et al.³⁰⁵, se refiere a la forma en que el género accede a formas de

³⁰³ Steffensmeier et al., (2013). Gender and twenty-first-Century corporate crime: female involvement and the gender Gap in Enron-Era corporate frauds. *American Sociology Review*, 78 (3), pp. 448–476.

³⁰⁴ Benson M. and Gottschalk P. (2015). Gender and white-collar crime in Norway: An empirical study of media reports. *International Journal of Law, Crime and Justice*. In Press.

³⁰⁵ Steffensmeier et al., (2013). Op. cit. Pág. 463.

oportunidades penales. Con respecto a los delitos, el acceso a las oportunidades penales puede proceder de dos maneras: (1) mediante el acceso a ciertas posiciones o (2) mediante el acceso a las redes informales. En el primero, las posiciones y los puestos de trabajo concretos crean determinados tipos de oportunidades, por ejemplo, la oportunidad de participar en una facturación fraudulenta en determinados servicios médicos hacia un paciente es más accesible para los médicos que para aquellos que tienen otros tipos de posiciones en el sistema jerárquico sanitario. Por lo tanto, la segregación vertical de ocupación por género puede reducir el acceso de las mujeres a los tipos de posiciones laborales necesarios para llevar a cabo ciertos tipos de delitos. Los delitos de cuello blancos complejos, requieren acceso a los recursos organizacionales y a los empleos que posibiliten ese acceso, lo cual no es tan accesible a las mujeres en comparación con los hombres. Sin embargo, si se reduce la segregación ocupacional basada en el género, la hipótesis de emancipación predeciría una mayor participación femenina en delitos. En segundo lugar, la relación entre género y delito se trata a menudo en términos individualistas, pero esto ignora que algunas infracciones se cometen en empresas relacionadas por actividad que requieren redes de personas que trabajan juntos. Las personas que no participan en estas redes tienen reducido el acceso a estas oportunidades de penales.

La investigación de delitos comunes indica que el acceso a las redes delictivas están segregados por género, con lo cual las mujeres acaban jugando en una gran parte, o bien excluidas, o bien restringidas, simples y sencillos roles de apoyo subordinados. Los mismos procesos pueden estar operando con respecto a otro tipo de delitos, porque muchos delitos administrativos dentro de los contextos organizacionales implican redes de personas que trabajan de manera conspiratoria. La teoría organizacional indica que incluso cuando las mujeres alcanzan posiciones de alto estatus en las organizaciones, a menudo quedan excluidas de las denominadas redes sociales. Si la exclusión de las mujeres de las redes informales se extiende a las redes ilegales, entonces esto explicaría las menores tasas de participación en delitos perpetrados por las mujeres incluso cuando tienen las mismas posiciones laborales que los hombres.

Según otra teoría como la de “evolución y la selección sexual”, las diferencias de género en el uso de la violencia pueden centrarse en las características hormonales y factores evolutivos, en donde la capacidad reproductiva de la mujer adopta un rol importante. Este modelo analiza la agresión en términos de costes y beneficios impuestos por la selección natural. Las diferencias en la participación de delitos entre hombres y mujeres se explica por el papel asignado a las mujeres en el proceso reproductivo que significa que un enfrentamiento violento en un nivel físico

o en la participación en un delito podría poner en peligro sus posibilidades de reproducción y el cuidado de su futura descendencia. Como resultado, las mujeres recurren a otra confrontación o desviación más relacional y psicológico que reduce al mínimo estos riesgos. Para los hombres, hay un costo menor en términos de poner en peligro su capacidad reproductiva de confrontación física y recibir lesiones o castigos como resultado del conflicto, teniendo en cuenta que aquellos con menos recursos deben iniciar la confrontación violenta y se exponen a un riesgo mayor para alcanzar sus metas.

La selección sexual en términos de diferencias de la agresión y en el delito según género utiliza neuromecanismos involucrados tales como toma de riesgos, falta de inhibiciones y temor de daño físico como explicación. Para los hombres, el despliegue de la fuerza física y adopción de riesgos es un intento de demostrar su capacidad para apoyar y defender la descendencia, la fecundidad y la herencia genética. Además, el bajo costo implícito en términos de reproducción para los hombres en comparación con las mujeres, explica por qué tienden a ser más agresivos y menos selectivos en la elección de sus socios³⁰⁶.

Otra corriente teórica importante para explicar las bajas tasas de delincuencia en las mujeres procedería de las oportunidades legítimas e ilegítimas que se les abren a los jóvenes potencialmente delincuentes. La frustración de tener que conformarse con trabajos de baja calidad y no alcanzar el éxito pecuniario que soflama la ideología de las democracias maduras, es decir, la crisis de legitimidad, provoca que la reacción de muchos jóvenes sea la equivocada. Todas las deficiencias que rodean el mercado laboral como altas tasas de desempleo, bajas coberturas de paro, temporalidad de contratos, bajos sueldos, bajas tasas de igualdad de oportunidades en la movilidad social, conducen a los jóvenes. En opinión de muchos expertos, a la delincuencia porque deben enfrentarse a un mundo de éxito y de consumo del cual ellos se sienten expulsados. Esta situación no se produce con igual intensidad en las mujeres en donde la imagen de éxito laboral se ha visto relegada en los deseos de orientarse preferentemente hacia la familia y el cuidado de hijos. Sin embargo, el abandono de esta línea de preferencia, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, la llegada hacia posiciones altas que es donde se cometen más delitos, la frustración de un mercado sesgado machista, podría explicar el aumento de las tasas de delincuencia en lo que se podría denominar como la masculinización del delito femenino, a pesar de que la frustración sea diametralmente opuesta³⁰⁷.

³⁰⁶ Geary DC. (2010). *Male, female: The evolution of sex differences*. Washington, DC: American Psychological Association.

³⁰⁷ Austin (1981). *Liberation and female criminality in England and Wales*. *British Journal of Criminology*. Vol. 21. Pág. 25-39

La diferencia estadística del género en el delito es un hecho transnacional y transcultural. En los países occidentales, las estadísticas oficiales han mostrado una diferencia de 4 a 1 mientras que las estadísticas basadas en auto informes lo sitúan en una proporción más cercana en torno al 2 a 1 debido probablemente a que éstas últimas son más sensibles para reflejar delitos de menor importancia. La diferencia entre hombres y mujeres en el acto delictivo es suficientemente concluyente con cualquiera de las estadísticas que contemplemos. En España, de un total de 236.298 detenciones por delitos realizadas por la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autónoma Vasca en 2004, sólo el 9,8 por ciento fue llevado a cabo por mujeres, destacando que el porcentaje fue inferior en cualquier grupo analizado; de 13.473 detenciones por faltas, el 18,48 por ciento las cometieron mujeres, y de un total de 59.375 de población reclusa, únicamente el 7,69 eran mujeres, es decir, nueve de cada diez personas reclusas eran hombres.

Como se puede observar en el cuadro de abajo, las mujeres intervienen poco en los delitos contra las personas, un 8,64 por ciento, siendo el mayor porcentaje de implicación en la subcategoría de homicidios y asesinatos consumados con un 15 por ciento.

Cuadro 65. Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra las personas. Año 2012.

	Hombre	Mujeres	% Mujeres	Total
I. Contra las Personas	55.124	5.216	8,64	60.340
Homicidios dolosos / Asesinatos	808	100	11,01	908
Homicidios/Asesinatos consumados	262	48	15,48	310
Lesiones	11.321	950	7,74	12.271
Malos tratos ámbito familiar	42.096	4.042	8,76	46.138
Otros contra las Personas	899	124	12,12	1.023

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Los capítulos II, II, IV sigue la misma tónica que en el capítulo anterior, ya que en ningún caso se sube del 15 por ciento. No parecen que ninguna categoría esté relacionada con la participación por género dado el bajo porcentaje de su presencia en todos ellos.

Cuadro 66. Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra la libertad. Año 2012.

	Hombres	Mujeres	Mujeres %	Total
--	---------	---------	-----------	-------

Box S. and hale C. (1983). Liberation and female criminality in England and Wales. British Journal of Criminology. Vol. 23. N. 1. Pág. 2-19.

Box S. (1991). *Power, crime, and mystification*. Routledge. London.

Smart C. (1979). The new female criminal: reality or myth. British Journal of Criminology. Vol. 19. Ág. 57-74.

II. Contra Libertad	21.338	2.285	9,67	23.623
1. Malos tratos hab. ámbito familiar	9.384	663	6,19	10.047
2. Otros contra la libertad	11.954	1.622	11,94	13.576
III. Libertad Sexual	4.785	357	6,94	5.142
1. Agresión sexual con penetración	734	13	1,77	747
2. Corrupción de menores o incapacitados	198	23	10,40	221
3. Pornografía de menores	344	32	8,51	376
4. Otros contra la libertad e indemnidad sexual	3.509	289	7,60	3.798
IV. Relaciones Familiares	2.341	392	14,34	2.733

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Sin embargo, en los delitos contra el patrimonio cuadro de abajo, que son aquellos cuya condena es bastante más baja, la exposición por género es más elevada. Es el caso de blanqueo de capitales que llega hasta el 34 por ciento, estafas bancarias con el 29 por ciento y hurtos con el 28 por ciento. El primero de ellos constituye una práctica que se puso de moda con la crisis económica y con la expatriación de capitales principalmente hacia Suiza, en donde las mujeres, amas de casa, con familia a cargo, pasaban hasta cierto punto más desapercibidas. Le siguen las estafas bancarias y los hurtos, actividades delictivas que como sugieren las teorías vistas no implican una gran exposición a una condena alta o a sufrir algún percance físico. Muchos hurtos son cometidos por mujeres procedentes de Rumanía que forman pequeños núcleos de bandas que se dedican al robo de carteras o a la ejecución de pequeñas estafas. En general, se podría decir, que este apartado de delincuencia es el típico de las mujeres, aunque como se aprecia abajo, nunca superan en porcentaje a los hombres. Es ilustrativo también la baja participación en delitos relacionados con coches: sustracción de un vehículo y robo en vehículos, ya que el porcentaje en ambos no llega al 7 por ciento. Lo cual estaría relacionado con el reparto de roles en el hogar, en donde los hombres declaran que su principal aportación es todo lo relacionado con el bricolaje y con el cuidado y mantenimiento de los coches.

Cuadro 67. Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra el patrimonio. Año 2012.

	Hombres	Mujeres	Mujeres %	Total
V. Contra Patrimonio	101.661	18.929	15,60	120.590
1. Hurtos	16.962	6.853	28,77	23.815
2. Robos con fuerza en cosas	44.409	3.750	7,76	48.159
En vehículos	7.045	420	5,62	7.465
En domicilios	14.576	1.800	10,99	16.376
En establecimientos	8.940	615	6,43	9.555
3. Robos violencia o intimidación	15.281	2.225	12,70	17.506
En vía pública	9.001	1.154	11,36	10.155
En domicilios	1.523	240	13,61	1.763
En establecimientos	2.950	604	16,99	3.554
4. Sustracción de vehículos	4.958	355	6,68	5.313

5.	Estafas	6.350	2.132	25,13	8.482
	Estafas bancarias	479	198	29,24	677
6.	Daños	4.007	487	10,83	4.494
7.	Contra la propiedad intelectual e industrial	1.305	245	15,80	1.550
8.	Blanqueo de capitales	381	201	34,53	582
9.	Otros contra el patrimonio	8.008	2.681	25,08	10.689

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

No parece tampoco que en capítulo VI de delitos exista una gran intervención de la mujer. En todo caso se podría destacar el tráfico de drogas que representa el 16 por ciento y que son llevados a cabo por mujeres porque se estima que los jueces son más indulgentes en las condenas sobre ellas al tomar en cuenta sus responsabilidades familiares. Sería el caso de las mujeres gitanas que pueblan las cárceles principalmente por este motivo. Le sigue los delitos contra la seguridad colectiva con el 12 por ciento.

Cuadro 68. Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva. 2012.

	Hombres	Mujeres	Mujeres %	Total
VI. Seguridad Colectiva	58.896	7.151	10,82	66.047
1. Tráfico de drogas	17.048	3.278	16,12	20.326
2. Contra la seguridad vial	40.276	3.654	8,31	43.930
3. Otros contra la seguridad colectiva	1.572	219	12,22	1.791

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Benson and Gottschalk³⁰⁸ sostienen la creciente importancia de las mujeres en delitos de cuello blanco. Sin embargo su implicación en este tipo de delitos, tal como se puede observar en el cuadro de abajo en España es todavía bastante insignificante. Las principales explicaciones presentadas para tener en cuenta la naturaleza y la baja tasa de participación de las mujeres en el crimen de cuello blanco han sido: la segregación por género a nivel horizontal en determinadas ocupaciones de cuello blanco como directivas, consejeras de grandes o medianas empresas, directoras, jefas o supervisoras. Se podría decir que la baja tasa de presencia femenina en estas categorías constituye de antemano un serio hándicap para poder cometer este tipo de delitos. La segregación ocupacional por género y la desigualdad en el trabajo limitan por el momento el acceso de las mujeres a las oportunidades para cometer delitos de cuello blanco. Como se comprueba en el cuadro de abajo el mayor porcentaje de mujeres dedicadas a este tipo de delito llega al 27 por ciento en el caso de los delitos de falsedades, bajando hasta 14 o 15 por ciento en los delitos contra la administración

³⁰⁸ Benson M. and Gottschalk P. (2015). Gender and white-collar crime in Norway: An empirical study of media reports. International Journal of Law, Crime and Justice. In Press

pública, de justicia, y orden público. Eso indica que todavía está lejos de alcanzar los niveles porcentuales de los hombres en este apartado.

Cuadro 69. Detenciones e imputaciones por género por causa de infracción penal contra falsedades y las administraciones públicas. 2012.

	Hombres	Mujeres	Mujeres %	Total
VII. Falsedades	9.687	3.685	27, 55	13.372
VIII. Admón. Pública	338	60	15,07	398
IX. Admón. Justicia	16.726	2.808	14,37	19.534
X. Orden Público	17.654	2.960	14,35	20.614
XI. Legislación Especial	260	35	11,86	295
XII. Otros delitos	2.965	769	20,59	3.734

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

12.2. Delitos por edad

La constatación de que la edad influye en la comisión de delitos es algo que ya observaron Quetelet en 1831 y Parmelee en 1918. Sin embargo, concretar las diferencias delictivas por edad no es nada fácil, por ello y frente a la propia escala de edades basada en experiencias vitales, se suele recurrir a la confrontación entre delincuencia juvenil, delincuencia adulta y delincuencia de la tercera edad³⁰⁹. Pero, concretar la edad juvenil en la estructura de edades tampoco es sencillo, toda vez que para la sociología, el concepto de juventud se ha dilatado hasta los 28 años porque coincide básicamente con la emancipación familiar. Por otra parte, el código penal establece la mayoría de edad penal en los 18 años, de manera que a los menores de 14 años se les aplica la 'protección jurídica del menor', entre los 14 y los 18 años se les trata según la 'responsabilidad penal del menor', y entre los 18 y 21 años se utiliza el código normal, aunque existe la posibilidad de momento postergada de concederles el mismo trato que se les dispensa a los jóvenes entre 14 y 18 años, cuando concurren determinadas circunstancias. La estadística policial utiliza el concepto de delincuencia juvenil como el periodo que llega hasta los 18 años, aunque aporta también tácitamente los datos de 18 a 21 años.

Al igual que ocurre con otras categorías sociológicas, la juventud está sujeta a los cambios demográficos y sociales que experimenta la sociedad, como lo demuestra el hecho de que como tal sea un constructor sociológico ideado a principios de siglo XX, en el marco de la pujante sociedad industrial, ya que anteriormente no era concebida como tal. Precisamente por esta dificultad es necesario contemplar una primera aproximación propedéutica a través de su inclusión en el curso de la vida. Las teorías del desarrollo vital examinan una amplia variedad de factores que contribuyen a

³⁰⁹ Moritzot J. and Kazemian (Ed.) (2015). The development of criminal and antisocial behavior. Springer. New york.

los procesos de desarrollo y a la consolidación de la persona a través de su existencia. Algunas de ellas reflejan el ciclo entero desde que se nace hasta que se muere, mientras que otras se centran en determinados períodos como la infancia, la madurez y la vejez por considerarlos más determinantes que el resto. La mayor parte de ellos, sin embargo se hacen eco de los importantes procesos que se suceden y que son capaces de explicar las habilidades y los logros que se encuentran relacionados con el desarrollo biológico y psicológico de determinadas edades o períodos de edad. Los primeros indicios de este tipo de teoría se pueden encontrar en las religiones tanto occidentales como orientales, ya que el Talmud, por ejemplo, describe catorce periodos de tiempo detallando la progresión del desarrollo que acompaña al aprendizaje religioso, moral y cognitivo así como a los roles sociales deseables y a los rasgos psicológicos, en donde por ejemplo, la edad de cinco años supone el aprendizaje de leer, la edad de los trece se asocia a asumir responsabilidades morales, la de los quince al razonamiento abstracto, la de los veinte a la búsqueda de un medio de vida, la de los sesenta a la de la vejez y la de los ochenta a una especial espiritualidad. De igual manera el sánscrito establece seis etapas de la humanidad: el tiempo de la infancia y de la inocencia; la juventud, la adolescencia y el tiempo de aprendizaje; la temprana vida de adulto y el tiempo de matrimonio y ocupación; el tiempo para dedicar al cuidado de la familia; el comienzo del desentendimiento de la vida; el cumplimiento del desentendimiento y la preparación para la unión con la vida cósmica.

La explicación de la delincuencia en base a la edad ha sido un argumento ampliamente utilizado desde la teoría sociológica. El enfoque de la carrera delincente y la perspectiva del desarrollo han alcanzado un cierto reconocimiento paradigmático en la sociología y en otras teorías relacionados con la delincuencia³¹⁰. En efecto las teorías del curso de la vida o más concretamente de las etapas de la vida se retrotraen a conceptos como adaptación y transformación. Es un hecho biológico que el ser humano nace, crece y muere, atravesando diversas etapas biológicas que se corresponden con etapas definidas socialmente. Según Allerbeck y Rosenmayr³¹¹, el concepto básico de toda teoría encaminada hacia los grupos de edad, las fases de la vida o a una sola de ellas, tiene que ser la estructura de edades o la duración máxima de la vida, sociológicamente determinada (no biológica) medida según parámetros de expectativas de vida o mortalidad. Farrington et al.³¹² han señalado cómo las personas son inherentemente adaptativas y

³¹⁰ DeLisi M. and Beaver K. (2014). *Criminological theory: a life course approach*. Jones and Barlett. Burlington.

³¹¹ Allerbeck K. and Rosenmayr L. (1977). *Introducción a la sociología de la juventud*. Buenos Aires: Kapelusz.

³¹² Farrington D., Piquero A. and Jennings W. (2013). *Offending from childhood to late middle age: recent results from the Cambridge Study in delinquent development*. Springer. New York.

creativas con la consiguiente transformación que pueden efectuar de sus propias vidas si es que no les faltan los apoyos sociales necesarios y oportunos. Desde la psicología social, Erikson³¹³ estableció ocho etapas o edades del hombre definidas porque en cada una de ellas el individuo se enfrenta a un conflicto fundamental entre sus necesidades predominantes y la capacidad de la sociedad para satisfacerlas.

De acuerdo a Settersten y Mayer³¹⁴, el curso de la vida se refiere al proceso social que se mantiene a través de la duración de la vida del individuo o a través de porciones significativas de ella, especialmente en momentos concretos como el ciclo familiar, la carrera profesional y el empleo, siendo profundamente influenciado por las creencias culturales sobre la biografía individual, las secuencias institucionalizadas de roles y posiciones, las restricciones legales de la edad y las decisiones de los actores individuales. Para Elder³¹⁵, si acaso la gran referencia sobre la teoría del curso de la vida, la edad puede ser definida como senderos a través de los cuales se desarrolla la historia social de los individuos, implicando una amplia gama de roles que son definidos culturalmente y a través de los cuales se va procediendo a la continuidad y al cambio. Existen cambios que son debidos a suceso fortuitos o aleatorios en la vida de los individuos como las guerras o los desastres naturales, mientras que otros surgen de aspectos estructurales como las depresiones económicas que provocan experiencias amargas de la vida que limitan por ejemplo la educación o el matrimonio a edades tempranas. Desde un nivel individual, la perspectiva del curso de la vida enfatiza la extensión de la estabilidad y el cambio en los atributos de personalidad y comportamiento en el tiempo a través de la conexión entre trayectoria y transición.

Es un hecho evidente que, de una u otra forma, con uno u otro propósito, todas las sociedades distinguen entre grupos de edad³¹⁶. Las variaciones que pueden encontrarse son tan grandes, la misma definición social de edad es tan imprecisa y variable, que impide la universalización del criterio de edad para explicar la organización social. Sin embargo, el recurso al agrupamiento por edades es tan generalizado que explica la existencia de serios intentos por probar su capacidad de ordenar el espacio social. Ello ha llevado a diversos autores, a sostener la existencia de un sistema de estratificación social en función de la edad³¹⁷. Estratificación por razón de

³¹³ Erikson E.H. (1974). *Identidad, juventud y crisis*. Buenos Aires: Paidós.

³¹⁴ Settersten R. and Mayer K. (1997). The measurement of age, age structuring, and the life course. *Annual Reviews of Sociology*. N° 23. Págs. 233-261.

³¹⁵ Elder, G. (1985). *Lije course dynamics*. Ithaca, New York. Cornell University Press.

³¹⁶ Gibson C. and Krohn M. (2013). *Handbook of life course criminology: emerging trends and directions for future research*. Springer. New York.

³¹⁷ Loeber R. and Farrington D. (Ed.) (2012). *From juvenile delinquency to adult crime: criminal careers, justice policy, and prevention*. Oxford University Press. New York.

edad significa entender que la sociedad se encuentra dividida básicamente en grupos de edad significativos que difieren entre sí en la asignación de los recursos sociales. Esta estratificación refleja diferencias en cuanto a las capacidades, roles, derechos y privilegios. Y como cualquier sistema de estratificación implica desigualdad, según el modelo de estratificación por edades, algunos grupos de edad están más valorados y reciben más recursos sociales que otros. Como se ve, el punto de partida es bien sencillo: los sujetos se distribuyen según estratos de edad, de manera que son convencionalmente reconocidos de esa manera por todos los demás. Esos estratos pueden estar definidos de distintas formas: en función de criterios cronológicos o en función de las etapas del ciclo de vida. Incluso pueden definirse distintos estratos en distintas esferas, como ocurre en la familia o el trabajo. Los estratos de edad se alimentan por el flujo de cohortes, en una interesante conexión con los argumentos desarrollados en anteriores epígrafes: cuando una cohorte abandona una de las etapas, otra nueva viene a sustituirla, de manera que el proceso de cumplir años produce una movilidad individual entre estratos de edad.

Desde la teoría criminológica de orientación sociológica se ha acudido al concepto de las etapas de la vida para dar cuenta de los antecedentes que pueden explicar el comportamiento delincuente. Este es definido como el aprendizaje de un rol que se aprende o se interioriza desde joven y que se prolonga en la vida adulta. La frase “de joven delincuente, de mayor criminal” da cuenta mejor que otros aforismos de cómo los inicios y persistencias en estas vías conducen bajo determinados condicionamientos al desenlace final. Sin embargo, muchas personas que cometen actos desviados desde jóvenes cambian de acuerdo a la maduración fisiológica y a su moldeado social, persistiendo solamente un porcentaje menor³¹⁸. Ante el debilitamiento de los controles sociales que operan en la juventud y que pueden ser más o menos laxos, se erigen en la madurez una serie de mecanismos que vinculan definitivamente a las personas con su medio social.

La publicación del informe del 1986 de la National Academy of Science's Report sobre carreras delictivas revitalizó el estudio de las carreras criminales y generó un gran debate sobre la secuencia longitudinal de los delitos cometidos por un delincuente individual, así como las herramientas conceptuales básicas que proporcionaron el marco para muchos debates teóricos actuales sobre el desarrollo de la criminología del curso de la

Wright J., Tibbetts S. and daigle L. (2015). *Criminals in the making: criminality across the life course*. Sage. Thousand oaks.

³¹⁸ Farrington D. and Ttofi M. (2015). Developmental and life-course theories of offending. In Moritzot J. and Kazemian (Ed.) (2015). *The development of criminal and antisocial behavior*. Springer. New york Pág. 19-39

vida³¹⁹. Una demanda clave del informe es que es importante llevar a cabo investigación longitudinal para responder a preguntas críticas acerca de los patrones de carrera criminal, incluyendo la importante distinción entre la participación (prevalencia) de ofender y la frecuencia (incidencia) de la delincuencia. Participación se refiere a la proporción de una población que son los delincuentes activos en un momento dado, mientras que la frecuencia se refiere a la tasa media anual en la que este subgrupo de delincuentes activos comete crímenes. Frecuencia caracteriza la intensidad o tasa de delitos de delincuentes individuales y se denota a menudo por el signo lambda. Los autores del estudio expusieron que la distinción entre participación y frecuencia es especialmente relevante al estudiar la relación entre edad y delito. Según argumentaron, la curva de edad o el delito agregado conocido, podría ser el resultado tanto de las diferencias de la clasificación por edad en la participación (cuánto más adolescentes frente a adultos, mayores ratios de delitos) como de las diferencias de edad en la frecuencia. La participación varía con la edad de manera similar a la curva del delito por edad agregada, aunque la frecuencia es estable a través del tiempo y se incrementa con la edad para ciertos tipos de delito y subgrupos de delincuentes. Finalmente, en la distinción entre participación y frecuencia, las teorías del delito podrían requerir explicaciones separadas para los factores que llegan a estar involucrados en la estimulación individual. La distinción entre participación y frecuencia no fue totalmente aceptada entre criminólogos. Gottfredson y Hirschi³²⁰ describieron una vista estática, afirmando que la relación edad – crimen observada a nivel agregado ya refleja un nivel individual, porque todos los individuos muestran un aumento y una caída en la frecuencia de la delincuencia por grupos de edad, negando explícitamente la necesidad de distinguir entre participación y frecuencia.

La edad de responsabilidad penal como coacción, el enamoramiento, la pareja, el matrimonio, el trabajo y los hijos serían los principales responsables de que el individuo ante el temor de perderlos se aleje definitivamente de la senda del comportamiento desviado. Sin embargo, estos mecanismos no surten efecto en otras personas cuya experiencia de vida se etiqueta como “carrera criminal”, porque a lo largo de su trayectoria les ha sido o bien imposible desembarazarse de ellos o no han surtido efecto los mecanismos de vinculación. La reincidencia en el delito es algo común tanto en las estadísticas policiales, como en los auto informes. Autores como

³¹⁹ Farrington, David P. 2003. Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical issues. *Criminology* 41:221–55.

³²⁰ Gottfredson M. and Travis H. (1986). The true value of Lambda would appear to be zero. *Criminology* 24:213–34.

Gottfredson M. and Travis H. (1988). Science, public policy, and the career paradigm. *Criminology* 26:37–55.

Laub³²¹, mencionan las etapas por las cuales va pasando la vida y cómo influyen aspectos tales como los antecedentes de familias desestructuradas, la ausencia de controles parentales, la pertenencia a infraclases, el desempleo de larga duración, la dependencia del estado de bienestar, la dependencia de las drogas o del alcohol y los antecedentes penales, serían las variables que explicarían la continuidad en el delito.

Probablemente la teoría que mejor explica la conexión entre el delito y el curso de la vida es la del *control social informal graduado por la edad* de Laub y Sampson³²². Según ésta la práctica delincuente es continua pero al mismo tiempo presenta altas y bajas, puntos de inflexión, de abandono o de surgimiento según los principios de trayectorias y transiciones. Para dar una explicación plausible de este acontecer que se desarrolla en el curso de la vida fusionan las teorías de la desorganización social de Shaw y McKay y del control de Hirschi, porque a través de ellas se pueden conciliar las perspectivas estructurales y de proceso. La delincuencia juvenil es más probable que ocurra cuando los vínculos del individuo con la sociedad son débiles o están rotos, teniendo en cuenta que la conexión con la sociedad varía a través del tiempo porque cambian los controles sociales informales tales como escuela, trabajo y familia, asumiendo que las relaciones interpersonales que se establecen entre padres e hijos, profesores y alumnos, empleadores y empleados, actúan como inversiones sociales o capital social a lo largo del curso de la vida. Es decir, un buen capital social dependerá de unos buenos vínculos sociales que proveen recursos psicológicos y sociales que los individuos pueden manejar cuando transitan en diferentes etapas del curso de la vida, de manera que cuanto más laxos sean estos vínculos más se estará en peligro de delinquir. La delincuencia en la niñez y adolescencia puede proceder de malos vínculos con la familia por defectuosos controles directos en el seguimiento y castigo y en segundo lugar por defectuosos vínculos con la escuela escenificados tanto en las relaciones interpersonales con compañeros y profesores como en las notas. Normalmente esta deficiencia tiene un carácter estructural y está causada por una situación familiar complicada debido al desempleo, a las malas relaciones conyugales, a las disputas, a la movilidad residencial o al estatus socioeconómico.

Las conductas delictivas tienen una cierta continuidad a través del tiempo y de las etapas de la vida y así el comportamiento desviado, o el temperamento violento como el crimen, las drogas o el alcohol se reconducen a través de una variedad de facetas de la vida. En otras palabras

³²¹ Laub, J. (2004). The life course of criminology in the United States. The American Society of Criminology 2003 presidential address. *Criminology* 42(1): 1-26.

³²² Laub, J. and Sampson R. (2004). Coming of age in wartime: How world War II and the Korean changed lives. In *Historical influences on lives and aging*, ed. K. W. Schaie and G. H. Elder (Ed.). New York: Springer. Pág. 1-31.

el comportamiento antisocial en la infancia y juventud predice una parte importante de problemas adultos así como de futuras vinculaciones en los terrenos de la educación, del trabajo y de las experiencias maritales. Todo ocurre según la continuidad acumulativa porque los arrestos, el etiquetado social y la encarcelación conducen a una restricción de oportunidades, incluyendo el fracaso escolar y el desempleo. Por lo tanto, la delincuencia juvenil tiene un efecto indirecto en la delincuencia adulta a través del debilitamiento de los vínculos con la sociedad, de manera que delito, está íntimamente relacionado. Sin embargo, la continuidad en el delito puede estar supeditada al cambio que suponen los vínculos sociales informales que surgen en la vida adulta, principalmente el trabajo y la esposa, de manera que pueden modificar la inercia de la vida juvenil. En definitiva, los eventos que surgen en la transición al mundo adulto en tanto que nuevo capital social puede cambiar la trayectoria de delincuente a no delincuente o viceversa a pesar de, o independientemente, de antiguas diferencias en tendencias delinquentes. Aunque más que el propio matrimonio o empleo, rigen las relaciones de intensidad emocional o inversión mutua que se pueda establecer dentro de ellos. La inhibición del delito dependerá por lo tanto de la inversión en el capital social, de manera que aquellos que no tenían antecedentes delictivo en la juventud podrían perecer ahora ante la falta de vínculos adultos en la delincuencia. En definitiva, existe una cierta continuidad entre juventud y resto de la vida, entre continuidad y cambio.

El principal concepto de este marco teórico es el proceso dinámico por el cual la interconexión entre trayectorias y transiciones genera puntos de inflexión o cambios en el curso de la vida. La explicación de la delincuencia juvenil que según algunos autores, como Göppinger³²³ ha aumentado considerablemente en todos los países occidentales desde finales de la década de los cuarenta, es compleja. La teoría sociológica de la tensión establece cómo los fines publicitados por el sistema y los medios para conseguirlos ponen en una tesitura difícil al joven de clase baja que acaba delinquir. Otros autores dentro de la misma tradición teórica han señalado las oportunidades de medios legítimos e ilegítimos que se le brindan al joven y que pueden explicar porque dentro de la misma clase unos delinquen y otros no. Desde la teoría del control social se hace hincapié en la importancia de los vínculos, precisamente la relajación que se produce entre padres e hijos, profesores alumnos, entre amigos, y en líneas generales entre actitudes y valores explican la delincuencia juvenil, por lo que algunos autores hablan de la falacia del joven inocente.

³²³ Göppinger H. (1975). *Criminología*. Madrid. Reus.

Respaldando una perspectiva del desarrollo, Loeber y LeBlanc³²⁴ definen lo que denominan “criminología del desarrollo” como el estudio de temporal, del individuo que opta por delinquir. Criminología del desarrollo, argumentan, es el estudio, en primer lugar, del desarrollo y la dinámica de los comportamientos problemáticos que varían con la edad; y segundo, de los factores explicativos o causales que preceden o que concurren con el desarrollo del comportamiento y tienen un impacto en su curso. En la misma línea, Farrington³²⁵ describe el desarrollo y el curso de la vida de un delincuente de acuerdo a los acontecimientos que motivan para delinquir a lo largo de la vida del individuo. En definitiva, la criminología del desarrollo, se centra en tres cuestiones principales: el desarrollo de las conductas infractoras y antisociales; en los factores de riesgo que concurren en diferentes edades; y en los efectos de eventos de la vida en el curso del desarrollo. Otros autores como Sampson y Laub³²⁶ conciben la “criminología del desarrollo” o “criminología del curso de la vida” como el estudio y análisis de los cambios en la delincuencia y el crimen que están relacionados a la edad de forma ordenada o en hechos reales, que ocurren tiempo real y en el curso de la vida real, en definitiva como el esfuerzo de “proveer sentido a las vidas”.

Abundando en el paradigma de la carrera criminal, la criminología del desarrollo cuantifica una serie de conceptos dinámicos, capturando el cambio y la estabilidad en el tiempo, distinguiendo la activación (la iniciación y la estimulación del delito), la agravación (la creciente gravedad del delito) y la renuncia (el incremento de la seriedad del delito) como procesos diferenciados en el curso de la delincuencia. Junto a ello hay que destacar en esta teoría el concepto de “vidas vinculadas”, concentrado sobre la importancia del arraigo social de las personas. El desarrollo de las personas no se lleva a cabo en aislamiento social, porque la acción individual tiene consecuencias para los demás, y las acciones de los demás a su vez tienen efectos para las personas. La familia es un ejemplo obvio de una institución social que conecta las vidas de muchas personas durante muchas generaciones, vinculando mutuamente, a padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos, etc. La fuerza de estos vínculos depende de la edad, así como el desarrollo en otros dominios de la vida.

³²⁴ Le Blanc M. and Loeber R. (1998). Developmental criminology updated. In Tonry M. (Ed.). *Crime and justice: A review of research*. Vol. 23. Chicago. University of Chicago Press. Págs. 115–198.

Loeber R. and Farrington D. (2012). *From juvenile delinquency to adult crime: criminal careers, justice policy and prevention*. Oxford. Oxford University Press.

³²⁵ Farrington D. (Ed.). (2005). *Integrated developmental and life-course theories of offending*. New Brunswick, Transaction.

³²⁶ Sampson R. and Laub J. (1993). *Crime in the making: Pathways and turning points through life*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Petras et al.³²⁷, comprobaron la relación entre las edades y la delincuencia, usando datos de estudio Criminal Career and Life Course del Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement, que incluye el seguimiento de varias décadas con aproximadamente 5.000 personas en Holanda, aportando información sobre las condenas penales a través de 60 años de personas condenadas y aplicando modelos que distinguen explícitamente entre participación y frecuencia, examinando la distinción empírica entre participación y frecuencia, según lo evidenciado por su relación con la edad, género y el matrimonio. El autocontrol se refiere a la participación y frecuencia (es decir, aquellos con bajo autocontrol tienen más probabilidades de participar en crimen y, una vez activo, participar en una frecuencia más alta de delincuencia). Otra cuestión es por qué existen individuos que cometen crímenes a una tasa más alta después de su primer delito en lugar de por qué existen personas que participan en la delincuencia en un primer momento. Con información y datos de ciclo de vida se recolectaron personas seleccionadas al azar, todos condenados por un delito en 1977. Los encuestados fueron seleccionados por medio de una selección representativa de 4 por ciento de todos los casos criminales resueltos definitivamente en los Países Bajos. Desde 1938, todos los ciudadanos se han registrado en sus municipios con información sobre el matrimonio, historia de fertilidad y fecha de la muerte. Previo a su registro electrónico en 1994, se utilizaron tarjetas de registro personales que fueron enviados a la ciudad de residencia cada vez que una persona cambió de domicilio. Para las personas que murieron antes de 1994, tarjetas de registro personales se recuperaron del centro de genealogía y heráldica. En 2002, había muerto el 17 por ciento de la muestra. Casi tres cuartas partes de la muestra final se habían casado por lo menos una vez: el 53 por ciento de estos matrimonios terminó en divorcio, a los 19 años, aproximadamente el 10% estaban casados; a los 25 años, aproximadamente el 50% estaban casados; y a los 40 años, cerca del 70 por ciento contrajeron nupcias. Los resultados reportaron evidencia de disminución de la delincuencia a través de la edad, sexo, y estatus marital, lo cual sería consistente con las teorías de Hirschi y Gottfredson, mientras que difieren con las perspectivas de carreras delictivas sobre diferentes tipos de delincuentes.

Otro estudio reciente sobre las curvas de edad y la delincuencia fue realizado con datos procedentes del Pittsburgh Youth Study, llevado a cabo por Fabio et al.³²⁸, evaluando la relación entre desventajas del barrio y la curva del delito por edad. Los barrios fueron medidos por porcentaje de hogares con asistencia pública (. 91%), porcentaje de familias por debajo del

³²⁷ Petras H., Nieuwbeerta P. and Piquet A. (2010). Participation and frequency during criminal careers across the life span. *Criminology* N° 48(2). 607-637.

³²⁸ Fabio A., Tu L., Leber R and Cohen J. (2011). Neighborhood socioeconomic disadvantage and the shape of the age-crime curve. *American Journal of Public Health*. N° 10. Pág. 325-332.

nivel de pobreza (. 90%), porcentaje de familias no casadas (. 89%), porcentaje de desempleados (. 88%), promedio de ingresos (-. 86%) y el porcentaje de afroamericanos (. 81%). Además se utilizaron componentes de desventaja socio-económica desfavorecida (mayor 25% de desventaja), promedio (mediano 50%) y con ventaja (menor 25%). La categoría de desfavorecidos se divide entre barrios con y sin vivienda. La delincuencia fue medida por: (1) atacar a alguien con un arma o con intención de lastimar seriamente o matar, o (2) violación o sexo forzado sexo medido anualmente. La información fue obtenida por medio de una escala de delincuencia self-reported. Encontrando varias cuestiones importantes: las desventajas del barrio influyen negativamente en la participación de la curva del delito por edad, ya que los chicos procedentes de esta situación se implican en mayor número de delitos y continúan así por un largo periodo de tiempo que los chicos procedentes de barrios estructurados; a la edad de 14 años, el 11 por ciento de los chicos procedentes de áreas desestructuradas estaban en situación de ilegalidad, lo cual subía al 13 por ciento cuando se cumplían 19 años; en general en los barrios la curva de la delincuencia se incrementaba desde el 4 por ciento de la temprana adolescencia hasta el 7 por ciento a la edad de 18 años y declinaba pausadamente hasta el 1 por ciento a los 24 años; desde los 15 a los 25 años eran significativas las variables de control como empleo y estatus marital, exposición a pares desviados y membresía de bandas delincuentes.

Contemplando la estadística oficial del Ministerio del Interior, los datos en su versión de participación, parecen suficientemente elocuentes como para establecer que el delito por edades se encuentra estratificado siguiendo una curva de Gauss. La delincuencia juvenil según el código penal (menores de 18 años) fue del 6 por ciento, y la delincuencia juvenil sociológica (hasta los 30 años) fue del 57,38 por ciento. Los principales delitos que cometieron los jóvenes menores de 18 años, se concentraron por orden en: robos con violencia e intimidación (3.863), robos con fuerza en las cosas (3.796), sustracción de vehículos (3.459), homicidios o asesinatos (72). Estos datos que reflejan una curva de Gauss hacen pensar que existe un ciclo de vida en la comisión del delito. Por lo tanto el grupo de edad más delictivo oficialmente es el de 21 a 30 años, seguido por los grupos de edades adyacentes, desde los 18 hasta los 50 años en donde fueron detenidos el 89,17 por ciento del total. Según Göppinger la criminología debería utilizar el concepto de juventud en su vertiente amplia, abarcando las edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, porque de esa manera se podría englobar a la conocida subdivisión legal de jóvenes y semi adultos.

Si llevamos a cabo un análisis transversal sobre la incidencia de la edad en los diferentes tipos de delitos cometidos en España en el año 2013, obtenemos que los delitos contra las personas, cuadro de abajo, mediados por grupos de edad reflejan una subida hasta los 18-30 y luego una bajada, aunque los delitos de malos tratos en el ámbito familiar presentan una

subida hasta el tramo de 41-64 y luego baja. El grupo de edad que más delitos comete de este tipo es el de 18 a 30 años. Algunos autores³²⁹ han sostenido que existe una caída en la delincuencia en personas de 18 a 23 años.

Cuadro 70. Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra las personas. Año 2013.

	14-17	18-30	31-40	41-64	más de 64	Total
I. Contra las Personas	1.886	18.166	16.453	17.317	1.302	55.124
Homicidios dolosos / Asesinatos	47	284	208	249	20	808
Homicidios/Asesinatos consumados	12	79	66	97	8	262
Lesiones	727	5.809	2.535	2.103	147	11.321
Malos tratos ámbito familiar	1.020	11.593	13.529	14.825	1.129	42.096
Otros contra las Personas	92	480	181	140	6	899
TOTAL	3.784	36.411	32.972	34.731	2.612	110.510

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En cuanto a los delitos de corte sexual, Lussier y Healey³³⁰ encontraron en un estudio sobre 553 adultos que habían cometido delitos sexuales que la curva de delito por edad en este tipo de delito es mucho más tardía que otros delitos, ya que aunque un 37 por ciento declaró que había llevado a cabo un acto delictivo sexual durante la adolescencia y juventud, un 63 por ciento declaró que lo había hecho durante la madurez. El punto más alto de la curva se situaba en los 30,5 años (desviación típica 13,3) con un rango entre 16 y 75 años; además los practicantes de este tipo de delitos solía estar involucrados en otros tipos como robos y agresiones. Cale y Lussier también encontraron evidencia empírica de que los delitos sexuales se solían cometer a edades que no tenía nada que ver con el resto de los delitos³³¹. Aunque los datos de delitos de este tipo no se pueden encontrar en España por edades, en la tabla de abajo se puede observar la gran diferencia que existe en este tipo de delitos por edades, en las que después de los treinta años se reducen considerablemente las agresiones con penetración, la

³²⁹ Stolzenberg L. and D'Alessio S. (2008). Cooffending and the age-crime curve. *Journal of research in Crime and Delinquency*. N° 45 (1). Págs. 65-86.

³³⁰ Lussier P. and Healey J. (2009). Rediscovering Quetelet, again: The "aging" offender and the prediction of reoffending in a sample of adult sex offenders. *Justice Quarterly* 26 (4), 827-856.

³³¹ Cale, J., & Lussier, P. (2011). Toward a developmental taxonomy of sexual aggressors of women: Antisocial trajectories in youth, mating efforts and sexual criminal activity in adulthood. *Violence and Victims*, 26, 16-32.

--Cale, J., & Lussier, P. (2011). Merging developmental and criminal career approaches: Implications for risk prediction of violent and sexual recidivism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 24, 107-132.

--Lussier, P. & Blokland, A. (2014). Criminal careers of juvenile and adult sex offenders. In Francis, B. (Eds.), *Handbook of Sex Offenses and Sex Offenders*. Oxford, UK: Oxford University Press

corrupción de menores. La curva por grupos de edades tiene una característica básica en todos los grupos y es que presenta un inicio tímido en los 14-17 años y una caída pronunciada en los que tienen más de 64 años. Como es lógico los delitos contra la familia se incrementan a partir de los 41 años, toda vez que la entrada al matrimonio en España se produce a los 29 años de la mujer y 31 años del hombre.

Cuadro 71. Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra la libertad. Año 2013.

	14-17	18-30	31-40	41-64	+ 64	Total
I. Contra Libertad	749	5.659	6.373	7.885	672	21.338
1 Malos tratos hab. ámbito familiar	232	2.266	2.975	3.574	337	9.384
2 Otros contra la libertad	517	3.393	3.398	4.311	335	11.954
III. Libertad Sexual	396	1.298	1.197	1.570	324	4.785
1 Agresión sexual con penetración	55	304	189	168	18	734
2 Corrupción de menores o incapacitados	34	63	33	57	11	198
3 Pornografía de menores	60	66	76	127	15	344
4 Otros contra la libertad e indemnidad sexual	247	865	899	1.218	280	3.509
IV. Relaciones Familiares	1	343	933	1.027	37	2.341

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

E igual cabría señalar de los delitos contra el patrimonio, aunque en este tipo de delitos, se produce una subida muy pronunciada del primer tramo de edad al segundo, siendo el grupo de 18 a 30 años un periodo de la vida en el que cometen muchos delitos contra el patrimonio si lo comparamos con el resto de los grupos de edades. En todas las subcategorías duplican al resto de los grupos.

Cuadro 72. Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra el patrimonio. Año 2013.

	14-17	18-30	31-40	41-64	+ 64	Total
V. Contra Patrimonio	9.693	47.934	25.301	18.091	642	101.661
1. Hurtos	1.250	8.022	4.503	3.092	95	16.962
2. Robos con fuerza en cosas	4.412	22.857	10.569	6.452	119	44.409
2.1. En vehículos	629	3.190	1.874	1.337	15	7.045
2.2. En domicilios	1.742	7.735	3.182	1.862	55	14.576
2.3. En establecimientos	809	4.730	2.170	1.227	4	8.940
3. Robos violencia o intimidación	2.776	7.436	3.095	1.958	16	15.281
3.1. En vía pública	2.113	4.572	1.513	797	6	9.001
3.2. En domicilios	91	780	408	242	2	1.523
3.3. En establecimientos	212	1.189	835	711	3	2.950
4. Sustracción de vehículos	500	2.197	1.283	946	32	4.958
5. Estafas	40	1.998	2.174	2.006	132	6.350
5.1. Estafas bancarias	3	158	154	154	10	479
6. Daños	455	1.799	886	778	89	4.007

7.	Contra la propiedad intelectual e ind	4	349	487	453	12	1.305
8.	Blanqueo de capitales	1	47	135	183	15	381
9.	Otros contra el patrimonio	255	3.229	2.169	2.223	132	8.008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Lo mismo se puede decir de la seguridad colectiva, ya que la pauta es un fuerte aumento a partir del primer grupo de edad, una ligera disminución a partir de los treinta años y un ligero aumento de los 41 a 65 años,

Cuadro 73. Detenciones e imputaciones por edad por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva y administraciones. Año 2013.

	14-17	18-30	31-40	41-64	+ 64	Total
VI. Seguridad Colectiva	1.023	20.754	17.536	18.542	1.041	58.896
1. Tráfico de drogas	289	7.245	5.286	4.082	146	17.048
2. Contra la seguridad vial	679	12.999	11.787	13.989	822	40.276
3. Otros contra la seguridad colecti	55	510	463	471	73	1.572
VII. Falsedades	121	3.418	3.204	2.682	262	9.687
VIII. Admón. Pública	3	34	75	204	22	338
IX. Admón. Justicia	133	4.630	5.273	6.240	450	16.726
X. Orden Público	675	7.018	4.909	4.851	201	17.654
XI. Legislación Especial	0	85	65	106	4	260
XII. Otros delitos	35	737	931	1.122	140	2.965
Total	14.715	110.076	82.250	79.637	5.097	291.775

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

12.3. Delitos por raza, etnia, extranjería e inmigración.

La mayor implicación en sucesos delictivos de determinadas razas o etnias no es un fenómeno cuyo análisis sea reciente, ya que existen antecedentes que se remontan al estudio llevado a cabo por Du Bois en 1899 sobre las variaciones de delincuencia a través de grupos étnicos, blancos y negros, en la ciudad de Filadelfia. A partir de aquí se han sucedido numerosos estudios indagando por qué en países en donde existe variedad étnica o racial, los porcentajes de sucesos violentos son comparativamente muchos más altos en los grupos étnicos o en las zonas donde habitan que en el resto de la población. Igual sucede en aquellos países donde existe un gran fenómeno migratorio³³². Algunos de los estudios más importantes realizados sobre el tema han subrayado cómo estas minorías cometen el mismo número de delitos que el resto de la población, sin embargo, son encarcelados, juzgados y condenados en mayor porcentaje por prejuicios raciales y étnicos, de la policía, fiscales y jueces³³³, otros han incidido en las

³³² Johnson, H. (2005). Experiences of crime in two selected migrant communities, Trends and issues in crime and criminal justice, no. 302: Canberra, Australian Institute of Criminology.

³³³ Farrington D. and Buckle A. (1984). An observational study of shoplifting. British Journal of Criminology. Vol. 24. Nº 1. Págs 63-73.

condiciones socioeconómicas de privación que les conducen al delito, otros en la subcultura de la violencia con que estos grupos se identifican, y finalmente en la desestructuración familiar, en el desempleo, en la dependencia del estado de bienestar y en la drogadicción y alcoholismo que padecen estos colectivos por motivos estrictamente de marginación racial y étnica.

La explicación del por qué las minorías étnicas y los inmigrantes cometen más actos de delincuencia ha sido explicada tradicionalmente por un puñado de variables sociológicas. Desde principios del siglo XX, numerosos autores vinculados a la escuela de Chicago demostraron y explicaron la relación que existe entre la zona donde se vive y el comportamiento delincuente. Wirth, lo hizo a través del concepto de acondicionamiento del entorno, Hall, por medio del concepto de macrocefalia o los problemas de congestión de espacios pequeños con gran densidad de habitantes. Shaw y McKay, en la ciudad de Chicago, a través de la contaminación por contagio, ya que si las enfermedades se transmiten por contagio, igual ocurre con determinadas costumbres sociales nocivas, en donde las personas que habitan en barrios donde deben convivir con robos, violencia, delincuencia, y normas distintas a las del conjunto de la sociedad, acababan contagiándose de esas normas y valores. Schwirian, a través del ciclo *vital del vecindario*, explica que en la evolución de las ciudades, las clases sociales medias y altas emigran hacia zonas mejores que sólo se encuentran en la periferia, abandonando los sectores más degradados a estratos sociales que se encuentran por debajo en la escala social. La acumulación permanente de capas sociales sin recursos acaba convirtiendo a estos barrios en zonas muy vulnerables porque sus habitantes se caracterizan por la desidia y por la falta de control y supervisión de los recursos del barrio y de sus moradores.

Peterson y Privo³³⁴ arguyen que la segregación residencial de comunidades negras y su aislamiento social de las líneas maestras de la cultura del país de origen conducen a la agresividad que es la principal causa del alto ratio de homicidio étnico. Simpson³³⁵ sostiene que el incremento de la pobreza durante las décadas de los ochenta y los noventa afectaron desproporcionadamente a familias monoparentales, de las cuales un tercio eran de color, una marginalidad debida a la hiper segregación de la vivienda, al fracaso con el sistema educativo y en el mercado de trabajo. El factor de la vivienda en España ha sido un ejemplo claro del proceso de descapitalización sufrido por la minoría gitana en nuestro país.

Otro argumento al que se ha acudido ha sido el del sesgo de la policía y de la justicia para detener y condenar con mayor frecuencia a la población

³³⁴ Krivo P. et al. (2009). Segregation, Racial Structure, and Neighborhood Violent Crime. *American Journal of Sociology*. Volume 114 Number 6. Pág. 1765–1802.

³³⁵ Simpson (1991). Op. Cit.

que se diferencia racial y étnicamente. Esta constatación ha venido precedida de los análisis comparativos que se han efectuado en aquellos países donde existe una cierta tradición de medir la violencia o al menos compararla con diversas herramientas. Concretamente las diferencias entre las estadísticas policiales y los auto informes han revelado cómo existe una proporción de delincuencia de la población autóctona que pasa desapercibida. También se ha podido comprobar cómo la rutina policial de vigilar y patrullar los barrios considerados como peligrosos hace que las detenciones sean mayores entre esta población. El estereotipo y los prejuicios raciales con que se desenvuelve la acción policial hacen que aquellos miembros que se destacan por rasgos étnicos diferentes sean detenidos, cacheados y enviados a la justicia en mayor medida que el resto. En España existe un hecho sin precedente cuando el propio gobierno fue el encargado de criminalizar a estos grupos. En el caso de las mujeres gitanas, el 84,8% de las detenidas pasaron directamente del juzgado de guardia a la prisión preventiva, una cantidad inusualmente alta, pero explicada por los jueces porque no presentan una vida adecuada, toda vez que las zonas donde viven es más difícil practicar las citaciones y otras diligencias destinadas a controlar a las imputadas.

La situación familiar sería otro desencadenante explicativo, toda vez que una mayoría importante de jóvenes delincuentes inmigrantes se crían en hogares donde falta el padre, o donde la situación familiar es deficiente por cuestiones estructurales como desempleo prolongado, o dependencia del estado de bienestar. Una situación que afecta con mayor porcentaje a las familias inmigrantes o a las segregadas étnicamente. Los miembros jóvenes de estas familias desarrollan identidades pseudo masculinas y violentas que buscan confirmación a través del hostigamiento en la calle, venta de drogas, posesión de armas, códigos rituales de pertenencia a bandas, que les proveen en muchas ocasiones de ingresos respetables, pero que derivan en formas severas de dependencia de actividad delincuente. Algunos autores han documentado esta tesis en la situación de los puertorriqueños en Estados Unidos, en donde ante la frustración del bloqueo del respeto patriarcal por el trabajo legal, se busca el reconocimiento en la venta de drogas y permisividad sexual.

12.3.1. Los gitanos

En España, una raza (población que se engendrado por suficientes generaciones como para desarrollar características distintivas puramente fisiológicas como altura o color de piel) o una etnia (diferencias meramente culturales como lengua, historia, religión, familia, alimentación, indumentaria, estilo de vida, folklore), como la de los gitanos, que lleva conviviendo con la población española desde 1415 acumula gran parte de las condenas por delitos contra las personas, contra la libertad, y contra la

salud pública (drogas). Etimológicamente el nombre procede de los primeros grupos en torno a 50 o 100 miembros que accedieron a la Península Ibérica través de los Pirineos liderados por una persona que se hace llamar duque o conde del Egipto Menor, por lo que se les denomina desde entonces egipcianos y más tarde gitanos. Desde entonces los avatares del pueblo gitano, por encima de todo nómada y sujeto a sus propias leyes, han sido muchos y variados, pero todos marcados por el asentamiento o la asimilación, así la pragmática de los Reyes Católicos de 1499, la prohibición de su lengua y costumbres de Felipe II, la fijación de los sitios de residencia de Felipe III, la prohibición de vivir agrupados de Felipe IV, la negación de otro trabajo que no sea el agrícola de Carlos II, la exterminación de la raza gitana de Fernando VI, el reconocimiento de ciudadanos españoles de Carlos III, o la recomendación de vigilancia escrupulosa y el control de sus modos de vida del reglamento de la Guardia Civil de 1943 que no será derogado hasta 1978. Es probable que esta variopinta historia haya conducido a un gran grado de desconfianza entre la población autóctona y los gitanos que se manifiesta en el gran cliché con que se sigue etiquetando a los gitanos, según la última encuesta del CIS, el grupo étnico más repudiado por la población³³⁶.

La relación entre los gitanos y la delincuencia viene de lejos y estaría básicamente explicada por las circunstancias especiales con que se han desenvuelto desde sus orígenes. Su dificultad en la plena integración procede de unas costumbres y prácticas culturales que al igual que el pueblo judío –no hay que olvidar que los gitanos también fueron exterminados por los nazis- se basan en el poder del grupo, en la familia, en el número de hijos, en los trabajos agrícolas temporeros, en los asentamientos en las zonas rurales o en las zonas periféricas de las grandes ciudades, en la transmisión generacional de valores, en definitiva en la supervivencia a cualquier precio. Ello hace que en la actualidad su población activa sea del 26 % frente al 21 % que es dependiente económicamente –estudiantes, escolares y menores de 14 años- y frente al 53% que es inactiva –ancianos, amas de casa, mendigos, enfermos y parados-. Las ocupaciones más frecuentes son en gran parte marginales o situadas en los lugares más bajos de la pirámide estratificacional como obreros manuales (45%), temporeros dedicados a la recolección agrícola (20,3%), chatarreros (14,8%), profesionales liberales (1,7%), folklore y espectáculos (1,37%), vendedores y otros sin clasificar (17,9%)³³⁷.

En relación con la economía, el 96% pertenece a la clase baja en comparación el 50% del resto de la población. La configuración familiar –el pilar sobre el que se asienta su civilización- es paradigmático porque la gran

³³⁶ Fundación Secretariado Gitano (2005). Discriminación y comunidad gitana. Informe Anual. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

³³⁷ Fundación Secretariado Gitano (2002). Informe Anual. Discriminación y comunidad gitana. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

cohesión social que supone, se sustenta en cifras muy llamativas, así la tasa bruta de natalidad es dos tercios más alta que la española, la tasa de mortalidad infantil es muy elevada y semejante a la que existía en España en el año 1960, mientras que la esperanza de vida es de 64,8 años para los hombres y 69,5 para las mujeres, es decir, parecida a la que existía en nuestro país en el período de 1950-60. El hábitat donde se asientan, si acaso la peculiaridad más visible para el resto de la ciudadanía es sumamente determinante. La vida en asentamientos segregados y en todo tipo de hábitat indignos o inadecuados (focos chabolistas, casamantas, yanquis y prefabricados, barrios de tipología especial, etc.) afectan a entre un 10 a 12% de la población, el 31 % de total de viviendas habitadas por las familias gitanas españolas son infraviviendas de todo tipo y en el año 2000 se estimaban en 48.000 los chabolistas existentes. Finalmente, el 51,6 % de los gitanos vive en dentro de la pobreza grave o extrema frente al 16,7% de la población española³³⁸.

Todas estas variables hacen que los gitanos sean una población de alto riesgo en el tema de la delincuencia³³⁹. No obstante es difícil conocer la incidencia de la delincuencia en este colectivo ante la ausencia de datos oficiales, dado que el artículo 14 de la Constitución prohíbe la publicación de datos por discriminación de raza. A falta de datos estadísticos de procedencia oficial se han hecho sumamente necesarios los procedentes de encuestas o recuentos. De acuerdo a los procedentes del proyecto Barañi, la presencia de mujeres gitanas en las cárceles españolas eran 20 mayor que su proporción en la pirámide demográfica y suponen el 25 % del total de todas las reclusas, es decir una de cada cuatro. Cumplen una condena media de 6,7 años de prisión lo que puede considerarse una condena larga lo que sumado al elevado número de hijos que dependen de ellas hace que estemos ante una gran desvertebración familiar. Por tipos de delitos destacan los cometidos contra la salud pública (drogas) que encierran al 80 % de esta etnia femenina, estando enganchadas el 49% de dichas reclusas lo que complica su situación por depender de sumas de dinero que únicamente puede conseguir a través de la venta de droga o de delitos contra la propiedad.

La dependencia de las drogas –habitualmente heroína, la droga de los pobres- y la necesidad de ayudar a los familiares que están presos hacen que la vida de estas personas se desenvuelva en conflictos permanentes contra las instancias policiales y judiciales y hace que no se puedan beneficiar de las medidas alternativas de las cárceles como los arrestos de fin de semana o los trabajos en beneficio de la comunidad, toda vez que éstos se encuentran prohibidos para los reos habituales que cometen tres o más delitos de los comprendidos en una misma categoría de infracción en un plazo no superior

³³⁸ Fundación Secretariado General Gitano, Vivienda y comunidad gitana, *Gitanos*, pág.3

³³⁹ Cáritas (1996). Trabajando con gitanos, Artegraf, Madrid.

a cinco años. El tráfico y el consumo de drogas hacen pues estragos en esta población porque además hay que añadir las consecuencias del ser detenida toda vez que es muy posible que el marido también lo esté, pero en todo caso, ante la incapacidad de éste en una comunidad fuertemente machista, los hijos tienen que vivir con otros familiares, es necesario reponer la droga incautada, pagar al abogado, pagar la fianza, recuperar los bienes incautados y todo ello ante la posibilidad de la reincidencia. Por lo tanto se entra en la espiral de la delincuencia³⁴⁰.

La situación a la que se enfrentan los gitanos es muy parecida a la que experimentan los emigrantes si no fuera porque los primeros llevan más de tres siglos en la misma situación. El número de extranjeros detenidos, se supone que la mayor parte de ellos son inmigrantes, en un año como 2002 creció de los 67.495 (24,05% del total de detenidos) a los 138.952 (41,98% del total de detenidos), lo cual va aparejado al aumento del número de inmigrantes que ha desembarcado en nuestro país. Como se ha documentado con insistencia en los últimos tiempos, la inmigración de trabajadores extranjeros hace que sus asentamientos sean auténticos guetos creando un tupido y enmarañado tejido en el que a la miseria se unen las barreras y tensiones de un dislocado complejo étnico debido a que la enorme desproporción entre el salario que perciben y el precio de los alquileres les obliguen necesariamente a compartir piso.

12.3.2. La inmigración/extranjería

Otro estrato importante para el análisis de la delincuencia es el de la inmigración/extranjería. Siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE) se utiliza el concepto de extranjero por ser más amplio que el convencionalmente recogido bajo el término inmigrante, que hace referencia a aquellas personas que se encuentran en un país diferente del suyo por motivos principalmente económicos y cuyo país de origen presenta un grado de desarrollo económico inferior al país de acogida. El concepto de inmigrante, en términos internacionales no cuenta con un grado de consenso amplio en su definición estadística. Para unos países lo son todas aquellas personas que han nacido fuera del mismo independientemente de la nacionalidad que se posea. Para otros, la nacionalidad es el elemento identificativo del sujeto de estudio, por lo que cuando una persona obtiene la nacionalidad del país de destino deja de ser considerado dentro de la categoría de inmigrante (concepto jurídico-sociológico). El INE define “extranjeros” como los “Residentes en viviendas familiares en España, con nacionalidad no española”, mientras que “migrante” sería “toda persona que no ha residido siempre (desde que nació) en el municipio en el que reside

³⁴⁰ Fundación Secretariado Gitano (2012). Informe Anual. Discriminación y comunidad gitana. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

actualmente. Como sostiene Foessa³⁴¹, se considera extranjero al que carezca de nacionalidad española pero se arbitran distintas regulaciones en función de variables como la nacionalidad, la procedencia, los vínculos familiares, las razones de entrada en territorio español, etcétera. Encontramos así un complejo entramado legislativo unido a la idea de extranjería en el que se aglutinan los ciudadanos comunitarios; los nacionales de estados del Espacio Económico Europeo; sus familiares y los de españoles; los nacionales de Estados con los que se ha firmado acuerdos de asociación, supresión de visados, doble nacionalidad o readmisión; los refugiados, desplazados, apátridas y solicitantes de asilo; o quienes pretenden entrar en España por motivos turísticos, de estudio o laborales, entre muchos otros.

Según un estudio realizado por C. Solé³⁴² sobre inmigrantes extranjeros en Cataluña, existe una negativa generalizada por la población catalana a consentir que magrebíes, africanos o paquistaníes se instalen en pisos de barrios relativamente acomodados, muchas veces inasequibles para los inmigrantes extranjeros, lo que provoca que este colectivo se ubique mayoritariamente en zonas degradadas y segregadas de Barcelona, como el Distrito de Ciutat Vella, barrio habitado por autóctonos de clase trabajadora que se encuentran en una situación parecida, lo que garantiza una permeabilización por contacto, pero también una ubicación en posiciones de inferioridad con respecto a sus vecinos, por lo que los inmigrantes abandonan el barrio rápidamente en cuanto su situación económica y legal-laboral prospera, permaneciendo los que no tienen recursos materiales ni redes de contacto y apoyos que les permitan superar la difícil situación de partida, por lo que entran en una dinámica de supervivencia en el barrio, dedicándose frecuentemente a actividades delictivas, manteniendo como única base de apoyo la propia familia u otros delincuentes. Generalmente los pequeños traficantes de droga no viven en familia, no están casados ni tienen hijos, viven en grupos compartiendo un piso.

En España diferentes y numerosos estudios han reflejado la segregación geográfica inmigrante procedente de la raza, la etnia y las diferencias culturales con una cierta coincidencia en que el colectivo más segregado es el de la cultura islámica (procedente de Marruecos y África subsahariana), seguido del procedente de los países del Este europeo y finalmente de los latinoamericanos. En el caso de las poblaciones musulmanas, el 3,6 % de la población total española, es decir, 1.732.000 (797.000 procedentes de Marruecos), se trata de un tipo de cultura con un fuerte acento en la religión, lo cual contrasta con el carácter laico y privado que de ella se tiene en la

³⁴¹ Foessa (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Foessa. Madrid

³⁴² Solé C. (1995). Discriminación racial en el mercado de trabajo, CES, Madrid, 1995.

población española. Pérez Díaz et al.³⁴³ (2004) sostienen que este grupo de inmigrantes retrasan enormemente el entremezclarse con los ciudadanos del país de acogida, en este caso España, en sus tratos cotidianos, por una combinación de preferencias de retención étnica por parte de los primeros y de discriminación social por parte de los segundos, o que lo hacen más en unas dimensiones de su vida social de ocio o culto religioso que en otras de trabajo o comercio.

Autores como Cebolla y Requena³⁴⁴ sostienen que los hábitos retrógrados de los inmigrantes africanos negros y magrebíes en el trato a la mujer, así como su falta de puntualidad, higiene y responsabilidad en el trabajo hace que sean rechazados por los nativos y que no avancen en sus respectivas sociedades, caso de Francia y Bélgica, incluso con el paso del tiempo, lo que contrasta con otras culturas. Es de destacar que constituyen la población inmigrante que más recurre a la auto segregación como se demuestra en que son los que menos capital social logran acumular, al no fiarse de la población autóctona para pedir favores, para entablar amistades, para establecer matrimonios (método más importante para la integración) o para pedir auxilio en un momento determinado. Su cultura basada en prácticas religiosas intensas en sus vidas cotidianas, como el ramadán que les impide comer durante el día y atiborrarse durante la noche, las prácticas culinarias y los olores que desprenden, los modos de vestir, los hábitos de higiene, la subordinación de las mujeres, el uso de la violencia para someterlas, los ruidos que generan, el hacinamiento de los recién llegados en pisos de un tamaño escaso; genera tensiones con la población nativa por lo que optan por generar comunidades étnicas cerradas.

La tendencia de algunos grupos de inmigrantes a concentrarse en las zonas más precarias de la ciudad se puede considerar sujeto a las posibilidades económicas en las que se encuentran, es decir, se trata de un asentamiento impuesto por las condiciones de llegada y permanencia, en donde las primeras generaciones de inmigrantes suelen correr peor suerte que las sucesivas cohortes³⁴⁵, pero según se va progresando, los residentes por motivos étnicos exhiben las mismas costumbres de cambio de residencia que la población nativa basada en la variable de estatus socioeconómica³⁴⁶.

³⁴³ Pérez-Díaz, Víctor; Álvarez-Miranda, Berta y Chuliá, Elisa (2004): La inmigración musulmana en Europa: turcos en Alemania, argelinos en Francia y marroquíes en España. Barcelona, Fundación La Caixa.

³⁴⁴ Cebolla Héctor y Requena Miguel (2010). Marroquíes en España, los países Bajos y Francia: gestión de la diversidad e integración. Documento de Trabajo 11/2010. Real Instituto Elcano.

³⁴⁵ Pan Ke' Shon, Jean-Louis., and Verdugo Gregory (2014). "Forty years of immigrant segregation in France, 1968–2007. How different is the new immigration?", en *Urban Studies*, núm. 22:1-18

³⁴⁶ Schaake Karina, Burgers Jack and Mulder Clara (2013). Ethnicity, education and income, and residential mobility between neighbourhoods. *Journal of Ethnic and Migration Studies*

En un estudio clásico Clark and Ledwith³⁴⁷ establecen que la asimilación espacial, o proceso a través del cual los nuevos inmigrantes escogen su residencia varía según los ingresos, el estatus socioeconómico y las preferencias. El estatus socioeconómico es un factor central e histórico en la separación de negros y blancos en Estados Unidos y por extensión entre minorías y blancos en general.

Como consecuencia del desarrollo de la estructura ocupacional las áreas residenciales se convierten en medios exclusivos donde las dinámicas de los costos del suelo tienden a imponer una homogeneidad social, siendo el resultado una estructura espacial que combina segregación, diversidad y jerarquía y en donde la vasta mayoría de trabajadores descualificados y de nueva fuerza de trabajo comparten un espacio excluido que es altamente fragmentado. En términos étnico-clasistas, edificando comunidades defensivas que luchan una contra otra para ganar una mayor parte de los servicios y para preservar la base funcional de sus redes sociales, una fuente importante para comunidades de bajos ingresos. Algunos autores han encontrado una correlación entre la cohesión del grupo étnico y las redes de contacto en la calidad del trabajo, de manera que los recién llegados suelen escoger ocupar los mismos trabajos que su grupo étnico o compatriotas y éste suele estar a la larga mejor pagado³⁴⁸.

En un estudio seminal Bordas³⁴⁹ desmonta todos los prejuicios que existen sobre delincuencia e inmigración en España, por el cual se etiqueta a los inmigrantes como presuntos delincuentes. En un estudio realizado utilizando estadísticas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Instituto nacional de Estadística, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del Gobierno Vasco, de la Generalitat de Cataluña, concluye que es falso el estereotipo que existe sobre la relación inmigración-delincuencia. Y aunque se produzcan más delitos entre los jóvenes procedentes del Magreb que en el resto de la población hay que reconocer que una “mayoría de inmigrantes mantienen las mismas conductas que el resto de españoles y que no tiene sentido hablar de la inmigración como si fuera un colectivo único con un rango común”. De los 236.298 detenidos por delitos, 76.675 fueron extranjeros, entre los que se incluían los comunitarios procedentes de la Unión Europea que fueron 8.675, por lo que el resto de extranjeros cometiendo delitos serían 68.000 inmigrantes, lo que suponía el 17% del conjunto de los infractores. Por otra parte, de los 119.980 juzgados y condenados en 2003 por tribunales españoles, 15.685 (el 13,1%) eran extranjeros, cuyas condenas fueron principalmente contra la

³⁴⁷ Clark William and Ledwith Valerie (2007). “How much does income matter in neighborhood choice?” en *Popul Res Policy Rev*, núm 26:145–161.

³⁴⁸ Patel, K., & Vella, F. (2013). Immigrant networks and their implications for occupational choice and wages. *Review of Economics and Statistics*, 95(4), 1249–1277.

³⁴⁹ Bordas J. (2006). La inmigración y la delincuencia en España. *Sistema* N° 190. Págs. 347- 383.

salud pública y contra el patrimonio. Entre las nacionalidades cabe destacar a los marroquíes, los colombianos, los argelinos que suelen estar implicados en delitos contra las personas o contra la salud pública (drogas)³⁵⁰.

Desde el año 2000, España presenta una de las mayores tasas de inmigración del mundo (tres a cuatro veces mayor que la media de Estados Unidos, ocho veces más que la francesa). La llegada de unos 4 millones de inmigrantes (más del 10% de su población) entre 2001 y 2005 ha cambiado definitivamente la configuración étnica del país³⁵¹.

Cuadro 74. Evolución extranjeros en España.

Año	Extranjeros censados	% del total población
1981	198.042	0,52%
1986	241.971	0,63%
1991	360.655	0,91%
1996	542.314	1,37%
1998	637.085	1,60%
2000	923.879	2,28%
2001	1.370.657	3,33%
2002	1.977.946	4,73%
2003	2.664.168	6,24%
2004	3.034.326	7,02%
2005	3.730.610	8,46%
2006	4.144.166	9,27%
2007	4.519.554	10,0%
2008	5.220.600	11,3%
2009	5.598.691	12,0%
2010	5.747.734	12,2%
2011	5.730.667	12,2%
2012	5.711.040	12,1%
2013	5.546.238	11,7%
2014	5.023.487	10,7%

Fuente: INE (2015). Movimiento natural de la población.

En el cuadro de abajo se puede examinar los años procedentes de la actividad delictiva contra las personas de los extranjeros en España a nivel longitudinal. La bajada de los porcentajes entre 2009 y 2014 es manifiesta reduciendo el cómputo total hasta casi la mitad. Es posible que este hecho se deba al descenso de las bandas latinas y a la violencia de género. En cualquier caso se puede asumir la baja participación de los extranjeros en la delincuencia frente a las teorías que en un momento determinado y desde el Ministerio del Interior asumieron a este colectivo como el culpable del incremento de la delincuencia.

³⁵⁰ Bordas J. (2006). Op. Cit. Pág. 379.

³⁵¹ Tezanos J. y Tezanos S. (2003). *Inmigración y exclusión social*, Papeles de Economía Española, nº 98. Pág. 225-237.

Cuadro 75. Evolución de detenciones e imputaciones de extranjeros por delitos contra las personas.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Contra las Personas		21.253	19.940	22.057	20.173	18.662	16.979
1.	Homicidios dolosos / Asesinato	371	305	399	326	250	198
	<i>Homicidios/Asesinatos consum</i>	163	124	176	140	81	74
2.	Lesiones	4.532	4.314	4.673	4.103	3.925	3.526
3.	Malos tratos ámbito familiar	15.727	14.747	16.260	15.177	14.046	12.801
4.	Otros contra las Personas	623	574	725	567	441	454

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el cuadro de abajo se puede contrastar la tesis de la estratificación del delito por extranjería y dentro de él, la incidencia de la delincuencia femenina frente a la masculina para dos años. Sirve para confirmar la diferencia de delitos por género que se cumple también entre los extranjeros, siendo una evidencia manifiesta. La delincuencia femenina contra las personas representa el 9,2 en año 2013 de los delitos totales contra las personas.

Cuadro 76. Detenciones e imputaciones a extranjeros por causa de infracción penal contra las personas. Años 2012-2013.

	Sexo MASCULINO		Sexo FEMENINO		TOTAL		2013 -2012
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
I. Contra las Personas	18.453	16.928	1.720	1.734	20.173	18.662	-7,5
1.Homicidios dolosos / Asesinatos	295	227	31	23	326	250	-23,3
2.Homicidios/Asesinatos consumados	125	70	15	11	140	81	-42,1
3.Lesiones	3.764	3.603	339	322	4.103	3.925	-4,3
4.Malos tratos ámbito familiar	13.886	12.703	1.291	1.343	15.177	14.046	-7,5
5.Otros contra las Personas	508	395	59	46	567	441	-22,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el siguiente cuadro, referido a los delitos contra la libertad, la conclusión es la misma que en el anterior epígrafe, un descenso de los delitos en todos los capítulos exceptuando el de “otros contra la libertad”.

Cuadro 77. Evolución delitos extranjeros por causa de infracción penal contra la libertad.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Contra Libertad		5.954	5.553	6.799	6.126	6.091	5.119
1.	Malos tratos hab. ámbito famili	2.670	2.498	3.011	2.748	2.653	2.232
2.	Otros contra la libertad	3.284	3.055	3.788	3.378	3.438	2.887
III. Libertad Sexual		2.326	2.143	2.288	1.995	1.843	1.684
1.	Agresión sexual con penetración	506	436	441	377	357	295
2.	Corrupción de menores o incap	48	51	53	54	48	42
3.	Pornografía de menores	30	39	43	38	34	49
4.	Otros libertad e indemnida sex	1.742	1.617	1.751	1.526	1.404	1.298
IV. Relaciones Familiares		339	307	516	599	516	546

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el cuadro de abajo se puede contrastar la estratificación del delito por extranjería en el apartado de delitos contra la libertad y las relaciones sexuales, y dentro de él, la incidencia de la delincuencia femenina frente a la masculina para dos años. Sirve para confirmar la diferencia de delitos por género que se cumple también entre los extranjeros, siendo una evidencia manifiesta. Representa el 11,9 por ciento en el año 2013 para los delitos conjuntos contra la libertad, siendo bastante altos, 31,5 por ciento, para lo que cabría esperar los que se producen en las relaciones familiares. Hay que recordar que la prostitución no suele ser un delito cometido por mujeres, ya que la ley española persigue a los proxenetas o a los que hace uso de este servicio, pero no a las que lo ejercen. En un porcentaje muy elevado son mujeres a la que se las obliga en contra de su voluntad.

Cuadro 78. Detenciones e imputaciones extranjeros por causa de infracción penal contra la libertad y género. Años 2012-2013

	Sexo MASCULINO		Sexo FEMENINO		TOTAL		2013-2012
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
II. Contra Libertad	5.432	5.366	694	725	6.126	6.091	-0,6
1.Malos tratos hab. ámbito familiar	2.564	2.447	184	206	2.748	2.653	-3,5
2.Otros contra la libertad	2.868	2.919	510	519	3.378	3.438	1,8
III. Libertad Sexual	1.770	1.629	225	214	1.995	1.843	-7,6
1.Agresión sexual con penetración	368	353	9	4	377	357	-5,3
2.Corrupción de menores o incapacitados	41	35	13	13	54	48	-11,1
3.Pornografía de menores	37	31	1	3	38	34	-10,5
4.Otros contra la libertad/indemnidad sexual	1.324	1.210	202	194	1.526	1.404	-8
IV. Relaciones Familiares	369	353	230	163	599	516	-13,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el siguiente cuadro, referido a los delitos contra el orden socioeconómico y el patrimonio, un apartado que debe servir para medir la temperatura de las necesidades procedentes de la “situación de los extranjeros”, la tónica es diferente a los epígrafes anteriores, ya se aprecia una subida entre los peores años de la crisis 2010-2013 y una bajada en el último años. Es posible que el hecho de que muchos extranjeros abandonaran el país sea el que explique esta situación. Porque es posible que estos extranjeros se encontraran sin trabajo y sin apoyos para su desenvolvimiento cotidiano. Especialmente significativo es el apartado de robos en domicilios donde determinadas bandas pueden provocar serios estragos operando de manera itinerante entre sus respectivos países y España

Cuadro 79. Evolución a extranjeros por causa de infracción penal contra el patrimonio.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
V. Contra Patrimonio		37.789	35.036	38.598	37.397	37.351	30.534
1.	Hurtos	7.054	6.891	8.136	8.197	8.696	7.401
2.	Robos con fuerza en cosas	12.128	11.939	14.469	12.797	12.827	10.126
	<i>En vehículos</i>	2.240	1.785	2.602	2.096	1.897	1.279
	<i>En domicilios</i>	2.451	2.782	3.654	4.269	4.973	4.235
	<i>En establecimiento</i>	2.984	2.846	3.103	2.653	2.326	1.869
3.	Robos violencia o intimidación	6.611	6.279	6.814	7.058	6.393	4.643
	<i>En vía pública</i>	4.382	4.198	4.276	4.680	4.073	2.887
	<i>En domicilios</i>	495	536	581	604	595	483
	<i>En establecimientos</i>	1.069	936	882	934	970	764
4.	Sustracción de vehículos	2.245	1.761	1.930	1.720	1.387	1.177
5.	Estafas	2.474	2.482	2.659	2.662	2.663	2.240
	<i>Estafas bancarias</i>	519	680	321	245	205	169
6.	Daños	1.113	1.124	1.227	1.126	1.099	1.020
7.	Contra la propiedad intelecto	4.404	2.867	1.055	1.079	1.041	793
8.	Blanqueo de capitales	100	98	184	198	177	171
9.	Otros contra el patrimonio	1.660	1.595	2.124	2.560	3.068	2.963

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el cuadro de abajo se puede contrastar la estratificación del delito por extranjería y dentro de él, la incidencia de la delincuencia femenina frente a la masculina para dos años. La participación porcentual de las mujeres es mayor en estos apartados como cabría esperar, aunque se puede concluir que de nuevo esto es así, exceptuando los delitos que requieren el uso de la fuerza en apartados como los de robos con violencia o intimidación, los robos relacionados con vehículos, siendo su presencia significativa en apartados como blanqueo de capitales, estafas, estafas bancarias y hurtos.

Cuadro 80. Detenciones e imputaciones a extranjeros por causa de infracción penal contra el patrimonio. Años 2012-2013

	Sexo Masculino		Sexo Femenino		TOTAL		Variación
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
	31.677	31.443	5.720	5.908	37.397	37.351	
Hurtos	5.664	6.033	2.533	2.663	8.197	8.696	6,1
Robos con fuerza en cosas	11.836	11.852	961	975	12.797	12.827	0,2
En vehículos	2.027	1.827	69	70	2.096	1.897	-9,5
En domicilios	3.774	4.393	495	580	4.269	4.973	16,5
En establecimientos	2.526	2.208	127	118	2.653	2.326	-12,3
Robos violencia o intimidación	6.392	5.790	666	603	7.058	6.393	-9,4
En vía pública	4.264	3.737	416	336	4.680	4.073	-13
En domicilios	526	526	78	69	604	595	-1,5
En establecimientos	823	847	111	123	934	970	3,9
Sustracción de vehículos	1.590	1.274	130	113	1.720	1.387	-19,4
Estafas	2.021	1.964	641	699	2.662	2.663	0
Estafas bancarias	177	149	68	56	245	205	-16,3
Daños	1.037	987	89	112	1.126	1.099	-2,4

Contra la propiedad intelectual e indu	990	922	89	119	1.079	1.041	-3,5
Blanqueo de capitales	124	125	74	52	198	177	-10,6
Otros contra el patrimonio	2.023	2.496	537	572	2.560	3.068	19,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

Los delitos contra la seguridad colectiva presentan una bajada generalizada, pero especialmente en la referida a otros contra la seguridad colectiva. Siendo de destacar la subida que se produjo en el año 2011 en los delitos contra la seguridad vial probablemente por llevar un coche sin el carnet de conducir. Ahora bien, todos los apartados han bajado desde el año 2009.

Cuadro 81. Evolución delitos de extranjeros por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VI. Seguridad Colectiva	18.341	17.090	20.508	19.199	17.574	14.949
1. Tráfico de drogas	7.815	7.837	8.145	7.821	7.359	6.196
2. Contra la seguridad vial	10.022	8.833	11.838	10.762	9.835	8.364
3. Otros contra la seguridad colect	504	420	525	616	380	389

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el cuadro de abajo se puede contrastar la estratificación del delito por extranjería y dentro de él, la incidencia de la delincuencia femenina frente a la masculina para dos años. Sirve para confirmar la diferencia de delitos por género que se cumple también entre los extranjeros, siendo una evidencia manifiesta. Los porcentajes de estos delitos están situados en torno al 10 por ciento, exceptuando el referido al tráfico de drogas, que al ser un delito extendido por menudeo hace que las mujeres se puedan implicar en él en mayor proporción que en otros delitos. A muchas mujeres se las escoge para hacer de camellos porque la policía no suele desconfiar de ellas a primera vista.

Cuadro 82. Detenciones e imputaciones a extranjeros por causa de infracción penal contra la seguridad colectiva. Años 2012-2013

	Sexo MASCULINO		Sexo FEMENINO		TOTAL		
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	ratio
VI. Seguridad Colectiva	17.181	15.676	2.018	1.898	19.199	17.574	-8,5
Tráfico de drogas	6.700	6.346	1.121	1.013	7.821	7.359	-5,9
Contra la seguridad vial	9.946	8.996	816	839	10.762	9.835	-8,6
Otros contra la seguridad colectiva	535	334	81	46	616	380	-38,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior

En el cuadro de abajo se puede descubrir un hecho sorprendente en el aumento tan importante de los delitos de falsedades, uno de los pocos delitos que no descendido entre 2009 y 2014, sino que ha aumentado. E igual cabe decir de los delitos contra la administración pública. Aunque si

los observamos desde el ángulo de los porcentajes nos damos cuenta de que el aumento no es tan importante, dado que la proporción es relativamente pequeña.

Cuadro 83. Evolución delitos de extranjeros por causa de infracción penal contra falsedades, orden público y Administraciones.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VII. Falsedades	6.014	5.335	6.318	6.693	6.364	6.335
VIII. Admón. Pública	47	33	43	29	46	53
IX. Admón. Justicia	4.304	4.660	5.268	4.644	4.296	3.690
X. Orden Público	7.711	7.294	8.803	7.837	7.591	6.382
XI. Legislación Espec	51	40	58	68	81	55

En el cuadro de abajo se puede contrastar la estratificación del delito por extranjería y dentro de él, la incidencia de la delincuencia femenina frente a la masculina para dos años. Sirve para confirmar la diferencia de delitos por género que se cumple también entre los extranjeros, siendo una evidencia manifiesta que las mujeres no utilizan la fuerza o la violencia para cometer delitos. En este caso una categoría como la de falsedades presenta un porcentaje mayor que el que se da en otros capítulos.

Cuadro 84. Detenciones e imputaciones a extranjeros por delitos contra falsedades, orden público y Administraciones. Años 2012-2013

	Sexo MASCULINO		Sexo FEMENINO		TOTAL		2013-2012
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
VII. Falsedades	5.476	5.109	1.217	1.255	6.693	6.364	-4,9
VIII. Admón. Pública	24	40	5	6	29	46	58,6
IX. Admón. Justicia	4.182	3.871	462	425	4.644	4.296	-7,5
X. Orden Público	6.757	6.411	1.080	1.180	7.837	7.591	-3,1
XI. Legislación Especial	62	72	6	9	68	81	19,1
XII. Otros delitos	1.261	1.169	340	344	1.601	1.513	-5,5
TOTAL DELITOS	92.644	88.067	13.717	13.861	106.361	101.928	-4,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior.

Otra cuestión importante es determinar que se esconde detrás del genérico de extranjeros, es decir, a quien nos referimos con esta denominación. Es importante conocer quiénes son y de donde proceden. Como se puede observar en el cuadro de abajo, las detenciones e imputaciones contra extranjeros por cometer delitos han descendido significativamente entre 2013 y 2014. El continente que mayores detenciones e imputaciones provoca es el europeo principalmente por la incidencia de un país como Rumania con el 54,3 por ciento de todas las detenciones, representado casi una cuarta parte del total de todos los delitos cometido por extranjeros. Rumania, Marruecos y Ecuador son los países con una mayor imputación. En el caso de Rumania se debe a la incidencia en

delitos de robos en viviendas por bandas organizadas. En el caso de Marruecos es principalmente su relación en el contrabando de estupefacientes, principalmente hachís; y en el caso de Ecuador su elevada presencia remite a que también es elevada comparativamente la población inmigrante. Entre rumanos y marroquíes acaparan casi la mitad de todas las detenciones e imputaciones que se producen en España procedentes de extranjeros. Las mujeres presentan unas cifras equivalentes a los hombres en su orden e incidencia en el cómputo final de detenciones por mujeres. Destacan las mujeres nigerianas, cuyo porcentaje elevado comparativamente al de resto de mujeres se deba a su incidencia en la práctica de la ablación del clítoris y al cocido como “top manta”.

En cuanto al balance entre estos dos años, destaca el descenso de los extranjeros procedentes del continente africano, en un 12,2 por ciento, en el caso de los procedentes del continente americano, es nada menos que del 23,4 por ciento, mientras que la bajada es más atenuada en el caso de los procedentes del continente europeo con el 7,1 por ciento y todavía menor en el caso del continente asiático con el 4,5 por ciento. Por nacionalidades destaca el caso de Guinea Ecuatorial con un descenso del 37,2 por ciento, de Ecuador y República Dominicana, Perú, Venezuela, Chile y Uruguay todos por encima del 25 por ciento. Y dentro del continente asiático, sobresalen Bangladesh con el 39,8 e Irán con el 45,9 por ciento.

Cuadro 85. Detenciones e imputaciones de extranjeros por causa de infracción penal

	Sexo MASCULINO			Sexo FEMENINO			TOTAL		
	2013	2014	Variación % 2014-2013	2013	2014	Variación % 2014-2013	2013	2014	Variación % 2014-2013
CONTINENTE AFRICANO	30.963	27.093	-12,5	3.361	3.041	-9,5	34.324	30.134	-12,2
MARRUECOS	20.840	18.014	-13,6	2.239	2.132	-4,8	23.079	20.146	-12,7
ARGELIA	2.469	2.197	-11,0	185	145	-21,6	2.654	2.342	-11,8
SENEGAL	2.379	2.158	-9,3	79	63	-20,3	2.458	2.221	-9,6
NIGERIA	1.246	1.171	-6,0	477	424	-11,1	1.723	1.595	-7,4
GUINEA ECUATORIAL	443	276	-37,7	178	114	-36,0	621	390	-37,2
GHANA	406	388	-4,4	20	13	-35,0	426	401	-5,9
MALI	437	443	1,4	11	11	0,0	448	454	1,3
CAMERUN	435	376	-13,6	18	16	-11,1	453	392	-13,5
GAMBIA	327	290	-11,3	4	10	150,0	331	300	-9,4
GUINEA BISAU	280	282	0,7	15	10	-33,3	295	292	-1,0
Resto África	1.701	1.498	-11,9	135	103	-23,7	1.836	1.601	-12,8
CONTINENTE AMERICANO	27.886	21.326	-23,5	7.331	5.658	-22,8	35.217	26.984	-23,4
ECUADOR	7.524	5.503	-26,9	1.488	1.020	-31,5	9.012	6.523	-27,6
COLOMBIA	5.881	4.474	-23,9	1.622	1.208	-25,5	7.503	5.682	-24,3
DOMINICANA	3.210	2.345	-26,9	760	553	-27,2	3.970	2.898	-27,0
BOLIVIA	2.261	1.926	-14,8	639	556	-13,0	2.900	2.482	-14,4
PERU	2.055	1.433	-30,3	457	295	-35,4	2.512	1.728	-31,2
ARGENTINA	1.324	1.000	-24,5	276	222	-19,6	1.600	1.222	-23,6
BRASIL	849	761	-10,4	630	508	-19,4	1.479	1.269	-14,2
CUBA	1.184	964	-18,6	366	252	-31,1	1.550	1.216	-21,5
VENEZUELA	1.013	692	-31,7	270	243	-10,0	1.283	935	-27,1
PARAGUAY	624	589	-5,6	326	320	-1,8	950	909	-4,3
CHILE	459	352	-23,3	110	94	-14,5	569	446	-21,6
URUGUAY	499	356	-28,7	93	79	-15,1	592	435	-26,5
Resto América	1.003	931	-7,2	294	308	4,8	1.297	1.239	-4,5
CONTINENTE ASIÁTICO	3.733	3.303	-11,5	596	616	3,4	4.329	3.919	-9,5
CHINA POPULAR	1.184	1.117	-5,7	395	425	7,6	1.579	1.542	-2,3
PAQUISTAN	1.011	915	-9,5	23	30	30,4	1.034	945	-8,6
INDIA	405	368	-9,1	19	23	21,1	424	391	-7,8

BANGLADESH	273	161	-41,0	11	10	-9,1	284	171	-39,8
IRAN	138	78	-43,5	47	22	-53,2	185	100	-45,9
FILIPINAS	144	125	-13,2	36	39	8,3	180	164	-8,9
Resto de Asia	578	539	-6,7	65	67	3,1	643	606	-5,8
CONTINENTE EUROPEO	40.905	37.669	-7,9	9.281	8.972	-3,3	50.186	46.641	-7,1
RUMANIA	22.557	20.480	-9,2	5.616	5.255	-6,4	28.173	25.735	-8,7
BULGARIA	2.227	2.157	-3,1	672	793	18,0	2.899	2.950	1,8
REINO UNIDO	2.328	2.383	2,4	365	317	-13,2	2.693	2.700	0,3
PORTUGAL	2.034	1.842	-9,4	265	276	4,2	2.299	2.118	-7,9
FRANCIA	1.787	1.529	-14,4	239	221	-7,5	2.026	1.750	-13,6
ITALIA	1.297	1.365	5,2	211	213	0,9	1.508	1.578	4,6
ALEMANIA	1.158	999	-13,7	207	171	-17,4	1.365	1.170	-14,3
POLONIA	1.041	902	-13,4	147	128	-12,9	1.188	1.030	-13,3
UCRANIA	884	848	-4,1	199	214	7,5	1.083	1.062	-1,9
RUSIA	472	473	0,2	324	313	-3,4	796	786	-1,3
LITUANIA	655	568	-13,3	75	83	10,7	730	651	-10,8
HOLANDA	434	486	12,0	57	68	19,3	491	554	12,8
BELGICA	432	334	-22,7	54	63	16,7	486	397	-18,3
Resto de Europa	3.599	3.303	-8,2	850	857	0,8	4.449	4.160	-6,5
OCEANÍA	59	45	-23,7	10	10	0,0	69	55	-20,3
OTROS	264	237	-10,2	5	29	480,0	269	266	-1,1
TOTAL	103.810	89.673	-13,6	20.584	18.326	-11,0	124.394	107.999	-13,2

Fuente: Anuario estadístico Ministerio del interior.

12.4. Delitos por desempleo

Una de las tesis más extendida y controvertidas para explicar la delincuencia es la que la relaciona con el estado de bienestar y dentro de él con el desempleo, basada en los efectos negativos de éste y en las motivaciones y oportunidades que depara entre la población que atraviesa por dicha situación. Entre la amplia literatura que ha generado esta posible correlación hay que destacar la que se ha orientado a poner énfasis en la “motivación” procedente de la frustración y de la tensión que se origina ante la falta de recursos para conseguir el modelo de vida basado en el consumo que publicita el sistema capitalista³⁵², en donde una variedad ha intentado explicar los altos ratios de delincuencia de los jóvenes producto de la influencia consumista de los medios de comunicación y el bloqueo del mercado de trabajo adulto³⁵³. Otra fuente procedente de la motivación está basada en la explicación de la influencia de la elección racional de los desempleados que procesan la información disponible sobre los costes y beneficios de la conducta desviada considerando que no se pierde gran cosa tomando en cuenta la situación en la que se encuentran, por lo que cuanto mayor tiempo se padecen los efectos del desempleo, es decir, desempleados de larga duración, existirá una mayor posibilidad de acabar cometiendo un delito ya que es necesario hacer frente a unos gastos que sobrepasan a los ingresos. El desempleo afecta a los niveles de delincuencia porque se escoge ésta al sopesar las pérdidas y ganancias de los medios alternativos de adquirir riqueza³⁵⁴.

12.4.1. El enfoque de la motivación:

Las comprobaciones empíricas sobre estas dos grandes corrientes que encadenan paro y delincuencia han sido numerosas y de diferentes cuando no contrapuestas conclusiones. En la primera de ella, Greenberg³⁵⁵, aplicando la teoría de la motivación intentó demostrar por qué los jóvenes tienen las tasas más altas de delincuencia frente al resto de la población. Siguiendo a Merton, razonó que la tensión depende de la edad, creciendo entre los más jóvenes porque se encuentran ante la disyuntiva de un aumento en las necesidades de consumo –ropa, ocio, etc.- propiciada por los medios de comunicación y la imposibilidad de que sus padres se lo

³⁵² Merton R. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*. Nº 3. Págs. 672-682.

Messner S. and Rosenfeld R. (1994). *Crime and the American dream*. Wadsworth. Belmont.

³⁵³ Greenberg D. (1981) (Ed.). *Crime and capitalism*. California. Mayfeld.

³⁵⁴ Becker G.S. (1968). Crime and punishment: an economic approach. *Journal of Political Economy*. Nº. 76. Págs. 169-217.

³⁵⁵ Greenberg D. (1985). Age, crime, and social explanation. *American Journal of Sociology*. Nº 91. 1-21.

financien. A ello se suma el hecho de un mercado de trabajo con altas tasas de desempleo juvenil, con pocas esperanzas de conseguir un puesto remunerado y con pocas garantías de obtener una mejor posición en un mercado laboral adulto que no ofrece garantías. Cercenados en sus aspiraciones no les queda más que frustración y desesperación, lo cual les conduce directamente al delito, en tanto que vía alternativa, aunque existe una diferenciación entre grupos de edades –jóvenes de 14 a 17 años y jóvenes adultos de 18 a 24 años- y periodos históricos.

Más tarde, merece destacarse entre otras, la investigación de Britt³⁵⁶, aplicando un modelo de coeficientes de regresión estandarizados a series temporales desde 1958 a 1995, utilizando los criterios de variación de la relación delincuencia-desempleo por grupos de edad y variaciones en la relación delincuencia- desempleo a través del tiempo. La delincuencia fue medida por siete categorías: homicidio, violación, asalto, robo, robo con allanamiento, hurto y robo de vehículos; y el desempleo por sus efectos sobre el ratio de arrestos en una situación normal y en otra de cambio de situación. Los “efectos del paro”, correlacionaba algo, aunque débilmente con los homicidios, asaltos y hurtos; mientras que los efectos de “cambio del paro” lo hacían con los homicidios, robos y robos con allanamiento de morada. En definitiva, los efectos del desempleo por grupos de edades se dejaban sentir en los delitos contra la propiedad, pero no en los delitos contra homicidios y asaltos; es decir, no existía una clara evidencia en el incremento de los efectos motivacionales sobre los tipos de situaciones de desempleo. Las dos principales conclusiones fueron que el desempleo tuvo un gran efecto motivacional sobre la delincuencia contra la propiedad entre jóvenes y jóvenes adultos y que la relación entre ambas variables variaba a través del tiempo, pero de una forma que parecía ser más aleatoria que sistemática.

Por último, dentro de la corriente motivacional, y más concretamente de la teoría de la elección racional, es preciso mencionar el estudio de Chamlin y Cochran³⁵⁷ utilizando un modelo temporal entre 1982 a 1996 (datos mensuales, lo que supone 180 casos), para correlacionar series temporales bivariantes de parados de larga duración (más de quince semanas o más) que experimentan privación económica y delincuencia contra la propiedad (robo, hurto, robo con allanamiento de morada y robo de coches) encontrando una relación significativa.

12.4.2. El enfoque de la oportunidad:

³⁵⁶ Britt C. L. (1997). Reconsidering the unemployment and crime relationship: variation by age group and historical period. *Journal of Quantitative Criminology* Nº 13. Págs. 405-417.

³⁵⁷ Chamlin, M.B. and Cochran J.K. (2000), Unemployment, economic theory, and property crime: A note on measurement. *Journal of Quantitative Criminology* 16: pp. 443-455.

El incremento de los delitos experimentado en Estado Unidos en los años sesenta en una época en donde las condiciones materiales que se suponía que incidían en ésta habían mejorado ostensiblemente dio paso a la teoría de la oportunidad. De acuerdo al Informe de la Delincuencia del FBI se estaba produciendo una situación contradictoria, toda vez que a pesar de la mejora de algunas variables que se consideraban como causales en los ratios del delito, tales como el nivel de estudios superiores de los negros, que había pasado del 43 al 61 por ciento, el ratio de desempleo que había bajado significativamente en un 186 %, los ingresos de los negros que habían subido del 61 al 69 por ciento con respecto a los ingresos de los blancos, o el número de pobres viviendo por debajo de la línea establecida legalmente que había caído de 11,3 a 8,3 millones, la delincuencia se había duplicado en el mismo periodo de tiempo.

Esta aparente paradoja, sirvió para que Cohen y Felson y Cohen et al., por medio de dos artículos prácticamente idénticos construyeran una versión plausible que pudiera explicar dicha situación. Una primera versión de esta teoría se denominó originariamente como “enfoque de la actividad rutinaria” y estuvo basada en la evidencia de cómo los cambios estructurales producidos en ese ámbito podían afectar la convergencia en el espacio y en el tiempo de tres circunstancias básicas: uno o más delincuentes motivados, uno o más objetivos diana que pueden ser las personas o sus propiedades y la ausencia de guardianes efectivos. Esto dio paso a una segunda aportación donde se especificaron las principales asunciones sobre las que descansa la teoría: la primera basada en la teoría de la elección racional y de la evidencia criminológica, sostendrá que los delincuentes prefieren propiedades diana localizadas en lugares con pocos más que con muchos guardianes potenciales; la segunda fundamentada en la teoría sociológica de los grupos primarios y secundarios sostiene que las personas que se encuentran relacionadas por medio de vínculos secundarios o por relaciones no estables son menos propensos a actuar como vigilantes de las propiedades de los individuos frente a aquellos que están relacionados por vínculos de grupos primarios; la tercera mantiene que una bajada en la densidad de población en los sitios donde se desenvuelve la rutina diaria de los grupos primarios supone un incremento en las oportunidades y en las violaciones de la propiedad; la cuarta descansa en que un incremento en el número de personas en tránsito produce un incremento en las oportunidades del delito y un incremento en las violaciones contra la propiedad.

Así pues, frente a la teoría de la motivación se alzó la denominada como teoría de la “oportunidad”, originariamente formulada por Cohen y Felson³⁵⁸ y fundamentada en que para que se produzcan un hecho delictivo deben converger en el espacio y el tiempo tres circunstancias: un

³⁵⁸ Cohen L. And Felson M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activities approach. *American Sociological Review*. N°. 44. Págs. 588-607.

delincuente motivado, un destino adecuado que pueden ser las personas o sus propiedades y la ausencia de guardianes efectivos. Cuando los ratios de desempleo son relativamente bajos, existe más gente fuera de su casa dedicada a tareas de trabajo o de ocio con lo que aumenta el consumo de bienes y servicios, creándose un gran número de oportunidades atractivas para delinquir. Al contrario cuando crece el desempleo, la gente no suele moverse de su casa o de un radio de acción restringido a las proximidades de su hogar, reduciéndose el promedio de personas en circulación y decayendo la proporción de compras de televisores, estéreos o automóviles que son los bienes que más se sustraen.

El desempleado suele permanecer más tiempo en casa o en un perímetro reducido de espacio, lo cual hace que desaparezca la actividad y la circulación que es la principal causa del robo personal tanto en la versión de actor como de víctima, por lo que tasas elevadas de desempleo indican menor consumo y menores actividades de ocio. Los ratios de desempleo se pueden contemplar como un índice de actividad total del sistema en donde un bajo nivel (alto ratio de desempleo) indica un bajo nivel del ratio de circulación de personas y de propiedades, por lo que si el resto de las variables que puedan afectar a la relación permanecen constantes, se produce inequívocamente una reducción del número de delitos sobre la propiedad. Por otra parte, este tipo de perspectiva es más probable que se dé en la actualidad, ya que el desempleo tiene unos efectos más inmediatos en los estilos de vida y en el comportamiento de la población afectada. Los delitos contra las personas también podrían ser explicados por esta teoría ya que de acuerdo a sus defensores, los datos de la policía indican que una proporción elevada de asesinatos y asaltos se produce por personas no familiares o por extraños, es decir, gente que no se conoce y pasaba por ahí.

Dentro del marco de la comprobación empírica de la teoría de la “oportunidad”, destacan los llevados a cabo en un primer momento por Cohen³⁵⁹, utilizando un modelo que relacionaban desempleo, densidad de la población residencial, estructura de edad y gastos en consumo con las categorías de robo con violencia, robo con allanamiento de morada, y robo de coches. En el periodo de tiempo de 1947-1972 se obtuvieron datos que iban en contra de la teoría dominante en esos momentos, ya que existía una modesta significación estadística entre desempleo y robo con violencia; y sin embargo, un coeficiente alto, significativo y sobre todo positivo entre desempleo y robo con allanamiento de morada; y un coeficiente alto, significativo y negativo entre desempleo y robo de coches. Todo ello, les condujo a reorientar la teoría existente ya que existía evidencia empírica de aumento de desempleo y descenso de robos, excepto en el caso de los vehículos porque al faltar al trabajo podían vigilar mejor sus coches.

³⁵⁹ Cohen et al. (1980). Property crime rates in the United states: a macrodynamic analysis 1947-1977. *American Journal of Sociology* N°. 86. Págs. 90-118.

La teoría de la “oportunidad” se puede circunscribir a través de algunos rasgos distintivos o cuestiones esenciales como el que se refiere a aquellos delitos en los que alguien toma o daña a una persona o a una propiedad ajena siendo necesario el contacto directo, lo cual lleva directamente a prestar atención a tres tipos de delincuencia: robo con violencia, hurto con daños en las cosas, y sustracción de automóviles. Además otros dos requerimientos deben estar presentes, en el primero denominado como componentes mínimos se establece que interaccionen tres elementos: uno o más infractores, uno o más propiedades accesibles y la ausencia de guardianes efectivos; las propiedades objeto del delito tienen que estar físicamente localizadas en el domicilio, o en lugares de trabajo, ocio o entretenimiento, establecimientos comerciales, escuelas, iglesias y parques, mientras que las personas deben estar en alguno de estos escenarios o bien en tránsito entre ellos. Estas definiciones sirven para explicar cómo los cambios en las oportunidades de delito afectan al ratio de delitos contra la propiedad; así como los caminos los cuales las transformaciones estructurales facilitan o impiden las oportunidades para implicarse en actividades ilegales.

La evidencia empírica de la circunstancia y ubicación de los delitos se concreta a partir de los datos de victimización oficiales según los cuales para cinco tipos distintos de delito sobre la propiedad y basándose en el lugar de residencia, en la relación entre víctima y delincuente, en el número de víctimas y en el lugar y la relación. Las conclusiones apuntaron a que el delito tenía más probabilidades que ocurriera en sitios alejados más que en el domicilio propio, que el agresor fuera desconocido, que el número de víctimas fuera una sola persona y que cuando se combinaban las categorías de localización y relación, la mayor proporción correspondía al delito provocado en la calle por personas desconocidas. Todo lo cual apuntaba a que el riesgo de victimización variaba directamente cuando aumentaba la distancia entre delincuente y víctima; es decir, dependía del lugar en dónde se encontraba tanto la víctima como su propiedad. La evidencia empírica del cambio en las unidades potenciales para ser robadas se podía observar en el aumento de los objetos caros y fáciles para ser transportados tales como coches y aparatos electrónicos. El aumento de la compra de coches que se había incrementado en un 71% podría estar asociado tanto con los robos de éstos como de los robos de sus accesorios e igual ocurriría con los aparatos electrónicos fáciles de transportar como televisores, videos, radios, proyectores, tostadoras, etc., cuya venta se había elevado hasta un 105% y en donde calculando el ratio de valor por peso se llegaba a la conclusión de que una libra de esos aparatos costaba un promedio de los 30 dólares en el caso del video o de los 5.000 dólares de un aparato de un equipo de música de alta fidelidad frente a los 1 o 3 dólares de electrodomésticos pesados como frigoríficos o lavadoras por no mencionar la reducción del peso de los televisores que entre 1960 y 1970 había descendido a la mitad.

Además, los ratios de victimización por edad, actividad y estatus marital confirmaron que las personas más potenciales de sufrir delitos eran los más jóvenes frente a los más viejos, es decir una relación inversa según se aumentaba de edad, los desempleados por su proximidad residencial con una alta concentración de delincuentes, y los hogares unipersonales frente al resto en una proporción de dos veces a una. Por otra parte, los cambios producidos en las actividades diarias indicaban un aumento sustancial en el porcentaje de mujeres trabajando fuera del hogar, un incremento en el número de hogares unipersonales, un aumento en las horas en las que los hogares estaban desatendidos –en algunos periodos de tiempo se habían duplicado-, un aumento en el tiempo dedicado a las vacaciones, un aumento de las horas dedicadas a estudiar en la universidad y un aumento en los viajes de ocio. El cambio producido en el aumento de hogares había disparado la venta de electrodomésticos y la asistencia masiva a la universidad de coches para desplazarse.

Todo ello incidía para un aumento de delincuentes motivados procedentes de una parte de la población que se encontraba con más facilidades, con un aumento en el número de objetos para sustraer por ser más livianos y más valiosos procedentes de una época de consumo en masa, con un aumento del número de personas que se encontraban en tránsito y finalmente con un descenso de guardianes eficaces de la propiedad por encontrarse fuera del hogar o en una posición cercana como en el caso del robo de coches. Cuando la marcha de la economía es buena y los ratios de desempleo son relativamente bajos, existe más gente fuera de su casa dedicados a tareas de trabajo o de ocio con lo que aumenta el consumo de bienes y servicios, creándose un gran número de oportunidades atractivas para delinquir. Al contrario cuando crece el desempleo, la gente no suele moverse de su casa o de un radio de acción restringido a las proximidades de su hogar, reduciéndose el promedio de personas en circulación y decayendo la proporción de compras de televisores, estéreos o automóviles que son los bienes que más se sustraen. En definitiva, el parado suele permanecer más tiempo en casa o en un perímetro reducido de espacio lo cual hace que desaparezca la actividad y la circulación que es la principal causa del robo personal tanto en la versión de actor como de víctima, por lo que tasas elevadas de desempleo indican menor consumo y menores actividades de ocio.

Los ratios de desempleo se pueden contemplar como un índice de actividad total del sistema en donde un bajo nivel (alto ratio de desempleo) indica a un bajo nivel del ratio de circulación de personas y de propiedades, por lo que si el resto de las variables que puedan afectar a la relación permanecen constantes, se produce inequívocamente una reducción del número de delitos sobre la propiedad. Por otra parte, este tipo de perspectiva es más probable que se dé en la actualidad, ya que el desempleo tiene unos efectos más inmediatos en los estilos de vida y en el comportamiento de la

población afectada. Los delitos contra las personas también podrían ser explicados por esta teoría ya que de acuerdo a sus defensores, los datos de la policía indican que una proporción elevada de asesinatos y asaltos se produce por personas no familiares o por extraños, es decir, gente que no se conoce y pasaba por ahí.

12.5. Estudio de casos delitos desempleo

A continuación se exponen en un análisis pormenorizado, estudio de casos, las principales aportaciones a nivel internacional que ha suscitado la relación entre desempleo y delincuencia.

12.5.1. El estudio de Cohen y Nelson, y Cohen, Felson y Land

Como hemos dicho anteriormente estos dos estudios son prácticamente idénticos, compartiendo el espacio temporal estudiado, el número y tipo de variables introducidas y la técnica utilizada, por lo que nos ceñiremos al último de ellos. La evolución de la delincuencia en EE.UU., desde la segunda Guerra mundial (1947) hasta 1977 y el dramático aumento de ésta desde 1960 son analizados desde la óptica de tres figuras delictivas como son el hurto, el robo y las sustracción de vehículos por medio de la técnica estadística de las series temporales, utilizando como variables exógenas la densidad de la población, el desempleo, la estructura de la edad, el consumo y los automóviles per cápita. La concreción de las variables independientes, fueron 1) la “densidad de la población residencial” o “ratio de actividad” medida por el número de mujeres con maridos que trabajaban fuera de casa más el total de hogares que no estaban formados por maridos y esposas dividido por el número total del hogares, es decir un índice de hogares expuestos al robo bien porque vivía una sola persona o bien porque estaban sin nadie al cuidado al encontrarse la mujer cumpliendo un horario laboral. 2) el ratio de desempleo porque en periodos caracterizados por un elevado porcentaje existen menos personas con una actividad laboral y por consiguiente se reduce la exposición a ser víctima al abandonar su distrito residencial; y también porque un empeoramiento de la economía que reduce el tiempo de trabajo y la reducción de ingresos destinados a ocio, provoca que se desarrollen actividades próximas a sus hogares. 3) la población de 15 a 24 años porque a través de este grupo de edad se accedía a la variable teórica del perpetrador del delito, dado que existía evidencia de constituir el grupo de edad de los más activos y aunque también constituye una población de riesgo o victimización, el principal rol asignado es el de acometer delitos. 4) los gastos en consumo y los coches per cápita sirvieron para medir la propiedad que pudieran ser objetivo de actividad delictiva. Como se puede observar existe una alta colinealidad entre la primera y la segunda variable, ya que en ambas está incluido el desempleo.

La técnica de series temporales se empleó en dos modalidades diferentes. En la primera versión, los resultados de las ecuaciones obtenidas mostraron que en la primera de las figuras delictivas, el robo, su incremento se debía a una mayor proporción de jóvenes en edades de 15 a 24 años y a una significativa reducción de la densidad residencial de la población, mientras que el desempleo tenía poca incidencia –modesta significación estadística– aunque ésta iba en la dirección predicha por el modelo. En la segunda categoría, el robo con allanamiento de morada, resultaron altamente significativas tanto la densidad de la población como la edad, sin embargo, de nuevo el desempleo tenía un coeficiente bajo y además positivo lo cual contradecía la teoría, obligando a los autores a formularla bajo la rúbrica de que para este tipo de delincuencia, el desempleo se comportaba más como un índice de variación en oportunidad de delito, que como la presencia o ausencia de guardianes. La cuarta variable utilizada también era significativa lo cual demostraba como el consumo de bienes exceptuando el de coche incidía en este tipo de delincuencia. Por otra parte, el alto valor de la constante indicaba que incluso si las cuatro variables independientes fueran cero, seguiría existiendo robo con allanamiento de morada. Finalmente, en la sustracción de coches, no se encontró una relación entre el número de coches per cápita y el robo de coches probablemente por la incidencia de la densidad residencial de la población, siendo ésta última la que obtenía un t-ratio más alto, seguida de la población de 15 a 24 años y del desempleo que mostraba un signo negativo lo que indicaba que los coches de las personas que no trabajan se encuentran menos expuestos a la sustracción.

Una segunda versión empírica para contrastar el modelo fue emplear las series temporales para llevar a cabo una prognosis de 1973 a 1977, comparándola con los datos reales, obteniendo para el caso de los robos y del robo con allanamiento de morada unos resultados razonables para los años de 1973-77 y una buena predicción para los años 1973-75 motivada por el severo invierno de esos años que habría reducido el tránsito de personas y mercancías. Mientras que para el caso de la sustracción de vehículos, los cinco años considerados mostraban un exceso que fue explicado por las medidas anti robo introducidas por los fabricantes al principio de la década de los setenta y que no habían sido tomados en cuenta. Las predicciones realizadas para 1985 mostraban un descenso en los robos y en la sustracción de vehículos y un aumento en los robos con allanamiento de morada, sobre la base de que las variables independientes seleccionadas no deberían cambiar mucho si la historia del período seleccionado no lo había hecho, tampoco eran pensables cambios sustanciales en los avances tecnológicos en la seguridad doméstica, en la reorganización de la policía, en el comportamiento de los ciudadanos, en la exposición al riesgo de la propiedad, o en la efectividad del sistema de

justicia, en definitiva no se esperaban grandes cambios que pudieran alterar los datos obtenidos.

12.5.2. El estudio de Cantor y Land (1985):

Más tarde, Cantor y Land desarrollaron una investigación muy citada con posterioridad que cubría con series temporales los años de 1946-1982 sobre el efecto conjunto del desempleo “motivación” y “oportunidad” en seis categorías delictivas: homicidio, violación, robo con violencia, robo con allanamiento de morada, hurto y robo de coche. Partiendo de la base de que los estudios empíricos no acababan de confirmar las teorías criminológicas que relacionaban desempleo con delincuencia, establecieron que una manera de enfocar el problema era considerando que los mecanismos de la oportunidad eran instantáneos ya que al ser coincidentes con los ciclos de negocios se suponía que el incremento en ese ratio era coincidente con un decaimiento en la actividad del sistema total ya que supone un incremento en la concentración de actividades en grupos primarios gastando más tiempo en su residencia o en lugares próximos a ella.

Por otra parte, el impacto del desempleo en la economía según la teoría de la oportunidad parecía no ser contemporáneo, dado que los desempleados en las sociedades occidentales estaban cubiertos por una serie de meses por diversos mecanismos como son las coberturas del estado de bienestar, por familiares, por amigos o por instituciones benéficas, por lo que el desempleo no significaba una respuesta inmediata en la comisión de delitos, sin embargo, a medida que con el tiempo esos apoyos se iban desapareciendo era previsible que la motivación aumentara, por lo que una manera de operacionalizar esta teoría era comparar el desempleo de un año con los anteriores y observar si dicha fluctuación provocaba un aumento de delincuencia e igualmente cuando se producía una reducción de la tasa de desempleo suponía una bajada del ratio de la delincuencia y también suponía que el efecto motivacional debería estar asociado con el tamaño de la fluctuación más que con el nivel del desempleo. Tomando en cuenta que las teorías motivacionales no son deterministas en el sentido de adjudicar que cualquier individuo en desempleo acabará en delincuente, ya que bajo las mismas circunstancias lo que se espera es que algunos individuos sí acaben mientras que otros no.

La investigación se enfocó bajo dos prismas, el primero consistía en que los datos de las diferentes categorías delictivas se debería desagregar para obtener los efectos individuales de cada tipo delictivo frente a datos agregados por delitos “violentos” de “propiedad” o “totales, por lo que se mantuvieron siete figuras delictivas. El segundo era el abandono de las fórmulas que se habían aplicado hasta el momento, consistentes en añadir siempre variables tales como la composición de la edad de la población, la proporción de jóvenes negros en la población, el índice de precios, el

capital, la densidad residencial de la población y la existencia de propiedades dianas; sin embargo, en este caso no parecía oportuno hacerlo porque el énfasis sobre la óptima combinación de variables puede oscurecer la atención de la estimación de los efectos del desempleo sobre la delincuencia.

Los resultados obtenidos mostraron que a pesar de los efectos de una motivación delincuente, emergían unos efectos contemporáneos negativos para todos los delitos excepto para violación y agresión con violencia, lo cual se mantenía tanto si era utilizada la primera versión del modelo como la segunda. Por otra parte, se podía observar un fuerte efecto retardado de oportunidad para la sustracción de vehículos que podría en parte, ser el resultado de la asociación entre actividad económica y la demanda por automóviles y accesorios, dado que cuando se incrementa la demanda por nuevos vehículos durante una recuperación económica será probable un incremento eventual de demandas ilegales para estas mercancías. Por otra parte los efectos del desempleo sobre los homicidios pueden estar vinculados a otras figuras delictivas porque los robos con violencia pueden conducir eventualmente al homicidio, además de que el procedimiento de clasificación de la policía incluye homicidios aunque éstos ocurran en conjunción con otros delitos. Las conclusiones finales fueron que existía un pequeño pero significativo efecto del ratio de desempleo sobre la delincuencia, el efecto contemporáneo es primariamente negativo o de oportunidad, la única evidencia de un efecto motivacional retardado es para delitos que tienen un componente de propiedad. En definitiva la relación entre ratios de desempleos y ratios de delincuencia pueden ser positivas, negativos o nulos dependiendo sobre el tipo de delito.

12.5.3. El estudio de Chiricos³⁶⁰:

La investigación de este autor no es original, sino que se sustenta en un estudio de lo publicado por otros autores hasta ese momento y de sus conclusiones. Se examinaron 63 estudios publicados desde 1960 que reportaban medidas de la relación entre delito y desempleo y 14 estudios cuyo periodo de tiempo estudiado era en la década de los 70 cuando el desempleo alcanzó la tasa más alta desde la recesión de 1930, excluyéndose de la selección de artículos aquellos relacionados con datos a nivel individual, ratios de arrestos, presentación en la corte o encarcelamiento. Después de que el desempleo en Estados Unidos alcanzase tasas del 3,5 por ciento en 1969, subió sucesivamente hasta alcanzar el 11 por ciento en 1982. Los más perjudicados fueron los jóvenes, los adultos jóvenes, las minorías y los trabajadores de cuello azul, aunque éste alcanzó niveles

³⁶⁰ CHIRICOS T. (1987). Rates of crime and unemployment: an analysis of aggregate research evidence. *Social Problems*. N°. 34. págs. 187-212.

nunca conseguidos, los efectos fueron discutidos porque algunos analistas arguyeron que alcanzó a mujeres, jóvenes y personas que dejaron voluntariamente el trabajo, otros mantuvieron que el desempleo fue inevitable y necesario para combatir la inflación y finalmente otros sostuvieron que el desempleo tuvo poco o ningún impacto sobre los ratios de delincuencia. La relación entre delincuencia y desempleo opera según un “consenso de duda” puesto de manifiesto en Cantor y Land cuando sostiene que la cuestión más importante no es que exista reacción sino por qué parece que no existe, por ello diferentes autores han propuesto varias explicaciones para la presunta nulidad de dicha relación tanto a nivel teórico como metodológico. Estos últimos autores han puesto de manifiesto cómo el desempleo tiene al mismo tiempo un efecto positivo y un efecto negativo sobre la delincuencia por simultaneizar el incremento de la motivación y el descenso de la oportunidad de la actividad delictiva.

Diferentes publicaciones han abordado la dificultad de medir delincuencia y paro lo que depara en la inadecuación de enfoques empíricos para estos importantes conceptos. Gran parte de estudios han contribuido para crear un clima de consenso de duda, sus principales limitaciones serían: ninguno ha tratado exclusivamente con ratios de delitos y sus conclusiones ignoran generalmente la distinción entre ratios de delito y otras variables dependientes tales como arrestos; ninguno ha examinado más de 18 estudios de desempleo y delito; ninguno ha examinado más de 7 estudios Unemployment –Crimen (U-C) que daten del decenio 1970, un periodo de rápido crecimiento del paro; ninguno ha hecho análisis secundario sistemático con la relación U-C para mostrar qué delitos están más asociados al desempleo y con qué tipo de estrategias se producen qué tipos de resultados.

Entre los aspectos analizados destaca el nivel de agregación geográfica, encontrándose una mayor consistencia significativa en los estudios con un nivel intra-city que en los nacionales. Las explicaciones vendrían del hecho de que existirían menos errores de agregación en los niveles más bajos de agregación, porque cuanto más pequeñas son las unidades de análisis las posibilidades para ser homogéneas reduciendo las variaciones dentro de cada unidad y las variaciones entre unidades, el nivel nacional puede anular las diferencias sustanciales que caracteriza diferentes áreas de la ciudad. Otra explicación para el mayor índice positivo y significativo de los niveles más bajos de agregación podría ser que al utilizarlo los investigadores capturen los que se podría denominar como el “el efecto del medio” del desempleo sobre determinadas áreas, ya que éste podría crear en determinadas zonas un clima colectivo de anomía con consecuencias delictivas incluso para aquellos que no están directamente desempleados; obviamente tales efectos son menos probables para ser detectados en altos niveles de agregación. Quizá por ello la mayor parte de los estudios a nivel nacional son series temporales.

La segunda cuestión metodológica que puede afectar la relación desempleo-delito es la medida de desempleo utilizada por los investigadores, dado que la relación mostrada entre delitos, género y edad, no está de más esperar que los principales efectos motivacionales del desempleo fueran sobre jóvenes y varones. Con respecto al primero no existen datos certeros. Con respecto a los varones, los estudios muestran que los datos de desempleados específicamente masculinos son menos probables que los ratios indiferenciados para mostrar resultados positivos significativos para delitos contra la propiedad y parecen hacer menor diferencia para delitos violentos, es por ello que es posible que los mismos factores que afectan a los jóvenes puedan estar actuando con esta otra variable: pequeño tamaño de la muestra, superpuesta con otro tipo de desempleados, dado que los estudios realizados antes de 1970 reflejaban mayor relación positiva y significativa que los hechos después, es posible que la baja relación entre desempleo masculino y delincuencia sea debida menos a una cuestión de género que de periodo de tiempo³⁶¹.

Los resultados mostraban que para delitos contra la propiedad la relación desempleo-delito es significativa en el 41 por ciento de los casos y 36 por ciento de los series de tiempo. Para delitos violentos el modelo es ligeramente reverso los resultados significativamente positivos son más probables para los estudios de series temporales (28%) que para los de sección cruzada (20 %). Cuál de los dos producen más resultados válidos. Es difícil de contestar porque cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas que incluyen una selección a priori de un método sobre otro. Las series temporales tienen la desventaja de que incluyen pocas estimaciones (N=28) para ser definitivas. Y más importantes, los cambios a través de los años en la forma en que delincuencia y desempleo han sido medidos puede impedir a las series temporales para proporcionar inferencias solventes. Como advierten Cantor y Land los cambios producidos en la medida del delito en 1958 hace que medidas pre y post sean incompatibles y como muchos estudios hacen investigaciones de series temporales sin tomar en cuenta esta consideración estos autores ponen en tela de juicio estos estudios. Otra cuestión en las series temporales es que utilizan datos agregados a nivel nacional con las desventajas señaladas anteriormente que esto provoca. En definitiva parece más razonable utilizar la sección cruzada que series temporales. Finalmente, la técnica transversal suele utilizar mínimos cuadrados, dos fases de mínimos cuadrados y técnica bivariada sugiere que las últimas son las menos probables para producir hallazgos significativamente positivos.

Los hallazgos consistentemente positivos y frecuentemente significativos para delitos contra la propiedad en la década de los setenta incrementan más las preguntas que contesta. Los dos elementos más importantes en este

³⁶¹ Chiricos T. (1987). Op. cit. Pág. 197

sentido serían los efectos de la magnitud del desempleo sobre la delincuencia y el escaso apoyo que presenta la relación negativa entre desempleo-delito, lo cual iría en contra de las tesis de la teoría de la oportunidad. Además, en los “efectos de la magnitud”, seis de los 16 estudios sobre la propiedad reportaron coeficientes comparables de elasticidad, que muestran el porcentaje de cambio en los ratios de delitos atribuibles a un cambio del 1 por ciento en el cambio del desempleo: para asaltos del .04 al 1.57, para hurtos del .14 al 1.53, y para sustracción de coches fueron más débiles con una mediana del .17. En dichos estudios es posible comparar la fuerza de elasticidad del desempleo con otras variables procedentes de la severidad del castigo legal, en la mayor parte de los estudios los efectos del desempleo fueron mayores que los efectos de las variables de disuasión. La segunda cuestión son las tesis de la oportunidad que han sido utilizadas recientemente para explicar la inconsistencia de la relación.

Los resultados de los estudios llevados a cabo para delitos de la propiedad en la década de los setenta mostraron que los efectos de la motivación superaron ampliamente a los de la oportunidad. Los efectos de la motivación vendrían de lo sucedido en esta década en donde hubo un derrumbamiento de la competitividad en la economía americana con un incremento del desempleo combinado con un incremento de los precios y una bajada de los impuestos que sirven para los servicios sociales, pero no está claro si los efectos fueron debidos a los niveles más altos del desempleo o al rápido cambio de aquellos, Cantor y Land sugieren que son más responsables los cambios que los niveles absolutos. Las últimas preguntas que cabe asignar a esta relación son los posibles efectos moderadores que puedan tener los beneficios de asistencia pública sobre dicha relación así como las políticas seguidas en otros países con una mayor tradición de subsidios sociales. Las autoridades públicas deberían sacar conclusiones que el trabajo y la delincuencia son las principales fuentes de ingresos de las personas por lo que ambas se relacionan en una interdependiente relación

12.5.4. El estudio de Chester³⁶²:

Utilizando como argumento la teoría de la motivación, este autor analiza la relación existente entre arrestos policiales por grupos de edad y desempleo, utilizando la primera variable según fue instrumentalizada anteriormente por Greenberg en el sentido de que la motivación para delinquir debería ser más fuerte en jóvenes que en adultos cuando ambos experimentan los mismos ratios de desempleo, además de que debería de ser más importante en la actualidad que en épocas pasadas, toda vez que han

³⁶² Britt C. L. (1997). Reconsidering the unemployment and crime relationship: variation by age group and historical period. *Journal of Quantitative Criminology* N° 13. Págs. 405-417.

aumentado las necesidades de gasto de los jóvenes en bienes de consumo y en actividades de ocio, y especificando la segunda, el desempleo, según las pautas establecidas por Cantor y Land, en tanto que los efectos de éste son indirectos porque se manifiestan por medio de la motivación y de la oportunidad, toda vez que cabría esperar un efecto larvado en el caso de la primera y un efecto inmediato en el caso de la segunda. La delincuencia fue medida por siete categorías: homicidio, violación, robo con violencia (asalto), robo, robo con allanamiento de morada, hurto y sustracción de vehículos; y el desempleo por medio de dos modalidades: los efectos sobre la delincuencia en una situación estable o normal y los efectos sobre la delincuencia en una situación variable o de cambio de situación.

Las hipótesis de partida fueron que la relación entre delincuencia y desempleo variaba por grupos de edad, y en donde era de esperar que tanto los jóvenes como los jóvenes adultos mostraran un mayor efecto motivacional (positivo) de desempleo sobre comportamiento delincuente; y que la relación delincuencia desempleo variaría a través del tiempo especialmente para jóvenes y jóvenes adultos, donde el efecto motivacional positivo del desempleo era de esperar que creciera a través del tiempo. Estos puntos de partida dejaban fuera del estudio las teorías de la oportunidad, porque la edad no está considerada como causa de variabilidad, dado que el desempleo tiene los mismos efectos sobre la circulación de las personas. Las series temporales utilizadas iban desde 1959 hasta 1996 y los grupos de edad establecidos fueron cinco: de 16-17, 18-19, 20-24, 25-34 y 35-44. la consideración admitida por el modelo de Cantor y Land fue que el efecto del desempleo sobre el cambio en arrestos especificados por edad o el cambio en el ratio de arrestos especificados por edad debía ser menor que cero, mientras que el efecto de cambio en desempleo por edad sobre el ratio de arrestos especificados por edad debería ser mayor que cero, es decir al utilizar la fórmula de los autores anteriores, quedaban especificados los cambios en la delincuencia tanto por medio del desempleo como de las fluctuaciones del desempleo, aunque tomando siempre en cuenta que los efectos de éstos son indirectos porque están matizados a través de la motivación y la oportunidad.

Los resultados obtenidos mostraron que los “efectos del paro”, correlacionaba algo, aunque débilmente con los homicidios, asaltos y hurtos; mientras que los efectos de “cambio del paro” lo hacían con los homicidios, robos y robos con allanamiento de morada. En definitiva, los efectos del desempleo por grupos de edades se dejaban sentir en los delitos contra la propiedad, pero no en los delitos contra homicidios y asaltos; es decir, no existía una clara evidencia en el incremento de los efectos motivacionales sobre los tipos de situaciones de desempleo. Las principales conclusiones fueron que la evidencia de los resultados mostraba un apoyo entre débil y moderado de las tesis sustentadas por Greenberg en el sentido de que existieran variaciones históricas en los grupos de edades en la

relación entre desempleo o cambio de desempleo y delincuencia, y aunque limitados los resultados para delitos contra la propiedad eran consistentes con las hipótesis de Greenberg sobre que el desempleo entre jóvenes y jóvenes adultos conduce a una mayor motivación para cometer delitos de robo.

Otros resultados sobre homicidio y asaltos proveyeron un interesante contraste, ya que existía un mayor efecto motivacional del desempleo para adultos (personas de más de 25 años) pero un mayor efecto motivacional de cambio de desempleo entre jóvenes y jóvenes adultos (edad de 18 a 24 años). Sin embargo no se encontró apoyo para las tesis de Greenberg porque los efectos del desempleo y cambio de desempleo variaban para todos los grupos por igual si se exceptuaban las categorías de hurtos y violación. No obstante las conclusiones podría ser limitadas si se tuvieran en cuenta algunos factores importantes, como el que no se pueda esperar la misma reacción de los desempleados año tras año sin considerar las posibles variaciones estructurales en la economía, política y sociedad, como por ejemplo, las compensaciones gubernamentales al desempleo, o el que los datos agregados procedan de un nivel nacional en vez de un nivel de ciudad o de región, lo cual podría plantear algunas cuestiones como por ejemplo si la relación entre desempleo y delincuencia es siempre más intensa a nivel de ciudad o si el efecto aparente del desempleo sobre la delincuencia en algunas comunidades es debido a la edad o a variaciones temporales de cómo los residentes responden al desempleo y sus consecuencias. En segundo lugar es necesario tomar en cuenta los hallazgos de algunas investigaciones en el sentido de que la relación entre desempleo y delincuencia es más fuerte para blancos que para negros.

12.5.5. El estudio de Kapuscinski, Braithwaite y Chapman³⁶³:

Estos autores hacen un repaso a la literatura sobre este tema mostrando que el delito está relacionado con el desempleo, ya que existe una fuerte asociación positiva entre delito y desempleo a nivel individual, una clara asociación positiva en el nivel temporal que se vuelve más débil cuando el nivel de agregación geográfica se incrementa, sin embargo también muestran una relación bastante inconsistente a través del tiempo. Por otra parte las ciudades con distritos con alto ratio de desempleo tienen altos ratios de delitos, y ciudades con alto desempleo generalmente tienen más delitos que ciudades con bajo desempleo y entre los estados americanos aquellos con alto desempleo tienden a tener más delitos. Por último, las naciones con mayor ratio de desempleo tienen más altos ratios de delitos, lo cual se corrobora en los estudios a nivel internacional que han medido la

³⁶³ Kapuscinski et al. (1998). Unemployment and crime: toward resolving the paradox. *Journal of Quantitative Criminology*. N° 14. Págs. 215-241.

desigualdad y el delito. La pregunta que se formulan es por qué si la relación se muestra tan fuerte en los niveles individuales, dentro de la ciudad, entre ciudades, entre estados y entre estados a nivel internacional, no lo es a nivel de las series temporales. El caso que se utiliza es el australiano en donde los desempleados están fuertemente representados entre los delincuentes, y en donde no existe ningún estudio transversal que haya refutado la influencia del desempleo.

La forma de resolver el puzle del desempleo y delito es considerar la desagregación del mercado de trabajo por sexo, para lo cual habría que rechazar la teoría de que el desempleo que provoca el delito masculino no hace lo mismo con el femenino. Cuando las mujeres son rechazada por el mercado de trabajo legítimo, el ilegítimo llega a ser más atractivo que lo es para los hombres, ya que las mujeres como los hombres en pobreza tienen menos que perder desde una convicción del delito, y las mujeres desempleadas tienen más que ganar del delito de la propiedad que aquellas que acumulan legalmente propiedad por un trabajo. Es probable que la experiencia del desempleo sea tan humillante para la mujer como para el hombre ya que para ambos es probable engendrar un sentido de resentimiento ante la injusticia de su situación. Lo cual puede acabar en ansiedad, consumo excesivo de drogas tales como alcohol, y furia. Un efecto que podría convertir el efecto del desempleo sobre el delito más fuerte que el del hombre sería el de victimización más que el de infractor. Las mujeres que no pueden obtener un trabajo para escapar de la dependencia económica de un hombre violento, cabeza de familia, continúan expuestas con sus hijos a la violencia como resultado de ello.

Por otra parte, los autores plantean tres efectos separados del incremento del empleo femenino en el contexto de una sociedad patriarcal, primero, el incremento del empleo femenino puede incrementar las oportunidades delictivas (para hombres y mujeres), segundo, el incremento del empleo femenino incrementa la vulnerabilidad de las mujeres como víctimas de una variedad de delitos en espacios públicos, trabajo, y en el hogar por fraude y violencia, tercero, puede incrementar la vulnerabilidad de otros miembros de su familia para ser víctimas e infractores porque en sociedades machistas, el papel tradicional de la mujer no es cubierto por el hombre ya que no es consciente de que debe reemplazar el espacio dejado por la mujer trabajadora. Todo ello debería conducir a responder porque los estudios sección cruzada siempre encuentran una relación positiva en Australia frente a los cinco de series temporales que no la encuentran. La contestación podría ser que la omisión del trabajo femenino omitido es más importante en series temporales que en sección cruzada porque la participación en la fuerza de trabajo femenina ha variado enormemente a través del tiempo. Sin embargo, en estudios sección cruzada donde la variación geográfica en empleo femenino es sustancial suprime el efecto del desempleo sobre la delincuencia.

La estrategia investigadora comienza con un test de los efectos del desempleo sobre el delito, sin controlar el empleo femenino, en un segundo paso evaluar la fuerza del efecto del desempleo cuando el empleo femenino es añadido al modelo. Los datos mostraron que el empleo femenino está negativamente correlacionado con el desempleo total y con el empleo masculino (coeficientes de -0.18 y -0.28) lo que tiene el efecto de sesgar hacia abajo el efecto de la medida de la variable del desempleo cuando el empleo femenino es omitido. Esta cuestión estadística ayuda a resolver la paradoja de los resultados de las anteriores series temporales y es el principal factor motivacional para este estudio. El homicidio es de lejos la mejor categoría de infracción para testar los efectos de las series temporales dado que es la única variable nacional a través de un largo periodo de tiempo con una definición uniforme. Para el resto de las categorías de delitos existen preocupantes diferencias de definición entre los seis estados. Las razones por las que el desempleo femenino y masculino debería incrementar los homicidios son claras en términos de formulación estándar de pérdida de esperanza, reducción del mantenimiento (stake) de conformidad, humillación y sentimiento de fallo, y subida de amor parental.

Teóricamente se arguye que los efectos de oportunidad de empleo son mucho menos profundas con homicidios que con delitos de propiedad. Los resultados muestran que en la Gran Depresión hubo una bajada de la criminalidad probablemente porque afectó en mayor medida a los ricos que a los pobres, sirviendo para que la distribución de los ingresos se volviera más igualitario. Si se adapta la visión de que es la desigualdad de los ingresos más bien que la del desempleo el predictor teórico correcto del delito, se puede utilizar los resultados intuitivamente para la Gran Depresión, sin embargo, aquí no reconsidera si el desempleo es el índice más coherente a nivel teórico para predecir el delito. Los dos principales regresores de interés son el empleo y el desempleo femenino usados como ratios o proporción de la fuerza de trabajo respectiva, no siendo las dos caras de la misma moneda porque la proporción de población en la fuerza de trabajo –el ratio de participación– puede variar también. Ahora bien la correlación entre desempleo y empleo masculino es negativa (-0.58), la correlación entre empleo y desempleo femenino es pequeña pero positiva (0.15), la relación entre búsqueda de trabajo y creación de trabajo ayuda a explicar esta correlación positiva, porque cuando la proporción de mujeres trabajadoras aumenta también lo hace la de mujeres buscando activamente trabajo.

Entre las variables que fueron controladas se descartó la del sexo porque la proporción de mujeres en la población no varió sustancialmente en el siglo, sin embargo, si lo fueron la de la edad-sexo al cometer los delitos, cuyo tramo más delincuente subió en el caso de los hombres de los 18 a los 24 años. Otra fue la de la urbanización que correlaciona fuertemente en las estadísticas oficiales así como en los estudios de victimización y en los auto

informes por lo que el porcentaje de población viviendo en áreas urbanas fue introducido. Por otra parte, como el matrimonio está asociado negativamente con el delito por lo que el porcentaje de la población casada se introdujo en el modelo, así como el porcentaje de divorciados dado que previos trabajos sobre datos agregados había mostrado estar correlacionado positivamente con el delito. Otros dos controles adicionales fueron la posesión de vehículos de motor y el crecimiento real del ratio del producto interior Bruto, que otros autores habían encontrado ser importante en datos de homicidio en estudios sección cruzada. En adicción el tiempo sí fue incluido en el modelo porque hace que se puedan controlar en parte otras tendencias no medidas en ratios de homicidio y sus determinantes. Mientras que variables relacionadas con la corte de justicia como encarcelaciones no fueron seleccionadas por las dificultades de los datos y porque en el estudio se considera que la ratio de crímenes es la misma que la de encarcelamientos. Tampoco se utilizaron la movilidad residencial, la asociación diferencial con amigos delincuentes, las actitudes y vínculos con la escuela, las aspiraciones educacionales y ocupacionales, y la fe en la ley.

Los resultados mostraron que el desempleo masculino y femenino tenían una significación positiva, pero no eran estadísticamente significantes, e igual ocurría con las variables de control que tenían unos efectos muy débiles sobre el homicidio con la excepción del porcentaje de personas casadas, que tenía un fuerte efecto negativo. Sin embargo, los ratios de cambio del empleo femenino mostraron una gran influencia sobre el delito y la inclusión de esta variable incrementaba estadísticamente el efecto del desempleo. Lo que sugiere que el fallo de muchos estudios de series temporales de encontrar una fuerte significación estadística en dichos modelos es la falta de especificación a través de excluir el empleo femenino. Es interesante destacar que estos resultados sobreviven a una implicación empírica emanada de una reciente re especificación de la relación desempleo delincuencia basada sobre la desagregación de la actividad del delincuente en un componente de duración y en un componente de frecuencia. Tal especificación postula un impacto retardado y extendido a través del tiempo del desempleo sobre la delincuencia.

La fuerza de la relación contemporánea entre desempleo y homicidio cuando las variables son las adecuadas. Lo que debe ser resaltado es que tanto el desempleo masculino como el femenino tienen unos efectos poco significativos antes de que se incorpore al modelo el empleo femenino, pero ambos son significativos cuando el empleo femenino es añadido. Por último, Kapuscinski et al., en Australia, también encontraron una fuerte relación entre desempleo y delincuencia en series temporales que cubrían el periodo de 1917 a 1987, incluyendo en el modelo el empleo de las mujeres, ya que cuando se encuentran en esa situación propician la delincuencia al ser más vulnerables tanto en sus desplazamientos como en la vivienda al dejarla sin protección.

12.5.6. El estudio de Field³⁶⁴:

Otro estudio desarrollado en Inglaterra y Gales, que combina los efectos de las dos teorías es el de Field, en un análisis sobre la relación entre desempleo, consumo y las variaciones anuales de delincuencia sobre dos categorías: robos y robos con allanamiento de morada, y tráfico de mercancías robadas, en donde el comportamiento desviado acaba siendo explicado por el stock de oportunidades de delincuencia o consumo de hogares en los últimos cuatro años. El informe es una continuación y ampliación de uno anterior de 1990, en donde se exploró una serie de factores que podrían estar encadenados a tendencias de delitos y en donde se presentó una serie de hallazgos. El principal resultado fue que el aumento de los ratios de delitos contra la propiedad están estrechamente relacionados con los gastos de consumo o periodos de rápido crecimiento económico, por lo que cuando el consumo crece rápidamente, el crecimiento de los delitos contra la propiedad caen o viceversa. La explicación fue la de la motivación dado que cuando la gente se encuentra mejor debido a su consumo, existe menos probabilidad de ser atraídos por métodos delincuentes para obtener bienes. La nueva investigación demostró (1) que los robos y los hurtos están encadenados al stock de oportunidades de delito, representado por la suma del gasto de los consumidores reales en cada uno de los últimos cuatro años, para un incremento del 1 por ciento en este stock, los robos y los hurtos se incrementan en un 2 por ciento; (2) los robos y los hurtos están asociados con el número de jóvenes hombres. Por cada aumento del 1 por ciento en el número de hombres en edades comprendidas entre los 15 y 20 años, los robos y los hurtos se incrementan en 1 por ciento.

La larga relación entre delito y crecimiento económico confirma los hallazgos de otros investigadores. La relación determina lo que podría ser llamado el nivel de equilibrio del delito reconociendo que éste cambia a través del tiempo. El vacío entre los niveles de equilibrio actual son explicados en términos de influencia de corto recorrido: cuando el nivel del delito actual cae por debajo del equilibrio, el crecimiento del delito crece tirando del nivel del delito hacia el equilibrio e igual ocurre cuando se sitúa por encima de dicho nivel (2) el rápido crecimiento del consumo tiende a deprimir (bajar) el crecimiento del delito de propiedad y viceversa. El gráfico del modelo desarrollado en el año 1990 relacionaba los robos y hurtos con el consumo (en escala inversa), de las tres posibles explicaciones, un efecto motivacional negativo, un efecto de actividad rutinaria y un efecto de oportunidad positiva, el más plausible era el primero, es decir, el

³⁶⁴ Field S. (1998). Trends in crime revisited. Home Office Research Study 195. London Home office.

inmediato impacto de un boom en el gasto de consumo es la supresión de un crecimiento en el delito de propiedad.

Sin embargo las técnicas estadísticas para el análisis de las series temporales se han desarrollado desde el anterior artículo, lo cual permite el estudio del nivel de la delincuencia y no solo los ratios de cambio como se hizo entonces, y tal como recientes trabajos dando un mayor énfasis al mecanismo de cointegración, un mecanismo para detectar relaciones a largo plazo que son más profundas que las correlaciones entre factores debido a una tendencia de tiempo. Los delitos contra la propiedad tienen una relación a largo plazo cointegrada con variables económicas como niveles de consumo, Producto Interior Bruto, o desempleo. Este supuesto se ha criticado por ser estadísticamente incorrecto, encontrando que los niveles de hurto y de robo estaban cointegrados con el nivel de gasto de consumo desde 1946 hasta 1991, pero no con el PIB y con el desempleo. Sin embargo los factores a corto plazo que afectan el crecimiento de los ratios de robos y hurto son el desempleo (positivamente) y el crecimiento del consumo (negativo), así como un efecto por el número de condenas (efecto de disuasión).

Todo ello no podía explicar el descenso que hubo en los delitos contra la propiedad entre 1992 y 1996, que podría ser debido a un nuevo punto de partida en las tendencias de delincuencia o bien una debilidad en el análisis inicial. Una posible explicación sería la existencia de una relación a largo plazo cointegrada entre delitos de propiedad y otros factores, debido a que uno de los rasgos de esta relación es que implica un gradual equilibrio de cambio del nivel del delito debido a numerosos delitos actuales más volátiles. El equilibrio implica que una bajada en algunos años vaticina una subida en los siguientes hasta alcanzar el equilibrio. La relación entre oportunidad y consumo estuvo mal especificada porque partía de que un incremento en el consumo podría incrementar los delitos de propiedad al incrementar el número de bienes válidos como dianas para robo, pero el gasto anual total de consumo no era el correcto del número de bienes robados porque depende del gasto de un periodo de algunos años, el stock hace que los coches por ejemplo sean acumulables en varios años, es decir, el ratio correcto para el stock de cosas que se pueden robar es el gasto acumulativo de varios años y no el parcial de un solo año. Finalmente, como el stock de bienes estará fuertemente influenciado por pasados modelos de consumo, el efecto de oportunidad de consumo estará sujeto al tiempo y explicaría por qué en el estudio anterior el incremento del consumo estaba asociado con el incremento de delitos contra la propiedad después de un vacío de tiempo. También explicaría por qué el impacto inmediato de una oleada en el gasto de consumo es suprimir el delito de propiedad, después de que el inmediato efecto negativo de la motivación sobre un infractor positivo suponga un inmediato impacto sobre los efectos de la oportunidad (o a través del efecto de la actividad rutinaria).

El nuevo modelo implica una relación a largo plazo cointegrada entre delitos de propiedad y otros factores, y una relación a corto plazo. Las oportunidades para el robo y el hurto estarían relacionadas con el stock de bienes que estaría representado por el gasto del consumo en un periodo de varios años en donde los factores demográficos afectarían a las tendencias del delito porque existe una conexión entre el cambio del número de jóvenes y muchos delitos. La estimación fue que para el 1 % del aumento del stock de bienes, el robo y el hurto aumentarían un 2 %, y por cada aumento del 1% de jóvenes de edades entre 15 y 20 años el incremento de robos sería del 1%. Las relaciones no son simples sino especiales de cointegración, lo cual difiere porque se relaciona consumo y delito en el mismo año más bien que en diferentes. Así pues, las relaciones a largo plazo entre delito, demografía y economía determina lo que podría ser llamado “nivel de equilibrio del delito”, que cambia en función de los cambios en el tiempo de la demografía y la economía.

Otros factores que podrían incidir en el delito son las políticas de justicia criminal, los rasgos de privación (penurias) de hijos y padres que precipitan la delincuencia, y las medidas y programas de prevención del delito. En cuanto a los factores económicos ha existido un largo debate acerca del impacto del desempleo en el delito y se ha demostrado que los jóvenes son proclives a cometer delitos cuando están desempleados. Pero los datos de esta investigación demuestran una mayor relación entre el crecimiento del consumo que el crecimiento del paro. Podría ser que el desempleo tuviera un pequeño impacto sobre los delitos de propiedad y que la relación entre delitos y ciclo de negocios esté mediado a través de factores como los ratios de salarios, la disponibilidad de trabajo temporal y parcial y la flotabilidad de la economía sumergida. Sin embargo, la relación entre crecimiento económico y delito no es lineal a lo largo del siglo, ya que en la época victoriana el crecimiento se plasmó en la mejora de las necesidades básicas tales como vivienda, comida, etc., y el crecimiento en estas áreas no afectó a las oportunidades de delito, frente a las de la última mitad del siglo como coches o instrumentos electrónicos.

Muchas cuestiones han influido en el descenso de la delincuencia conocida como son los seguros de los hogares, de los coches o el uso del teléfono, por otra parte la delincuencia podría haber bajado por la bajada del precio de los coches o por la poca circulación de dinero en efectivo, sin embargo el cambio en el consumo de bienes electrónicos ha propiciado el fraude informático o la piratería del copyright, los cuales son informados en mucha menor medida. En 1997 el robo y el hurto estuvo un 17 y 16 % debajo de su nivel de equilibrio, este desfase refleja el grado de potencial crecimiento en las futuras tendencias de delito, sobre la base de que el delito corrige ese desequilibrio a través de un periodo de tiempo. Una variable estacionaria es aquella que tiene una medida y una varianza constantes. Claramente las variables que tienen tendencias a través del tiempo como los

ratios de delito no son estacionarias porque su media no es constante. La estacionalidad es importante porque cuando las regresiones son estimadas usando variables no estacionarias tales como la variable dependiente o la independiente los coeficientes de regresión pueden ser erróneos. Existe una discusión si el robo y el hurto son estacionarios en las primeras diferencias o en las segunda, este estudio y el de otros sugiere que son estacionarias en la primera diferencia³⁶⁵.

12.5.7. El estudio de Hale³⁶⁶.

Según este autor, la noción de que delito está relacionado con las dificultades económicas tiene una larga y distinguida historia dentro de la criminología y la economía. Un estímulo para un renovado interés procede del trabajo del Field en 1990 cuando sentenció que los factores económicos tienen una gran influencia sobre las tendencias en delitos personales y en delitos de propiedad, es decir los delitos son sensibles a la marcha de la economía. Pero, el trabajo de Field podría ser mejorado para permitir explicitar modelos de tendencias de largo recorrido por medio de la introducción de modelos de corrección de errores, lo que significa que las relaciones de largo recorrido entre variables para ser incorporadas en modelos dinámicos de corto recorrido. Los hallazgos de una relación de cointegración entre datos de delitos diferenciados son equivocados desde que su variable dependiente puede no tener relación con el grupo de factores explicativos. Al desarrollar bien el método se puede apreciar que no existe relación de cointegración con otras variables ni grupo de variables relacionadas exceptuando el consumo.

Para que los resultados de un análisis de regresión múltiple sean válidos, las variables usadas deberían ser estacionarias lo que significa que sus propiedades deberían ser constantes a través del tiempo y no exhibir cualquier tendencia hacia arriba o hacia abajo, es decir media constante y varianza constante. Las variables que no son estacionarias deberían ser diferenciadas hasta que lo sean y las que necesitan ser diferenciarse una vez para estacionalidad son referidas a ser integradas en orden 1, o dos veces 2 y así sucesivamente. Ahora bien muchas teorías económicas y sociológicas están en términos de relaciones de equilibrio de largo recorrido entre variables. Diferenciar los datos tiene el efecto de purgarlos de información de largo recorrido (tendencia) e ignorar esas posibles relaciones de largo recorrido. Excluir esta información cuando tal relación existe no parece sensible. El camino de hacerlo es considerar la posibilidad de usar modelos de corrección de error que incorporan aspectos de los datos de largo y corto recorrido. Esto solo es posible cuando existe una combinación lineal de

³⁶⁵ Field S. (1998). Op. cit. Pág. 22.

³⁶⁶ Hale Ch. (1998). Crime and the business cycle. Journal of Criminology N° 38. Págs. 681-698.

variables no estacionarias que es en sí misma estacionaria. Si tal combinación de variables existe, se dice que las variables son cointegradas. En suma los análisis de regresión convencionales se enfrentan a dos amenazas procedentes de variables no estacionarias.

Los resultados mostraron que los robos y las sustracciones estaban cointegrados con los gastos de consumo en un nivel del 5% de significación, pero no estaban cointegrados con desempleo o nivel de renta a nivel individual o en combinación. Una posible explicación de la relación de largo recorrido podría ser a través de la teoría de la oportunidad que enfatiza que para que se produzca un el delito es necesario que se den tres cosas: un infractor motivado, una diana accesible y falta de guardianes. Las dianas accesibles se han multiplicado después de boom del consumo de los últimos cuarenta años. El comienzo del traslado a un consumismo de masas puede ser identificado con el final de la austeridad de mitad de los años cincuenta, punto en el cual el delito comenzó a crecer después de fluctuar alrededor de un nivel relativamente estable desde 1945. La relación negativa a corto plazo de Field podría ser entendida como un efecto motivacional, ya que durante los periodos de fuerte caída del ciclo, más infractores podrían estar motivados para cometer delitos contra la propiedad.

A diferencia de Field, se encontraron relaciones significativas entre desempleo y delito, en particular, los cambios en el nivel de desempleo fueron significativos y positivos en relación con los tres delitos de propiedad, aunque para los robos no tuvo gran significación cuando se utilizó otro método. Por lo tanto aunque el desempleo no tiene una relación de equilibrio de largo recorrido con el delito, sí juega alguna rol en las fluctuaciones de corto recorrido. Si el desempleo se incrementa año tras año permaneciendo igual otras cosas, los modelos muestran que robos y hurtos se incrementan³⁶⁷.

En las conclusiones apuntan que el efecto de los cambios en el desempleo puede ser asimétricos, dado que el incremento en el delito cuando crece el desempleo es mayor que la caída cuando el desempleo desciende, ya que el delito responde rígidamente para caer en comparación con la subida del desempleo. Este planteamiento tendrá consonancia con el concepto de arraigo social del delito y el desempleo. En un nivel muy simple, la sugerencia es que si las causas individuales del paro desembocan en una activa delincuencia es posible que no se pueda parar o dar marcha atrás cuando las condiciones del desempleo mejoran. Entre las razones que se pueden argüir están las de la “persistencia del hábito”, así como la importancia de los tipos de oportunidades validas cuando el empleo se expande, sobre todo si son percibidos como reales frente a los “trabajos hamburguesa”. Sin embargo, no se encontraron evidencias de esta rigidez cuando se hicieron modelos de la variación de los efectos del desempleo, es

³⁶⁷ Hale Ch. (1998). Op. cit. Pág. 694.

decir, no se encontró apoyo para la tesis de la asimetría del desempleo. Por otra parte la tesis de que los cambios en los niveles de consumo personal son importantes es confirmada aunque con importantes modificaciones, dado que se encontró que cambios actuales y retrasados fueron estadísticamente significativos pero con opuesto signo implicando que si el consumo crece, el delito baja inicialmente, pero se recupera en el siguiente periodo, sin embargo en el estudio no se encontró que el efecto retardado fuera significativo para robos y hurtos.

Los cambios en el consumo junto con los cambios en el desempleo, el número de policías y los ratios de condenas fueron todos estadísticamente significativos. Sin embargo la sensibilidad de estos resultados con respecto al método empleado fue claramente corroborado, dado que la relevancia de los resultados basados en el enfoque de dos etapas condujo a la conclusión que los cambios en los ratios de condena tenían un impacto insignificativo sobre delitos de propiedad recordados. En conclusión y en consonancia con los estudios de otros autores, se destacó la importancia de la economía en explicar el cambio en los ratios de delitos. Los resultados se pueden contemplar desde la óptica de que mayores recursos dados a estrategias de prevención del delito, tanto físicos como sociales es de vital importancia porque las dianas potenciales continuará incrementándose a largo plazo con el crecimiento de la economía.

12.5.8. El estudio de Witt, Clarke y Fielding ³⁶⁸:

Según estos autores, la pasada década ha visto un cambio dramático en el número de infracciones recordadas notificadas a la policía en Inglaterra y Gales, también fue una década que vio una considerable fluctuación en el ratio de desempleo que cayó del 13,7% en 1986 al 7,5% en 1990, volvió a crecer hasta el 14% en 1993 y cayó al 10.3% en 1996. La relación entre desempleo y delito se puede contemplar desde una relación positiva, pero no solo como un indicador del número de individuos que están fuera del trabajo, sino como una medida general de la actividad económica (suma de bienes y servicios producidos). En este caso el desempleo puede tener un efecto negativo al reducir el número de guardianes de propiedad (más gente en casa cuando la actividad económica es baja) y reducir la disponibilidad de propiedad (pocos bienes en circulación). La conjunción de efectos positivos y negativos podrían anular los efectos visibles de tal relación y explicar porque en anteriores estudios no ha sido posible detectar tal relación. La pretensión del estudio fue doble: primero, usando los datos de la policía establecer el impacto del desempleo sobre el delito, intentando controlar la disponibilidad de propiedades susceptibles de ser robadas,

³⁶⁸ Clarke A., Fielding N. and Witt R. (2000). Crime, unemployment and deprivation. In Clarke A., Fielding N. and Witt R. 8Ed.). The economic dimensions of crime. London. MacMillan.

correlacionada con la actividad económica; segundo, usando datos del Estudio de Nuevos Ingresos explorar si el incremento en desigualdades de ingresos puede suponer cambios en la delincuencia.

La estructura del estudio fue la siguiente: breve estudio de la evidencia existente sobre los efectos del desempleo y desigualdad sobre la delincuencia, después subrayar los problemas econométricos de la estimación de una ecuación del delito simple dinámica. El artículo focaliza sobre las relaciones entre factores económicos y delitos de propiedad. Se desagregan delitos de propiedad en cuatro categorías delictivas: sustracción de vehículo, otros robos, hurtos y cosas robadas por tirón. Se focaliza sobre el delito por medio de su frecuencia u ocurrencia y su principal motivo económico. La cuarta sección provee los resultados y la última ofrece conclusiones. En un breve examen de la literatura, se repasan las aportaciones de series temporales anuales de Estados Unidos entre 1946-82 en donde se observó que los efectos negativos de la oportunidad se sobreponen a los positivos de la motivación creando una relación ligeramente negativa. Otros estudios sobre series temporales agregadas en UK de 1949-87 no encontraron una robusta relación estimada en cambios en técnicas de especificación, aunque encontraron una relación positiva significativa entre desempleo y delito para cinco de las ocho categorías delictivas estimadas. Por otra parte estudios anteriores han encontrado resultados mixtos, creando un “consenso de duda” acerca de la naturaleza y existencia de relaciones causales entre desempleo y delito, aunque después de examinar muchos estudios la evidencia mostraba la existencia de una relación positiva y frecuentemente significativa. Recientemente, utilizando medidas de desigualdad de rentas frente a ingresos encontró que no había relación entre desigualdad y delitos de propiedad, pero una fuerte evidencia positiva de una relación entre desigualdad y asesinato o *manslaughter*. En el Reino Unido un estudio encontró que un incremento en la desigualdad de salarios incrementaba el robo, otros robos, robo dentro de vehículos y robo con allanamiento de morada.

El modelo económico de delito se basa en que la actividad delictiva individual depende de los ingresos de actividades legales, la preferencia de los individuos y los factores que afectan la probabilidad de arresto y castigo. Las variables retrasadas o larvadas reflejan la tendencia de la gente que se encuentra implicada en delitos para continuar en ellos aunque las circunstancias que les condujeron hayan cambiado. Las cuatro variables cruciales serían: ratio de desempleo masculino, área de nivel de riqueza, desigualdad de salarios y número de policías. El empleo de la variable de desempleo masculino está motivada porque una gran cantidad de delitos están cometidos por hombres, aunque se podría argüir que gran parte de ellos los cometen aquellos de menos de 16 años que no están en el circuito del empleo. También influye el número de coches per cápita en todas las especificaciones, dado que contra mayor número de coches mayor la

posibilidad de robarlos, además de que puede aportar un nivel promedio de riqueza. Existe también un efecto de disuasión desde el número de policías llevándola a la ecuación en efecto larvada o retrasada. Finalmente está muy bien documentado que la caída en los salarios relativos de hombres desespecializados en las décadas de los ochenta y noventa podría haber incrementado el apoyo para conducirlos al delito. La subida de la desigualdad de ingresos podría ser la que explicara la subida de robos de coches y otros tipos de robos.

Desgraciadamente es muy complicado obtener datos válidos, por eso se utilizan los de la policía que se encuentran en el nivel más bajo de agregación y aportan el conjunto de características económicas de la población. Los datos proceden de 42 distritos policiales en los años de 1986-96 y los de delitos de propiedad agregados, junto con los desagregados de robos de vehículos, otros robos, robo con allanamiento de morada y manejo de cosas robadas. Las categorías están expresadas en ratio por 1.000 habitantes. Cada una de las nueve categorías es regresada sobre un grupo de características regionales. Ello incluye cambio en el desempleo masculino, ratio de cambio en desigualdad de salarios, ratio de cambio en el número de coches registrados, y ratio de cambio en el tamaño de la policía. La variable dependiente retrasada es incluida para capturar vacíos de comportamiento delictivos. Todas las variables exceptuando la retrasada se asumen que son estrictamente exógenas. Como es bien sabido la presencia de una variable retrasada crea un problema de sesgo en los datos de panel por lo que se usa un estimador de dos pasos. Los resultados de la regresión muestran que el efecto disuasorio más grande de la policía es el del robo de coches, la elasticidad de largo recorrido es de $-1,32$ sugiriendo que un incremento del 1 % en el número de policías conduce a una bajada del 1,32 % en el delito de automóviles. Ello es lógico porque es un delito fácilmente detectable ya que son incorporados en formas electrónicas, por otra parte el incremento de policía en la calle tiene un efecto disuasorio sobre los jóvenes porque los policías tienden a concentrar sus esfuerzos sobre delitos que son fácilmente detectables.

La conclusión es que se ha demostrado que el delito está asociado con un incremento en el desempleo de hombres, altos crecimiento en la suma de propiedades susceptibles de ser robadas, alta desigualdad de salarios asociada con la distribución de ingresos semanales de hombres empleados tiempo completo. También se ha mostrado que el incremento de la fuerza policial está negativamente asociada con el delito de propiedad. Existen sin embargo tres limitaciones, los hallazgos solamente pueden ser interpretados dentro del contexto general del modelo económico del delito; muchos delitos de propiedad son el resultado de factores variados y complejos como las influencias en la juventud y en los desarrollos personales. En tales circunstancias los factores económicos son menos aplicables. Una plena exploración comprehensiva de la relación entre privación (desempleo y

desigualdad) y delito requiere una consideración de procesos causales en un nivel micro. Finalmente hay que tener en cuenta que los cambios en la fuerza policial, dado que el crecimiento del delito, puede conducir a la contratación de un número más alto de policías.

12.5.9. El estudio de Chamlin y Cochran³⁶⁹:

Estos autores comienzan su exposición manteniendo que ha llegado a ser obligado empezar cualquier discusión a nivel macro entre desempleo y delito observando que las extensas investigaciones son variadas, complejas y equivocadas. Este lamento sirve como una recapitulación de los numerosos u a menudo compensatorios procesos teóricos que median los efectos del desempleo sobre el delito. Las críticas metodológicas sofisticadas de recientes esfuerzos para estimar la asociación entre los dos y últimamente el desarrollo de técnicas estadísticas alternativas y estrategias de modelado para tomar en cuenta las intrincadas relaciones entre ambos. Pero todas las mejoras de los últimos años pueden ser infructuosas sino se tiene una buena fuente de medida información para establecer una clara y consistente asociación empírica entre los dos. Recurriendo a la teoría de elección racional y a la medida de desempleo proporcionada por la oficina de estadística del trabajo se construye la aportación de este artículo, porque gran parte de la confusión existente podría surgir de la confusión sobre el cambio en el desempleo. La estimación de esta fuente procede del Current Population Survey (CPO) una muestra representativa que cubre 60.000 hogares de personas mayores de 16 años.

La persona que responde no decide su propio estatus de fuerza de trabajo, para ser clasificado como parado. Los individuos deben cumplir tres criterios: personas que no hayan trabajado en la semana de referencia, que estuvieran disponibles para trabajar, excepto por enfermedad temporal y hubieran hecho esfuerzos específicos para encontrar trabajo durante un periodo anterior de 4 semanas con respecto a la semana de referencia. Los esfuerzos por encontrar trabajo incluyen contactos con un empleador, agencia, amigos o entrevista de trabajo, envío de currículos, colocando anuncios, o contactando con sindicatos o con registros de agencias especializadas. Es importante destacar que esta estadística excluye los llamados trabajadores desanimados (desalentados), es decir los que desean un trabajo porque han buscado en los últimos doce meses, pero han abandonado la búsqueda porque creen que no hay trabajo en su campo, porque ha sido imposible encontrar trabajo con anterioridad o porque les faltan habilidades apropiadas para desempeñarlo, o porque creen que la

³⁶⁹ Chamlin, M.B. & J.K. Cochran 2000, Unemployment, Economic Theory, and Property Crime: A Note on Measurement. *Journal of Quantitative Criminology* 16: pp. 443-455.

discriminación evita la posibilidad de ser contratado. Consecuentemente no son considerados como desempleados.

Normalmente las teorías macro sociales que vinculan paro con delito aunque a menudo especifican procesos alternativos intervinientes, se basan en que fluctuaciones temporales en el nivel del paro es probable que afecten el nivel de delitos de propiedad. Ostensiblemente, el paro afecta el nivel de delito porque modifica las percepciones individuales de los costes relativos asociados con medios alternativos de adquirir riqueza, un mecanismo que actúa por medio de dos caminos: el paro por su naturaleza reduce costes de oportunidades indirectos de la decisión de implicarse en robo para procurar ingresos (reduce los miedos para iniciar ese camino); segundo, al reducirse los ingresos del estado, éste no puede combatir eficazmente el delito (probabilidad de castigo). En definitiva, el delito llega a ser más atractivo que otros medios de recompensas pecuniarias.

Los datos longitudinales que miden directamente la cantidad de trabajadores descontentos e inducidos para el delito no están fácilmente disponibles. Desde luego, está claro que el convencional nivel de desempleo no sirve, por eso se buscan medios alternativos que incluyan el número de personas desempleadas durante 15 semanas o más, segundo el ratio de utilización de capacidad, una medida que detecta la demanda anual de trabajo y que a diferencia de la oficina estadística de desempleo no excluye sistemáticamente a los trabajadores desanimados. Esto se obtiene en las series temporales del Banco Federal de St. Louis porque recogen la estimación de parados de larga duración que todavía forman parte del mercado de trabajo. Aunque sea posible que todavía dispongan de recursos financieros para afrontar la rigidez del paro en comparación con trabajadores de corta duración sin reservas económicas, por lo tanto se puede obtener una mejor medida que la proporcionada por la oficina. Un segundo indicador de la demanda de trabajo es el ratio de utilización de capacidad, una serie que intenta estimar el nivel de producción sostenible dentro del marco de un esquema de trabajo realista tomando en cuenta derrumbamientos normales y factores estacionales, tomando en cuenta que la capacidad productiva tiende a ser inelástica a corto plazo. Conceptualmente este ratio indica el conjunto de trabajadores que son requeridos para cubrir las necesidades de varios sectores de la economía, independientemente de que los individuos estén activamente buscando trabajo. Es decir detecta la demanda de trabajo que no debe ser confundida con los trabajadores desanimados o aquellos que voluntariamente dejan el trabajo.

La técnica utilizada fue comparar el desempleo, por los desempleados de larga duración en miles, por el ratio de utilización de capacidad (capacidad de cada uno de los 96 componentes materiales de producción industrial de la banca de la Reserva Federal) y los delitos de propiedad (agregación de robos, robo con allanamiento de morada, y sustracción de vehículos

conocidos por la policía). Los datos son mensuales desde 1982 hasta 1996 (180 casos). La tabla muestra la no evidencia de asociación divariada entre el desempleo convencional y el delito de propiedad, los coeficientes de correlación cruzada son pequeños e insignificantes. En contraste, los análisis divariados indican que las medidas alternativas tienen un sustancial impacto sobre los delitos de propiedad. No existe duda que el desempleo de larga duración tiene un impacto significativo sobre delitos de propiedad, el efecto es fuerte y positivo. El incremento mensual de personas desempleadas para 15 semanas o más está asociado con un incremento aproximadamente de 61 delitos contra la propiedad ($W0X1 = 61,38$, $t = 3.23$) y un incremento del 1% en el ratio de capacidad de utilización está asociado con un sustancial descenso del número de delitos, una unidad de subida supone la bajada de 6000 delitos contra la propiedad.

Utilizando la teoría de la elección racional se demuestra la importancia de usar los desempleados de larga duración frente a los temporalmente sin trabajo, los análisis muestran que el convencional desempleo exhibe ratios de efectos nulos. La técnica supone un enfoque altamente conservador en la determinación de la presencia o ausencia de relaciones causales. De hecho, el fallo para rechazar la hipótesis nula de relaciones causales entre dos series de tiempo es bastante común a pesar de otros métodos más tradicionales de técnicas econométricas multivariadas indiquen que tal asociación es fuerte. Esto es debido al procedimiento que hace un uso óptimo de las observaciones pasadas de una serie para predecir observaciones futuras. Si la tendencia, cambio o autocorrelación en una serie están relacionados al proceso en la otra, estos efectos múltiples habrán sido eliminados antes de la estimación de la función transferida. Sin embargo es erróneo suponer que los autores han solventado el caso de cómo medir mejor el desempleo en la teoría criminológica, lo que se ha hecho en todo caso es proponer y examinar indicadores alternativos de la demanda de trabajo como un preliminar intento de mejorar las prácticas de medidas.

12.5.10. El estudio de Greenberg³⁷⁰

Por medio de este artículo Greenberg hace una de las aportaciones más valiosas a la teoría que encadena desempleo y delincuencia. Según este autor, Cantor y Land arguyen en su trabajo que las investigaciones sobre delito y paro son débiles e inconsistentes porque han fallado en tomar en cuenta los dos posibles caminos por los que el paro podría influir en el delito. Aunque es esperado que los parados tengan una gran motivación para violar la ley, también emplean más tiempo en casa previniendo los robos y reduciendo las posibilidades de todo tipo de delito (efecto de oportunidad).

³⁷⁰ Greenberg D. (2001). Time series analysis of crime rates. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 17. N° 4. Págs. 291- 327.

Notan que las dos posibilidades necesariamente no son mutuamente exclusivas: el paro podría reducir las oportunidades para violar la ley y al mismo tiempo incrementar la motivación para hacerlo. Si ambos efectos son instantáneos el coeficiente representando el efecto neto del paro sobre el delito podría ser pequeño e insignificante incluso aunque ambos efectos fueran sustanciales. Sugieren que los efectos de oportunidad deberían ser instantáneos mientras que los efectos de motivación probablemente son retrasados. Ello es posible porque la mayor parte de los trabajadores tienen ahorros y beneficios del estado de bienestar para sostenerse durante un tiempo después de perder su empleo. El efecto motivacional está representado por un término que implica la diferencia entre el tiempo 1 y el 2 arguyendo que la gente compara sus estatus actual con el del pasado. El coeficiente motivacional debería ser negativo mientras que el de oportunidad positivo. Sin embargo, decir que la gente está cubierta puede que no sea cierto del todo, por ejemplo en los negros con ingresos de menos de 15 mil dólares en 1992, la riqueza media de su familia era cero e igual ocurría con los hispanos o con afroamericanos, por lo tanto muchos hacen frente a series dificultades financieras muy rápidamente después de perder su empleo.

En un artículo no publicado estos autores encontraron que los cambios en el paro estaban positivamente correlacionados con los cambios en los hurtos y robos con allanamiento de morada sólo 1 mes después. Los efectos retrasados de larga duración estaban ausentes y los de efectos negativos lo eran de dos meses. Estos resultados sugieren que los datos anuales de cambio pueden ser insuficientemente finos como para detectar los efectos motivacionales del paro y que el retraso de un año es demasiado largo para modelarlo. Por lo tanto si los efectos motivacionales ocurren muy rápidamente será imposible detectar los efectos de oportunidad de los efectos de motivación en un año. Los efectos del paro pueden ser contradictorios si los contemplamos con la perspectiva de un año. Un primer grupo pierde su trabajo en el fin del año t y permanece parado durante el siguiente año, miembros del segundo están empleados en el año t pero pierden su trabajo durante el año $t+1$, miembros del tercero llegan a estar desempleados en el comienzo del año t pero encuentra trabajo un año más tarde y lo mantienen.

Si el efecto motivacional fuese expresado por medio del ratio retrasado de 1 año, miembros de los tres grupos tendrían poca motivación para violar la ley en el año t porque estarían viviendo sobre sus ingresos hasta que perdieran sus trabajos (grupos 1 y 2) o sobre los ahorros o el estado de bienestar (grupo 3). Los grupos 1 y 2 tienen poca motivación para violar la ley en el año $t+1$, aunque los miembros del primero están parados todo el año, mientras los del 2 están trabajando parte del año, por otra parte los del 3 tendrían una gran motivación aunque hayan estado trabajando durante todo el año, porque estaban parados el año previo. Las implicaciones

parecen implausibles, un trabajo actual provee ingresos para afrontar las necesidades presentes, así como una posibilidad de ingresos futuros que el trabajador no desea perder. Alguien que está parado en la actualidad y que ha estado parao en los anteriores años podría tener necesidades financieras más grandes que alguien que ha estado empleado durante un largo tiempo antes de perder el empleo.

Todo esto se puede reflejar en la estimación de paro- delincuencia (P-D). La cuestión sería utilizar en la fórmula de regresión la duración del desempleo más que el cambio en el paro como una medida de motivación. La ecuación en la cual Land et al., basan sus premisas conduce al absurdo porque solo diferencian los ratios del delito y no sus predictores, ya que la tendencia que se elimina es lineal no hay efectos motivacionales, sin embargo, hay efectos de oportunidad así que los coeficientes son negativos. Su ecuación dice que un nivel constante de paro conduce a una firme (segura) descenso en el ratio de delito, lo que supone que no se corresponde con una noción razonable de cómo el paro debería afecta a los ratios de delitos. Pero este procedimiento solo funciona si la variable omitida tiene una tendencia constante pero no contribuye del todo a las fluctuaciones alrededor de la línea de tendencia. Para determinar empíricamente si la influencia de cambio en el paro es retrasada o contemporánea utiliza datos de correlación cruzada de USA de os años 1946-1996, encontrando que un incremento en el paro podría reducir el homicidio con un retraso de 2 años. Cuando agregamos el paro puede ocurrir que estemos mezclando los de corta y larga duración. Por eso utiliza el tiempo de paro en lugar del cambio en el paro como medida de motivación.

Cuestiones de cointegración indican que cuando una serie temporal no es estacionaria la teoría clásica se cae y es necesario utilizar procedimientos especiales, por lo tanto lo primero que los investigadores deberían detectar es si una serie es estacionaria. Existen fórmulas que permiten determinar si una serie es estacionaria o no, si es aleatoria hacia la derecha o hacia la izquierda. Los test utilizados indican que el paro es estacionario e igual ocurre con el delito ya que es impensable pensar que es un proceso aleatorio. Las tendencias de largo recorrido son más interesantes para la criminología que las de corto recorrido. La teoría de la cointegración está basada en el hecho de que aunque las series de x e y no son estacionarias, una combinación lineal de las dos series si lo puede ser. La series cointegradas tienden a moverse conjuntamente. Si un disturbio (alteración) conduce a un incremento de la distancia en corto recorrido, una fuerza equilibradora tenderá a juntarlas de nuevo. La relación entre las dos variables tiende a mantenerlas unidas a largo plazo. La inspección visual gráfica sugiere que homicidios y robos con fuerza están fuertemente cointegrados con el ratio de divorcios. Pero no parece que esta relación sea causal o directa o que la gente que se está divorciando tenga altos ratios de divorcios, más probable es que sea un indicador de tensión en una

institución social fundamental como es la familia nuclear que puede conducir a algunos individuos a matar estando o no divorciados. El incremento dramático del divorcio entre 1960 y 1980 podría explicar los homicidios y robos de aquellos años en gente que estaba pensionada, aunque no estuviera divorciada.

Después de usar el procedimiento de series temporales, la conclusión es que el divorcio está asociado a corto plazo con el homicidio y con el robo, aunque con el segundo no es significativo. Los signos negativos de los términos implicados en el paro retrasado y en la duración del paro son opuestos a la teoría de la motivación, la explicación podría ser por la solidaridad con los parados, o porque los parados gastan más tiempo en las calles evitando los delitos, o porque el consumo de alcohol se incrementa en tiempos de prosperidad y cae en épocas de paro y como se sabe es un inhibidor que conduce a beligerancias entre individuos, por lo tanto el paro podría reducir el delito por propiciar reducir el consumo de alcohol. Estos datos coincidirían con los de P-D, aunque están mejor expuestos al estar mejor medidos en una secuencia que refleje bien los tiempos. El posible problema reside en que los datos están condicionados sobre 50 observaciones.

Algunos autores han estudiado el delito entre los años 1948 y 1985, basando las diferencias de delitos para eliminar las tendencias, como variables independientes que utilizan cambio en el ratio de empleo masculino, ratio de inflación, el cambio en las creencias públicas, y cambio en el ratio de encarcelamiento y como todas las variables son de cambio el modelo asume que cambio produce cambio, también introducen una medida estática de oportunidad por lo que caen en las críticas expuestas anteriormente. Mientras que los demás autores utilizan el paradigma P-D para estudiar los efectos específicos de edad del paro sobre el delito, lo cual es interesante porque los recientes ratios de delito han sido altamente específicos de la edad, el incremento de los homicidios después de 1985 fueron debidos a jóvenes menores de 25 años, mientras que la caída reciente se ha achacado a la caída de estos grupos de edad. Toman medidas de delitos por ratios de arrestos y los regresan sobre el ratio de paro y sobre el cambio en el ratio del paro.

El modelo de Greenberg del delito por edad y el cambio histórico descansa sobre dos teorías criminológicas importantes: la tensión y el control. Plantea tres tipos de implicación o falta institucional: (1) el deseo en participar en actividades sociales con pares y la ausencia legítima de fuentes de fondos necesarios para financiar esa participación y esta tensión depende de la edad que son fuentes de autoestima que los mayores obtienen de otra manera) y como la estratificación por edad se ha incrementado en comparación con el pasado, la fuente de tensión será más importante en el presente; (2) la negación (rechazo) de autonomía y la exposición a la degradación de estatus infringida a los estudiantes en la escuela, la cual es

relevante para explicar el vandalismo, actos de violencia interpersonal, y robos irracionales que son destruidos o descartados; (3) la ansiedad de estatus masculino que intensifica el fin de la transición de adolescente a adulto, cuando los jóvenes encuentran que no pueden obtener trabajos o descubren que están malamente pagados y que ofrecen pocas perspectivas de mejorar. La implicación de los jóvenes en el delito dependerá entonces no solo de sus posibilidades de empleo actual sino también de la situación de sus mayores que son utilizadas como referencia.

La alta correlación que obtiene que se puede observar entre el ratio anual de paro y el ratio de paro para personas de 16 a 19 años es .98, pero no podemos estar seguros de que son las medidas relevantes de la diferencia por edad sino que podría ser que el grupo de 16 a 19 años se refiera al paro de los padres. Además no se tienen en cuenta otros factores como por ejemplo el que relaciona los resultados de la actividad académica con el delito, ya que se ha demostrado que los malos resultados en la escuela superior puede suponer que se busque un trabajo auxiliar o que se utilicen fuentes ilegales de ingresos, cuando los estudiantes de bachiller trabajan muchas horas sus resultados pueden sufrir o cuando las deficiencias en los resultados escolares empujan para buscar trabajo, es decir que las experiencias irritantes en la escuela conducen al delito, pero la información sobre variable subjetivas relevantes no se encuentra en datos nacionales agregados sino en datos longitudinales individuales.

La presunción de que no existe evidencia del impacto del paro se ha ido incrementando con el tiempo, descansa sobre la validez de la traducción de la formulación discursiva de las teorías de la motivación y de la oportunidad en ecuaciones de regresión, que como se ha dicho no son apropiadas para testar los argumentos teóricos o ideas que quieren testar. Además se supone que los efectos motivacionales del delito por segmentos de edad reflejan el paro en ese grupo de edad, lo cual es dudoso ya que para muchos tipos de delito el ratio de paro en un segmento de edad dado debería afectar las oportunidades de personas en todos los segmentos para cometer delitos. Los efectos del cruce de edades para cometer delitos deberían ser tomados en cuenta al ser construido el modelo. Al testar una teoría empíricamente es importante que las variables a operacionalizar representen razonablemente a las variables en la teoría. Es posible que los arrestos por edad no sea la misma que la distribución de delitos como sostienen algunos autores. Otro tema es que las prácticas locales de enjuiciamiento estén influidas por el nivel de desempleo de una comunidad, ya que la regresión de los ratios de arrestos sobre el paro podría medir cambios en las prácticas de enjuiciamiento, pero no cambios en motivación u oportunidad.

Las teorías de Greenberg no pueden ser medidas adecuadamente con las estadísticas del paro del Bureau of Labor Statistic ya que los respondientes solo se consideran parados si no tienen trabajo durante una semana particular del calendario. Individuos de bajos ingreso no son tomados en

cuenta o los jóvenes que trabajan a tiempo parcial, es decir no son los que la teoría especifica como que no tienen los ingresos adecuados para colmar sus expectativas subjetivas. Muchos delincuentes tenían malos empleos y complementaban sus ingresos con venta de drogas. Otras cuestiones que se plantean son los datos agregados ya que son buenos para comparar aspectos de una nación pero no lo son tanto para testar teorías sobre individuos, la teoría de la motivación es acerca de individuos y los de la oportunidad implican rasgos de una comunidad y cuando uno desea testar una teoría formulada para individuos es preferible obtener datos para ellos y no para agregados. Cuando los efectos contextuales son tomados en cuenta éstos suelen ser más pequeños que la nación, por ejemplo para la oportunidad es relevante el paro en su distrito geográfico y no en el nacional. Otra cuestión es la frecuencia y la repetición de los delitos y que los delitos son el producto de los violadores y del número de delitos que cometen. Otra cuestión es la relevancia del tiempo ya que no es viable una propuesta ahistórica del tiempo diciendo que a medida que se avanza aumentan los delitos sino decir que en determinadas épocas históricas puede ocurrir algo, por ejemplo que la exclusión de los jóvenes del mercado de trabajo es de mayor importancia ahora que en el pasado.

La conclusión de este autor es que se han definido numerosas dificultades en el intento de estudiar el impacto del paro sobre el delito cuando se utilizan datos agregados a nivel nacional. Las ecuaciones de regresión no representan adecuadamente las teorías. Mientras que las variables no están adecuadamente representadas por las medidas de paro de las estadísticas oficiales. Estas cuestiones afectan a cientos de estudios revisados. Pero los recientes avances en los análisis econométricos de series de tiempo no estacionarias sugieren que muchos análisis sociológicos de series temporales de ratios de delito sufren serias deficiencias. Los métodos que han usado fallan al revelar tendencias de largo recorrido o relevancia sobre modelos mal especificados y procedimientos de estimaciones inadecuados, la revolución de la cointegración provee una solución para estas dificultades. Otros problemas son la operacionalización de variables, la traducción de ideas en representaciones matemáticas, y las limitaciones de datos agregados con el propósito de testar teorías acerca de individuos.

12.5.11. El estudio de Arvanites y Defina ³⁷¹.

El artículo de estos autores reexamina las aportaciones seminales de Cantor y Land por medio de nuevos planteamientos, nuevas técnicas de investigación y nuevos datos que comprenden el periodo de 1986 a 2000. El desarrollo de un nuevo y más apropiado método para capturar la actividad

³⁷¹ Arvanites T. and Defina R. (2006). Business cycles and street crime, *Criminology*. Vol. 44 N° 1. Págs. 139-164.

económica cíclica superando los datos procedentes del desempleo ya que aunque sus ratios correlacionan con varias condiciones económicas fallan en reflejar importantes fenómenos tales como cambios en las horas de trabajo, salarios, y movilidad y seguridad económica, que son críticos en la teoría; la variable que se usa, ciclos de negocios del producto interior bruto per cápita, se considera un índice de actividad que refleja más fidedignamente el tipo de proceso social que la teoría sugiere. Usar el ratio de desempleo como representante de las condiciones económicas es intuitivo porque el ratio tiende a correlacionar negativamente con la actividad económica, su relación con la economía agregada es de lejos perfecta; además están las críticas de autores que sostienen que el ratio de desempleo oficial infravalora el nivel real de desempleo porque excluye a aquellos que están buscando trabajo y quienes se han desanimado por completo al considerar que nunca lo encontrarán, además representa solo una porción de aquellos trabajadores que prueban varios caminos en una economía desplomada.

Por otra parte, los cambios en una actividad económica en general abarcan numerosos ajustes, tales como cambios en la productividad de los trabajadores, horas trabajadas, niveles salariales, y niveles de gasto. Todos estos factores afectan el grado de tensión social, control social y vulnerabilidad y disposición de motivos delincuentes que conforman el propósito de la teoría. Además estos ajustes pueden ocurrir en tiempos diferentes a los cambios de las fluctuaciones del desempleo. Como una alternativa se usó una medida directa y comprensiva de la actividad económica agregada del nivel de estado como es el producto interior bruto del Estado porque mide la producción total y los ingresos generados dentro de las fronteras de un Estado en un año. No obstante, para ajustarse a la teoría este dato se ajustó al componente cíclico y al ratio per cápita para poder comparar entre Estados con mayor acuracidad. Los datos proceden del Bureau of Economic Analysis para el período de 1986 a 2001. Por consistencia con el dato de renta real del producto interior bruto per cápita, se encajaron tendencias determinísticas lineales al logaritmo natural de cada una de siete ratios de delitos por Estado y a las dos categorías amplias de delitos de propiedad y violentos por Estado. Los residuos de estas regresiones representan el cambio transitorio en ratios de delincuencia.

Metodológicamente se utilizaron datos de panel de muestras representativas a nivel de estados frente a las series temporales o muestras representativas de la mayoría de los estudios que consideran que fallan al estimar variaciones locales en las variables de interés. Esto permite incrementar el tamaño de la muestra y utilizar mayores controles estadísticos, es decir, estimaciones más precisas de precisión económica sobre ratios de delitos. En definitivas, los datos de panel permiten estimaciones que explotan variaciones temporales y espaciales en las variables de interés. En este sentido se siguen las recomendaciones que piden mediciones más pequeñas de análisis y el uso de datos de panel. Se

considera una innovación porque ningún estudio anterior había utilizado esta técnica.

Para medir los ratios de delincuencia, los autores, explicaron que su teoría concernía a cambios transitorios en ratios de delitos más que en tendencias seculares. Los delitos de propiedad incluyeron robos, hurtos, robos de coches; los delitos violentos cubren asesinatos, abusos sexuales, atracos y asaltos o agresiones procedentes del Uniform Crime Reports para 1986-2001. Adicionalmente a las variables ficticias de Estado y tiempo se añadieron los logaritmos naturales de tres tipos de variables de control: el porcentaje de población de 17 a 24 años; el porcentaje de población que no es blanca; y el ratio de años en prisión, dado que son variables que han demostrado una cierta utilidad tanto teórica como práctica en los efectos de la actividad delictiva y además han sido utilizadas en investigaciones anteriores para testar el modelo de Cantor y Land, aunque se comenta que existen otras variables de interés como los 100.000 nuevos policías en las calles, el uso de la pena de muerte capital –aunque Levitt sostuviera que el número de ejecuciones por 1.000 no afectaba a la delincuencia violencia o de propiedad-, o nuevas leyes de armas. El periodo temporal estudiado comprendió el importante descenso en los delitos durante la década de los noventa, dado que entre 1991 y 2003 el índice de delitos total cayó de 5.897,8 por 100.000 habitantes a 4.063,4.

Los resultados obtenidos indicaron un fuerte apoyo para el efecto de la motivación. La variable de cambio cíclico retrasado fue estadísticamente significativa tanto en la delincuencia en general como en cada uno de los apartados individuales de delincuencia. Todos fueron significativos en el nivel del uno por ciento, excepto el robo de coches que lo fue en el 5 por ciento. Sin embargo, las estimaciones no revelaron efectos de oportunidad. En definitiva, la mejora de la economía tuvo un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre todas las categorías de delincuencia, la mejora de la economía de la década de los noventa ayudó a reducir la delincuencia.

12.6. La relación entre delincuencia y empleo en España:

A la hora de abordar la relación entre delincuencia y desempleo, la cual como hemos visto, ha mantenido la atención de numerosos estudiosos en los últimos años, debemos tener en cuenta que muchos autores consideran que es como analizar la relación entre delincuencia y clases sociales o estatus socioeconómico. En España esta relación no ha sido suficientemente escrutada, a pesar de algunos estudios aislados. Torrente³⁷² por ejemplo, sostiene que “La curva del paro refleja bien los ciclos económicos vividos.

³⁷² Torrente D. (2009). Cicles economics I seguretat. Informe 2009 de l'Obsevatori. Institut d'Estudis de la Seguretat. Barcelona. Ciclos económicos y seguridad ciudadana. Ponencia presentada al X Congreso Nacional de Sociología.

La delincuencia experimenta entre 1973 y 1986 una rápida y fuerte tendencia ascendente. A partir de 1987, los delitos registrados tienden a estabilizarse e incluso bajar. En cambio, las faltas crecen de forma importante y sostenida hasta el año 2003. El paro (y también las desigualdades) correlaciona con la delincuencia entre 1975 y 1983. A partir del año 1985 empieza a mejorar el mercado laboral en un momento de fuerte crecimiento de la pequeña delincuencia. A partir de 1996 empieza una década de boom económico, se acelera el crecimiento del PIB per cápita, y empieza a bajar el paro”.

Rodríguez³⁷³, sin embargo, no encuentra una relación nítida entre delincuencia y desempleo: “Las estimaciones del modelo de efectos fijos por variables instrumentales muestran que las variables demográficas parecen tener un mayor impacto que las variables socioeconómicas para explicar variaciones en los niveles de delincuencia. Así mismo, la relación negativa entre la tasa de delitos esclarecidos y los niveles de delincuencia resultó no significativa. Los resultados también demuestran la importancia de otras variables como la educación, la renta, la proporción de hombres jóvenes entre 16 y 24 años y la inmigración a la hora de explicar las variaciones en los niveles de delincuencia. Aunque en el caso de la inmigración, los resultados deben ser tomados con ciertas reservas debido a la limitación de no poder contar con la información sobre la inmigración ilegal y no poder tampoco distinguir si el efecto es debido a características individuales de los inmigrantes”.

El problema en este tipo de investigación radica en que a pesar de que parece que es obvio que debe existir una relación, sobre todo entre desempleo y delitos contra el orden socioeconómico y la propiedad, falta ajustar cuándo se producen los efectos verdaderos del desempleo, ya que las estadísticas laborales no reflejan con suficiente claridad la situación económica de los desempleados, por ejemplo cuando se pueden acoger a algún tipo de prestación por desempleo, de salario social, de rentas mínimas o incluso de ayudas familiares. Lo correcto como se sostiene desde la teoría de la oportunidad es contemplar los efectos del desempleo con varios años de retardo. Otra cuestión espinosa en este tipo de relación es llegar a conocer los ratios verdaderos de desempleo, ya que existe, según se reconoce en fuentes oficiales una importante bolsa de fraude. Tampoco está suficientemente claro que el ratio de desempleo sea el auténtico ya que existe una población que simplemente abandona la búsqueda de empleo y dejar de ser población activa. Por no mencionar todo lo relacionado con las bolsas de trabajo irregular conocidas como empleo sumergido o negro o los trabajos con ingresos insuficientes. En definitiva, es bastante complicado conocer con exactitud todas las variables que interaccionan en el mercado

³⁷³ Rodríguez (2003). Los Determinantes socio-económicos del delito en España. Revista Española de Investigación Criminológica. REIC AC 01-03 <http://www.criminologia.net/revista>

laboral, cuando una personas sufre exactamente los rigores del desempleo, o en qué medida y o con qué intensidad. A pesar de ello en una situación difícil de crisis económica aguda, como se reconoce desde la Fiscalía General del Estado, se puede observar un crecimiento considerable de estafas a las compañías de seguros.

La asociación de la clase social denominada infraclase o “pobre de solemnidad”, caracterizada por la exposición prolongada al desempleo, por la dependencia de los subsidios del estado de bienestar y, por la falta de apoyos sociales, parece que está suficientemente aceptada en los estudios sobre esta materia. En este contexto, cobra una especial relevancia el concepto de infraclasses, ya que, como sostiene Tezanos³⁷⁴: “se trata de un grupo específico, probablemente ni tan siquiera una clase social, que presenta un grado apreciable de heterogeneidad, lo que, unido a su carácter periférico en la producción, hace que se encuentre disperso y sin posibilidades de conjuntar manifestaciones externas de malestar, por lo que sus reivindicaciones suelen encauzarse en forma de motines en las cárceles, ocupaciones, algaradas juveniles, protestas intermitentes, explosiones de conflictos étnicos y raciales, violencia urbana y movimientos antisistema con pretensiones políticas limitadas o difusas”. Otro grupo laboral al que se le presume una clara relación entre empleo y delincuencia, tanto a nivel teórico como empírico, es el de desempleados de larga duración, los cuales al haber gastado todo tipo de subsidios, ahorros, planes de pensión, etc., dependen de rentas de subsidios mínimos y de ayudas familiares sonrojantes, lo que provoca una gran frustración, una falta de autocontrol, una desconexión con las reglas de juego establecidas institucionalmente, una falta de recursos mínimos. En definitiva, una clara motivación por su disonancia de las reglas sociales y de los controles de todo tipo, es decir, camino abonado a la delincuencia.

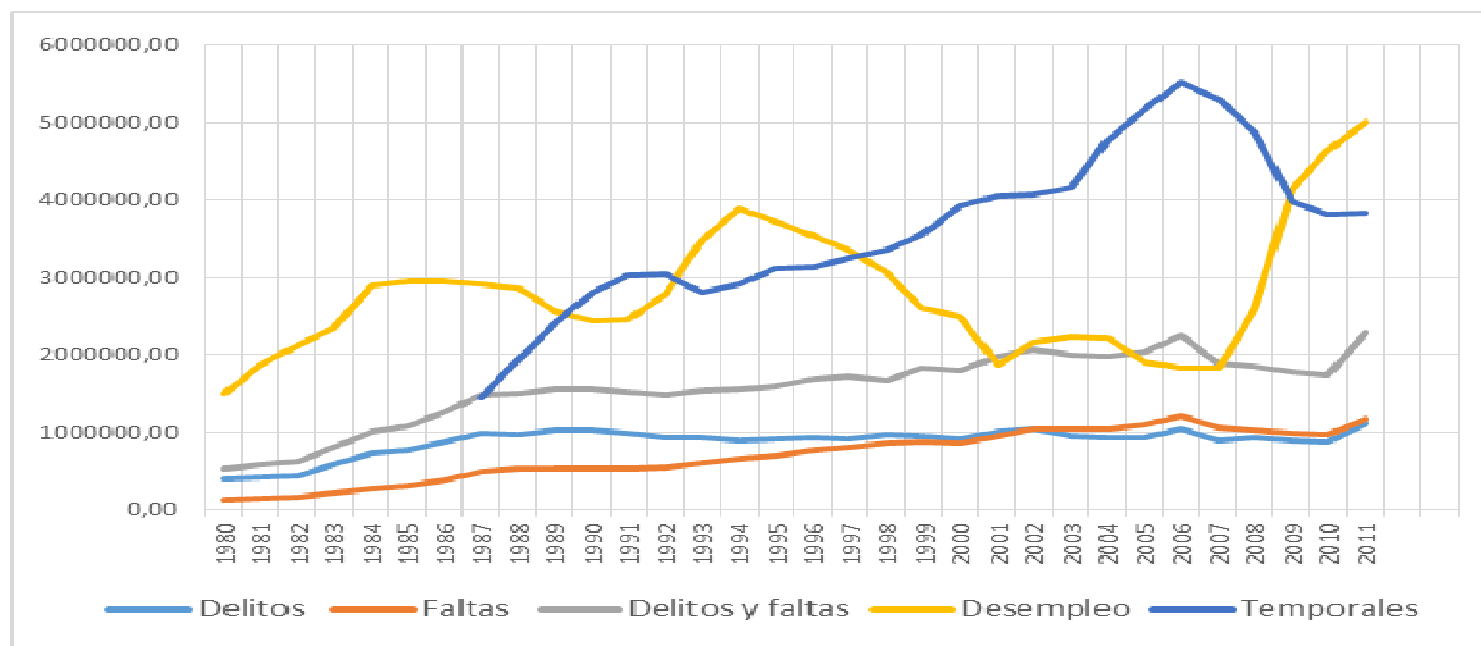
En España, la relación entre delincuencia y desempleo se puede comprobar a través de las series temporales de ambas variables desde 1980 (año en que se estima que los datos sobre delincuencia presentan una cierta fiabilidad) hasta 2012, siendo un recurso que ha sido utilizado con relativa frecuencia en la literatura sobre esta correspondencia. Las estadísticas sobre delincuencia ya han sido suficientemente explicadas, Como indicador del desempleo se utiliza la Encuesta de Población Activa (EPA), una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias y realizada por el Instituto Nacional de Estadística desde 1964, con una modificación de definición operativa llevada a cabo en 2002 para adaptarse a la normativa europea, en donde se utiliza la definición genérica de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo, considerándose como paradas a las personas de 16 o más años que están sin trabajo, que son disponibles para trabajar y que buscan activamente empleo. Se ha escogido

³⁷⁴ Tezanos, J.F. (2001), *La sociedad dividida*, Madrid, Biblioteca Nueva. Pág. 234.

como referente lo datos publicados por años naturales, en lugar de los procedente de los trimestres y se han acoplado los datos modificados aplicando la nueva normativa con lo que no existe un antes y un después de dicha normativa, sino que las cifras están armonizadas. Existe un cierto desfase de 2 años entre una y otra estadística, toda vez que las de delincuencia empiezan a los dieciocho años.

En el primer gráfico utilizamos como indicadores de la delincuencia, las series temporales de delitos, de faltas, y de delitos y faltas en conjunto. Mientras que como medidas de desempleo utilizamos el indicador de la tasa de desempleo y de trabajos temporales, lo cual supone 31 relaciones anuales parciales. Una inspección visual del gráfico de abajo muestra que no existe relación entre las variables referidas a la delincuencia y el ratio de desempleados. Tampoco existe una divergencia clara entre ambas variables. Ni existe un desfase retrogrado como sostiene las tesis de la oportunidad. Sin embargo, se puede apreciar una cierta relación entre trabajadores temporales y delitos y faltas, con un punto de coincidencia nítido en el año 2006 de las series temporales lo que podría apoyar la vigencia de la tesis de la “motivación”, la cual se vería reforzada por la hipótesis de la contemporaneidad en la cual se sustenta la teoría. La curva del desempleo no parece que guarde ninguna relación con el resto de las variables examinadas.

Gráfico 38. Evolución de la delincuencia y el desempleo.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. Anuarios estadísticos (varios años) e Instituto Nacional de Estadística. EPA (varios años).

No obstante, los gráficos también podría apuntar hacia una cierta divergencia de relación entre desempleo y delincuencia, que como en otros estudios acaba siendo débil e inconsistente. La amplia literatura que expresa problemas en esa relación menciona las dificultades de los datos agregados de delincuencia por no diferenciar entre grupos de edad y de género; por no tomar en cuenta los problemas asociados con las técnicas de correlación entre series temporales dadas las dificultades de esta técnica con los procesos estacionarios; por no incluir variables intermedias como el número de divorcios, la temporalidad en el empleo, la educación, la separación entre áreas urbanas y rurales, la influencia de población inmigrante o el grado de cobertura del estado de bienestar; o por no conjuntar el desempleo de jóvenes de 15 a 24 años sin título, las tasas de nupcialidad y la evolución de los precios. En el caso español, los efectos del estado de bienestar sobre el desempleo han sido importantes, suponiendo la mayor partida presupuestaria después de la de “vejez” y “enfermedad”, alcanzando el mayor gasto en el año 1994 y bajando desde entonces en armonía con la bajada del nivel de desempleo. Comparativamente, en el año 2000 suponía el 13 % del gasto total de protección social, frente a la media comunitaria que entonces estaba en el 7%, producto de las mayores tasas de paro existentes en nuestro país³⁷⁵.

Como consecuencia de la importancia que ha alcanzado el desempleo en nuestro país, el mercado laboral se ha reformado en varias ocasiones, la inclusión de los contratos temporales en 1984, ha sido de vital importancia porque supuso que por ejemplo, en 1990 llegaron a representar el 30% de todos los contratos laborales, lo cual es un dato muy importante y a tener muy en cuenta para contextualizar la reducción del desempleo que se produce en los últimos años. La alta temporalidad de los jóvenes en sus empleos ha provocado una llamada de atención de organismo supranacional como la OCDE, y un continuo motivo de queja por parte de los sindicatos y asociaciones juveniles, que resaltaban como la tasa española duplicaba a la europea. Todo ello ha provocado una situación de desasosiego en los jóvenes españoles (hasta 30 años) que con altas tasas de paro, con alta precariedad en el empleo, con problemas en el acceso a la vivienda, con dificultades en la emancipación y con el incremento en el consumo de drogas, podrían haber optado por su incursión en la delincuencia³⁷⁶.

Partiendo de la base de que en el estado actual de conocimiento es muy difícil dar por válidas las cifras de delincuencia y saber si la delincuencia real en España ha aumentado o disminuido y en qué medida –ausencia de

³⁷⁵ Hernández T. Díaz J. and Caparrós N. (2015). Labour market flexibility relations and social cohesion in Spain 1980-2009. *Sociology Mind*. 1-28.

³⁷⁶ Díaz J. y Hernández T. (2015). Mercado de trabajo y políticas de cohesión. *Sistema*. 31-45.

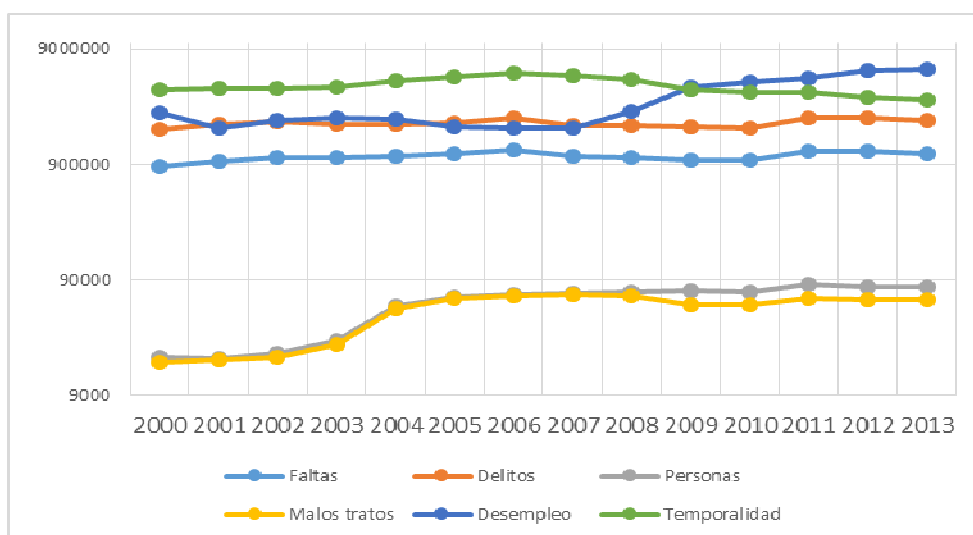
encuestas de victimización y auto informes-, el análisis de los datos de la delincuencia oficial en su versión longitudinal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como, aunque en menor medida, los de la Judicatura ofrecen sustanciosas dudas, y hace difícil extender una conclusión fiable en este tema tan importante. La cuantificación de la delincuencia, se podría haber visto afectada en su evolución por las importantes reestructuraciones llevadas a cabo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, producto del surgimiento de las policías autonómicas y locales; de los importantes cambios legislativos que han deparado en la modificación de 186 artículos del código penal vigente en la actualidad; de nuevas leyes de vital importancia en temas como los de la violencia de género, del tráfico y seguridad vial, o de la inmigración; de manipulación política y de ausencia de inversiones públicas en recursos humanos y materiales en las instituciones relacionadas con ella.

E igual se podría decir, de la influencia de los cambios que se han producido en la sociedad española que en pocos años se ha visto sacudida por un aumento en el nivel de vida y por una bajada brusca, por una pirámide de población avejentada, por el desborde de una inmigración masiva legal/ilegal sin haber consolidado unas estructuras firmes de empleo, por la llegada de redes mafiosas procedentes de los países del Este de Sudamérica y de Asia, generando un importante mercado ilegal de drogas; por la violencia de género que presiona sobre unas tradiciones machistas fuertemente arraigadas y reforzadas por la cultura imperante en la inmigración. Todas estas variables, sin duda, han presionado conjuntamente para que los datos de la delincuencia sean éstos y no otros. Una evolución en donde el número de delitos han bajado en los últimos años y en donde el número de faltas ha ascendido.

En todo este contexto cobra relevancia la importancia de las variables macroestructurales asociadas a la delincuencia. Es posible que en la tradición sociológica, la variable que más interés ha despertado ha sido la de las clases sociales estatus socioeconómico medidos por el desempleo o fuente de obtención de ingresos y desencadenante de la posición social, porque es lógico pensar que ante la falta de medios económicos para subsistir no queda otro remedio que apropiarse de lo ajeno, o por la constatación a nivel internacional de que aquellos países en donde existe mayor ratio de paro existe mayor delincuencia, o porque a nivel comparativo aquellas ciudades con altos ratios de desempleos presentan mayores índices de delincuencia o incluso dentro de las propias ciudades los distritos más peligrosos son los que cuentan con mayor tasa de desempleados. Sin embargo, en la última década, dentro de la tradición que vincula desempleo con delito, ha surgido una nueva teoría que sostiene que la relación entre ambas no es positiva: a mayor desempleo mayor delincuencia, sino negativa: a mayor desempleo menor delincuencia, es la teoría que se conoce como de la “oportunidad”.

Sin embargo, el examen no debe quedar ahí, toda vez que muchos autores han detectado una correlación específica entre desempleo y alguna categoría de delincuencia. Si efectuamos un análisis sectorial basándonos en series temporales de 2000 a 2013, tramo en el cual los datos sectoriales de delincuencia son más fiables y utilizamos las categorías delictivas de faltas, delitos, lesiones a personas, malos tratos, manteniendo las variables de desempleo y temporalidad, los resultados del gráfico de abajo refuerzan los datos obtenidos anteriormente, una ausencia de correlación positiva de tendencias ya que por ejemplo la subida del desempleo no sigue la misma trayectoria que los delitos examinados e igual cabe decir de la temporalidad en su relación con los delitos expuestos.

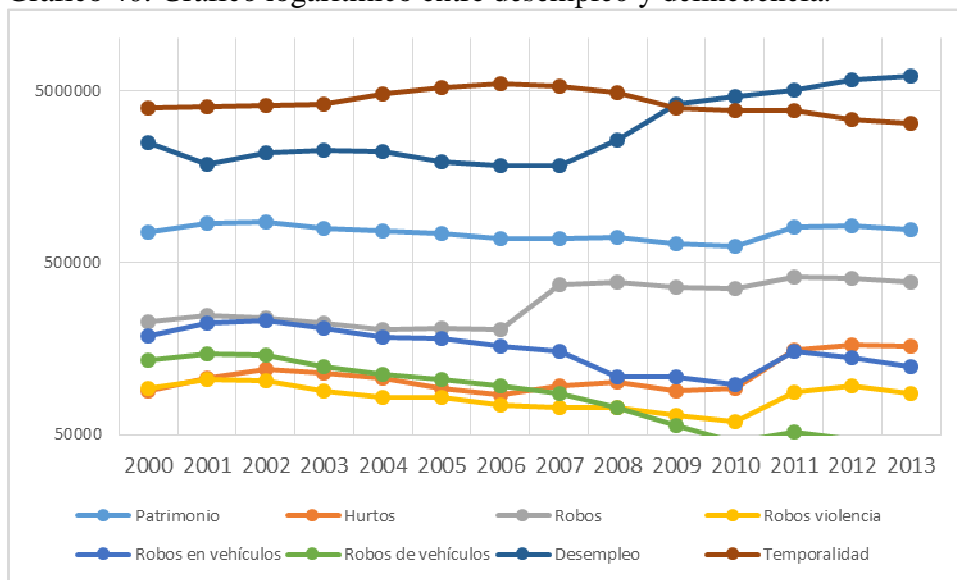
Gráfico 39. Gráfico logarítmico entre desempleo y delincuencia.



Si analizamos la relación entre desempleo, temporalidad y los delitos relativos al orden socioeconómico: patrimonio, hurtos, robos, robos con violencia, robos en vehículos, robos de vehículos; los robos y los robos en

vehículos parecen seguir una tendencia inversa al desempleo, lo cual apoyaría la tesis de la oportunidad.

Gráfico 40. Gráfico logarítmico entre desempleo y delincuencia.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de anuarios del Ministerio del Interior. Anuarios .

CONCLUSIONES:

La delincuencia es principalmente un hecho construido socialmente en base a la cultural, es un estado moral de la nación, que pretende por encima de todo mantener el orden en la sociedad para asegurar un funcionamiento correcto eliminando tensiones entre sus miembros. La delincuencia representa una desviación de las normas que no es tolerada y que está censurada por una serie de mecanismos. Se puede definir como la Constitución negativa porque determina a través del castigo o la sanción lo que está prohibido. Es un conjunto de normas y valores especificados en el Código Penal. No es estática sino dinámica y cambia continuamente con el tiempo. Es la sociedad civil y la clase política la que determina en todo momento lo que está bien y lo que está mal. Su acción se corresponde con la opinión pública. Es universal y ahistórica porque existe en todas las sociedades humanas desde el principio de los tiempos.

Desde el ángulo sociológico las principales teorías al uso se han especializado en documentar algún ámbito de la delincuencia. La teoría de la anomia es la que mejor explica la delincuencia económica; la teoría de Cuello Blanco (White Collar) es la que mejor explica los delitos contra la administración pública; la teoría del control es la que mejor explica la delincuencia en su conjunto; la teoría de la Escuela de Chicago es la que mejor explica la existencia en todas las ciudades del mundo de unos barrios con más delincuencia que otros; la teoría de las ventanas rotas es la que da cuenta del peligro de no tomar en cuenta los pequeños delitos que inducen a otros delitos; la teoría de la oportunidad explica los delitos contra la propiedad. La mayor parte de las teorías se podría decir que son generalistas.

En los últimos años la gestión de la delincuencia ha despertado un gran interés a nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados porque es una variable que la población toma en consideración a la hora de calibrar el ejercicio de gobierno por parte de sus dirigentes. Los estudios comparativos a nivel internacional se han multiplicado, empezando por los desarrollados por la ONU en base a una comparativa de los delitos registrados por la policía. Los llevados a cabo por parte de la Unión Europea por medio de la oficina estadística Eurostat, comparando cuatro categorías registradas por las policías que componen su espacio. Las del Consejo de Europa basada en encuestas de victimización. Y las de la OCDE sobre estadísticas de sus miembros. A ellas hay que unir las desarrolladas en el interior de los países, en donde destacan Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y Gales, Italia y España.

La evolución de la delincuencia en España se puede explicar a través de los efectos que han tenido determinadas leyes y modificaciones del código penal español. El punto de partida es el Código Penal de 1995, coincidente con la etapa democrática. A partir de él, se han llevado cabo numerosas reformas sectoriales. Entre las reformas más importante destacan la Ley orgánica 5/2010 de 22 de junio, en la que se modificaron aspectos como el soborno entre particulares, los abusos a menores, la venta de material audiovisual ilegal, los hurtos reiterados, el acoso laboral, la libertad sexual, la tutela penal de la intimidad y los secretos, falsificación de balances y cuentas, delitos financieros, y delitos informáticos. Otra reforma de calado ha sido la de 2015, cuyos efectos se escapan a la panorámica de esta tesis.

Para medir la evolución de la delincuencia hemos escogido las estadísticas y los informes procedentes de la judicatura, de la fiscalía y de la policía. Las más importantes para nuestra misión son las de la policía. Por diversos motivos son las que tienen mayor reconocimiento a nivel internacional. Aunque por sí solas no tienen mucho recorrido en base a los numerosos problemas que surgen en su manipulación, por eso muchos países, empezando por Estados Unidos, han incluido las encuestas de victimización. En España no existe una gran tradición en dichas encuestas como lo demuestra el hecho de que no haya en la actualidad ningún proyecto para su implementación a nivel nacional. Incluso en los estudios internacionales en los que se ha pedido su colaboración no se ha respondido en algunas ocasiones. Cataluña ha implantado este tipo de encuestas para complementar y comprender mejor la delincuencia. E igual cabe decir de los auto informes, los cuales brillan por su ausencia.

Las estadísticas policiales presentan grandes desafíos que han sido documentados extensamente en países como Francia e Inglaterra y País de Gales. Estos empiezan por el conocimiento del delito, el cual se produce por las denuncias ciudadanas a la policía o a la fiscalía o por la acción de la policía cuando patrulla por las calles o cuando persigue determinadas acciones delictiva, sigue con la determinación de si es un delito o una falta y de si se inicia un procedimiento penal que supone un traslado a la fiscalía o simplemente se archiva, sigue con clasificación de los delitos en un estadillo que debe adaptarse lógicamente al código penal, a continuación se comunica a una oficina central de coordinación tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, posteriormente se recopilan los datos de las policías autonómicas que han surgido a lo largo de los años y acaban cuando se registran y se presentan a la opinión pública. La complejidad del tema radica en que un delito puede ser cometido por una o varias personas, dentro de un mismo delito puede haber varias infracciones, la policía puede tener

discrepancias a la hora de clasificar correctamente el delito, o puede clasificarlo mal por la gran variedad de ramificaciones que existen.

En España existe muy poca información sobre todos estos problemas en comparación con otros países. No existen publicaciones oficiales ni estudios sobre estos temas, como tampoco existen auditorías sobre cómo se emplean los recursos. En el ideario colectivo figura Roldán, un director de policía que sustrajo grandes cantidades de dinero procedentes de la construcción de cuarteles. O el destino sin control de los “fondos reservados” que sirvieron para la denominada guerra sucia contra el terrorismo, pero que no se sabe bien donde acabaron. Además es notoria la opacidad del Ministerio del Interior durante muchos años, en temas como la divulgación de estadísticas.

Las estadísticas policiales en España han sido denunciadas por los criminólogos españoles especialmente a partir del año 2007, siendo Ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, cuando de repente dejaron de publicarse en el formato habitual. Algunos medios de comunicación denunciaron la posible manipulación de las cifras de la delincuencia que siempre bajaban. Afortunadamente y a raíz de que el Congreso empezó a interesarse por el tema se han recuperado, estando disponibles en la página web del Ministerio del Interior con las facilidades que no existían antes. Se ha ganado en transparencia y claridad, aunque aún quede mucho terreno por mejorar si comparamos la situación con los países estudiados.

Una complicación añadida que dificulta el estudio de las estadísticas a nivel longitudinal ha sido la irrupción de las policías autonómicas que han ido aumentando sus efectivos a lo largo de los años en detrimento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La Ertzaina (País Vasco), los Mossos de Escuadra (Cataluña) y la Policía Foral (Navarra). Además en muchos ayuntamientos han irrumpido las policías municipales que se han hecho cargo principalmente de delitos menores.

Solamente en el año 2013 se han empezado a publicar los datos de la delincuencia incluyendo a los facilitados por las comunidades autónomas y por primera vez los cuerpos de policía local (71 cuerpos). La tasa de criminalidad más alta corresponde a Ceuta (69,5), a Baleares (66,4) y a Madrid (58,4); mientras que la más baja se da en Extremadura (26,6).

La tasa de delincuencia general en España medida por delitos por 1000 habitantes, es una de las más bajas en la Europa de los quince, ya que en el año de 2010, con un 46,1 está muy por debajo de países como Suecia (146,7), Bélgica (96,9), y Dinamarca (85,1). Aunque este dato hay que contextualizarlo en las diferentes maneras que tienen los estados de contabilizar la delincuencia. Esta cifra que se resalta en el “Balance de la Criminalidad

en España” del Ministerio del Interior, debería ser explicado y no publicitado sin más, por la confusión que puede originar.

La tasa de homicidios en España medida por delitos por 100.000 habitantes (0,6) es la más baja de la Europa de los Quince. Muy alejada de las tasa de países como Finlandia (2,1), Bélgica (1,7) y Luxemburgo (1,6). De nuevo este dato hay que manejarlo con precaución a pesar de proceder de la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT). De todas las infracciones penales que se dan en España, el 63,8 por ciento corresponde a los hurtos (786.619), a los robos con fuerza (414.937) y a los daños (254.357). Estas cifras dan una idea bastante aproximada de lo que representa la delincuencia en España.

Abordar la evolución de la delincuencia en España es una empresa intelectual muy complicada porque se puede decir que no existe la delincuencia como tal sino que existen las delincuencias. Es decir, las diferentes categorías que engloban lo que se conoce con esta etiqueta varían desde los homicidios hasta los hurtos. Cada categoría es muy diferente a las demás y debería ser estudiada de manera separada. Un país como Francia ha eliminado el concepto de la cifra total de la delincuencia por considerar que no se pueden juntar delitos tan graves como los homicidas con otros tan laxos como los hurtos.

Los datos de la delincuencia proporcionados por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proceden de sus anuarios. El más antiguo data de 1991, pero junto con el 1992 son inservibles porque solo dan información sobre sus gabinetes. A partir de 1993 se empiezan a publicar estadísticas. El año más antiguo del que se puede tener noticias es el de 1972 publicado en el anuario de 1997 y repetido en el año 1998. Esta secuencia histórica no se volvió a repetir, ya que en el resto de los anuarios el año al que se recurre como más válido es el de 1980. En el año 2007 se rompe la estadística, que se volverá a retomar en el año 2011 bajo la petición del Senado.

En España existe una peculiaridad importante y es la diferenciación entre delitos y faltas que remite a la importancia de la infracción. La diferencia entre ambas es notoria, mientras que en el año 2013 se produjeron 1.056.445 delitos que supusieron la detención de 374.807 personas, en el mismo año 2013, se produjeron 1.115.688 faltas pero solo se detuvieron a 83.280 personas. E igual ocurre con las penas que llevan aparejadas unos u otras.

La evolución de los delitos en su conjunto, si tomamos como base de partida el año 1972 o el año 1980, ha supuesto la subida desde los 154.170 delitos de 1982 o los 408.947 de 1980 hasta los 1.115.688 del año 2013. Existe un incremento importante coincidiendo con los años ochenta con un cenit en el

año 1989. La evolución de las faltas desde 1980 hasta 2006 es ascendente y rectilínea con una ligera caída en el año 2000. Si medimos los delitos desde el año 2007, momento de corte propiciado por el Ministerio del Interior, entonces se puede apreciar una subida muy alta entre el año 2010 y 2011 y un descenso en los años siguientes. Mientras que las faltas tienen una subida muy importante entre los años 2010 y 2011 y luego una bajada en los años siguientes.

Con respecto a los delitos cometidos contra las personas, destaca una subida que se duplica solamente en un año, motivada por una elevada concienciación de denuncia de la violencia de género propiciada por las importantes modificaciones legislativas llevadas a cabo durante 2004 recogidas en la Ley sobre Medidas Integrales sobre la Violencia de Género” I/2004, que supusieron nuevos tipos delictivos y la modificación de alguno de los ya existentes (muchas de las infracciones consideradas hasta entonces como faltas pasaron a tipificarse como delitos).

Con respecto a los delitos cometidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, es significativo el aumento que produce en el año 2011, motivado principalmente por los hurtos que subieron de 92 mil a 135 mil, continuando con la subida en los años 2012 y 2013. Destaca también la subida de los robos con fuerza en las cosas, con un incremento abrupto en el año 2007, y la elevación de los robos con violencia e intimidación con una fuerte subida en el año 2011. Sin embargo, los robos relacionados con los vehículos han descendido de manera progresiva y muy significativa desde 1998. Estos datos hay que contextualizarlos en una época de crisis económica y con el ascenso de las grandes superficies que facilitan más el hurto.

Con respecto a los delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual destaca el ascenso del setenta por ciento que se produce en el año 2011, en donde tanto los malos tratos en el ámbito familiar con un aumento del 75 por ciento como los otros contra la libertad con un incremento del 67 por ciento contribuyeron significativamente. En este apartado es de destacar la prostitución –trata de blancas- y el abuso de menores. Y empieza a ser significativos los abusos íntimos en el interior de las parejas.

Los delitos contra la seguridad colectiva contienen a dos de los delitos que se podrían considerar como “delitos de los delitos” por su larga trayectoria y por los estragos que causan en la sociedad: las drogas y los de circulación. Centran gran parte de la acción de la policía, de los fiscales y de los jueces. En base a ellos existen gabinetes especializados y suponen un gran dispendio en recursos materiales y en vidas humanas. Están estrechamente interrelacionados, ya que gran parte de los accidentes de circulación se

deben al consumo de drogas. Los accidentes por causa de la circulación se consideran una gran epidemia.

Hay que destacar la importancia de la Ley 5/1997 de reforma de la *ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial* que establece la consideración de infracciones muy graves la conducción bajo la ingestión de bebidas alcohólicas o bajo los efectos de estupefacientes. En un estudio sobre el impacto de la droga en la justicia española llevado a cabo por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología sobre las sentencias penales de 1999, se señala cómo del conjunto de sentencias penales vistas por los tribunales españoles, más de una de cada tres tenían vinculación con las drogas, entendiendo por vinculación cualquier tipo de delito que sea inducido por el consumo e intoxicación de la droga como conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras drogas, delinquir con el objeto de obtener drogas, contra la salud pública en que la droga es el objeto material o cuando el inculcado es adicto o ha consumido drogas o cuando la droga aparece como determinante causal o coadyugante de la ejecución. En las audiencias provinciales casi un 40 por ciento tenían relación con las drogas, especialmente con el alcohol y el delito predominante era contra la seguridad del tráfico.

Los delitos de falsedades presentaron un punto de inflexión al alza en el año 2012, con una subida del 69 por ciento. Los delitos contra la administración pública presentaron también una subida fuerte en el año 2004, ya que casi se duplicaron, pero a partir de entonces iniciaron una bajada hasta colocarse en el año 2012 en el punto más bajo de toda su historia. Este tipo de delitos son relativamente pequeños, pero con una gran resonancia pública: fraude a la Seguridad Social, Púnica, Eres Andalucía, Gürtel, Gescartera. Los delitos contra la administración de justicia han subido interrumpidamente desde el año 2003, pero de manera progresiva sin grandes saltos. Y parecido al anterior son los orden público con una subida continúa, aunque en los dos últimos años han bajado.

Los delitos contra el medio ambiente, no reciben prácticamente atención en los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, a pesar de su importancia. Se han publicado en un capítulo aparte colocado en un epígrafe denominado “otras actividades administrativas” y dentro de él, “protección de la naturaleza”. La labor en este campo delictivo lo lleva a cabo la Guardia Civil, la cual ha atravesado momentos en los que no ha contado con dotaciones adecuadas para desempeñar su labor. Entre los subapartados hay que destacar el de la “ordenación del territorio” con un punto álgido en el año 2007, coincidiendo con la crisis inmobiliaria. Algunas actuaciones más sobresaliente han sido la lucha contra la gripe aviaria o contra la presencia de un pesticida en los alimentos (pimientos) prohibido en Europa.

Las faltas o delitos menores que no suponen encarcelación, no presentan una evolución unitaria. En su conjunto se han movido entre las 800.000 y las 1.200.000 mil unidades, con subida hasta el año 2005, bajada hasta 2010, fuerte subida en el año 2011 y bajada continuada desde entonces. Las faltas contra las personas contribuyen desde el año 2000 con una horquilla que va desde las 180.000 a 210.000. Las del patrimonio son más senosiduales con bajadas y subidas continuas. Las del orden público han bajado continuamente desde el año 2002. Y lo mismo ha ocurrido con las que van contra los intereses generales sino fuera porque desde 2010 ha subido continuamente.

La delincuencia en España es claramente un asunto de hombres ya que en todas las categorías delictivas presentan unos porcentajes bastantes más elevados. En la mayor parte de los niveles, las mujeres nunca llegan a superar el 15 por ciento frente a los hombres que lo hacen en el 85 por ciento. Se podría decir que los delitos de las mujeres son el blanqueo de capitales (34,53 %), las estafas bancarias (29%), los hurtos (28,77 %) y las falsedades (27,55%), como se puede ver todos de guante blanco y que no ponen en peligro su integridad física. Las dos tesis con más respaldo académico para explicar esta situación son la de la “caballerosidad” y “evolución y selección sexual”.

La delincuencia en España está asociada a la edad, por categorías. Así los delitos contra las personas son típicos de los 18 a 30 años; los que van contra la libertad típicos de 31 a 40 años; los que van contra el patrimonio del grupo de 18 a 30 años; contra la seguridad colectiva de los de 18 a 30 años; los que van contra las administraciones de 41 a 60 años; contra el orden público de 18 a 30 años. En líneas generales el acto delictivo va disminuyendo con la edad, de manera que el grupo de más de 64 años es el que menos delito comete en la edad adulta. Las teorías de la “criminología del desarrollo” y del “control social informal graduado por la edad”, son las que mejor explican esta situación.

La delincuencia en España no depende de los inmigrantes o extranjeros, ya que aunque no existen unas estadísticas claras donde se comparen las situaciones de extranjeros frente a nativos, el gran desembarco de éstos desde el año 2000 no ha supuesto una subida de la delincuencia en la misma proporción. Las explicaciones de su probable implicación en actos delictivos se han basado en su situación de irregularidad, en su precaria situación económica y en sus costumbres que pueden estar alejadas de los nativos, como las relativas a los que proceden de África, que están prohibidas en España. La poligamia, la ablación del clítoris, el trato a las mujeres, o los enfrentamientos por cuestiones de acoso sexual. Existe, por

otra parte, una gran diferencia entre el delito cometido por extranjeros hombre y mujeres.

Existe una amplia literatura sobre la relación entre delincuencia y desempleo que menciona las dificultades los datos agregados de delincuencia por no diferenciar entre grupos de edad y de género; por no tomar en cuenta los problemas asociados con las técnicas de correlación entre series temporales dadas las dificultades de esta técnica con los procesos estacionarios; por no incluir variables intermedias como el número de divorcios, la temporalidad en el empleo, la educación, la separación entre áreas urbanas y rurales, la influencia de población inmigrante o el grado de cobertura del estado de bienestar; o por no conjuntar el desempleo de jóvenes de 15 a 24 años sin título, las tasas de nupcialidad y la evolución de los precios

El desempleo tiene un efecto claro sobre la delincuencia en España. Existe una cierta relación entre ambas variables desde 1980 hasta 1991, tres años en los que los datos divergen, otra temporada en la que coinciden en su evolución que llegaría hasta 1994, a partir del cual los datos vuelven de nuevo a divergir. Por lo tanto hasta el año 1994 se puede observar una relación positiva, lo que indica la vigencia de la tesis de la “motivación”, mientras que a partir de ese año empezaría a manifestarse una relación negativa, lo que da pie para pensar que comenzaría a funcionar la tesis de la “oportunidad”, la cual se vería reforzada por la hipótesis de la contemporaneidad en la cual se sustenta la teoría.

BIBLIOGRAFIA:

- AEBI M. (2004). Crime trends in western Europe from 1990 to 2000. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Nº 10. Págs. 163-186.
- ALVIRA F. Y RUBIO M. A. (1982). Victimización e inseguridad: la perspectiva de las encuestas de opinión en España. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*. Nº 18.
- AUSTIN (1981). Liberation and female criminality in England and Wales. *British Journal of Criminology*. Vol. 21.
- BECKER G.S. (1968). Crime and punishment: an economic approach. *Journal of Political Economy*. Nº. 76. Págs. 169-217.
- BOX S. (1991). *Power, crime, and mystification*. Routledge. London.
- BOX S. AND HALE C. (1983). Liberation and female criminality in England and Wales. *British Journal of Criminology*. Vol. 23. N. 1.
- BRITT C. L. (1994). Crime and unemployment among youths in the United States, 1958-1990. *American Journal of Sociology*. Nº 53. Págs. 99-109.
- BRITT C. L. (1997). Reconsidering the unemployment and crime relationship: variation by age group and historical period. *Journal of Quantitative Criminology* Nº 13. Págs. 405-417.
- CANTOR D. AND LAND K .C. (1985). Unemployment and crime rates in the post-world war II United States. *American Sociological Review*. N. 50. Págs. 317-332.
- CECS (2005). *Informe España 2005*. Madrid. Fundación Encuentro.
- CHESNEY-LIND AND FAITH K. (2001). What about feminism? Engendering theory- making in criminology. In Paternoster R. and Bachman (Ed.). *Essays in contemporary criminological theory*. Los Angeles. Roxbury Publishing Company.
- CHESNEY-LIND AND PASCO L. (2004). *The female offender. Girls, women, and crime*. Thousand Oaks. Sage.
- CHIRICOS T. (1987). Rates of crime and unemployment: an analysis of aggregate research evidence. *Social Problems*. Nº. 34. págs. 187-212.
- CLOWARD R. and OHLIN LL. (1966). *Delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs*. New York. The Free Press.
- COHEN ET ALT. (1980). Property crime rates in the United states: a macrodynamic analysis 1947-1977. *American Journal of Sociology* Nº. 86. Págs. 90-118.
- COHEN L. AND FELSON M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activities approach. *American Sociological Review*. Nº. 44. Págs. 588-607.
- COHEN L. AND LAND K. (1987). Age structure and crime: symmetry versus asymmetry and the projection of crime rates though the 1990s. *American Sociological Review*. Nº. 44. Págs. 588-607.
- COLLINS M.F. AND WEATHERBURN D. (1995). Unemployment and the dynamic of offender populations. *Journal of Quantitative Criminology*. Vol. 11. Págs. 231-245.
- DE FRONZO J. (1997). Welfare and homicide. *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol. 34. N. 3. Págs. 395-406.

- DEVINE ET ALT. (1988). Macroeconomic and social control policy influences on crime rate changes 1948-1985. *American Sociological Review*. N° 53. Págs. 407-420.
- DIEZ J.L. (2004). El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. N. 06-03. Págs. 1- 34. <http://criminet.ugr.es/recpc>.
- DIEZ J.L. y CEREZO A.I. (Ed.)(2001). *Los problemas de la investigación empírica en criminología: la situación española*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- DIEZ J.L. y CEREZO A.I. (Ed.)(2001). *Los problemas de la investigación empírica en criminología: la situación española*. Valencia. Tirant Lo Blanch.
- ELLIOT D. AND AGETON S. (1980). Reconciling race and class differences in self- reported and official estimates of delinquency. *American Sociological Review*, Vol.45. Págs. 95-110.
- ELLIOT D. AND AGETON S. (1980). Reconciling race and class differences in self- reported and official estimates of delinquency. *American Sociological Review*, Vol.45. Págs. 95-110.
- ELLIOT D. AND HUIZINGA D. (1983). Social class and delinquent behavior in a national youth panel. *Criminology* N° 21. Págs. 149-177.
- ELRICH I. (1973). Participation in illegitimate activities: a theoretical and empirical investigation. *Journal of Political Economy*. N°. 81. Pags. 521-564.
- ENNIS P. H. (1967). *Criminal victimization in the United States: a report of a national survey*. Washington. U.S. Government Printing Office.
- Entorf H. And Spengler H. (2002). *Crime in Europe: causes and consequences*. Berlin. Springer.
- EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (2003). *Annual report 2003*. Lisboa. EMCDA. <http://annualreport.emcdda.eu.int/download/ar2003eu>.
- EUROPOL (2005). *Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada*. Nederland. Europol.
- FAGAN J. AND FREEMAN R. (1999). Crime and work. In TONRY (Ed.). *Crime and justice: a review of research*. Chicago. University of Chicago Press.
- FARRINGTON D. ADN BUCKLE A. (1984). An observational study of shoplifting. *British Journal of Criminology*. Vol. 24. N° 1. Págs 63-73.
- FARRINGTON D. ADN BUCKLE A. (1984). An observational study of shoplifting. *British Journal of Criminology*. Vol. 24. N° 1. Págs 63-73.
- FARRINGTON D. ET ALT. (2003). Comparing delinquency careers in court records and sel-reports. *Criminology* N° 41.
- FATTAH E.A. (1997). *Criminology: past, present and future*. Basingtoke. MacMillan.
- FATTAH E.A. (1997). *Criminology: past, present and future*. Basingtoke. MacMillan.
- FELSON R.B. (1998). *Crime and everyday life*. Thousand Oaks. Pine Forge Press.
- FELSON R.B. (1998). *Crime and everyday life*. Thousand Oaks. Pine Forge Press.
- FOWLES R. AND MERVA M. (1996). Wage inequality and criminal activity. *Criminology*. Vol. 34. Págs. 163- 182.
- FRENCH M. ET ALT. (2004). Revolving roles in drug-related crimes: the cost of chronic drug users as victims and perpetrators. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 20. N° 3. Págs. 217-241.

- REDONDO S. y GARRIDO (2013). *Principios de criminología*. Valencia. Tirant lo Blanch.
- GOLD M.(1966). Undetected delinquent behaviour. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, vol.3. Págs. 27-46.
- GÖPPINGER H. (1975). *Criminología*. Madrid. Reus.
- GREENBERG D. (1977). Delinquency and the age structure of society. *Contemporary Crisis*. Nº 1. Págs. 189-223.
- GREENBERG D. (1981) (Ed.). *Crime and capitalism*. California. Mayfeld.
- GREENBERG D. (1985). Age, crime, and social explanation. *American Journal of Sociology*. Nº 91. 1-21.
- GREENBERG D. (2001). Time series analysis of crime rates. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 17. Nº 4. Págs. 291- 327.
- HARRIS A. R. ET ALT. (2002). Murder and medicine: the lethality of criminal assault 1960-1999. *Homicide Studies*. Nº 6. Págs. 128-166
- HERNANDEZ DE FRUTOS T. (2006). Estratificación social y delincuencia. Cuarenta años de discrepancias sociológicas. *Revista Internacional de Sociología*. Nº 45. Págs. 199-232.
- HERNANDEZ DE FRUTOS T. y CASARES E. (2002). *Aportaciones teórico-prácticas para el conocimiento de actitudes violentas en el ámbito escolar*. Pamplona. Gobierno de Navarra.
- HERNANDEZ G. ET ALT. (2001). *Mujeres gitanas y sistema penal*. Madrid. Metel.
- HINDELANG M. ET ALT. (1978). *Victims of personal crime: an empirical foundation for a theory of personal victimization*. Ballinger. Cambridge
- INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y POLICIA (2004). *Observatorio De la seguridad pública*. Boletín nº. 15.
- JAEN M. (2004). Las reformas del código penal (2002/2003). *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. N. 6. Págs. 1-13. <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-r2.pdf>
- JAIME O. (2002). *Policía, terrorismo y cambio político en España (1976-1996)*, Valencia: Tirant lo Blanch. .
- JAIME O. (2003). La cooperación policial en Europa. En Carlos de Cueto C. y Jordán J. (Ed.), *Políticas de seguridad después del 11 de septiembre*, Granada: Comares.
- JAIME O. (2004). Causas del terrorismo nacionalista. Estudio especial del caso de ETA”, en Jordán J. (Ed.), *Los orígenes del terror. Indagando en las causas del terrorismo*, Madrid: Biblioteca Nueva. Págs. 87-114.
- JAIME O. (2005). Seguridad pública y policía”, en Carlos de Cueto y Javier Jordán (Eds.), *La gestión de la seguridad en el nuevo entorno estratégico*, Granada, Comares.
- JAIME O. (2006). (Ed.) *La formación policial en la convergencia europea y ante los retos del siglo XXI*, Madrid: Fundación Policía Española.
- JAIME O. (2006). La experiencia policial antiterrorista en España, *Afrontar el terrorismo*, Zaragoza: Fundación Seminario de Investigación para la Paz/Gobierno de Aragón, Págs.. 485-497.

- JAIME O (2007)(Ed.). *Reflexiones sobre el terrorismo en España*, Madrid: Fundación Policía Española, 2007.
- JAIME O (2007). Riesgos y respuestas desde la seguridad en un mundo “glocalizado”, *La seguridad desde las dos orillas. Un debate entre Europa y Latinoamérica*, Barcelona: Fundación CIDOB, 2007, pp. 133-152.
- JAIME O (2009). (Ed.). *La Seguridad Integral: España 2020*, Madrid: Fundación Alternativas, 2009.
- JAIME O. (2010). La Seguridad Integral en el ámbito de la Unión Europea, en Westendorp C., et alt. (Ed.). *La Unión Europea ante los grandes retos del siglo XXI. Aportaciones al Grupo de Reflexión del Consejo Europeo*. Madrid: Fundación Alternativas.
- JAIME O. Y CASTRO L. (2010). La criminalidad organizada en la Unión Europea. Estado de la cuestión y respuestas institucionales”, *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, núm. 91. Págs.173- 194.
- JONES S. (1998). *Criminology*. London. Butterworths.
- JONES S. (1998). *Criminology*. London. Butterworths.
- JONSON D.R. AND SCHEUBLE L.K. (1991). Gender bias in the disposition of juvenile court referrals: the effects of time and location. *Criminology* N. 29.
- JUNGER-TAS J. ET ALT. (1994). *Delinquent behaviour among young people in the western world*. Kugler. Amsterdam.
- KAPUSCINSKI ET ALT. (1998). Unemployment and crime: toward resolving the paradox. *Journal of Quantitative Criminology*. N° 14. Págs. 215-241.
- KILLIAS M. ET ALT. (2003). *European sourcebook of crime and criminal justice statistics 2003*. The Hague. Home Office. http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicities/rapporten/pubrapp/ob212i.htm
- KILLIAS M. J. ET ALT. (2001). Guns, violent crime and suicide in 21 countries. *Canadian Journal of Criminology* . N° 42. Págs. 429-448.
- KYVDGAARD B. (2003). *The criminal career*. Cambridge. Cambridge University Press.
- KYVDGAARD B. (2003). *The criminal career*. Cambridge. Cambridge University Press.
- LAGRANGE H. (2001). Crime et conjuncture socio-économique. *Revue Francaise de Sociologie*. N. 42-1. Pág.
- LAMO DE ESPINOSA E. (1989). *Delitos sin víctima*. Alianza. Madrid.
- LAND K.C. ET ALT. (1995). Unemployment and crime rate fluctuations in the post-world war II United States. In HAGAN J. AND PETERSON R. (Ed.). *Crime and inequality*. Stanford. Stanford University Press. Págs. 55-79.
- LATTIMORE ET ALT. (2004). Studying the characteristics of arrest frequency among paroled youthful offenders. *Criminology* N° 41.
- LAUB J.H. (2003). *Shared beginnings, divergent lives: delinquent boys to age 70*. Massachussets. Harvar University Press.
- LAURITSEN J. (2005). Social and scientific influences on the measurement of criminal victimization. *Journal of Quantitative Criminology*. Vol. 21. Págs. 245-266.
- LEWIS CH. ET ALT. (2004). Crime trends in the EU. *European Journal on Criminal Policy and Research*. N°. 10. Págs. 187-223.
- MCLAUGHLIN E. AND MUNCIE J. (2001). *Controlling crime*. London. Sage.

- MCLAUGHLIN E. AND MUNCIE J. (2001). *Controlling crime*. London. Sage.
- MEDINA J. (2003). Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. RECPC 05-03. <http://criminet.ugr.es/recpc>.
- MERTON R. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*. N° 3. Págs. 672-682.
- MESSNER S. AND ROSENFELD R. (1994). *Crime and the American dream*. Wadsworth. Belmont.
- MINISTERIO DEL INTERIOR (2004). *Anuario estadístico del Ministerio del Interior*. Secretaria General Técnica. www.mir.es.
- MINISTERIO DEL INTERIOR (2004). *Anuario estadístico del Ministerio del Interior*. Secretaria General Técnica. www.mir.es.
- MOFFIT ET ALT. (2001). *Sex differences in antisocial behavior*. Cambridge. Cambridge University Press.
- MORALES O. Y FERNANDEZ R. (2004). Nota a la séptima edición. En Código penal. Navarra. Aranzadi. Pág. 25-27.
- MORRISON W. (1995). *Theoretical criminology: from modernity to postmodernism*. London. Cavendish Publishing.
- MORRISON W. (1995). *Theoretical criminology: from modernity to postmodernism*. London. Cavendish Publishing.
- MUÑOZ J. (2002). Las drogas en la delincuencia y su tratamiento por la administración de justicia. *Boletín Criminológico*. N° 61. Págs. 1-4.
- PNUD (2006). *Informe sobre desarrollo humano 2005*. México. Mundi-Prensa.
- PORTEFIELD A. (1946). *Youth in trouble*. Fort Worth. Leo Potishman.
- RECHEA C. ET ALT. (1995). *La delincuencia juvenil en España*. Madrid. Ministerio de Justicia e Interior.
- REIMAN J. (2002). *The rich get rich and the poor get prison*. Boston. Allyn & Bacon.
- RODRIGUEZ A. (2003). Los determinantes socio-económicos del delito en España. *Revista Española de Investigación Criminológica*. REIC AC 01-03.
- SERRANO A. (2004). *Introducción a la criminología*. Madrid. Dickinson.
- SERRANO A. (2004). *Introducción a la criminología*. Madrid. Dickinson.
- SIMON R.L. (1979). Arrest statistics. In Adler F. and Simon R.J. (Ed.). *The criminology of deviant women*. Boston. Houghton Mifflin.
- SIMON R.L. (1979). Arrest statistics. In ADLER F. AND SIMON R.J. (Ed.). *The criminology of deviant women*. Boston. Houghton Mifflin.
- SMART C. (1979). The new female criminal: reality or myth. *British Journal of Criminology*. Vol. 19.
- SMITH M. D. ET ALT. (1992). Crime and unemployment: effects across age and race categories. *Sociological Perspectives*. N°., 35. Págs. 551-572.
- STARK E. (2003). Race, gender and woman battering. In Hawlins D.F. (Ed.). *Violent crime. Assessing race and ethnic differences*. Cambridge. Cambridge University Press.
- TEZANOS J. F. (1997). *Tendencias en estratificación y desigualdad social en España*. Madrid. Sistema.
- TEZANOS J.F. Y TEZANOS S. (2003). Inmigración y exclusión social. *Papeles de Economía Española*. N°. 98. Págs. 225-237

- THACHER D. (2004). The rich get richer and the poor get robbed: inequality in U.S. criminal victimization, 1974-2000. *Journal of Quantitative Criminology*. Vol. 20. Págs. 89- 116.
- THORNBERRY T. AND CHRISTENSON R. (1984). Unemployment and criminal involvement: an investigation of reciprocal causal structures. *American Sociological Review*. Nº 49. Págs. 398-411.
- TORRENTE D. (2001). Desviación y delito. Alianza. Madrid.
- TORRENTE D. (2009). Cicles economics I seguretat. Informe 2009 de l'Obsevatori. Institut d'Estudis de la Seguretat. Barcelona.
- VAN KESTEREN (2000). *Criminal victimisation in seventeen industrial countries*. The Hague. Ministry of justice.
- VON HENTING H. (1941). Remarks on the interaction of perpetrator and victim. *Journal of Criminal Law and Criminology*. Nº. 31. Págs. 303-309.
- VON HENTING H. (1948). *The criminal and his victim*. Yale University. New Haven.
- VON HOFER H. (2000). Crime statistic as construct: the case of swedish rape statistic. *Journal on Criminal Policy and Research*. Nº 8. Págs. 77-89.
- WACQUANT L. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Madrid. Alianza.
- WRIGHT B. ET ALT. (1999). Reconsidering the relationship between SES and delinquency: causation but not correlation. *Criminology*. Nº 37. Págs. 175-194.
- ZHANG J. (1997). The effect of welfare programs on criminal behaviour: a theoretical and empirical analysis. *Economy Inquiry*. Nº 35. Págs. 120-137.

Apendice:

Casos famosos de corrupción en España

Franquismo (1939-1975)

Caso Barcelona Traction

Estraperlo

La agenda Rivara

Caso de Manufacturas metálicas madrileñas

Caso Matesa

Sofico

Corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.

Caso de Confecciones Gibraltar

La Transición Española los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1977-1979 legislatura Constituyente) (1979-1982) (I legislatura)

Caso del aceite de colza

Caso Fidecaya

Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996) (II, III, IV y V legislaturas)

Caso Flick

Caso KIO

Caso Wardbase,

Caso de los fondos reservados

Caso Rumasa

Caso Filesa

Caso Ave,

Caso Seat

Caso Osakidetza

Caso Cesid

Operación Mengele

Caso Guerra

Caso Casinos

Caso Ibercorp

Mariano Rubio

Caso Urbanor

Caso Sarasola

Caso Urralburu

Caso Bardellino

Caso Cementerio

Caso Godó

Caso BFP
Caso Gran Tibidabo
Caso Estevill,
Caso Turiben
Caso Salanueva
Caso Expo'92
Caso Roldán
Caso Paesa,
Caso Banesto
Caso Palomino
Caso GAL
Petromochó
Caso Naseiro
Caso PSV
Caso Hormaechea
Caso de la minería
Caso Sóller

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004) (VI y VII legislaturas)

Caso Zamora
Caso Pallerols
Caso del Lino
Caso Sanlúcar
Caso Villalonga
Caso Tabacalera
Caso Forcem
Caso Gescartera

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) (VIII y IX legislaturas)

Caso Malaya
Caso Gürtel
Caso Zarrafaya
Caso de la Ciudad del Golf
Caso Bolín
Caso Salmón
Caso Sayalonga
Caso Matsa
Caso Alzoaina
Caso Plasenzuela
Caso Castelfollit
Caso de los EREs falsos

Caso Riopedre o Renedo
Caso Campeón
Caso ITV
Caso Millet
Caso Cambil
Caso Porcuna
Caso Nueva Rumasa
Caso Nóos
Caso Tótem
Operación Biblioteca
Caso Brugal

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-2015) (X legislatura)

Caso Emarsa
Operación Pitiusa
Operación Pokémon
Caso Dívar
Caso de la cooperación
Caso Alcorcón
Caso Bárcenas
Caso Amy Martin
Tarjetas opacas de Caja Madrid
Operación Púnica